



# Huelgas, marchas y revueltas

Historias de la protesta popular en Chile, 1870-2019

**VIVIANA BRAVO VARGAS**  
**CLAUDIO PÉREZ SILVA**  
(EDIT.)



HISTORIA



# Huelgas, marchas y revueltas

Historias de la protesta popular en Chile, 1870-2019

**VIVIANA BRAVO VARGAS**  
**CLAUDIO PÉREZ SILVA**  
(EDIT.)



HISTORIA

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA

---

HUELGAS, MARCHAS Y REVUELTAS  
HISTORIAS DE LA PROTESTA POPULAR EN CHILE,  
1870-2019

VIVIANA BRAVO VARGAS Y CLAUDIO PÉREZ SILVA  
EDITORES

# Huelgas, marchas y revueltas

HISTORIAS DE LA PROTESTA POPULAR  
EN CHILE, 1870-2019



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición, fce Chile, 2022

Bravo Vargas, Viviana y Claudio Pérez Silva (edits.)

Huelgas, marchas y revueltas. Historias de la protesta popular en Chile, 1870-2019 / ed. de Viviana Bravo Vargas, Claudia Pérez Silva. – Santiago de Chile :

FCE

, 2022

458 p. : fots. ; 23 × 17 cm – (Colec. Historia)

ISBN 978-956-289-273-5

ISBN digital 978-956-289-274-2

1. Movimientos de protesta – Chile – Historia 2. Movimientos estudiantiles – Chile – 3. Movimientos obreros – Chile – Historia 4. Derechos humanos – Chile  
I. Pérez Silva, Claudio, ed. II. Ser. III. t.

LC F3101.B73 Dewey 303.61 B257h

*Distribución mundial para lengua española*

© Viviana Bravo Vargas y Claudio Pérez Silva

D.R. © 2022, Fondo de Cultura Económica Chile S.A.

Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile

[www.fondodeculturaeconomica.cl](http://www.fondodeculturaeconomica.cl)

Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

[www.fondodeculturaeconomica.com](http://www.fondodeculturaeconomica.com)

Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.

Diseño de portada: Macarena Rojas Líbano

Fotografías de portada: Superior: Revuelta de la chaucha, 18 de agosto de 1949. Fotografía Patrimonial. Museo Histórico Nacional. Mauricio. Inferior: Estallido social, octubre 2019. Mauricio González Kowa.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

ISBN 978-956-289-273-5

ISBN digital 978-956-289-274-2

Diagramación digital: ebooks Patagonia

[www.ebookspatagonia.com](http://www.ebookspatagonia.com)

[info@ebookspatagonia.com](mailto:info@ebookspatagonia.com)

# **ÍNDICE**

## Introducción

### PRIMERA PARTE

EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO Y LA CUESTIÓN SOCIAL, 1870-1930.

LA IRRUPCIÓN DE LA PROTESTA Y LA ORGANIZACIÓN POPULAR

I. Entre motines y protestas. Conflicto político y rebeldía popular en Chile (1850-1891),

IGOR GOICOVIC DONOSO

II. Protestas y huelgas salitreras: transformaciones en la experiencia reivindicativa del proletariado salitrero bajo la cuestión social, 1870-1930,

PABLO ARTAZA BARRIOS Y NICOLE FUENTEALBA ROMERO

III. Politización y conflicto. La larga marcha de los trabajadores del carbón. Chile, 1900-1927,

HERNÁN VENEGAS VALDEBENITO

IV. La calle es política: movilización obrera en la ciudad y represión de la protesta. Santiago, 1905-1924,

JORGE NAVARRO LÓPEZ

### SEGUNDA PARTE

AUGE Y AGOTAMIENTO DEL MODELO DESARROLLISTA, 1930-1973.

MASIFICACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA PROTESTA POPULAR

V. “El pan grande fue un engaño”. Colaboración y conflicto en

la zona carbonífera desde el Frente Popular hasta comienzos de la Guerra Fría,

JODY PAVILACK

VI. Cuerpos y formas de lucha campesina y mapuche y sus articulaciones con el movimiento obrero. Chile,

1ª mitad del siglo

XX

,

MARÍA ANGÉLICA ILLANES OLIVA

VII. Santiago y la conquista de las calles: La Revuelta de la chaucha en agosto de 1949,

VIVIANA BRAVO VARGAS

VIII. Santiago de Chile, 1970-1973: Movilizaciones obreras,

cordones industriales y protestas urbanas durante la “vía chilena al socialismo”,

FRANCK GAUDICHAUD

TERCERA PARTE

INSTAURACIÓN, DESPLIEGUE Y CRISIS DEL NEOLIBERALISMO,



1973-2019. DIVERSIFICACIÓN Y RADICALIDAD EN LAS FORMAS DE  
LUCHA

IX. Todos juntos y al mismo tiempo contra la dictadura de Pinochet. El paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986.

CLAUDIO PÉREZ SILVA

X. Del Mochilazo a la Marcha de los paraguas: la protesta estudiantil en el Chile neoliberal (2001-2011).

IVETTE LOZOYA LÓPEZ Y VIVIANA CUEVAS SALAZAR

XI. Contra la precarización laboral. Las luchas de los trabajadores subcontratados en el albor del siglo

XXI

,

JOSÉ IGNACIO PONCE LÓPEZ

XII. Un largo mayo en Chiloé: territorio y luchas socioambientales en el Chile neoliberal.

ROBINSON SILVA HIDALGO

XIII. Capitalismo, Estado y protesta social mapuche.

CLAUDIO ESPINOZA ARAYA

XIV. “Nos afirman muchas mujeres”: el movimiento feminista y las luchas de las mujeres en la última década (2011-2020),

MÓNICA IGLESIAS VÁZQUEZ

XV. La lucha de calles y la revuelta de octubre de 2019,

VIVIANA BRAVO VARGAS Y CLAUDIO PÉREZ SILVA

## INTRODUCCIÓN

“Se trata de aquellos modos de hacer y de sublevarse  
que se repiten y renuevan a través de los tiempos (...)”

ADOLFO GILLY

### LA HISTORIA

de las luchas populares está grabada en la memoria de las calles céntricas y periféricas, está en las rutas que marcaron las marchas por la pampa, los puertos y las minas. En plazas, esquinas y caminos hay indicios de un largo trecho recorrido para detener —o al menos contener— la explotación asalariada, para demandar condiciones de trabajo y vida dignas, para ser reconocidos como interlocutores válidos, para hacerse ver y escuchar por quienes ejercen el mando y concentran la riqueza y el poder, y, sobre todo, para romper con la cadena insostenible de despojos, agravios y humillaciones.

En esa trayectoria surgieron liderazgos, organizaciones, banderas y nuevos horizontes de posibilidades, experiencias de rebeldía que se fueron transmitiendo entre generaciones y sedimentando en diversas tradiciones de lucha que conforman la historia de la protesta popular chilena. En esas huelgas, marchas y revueltas se conformaron complicidades y solidaridades entre iguales, colectivas, que permitieron desarrollar cuestiones fundamentales como la afirmación, la cohesión y la ruptura de un orden considerado normal. Un nosotros/as que se conjugó con el tiempo de la rebeldía y que rompió, al menos por algunos resquicios del calendario, el de la reproducción, sus órdenes y ordenamientos. Dio vuelta el reloj sobre la mesa para imponer la racionalidad de la protesta, con sus tiempos, con sus modos rebeldes, con sus acciones, sus formas de lucha, sus demandas.

Por cierto, esto no ocurrió durante todo el siglo

XIX

,

XX

y lo que va de este, entre estas historias también hay silencios, reflujos, represiones, derrotas y vueltas a empezar. No es una historia lineal ni menos ascendente. No se ha tratado de una gran acción o hitos aislados, sino de una infinidad de luchas que nos permiten —si prestamos atención y cepillamos la historia a contrapelo, como proponía Walter Benjamin— capturar, escuchar, visualizar los antagonismos de clase, etnia y género que conforman la historia y el desarrollo del capitalismo en Chile.

En este libro, reconocidos/as historiadores/as y cientistas sociales se reúnen para reconstruir las principales y más gravitantes manifestaciones de protesta que se desarrollaron desde fines del siglo

XIX

hasta la actualidad. Se trata de un arco histórico amplio, conformado por tres grandes ciclos estructurantes, que nos permite identificar y profundizar en aspectos clave de la protesta popular, como los sujetos, escenarios, las demandas, dinámicas y acciones recurrentes. Estos trabajos nos ayudan además a reconocer y explicar las continuidades que sedimentan tradiciones de lucha, también las rupturas e incorporaciones de nuevos repertorios con que aportan nuevas generaciones, así como las diversas apuestas económicas y políticas implementadas por el Estado y las élites dominantes.

El ciclo histórico de la primera parte del libro se inscribe en el marco del despliegue del capitalismo, particularmente desde la década de 1870 hasta la crisis del modelo primario exportador y los efectos de la crisis mundial de 1929. Lo hemos denominado: “El régimen Oligárquico y la cuestión social, 1870-1930. La irrupción de la protesta y la organización popular”. Este periodo se caracterizó por la existencia y permanencia de diversos conflictos políticos y sociales, muchos de ellos resueltos de manera violenta y con trágicas consecuencias en cuanto a pérdidas de vidas. Varios son los procesos que permiten inscribir y configurar las características principales de los actores protagónicos de dicha conflictividad, como de las dinámicas y escenarios de esta. Por una parte, el ciclo de guerras que llevó adelante la élite chilena:

primero, contra peruanos y bolivianos en la Guerra del Pacífico (1879-1884); luego, contra el pueblo mapuche a través de la denominada “Pacificación de la Araucanía”, que significó una guerra de ocupación, despojo y aniquilamiento contra este pueblo en lo que actualmente es el sur de Chile (estos dos conflictos militares implicaron una importante extensión territorial y la obtención de cuantiosos recursos naturales para la oligarquía chilena); por último, una guerra entre la propia élite durante 1891, a propósito del control y las proyecciones políticas de las enormes riquezas que comenzaba a entregar el salitre recién conquistado en la Guerra de Pacífico.

Por otra parte, los conflictos nacientes al alero del proceso de modernización capitalista, que se consolidó inicialmente en el norte salitrero y se desparramó luego por puertos, ciudades principales y la zona del carbón en el sur de Chile. Este proceso permitió la emergencia del moderno proletariado y su transformación en un actor colectivo y protagónico de los más importantes conflictos sociales y políticos durante este periodo. Su relevancia estratégica en la producción de la riqueza minera (salitre y carbón), así como en el acopio y el traslado de esta, convirtió a los obreros en pilares fundamentales del modelo primario exportador y de la vinculación con la economía mundial.

No obstante, este fenómeno significó para la clase trabajadora una profunda tragedia como resultado de las paupérrimas condiciones de trabajo y de vida a la cual fue sometida, convirtiéndose en uno de los aspectos más visibles de la crisis del régimen oligárquico, ante la incapacidad de este de reconocer tanto las problemáticas resultantes del proceso de modernización capitalista, como el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos. La organización lograda y el proceso de politización llevado adelante al calor de las diversas luchas que protagonizó, situarán a la clase obrera como uno de los actores clave dentro de la crisis del régimen oligárquico durante la década de 1920.

En este escenario, las dinámicas más importantes de conflicto estarán marcadas por el rol central de las élites dominantes, la clase trabajadora y del Estado a través del control social, la contención política y la represión de la organización y la protesta popular. Al respecto, tanto la historiografía nacional como internacional ha incursionado en las diversas formas de organización y lucha desarrolladas por la clase obrera y los sectores populares, dando cuenta de las condiciones de explotación y vida de indígenas, trabajadores urbanos, de los centros mineros y principales puertos, mujeres, niños y campesinos. Pero sobre todo, se ahonda en la heterogeneidad del mundo popular, el proceso formativo de

la clase obrera en el norte salitrero, en los componentes identitarios, los procesos de politización, la influencia y recepción de corrientes ideológicas, la construcción de sus principales expresiones orgánicas, el levantamiento de demandas sectoriales y programáticas, las estrategias y proyecciones políticas, así como en las numerosas y diversas huelgas y protestas obreras-populares.

En este marco se caracterizarán los iniciales y principales escenarios y actores de la protesta desencadenada en las zonas urbanas con mayor concentración de personas y que experimentaron los primeros efectos del despliegue del capitalismo, así como otros espacios clave de la dinámica capitalista chilena en este ciclo, como lo fueron los centros mineros y puertos. Bajo este contexto se encuentra el trabajo “Entre motines y protestas. Conflicto político y rebeldía popular en Chile (1850-1891)”, de Igor Goicovic, quien al analizar e inscribir la serie de conflictos violentos que caracterizaron el proceso expansivo llevado adelante por la élite chilena entre 1870 y 1891, dentro del proceso más amplio de transición a la modernidad capitalista y consolidación del régimen oligárquico, estudia las principales incursiones en el espacio público por parte de los sectores populares y las formas recurrentes de protestas durante el periodo, particularmente las asonadas y motines urbano-populares. El trabajo de Goicovic realiza un recorrido histórico por las más importantes formas de intervención política del mundo popular en los escenarios de la élite, como sus conflictos bélicos y convocatorias políticas, destacando, por lo general, la tensa relación entre estos y los altos niveles de autonomía del primero respecto de los representantes de las clases dominantes.

Por su parte, Pablo Artaza y Nicole Fuentealba, en su trabajo “Protestas y huelgas salitreras: transformaciones en la experiencia reivindicativa del proletariado salitrero bajo la cuestión social, 1870-1930”, estudian las diversas estrategias desplegadas por los trabajadores del salitre durante el ciclo expansivo de este mineral. Lo anterior les permite inscribir y vincular las particularidades de la protesta que se presentaba en este espacio minero con las principales dinámicas de la economía mundial. Profundizan en las condiciones de vida y en las protestas contra el orden social y político, lo que les posibilita analizar los procesos de conflictividad social y politización de los trabajadores pampinos. Recorren e identifican la emergencia del discurso clasista, la capacidad de convocatoria, los ámbitos de sociabilidad, las continuidades y las rupturas en cuanto a formas de organización y lucha por parte del mundo pampino, desde la primera huelga general del país, en la ciudad de Iquique durante 1890, pasando por el ciclo de movilizaciones desencadenadas a comienzos del siglo

XX

, las huelgas portuarias de 1916 y 1918 y las desarrolladas en el marco de la crisis salitrera durante la segunda década del siglo

XX

, con sus trágicas consecuencias. Del mismo modo, se detienen en las dimensiones organizativas del movimiento obrero, que transita de una expresión provincial a una nacional.

Al igual que en el norte salitrero, la industria minera del carbón —presente en Lebu, Curanilahue, Lota, Coronel, Lirquén y Cosmito en la zona sur del país— también dio cuenta de numerosas y cruentas movilizaciones de trabajadores durante este periodo. Como señala Hernán Venegas en su capítulo, titulado: “Politización y conflicto. La larga marcha de los trabajadores del carbón. Chile, 1900-1927”, la historia de este espacio minero también experimentó la férrea explotación económica ejercida por los empresarios y sus administradores. Del mismo modo, precisa, fue respondida con organización, manifestaciones y huelgas por parte de los trabajadores y un ascendente proceso de politización popular. Bajo estos preceptos, indaga en las condiciones de vida de los mineros del carbón, en su capacidad organizativa, de movilización y de autonomía ante el Estado y las élites empresariales locales, las cuales, a juicio del autor, estarían sustentadas en una poderosa identidad de clase. Dichas capacidades obedecían, por un lado, a la articulación social configurada con otros actores productivos de la zona, incluso más allá del espacio regional, y por otro, a la conciencia que tenían los mineros del carbón respecto de su papel estratégico en el abastecimiento de este combustible para el país.

En relación con las expresiones de protesta popular, el autor realiza un barrido por los principales hitos huelguísticos de la zona durante las dos primeras décadas del siglo

XX

. Partiendo con el ciclo inicial de conformación de los espacios organizativos y de conflictividad, entre 1900 y 1907, los que se caracterizaron por su corta duración y carácter gremial. Describe las articulaciones sociales y políticas generadas al calor de la movilización popular, a través de la solidaridad con lancheros, trabajadores portuarios, zapateros y diversas organizaciones sociales

de la región, incluso del resto del país, donde también se desencadenaban procesos de gran similitud, como en los centros mineros del salitre. Además, el análisis de un ciclo más largo de movilización le permite identificar las continuidades y rupturas en las manifestaciones de protesta, resaltando, a partir de las huelgas de los años 1916 y 1920, las jornadas de movilizaciones previas como antesala de la paralización, la extensa duración de estas y la amplitud de actores involucrados.

Por su parte, Jorge Navarro, en su capítulo titulado “La calle es política: movilización obrera en la ciudad y represión de la protesta. Santiago, 1905-1924”, analiza las particularidades de las demandas y dimensiones de la protesta obrera en el espacio público y urbano. Modernización capitalista, crisis social y conflictividad política se articulan en la ciudad, la cual se convierte en escenario no solo de la tradicional huelga de trabajadores en su propio lugar de trabajo, sino en el escenario de múltiples articulaciones sociales que demandan mejoras, difunden sus ideas y se expresan recurrentemente en el espacio público. La ciudad se convierte, junto a la protesta, en el principal emplazamiento de la dinámica de politización popular. Navarro analiza la trayectoria de la protesta llevada adelante por los trabajadores organizados, las dimensiones sociales, políticas y espaciales de su convocatoria. Para ello, caracteriza el proceso de politización y de formación del carácter clasista del movimiento obrero en el espacio urbano, las distintas actividades políticas que permitieron tal logro y las diversas respuestas estatales ante ello. De esta forma, da cuenta de conferencias (tanto de anarquistas como de socialistas), debates, conmemoraciones (como las del 1° de mayo y el aniversario de la Revolución Rusa) y manifestaciones callejeras en demanda de trabajo, en contra de la represión, la carestía de los alimentos y la vida, como fueron las convocatorias a las “marchas del hambre”, que, como veremos en la etapa final de este libro, fueron retomadas con fuerza, y a modo de tradición popular, por miles de trabajadoras y trabajadores durante los años desarrollistas y en el marco de la lucha en contra de la dictadura de Pinochet en los inicios de la década de 1980.

La segunda parte de este libro, “Auge y agotamiento del Modelo Desarrollista, 1930-1973. Masificación y despliegue de la protesta popular”, corresponde al ciclo histórico que abre con la conformación del llamado Frente Popular y cierra con el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende. Si desde la perspectiva de la protesta pudiésemos caracterizar esta etapa en una categoría, esa sería masificación. Presenciamos diversas formas de lucha que, si bien ya podemos registrar en las décadas pasadas, se vuelven cada vez más



recurrentes y multitudinarias. En efecto, los años que transcurren entre fines de la década del 30 hasta el gobierno de Salvador Allende, constituyen un periodo en que poco a poco se multiplicaron los llamados hechos de masas en ciudades que crecen aceleradamente en sus fronteras y habitantes. Los procesos migratorios y urbanizadores promovidos por las políticas desarrollistas impulsaron a movimientos de trabajadores y a sus familias, desde el sur y norte del país, a buscar una mejor calidad de vida. Solo entre 1940 y 1952 la ciudad de Santiago creció en un 38%, llegando a concentrar un tercio de la población total del país en los años 60.

Recordemos cuáles eran las propuestas del modelo desarrollista: diversificar la estructura productiva e impulsar el crecimiento de un mercado interno que permitiese el desarrollo de las fuerzas productivas y la circulación de capital y mercancías; a falta de una burguesía que pudiese emprender la misión, le correspondería al Estado tener un rol protagónico y activo en ese proceso; también se contemplaba democratizar las bases sociales, ampliando los mecanismos de participación popular, terminar con la desigualdad y la concentración de la riqueza, modernizar el campo y la ciudad, ampliar la red educativa y sanitaria. En efecto, hasta los años 40 se evidencia un crecimiento del aparato público y un impulso a la diversificación industrial, no obstante, en los años siguientes se desdibujarán los límites del proyecto y terminará por estancarse. Junto a las frustraciones de un proceso de desarrollo y modernización truncado, se resiente el déficit de viviendas y el peso de la constante inflación por sobre los salarios, con un mercado interno que lejos de expandirse al mismo pulso que el comercio y la industria manufacturera, acentuaba los niveles de desigualdad, inseguridad y exclusión de las mayorías.

La Guerra Fría también se sentía dentro de la ciudad de masas:<sup>1</sup> dividía sus trincheras ideológicas e incidía en su quehacer político. Pero la correlación de fuerzas, aunque aparentemente discontinua, gravitaba hacia la izquierda en su estrecho vínculo con los hábitos y la cultura política de las clases populares. Así lo ejemplificó la ampliación de las bases militantes; el poder de convocatoria de una combativa

CUT

, nacida en 1953 y liderada por Clotario Blest, en una serie de paros y huelgas que han sido graficados como el volcán gremial; y la alta votación para la candidatura presidencial de Salvador Allende en 1958. De forma paralela, la

presencia activa de unos estudiantes que acumularon fuerza y voz hasta llegar al proceso de Reforma Universitaria.

Nos interesa recalcarlo. Fue en las fábricas, minas y oficinas; barrios, cerros y calles desde donde se ampliaron los espacios de la política, articulando demandas y alianzas que incidieron en ellas, y cuando la confrontación desafió los “principios de autoridad”, o fue considerada un peligro para el orden imperante, se aplicaron distintos mecanismos de represión y neutralización que con diversos grados advertimos a lo largo de estos años. Como ha resaltado Tomás Moulián, los sectores dominantes debieron ensayar nuevas formas de dominación y disciplinamiento social, transitando desde el fin de la Dominación defensiva (1942-1946), y la breve pero sangrienta administración interina de Alfredo Duhalde, a la Dominación represiva (1948-1958) comandada por Gabriel González Videla e Ibáñez del Campo. Finalmente, el periodo concluyó en una Dominación integrativa (1958-1970), liderada por Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, culminando con la elección de Salvador Allende.<sup>2</sup>

La clase trabajadora y los sectores populares no observaron impávidos, se organizaron, respondieron y presionaron al sistema. Una ola de huelgas, paros, revueltas, tomas y marchas inundó las ciudades y los campos. Se trataba de una clase obrera movilizada en minas e industrias, de un proletariado pobre o empobrecido que se alojaba en la periferia de las ciudades, de trabajadores de cuello blanco que aumentaban gracias al crecimiento del aparato estatal y de servicios de carácter privado, de campesinos que demandaban el derecho a sindicalizarse y negociar sus condiciones de trabajo y vida, de sectores estudiantiles y profesionales críticos ante la falta de perspectivas. Pero también, y esto fue fundamental durante el periodo, del desarrollo de una red de organizaciones de clase que lograron canalizar los impulsos de los sectores movilizadores y darles una expresión orgánica. Ellos y ellas fueron fuerza propulsora de las transformaciones y sentaron las bases para generar una plataforma favorable a los cambios, que cobrará hegemonía a fines de la década de 1960.<sup>3</sup> Para entonces, como sostuvo Atilio Borón en 1975, al cuestionarse sobre las raíces histórico-estructurales que incidieron en la radicalización del proceso chileno, ya sería imposible gobernar el país sin introducir cambios de importancia en las condiciones socioeconómicas y políticas bajo las cuales había funcionado el sistema en su conjunto.

De esta manera observamos un encadenamiento de luchas que toma fuerza y presencia, tal como demuestra para el caso de la minería del carbón la

historiadora Jody Pavilack en el capítulo “El pan grande fue un engaño. Colaboración y conflicto en la zona carbonífera desde el Frente Popular hasta comienzos de la Guerra Fría”. Pavilack da cuenta de cómo se experimentó la llamada “promesa democrática colaborativa” del Frente Popular y los gobiernos radicales en la zona del carbón en el sur de Chile. Profundizando en las tensiones entre las familias trabajadoras, representantes del Estado y capitalistas privados, destaca las diversas formas de acción política y protesta popular que llevaron a cabo los trabajadores bajo el liderazgo y hegemonía comunista, en lo que considera el apogeo del Frente Popular en 1942, hasta su trágico final, signado por los eventos de octubre de 1947, en el contexto de la huelga del carbón. También describe cómo la trayectoria de lucha de los mineros estuvo marcada por huelgas, pliegos petitorios, concentraciones en plazas públicas, ollas comunes, marchas y caceroleos, e incluso utilización de dinamita para repeler a fuerzas policiales.

Pero no solo eran los mineros, también la zona sur se estremecía con lo que la historiadora María Angélica Illanes llamó “movimiento en la tierra”, haciendo referencia con aquello a la participación del movimiento campesino y de pueblos originarios, en tanto fuerza social que se sumó a la de trabajadores urbanos, generando en conjunto una significativa desestabilización del régimen capitalista, en las primeras cuatro décadas del siglo

XX

, pero con énfasis en los gobiernos del Frente Popular y radicales. De esta manera, el capítulo “Cuerpos y formas de lucha campesina y mapuche y sus articulaciones con el movimiento obrero. Chile, 1ª mitad del siglo

XX

”, afirma que el mundo social rural se encontró convulsionado “cuando irrumpe en la escena nacional un nuevo discurso que enuncia los derechos del campesinado y pueblo mapuche y los llama a organizarse y a levantar la bandera de sus demandas y el rostro de su dignidad”. El texto se pregunta sobre las distintas expresiones con que hicieron presencia y manifestaron sus demandas, identificando principalmente tres tipos de lucha de los campesinos apatronados: las movilizaciones por el derecho a la sindicalización, las batallas de los pliegos de peticiones y numerosas huelgas.

También la zona norte se encontraba en movimiento. El 17 de enero de 1946 comenzaba una extensa huelga en las minas de nitrato de Mapocho, en la provincia de Tarapacá y Humberstone, motivada por el drástico aumento de precios de los bienes de consumo básico en la pulpería y la modificación unilateral de las condiciones de trabajo. La zona fue decretada en Estado de Emergencia y militarizada. Además, se les canceló la personalidad jurídica a los sindicatos implicados, comenzando por la clausura de sus sedes y el desafuero de dirigentes. Como respuesta hubo manifestaciones de solidaridad y protesta en distintas ciudades del país. En Santiago, miles llegaron al centro de la ciudad en lo que fue conocida como la masacre de la Plaza Bulnes, donde cayó muerta la joven Ramona Parra y otros cinco trabajadores. Una movilización que se emparenta con la huelga del carbón desarrollada entre el 27 de diciembre de 1945 y el 15 de enero de 1946, con la huelga del salitre que se extendió desde el 17 hasta la primera quincena de febrero del mismo año y con el paro nacional del 30 de enero, y del 4 al 8 de febrero de 1946, convocados ambos como repudio a la represión en la Plaza Bulnes.<sup>4</sup>

Las luchas populares continuaron desarrollándose en los años siguientes, incluso durante los tiempos más duros de la Ley Maldita. Poco se ha indagado en las protestas durante dicho periodo, las que en apariencia desaparecen, ya que efectivamente la huelga tuvo un importante descenso a partir de las implicancias de la ofensiva antiobrera de González Videla y la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (

LDD

) en 1948. Pero la protesta no desaparece, sino que debió reconfigurarse bajo el formato clandestino, más pequeño y fugaz. Es posible observarla a través de diversas acciones de resistencia, encabezadas principalmente por jóvenes comunistas que protestaban contra la proscripción de su partido y persecución de sus militantes: rayados hechos de alquitrán en las paredes, actos de sabotaje contra el tendido eléctrico, manifestaciones relámpago en el centro de Santiago, distribución y venta de prensa y panfletos clandestinos, improvisados discursos fuera de las fábricas, entre otras.

No está de más considerar, tal como señala Viviana Bravo Vargas en su texto “Santiago y la conquista de las calles: La Revuelta de la chaucha en agosto de 1949”, que tanto los sucesos de 1949 como los de la revuelta de abril de 1957 se produjeron en plena vigencia de la

## LDD

. Se trata, en definitiva, de dos revueltas que son parte de un mismo ciclo y que marcan un arco de tiempo en que se manifiesta a viva voz la crisis del desarrollismo, y el cansancio de la clase trabajadora ante las constantes alzas que encarecían la vida y depreciaban sus sueldos y salarios. Además de una atmósfera de opresión y persecución política. De hecho, observaremos formas de lucha sumamente parecidas en ambas revueltas, como volcamiento de microbuses, destrucción e incendio de garitas, rompimiento de vidrios y vitrinas, marchas por el centro de la ciudad, concentraciones fugaces en diversas poblaciones, lanzamiento de piedras a los símbolos del poder político y económico, barricadas y obstáculos al tránsito vehicular. Pero también diversas huelgas en fábricas y minas, retiro de trabajadores/as fuera de reloj e improvisados discursos invitando a otros a sumarse al movimiento.

La Revuelta de la chaucha abonó el terreno para continuar con la organización y movilización de los trabajadores. No solo presenciamos un repunte de la huelga obrera, sino también de los paros nacionales, esta vez convocados por la

CUT,

en la década de 1950 y 60. En ellos se yuxtaponen las tradiciones de lucha que hemos referido. Por ejemplo, el paro nacional de 1962, si bien fue recordado por la matanza en la población José María Caro, tuvo un importante impacto urbano en distintos puntos de la ciudad. Hubo concentraciones en diversas zonas de Santiago, marchas y discursos; también colocación de durmientes en la vía férrea para evitar el paso de los trenes, barricadas en algunas calles y enfrentamientos a piedras con carabineros, repudio e incluso golpes a los rompeshuelgas, juicios populares teatralizados en las quemas del mono, cierre violento de negocios e imponente presencia en los velorios de los caídos. Fueron hechos políticos de masas.

En resumen, si bien durante el periodo la huelga fue una herramienta poderosa de presión y confrontación, los/as trabajadores/as y clases populares echaron mano de diversas formas de lucha sedimentadas históricamente con las que intervinieron y se empoderaron en el espacio público y colectivo para transmitir y socializar el descontento. Con trayectorias históricas distintas, diversos liderazgos, alianzas, formas de lucha y ocupaciones de la ciudad, las grandes mayorías actuaron conjuntamente y lograron interpelar al poder, conquistar

espacios y aportar a un proceso de democratización social y ascenso del movimiento popular, que culminaría en la elección de Salvador Allende y el proceso de la Unidad Popular.

Y justamente a desentrañar la lucha de calles en dicho periodo aporta el trabajo de Franck Gaudichaud, “Movilizaciones obreras, cordones industriales y protestas urbanas durante la ‘vía chilena al socialismo’. Santiago, 1970-1973”. Concentrándose en lo que llama la territorialización de las luchas obreras en la ciudad de Santiago, sostiene que la protesta popular y el conflicto de clase estaban claramente situados en la geografía urbana de Santiago. Por lo tanto, las movilizaciones de trabajadores y sus sindicatos que respaldaban a la Unidad Popular y se enfrentaban a sus patrones, irrumpieron en el espacio productivo, en las empresas y fábricas, pero también en las calles y avenidas, tanto en el centro como en las periferias de la capital, a través de diversas formas de lucha. Destaca la gestación de formas autoorganizativas que vinieron a interrogar, subvertir y transformar el conjunto de los territorios de la ciudad, a través de los cordones industriales, la huelga y diversas estrategias de lucha callejera, como manifestaciones, desfiles, barricadas y bloqueo de caminos. Además, la toma de fábricas (a veces incluso manteniendo la producción) fue una de las más significativas movilizaciones obreras, con las asambleas sindicales o el involucramiento en diversas formas de abastecimiento directo en los momentos de crisis y boicot económico.

Como sabemos, el golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973 marcó una profunda transformación de la sociedad chilena, del régimen político y la relación estatal conformada durante el siglo

XX

. La reestructuración del capitalismo en Chile en su forma neoliberal implicó un proceso de privatizaciones y recortes del presupuesto social, aunado a la supresión de las libertades civiles, redadas y arrestos masivos, torturas, ejecuciones y desapariciones. Entre las llamadas siete modernizaciones impulsadas por los economistas del régimen, hubo reformas fundamentales que implicaron la privatización del sistema de seguridad social, bajo las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (

AFP

), y de la salud, con el advenimiento de un sistema llamado Institución de Salud Previsional (Isapres). Además, se implementó un nuevo Código Laboral, que precarizó y atomizó las relaciones laborales, entre otras medidas. La institucionalización de las transformaciones estructurales se concretó con la redacción final de la nueva Constitución Política de Chile en 1980, que, elaborada por un pequeño grupo de partidarios del régimen bajo cuatro paredes, vendría a reemplazar la de 1925.

Diversos economistas sostienen que los costos de la transformación neoliberal, evidenciados con la crisis económica de 1981-82, fueron cargados por los hombros de los sectores más desposeídos. Pero ante el nuevo contexto político y económico, fueron miles quienes salieron a las calles impulsando uno de los ciclos de rebelión popular más extensos que conoce la historia de Chile, conocido como las Jornadas Nacionales de Protesta contra la dictadura, desarrolladas desde el 11 de mayo de 1983 y mantenidas, con mayor o menor intensidad, hasta el final del régimen. En ellas observaremos la articulación y convergencia de las diversas tradiciones de lucha que hemos recorrido en las décadas anteriores.

Los trabajos agrupados en esta tercera parte, denominada “Instauración, despliegue y crisis del neoliberalismo, 1973-2019. Diversificación y radicalidad en las formas de lucha”, abordan justamente los alcances, las formas, los significados y la heterogeneidad de los actores y escenarios protagónicos de la protesta popular antineoliberal. Bajo este marco, Claudio Pérez, en el capítulo titulado “Todos juntos y al mismo tiempo contra la dictadura de Pinochet. El paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986”, analiza una de las jornadas de movilización popular más importantes y características en contra de Pinochet. Por su masividad, radicalidad y combatividad; por la diversidad de formas de lucha desplegadas en todo el país; por la multiplicidad de actores sociales y políticos involucrados, y los niveles de organización y articulación nacional; por la cruenta represión desatada por el conjunto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986 fue el hito más álgido y significativo en cuanto al ciclo de movilizaciones antidictatoriales. En función de dicha importancia, el autor caracteriza y analiza las principales dinámicas, escenarios y actores involucrados en aquella jornada de paralización, destacando, en particular, la participación de la clase trabajadora y pobladores.

Las consecuencias políticas que trajo este paro nacional, más el descubrimiento de toneladas de armas ingresadas clandestinamente por el Partido Comunista de

Chile, con el objetivo de asegurar y apertrechar la “Sublevación Nacional”, y el fracasado atentado contra Augusto Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (aparato militar del

PCC

h) en septiembre de 1986, implicó el aislamiento y la inminente derrota de la izquierda chilena que apostaba por la salida popular y la derrota del régimen. En este escenario, se produjo el marco político para la transición pacífica a la democracia a través del plebiscito que definía la continuidad de Augusto Pinochet en 1988. En ese contexto, millones de chilenas y chilenos salieron a las calles y se movilizaron tal como lo venían haciendo en los complejos años anteriores: con actos masivos, marchas, conciertos, concentraciones y diversas acciones que se tomaron el espacio público, en una colorida campaña, cuya consigna era “¡Chile, la alegría ya viene!”. El triunfo de la opción NO y el llamado a elecciones libres para el año 1989, trajeron como resultado la derrota del candidato de continuidad de la dictadura y el inicio de los gobiernos civiles hegemonizados por la antigua oposición a Pinochet.

No obstante, las medidas de profundización del neoliberalismo, así como el despegue definitivo e internacionalización del modelo impuesto en dictadura, se llevaron adelante bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, particularmente durante las administraciones de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006). La intervención del mercado en áreas sensibles como educación, salud y previsión social, parecía no ser objeto de discusión y decisión política.

Sin embargo, tempranamente y acumulando organización y fuerza, el movimiento estudiantil vuelve a tomarse las calles para protestar por las consecuencias del modelo construido por la dictadura. Quizás las imágenes más asombrosas que recorrieron el mundo fueron las del año 2011, con multitudinarias concentraciones y mediáticos liderazgos, los que lograron posicionar una demanda histórica por una “educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro”, que cuestionaba, en definitiva, el alma del sistema. Este fue un proceso de organización y presencia pública, en que los estudiantes secundarios tuvieron un papel central, tal como dan cuenta los antecedentes con los que contribuye el trabajo de Ivette Lozoya y Viviana Cuevas, “Del Mochilazo a la Marcha de los paraguas: la protesta estudiantil en el Chile neoliberal (2001-2011)”.



La clase trabajadora también se hizo presente durante este ciclo histórico, por medio de una serie de protestas y huelgas desplegadas a lo largo y ancho de todo el país, a través de las y los trabajadores subcontratados, cuyas experiencias concretas eran el producto del neoliberalismo en el mundo del trabajo. Con el objetivo de dar cuenta de estas expresiones de protesta, Ignacio Ponce, con su capítulo “Contra la precarización laboral. Las luchas de los trabajadores subcontratados en el albor del siglo

## XXI

”, problematiza la idea de un nuevo sindicalismo y estudia el ciclo huelguístico de trabajadores subcontratados entre 2006 y 2009 a través de su accionar, las características de los liderazgos y el desarrollo de estrategias por parte de los movilizadores. A juicio de Ponce, este fenómeno más que significar la emergencia de un “nuevo sindicalismo”, implicó la revitalización de las luchas de las y los trabajadores chilenos durante esta década, produciéndose una especie de mixtura de concepciones y prácticas sindicales y de luchas novedosas, pero bajo los contornos de la cultura política sindical chilena.

Por otra parte, los actores sociales y las luchas se diversifican, dando cuenta de la amplitud de malestares que conmueven y persisten en la sociedad chilena y que son protagonizados por los llamados “nuevos movimientos sociales”, aunque sus historias y demandas estén lejos de ser nuevas, como las numerosas y diversas luchas de carácter emancipatorio y por la autonomía desplegadas por el pueblo mapuche. De esta manera, el texto “Capitalismo, Estado y protesta social mapuche”, del antropólogo Claudio Espinoza Araya, sostiene que las acciones de las organizaciones, los líderes y las comunidades mapuche que observamos en la actualidad obedecen a una historia más larga y compleja y que, en definitiva, se trata de una respuesta colectiva a procesos avasalladores que afectaron de manera violenta y decisiva el desarrollo de su historia.

Por su parte, el movimiento feminista, que ha colmado las calles del país levantando voces y banderas en contra del patriarcado, también se caracteriza por su diversificación y multiplicación. Tanto los aspectos organizativos como programáticos y proyectuales alcanzados, le dan a este movimiento una transversalidad importante en relación con otros actores sociales. En este sentido, el texto de Mónica Iglesias, “‘Nos afirman muchas mujeres’: El movimiento feminista y las luchas de las mujeres en la última década (2011-2020)”, reconstruye las articulaciones actuales del feminismo y las luchas

históricas que han dado las mujeres en periodos anteriores, así como su vinculación con las múltiples resistencias en diversas dimensiones de la vida. De esta manera, la autora sostiene que uno de los grandes desafíos del movimiento feminista actual es desplegar procesos de lucha desde la particularidad y diversidad que caracteriza a las distintas mujeres, articulando múltiples resistencias a los agravios y violencias que viven, tejiendo puentes y densificando el feminismo y las luchas por la transformación radical de la sociedad, en un sentido anticapitalista y antipatriarcal.

También en la geografía chilena se expresan otras movilizaciones, como los conflictos y masivas protestas socio-ambientales desencadenadas en algunas regiones del país en contra del modelo centralista y extractivista, las cuales alcanzaron significativos niveles de unidad y combatividad, como fueron los casos de Aysén (cuotas de pesca y batallas territoriales contra la represión), Freirina (demandas por calidad de vida y contra la contaminación de aguas y aire por parte del holding Agrosuper) o Chiloé y Quintero ante los periódicos episodios de contaminación (“Zonas de sacrificio”).

En el capítulo titulado “Un largo mayo en Chiloé: territorio y luchas socioambientales en el Chile neoliberal”, Robinson Silva nos aporta luces para comprender a través de la situación producida en Chiloé en 2016, con la varazón de peces y la putrefacción que contaminó todo el sector, la subsecuente movilización de los trabajadores de la pesca y las comunidades. En ese contexto se articuló una serie de demandas que respondían al daño socioambiental, el abandono del Estado, los derechos territoriales y, por último, la instalación de nuevas demandas asociadas a la plurinacionalidad y derechos culturales y de género. De esta manera, al fragor de la protesta chilota, podemos calibrar un proceso de politización que se expresa en movilizaciones y asambleas territoriales, pero, sobre todo, a una generación de activistas chilotes que, motivados por la cuestión socioambiental, se movilizan a través de una crítica profunda al régimen neoliberal en tanto afecta diversas dimensiones de sus comunidades.

Estas demandas, actores y movilizaciones convergieron en la revuelta popular de octubre de 2019. Una protesta amplia y transversal, que daba cuenta del agotamiento y frustración en la sociedad chilena después de treinta años de neoliberalismo. Tal como expresa el texto “La lucha de calles y la revuelta de octubre de 2019”, de Viviana Bravo Vargas y Claudio Pérez Silva, se trataba del resultado de un proceso de acumulación de fuerzas sociales, intergeneracionales

y sectoriales, de experiencias organizativas y luchas populares, que comenzaron a manifestarse con fuerza desde al menos el año 2001 en adelante. Pero la mayor novedad era que si hasta el momento habían estado fragmentadas, se levantaron todas juntas y al mismo tiempo, logrando generar una crisis política importante, donde fueron puestos en cuestión algunos de los pilares fundamentales del modelo en torno a problemáticas como educación, salud, pensiones, derechos de agua, entre otras.

La revuelta de octubre incorporó importantes cambios con respecto a las protestas del ciclo abierto desde el año 2001. Se desarrolló a lo largo de todo el territorio nacional, en las principales ciudades y pueblos del país. La ocupación y resignificación de espacios públicos por semanas y meses es otro aspecto singular para destacar; los escenarios de la protesta y la revuelta se ampliaron notablemente, lo mismo que la organización de base. Asambleas populares, cabildos, encuentros de comunidades permitieron enraizar la revuelta, diversificar los escenarios y las dinámicas de politización de miles de chilenos y chilenas. El despliegue masivo de formas violentas de lucha y las denominadas “primeras líneas” de autodefensa, como un componente más de la protesta, es otro aspecto importante que destacar en el marco de la revuelta.

En definitiva, si revisamos con detención estas historias de huelgas, marchas y revueltas, tendremos algunas respuestas —puede haber más— que nos permitan entender por qué los y las chilenas protestamos así, por qué elegimos ciertas trayectorias urbanas y formas de confrontación. Comprenderemos sobre todo que estas se hayan construido, sedimentado y transmitido históricamente. Porque lo que nos hemos propuesto con estas páginas, es dar cuenta de las continuidades y persistencias de las formas de protesta protagonizadas por la clase trabajadora y los sectores populares. Pero del mismo modo, de las nuevas formas de lucha, la emergencia de nuevos actores y escenarios de la movilización popular que surgen en cada contexto histórico.

Entenderemos por qué en octubre de 2019 parecieron resurgir viejos fantasmas, como los de la Revuelta de los tranvías de 1888, de la Revuelta de la chaucha de 1949 o de los sucesos de abril de 1957, cuando miles conquistaron las calles a través de la acción directa, para poner límites a un proceso de alzas insostenible, que se expresaba en el transporte público. También los pasos de los trabajadores del salitre y su legado de organización proletaria, sus énfasis en torno a la necesidad de agruparse, tomar conciencia y enfrentar colectivamente la explotación asalariada. Ahí estaban sus asambleas, los pliegos petitorios, los

estandartes, las banderas, los manifiestos y su prensa. Ahí estaba la huelga, la negociación, la educación popular, la persistencia. Esa experiencia la compartían y transmitían también los mineros del carbón desde su larga marcha de principios del siglo

XX

, hasta la radicalidad y organización alcanzada en las décadas siguientes. El fuego de las barricadas del paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986, y otras formas de acción directa en contra de Pinochet, reapareció y destelló en las calles de octubre durante la revuelta. Eran llamas que, como decía la prensa por aquellos días, querían “quemar todo” símbolo económico, material e ideológico del neoliberalismo. También estaban las demandas por una Asamblea Constituyente que resonaban desde la década de 1980 en consignas, panfletos y paredes.

En este recorrido, la calle y sus esquinas, las plazas y sus encuentros se volvieron de importancia estratégica para que los que no tenían voz pudiesen ser escuchados y reconocidos. A veces interrumpiendo la circulación cotidiana para interpelar al poder, otras, marchando para entregar un pliego petitorio. A veces encendiendo hogueras, otras tantas, tocando cacerolas para demostrar fuerza y reconocerse entre muchos/as. Se trató de una escuela política viva, que vincula las rebeldías con la vida cotidiana y sus sueños de transformación. Lo fundamental de estas historias fue su carácter colectivo, espeso campo en que se construyó un Nosotros/as que transformó el tiempo y su reproducción. Y aunque la rueda del capital siguió girando, y las transformaciones fueron más lento de lo esperado, después de cada uno de estos hitos, no todo volvería a ser lo mismo. Ni para los que ahí estuvieron ni para los/las que vendrían.

## PRIMERA PARTE

EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO Y LA CUESTIÓN SOCIAL, 1870-1930. LA  
IRRUPCIÓN DE LA PROTESTA Y LA ORGANIZACIÓN POPULAR

## **I. ENTRE MOTINES Y PROTESTAS.**

### **CONFLICTO POLÍTICO Y REBELDÍA POPULAR EN CHILE (1850-1891)**

IGOR GOICOVIC DONOSO\*

#### **PRESENTACIÓN**

Tras los desajustes político-institucionales producidos por la guerra de Independencia y la subsecuente guerra civil (1810-1830), los gobiernos de la llamada “era portaliana” (1831-1861), encabezados por Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, llevaron a cabo una reestructuración global de la institucionalidad política, intentando funcionalizar el modelo de organización de la sociedad a los intereses de la burguesía comercial y terrateniente, que se constituyó como grupo de poder. Para ello se organizó un sistema político, cuyos rasgos distintivos fueron la formación de un Ejecutivo fuerte y centralizado, orientado a garantizar el orden social y a facilitar la expansión de la economía primario exportadora.

Las voces disonantes frente al sistema político centralizado fueron sistemáticamente acalladas por el peso de la noche. De hecho, el movimiento de oposición liberal que comenzó a organizarse a partir de la década de 1840, solo logró articularse inicialmente como núcleo intelectual, especialmente en el ámbito de la literatura, para posteriormente pasar a transformarse en un heterogéneo movimiento político, que se mostró sistemáticamente incapaz de constituir una alternativa real de poder.<sup>5</sup>

De la misma manera, los sectores populares que durante la guerra de independencia y la fase temprana de organización del Estado se habían autonomizado social y políticamente, fueron cercados por las fuerzas militares,

sufriendo la ejecución de sus líderes y la confiscación o destrucción de sus emprendimientos productivos, para luego ser sometidos a un estricto control policial y religioso.

Tras la guerra civil de 1859, el régimen político oligárquico transitó hacia una creciente liberalización. Los cambios producidos por la modernización económica, inaugurada hacia la década de 1830 y madurada en la segunda mitad del siglo

## XIX

, instalaron a nuevos actores sociales y políticos, como las burguesías minera, financiera e industrial. Estos nuevos sectores sociales, que se imbricaron a través de vínculos empresariales y familiares con las élites mercantiles y terratenientes, arrastraron a las élites liberales al poder y estas, a su vez, introdujeron ajustes al régimen político, como la prohibición de la reelección presidencial (1871), la ampliación del derecho a sufragio (1874), la ley de matrimonio civil (1884) y la abolición del voto censitario (1888). No obstante, estos ajustes por arriba no transformaron el sistema de dominación en Chile. Por el contrario, las clases populares vieron cómo la modernidad capitalista acentuaba la explotación laboral, precarizaba sus condiciones materiales de vida y extendía los mecanismos de control social. En este nuevo escenario, los sectores populares continuaron expresando su descontento a través de sus mecanismos tradicionales de resistencia, como la fuga y la cangalla, a la vez que, en cada circunstancia en que eran arrastrados a diferentes enfrentamientos bélicos (internos y externos), desertaban, formaban montoneras o saqueaban los bienes de los vencidos. Por otro lado, en el emergente mundo urbano, los arrabales se densificaban de forma sistemática y desde ellos irrumpían en el centro cívico y comercial cada vez que se presentaba la ocasión para el motín.

En este texto nos proponemos analizar las diferentes formas que asumió la protesta popular en Chile durante el ciclo 1850-1891. Sostenemos que el régimen oligárquico, si bien pretendió establecer un estricto sistema de control disciplinario sobre los sectores populares, nunca logró neutralizar completamente la rebeldía popular. Esta, estimulada por las precariedades materiales en las cuales se desenvolvía la existencia cotidiana de los trabajadores, socializada como descontento en sus ámbitos de reunión y circulación y exteriorizada como rabia masiva y espontánea, sacudió circunstancialmente los cimientos del orden oligárquico, provocando pánico y

horror entre las clases dominantes. No es extraño, en consecuencia, que la política pública del periodo haya puesto énfasis en la represión en un esfuerzo estéril por contener el vendaval desatado por los más pobres.

## EL ORDEN PORTALIANO Y LA PROTESTA POPULAR

La derrota de las conspiraciones liberales y de las montoneras populares en la década de 1830 permitió la consolidación del régimen oligárquico conservador. De hecho, la administración de Manuel Bulnes (1841-1851), heredero político de Joaquín Prieto, se desarrolló en un clima de relativa tranquilidad política, apenas amagada por la crítica proveniente de los círculos intelectuales liberales. Este nuevo escenario favoreció, a su vez, la expansión de las actividades productivas, en especial las explotaciones cupríferas en Coquimbo y Atacama, así como de las actividades de la industria del carbón en el golfo de Arauco, a la par que la demanda de trigo proveniente de Perú, y posteriormente de California y Australia, permitió la expansión de los cultivos cerealeros en el valle central. El acelerado desarrollo experimentado por la economía entre fines de la década de 1830 y comienzos de la década de 1840 permitió, además, abocarse a una serie de tareas, como el desarrollo de una política pública de educación, que alcanzó su materialización con la fundación de la Universidad de Chile (1842), la Escuela Normal de Preceptores (1842) y la Escuela de Artes y Oficios (1849), en el estímulo a los procesos de colonización de las zonas sur-austral (Llanquihue y Valdivia) y austral (Magallanes), y en el despliegue de una política pública de mejoramiento de caminos, puentes e instalaciones portuarias.

No obstante, el descontento liberal no se había extinguido, tan solo se encontraba aplastado por “el peso de la noche” y, más específicamente, por las políticas de control social y político que desplegaba el gobierno conservador de Manuel Bulnes. A contrapelo de ello, desde comienzos de la década de 1840, intelectuales y tribunos liberales, como José Victorino Lastarria, Álvaro Covarrubias, Manuel Antonio Matta y Jacinto Chacón, comenzaron a articular organizaciones de debate académico y político, como la Sociedad Literaria, creada en 1842, o el Club de la Reforma, fundado en 1849.<sup>6</sup> Pero fue la Sociedad de la Igualdad, constituida en marzo de 1850, por Santiago Arcos y Francisco Bilbao, la organización que explicitó un programa de reformas de mayor



radicalidad. Su composición interna era policlasista y concurrían a la misma sujetos provenientes de las filas de las élites liberales, así como artesanos de diversos oficios manuales. Su objetivo central era la formación de una sociedad de sujetos libres e iguales, para lo cual se hacía imprescindible democratizar el sistema político y mejorar las condiciones educativas y sociales del pueblo. Fuertemente influidos por la revolución burguesa de 1848, sus principales dirigentes se visibilizaban a sí mismos como los conductores de una masa popular armada que debía demoler los cimientos del régimen autoritario y clerical.

No es extraño, en consecuencia, que junto a las polémicas públicas en que se enfrascaron con sus adversarios en el gobierno y en la iglesia, hayan dedicado sus mejores esfuerzos a preparar un levantamiento armado al estilo del protagonizado por el pueblo parisino en 1848. Pero sus esfuerzos fueron infructuosos, la conspiración igualitaria de abril de 1851, liderada por el coronel Pedro Urriola Balbontín (muerto en combate) y secundada por los principales dirigentes igualitarios, concluyó en un rotundo fracaso. Las tropas regulares convocadas a la revuelta por Urriola se mantuvieron dubitativas, mientras que los igualitarios solo lograron movilizar a un escaso número de militantes. Incapaces de copar los cuarteles de la Guardia Cívica y de la tropa leal al gobierno, los revolucionarios fueron rápidamente reducidos y sus dirigentes asesinados, encarcelados o puestos en fuga.<sup>7</sup>

Una vez aplastada la revuelta, el gobierno de Manuel Bulnes convocó, en el mes de junio de 1851, a elecciones presidenciales regulares, evento en el cual su delfín, el abogado conservador Manuel Montt Torres, resultó electo por una amplia mayoría de los electores (132 sobre un total de 168). La elección fue impugnada por su contendor, el general penquista José María de la Cruz, lo cual precipitó la dictación del estado de sitio y la subsecuente represión a la oposición regional y liberal. Las tensiones se incrementaron entre julio y agosto de 1851, al punto de precipitar, en septiembre de ese mismo año, un levantamiento armado contra el gobierno, tanto en La Serena, bajo el liderazgo de José Miguel Carrera Fontecilla, como en Concepción, bajo la conducción de José María de la Cruz. Los rebeldes, incapaces de coordinar sus respectivos esfuerzos y carentes de un programa compartido que reestructurara el régimen político, fueron sucumbiendo ante sus adversarios en sucesivos enfrentamientos armados. Las tropas de José María de la Cruz fueron batidas en Loncomilla el 8 de diciembre de 1851, mientras que los liberales de La Serena, tras soportar un asedio de aproximadamente cuatro meses, se replegaron hacia Atacama, donde fueron

derrotados el 8 de enero de 1852 (batalla de Linderos). La asonada liberal concluía, una vez más, en un fracaso.

Cualquiera podría suponer que el programa igualitario, y por extensión la revuelta liberal, cautivó el interés y, en consecuencia, la adhesión de los sectores populares. Nada menos efectivo. Si bien una parte importante del artesanado de las ciudades de Santiago, San Felipe, Concepción y La Serena adhirió con entusiasmo a la revuelta, no es menos efectivo que el grueso de los trabajadores (peones rurales y urbanos) permaneció ajeno a la misma. Circunstancialmente se enrolaron tanto en el bando liberal como en el conservador o desarrollaron estrategias autónomas de movilización y protesta.

En las regiones de Atacama y Coquimbo este proceso adquirió un importante nivel de desarrollo. Los trabajadores de minas y el artesanado de las ciudades de Copiapó y La Serena formaron columnas armadas que jugaron un rol destacado en la defensa de esta última durante el sitio que la afectó entre septiembre y diciembre de 1851, a la vez que se organizaban en un Consejo del Pueblo, que nominó como nuevo Intendente al tribuno liberal José Miguel Carrera Fontecilla. La derrota de los liberales en el norte, de los regionalistas conservadores en el sur y de los amotinados plebeyos en diferentes lugares del país, no supuso, necesariamente, un restablecimiento de la estabilidad. Las duras sanciones aplicadas contra los vencidos (ejecuciones sumarias, encarcelamiento, exilio, expulsión de las filas del ejército y de la administración pública) mantuvieron crispado el escenario político y prepararon las condiciones para una nueva revuelta.

Efectivamente, los problemas surgidos hacia comienzos de la década de 1850 no habían sido resueltos al concluir la misma. Por el contrario, algunos de ellos se habían acentuado como resultado de la fractura experimentada al interior del bloque en el poder. En efecto, en 1857 una fracción del movimiento conservador (ultramontanos), fuertemente ligado a la Iglesia Católica, abandonó el gobierno de Manuel Montt, al que acusaban de patronalista, y dieron forma a una nueva alianza opositora que pasó a denominarse fusión liberal-conservadora.<sup>8</sup> A partir de este momento la oposición adquirió un creciente grado de beligerancia, objetando todas las decisiones de la administración de Montt, en especial aquellas que marcaban el derrotero de la sucesión gubernamental, que, todos suponían, recaería en su ministro del Interior, Antonio Varas de la Barra.

Estos cuestionamientos eran aún más radicales en el extremo norte del país, en

particular en la Región de Atacama, donde la élite liberal, fuertemente ligada a la burguesía minera de la zona, bajo el liderazgo de Pedro León Gallo, reivindicaba un proyecto político autonomista que buscaba asegurar para la burguesía de la región los réditos de la acumulación minera.<sup>9</sup>

A lo anterior se deben sumar los efectos de la crisis económica de 1858-1861, la que se vio precipitada por la caída en la producción de plata y por la pérdida de los mercados de California y Australia para el trigo chileno. Ambos fenómenos tuvieron severas repercusiones en el proceso de acumulación que la burguesía venía desarrollando sostenidamente desde la década de 1830, pero también sobre las rentas del Estado y sobre los trabajadores y sus familias. No es extraño, en consecuencia, que hacia fines de 1858 la situación política del país fuera particularmente inestable.

Para la burguesía minera de Copiapó, la eventual llegada al gobierno de Antonio Varas suponía una acentuación de las políticas represivas y centralistas del Estado, en consecuencia, su disposición a la revuelta y al cambio violento del escenario político era mucho mayor. Sus principales dirigentes, Pedro León Gallo y Manuel Antonio Matta, se abocaron a la tarea de preparar un levantamiento que impidiera la candidatura de Varas, depusiera al gobierno y diera inicio a un nuevo proceso constituyente.<sup>10</sup>

A comienzos de enero de 1859, la conspiración ya había construido redes en diferentes regiones del país, de manera que entre el 5 y el 28 de enero de ese año se levantaron en armas unidades militares, apoyadas por civiles liberales, en Copiapó, San Felipe, Valparaíso, Concepción, sumándose, posteriormente, las montoneras que asolaron las regiones de Talca y Chillán. En general, la revuelta fue rápidamente controlada por las fuerzas del gobierno, con excepción de Copiapó, donde los revolucionarios lograron tomar el control de la ciudad, luego de la región, para extender posteriormente el movimiento hacia La Serena, Ovalle e Illapel. La asamblea ciudadana constituida en Copiapó proclamó a Pedro León Gallo como intendente de la Provincia de Atacama, a la vez que acuñaba su moneda, diseñaba la bandera del movimiento (que es hoy día la bandera de la Región de Atacama) y utilizaba los establecimientos de fundición de la minería para fabricar su propio armamento.<sup>11</sup>

Pese a sus primeros éxitos militares, como la toma del puerto de Caldera (18 de enero) y la derrota del ejército gobiernista en la batalla de Los Loros (14 de marzo), el aislamiento del movimiento en la zona de Atacama, la rápida

deserción de los liberales de la zona central y la temprana derrota de las montoneras populares en la zona centro-sur, redundó en el debilitamiento del campo político revolucionario, y en su posterior derrota en las batallas de Cerro Grande (29 de abril) y de Copiapó (12 de mayo). Como en la revolución de 1851, los líderes liberales de la revuelta escaparon fuera del país, a la vez que la represión se ensañaba con los vencidos, en especial con aquellos de extracción popular.

No obstante, las fuerzas del gobierno también quedaron debilitadas. Tras el cese de las hostilidades Antonio Varas declinó su candidatura presidencial, obligando al gobierno de Manuel Montt a buscar una salida política a la crisis a través de un “pacto de transición” con la fusión liberal-conservadora. Ese pacto llevó a la Presidencia de la República, por dos periodos consecutivos (1861-1871), al político conservador José Joaquín Pérez Mascayano, quien, no obstante, dio inicio a una fase de creciente liberalización de la política, en especial a través de la libertad de prensa y de opinión. Ello, a su vez, se tradujo en una rápida amnistía para los vencidos en las revoluciones de 1851 y 1859, así como en la formación del Partido Radical (1863), organizado en Copiapó por los líderes de la revuelta de 1859.<sup>12</sup>

La tendencia a la liberalización de la política se acentuó a partir de 1863, cuando el Presidente Pérez convocó a connotados liberales, como José Victorino Lastarria, Federico Errázuriz Zañartu y Álvaro Covarrubias Ortúzar, a asumir diferentes carteras ministeriales en el gobierno, a la par que introdujo en el debate político la reforma a la Constitución de 1833, la cual se materializó en 1871, con la limitación de la elección presidencial a un periodo.<sup>13</sup>

Pero la estabilidad política por arriba no conllevó la desaparición de la protesta popular por abajo. Por el contrario, la misma comenzó a presentar nuevos rasgos. Algunos de ellos se expresaron en levantamientos indígenas en los territorios al sur del río Biobío, derivados del arribo de colonos que, con el aval del Estado, se comenzaron a establecer en la región. En las ciudades y villas, por su parte, el creciente grado de concentración de la población y las precarias condiciones de habitabilidad y trabajo en la que se desenvolvía la existencia de los sectores más humildes, hicieron irrumpir con fuerza el motín urbano. Mientras, en el Norte Chico y en el Valle Central, el fenómeno del bandolerismo rural adquiría crecientes proporciones.

## GUERRAS EXPANSIVAS Y RESISTENCIA POPULAR

La relativa estabilidad política alcanzada durante el gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano permitió neutralizar los conatos de subversión por arriba. No obstante, las tensiones históricas se mantuvieron entre quienes aspiraban a preservar el “espíritu” del Régimen Portaliano, autoritario y centralista, y aquellos que pretendían modificarlo en aras de un sistema político y económico más descentralizado. A ese efecto, los actores políticos se fueron incrementando, y a los tradicionales partidos Conservador (1836) y Liberal (1849) se sumaron el Partido Nacional (1857), el Partido Radical (1863) y, posteriormente, el Partido Demócrata (1887). Pero el ámbito en el cual se recluyó la disputa política fue en el hemicycleo del Congreso de la República, transformando las extensas y floridas intervenciones de los honorables en la expresión más tangible de dicha conflictividad.<sup>14</sup>

Pero no solo el sistema político experimentó cambios durante este periodo. Las aceleradas transformaciones económicas iniciadas hacia la década de 1830, condujeron al país a un creciente grado de integración en los circuitos del capitalismo industrial en expansión y, junto con ello, precipitaron un incipiente proceso de modernización de la economía en lógica capitalista. La incorporación de la riqueza salitrera, tras el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883), el desarrollo del sector industrial, asociado a la incorporación del salitre, la expansión de la frontera agrícola sobre las tierras de La Araucanía, el surgimiento de una economía agro-industrial en Valdivia y el desarrollo de las explotaciones ganaderas en Magallanes, se convirtieron en la manifestación del creciente dinamismo que adquirieron las actividades económicas en el país. Esto tuvo múltiples implicancias desde el punto de vista social y cultural. Por una parte, extendió las relaciones sociales capitalistas de producción, ampliando el número de trabajadores asalariados, pero, dadas las características de la economía chilena, tendió a concentrar a dichos trabajadores en territorios y ámbitos específicos. Así, los polos de modernidad capitalista acentuaron los desplazamientos de población, tanto hacia el norte salitrero, como hacia los centros urbanos e incluso hacia las tierras de colonización de la zona sur y sur-austral. Junto con ello, la modernidad capitalista comenzó a introducir nuevas modalidades en la organización de las empresas (sociedades por acciones), en la gestión de las mismas (gerentes, administradores, contables, capataces, etc.) y en la organización de la producción (trabajo en turnos) y de la fuerza de trabajo

(cuadrillas y oficios especializados).

No es extraño, en consecuencia, que la conflictividad y la protesta popular hayan adquirido, a partir de la década de 1870, nuevas expresiones. En algunos casos, como durante la Guerra del Pacífico, se manifestó como resistencia al reclutamiento, pero también como ataques a los bienes y representaciones de la oligarquía (saqueo de Miraflores en 1881), mientras que, en otros, transitó desde la guerra de montoneras a la guerra de guerrillas, desplegada por los mapuche durante la denominada “Pacificación de la Araucanía”. En los campamentos mineros, a su vez, los trabajadores agrupados en territorios climáticamente hostiles, resistían las compulsiones laborales, a través de la huida y la cangalla; también por medio del motín y la revuelta. Por último, en los emergentes centros urbanos, el arrabal popular se convirtió en un foco de agitación, amenaza y desorden, que, cada cierto tiempo, explotaba de forma violenta.

Efectivamente, el sostenido desarrollo experimentado por el capitalismo minero y el capitalismo agrícola entre las décadas de 1870 y 1890, precipitó el despliegue del aparato militar del Estado hacia la frontera norte y la frontera sur. En el primer caso, ello derivó en un sangriento enfrentamiento armado contra los pueblos vecinos de Bolivia y Perú, en la denominada Guerra del Pacífico; y en el segundo, en el desarrollo de una guerra de despojo y exterminio contra la población mapuche y los pueblos aborígenes de la zona de los canales y de Tierra del Fuego.

El conflicto político-militar que enfrentó al Estado de Chile con las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia entre 1879 y 1883 tuvo como principal motivación la disputa por los recursos económicos disponibles en las provincias de Antofagasta y Tarapacá, en especial el salitre, que ya se explotaba en la región desde la década de 1860. Como señalan destacados historiadores chilenos, peruanos y bolivianos, la disputa por los mantos calicheros está en la base de las tensiones que se fueron configurando a lo largo de la década de 1870 y que terminaron por precipitar la intervención armada del Estado chileno en la ciudad de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879.<sup>15</sup>

En su fase inicial, la guerra fue vista con especial interés por las élites oligárquicas de los tres países, pero con desafección por sus respectivas clases populares. No obstante, el desarrollo de la prensa escrita y el acceso a la lectoescritura de una parte significativa de la población en Chile, contribuyó al desarrollo de un creciente “espíritu nacionalista” entre su población. Lo anterior

se hizo más evidente entre los chilenos desplazados por Perú y Bolivia desde las provincias de Tarapacá y Antofagasta, respectivamente, y entre los habitantes de las regiones limítrofes de Atacama y Coquimbo.<sup>16</sup> No obstante, una franja importante de la población, en todos los países involucrados, compuesta preferentemente por trabajadores rurales y comunidades indígenas, resisten el reclutamiento y esquivan sumarse a la guerra. Al comienzo de la campaña la inactividad militar y las inclemencias climáticas de la región estimulaban la desertión. Así lo indica Vicuña Mackenna en su texto sobre la campaña de Tarapacá de 1879: “(...) los soldados mismos comenzaban a ostentar su descontento individual y colectivo, desertándose de las filas a que se habían incorporado con tan sano i patriótico entusiasmo de voluntarios”.<sup>17</sup>

También fueron frecuentes los amotinamientos e insubordinaciones de la tropa, en especial frente a situaciones de abuso y ultraje por parte de los oficiales. En muchas oportunidades, las insubordinaciones derivaban de la ausencia o debilidades de la intendencia militar, la cual no prestaba mayor atención a las necesidades de los soldados, en particular en las adversas condiciones que imponía el desierto. Las manifestaciones de insubordinación eran regularmente castigadas con dureza por los oficiales al mando, en muchos casos aplicando la pena de fusilamiento y, en otros, la de azotes en público.<sup>18</sup> De esta manera, las tropas que marcharon a pleno sol desde Ilo hasta Hospicio (aproximadamente, 480 kilómetros), en el marco de la campaña de Tarapacá, lo hicieron con una escasa provisión de agua, lo cual derivó en un desbande de los soldados en las inmediaciones de Hospicio, el que fue controlado por el oficial al mando, Francisco Muñoz Bezanilla, con descargas de artillería. Informado el comandante en jefe del ejército chileno (Erasmus Escala) de la situación, recriminó al oficial a cargo el que no hubiese “(...) hecho fusilar a todos los cabecillas i a los demás los hubiese quintado”.<sup>19</sup> Es decir, haber hecho fusilar, además, a uno de cada cinco de los soldados desbandados.

En otro sentido, las tropas chilenas que triunfaron en la cruenta batalla de Miraflores (15 de enero de 1881), asesinaron a una parte de los prisioneros desarmados, a la vez que se dedicaban a saquear y prender fuego a las viviendas de la localidad.<sup>20</sup> El uso cada vez más frecuente de artillería de largo alcance, ametralladoras Gatling y minas eléctricas, artefactos que despedazaban a los soldados antes de ver las trincheras del enemigo, provocaba un fuerte impacto en los sobrevivientes, estimulando el deseo de venganza, el cual regularmente se materializaba en el ensañamiento con los vencidos. No era extraño, en consecuencia, que las tropas chilenas, una vez conquistados los parapetos del

enemigo, asesinaran a quienes intentaban rendirse.

Algo similar ocurrió en las diferentes operaciones militares que se produjeron en territorio peruano entre 1880 y 1883.<sup>21</sup> Efectivamente, la destrucción del ejército y la desintegración del Estado peruano permitieron que tanto los desertores, la población local de los territorios ocupados y las tropas chilenas, llevaran a cabo acciones de saqueo sobre las propiedades y bienes de las clases dirigentes. Es más, el Estado de Chile facultó a los mandos de tropa a aplicar a la burguesía peruana fuertes contribuciones de guerra a objeto de forzar a la élite dirigente a alcanzar un acuerdo de paz con Chile, bajo las condiciones impuestas por el vencedor. La negativa de la élite al acuerdo y al pago de las contribuciones derivaba, habitualmente, en la confiscación de las propiedades o en su saqueo y desmantelamiento.

Al concluir el conflicto, muchos veteranos de la Guerra del Pacífico se enrolaron como trabajadores en las explotaciones salitreras recientemente incorporadas por el país; otros, regresaron hasta el valle central, ingresando a las emergentes actividades industriales o las explotaciones agrícolas, y una parte no menor de los mismos continuó al servicio del Estado, participando activamente en el aplastamiento de la resistencia mapuche en el sur de Chile. No obstante, la gran mayoría de ellos continuó arrastrando la vida precaria y miserable que llevaban hasta antes del conflicto, expuestos a la pobreza material y al desamparo público. Pero no fueron pocos los que, enrolados en las filas de la clase obrera, se organizaron en sociedades de socorros mutuos y exigieron del Estado la compensación de los servicios prestados.

También en el Wallmapu, a partir de la segunda mitad del siglo

## XIX

, se produjo un recrudecimiento de la violencia. Efectivamente, la arremetida militar de la oligarquía, sumada a la usurpación de las tierras ancestrales, estimularon los levantamientos indígenas de 1869 y 1881, sofocados a sangre y fuego por las tropas del ejército chileno. De acuerdo a lo establecido por Jorge Pinto, la denominada “Pacificación de la Araucanía” arrancó con la creación de la Provincia de Arauco, en 1852, que estableció las condiciones jurídicas y administrativas que debían legitimar la ocupación del territorio mapuche. De esta manera, la subsecuente ocupación político-militar, iniciada en 1869, constituyó para el Estado chileno, para las élites políticas en el poder y los



intelectuales que les dieron su respaldo, un acto legítimo de toma de posesión de un territorio históricamente chileno.<sup>22</sup> Pero fue, también, un acto de justicia, ya que de acuerdo con la ideología predominante en la época (el positivismo y su vertiente dominante, el darwinismo social) se trataba de tierras ocupadas por salvajes incapaces de hacerlas producir. Así lo dejó de manifiesto el comandante José Manuel Pinto en una extensa memoria que presentó al gobierno en 1869. En dicho documento señalaba que “el carácter de los indios exige, para que la paz sea duradera, imponerles condiciones que solo aceptaran cuando se vean reducidos a la impotencia”. Es decir, el proyecto de transformación capitalista de la Región de La Araucanía y su plena incorporación al Estado de Chile requería del aplastamiento de toda forma de resistencia. Solo de esa manera se podía “integrar” a la población aborígen a la sociedad chilena.<sup>23</sup>

De ahí entonces que, junto con la invasión militar, se llevó a cabo un proceso sistemático de expropiación de tierras indígenas, las que posteriormente fueron transferidas a los colonos que las cercaron y pusieron en explotación.<sup>24</sup> De esta manera, el Estado generó las condiciones políticas necesarias para la expansión del capital agrario en el sur de Chile. Cabe señalar, además, que el proceso estuvo caracterizado por el uso masivo y desproporcionado de la violencia. Las tropas del ejército de Chile, al mando de los generales José Manuel Pinto y Cornelio Saavedra (campana de 1869 a 1871), llevaron a cabo lo que José Bengoa denominó una “guerra de exterminio”: los soldados incendiaban las rucas, asesinaban y retenían como rehenes a las mujeres y a los niños, arreaban los animales y quemaban los campos de trigo.<sup>25</sup>

No obstante, las operaciones militares del ejército chileno enfrentaron la decidida resistencia de los arribanos que, bajo la conducción de José Santos Quilapán, mantuvieron en jaque a las tropas chilenas hasta 1871. Los mapuche desarrollaron dos tipos de maniobras militares. Por una parte, amagaron las líneas de suministros de las tropas chilenas, atacando las caravanas de transporte y los depósitos de municiones y alimentos (especialmente el ganado); y por otra, concentraron guerreros en las inmediaciones de las líneas más débiles del adversario (fuertes y poblados), para descargar sobre ellos ataques por sorpresa. Se trató, mayoritariamente, de una guerra de movimientos, que perseguía debilitar al enemigo para provocar el abandono de la política de ocupación. Por ello, no es extraño que, junto a las acciones militares, los mapuche recurrieran también, de forma sistemática, a los parlamentos y embajadas, a objeto de distender las relaciones con las autoridades de gobierno.<sup>26</sup>

La posterior consolidación de la frontera en el río Malleco (1871-1880) permitió la ocupación definitiva de Arauco y de la zona de Traiguén. La modernidad capitalista, embarcada en los vagones del ferrocarril e informada a través del telégrafo, fluyó sobre las tierras mapuche modificando en profundidad el espacio económico y la vida social. Diez años después de culminada la primera etapa de la “Pacificación de la Araucanía”, un nuevo contingente militar se desplazó sobre el territorio mapuche. Se trataba en esta oportunidad del ejército triunfante en la Guerra del Pacífico, dotado ahora de nuevos recursos bélicos, como la artillería pesada, la ametralladora Gatling, el fusil de repetición Comblain y la carabina Winchester. Era, a su vez, un ejército veterano, fogueado en decenas de combates y con un mayor grado de internalización de la disciplina. Sus mandos, a su vez, habían sido encuadrados por el gobierno en la política de ocupación total del territorio. Frente a ellos se erigía una sociedad mapuche fuertemente golpeada por la campaña anterior y tensionada internamente por las desavenencias entre sus lonkos, tanto entre arribanos y abajinos, como al interior de cada una de estas agrupaciones. La insurrección mapuche, iniciada en el verano de 1881, tuvo su punto más alto de desarrollo en el levantamiento general de noviembre de ese año. Los ataques a Lumaco, Temuco e Imperial concitaron la preocupación de las autoridades, que enviaron nuevos refuerzos militares a la zona. Hacia el 15 de noviembre, el levantamiento ya había sido sofocado. Durante 1882 el ejército procedió a bloquear los pasos cordilleranos a objeto de reducir la maniobrabilidad estratégica de los guerreros mapuche y luego, en enero de 1883, tomó el control de Villarrica, su último bastión de resistencia militar.

Más al sur, en Magallanes, la situación no fue muy diferente. Hasta la década de 1870 la región se encontraba precariamente integrada a la soberanía nacional. Solo la ciudad-presidio de Punta Arenas aseguraba el control sobre el Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake y, de esta forma, sobre la principal ruta de navegación entre los océanos Atlántico y Pacífico. No obstante, habitaban la zona tres comunidades indígenas: los selk’nam, que ocupaban la isla de Tierra del Fuego y que se dedicaban predominantemente a la caza del guanaco; los kawéskar, que habitaban la zona de fiordos entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes, dedicados a la recolección de mariscos y a la caza de huemules y lobos marinos, y los yamana, que ocupaban el área litoral sur de la isla de Tierra del Fuego, dedicándose, al igual que los kawéskar, a la caza de lobos marinos y a la recolección de mariscos. Las estimaciones de los misioneros salesianos, que se establecieron en la región hacia 1887, indican que estas tres comunidades contaban con aproximadamente 6.000 personas. Hacia la década de 1930, los

indígenas selk'nam, yamana y kawéskar prácticamente habían desaparecido.<sup>27</sup> Este verdadero genocidio comenzó con el descubrimiento de oro en Tierra del Fuego, a fines de la década de 1870. Miles de aventureros, tanto chilenos como extranjeros, comenzaron a arribar a la región con la pretensión de explotar los lavaderos auríferos de la zona. La llegada de estos aventureros y la depredación que hicieron del guanaco, principal recurso de subsistencia de los aborígenes, precipitó la reacción de los indígenas, que atacaban sus campamentos y robaban su ganado.

Hacia mediados de la década de 1880, las actividades auríferas ya se encontraban en declinación, pero muchos de los antiguos buscadores de oro se habían transformado en colonos y habían solicitado, tanto del Estado argentino como del chileno, la concesión de tierras de colonización a efectos de constituir estancias destinadas a la explotación del ganado ovino. Las tierras de la región fueron entregadas generosamente a estos colonizadores, siempre en desmedro de los aborígenes, los que comenzaron a ser expulsados de los territorios que ocupaban.

La persecución y exterminio de la población aborígen se desarrolló con mayor intensidad entre 1881 y 1901. La violencia contra la población aborígen se dirigió de manera preferente contra los varones, en especial con los mayores de 16 años: es decir, contra aquellos que estaban en condiciones de combatir el proceso de ocupación que llevaban a cabo los estancieros. Pero a las mujeres en edad fértil se las reclutaba, tanto para el servicio doméstico en las estancias, como para servir de concubinas de los colonos y del peonaje nacional y extranjero que llegaba a la zona.

Los sujetos que integraban estas bandas armadas eran, regularmente, jóvenes. Los de origen británico provenían de las clases subalternas y, en su mayoría, habían desarrollado el oficio de ovejeros o esquiladores en Escocia, Gales, Australia, Nueva Zelandia o Malvinas. A pesar de su origen humilde, eran portadores del ideario civilizatorio y colonialista británico, en consecuencia, aspiraban a transformar su existencia material y, para ello, se manifestaban dispuestos a eliminar los obstáculos que les imponía la sociedad salvaje.

El confinamiento en condiciones de encierro, las enfermedades introducidas por los inmigrantes y el déficit alimentario debilitaron los sistemas inmunológicos de los aborígenes, favoreciendo la propagación de las enfermedades. Del mismo modo, la destrucción de sus sitios de caza, de los centros ceremoniales y la

evangelización forzosa, terminaron por aniquilar su cultura y, junto con ello, su condición de pueblo.

No es extraño, en consecuencia, que los indígenas reaccionaran violentamente contra los invasores que depredaban sus recursos y que esto, a su vez, diera origen a despiadadas represalias. Lo anterior constituía un procedimiento habitual para las bandas de mercenarios al servicio de los estancieros, los que ejecutaban sumariamente a los indígenas que eran sorprendidos robando ovejas.

La rápida caída de la población aborígen, la permisividad de los Estados oligárquicos de Argentina y Chile con las políticas aniquilacionistas de las bandas armadas y la vertiginosa expansión de la estancia ganadera, permitieron, a su vez, la consolidación de las relaciones capitalistas de producción. La prosperidad de las empresas ganaderas y la de muchos de sus inversionistas se había logrado, preferentemente, merced al genocidio de la población aborígen. Hoy día, los descendientes de los antiguos estancieros continúan constituyendo la élite económica y política de la Región de Magallanes, mientras que la población selk'nam se encuentra extinguida, y los pueblos yamana y kawéskar superan levemente las 5.000 personas.<sup>28</sup>

## MOTINES POPULARES EN EL MUNDO URBANO

Los motines urbanos, como los verificados en Santiago de Chile en 1878 y 1888, están normalmente asociados a una manifestación pública convocada por un sector de la élite dirigente, que suele ser desbordada por la movilización popular.<sup>29</sup>

Hacia 1878 se encontraba en su punto más alto la disputa chileno-argentina por la Patagonia austral. En ese contexto visitó Chile Manuel Bilbao, hermano del fallecido tribuno liberal Francisco Bilbao, quien dio varias conferencias de prensa y publicó algunos artículos en el periódico santiaguino *El Ferrocarril*, respaldando la demanda de Argentina a un mejor derecho sobre dichos territorios. Esta posición fue duramente impugnada por diferentes sectores políticos de la oligarquía, que defendiendo “los intereses superiores de la patria” determinaron organizar una manifestación pública contra Bilbao. Esa manifestación, que se verificó en el centro de Santiago, el día lunes 7 de octubre

al atardecer, derivó en una serie de incidentes: enfrentamientos con la policía, apedreamiento de lugares públicos e intentos de saqueo al comercio y a las viviendas del sector. Al día siguiente, los incidentes se repitieron, pero con una mayor carga de violencia social. La convocatoria realizada por la élite política, destinada a protestar contra Bilbao, fue clara y definitivamente desbordada por los sujetos populares, que se apropiaron de la convocatoria y le dieron un carácter distinto.

De acuerdo con las observaciones realizadas en terreno por la prensa santiaguina, se trataba de una “numerosa masa de pueblo de diversas condiciones”, que portaban pequeñas banderas nacionales y un gran número de campanillas, pitos y tarros de lata, con los cuales aumentaban el ruido, “que ya se percibía a muchas cuadas de distancia”. Este grupo inicial, encabezado por estudiantes de militancia liberal, se vio engrosado con centenares de curiosos que acudían desde todas partes.<sup>30</sup> De tal manera, después de ser repelidos de la Alameda se trasladaron en tumulto hacia la Plaza de Armas. En ese lugar comenzaron a arrancar algunos postes de madera que resguardaban los árboles del costado del Portal Fernández Concha y a extraer piedras del pavimento para agredir a la policía.<sup>31</sup> Las autoridades y la fuerza pública desplegada en el centro de la ciudad se encontraban desconcertadas. Es por ello que el oficial encargado de resguardar el orden público, al observar que los sucesos habían tomado proporciones alarmantes, “ordenó perseguirlos y dispersarlos, pero en esos instantes toda la jente se batía en retirada hacia la estatua de Buenos Aires, gritando la mayoría de los individuos que ya formaban cerca de 4.000, marchar a la Plaza de Armas”.<sup>32</sup>

Como convergió sobre la plaza un contingente de policías, los manifestantes comenzaron a arrancar los escaños que rodeaban el paseo y a formar con ellos trincheras de defensa en previsión de un ataque. Rompieron asimismo algunos escaños para armarse con las tablas y barrotes de fierro. Después de estos ataques, la poblada regresó sobre la avenida central de la Alameda en dirección a la estatua de Buenos Aires, derribando a su paso los escaños de fierro, con los cuales iba formando barricadas para impedir las cargas que pudiera darle la caballería y destrozando los bancos de piedras para proveerse de proyectiles.<sup>33</sup>

La situación había cambiado por completo. Las turbas en movimiento se vieron engrosadas por los sujetos que llegaban desde los barrios del sur de la ciudad. En este momento la asonada alcanzó su máxima intensidad. Los manifestantes ascendían a más de 4.000 y se desplazaban amenazadoramente a lo largo de la

Alameda. En esas circunstancias, el segundo jefe del cuerpo, comandante don Exequiel Lazo, se presentó al pie de la estatua de San Martín y “pidió a la muchedumbre se calmara y evitara desórdenes contrarios a la cultura del país”. La respuesta fue inmediata: una piedra de grandes proporciones cayó sobre su pecho.<sup>34</sup> La paciencia de la tropa y de la policía se agotó. El oficial a cargo de los operativos de seguridad reorganizó sus fuerzas y ordenó una carga definitiva. Solo a las once de la noche, y tras varias cargas de la caballería y de la infantería, la poblada logró ser dispersada y se restableció el orden.

El balance realizado por las autoridades respecto de la asonada arrojó deplorables resultados: daños de consideración a la propiedad pública y privada, por efecto del apedreamiento del Palacio de La Moneda, de la imprenta del periódico El Ferrocarril y por el saqueo de los locales comerciales, la destrucción del alumbrado público, los destrozos en las estatuas del paseo de la Alameda y en los escaños de dicho lugar y en los ubicados en la Plaza de Armas. Se calculó, además, que los heridos en las diferentes refriegas ascendían a 68, de los cuales 18 eran agentes de la policía y militares y 50 eran civiles que, al parecer, habían participado de los disturbios.<sup>35</sup>

Diez años más tarde un nuevo episodio, de similares características, inquietaba a las élites oligárquicas. Este fue el denominado “Motín de los Tranvías”, verificado el 29 de abril de 1888. El principal factor que explica este movimiento fue el alza del pasaje de segunda clase del transporte urbano, que era el más recurrido por las clases trabajadoras. Esta alza había sido decretada por la Empresa de Tranvías Urbanos a fines de 1887 y motivó la queja sistemática del Partido Demócrata, organización que, en base a su fuerte vínculo con los trabajadores urbanos, logró gestar una movilización ascendente en contra de la medida. El punto más alto de la movilización se alcanzó el 29 de abril de 1888. En esa ocasión, obedeciendo a una convocatoria de los dirigentes demócratas, más de 3.000 trabajadores se concentraron en las inmediaciones de la estatua de San Martín sobre la Alameda de las Delicias. Mientras los oradores del Partido Demócrata se sucedían en el uso de la palabra, en la periferia de la movilización, un grupo cercano a las 300 personas detuvo uno de los tranvías que circulaba por la Alameda, hizo descender a los pasajeros del vehículo y procedió a volcarlo para luego incendiarlo. La acción fue rápidamente replicada por otros grupos de trabajadores y, a los pocos minutos, tres vehículos del transporte público ardían en llamas en la Alameda. Los incidentes se extendieron rápidamente por todo el centro de la ciudad llegando a afectar a cerca de 16 tranvías.<sup>36</sup>

El arribo de la policía y de los granaderos del ejército transformó la asonada en un violento enfrentamiento entre los trabajadores y la fuerza pública. Los primeros arremetieron con piedras, adoquines y palos en contra de los segundos, a la vez que estos respondieron con golpes de sable y cargas de caballería. Mientras esto sucedía, grupos de niños y mujeres terminaban de desvalijar los tranvías, arrancando los asientos, la ornamentación y la madera, artículos con los cuales huían en diferentes direcciones.<sup>37</sup>

Al caer la tarde, una parte de los trabajadores que participaban de la revuelta se dirigió hacia el poniente de la ciudad, buscando incendiar la estación central de los ferrocarriles urbanos, situada sobre la calle Chacabuco. La gravedad de la situación obligó a las autoridades a desplegar en el centro de la ciudad a más unidades militares, las cuales lograron desalojar el perímetro afectado solo en horas de la noche. Por su parte, los dirigentes del Partido Demócrata, sobrepasados por la movilización popular, intentaban vanamente contener a los trabajadores más exaltados, a la par que se excusaban por los desmanes frente a los piquetes represivos.<sup>38</sup> Efectivamente, el Partido Demócrata y sus principales dirigentes lograron acreditar ante la justicia que su reclamo se encontraba fundado en la inequidad y arbitrariedad con las que había operado la Empresa de Tranvías Urbanos al subir la tarifa del transporte público. Los desórdenes, en consecuencia, los excedían y eran responsabilidad de aquella turba descontrolada y bárbara a la cual no se le reconocía un lugar en la organización.<sup>39</sup>

Ambas movilizaciones pusieron de manifiesto la emergencia de una serie de problemas políticos y sociales, que habrían de tensionar, a partir de este momento, a las autoridades públicas y a la élite dominante. Un nuevo actor social, los pobres urbanos en proceso de proletarización, se asentaba en la ciudad y comenzaba a cuestionar violentamente los mecanismos y la simbología del poder. La explicación más recurrente que la élite y sus representantes políticos encontraron para estas revueltas, se relacionaba con la situación de pobreza y las subsecuentes condiciones miserables de vida que afectaban a los trabajadores urbanos. Era la pobreza el caldo de cultivo para la masificación de las conductas levantiscas, por ello se hacía necesario intervenir dicha condición estructural.

## LOS SECTORES POPULARES Y LA CRISIS DEL ORDEN OLIGÁRQUICO

En 1886 accedió al gobierno, apoyado por una alianza de liberales, radicales y nacionales, el dirigente liberal José Manuel Balmaceda. Al momento de ser electo para el cargo contaba con 48 años de edad y, pese a su juventud, poseía una dilatada trayectoria política: había sido embajador en Argentina y ministro de Estado en el gobierno de su predecesor, el también liberal Domingo Santa María. No es extraño, entonces, que una de las preocupaciones fundamentales de la nueva administración fuera invertir los recursos fiscales, derivados de los derechos que gravaban a las exportaciones de salitre, en un ambicioso plan de obras públicas, que contemplaba la extensión del tendido telegráfico, la canalización del río Mapocho, la construcción de nuevas líneas férreas, de un dique en Talcahuano y de nuevos puentes sobre los ríos Malleco, Biobío, Laja y Ñuble, y la habilitación de nuevos caminos y obras de infraestructura para la minería y la agricultura. Lo anterior coincidió con una importante ampliación de las coberturas educacionales (especialmente de aquellas relacionadas con la formación en oficios manuales), como de la infraestructura y el equipamiento industrial. No obstante, el nuevo gobierno no modificó el régimen de tenencia de la tierra, ni alteró las bases sobre las cuales se habían asentado históricamente las relaciones de dominación en el agro. Por el contrario, en el gobierno de Balmaceda se expandió la gran propiedad territorial en Magallanes, a la vez que se profundizaba la política de usurpación de tierras de las comunidades mapuche en el Wallmapu.

Pero a partir de 1889, Balmaceda comenzó a exteriorizar una crítica al control que el empresariado británico tenía sobre los yacimientos salitreros y al manejo, vía cartel (combinaciones salitreras), de los precios del nitrato en el mercado internacional. Esa crítica, a su vez, se hizo extensiva a los socios locales de dichos empresarios, con lo cual un sector relevante de la burguesía comenzó a distanciarse de la nueva administración. En su crítica, Balmaceda reivindicaba que fuera el empresariado nacional el que tomara el control de la explotación y exportación del salitre para, de esa manera, asegurar que tanto los volúmenes de producción como los precios del recurso se establecieran en el país. Para ello resultaba imprescindible que la subasta de los títulos salitreros en manos del Estado recayera en productores nacionales.<sup>40</sup>

Este tipo de antecedentes explica el crecimiento de la resistencia parlamentaria a Balmaceda, como su rápida radicalización. Efectivamente, desde comienzos de 1890 la oposición al Presidente se nutrió de conservadores, radicales, nacionales y una franja del liberalismo, a la vez que el obstruccionismo parlamentario se hizo habitual. En tanto, el discurso que agitaban los tribunos opositores



denunciaba la existencia de una dictadura que ahogaba las libertades públicas.<sup>41</sup> A lo largo del año 1890 la situación política se tornó cada vez más violenta, con enfrentamientos callejeros regulares entre jóvenes pertenecientes a la oligarquía opositora y grupos partidarios del gobierno.<sup>42</sup> Balmaceda, apoyado por una fracción del Partido Liberal, grupos de artesanos y trabajadores urbanos, y especialmente por el Ejército, clausuró en octubre el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y declaró vigente el presupuesto público del año anterior. De esta manera, el conflicto entre el gobierno y el Congreso llegó a un punto de no retorno.

El conflicto armado se inició con la sublevación de la marina en enero de 1891, la cual se trasladó, junto con la mayoría de los dirigentes de la oposición, hasta la Región de Tarapacá. Después de algunas escaramuzas con las fuerzas leales al gobierno en Huara, San Francisco y Pozo Almonte, los sublevados tomaron el control de las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, procediendo a nombrar una Junta de Gobierno, encabezada por el vicealmirante Jorge Montt. El gobierno, por su parte, procedió a confiscar los bienes de la oligarquía, clausurar los periódicos y los clubes sociales en los cuales se reunía la oposición, cerrar los tribunales de justicia y ejercer una estricta vigilancia sobre los sacerdotes que amparaban las conspiraciones y actos de sabotaje en la capital y en la zona central del país.

Uno de los acontecimientos más cruentos del periodo se produjo en la localidad de Lo Cañas, en las inmediaciones de Santiago, el 18 de agosto de 1891. Ese día, un grupo de montoneros comisionados por el Comité Revolucionario de Santiago para sabotear los puentes sobre los ríos Maipo y Angostura y derribar la red del tendido telegráfico, fue sorprendido por unidades del Ejército oficialista, bajo el mando del comandante Alejo San Martín Astorga. La mayoría de los participantes fueron capturados con vida, sometidos a un juicio sumario y posteriormente ejecutados. Sus cadáveres, más de 84, entre jóvenes pertenecientes a varias familias de la élite oligárquica y algunos artesanos de Santiago, fueron despojados de sus ropas y de sus bienes y posteriormente incinerados en una pira.<sup>43</sup>

Mientras se llevaban a cabo las ejecuciones en Lo Cañas, el Ejército sublevado, que tenía el control de la flota de guerra, desembarcó en el puerto de Quintero, derrotando al ejército del gobierno en las batallas de Concón (21 de agosto) y Placilla (28 de agosto). En ambos enfrentamientos se utilizaron profusamente las más modernas tecnologías de exterminio disponibles en ese momento: fusiles

Gras y Comblain y carabinas de repetición Winchester, ametralladoras Gatling, minas de tierra y cañones Krupp, a la vez que la nueva doctrina militar, impuesta por los asesores alemanes del ejército opositor, entre los cuales destacaba su jefe de Estado Mayor, el coronel Emil Köerner, propugnaba un rápido y contundente aniquilamiento del ejército adversario.<sup>44</sup> El resultado de esta particular ecuación fue devastador. Los cálculos de las víctimas de ambos ejércitos en las batallas de Concón y Placilla llegaron a los 8.000 efectivos. Una cifra extraordinariamente alta si consideramos que los principales enfrentamientos armados estuvieron concentrados en dos días (21 y 28 de agosto) y en un territorio relativamente reducido (provincia de Valparaíso). Este alto número de caídos se hace aún más relevante si lo comparamos con el total de soldados muertos durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), los que llegaron a 14.000, de los cuales solo 2.700 eran chilenos.<sup>45</sup> A ello se debe sumar el especial encarnizamiento que se tuvo con algunos de los vencidos. Muchos soldados balmacedistas que se entregaron fueron ejecutados en el acto, mientras que los dos principales oficiales del Ejército vencido, Orozimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca, fueron brutalmente asesinados, sus cuerpos mutilados y expuestos públicamente.<sup>46</sup> Un destacado líder del bando opositor, Ismael Valdés Vergara, no reprimió su satisfacción frente a este deleznable hecho: “Barbosa y Alcérreca no murieron como soldados, sino como mueren los criminales en el patíbulo, cobardemente (...). Ambos murieron balbuceando con humillación el perdón que nuestros soldados les negaron, porque ya no eran soldados, sino jueces que satisfacían la vindicta pública”.<sup>47</sup>

Tras conocerse el resultado de la batalla de Placilla, Balmaceda le entregó el mando de la nación al general Manuel Baquedano y luego procedió a refugiarse en la legación de la República Argentina, donde se suicidó de un tiro, el 19 de septiembre de 1891, el mismo día en que expiraba su mandato presidencial. Pero la espiral de violencia no cesó con la muerte del jefe de Estado. En los días y meses siguientes a la derrota de las fuerzas del gobierno en Concón y Placilla se sucedió una serie de hechos violentos. Por una parte, las represalias adoptadas por los vencedores en contra de los vencidos se materializaron en persecuciones, procesos, encarcelamientos y destierros. En especial en contra de los mandos militares que permanecieron fieles al presidente de la República.<sup>48</sup>

Pero los hechos más graves se produjeron inmediatamente después de que se hiciera público que Balmaceda había dejado el cargo. En la mañana del 29 de agosto cientos de personas se volcaron a las calles, ingresaron a las residencias de las autoridades del gobierno depuesto y procedieron a saquear sus bienes o a

destruir aquello que no pudieron sustraer. Todo, al amparo de los dirigentes del Comité Revolucionario de Santiago y del frágil gobierno interino del general Baquedano.<sup>49</sup> Pero el pillaje y los saqueos desbordaron rápidamente la conducción revolucionaria. La disciplina interna que caracterizó a estas acciones en las primeras horas de la mañana se perdió al caer la tarde. Aprovechando el vacío de poder existente, cientos de trabajadores y de pobres provenientes de la periferia urbana se entregaron también al saqueo y la destrucción, pero esta vez de forma indiscriminada, sin reconocer ni aceptar el mando del gobierno ni menos de la élite oligárquica. De esta manera, las casas de balmacedistas y revolucionarios fueron afectadas por igual, y la plebe insurrecta intentó incluso tomar por asalto las legaciones diplomáticas extranjeras.<sup>50</sup> El orden solo pudo ser restablecido dos días después, cuando la Junta de Gobierno, encabezada por Jorge Montt, y amparado por las armas del “Ejército Constitucional”, ingresó a Santiago y tomó el control de las dependencias del gobierno, reorganizó la policía y redujo a la población insurrecta.

## CONCLUSIONES

A 131 años de la “huelga de los tranvías” de 1888, un nuevo levantamiento popular conmocionó no solo a la ciudad de Santiago de Chile, sino que, en esta ocasión, a todo el país. El factor que precipitó la revuelta fue el alza en el precio del boleto del metro de Santiago, decretada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el 1 de octubre de 2019. El 14 de octubre de ese año, estudiantes de enseñanza media agrupados en torno a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (

ACES

) convocaron a la ciudadanía a evadir el pago del billete de metro saltando los torniquetes de control. La acción emprendida por los estudiantes secundarios, que contó con la amplia aprobación de la población, se intensificó en los días posteriores. El 18 de octubre, a partir de las 20:00 horas, miles de trabajadores, estudiantes, pobres urbanos y profesionales precarizados, salieron a las calles a manifestar su descontento con el modelo económico neoliberal y con un régimen político cada vez más distanciado de la población. Muchos de los manifestantes

transitaron rápidamente del descontento a la ira, para luego transformar la ira en violencia. El objetivo, como en otras ocasiones en la historia, fue el transporte público: en esta ocasión, los carros e instalaciones del metro de Santiago. El gerente general de Metro, Rubén Alvarado, haciendo referencia a los daños ocasionados por los manifestantes la noche anterior, señalaba a los medios de comunicación: “Tuvimos un nivel de daño en nuestras estaciones muy importante. De hecho, de las 136 estaciones de toda la red, hay 77 que presentan daños, de las cuales 20 fueron incendiadas y de esas, 9 estaciones fueron completamente quemadas”.<sup>51</sup>

No cabe duda de que muchas de las manifestaciones populares de estas últimas dos centurias comparten varias características. Suelen desarrollarse en contextos de aguda crisis económica, social e institucional, se expresan como erupciones de rabia descontrolada, son objeto de duras medidas de control social y político y su energía se diluye cuando las élites de poder negocian acuerdos que internalizan parcialmente las demandas y neutralizan (cuando no aniquilan) las expresiones más radicales de la protesta. No obstante, uno de los rasgos más relevantes de la movilización social ha sido su capacidad de autonomizarse respecto de la conducción y objetivos que pretende señalarle la élite. Efectivamente, tanto en el siglo

XIX

como en el siglo

XX

, e incluso en el presente, han existido grupos sociales y políticos que han pretendido ponerse a la cabeza de la protesta popular y señalarle los objetivos políticos a alcanzar y las estrategias e instrumentos de lucha a utilizar. Lo intentó la élite patriota a comienzos del siglo

XIX

, la élite liberal durante las guerras civiles de esa misma centuria, los mandos militares en los diferentes conflictos internos y externos, el obrero ilustrado durante la “cuestión social” y el partido de clase durante buena parte del siglo

XX

. Pese a ello las clases populares siempre han resistido el control y la dirección de las élites, desbordando la conducción que se les pretende imponer y generando, a partir de su actuar, nuevos escenarios sociales y políticos.

El campo popular, heterogéneo y multifacético, ha sido un celoso defensor de su autonomía social y política. Ha desconfiado sistemáticamente de las élites de poder y si bien se ha visto subordinado a su régimen económico y al orden institucional que estas le han impuesto, no es menos efectivo que en cada oportunidad en que se agudizan los conflictos de clase, el vendaval popular se despliega con furia, arrasando incluso con la imagen paradisiaca de sociedad construida por las élites y los medios de comunicación a su servicio.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

### *Fuentes Documentales*

Archivo Nacional, Fondo Judicial Santiago, Causas Criminales, Legajo 1600.

### *Prensa Periódica*

*El Estandarte Católico*, 1878.

*El Ferrocarril*, 1888.

*El Mercurio Online* (

*EMOL*

), 2019.

Disponible en:

<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/19/964899/Metro-danos-empresa.html>

*El Padre Padilla*, 1888.

*Las Novedades*, 1878.

*Los Tiempos*, 1878.

### *Fuentes Impresas*

Arellano, Víctor, Guerra civil de Chile. Concón y Placilla. Reminiscencias de un ex-tercerano, S/E, Buenos Aires, 1892. Disponible en:  
<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8231.html>

Balmaceda, José Manuel, “Discurso del Presidente de la República pronunciado en el banquete con que fue festejado a su llegada a Iquique. Iquique, 7 de marzo de 1889”, en Sagredo, Rafael y Devés, Eduardo (recps.), Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía, Centro Diego Barros Arana–

DIBAM

, Santiago de Chile, 1992.

Bañados, Julio, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891, Tomo 2, Librería de Garnier Hermanos, París, 1894. Disponible en:  
[https://www.bcn.cl/Books/Balmaceda\\_su\\_gobierno\\_y\\_la\\_revolucion\\_de\\_1891/in](https://www.bcn.cl/Books/Balmaceda_su_gobierno_y_la_revolucion_de_1891/in)

Chile, Congreso Nacional, Cámara del Senado, Boletín de Sesiones Ordinarias del Senado, Sesión del 1 de agosto de 1888.

Chile, Sesto censo general de la población de Chile, Oficina Central de Estadísticas, Santiago de Chile, 1885.

Instituto Nacional de Estadísticas (

INE

), Síntesis de resultados Censo 2017,

INE

, Santiago de Chile, 2018.

Lastarria, José y Errázuriz, Federico, Bases de la reforma, Imprenta del Progreso, Santiago de Chile, 1850. Disponible en:  
<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8206.html>

Lastarria, José, La reforma política, única salvación de la república. La

semecracia o el gobierno de sí mismo, Imprenta de la Libertad, Santiago de Chile, 1868. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8205.html>

Olivos, Jorge, La matanza de Lo Cañas, Imprenta Barcelona, Santiago de Chile, 1892. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-143039.html>

Pinto, José Manuel, Memoria del general en jefe de operaciones de la alta frontera pasada al Supremo Gobierno, Imprenta Nacional, Santiago de Chile, 1869. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7805.html>

Rodríguez, Emilio, Últimos días de la administración Balmaceda, Imprenta y Librería del Centro Editorial La Prensa, Santiago de Chile, 1899. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8232.html>

Saavedra, Cornelio (comp.), Documentos relativos a la ocupación de Arauco que contienen los trabajos practicados desde 1851 hasta la fecha, Imprenta de la Libertad, Santiago de Chile, 1870. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9597.html>

Valdés, Ismael, Última jornada contra la dictadura. Relación sumaria de las operaciones, 3 de julio a 28 de agosto de 1891, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1891. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8230.html>

Velasco, Fanor, La revolución de 1891. Memorias, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Santiago de Chile, 1914. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-350267.html>.

Vicuña Mackenna, Benjamín, Historia de la campaña de Tarapacá. Desde la ocupación de Antofagasta hasta la proclamación de la dictadura en el Perú, vol. 2, Rafael Jover Editor, Santiago de Chile, 1880. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-87047.html>

, Historia de la jornada del 20 de abril de 1851, Imprenta del Centro Editorial, Santiago de Chile, 1878. Disponible en:



<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-341608.html>

, La conquista de Arauco. Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados en su sesión de 10 de agosto, Imprenta del Ferrocarril, Santiago de Chile, 1868. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7806.html>

Villarino, Joaquín, “Causas de la revolución de Chile en 1891”, en La América. Revista Científica, Literaria, Económica y Social, 1, Imprenta Central, Montevideo, 1892. Disponible en: [https://www.bcn.cl/Books/La\\_America\\_revista\\_cientifica\\_literaria/index.html#p=](https://www.bcn.cl/Books/La_America_revista_cientifica_literaria/index.html#p=)

### *Bibliografía*

Barros Arana, Diego, Historia de la Guerra del Pacífico (1879-1880), Tomo

I

, Librería central de Servat, Santiago de Chile, 1880. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-87044.html>

, Historia de la Guerra del Pacífico (1879-1880), Tomo II, Librería central de Servat, Santiago de Chile, 1881. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-87045.html>

Bengoa, José, Historia del pueblo mapuche (Siglo

XIX

y

XX

), Ediciones

SUR

, Santiago de Chile, 1996.

Bulnes, Gonzalo, Guerra del Pacífico. De Tarapacá a Lima, vol. 2, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 1914. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8076.html>

Contreras, Carlos y Cueto, Marcos, Historia del Perú contemporáneo, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2007.

De Agostini, Alberto, Treinta años en Tierra del Fuego, Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1956.

Faúndez, Julio, Democratización, desarrollo y legalidad. Chile, 1831-1973, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2011.

Fernández, Joaquín, “Guerra, militarización y caudillismo en el norte chileno: El caso de Copiapó en la guerra civil de 1859”, en Economía y Política, 2: 2, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, 2015.

, “Las guerras civiles en Chile”, en Jaksic, Iván (ed.), Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo I: Prácticas políticas, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2017.

Goicovic, Igor, “La insurrección del arrabal. Espacio urbano y violencia colectiva. Santiago de Chile, 1878”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 6, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 2002.

Grez, Sergio, “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”, en Prohistoria, 4,

CONICET

, Rosario, 2000.

Guevara, Tomás, Historia de la civilización de la Araucanía, Tomo 3, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1898-1902.

Harambour, Alberto y Barrena, José, “Barbarie o justicia en la Patagonia occidental: las violencias coloniales en el ocaso del pueblo kawésqar, finales del siglo

XIX

e inicios del siglo

XX

”, en *Historia Crítica*, 71, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2019.

Klarén, Peter, *Nación y sociedad en la historia del Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004.

Larraín, Paz, *Presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico*, Universidad Gabriela Mistral – Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2006.

Loveman, Brian y Lira, Elizabeth, *Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política*,

LOM

Ediciones, Santiago de Chile, 1999.

Mesa, José, Gisbert, Teresa y Mesa, Carlos, *Historia de Bolivia*, Editorial Gisbert, La Paz, 1999.

Neut, Pablo, “La otra oposición: El mundo popular frente a la causa balmacedista durante la guerra civil de 1891”, en Mayorga, Rodrigo (ed.), *Lejos del ruido de las balas. La guerra civil chilena de 1891*, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2008.

Pinto, Jorge, *La formación del Estado y la nación y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión*,

DIBAM

, Santiago de Chile, 2003.

Pinto, Julio, “El balmacedismo como mito popular: Los trabajadores de Tarapacá y la guerra civil de 1891”, en Ortega, Luis (ed.), La guerra civil de 1891. 100 años hoy, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 1991.

Querejazu, Roberto, Guano, salitre, sangre. Historia de la Guerra del Pacífico (La participación de Bolivia), Librería Editorial

GUM

, La Paz, 2004.

Quiroga, Patricio y Maldonado, Carlos, El prusianismo en las fuerzas armadas chilenas. Un estudio histórico, 1885-1945, Ediciones Documentas, Santiago de Chile, 1988.

Salinas, René, “Espacio urbano y revueltas populares. El motín de Santiago de 1858”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 7, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 2003.

San Francisco, Alejandro, La guerra civil de 1891. Chile. Un país, dos ejércitos, miles de muertos, 2, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2017.

Sater, William, Tragedia andina. La lucha en la Guerra del Pacífico, 1879-1884,

LOM

Ediciones, Santiago de Chile, 2018.

\* Académico Departamento de Historia Universidad de Santiago de Chile.

## **II. PROTESTAS Y HUELGAS SALITRERAS: TRANSFORMACIONES EN LA EXPERIENCIA REIVINDICATIVA DEL PROLETARIADO SALITRERO BAJO LA CUESTIÓN SOCIAL, 1870-1930**

PABLO ARTAZA BARRIOS\*

NICOLE FUENTEALBA ROMERO\*\*

### **INTRODUCCIÓN**

El ascenso y expansión de la protesta popular en la historia de Chile posee una correlación directa con la experiencia popular bajo el ciclo del salitre. Propias de esta etapa son las imágenes cargadas de relatos de lucha, incluso heroicos, que nos han sido traspasadas en gran parte por la llamada historiografía marxista clásica, y posteriormente revisadas por la historia social y política chilena<sup>52</sup>. De esta forma, pareciera ser que mucho de lo que la historia de la protesta popular en Chile quiere hablarnos se cimienta y constituye en las áridas tierras del desierto de Atacama, consolidándose como la cuna del movimiento obrero chileno.<sup>53</sup>

A pesar de su tardía incorporación al territorio nacional, producto de la Guerra del Pacífico (1879-1884), la experiencia del sujeto pampino ya con algo de anterioridad se había conformado en torno a un espacio de frontera, el que agrupaba a hombres y mujeres de diferentes rincones de la región y del planeta.<sup>54</sup> Este territorio, marcado por su condición de tránsito y de altos flujos migratorios, además de su dependencia a los vaivenes comerciales externos, generó una identidad marcada por la inestabilidad, pero al mismo tiempo de una amplia valoración de la libertad. Tal experiencia diseñó un espacio distintivo que no se pudo apreciar con tanta claridad en otras zonas del territorio nacional. En definitiva, el pampino previo a 1879 ya era un sujeto social “propio de una

temporalidad y una región”,<sup>55</sup> en el cual la expansión del extractivismo capitalista tendió a acelerar su transformación. Todos estos elementos configuraron un espacio de convivencia entre lo local y lo global, pues mientras que las delimitaciones geográficas y culturales lo definían hacia el interior, una amplia y directa inserción en la economía mundial lo conectaban hacia afuera, ampliando sus relaciones e influencias. Asimismo, fue el escenario de multiplicidad de especificidades que se expresaban en la experiencia cotidiana de estos sujetos, tanto en el mundo del trabajo como del no-trabajo.

Dentro de este contexto experiencial, el advenimiento de la llamada cuestión social arremetió con violencia en la cotidianidad de los trabajadores, convirtiéndose en el motor de sus más primigenias reacciones frente al orden imperante. La temporalidad usualmente otorgada a este fenómeno (1880-1920)<sup>56</sup> se desenvolvió estrechamente ligada al ciclo salitrero, previsiblemente porque la incorporación de esta industria a la economía nacional actuó como catalizador de un mayor despegue industrial. Lo cierto es que arrastró a un país inexperto hacia un camino acelerado de modernización, acarreando críticas consecuencias, principalmente para los trabajadores. Para Mario Garcés y, coincidentemente con él, para Julio Pinto, la cuestión social tuvo una doble manifestación, esencial para entender la expresión del sujeto pampino: por una parte, “volvió cada vez más opresivas las condiciones de vida popular”, y por otra, “se manifestó como protesta contra el orden social y político existente”.<sup>57</sup>

En ella la protesta obrera tomó fuerza, pero también quedó permeada a la transformación, al movimiento, principalmente porque la cuestión social no era solo una noción teórica, sino la experiencia cotidiana de sujetos de carne y hueso que advirtieron en sus cuerpos —y como costo— las consecuencias de la modernización. A través de esa acción es que surge el movimiento obrero popular en Chile, posiblemente no en una fecha estática, pero sí en la cotidianidad de enfrentar la pobreza y la dominación.<sup>58</sup> Ese impulso movilizador llevó a que durante los casi cincuenta años de la fase expansiva del ciclo salitrero,<sup>59</sup> el sujeto pampino registrara hitos, como la primera huelga general del país, verificada en la ciudad de Iquique en 1890; la seguidilla de movilizaciones de principios del 1900, que terminaría con la cruenta matanza de obreros de 1907, también en la ciudad de Iquique; las enormes huelgas portuarias que revivieron el espíritu movilizador entre 1916 y 1918, y las nuevamente trágicas escenas vividas ante un prolongado contexto de crisis en la oficina Coruña, en 1925. La necesidad de transformar una realidad percibida y procesada como adversa parecería ser lo realmente heroico de su movimiento.

Por ello, a lo largo de este breve escrito, nuestro objetivo será analizar este esfuerzo transformador, por medio del registro de las sucesivas estrategias desplegadas por el movimiento de los obreros del salitre durante el ciclo expansivo del mineral. Para lograrlo, nos concentramos en tres elementos de cambio: en primer lugar, el paso de lo social a lo político en las formas y repertorios de la acción reivindicativa, que fue un punto de inflexión en la construcción del movimiento obrero, al transformar las experiencias asociativas puramente particulares —especialmente de base gremial— hacia una organización provincial y posteriormente nacional, que les proporcionó a los trabajadores una proyección mayor, instalándose a la par de una política institucional que deliberadamente los había excluido del sistema. Pasar de lo social-laboral a lo político fue una forma de apropiarse de ese espacio, y la consecución del poder consiguiente, una estrategia creciente de su transformación.

Como segundo elemento, el paso del ámbito de acción desde una dimensión eminentemente local a una nacional modificó profundamente las bases, estrategias y direccionalidad del movimiento. Con ello, la marginalidad y las sobreexigencias de un trabajo extractivo a pleno sol, articularon en la zona demandas sociales que no serían equivalentes a las de obreros de otras regiones y ciudades. Sin embargo, sucesivamente, con la generación de más amplias plataformas políticas, esta dimensión local, y todo lo que inicialmente se había estructurado a partir del propio escenario salitrero, se iría diluyendo hasta quedar subordinada a las luchas y demandas nacionales, con la consiguiente pérdida del protagonismo de la huelga.

En tercer lugar, durante este periodo, es posible observar que en paralelo a los dos anteriores, ocurrió otra dimensión de transformación, caracterizada por la paulatina pérdida de la posición estratégica detentada por el trabajador pampino. Al respecto, John Womack Jr. es claro en definir el poder elemental que posee el trabajo, el que pasa a constituir “la fuerza específica y exclusivamente obrera, (y) a final de cuentas la única fuerza obrera”, aunque necesariamente expresada a través de la acción colectiva.<sup>60</sup> En este sentido, la huelga constituyó la forma predilecta de potenciar dicha fuerza, en tanto que obligaba a detener la producción de muchos otros. A medida que esta disminuía —por efecto de las crisis cíclicas de la industria salitrera como por la mantención de una forma de trabajo tan rudimentaria que permitía fácilmente su reemplazo— se redujo también la fuerza de presión del trabajo y con ello la pérdida de la posición estratégica que durante las etapas iniciales ostentaba.



Queda ahora, por tanto, revisar concretamente cómo estos elementos se van transformando junto con la experiencia pampina y salitrera y, de ese modo, configurando la protesta obrera en el norte salitrero.

## DE LA HUELGA ESPONTÁNEA A LA CONSTRUCCIÓN INICIAL DEL MOVIMIENTO (1870-1900)

Refiriéndose a la temprana década de 1870, Julio Pinto afirmaba que “la violencia fue una experiencia cotidiana y permanente para los trabajadores del salitre”,<sup>61</sup> manifestándose en el espacio pampino por medio de un arraigado desorden cotidiano, estimulado posiblemente por la experiencia de libertad que les otorgaba la itinerancia. La desobediencia y la embriaguez habitual, que alternaban con la destrucción, el saqueo y las grandes asonadas de violencia espontánea, parecían ser la impronta de las grandes masas peonales y el dolor de cabeza de las autoridades locales. Sin embargo, estas muestras de rebeldía, mayoritariamente colectivas, aún transitaban una etapa primigenia dentro de la historia de la protesta popular. La falta de organización, los difusos objetivos de sus arremetidas, que a menudo afectaron a sus propios compañeros de clase, demostraban que el trabajo aún no era el campo de disputa preferentemente. Ya sea por su condición fronteriza o bien por la debilidad de los agentes del orden, el territorio pampino era un espacio ganado por la violencia.

### IMAGEN 1.

*Calle de un campamento salitrero, 1898*



*Fuente: Vistas fotográficas de las faenas y puertos salitreros, Asociación Salitrera de Propaganda.*

No obstante, la década de 1880 transformó el escenario. El espacio de las salitreras, ahora bajo dominio chileno, se vio dominado por un régimen más estricto y “un poder estatal supuestamente más impositivo”,<sup>62</sup> aunque al alero de una política de incorporación sumamente liberal, tal como lo demuestran las orientaciones sugeridas por la primera comisión consultiva, realizada para evaluar el sistema económico y administrativo que convendría adoptar en los territorios incorporados.<sup>63</sup>

Creada por decreto supremo el 3 de enero de 1880, en su informe dirigido al ministro de Hacienda ratificaba el sentir de lo que la guerra en curso significaría para el Estado chileno, especialmente la idea central de que el salitre sería el “gran negocio industrial” para la república, el que aseguraría su porvenir rentístico y comercial. Para esto el gobierno deseaba que la cuestión del salitre fuera estudiada bajo sus diversas fases y con toda latitud, aunque a la vez negara y condenara toda posibilidad de intervención estatal, otorgando un “amplio régimen de libertad” a los industriales para relacionar el capital y el trabajo.<sup>64</sup> Sobre esta base, el informe reveló que los problemas más urgentes por atender en la industria salitrera no pasaban aún por los trabajadores, pues su accionar por medio de la protesta espontánea e inorgánica no generaba un comportamiento consistente como para alertar a las esferas patronales. Los objetivos estatales estaban preocupados de consolidar el mejor despliegue posible de esta industria.

Con todo, la década de 1880 registró una reconfiguración de la rebeldía popular pampina, puesto que si bien persistió la violencia de los 70, el grado de esta disminuyó y se hizo presente en ocasiones puntuales, normalmente vinculadas a los periodos de recesión. Los alzamientos masivos ya no marcaron la tónica del comportamiento pampino, tampoco los saqueos ni la destrucción. Aparecieron, en cambio, los conflictos individuales entre uno o dos obreros con sus jefes directos, lo que provocó a su vez el despliegue de reacciones solidarias entre los compañeros. La efervescencia obrera, que antes inquietaba principalmente a las autoridades políticas, se trasladó finalmente hacia un nuevo campo en disputa: el trabajo. Los empleadores comenzaron a lidiar con las amenazas de estas nuevas

actitudes rebeldes,<sup>65</sup> que si bien no fueron tan voraces ni dramáticas en cuanto a destrucción, tocaron el delicado terreno de la producción y, por consiguiente, entorpecieron sus aspiraciones patronales sobre el aprovechamiento de este mineral ampliamente demandado como abono por la economía mundial. Para colmo de estos, la década de los 80 también fue protagonista del florecimiento de un discurso clasista entre los trabajadores, elemento fundamental para alimentar un antagonismo social pujante. Este proceso, junto a la evolución de la protesta, también se nutrió de la participación artesana y obrera en el asociacionismo mutualista que se extendía por la provincia. Así, en 1885, se constituyó la Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos La Protectora, el primer órgano en Tarapacá que efectivamente albergó a algunos artesanos entre sus socios y abogó por un discurso abiertamente “obrerista”. A pesar de su fracaso, su sola presencia marcaría un precedente esencial para las transformaciones venideras, especialmente hacia fines de la década. De esta forma, en perspectiva nacional, la asociación obrera en los 80 parece haber sido un fenómeno tardío en el espacio salitrero y dificultado particularmente por las condiciones de habitabilidad, su poblamiento reciente y constante renovación.<sup>66</sup>

A pesar de ello, la maduración de la protesta popular no tardaría en llegar, especialmente con el despuntar de la nueva década, pues en el mes de julio de 1890 se transforma radicalmente el escenario tarapaqueño, con el advenimiento de la primera huelga general registrada en la zona salitrera y en el país.<sup>67</sup> Aquellos que parecían caminar lentamente en la senda de la conformación de un movimiento obrero, sorprendieron a una élite ensimismada que, hasta hace pocos años, veía sus arrebatos rebeldes como asuntos sin mayor peligro. La seguidilla de acontecimientos suscitados en la región, entre la huelga de 1890 y la guerra civil de 1891, anunciaron la presencia del bajo pueblo a través de oleadas de violencia que se alimentaron con el conflicto entre balmacedistas y congresistas.<sup>68</sup>

Durante la huelga general, los gremios de jornaleros y lancheros —hasta ahora vanguardia en la organización obrera— adquirieron la experiencia suficiente para que una vez iniciada la paralización movilizaran a la provincia entera. Gracias a esta exitosa convocatoria a los trabajadores de las pampas salitreras, se aceleró la toma de conciencia sobre la posición estratégica que detentaban, extendiendo hacia los demás trabajadores de la zona un elemento que ya estaba presente entre los trabajadores portuarios, quienes sabían de su importancia en el contexto de una economía exportadora, la cual usaban a favor de sus propios intereses, con resultados que cada año inquietaban más a las autoridades. A partir

de este importante paso, la evolución de la protesta en el mundo pampino adquirió un mayor grado de organización, pero más importante aún, se volcó directamente al terreno del trabajo, fuente de toda su fuerza como protesta obrera. Desde este punto, la paralización de las faenas extractivas del nitrato ponía a la región en una posición extremadamente sensible, pues, por un lado, armaba un verdadero caos para los ingresos de los empresarios y del Estado, y por otro, alzaba a una posición de importancia a los trabajadores, desde la cual defender sus eventuales exigencias.

La experiencia desatada luego de julio de 1890 simbolizó un hito en la historia de la protesta popular en Chile, al representar la consolidación en la zona salitrera de la asociación popular. Al respecto, existe entre los autores un consenso claro sobre el floreciente despegue asociativo que se produce a partir de estos años, aunque no así cuando se evalúa la centralidad de lo laboral y lo crecientemente organizativo del comportamiento colectivo de los trabajadores salitreros. Sergio Grez, por ejemplo, tiende a mirar más críticamente las repercusiones de 1890, especialmente por la persistencia de elementos viejos en las formas de protesta obrera. Para él, la existencia de asonadas y motines, como el levantamiento de Tocopilla en 1892, el de Lagunas en 1894 y otra larga lista de irrupciones espontáneas, no terminan por consolidar la transformación en las formas de lucha, principalmente porque prescinden de apuntar hacia un cambio sustancial en las condiciones de trabajo<sup>69</sup>. Por el contrario, Julio Pinto insiste en que estamos ante una etapa de consolidación y maduración de la sociedad salitrera, donde las problemáticas asociadas a las condiciones del trabajo hegemonizan las demandas regionales y pasan a ser las principales fuentes de los estallidos sociales mencionados. Para este autor, si bien es cierto que persisten elementos anteriores, la experiencia societaria demuestra que también existe una mayor planificación, organización y, principalmente, un discurso de clase, desplazando, con esta nueva forma de protesta, la tradicional rebeldía popular espontánea. Sumado a ello, el marcado discurso “obrerista” que aparecerá en la prensa regional y la realización de un mayor número de huelgas por sobre motines, como la consiguiente composición clasista de estas, indican que, en esta primera fase ascendente (1890-1894) de movilización social, Tarapacá parece adelantarse una década al esquema general propuesto por Grez.<sup>70</sup>

De este modo, la mayor valoración de la condición obrera surgida entre los trabajadores de la zona, sumado al creciente espíritu de asociación, fueron la vía recurrente de los trabajadores de las provincias salitreras para constituirse y potenciarse como fuerza obrera efectiva. Las experiencias de la Sociedad de

Artesanos y Socorros Mutuos de Iquique desde 1891, la Gran Unión Marítima a partir de 1892, y principalmente desde 1895 con la Liga de Sociedades Obreras de Iquique, permitirán finalizar el siglo sobre una base de propósitos asociativos claramente identificables y que se expresarán en una organización obrera, tarapaqueña, federativa y regional.<sup>71</sup>

La maduración experimentada por la sociedad pampina desde 1870 hasta los inicios del nuevo siglo se desarrolló dentro de un campo de particularidades propias del espacio salitrero. Las pautas recurrentes sobre las que se expandió la asociación obrera continuaron siendo netamente locales, marcadas por las agudas condiciones de subsistencia que la vida de los puertos y del desierto y el afán rentístico de los empresarios generaron —itinerancia, pobreza y marginación—. Sobre la base de esta misma expansión asociativa comenzaron a difundirse las influencias políticas con que, primero demócratas y luego anarquistas, contribuyeron a proporcionar herramientas para leer y procesar su adversa realidad, gracias a lo cual, con mucho en contra, la sociedad popular pampina “asistió a la constitución definitiva, en los niveles discursivos, organizacionales y políticos, de una clase obrera”.<sup>72</sup>

## LA MANCOMUNAL Y LA CONSTITUCIÓN DEL PODER OBRERO (1901-1909)

El inicio de un nuevo siglo trajo consigo el comienzo de una nueva etapa en la consolidación del movimiento obrero salitrero. El fuerte proceso de proletarianización alcanzado en las décadas anteriores, junto a la transformación de sus dinámicas organizativas, alcanzó durante la primera década del siglo

XX

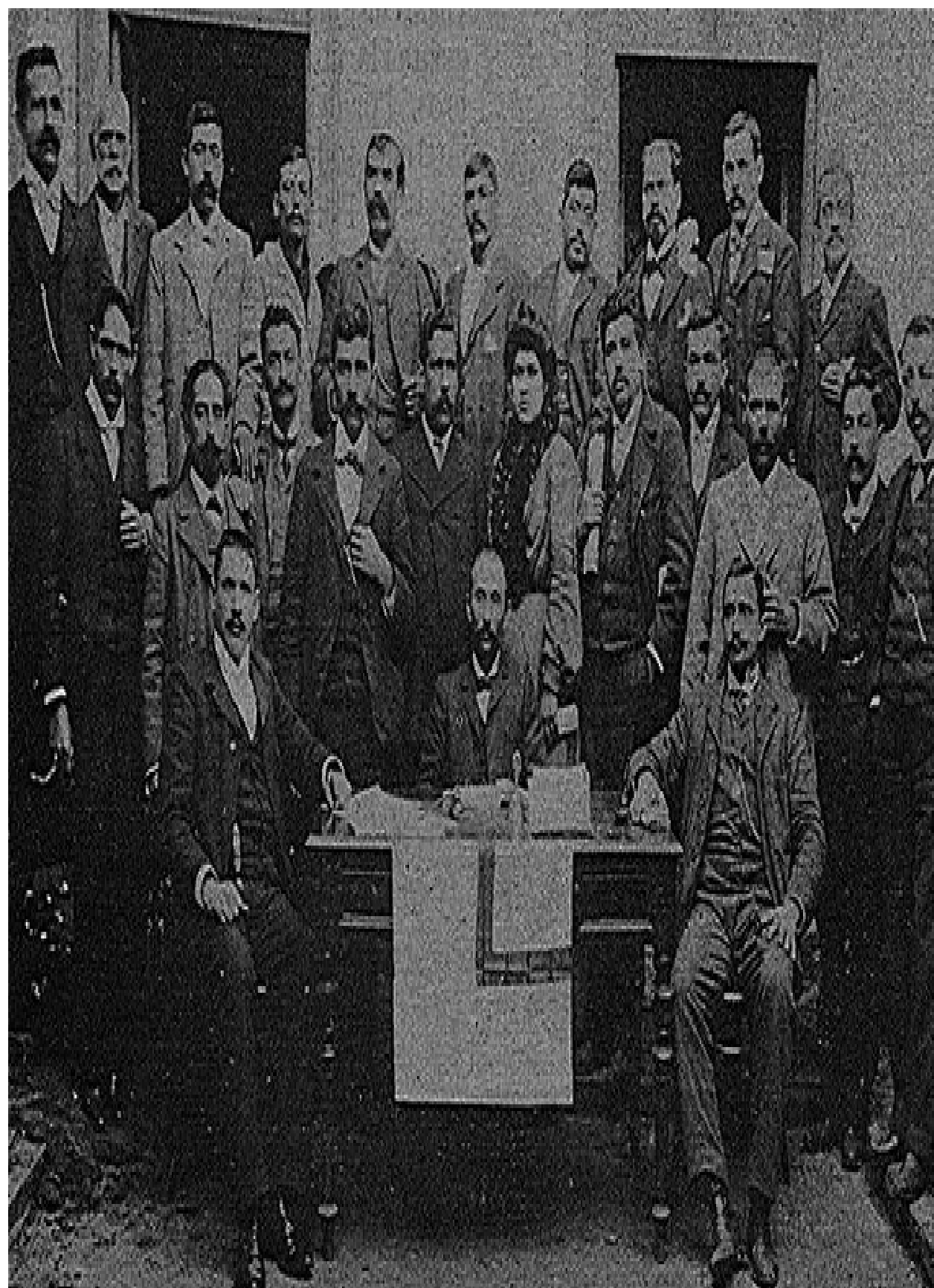
un robustecimiento e integración más definitiva de elementos obreros. La marcada identificación de clase, expresada en la fundación de la Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros de Iquique el año 1901, constituirá definitivamente una radicalización en la acción clasista de la organización popular tarapaqueña, pues esta organización, a pesar de ser formada bajo la apariencia de una mutual, convocó como potencial mancomunado a quien reuniera como condición prioritaria y excluyente el ser miembro de la clase

obrero.<sup>73</sup>

Junto a ello, la principal originalidad de esta asociación obrera radicó en la relación que estableció entre lo social y lo político. Por una parte, su base social estaba en la “refundación de todas las sociedades obreras en una sola, subsistiendo aquellas y organizándolas para tratar de mejorar la situación pecuniaria de la clase obrera”,<sup>74</sup> es decir, apelaba directamente a una base social donde la centralidad asociativa estuviera en torno a la defensa del trabajo; y por otra, la estructura para llevar a cabo dichas aspiraciones dejaba claro que la vía del particularismo mutualista debía ser superada para crear nuevos mecanismos que enfrentaran más directamente las desigualdades provocadas por la confrontación entre el trabajo y el capital. Producto de ello, el número de huelgas registradas entre 1900 y 1907, solo en la Región de Tarapacá, prácticamente duplicó a las de la última década, graficando la pujante tensión social que se vivía en la zona.<sup>75</sup> A poco andar, la efectividad de la Mancomunal se podía observar en el número de gremios que adherían a las paralizaciones, evidenciando la ampliación en la capacidad de convocatoria que estaba adquiriendo, además de asumir una notable irradiación hacia otras ciudades del país. Solo tres años más tarde de su fundación, durante la Primera Convención Nacional de Mancomunales realizada en Santiago el año 1904, ya existían 15 agrupaciones. Tal era el temor que despertaba la nueva organización que los industriales salitreros y las autoridades de la región no tardaron en comunicar, ese mismo año, al presidente de la República su preocupación ante la amenaza que representaba para sus intereses, especialmente por la labor agitadora que estaba protagonizando en la protesta popular. Apodada patronalmente como “Oficina de Huelgas”,<sup>76</sup> la Mancomunal vino a transformar radicalmente el escenario de la organización social y a profundizar, como veremos, los primeros pasos de la política popular en Chile.

## IMAGEN 2.

*Representantes obreros de la Mancomunal en su Convención Nacional*





*Fuente: La Vida Ilustrada. Revista de Variedades, Santiago, 4 de junio de 1904, 119.*

Parte de esto quedó registrado en una nueva comisión parlamentaria, la que en 1904, a pesar de estimar que no existía una cuestión social en las provincias salitreras, ya que las precarias condiciones de subsistencia de los trabajadores se relacionaban más con un problema moral que con el régimen de trabajo,<sup>77</sup> reconoció la existencia de causas más relevantes que acrecentaron las grietas sociales de “un malestar más o menos serio y un principio de perturbación que, con razón o sin ella, tiende a desarrollarse”,<sup>78</sup> a saber, las diferencias de nacionalidades aún persistentes en la sociedad pampina, especialmente entre empleadores y obreros, y la presencia de “agitadores” en la zona, indicados como los principales responsables del constante clima de inestabilidad. Esto evidenció que la seguidilla de huelgas y el crecimiento de la Mancomunal de Obreros como fermento de dichas paralizaciones había logrado llamar la atención a nivel nacional e incomodar a las autoridades.

Como se indicaba, la línea de acción propuesta por la Mancomunal hacia formas de representación más directamente orientadas en la defensa del trabajo, preanunciaba la dimensión política que esta asociación obrera tomaría. El primero de los atisbos sería la fundación del Partido Obrero Mancomunal (

POM

) en 1903, el que buscó incidir de manera decisiva en las elecciones municipales y parlamentarias de ese año. A pesar del fracaso electoral sufrido, la acción partidista no se alejó de la Combinación Mancomunada, y volvieron a intentarlo en 1906. Por otra parte, la reestructuración de los principios mancomunados, en 1905, buscó consolidar lo político a través de la disminución decisiva del carácter mutuo, y encaminarse abiertamente hacia el sindicalismo, opción que no trajo el apoyo masivo esperado. Para los miembros de la combinación, sobre la base de la representación y la defensa del trabajo se conseguiría la transformación profunda del orden social, que se construiría de manera gradual y en la medida que “la colectividad popular adquiriera una amplia representación parlamentaria”.<sup>79</sup> Esto no significaba abandonar la labor movilizadora de los

obreros en los puertos y pampas de las provincias salitreras, sino que, por el contrario, ambas formas de participación irían de la mano, pues se entendía que de esa manera el pueblo, por medio de representantes provenientes de él, accedería al poder. Ello quedó graficado en una publicación, de 1907, donde se comunicaban los objetivos que perseguían como organización: por una parte, el mejoramiento económico y social, y por otra, la “organización obrera política, para tener representantes propios que lleven a los diversos cuerpos políticos de la nación los dictados de los problemas obreros resueltos en la Cámara del Trabajo”.<sup>80</sup> La tendencia de los siguientes años seguirá el mismo curso, al punto que la organización política pasará a ser el principal vector de las acciones de los mancomunados, sobre todo con la refundación de la tienda partidaria bajo el nombre de Partido Obrero Regional (

POR

), instancia en la cual la asociación popular buscaba acrisolar la representación de la fuerza de trabajo.

Mientras esto acontecía en Tarapacá, un caso contrario sucedió en Antofagasta. Ahí, la Combinación Mancomunal de Obreros de dicho puerto, fundada en 1903 bajo los mismos principios que su par iquiqueña, ya hacia 1905 se vio claramente influenciada por el anarquismo, que incidió en un cambio de estatutos registrado en 1906, donde se comunicó que la Mancomunal no debía “mezclarse absolutamente política [sic], por considerarla dañina para la unión y la armonía del elemento obrero”.<sup>81</sup> A pocos meses de su fundación los ánimos reivindicativos y la agitación demostraban su predominio, especialmente en el liderazgo de las movilizaciones. Durante los meses de junio y julio de 1903, la Mancomunal se enfrascó en una lucha contra el contratista portuario de apellido Stevenson por los valores en los trabajos de embarque y desembarque, ofreciendo su participación directa en dichas funciones a menores costos totales. Finalmente, el conflicto laboral terminó con el despido de un gran número de trabajadores que participaron del movimiento, pero la Mancomunal había demostrado su alcance en organización e influencia.<sup>82</sup>

Al año siguiente, el creciente número de huelgas, mítines e incluso desórdenes, similares a los registrados en 1880, tensionaron el escenario antofagastino, especialmente durante el mes de septiembre, a través de un enfrentamiento entre obreros que concluyó con la muerte de dos de ellos y algunos heridos en la oficina Chile de Taltal.<sup>83</sup> A los pocos días, en la oficina Grutas de Tocopilla, el

subdelegado y el jefe del destacamento del batallón Esmeralda manifestaron que “los huelguistas están de acuerdo con los trabajadores de las distintas oficinas que existen en el Toco para hacer una huelga general en toda esa región salitrera”.<sup>84</sup> Esto gatilló un temor que aumentó luego de que las oficinas Rica Aventura e Iberia se unieran a los demás huelguistas. La llegada de tropas al puerto no tardó en registrarse, pues se esperaba que bajaran “de las salitreras al puerto 2.000 individuos”.<sup>85</sup> Sin embargo, según informó el periódico El Industrial, el gobernador interino de Tocopilla se adelantó a los hechos y “ordenó a la tropa de infantería hacer fuego contra los huelguistas”, lo que terminó “hiriendo y matando a varios”.<sup>86</sup> Los ánimos quedaron tan encendidos que unos días después el vapor “Rancagua”, que “conducía 700 individuos para el sur de los que abandonaron sus trabajos en las pampas del Toco”, debió recalar en Antofagasta puesto que los obreros “formaron un gran desorden en el vapor y se sublevaron contra su oficialidad”, aunque finalmente el incidente encontró solución y estos continuaron su viaje.<sup>87</sup>

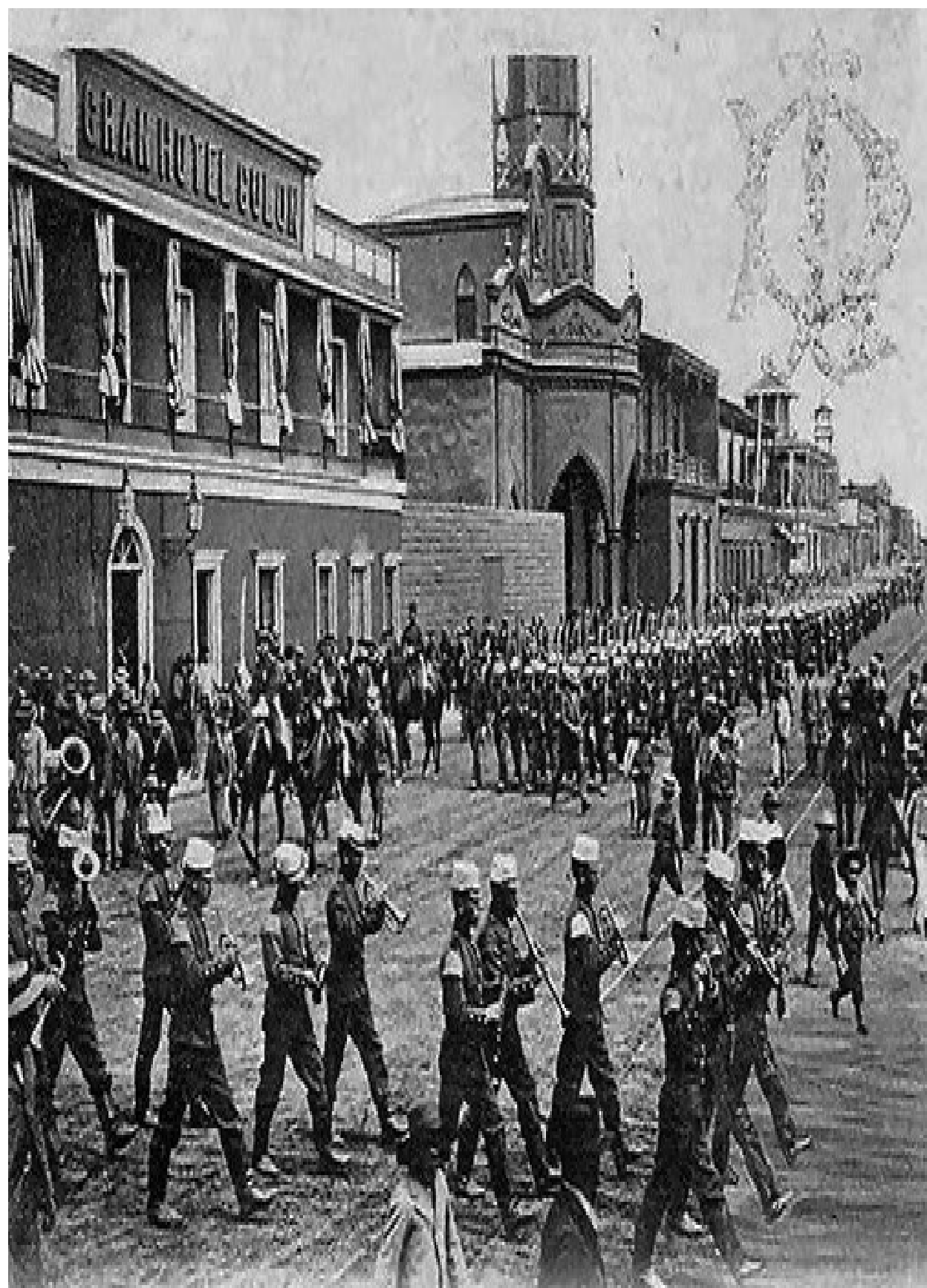
En 1905, luego de una extensa movilización de los operarios del ferrocarril,<sup>88</sup> una breve huelga fue alertada por las autoridades en la oficina Lastenia, iniciada por la petición de los obreros para que “fuera separado de su puesto el administrador”<sup>89</sup>. En junio, algunos operarios de la sección de maestranza de la oficina Pepita se declararon en huelga: reclamaban un aumento del jornal, debido a que la administración quitó “bruscamente los sobretiempos que ganaban los operarios por trabajar en la noche”, estimando que el solo sueldo de día “apenas les alcanzaba para vivir una vida miserable”.<sup>90</sup> Ya en el mes de julio la oficina Ausonia registró una escena de gran violencia, con el intento de asesinato del administrador por parte de un obrero, el que, según los datos obtenidos por el corresponsal, “habría atacado al administrador tan solo porque le increpó su desobediencia”.<sup>91</sup>

Con todo aquello, los ánimos en la provincia ya estaban lo suficientemente encendidos para que se registrara la huelga general de 1906, la que condujo a su conocido y trágico desenlace.<sup>92</sup> La matanza de la Plaza Colón cerró brutalmente la huelga iniciada con la modesta petición de los operarios del ferrocarril por treinta minutos de colación adicionales (la Mancomunal antofagastina lideró las negociaciones de la movilización). La hostilidad de la administración, junto al miedo ante los miles de obreros congregados en el centro de la ciudad, aunaron todo hacia la represión y matanza de 48 obreros registrados, aunque el número se estima que pudo sobrepasar el centenar. Según Javier Mercado, la marcada tendencia anarquista desplegada por la Mancomunal durante todos esos años

estuvo directamente vinculada tanto a la forma de enfrentar la movilización, de manera cada vez más confrontacional con los poderes dominantes, como, más ampliamente, en torno a una construcción de la sociedad popular antofagastina que sobrepasaba a los componentes obreros para incluir a los sectores no trabajadores y marginales de la sociedad. Precisamente, fue esta porción la que —durante los días siguientes— tomó en sus manos la venganza de los asesinados, por medio de violentos enfrentamientos, quemas y asaltos por el centro de la ciudad.<sup>93</sup> Luego de estos trágicos acontecimientos, el desprestigio que rodeaba a la Mancomunal se fue agravando con los conflictos internos. Los liderazgos, que no suscitaban los más armoniosos ánimos, “imprimieron rumbo torcido” y fueron perdiendo asociados con mucha rapidez.<sup>94</sup>

### IMAGEN 3.

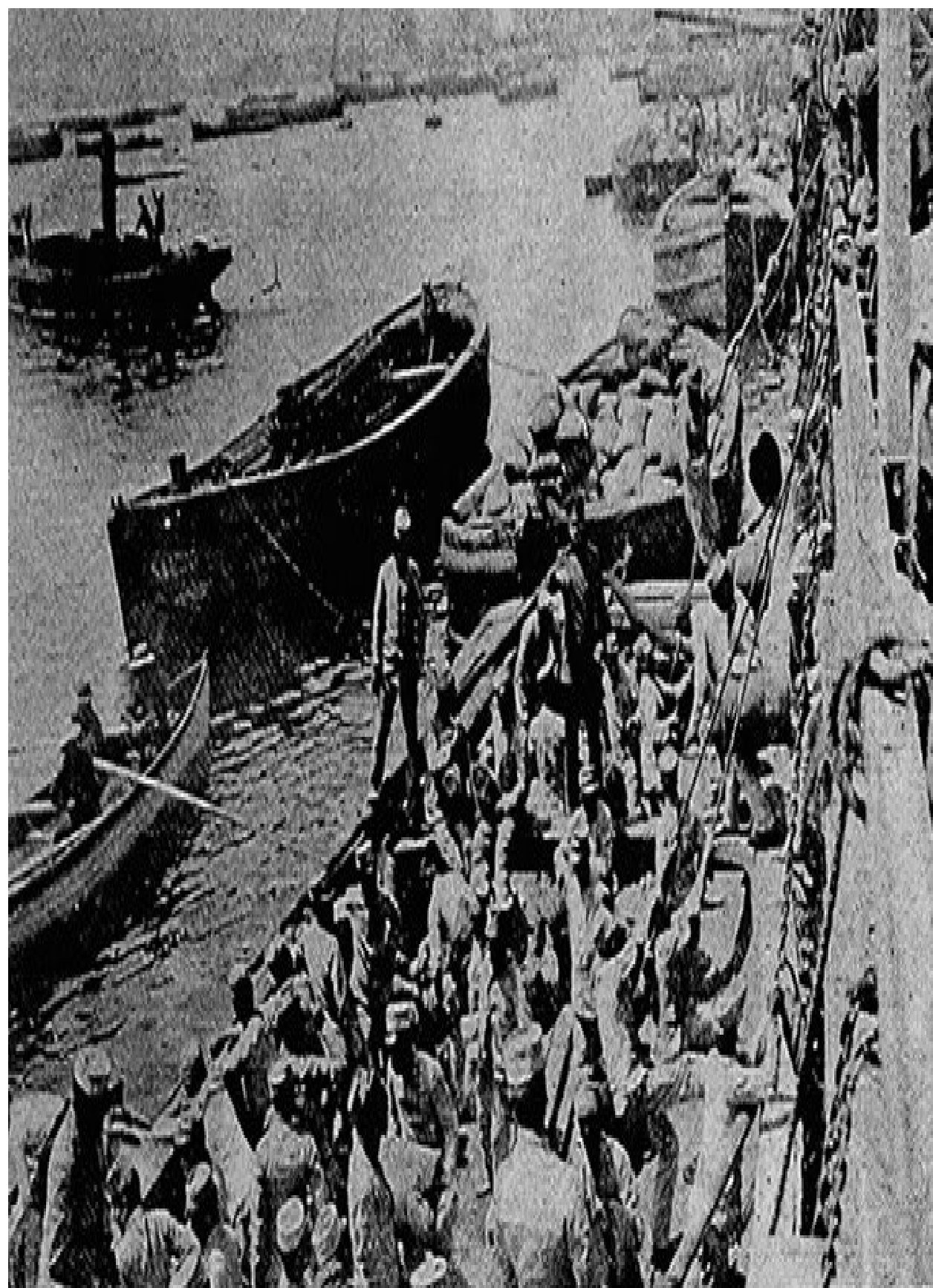
*Batallón Esmeralda ingresando a la Plaza Colón de Antofagasta, febrero de 1906*



*Fuente: Colección Museo de Antofagasta.*

IMAGEN 4.

*Embarque de tropas en Valparaíso para reforzar guarnición de Antofagasta,  
febrero de 1906*



*Fuente: Revista Sucesos, 184, Valparaíso, 2 de marzo de 1906.*

En la pampa, las movilizaciones continuaron en noviembre de ese mismo año cuando los obreros de la oficina Lastenia paralizaron sus labores, luego de que la administración decidiera bajar los salarios y rechazara una nota de los obreros en que indicaban que “los subidos jornales de que gozaban, en realidad no guardan proporción con la carestía de la vida, puesto que los mismos jornales quedan en la pulpería, sobrando una miseria para economizar, que no compensa debidamente la rudeza del trabajo”.<sup>95</sup> Finalmente, una serie de desórdenes se suscitaron en abril de 1907 en la oficina Ausonia, que terminó con algunos heridos enviados a Antofagasta.<sup>96</sup>

Tan solo un año después, Iquique sería el escenario de uno de los episodios más duros y emblemáticos en la historia del movimiento obrero en Chile. La huelga de los obreros de la oficina de San Lorenzo, iniciada el 10 de diciembre de 1907, culminaría 11 días después con una cruenta matanza en la escuela Santa María.<sup>97</sup> Las fracturadas condiciones socioeconómicas habían llegado a niveles críticos durante ese año, convirtiéndolo en un hito clave para el devenir de la protesta popular. El imparable ascenso en el número de huelgas desde los primeros años del nuevo siglo estaba directamente relacionado con la desvalorización de la moneda, el escaso aumento de los salarios y, por tanto, la mermada capacidad adquisitiva, que atacaban con violencia la economía de los trabajadores, especialmente la de los obreros pampinos. Tan solo en un año se duplicó el número de huelgas en la Región de Tarapacá, las que cada vez eran más masivas y demostraban una mayor organización. La Mancomunal, apuntada por las autoridades como la principal responsable de este ascenso por su labor agitadora, durante todo el año de 1907 había endurecido sus expresiones hacia el sector patronal, particularmente por medio de su periódico oficial *El Trabajo*. En marzo anunciaba, por ejemplo:

O se mejora la condición económica del país, mediante expedientes enérgicos pero eficaces, o se abandona al pueblo a la facultad de obrar por su cuenta en la solución de este grave conflicto en que estamos envueltos todos y cada uno de



los habitantes del país (...) ya no es posible hacer frente a tanta miseria, la gente asalariada se halla sobre un volcán; de un día a otro vamos a tener que lamentar una desagradable explosión del sentimiento popular contenido hasta hoy.<sup>98</sup>

Lo cierto, es que la llegada de los pampinos a la ciudad el día 15 de diciembre, luego de cinco días de huelga y nulos resultados, coincidió con otro movimiento huelguístico iniciado en el puerto, el día 4 de ese mes, por los operarios ferroviarios, el que fue reactivado por la llegada de los pampinos, quienes a partir de ese día asumieron la conducción de la movilización y la hicieron extensiva al resto de los trabajadores de la ciudad. Miles de obreros junto a sus familias, de pronto, desbordaron pacíficamente las calles de Iquique durante días, mientras el conflicto pretendía llegar a alguna solución.

#### IMAGEN 5.

*Huelga de Iquique, 1907*



*Fuente: Colección Memoria Chilena.*

IMAGEN 6.

*Pampinos trasladándose de la Estación a la Escuela Santa María de Iquique,  
diciembre de 1907*

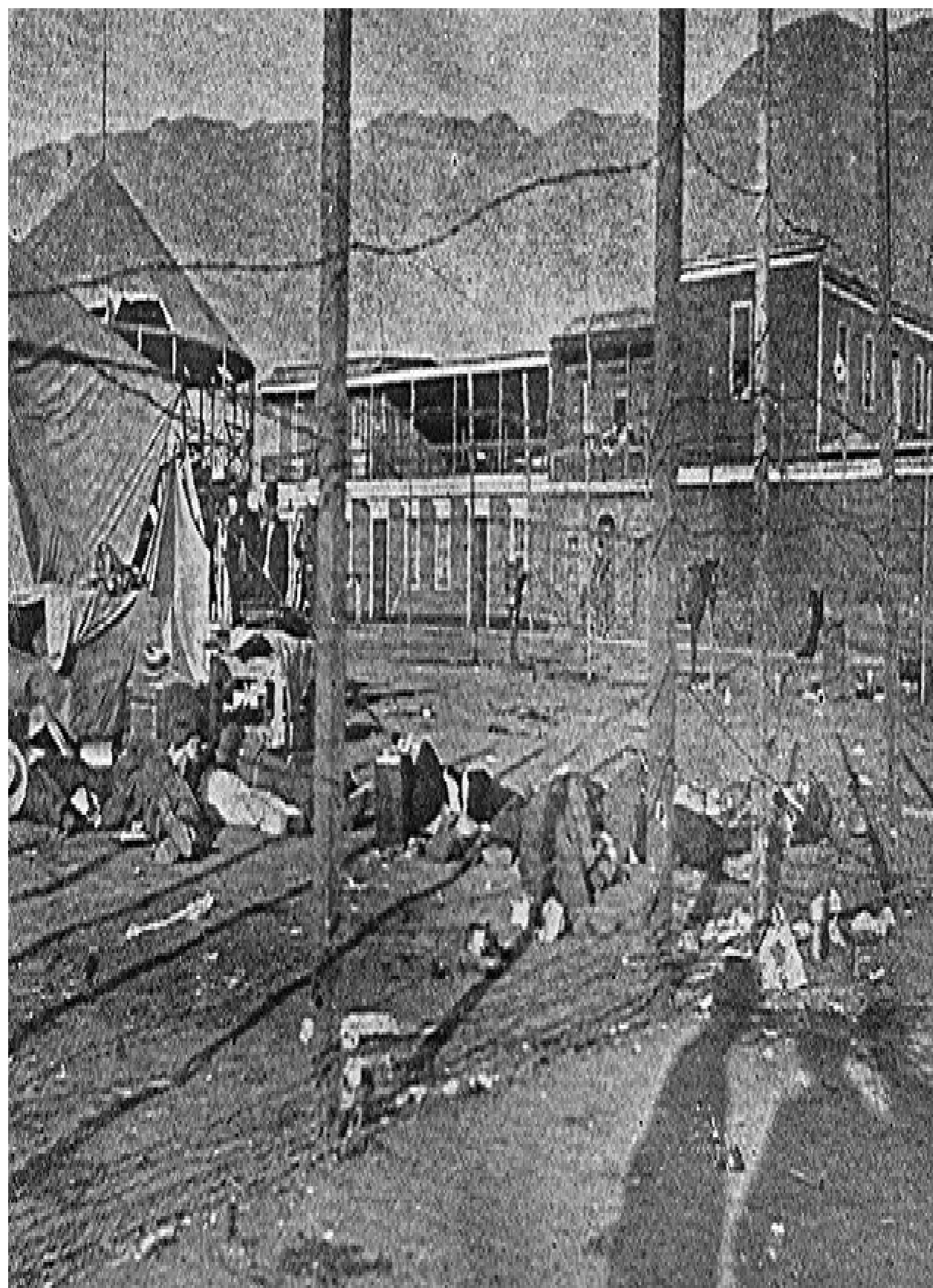


*Fuente: Revista Caras y Caretas, 24 de diciembre de 1911.*

Interesante es comentar el rol que cumple la Mancomunal durante este conflicto, ya que, si bien propicia el clima de tensión y agitación previo a la huelga, una vez declarada no busca la dirección de ella. Asume más bien una labor mediadora entre las autoridades y el comité huelguístico. Esta distancia hacia el movimiento solo es entendible en la medida que se comprende la profundidad del viraje que la institución había adoptado hacia la acción política partidaria y electoral, como la estrategia fundamental para la consecución de objetivos. Ante esto, para la lógica mancomunada, la huelga si bien era un medio para tales proyectos, no constituía un fin en sí mismo, y las nuevas proyecciones apuntaban a la consecución del poder. No obstante, la lectura obrera y popular de los sucesos en Iquique no fue tan tolerante. Esto quedó reflejado en la pérdida de la base social de la organización, principalmente motivada por el desprestigio institucional de sus miembros directivos, registrando algo similar a lo ocurrido con su par antofagastina. Para los sobrevivientes, la distancia significó una indiferencia por la situación, lo que sumado a la brutal represión ejercida el día 21 —y luego la persecución de los cabecillas de las huelgas y los agitadores— fue cada vez más difícil poder reunificar el movimiento. Así, la masacre de la escuela Santa María obligó al repliegue del movimiento obrero y de la ascendente corriente de movilizaciones que se venía dando sin interrupciones desde el cambio de siglo.

#### IMAGEN 7.

*Algunos cadáveres en la Plaza Montt, la tarde del 21 de diciembre de 1907*



*Fuente: Revista Caras y Caretas, 24 de diciembre de 1911.*

Sin embargo, a pesar del repliegue movilizador, la reflexión popular elaborada a partir de la muerte sufrida por el movimiento obrero tarapaqueño emergió como propensión de vida, en tanto que la experiencia de la inmolación y el martirio padecidos fueron resignificados como fuente de rebeldía popular y articulación de clase. Igualmente, fruto de un costo social altísimo, se comprendió con claridad que el Estado actuaba como cómplice del empresariado, y que, por tanto, en su condición de explotados no les quedaba más remedio que hacerles frente a los explotadores por sí mismos.

#### DE LA PROTESTA OBRERA A LA LUCHA POLÍTICA, REDEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS (1912-1919)

El efecto desmovilizador luego de la matanza iquiqueña podría haberse leído como un triunfo patronal si es que el movimiento obrero no hubiese conseguido desplegar nuevas formas de acción colectiva. Los últimos esfuerzos que las mancomunales hicieron antes de su decadencia ya estaban encaminados hacia aquella reconversión, lo que se fue vislumbrando en el levantamiento de “una organización partidaria fuerte”, esencialmente obrera y con marcado horizonte socialista.<sup>99</sup> Pero la pérdida de su base social no les permitió avanzar más allá, sin embargo, a pesar de los ánimos mermados principalmente por el miedo, la vía política parecía posicionarse, aunque sobre un terreno que aún estaba en disputa y tensionado por diversos actores. Una nueva crisis, generada a partir del impacto comercial de la Primera Guerra Mundial, transformó el espacio sobre el que debía volcarse el movimiento social. Este apostó por una estrategia que terminó por redireccionarlo, ya que a la par que se gestaba una profundización del proceso de politización popular en la zona, se reforzó el papel de tránsito, desde lo social a lo político y de lo local-regional a lo nacional.

La fundación, en la oficina salitrera Cholita el año 1912, del Partido Obrero Socialista (

POS

) consolidó la organización política popular en la región sobre la base de un proyecto cultural que ampliaba la visión tradicional de la acción política, integrando la lucha económica por medio de la acción gremial y la actividad cooperativa. Esta organización partidaria se instaló atendiendo a la tradición asociativa y política popular mutualista y mancomunal existente en Tarapacá. Su ampliación provincial la buscó reinstalando una orgánica de base conocida, como la Cámara del Trabajo, organización anteriormente presente en la estructura del movimiento mancomunal de la zona durante la década anterior y que agrupó a todas las sociedades gremiales, cooperativas y sociedades de propaganda que tenían por objeto la emancipación proletaria.<sup>100</sup> A pesar de ello, la corta vida de esta estructura orientada a congregar a los trabajadores de la provincia, mermada por el quiebre y la exclusión efectuada por algunas asociaciones gremiales hacia el

POS

, evidenció las tensiones aún persistentes entre quienes entendían lo político diferenciado de lo social e insistían en una representación exclusivamente gremial.

A pesar de este revés inicial, la expansión del

POS

iría lentamente en gran ascenso, especialmente encaminada hacia la reactivación en la organización política popular. Sergio Grez indica que, al menos, hasta 1915 esta seguía siendo “una organización esencialmente nortina”, en parte porque su existencia en otras ciudades relevantes, como Santiago o Valparaíso, aún era bastante frágil.<sup>101</sup> En 1915, por ejemplo, Pedro J. Sandoval, uno de los principales líderes del

POS

en Iquique, mencionaba el número de conferencias y mítines organizados por ellos, tanto en la pampa como en la ciudad, destacando su enorme crecimiento durante los últimos tres años.<sup>102</sup> Asimismo, en la Federación Regional del Salitre, si bien militantes del



POS

compartían presencia con obreros anarquistas, su inclinación hacia la organización antes que a la huelga general, mostraba una tendencia proclive a lo postulado por socialistas, convirtiéndose, además, en una especie de ensayo local previo a la Federación Obrera de Chile (

FOCH

). Esta última, que desde su fundación en Santiago (1909) actuó como una sociedad de socorros mutuos de los obreros de vías y maestranzas de los ferrocarriles del Estado, cambió posteriormente su orientación con la presencia de los afiliados del

POS

, especialmente en su reconversión a una federación nacional sindical de los obreros chilenos durante la convención de 1917.<sup>103</sup> De esa forma, el

POS

lentamente fue ganando terrenos importantes en la politización obrera, y con ello la lucha política fue hegemonizando la acción reivindicativa durante la década.

Un ejemplo de esta reconstrucción quedó registrado en las ya mencionadas comisiones parlamentarias. Seis años después de la cruenta matanza en Iquique y a nueve de la última comisión, un nuevo grupo viajó a la zona, en 1913, para estudiar las graves denuncias de desórdenes que venían reiterándose “respecto de los servicios departamentales y comunales de la provincia de Tarapacá”. A pesar de que el problema obrero asume la centralidad de su atención, persistió la ignorancia o deliberada negación respecto a la cuestión social, atribuyendo el problema, nuevamente, a causas morales,<sup>104</sup> e incluso a la propia “indolencia, la valentía jactanciosa y el hábito del peligro que caracteriza a los operarios pampinos” en las faenas.<sup>105</sup> En cualquiera de los casos, y a pesar de jornales efectivamente bajos, siguieron considerando buena su situación, o que “por lo menos, no es peor que la del trabajador del resto del país”.<sup>106</sup> En definitiva, para la élite gobernante los problemas de los trabajadores seguían siendo originados por los mismos obreros y sus actitudes. Al respecto, un cambio significativo se vio tres años más tarde, cuando se volvió a registrar la visita de una nueva comisión, esta vez para “estudiar las causas de los continuos y repetidos

movimientos obreros en esa zona y proponer al Gobierno medidas conducentes al restablecimiento de la tranquilidad”. Por primera vez, luego de 30 años, esta comisión se atrevió a reconocer la existencia de una cuestión social, dejando incluso en un segundo plano la labor de los llamados agitadores. En esta ocasión, luego de su inspección, se indicó que si bien “no faltan individuos que viven como parásitos mantenidos por las organizaciones obreras, a quienes conviene fomentar el descontento y la lucha de clases”, también existen “obreros honrados, que creen sinceramente en las enseñanzas socialistas”, pues estas encuentran “terreno fértil y propicio” básicamente por las condiciones en que viven, las que “están muy distantes de ser satisfactorias”.<sup>107</sup> Ante esto, concluye la comisión que “se comprende que, dado este estado de cosas, las doctrinas socialistas, y aun la prédica anarquista, encuentren fácil acogida”.<sup>108</sup>

Esta declaración resume dos elementos esenciales. Por una parte, la eficiencia del proyecto reactivador de la agitación obrera a cargo del

POS

y algunos anarquistas, y que incluyó una larga campaña de propaganda entre los trabajadores y, por otra, la confirmación del despliegue de un nuevo ciclo huelguístico, dejando decididamente atrás el resquemor producido luego de la matanza de Iquique. Asimismo, se hizo evidente la preocupante situación de subsistencia que estaba generando la crisis provocada por la conflagración mundial, suscitando “un profundo malestar, un permanente descontento, una inquietud constante, una hostilidad sorda contra las autoridades y contra los dueños de la industria”,<sup>109</sup> estos últimos, identificados como los responsables de tales males por la misma comisión. Ante esto, la única solución posible incluía la intervención del Estado y una legislación en favor de mejorar la vida de los trabajadores chilenos, algo que iría de la mano con el decreto de conciliación y arbitraje aplicable durante las movilizaciones y que comenzaría a regir desde 1917.<sup>110</sup>

Con todo, queda claro que la mirada negacionista respecto de la cuestión social se encontraba presente hasta en marcos temporales mayores a los habitualmente propuestos,<sup>111</sup> y recién hacia 1916 se asumió como tal, lo que estimamos se debe, en gran parte, a la presión ejercida por la fuerte presencia de huelgas durante ese año, y especialmente en la zona. Por su parte, la solución presentada por los parlamentarios, que como ya indicamos va de la mano con el proceso nacional encaminado hacia una legislación social, solo se hace posible en la medida que

se acepta el abuso patronal. De esa forma, para las comisiones parlamentarias, la intervención estatal quedó justificada en la excesivamente amplia libertad otorgada por ellas mismas al empresariado por más de 30 años. Tanto la aceptación tardía de una cuestión social como la reiterada responsabilidad que se le fue otorgando a los agitadores, explicarían la insistencia estatal por responder con represión a la protesta obrera.

En efecto, las huelgas retomaron el escenario movilizador de la región salitrera durante 1916, pero principalmente en los puertos. Siguiendo las pautas de la huelga de Antofagasta de 1903, los portuarios de Iquique querían hacerse cargo de la contratación “demandando la exclusión del contratista Campbell en la carga de las naves y su reemplazo por el sindicato de jornaleros y estibadores”.<sup>112</sup> Creció la adhesión a los huelguistas con el fin de presionar el retiro de las tropas ya dispuestas en la bahía. Luego de unos días, se reunieron representantes del sindicato, algunos “estibadores y jornaleros que habían permanecido en las faenas, un capataz, el contratista Guillermo Campbell y tres mediadores del

POS

, sugeridos por este último hombre”, quienes propusieron “mejoras tarifarias” y la instauración de un llamado “turno riguroso”, el que sería conocido por “redondilla”.<sup>113</sup> A pesar de su rechazo inicial, en pocos días su instalación se hizo efectiva y se propagó hacia otros puertos.<sup>114</sup> Al año siguiente, otra larga huelga general de obreros portuarios se organizó como protesta por la implantación del carnet de identificación.<sup>115</sup> En ella, los obreros de Caleta Buena, Iquique y Antofagasta, además de otros puertos, declararon su rechazo a la imposición gubernamental de fotografiarse. También exigían la abolición de los contratistas e intermediarios de las faenas marítimas.<sup>116</sup>

La realidad huelguística de las pampas fue totalmente diferente. A pesar del agitado movimiento de los diferentes puertos, en las oficinas dominaba el silencio de la movilización, principalmente porque la crisis comenzaba a dar sus primeros coletazos. Así lo afirmaba el intendente Arrieta al ministro del Interior el 18 de agosto de 1914:

“A fines del mes se reunirían en Iquique de veinte a treinta mil personas entre hombres, mujeres y niños desocupados y era muy difícil proveerlos de alimentos

porque ya comenzaban a escasear y se estaban consumiendo los restos de los que se tenía”.<sup>117</sup>

Tan profundo fue su impacto que solo una huelga general se levantó al interior del cantón central de Antofagasta brevemente el 18 de agosto de 1917, reuniendo en un inicio a “gente de siete oficinas”; sin embargo, finalizó al tercer día con los cabecillas detenidos.<sup>118</sup> A los dos días, luego de un atentado con dinamitas en una descarga del mineral en el puerto, el intendente llamó a clausurar El Despertar de los Trabajadores y El Surco.<sup>119</sup>

En primera instancia se podría dudar de la labor propagandística del

POS

ya tan mencionada, no obstante, hay constancia de que este no dejó de lado a los trabajadores del interior, sino, por el contrario, permanentemente estuvo motivando su resistencia ante los cierres de oficinas,<sup>120</sup> aunque la cesantía y el hambre difícilmente despertarían sus más fervorosos deseos de subversión. Con la crisis de la industria salitrera se transformó el espacio y obligó a redireccionar el movimiento, redefiniendo sus pautas hacia una acción colectiva más efectiva que la huelga. Se hablaba de mítines, conferencias, comicios públicos, pero también de leyes e instituciones. La protesta obrera entraba así cada vez con más fuerza al terreno de la lucha política. Sin embargo, con la ausencia de movilización pampina, en el terreno de la producción comenzaba a disminuir aquel poder construido hace tantos años, el de su privilegiada posición estratégica, y acarreaba la pérdida de su espacio, su mundo y su lenguaje, para acceder a uno que se luchaba en otras ciudades, en un parlamento con rostros ajenos, del cual muchas veces el obrero solo sería receptor.

## AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS Y PÉRDIDA DE POSICIÓN ESTRATÉGICA (1919-1930)

Al despuntar el año 1919, la crisis salitrera se anunciaba en toda su extensión y profundidad, al punto que entre el 31 de diciembre de 1918 y el 1° de enero de

1919 se registró —solo en Tarapacá— la paralización de 19 oficinas.<sup>121</sup> Así, se pronosticaba un año de profundos conflictos sociales, que incluiría el recrudecimiento de la acción reivindicativa popular. Ante la agudización de un nuevo ciclo huelguístico, quedó demostrada la creciente capacidad de organización de la fuerza del trabajo, la que pudo apreciarse también en la prolongada paralización de los jornaleros de la bahía de Iquique, quienes, siguiendo el ejemplo antofagastino, detuvieron sus faenas exigiendo la implantación del sistema de la redondilla en las actividades portuarias.

La crisis salitrera, traducida en la paralización de la mayoría de las oficinas que elaboraban el mineral, azotó con especial dureza a los obreros pampinos, convirtiéndose en “una nueva era de hambre”.<sup>122</sup> Según información de la Oficina del Trabajo, tan solo durante 1921, de los 45.000 obreros<sup>123</sup> registrados en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, aproximadamente 40.000 debieron ser trasladados hacia el centro del país.<sup>124</sup> Al respecto, El Despertar de los Trabajadores fue elocuente al reconocer el peso que la crisis jugaba en contra de la huelga obrera, al señalar que ya “no era posible entablar una lucha contra el capital, por las circunstancias críticas por que pasa el elemento trabajador”.<sup>125</sup> Esto cambió el rostro y el ánimo de los trabajadores, tal como afirmó en 1922 el inspector local de la Oficina del Trabajo, al señalar que “los reclamos obreros han sido numerosos, pero en cambio las huelgas decrecieron notablemente”.<sup>126</sup> Recién durante el mes de marzo de ese año, en medio de una campaña encabezada por la

## FOCH

para exigir el pago de desahucios, se volvieron a registrar algunos movimientos de consideración al interior de la pampa tarapaqueña, ya que durante febrero solo se realizaron pequeñas movilizaciones en las oficinas San Pedro,<sup>127</sup> La Palma<sup>128</sup> y San José, en el Cantón de Pozo Almonte, todas las cuales concluyeron con escasos resultados para los huelguistas.

Por su parte, el escenario antofagastino seguía el mismo curso. Durante el mes de febrero de 1921 paralizaron las oficinas Lina, Anita, Angamos, Rosario, Cecilia, Curicó, Candelaria y San Gregorio, dejando entre 3.000 y 4.000 cesantes de forma inmediata.<sup>129</sup> El reclamo de los obreros ante el cierre de las faenas y la nula ayuda por parte de la administración, especialmente con el pago de desahucio, venían alterando los ánimos ya altamente mermados por la crisis. El 31 de enero, cerca de “cuatrocientos trabajadores que llegaban a la oficina Lina

después de asistir a un mitín en Sierra Gorda” iniciaron una protesta que terminó con una golpiza al administrador de dicha oficina, lo que además derivó en una huelga, la que, gracias a la intervención favorable del intendente, consiguió el compromiso de la gerencia de abastecer a los trabajadores en su viaje de regreso a Antofagasta y costear una especie de desahucio.<sup>130</sup>

De esta forma, el cierre de la oficina San Gregorio —previsto para los primeros días de febrero— se instalaba en un escenario de alta conflictividad. El día 3 de ese mes, comenzaron a llegar obreros de las otras oficinas del Cantón de Aguas Blancas para apoyar la resistencia de los trabajadores de San Gregorio, “portando banderas rojas y cantando canciones socialistas”, lo que a juicio de Floreal Recabarren correspondía a una “estrategia estudiada de antemano por la

FOCH

local” en combinación con el Consejo Local de Antofagasta y la directiva del

POS

. Así, la oficina fue tomada por un número cercano a 2.000 obreros que solo pedían un desahucio.<sup>131</sup> Como ya resultaba habitual, en una confusa línea de sucesos, las tropas que resguardaban el lugar abrieron fuego contra los obreros, mientras estos perseguían enardecidos a los pocos efectivos policiales, y con ellos, al administrador. Después de largas horas de enfrentamiento, la movilización en la oficina San Gregorio terminó con la matanza de varias decenas de obreros,<sup>132</sup> algunos carabineros y la del administrador de la oficina, David Jones.

A pesar de que los niveles de violencia vistos en esos meses no volvieron a aparecer tan pronto, la crisis siguió golpeando a la zona con la cesantía. Para septiembre, de las 45 oficinas establecidas en los cantones del interior de Antofagasta, solo diez estaban en funcionamiento y dos de ellas semiparalizadas.<sup>133</sup> Las ciudades se convirtieron en verdaderas pasarelas de obreros, quienes, junto a sus familias, terminaban arranchados en los numerosos albergues especialmente habilitados.

Luego de estos y algunos otros movimientos, como la huelga que a mediados de mayo se desarrolló entre los obreros del Ferrocarril Longitudinal, una aparente tranquilidad hubo en la provincia hasta fines de octubre,<sup>134</sup> en que —generada por una rebaja salarial— se registró una huelga en la oficina Gloria, despertando

el temor y recelo de las autoridades ante las actividades agitadoras en las oficinas.<sup>135</sup> En esa oportunidad, el liderazgo de la

FOCH

obtuvo la supresión de esta rebaja y la vigencia de la jornada laboral de ocho horas, logros que posteriormente el administrador de la faena trató de desconocer,<sup>136</sup> pero que ante un inminente nuevo conflicto, finalmente aplicó.<sup>137</sup> Al año siguiente, en 1922, la única huelga pampina registrada ocurrió en diciembre, en la oficina salitrera Primitiva.<sup>138</sup> Aparentemente, hace algunos meses comenzaban a mostrarse signos de reactivación de la industria salitrera, cayendo al menos los elevados niveles de cesantía que la acompañaron. Ya desde julio comenzaron a cerrarse algunos albergues de cesantes en Iquique, y aumentó la demanda de trabajadores en las oficinas del interior.<sup>139</sup> Aun así, 1923 tuvo relativa tranquilidad en cuanto a los movimientos reivindicativos en el interior, siendo nuevamente la ciudad y especialmente las actividades vinculadas con el puerto las que concentraron los movimientos más relevantes.

#### IMAGEN 8.

*Federación Obrera de Chile: Asistentes al primer Congreso Regional del Salitre, 1922*





*Fuente: Colección Memoria Chilena.*

Ya nos habíamos referido al conflicto huelguístico en torno al sistema de redondilla, en particular a sus inicios durante el año 1916. Gracias a la presión ejercida por los trabajadores portuarios luego de masivas huelgas, en 1919 este sistema fue instaurado oficialmente en Antofagasta, consiguiendo su implantación en Iquique al año siguiente, luego de que las movilizaciones registradas en ese puerto, especialmente la del mes de junio, terminaran “incendiando toda la costa salitrera”.<sup>140</sup> En esa ocasión, la comisión encargada de encontrar solución a dicha huelga propuso al gobierno y a los trabajadores eliminar los agentes intermediarios, sindicados por los obreros como causantes del conflicto, devolviendo directamente a los empresarios el control de la contratación, con lo que la redondilla se inició como una propuesta gubernamental-patronal. Sin embargo, aquello que fue aceptado con bastante resistencia por parte de los trabajadores se instaló profundamente en su sistema de trabajo, al punto que entre 1921 y 1923, cuando gobierno y patrones quisieron derogarla, los trabajadores portuarios la defendieron con ahínco, principalmente porque su objetivo continuaba insistiendo en la necesidad de deshacerse de los contratistas que mediaban entre las cuadrillas de trabajadores y las casas embarcadoras. Precisamente, durante 1922, en Iquique comenzaron las mayores tensiones respecto de su derogación, por medio de un conflicto que terminó con la expulsión de tres lancheros de la Industrial Workers of the World (

IWW

) y algunos jornaleros marítimos. Esta escena se repetiría al año siguiente con un jornalero que también pertenecía a la

IWW

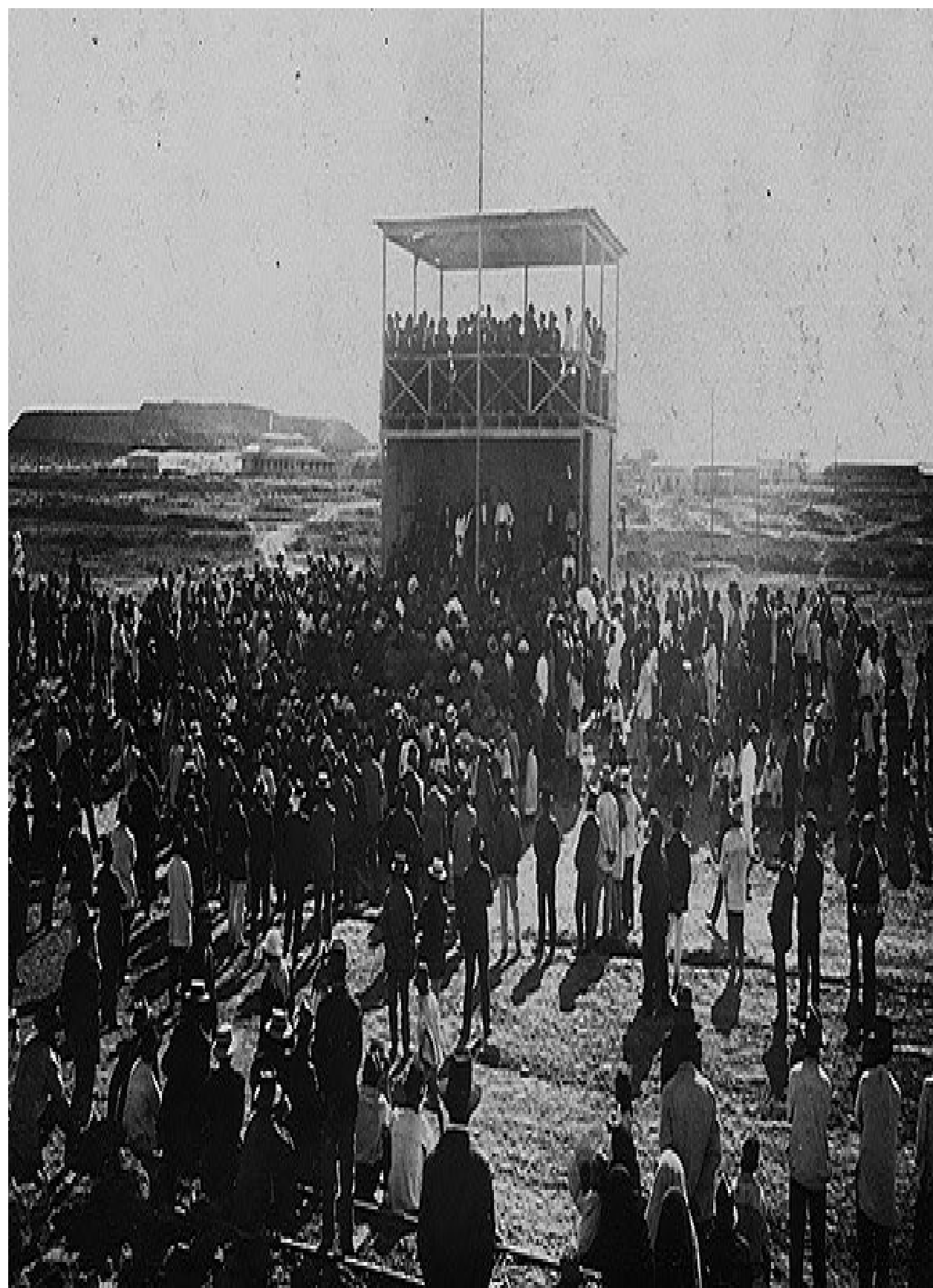
, lo que hizo estallar la última y más extensa huelga portuaria de 1923,<sup>141</sup> la que acabaría en derrota obrera y con dicho sistema.<sup>142</sup> Es necesario destacar que para Santibáñez es claro que la exigencia obrera hacia la redondilla no estuvo liderada por la

IWW

, sino por las federaciones Obreras Marítimas de los principales puertos del salitre.<sup>143</sup> De esta forma, la influencia anarquista en el mundo marítimo del norte salitrero, muchas veces elevada por la historiografía a posiciones de vanguardia en la politización obrera, tuvo mayor fuerza entre lancheros que en jornaleros.

#### IMAGEN 9.

*Mitín obrero en la pampa salitrera*



*Fuente: Colección Museo Histórico Nacional.*

Ese mismo conflictivo año 1923, finalizó con los trabajadores de la oficina salitrera Coruña en una huelga motivada por la disminución de sus salarios. A pesar de las frecuentes reuniones entre delegados de todos los sectores y la sección federal (

FOC

h) de la oficina —que se hizo cargo de la conducción del movimiento, ampliando la demanda inicial y buscando apoyo de las oficinas cercanas—, las peticiones fueron rechazadas y se expulsó a los trabajadores de la oficina,<sup>144</sup> volviendo a imponer una seria derrota a la movilización pampina. Tal vez por ello, al año siguiente, los niveles de movilización popular bajaron y recién en julio se presentó la primera huelga de importancia que alteró la tranquilidad de Iquique.<sup>145</sup> Posteriormente, en agosto, los particulares de la oficina salitrera Bellavista paralizaron labores durante una semana en rechazo a la exigencia patronal de aumentar en un 20% la carga de cada carretada de mineral.<sup>146</sup> Y, por último, en octubre, se registraron otras dos paralizaciones en el campamento Santa Laura<sup>147</sup> y en las oficinas Rosario de Huara y Campamento Puntilla,<sup>148</sup> finalizando en sendas derrotas obreras y en la muy elocuente declaración del administrador de una de esas labores, quien, dando cuenta de la disminución en la capacidad de presión de los trabajadores pampinos, fríamente sentenció: “el que quiere trabajar que trabaje y el que no, puede irse”.<sup>149</sup>

Hasta el momento, pocas dudas dejaba la privilegiada influencia fochista en la conducción de la movilización obrera, tanto en la pampa como en las ciudades del salitre. Sin embargo, la transformación del escenario político registrado en los últimos años y sobre todo un nuevo receso en la producción salitrera, el que inmediatamente activó —una vez más— los fantasmas de la crisis, evidenciaron cambios que, tanto a nivel local como nacional, permiten entender la dirección adoptada por el movimiento obrero salitrero. Los trágicos episodios huelguísticos de 1925 ejemplifican aquello.

Durante marzo y abril de ese año, una intensa huelga desarrollada por obreros ferroviarios, marítimos y salitreros de Tarapacá concluyó con éxitos parciales,

pues solo fueron aceptadas algunas de las peticiones de carácter laboral presentadas por los trabajadores, no así las demandas de alcance político. Para Alberto Harambour, la exclusión de estas últimas demandas fue una decisión adoptada deliberadamente por el tribunal arbitral, el que había sido impulsado por la propia

FOC

h y la Intendencia. Esta aparente contradicción, provocó que algunos sectores del movimiento obrero se radicalizaran e implementaran repertorios de acción colectiva que superaron los marcos institucionales. Poco a poco esto fue generando una imagen de los federados, y los ahora comunistas, de reformistas e incluso de traidores entre sectores del mundo trabajador.<sup>150</sup> El escenario de mayor agitación se inició el 20 de mayo de ese año, con la huelga de los cargadores y lancheros de Caleta Buena, al norte de Iquique, que rápidamente logró convocar a las oficinas de Pontevedra, Argentina y Coruña. La extensión temporal y territorial del movimiento encendió las alarmas de las autoridades, que no dudaron en declarar estado de sitio en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, además de la clausura de los periódicos El Despertar de los Trabajadores (comunista) y El Surco (anarcosindicalista). En este contexto de tensión, se registró la muerte de dos efectivos de las fuerzas del orden en el Alto San Antonio, lo que acrecentó tanto los ánimos represivos como reivindicativos. Al día siguiente, 4 de junio, en la oficina Coruña la huelga tomó un carácter más profundo, ya que se formuló un petitorio propio y se erigió una asamblea que coordinó tanto la alimentación de los huelguistas como la defensa armada del campamento. Dos días después, la gravedad de la situación llevó a las tropas del Ejército a recorrer la pampa con la misión de desarticular y recuperar las oficinas al costo que fuera, y así el fatídico día 6 de junio finalizó con la matanza de un número incierto de trabajadores que mantenían tomada la oficina Coruña.<sup>151</sup>

Las repercusiones de la nueva masacre obrera clarificaron posiciones. Si bien existió presencia comunista en la huelga y claramente en la agitación, los principales dirigentes del partido mostraron cierta indiferencia con lo sucedido, atribuyéndoles responsabilidad a dirigentes anarquistas. Para Rolando Álvarez, a estas alturas la conformación de las fuerzas políticas en el escenario nacional tenía atado a un gran sector del partido en la lucha por reformas sociales, no así por una revolución socialista como se podría pensar, misma atadura que pesaría sobre los hombros de la

FOC

h.<sup>152</sup> A pesar de que un segmento de la

FOC

h y el

PC

intentó ir más allá de la moderada política oficial del partido, la que “se jugaba el cambio por las vías institucionales”,<sup>153</sup> luego de la matanza la línea reformista predominó en sus pautas.

Si hemos seguido lo planteado en este relato no debería sorprendernos la vía tomada por los comunistas. El predominio del camino electoral que comenzó a registrarse desde los primeros años del siglo

XX

con la experiencia de la Mancomunal y más decididamente con la fundación del

POS

en 1912, ya presagiaba las intenciones de una lucha institucionalizada. Así, el creciente papel de sus afiliados en la pampa y las ciudades portuarias del salitre construyó una base social que posibilitó la afirmación de la vía política con sus proyecciones y repercusiones, lo que silenciosamente fue dejando en un segundo plano las pretensiones localistas de los obreros pampinos, las que se vieron subordinadas a pautas más generales y en ocasiones bastante ajenas. Con esto, los conflictos nacionales dominaron el escenario local, al mismo tiempo que la confrontación entre el capital y el trabajo pasó de ser un problema laboral a uno netamente político. Ahora, el campo de batalla ya no estaba en el espacio de la producción, sino que en el Parlamento y las otras instituciones de poder. Situación que se ve graficada en el pequeño detalle que Harambour nos deja en su escrito, cuando, luego de terminado el conflicto en la Coruña, desde Santiago, Luis Víctor Cruz y Manuel Hidalgo, importantes dirigentes del Partido Comunista y la Federación Obrera en la región salitrera, declararon “no poseer antecedentes sobre el movimiento, atribuyendo los acontecimientos a causas locales o regionales”.<sup>154</sup>

Así, los casi cincuenta años de experiencia reivindicativa y asociativa en el norte salitrero, diseñaron un espacio que fue reconstruyéndose constantemente, en tanto que las condiciones de subsistencia lo demandaban. Las decisiones que los trabajadores del salitre tomaron los constituyeron como movimiento obrero, porque en ello se jugaban la oportunidad de transformar su realidad adversa. De esta forma, los tres elementos de cambio que hemos analizado evidenciaron la transformación del carácter que finalmente adoptó dicho movimiento, el que nació como un conjunto de acciones espontáneas y desarticuladas, y terminó disputando los espacios de poder dominados por la élite. Gran parte de aquello quedó revelado en el cambio de lo social a lo político que debió enfrentar la asociatividad popular, especialmente a partir de la experiencia mancomunada. Si bien, como vimos, dicho traspaso no fue unánime y generó desavenencias importantes, en particular luego de grandes movilizaciones, fue decisivo para incidir en las organizaciones siguientes, sobre todo con la emergencia del

POS

, que llevó la acción política decididamente por la vía parlamentaria y la mediación entre sus bases gremiales y autoridades.<sup>155</sup> En el fondo, mancomunados, socialistas y luego comunistas, entraron de lleno a disputar el espacio institucional, pues vieron en él un terreno de mayor proyección y eficacia que la huelga, y con ello contribuyeron a la institucionalización de la protesta obrera. Por su parte, la irradiación de lo político hacia organizaciones provinciales y nacionales diluyó la dimensión eminentemente local que caracterizó a los primeros años del movimiento. Todo lo que en su momento representó la experiencia cotidiana del trabajo salitrero y que se volcó en la movilización, se fue alejando, hasta quedar relegada a un lugar secundario, especialmente cuando las organizaciones políticas de las diferentes ciudades del país animaban por un petitorio nacional. Este cambio, si bien fue progresivo, vio su mayor expresión con la reactivación de la movilización en 1916, básicamente porque las huelgas generales abarcaron un extenso territorio concentrado principalmente en las zonas urbanas y portuarias, y los efectos de la gran guerra recrudecieron la crisis de la industria del salitre, golpeando de tal manera a los sectores pampinos que estos no fueron capaces de reactivar el liderazgo de la movilización. Además, los proyectos partidistas encaminados hacia la lucha parlamentaria buscaron mejorar las condiciones de vida de los obreros, pero se dieron en un terreno muy distante del espacio cotidiano en que se desarrollaba la producción. Finalmente, estas dos transformaciones se combinaron con otra que resultaría fundamental, la paulatina pérdida de la posición estratégica de los

trabajadores pampinos, gatillada por el impacto de la crisis de la industria, pero ampliada por el bajo nivel de especialización de esos trabajadores y su facilidad de reemplazo, lo que se tradujo en una disminución de su capacidad para declarar y sostener la huelga y, con ello, en un descenso de la fuerza obrera con que asumían la acción colectiva.

A pesar de todo, los avatares que ciñeron al movimiento obrero del salitre estuvieron lejos de ser provocados por sus propias decisiones. La indolencia de las élites empresariales y un Estado cómplice encerraron al obrero en un escenario lleno de violencia compulsiva, del que solo quedó resistir por todos los medios posibles. La vía política sabía que para disputar el poder debían hacerlo en su territorio, sin embargo, patrones y autoridades solo supieron responder con persecuciones y matanzas. Ni siquiera cuando acompañado de los vítores de muy amplios sectores —incluyendo el obrero— se comenzaron a dictar las leyes sociales, la respuesta patronal-estatal dejó de ser la represión. Con todo, los obreros del salitre, con su seguidilla de crisis a cuestas, lucharon por reconstruirse constantemente, animados por la cotidiana —y realmente heroica— experiencia de enfrentar la pobreza y la dominación.



## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

### *Prensa Periódica*

*El Despertar de los Trabajadores, Iquique.*

*La Provincia, Iquique.*

*El Nacional, Iquique*

*El Trabajo, Iquique.*

*El Industrial, Antofagasta.*

*El Marítimo, Antofagasta.*

### *Documentales*

Archivo Nacional, Fondo Ministerio del Interior, Volumen 4648, 4846, 4847.

Archivo General de la Administración, Oficina del Trabajo, Tomo 77, 69, 89, 90.

Archivo Regional de Tarapacá, Fondo Intendencia de Tarapacá, Tomo 1, 2, 26, 34, 38.

### *Bibliografía*

Álvarez, Rolando, “La matanza de Coruña. Chile 1925”, en *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, 116, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 1997, pp. 77-108.

Artaza, Pablo (et al.), *A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique*, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,

LOM

, Santiago, 1998.

, González, Sergio y Jiles, Susana (editores), *A cien años de la masacre de Santa María de Iquique*, LOM, Santiago, 2009.

Artaza, Pablo, “Movilización y Asociatividad Popular: dos facetas del papel de la clase en la configuración de la identidad pampina (Tarapacá, 1890-1907)”, en *Travesía*, 10-11, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2008-2009, pp. 45-72.

, “De lo social a lo político en el movimiento social salitrero: El caso de la Mancomunal de Obreros de Iquique, 1900-1909”, en *Atenea*, 509, Universidad de Concepción, 2014, pp. 139-158.

, *Movimiento Social y politización popular en Tarapacá 1900-1912*, América en Movimiento Editorial, Valparaíso, 2020.

Barría, Jorge, *El Movimiento Obrero en Chile. Síntesis histórico-social*, Ediciones Universidad Técnica del Estado, Santiago de Chile, 1971.

*Comisión Parlamentaria encargada de estudiar las necesidades de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, Talleres de la Empresa Zig-Zag, Santiago, 1913.*

Cruzat, Ximena, *El movimiento Mancomunal en el norte salitrero: 1901-1907*,

Tomo

I

, Mimeo, Santiago, 1981.

Garcés, Mario, Crisis social y motines populares en el 1900,

LOM

Ediciones, Santiago, 2002.

González, Sergio, Hombres y mujeres de la pampa: Tarapacá en el ciclo del salitre, Taller de Estudios Regionales, Iquique, 1991.

, “Las inflexiones de inicio y término del ciclo de expansión del salitre (1872-1919): una crítica al nacionalismo metodológico”, en Diálogo Andino, 45, Universidad de Tarapacá, Arica, 2014, pp. 39-49.

Grez, Sergio, “La huelga general de 1890”, en Perspectivas, 5, Madrid, 1990, pp. 127-167.

, La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1995.

, “Transición en las formas de lucha: Motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)”, en Historia, 33, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, pp. 141-225.

, “¿Autonomía o escudo protector? El Movimiento Obrero y popular y los mecanismos de conciliación y arbitraje (1900-1924)”, en Historia, 35, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002, pp. 91-150.

, Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), LOM, Santiago de Chile, 2011.

, “Matanza de la escuela Santa María de Iquique (1907): guerra interna preventiva del Estado chileno contra el movimiento obrero”, en Grez, Sergio y Elías, Jorge (compiladores), Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 2021, pp. 15-33.

Harambour, Alberto, “Ya no con las manos vacías (huelga y sangre obrera en el Alto San Antonio. Los ‘sucesos’ de la Coruña. Junio de 1925)”, en Artaza, Pablo, A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique,

LOM

, Santiago, 1997, pp. 183-192.

*Informe que la Comisión Consultiva de Salitres presenta al señor Ministro de Hacienda, Imprenta Nacional, Santiago, 1880.*

Mercado, Javier, “Combinación Mancomunal de Obreros de Antofagasta y politización popular, 1903-1906”, en Anuario de Pregrado, 1, Universidad de Chile, Santiago, 2004, pp. 1-22.

Navarro, Jorge, Revolucionarios y parlamentarios: la cultura política del Partido Obrero Socialista,

LOM

, Santiago, 2017.

Ortiz, Fernando, El movimiento obrero en Chile (1891-1919),

LOM

Ediciones, Santiago, 2005.

Oyarzún, Enrique; Concha, Juan Enrique y Philippi, Julio, Informe presentado al

Supremo Gobierno sobre las huelgas de Iquique en 1916, Imprenta Cervantes, Santiago, 1917.

Pinto, Julio, “1890: un año de crisis en la sociedad del salitre”, en Cuadernos de Historia, 2, Universidad de Chile, Santiago, 1982, pp. 77-81.

, “La transición laboral en el norte salitrero: La provincia de Tarapacá y los orígenes del proletariado en Chile, 1870-1890”, en Historia, 25, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990, 207-228.

, “En el camino de la Mancomunal: Organizaciones obreras en la provincia de Tarapacá 1880-1895”, en Cuadernos de Historia, 14, Universidad de Chile, Santiago, 1994, pp. 81-135.

, “¿Cuestión social o cuestión política? La lenta politización de la sociedad popular tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900)”, en Historia, 30, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1997, pp. 211-261.

, “Discursos de clase en el ciclo salitrero: la construcción ideológica del sujeto obrero en Chile, 1890-1912”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2004, pp. 131-198.

, Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera. El ciclo del salitre y la reconfiguración de las identidades populares (1850-1900), Editorial Usach, Santiago, 2012.

Recabarren, Floreal, La Matanza de San Gregorio. 1921: Crisis y tragedia.

LOM

, Santiago, 2010.

Reyes, Enrique, “Los trabajadores del área salitrera, la huelga general de 1890 y Balmaceda”, en Luis Ortega (ed.), La guerra civil de 1891. Cien años hoy, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1993, pp. 85-107.

Rojas, Jorge, “Los trabajadores en la historiografía chilena: Balance y proyecciones”, en Revista de Economía y Trabajo, 10, Programa de Economía del Trabajo -

PET

, Santiago, 2000, pp. 47-117.

Salas Lavaqui, Manuel, Trabajos y antecedentes presentados al supremo gobierno de Chile por la Comisión Consultiva del Norte, Imprenta Cervantes, Santiago, 1908.

Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile. Actores, identidad y movimiento, vol.

II

,

LOM

, Santiago, 2014.

Santibáñez, Camilo, “El movimiento obrero en los muelles salitreros chilenos: apuntes en torno a un informe de huelgas (Iquique, 1916)”, en Páginas, 14, Escuela de Historia Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2015, pp. 7-19. Disponible en <https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/155>

, “La IWW y el Movimiento Obrero en Chile: El caso de los obreros portuarios nortinos (1919-1923)”, en Diálogo Andino, 55, Universidad de Tarapacá, Arica, 2018, pp. 19-28.

, “Los trabajadores portuarios chilenos y la experiencia de la eventualidad: los conflictos por la redondilla en los muelles salitreros (1916-1923)”, en *Historia*, 50, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2017, pp. 699-728.

Womack Jr., John, *Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2007.

\* Académico, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile. Este capítulo forma parte del proyecto Fondecyt N° 1190303.

\*\* Licenciada en Historia, Universidad de Chile, estudiante de doctorado El Colegio de México.



### **III. POLITIZACIÓN Y CONFLICTO. LA LARGA MARCHA DE LOS TRABAJADORES DEL CARBÓN.**

**CHILE, 1900-1927**

HERNÁN VENEGAS VALDEBENITO

\*

La industria minera del carbón en Chile tiene una historia de casi dos siglos. Sus primeras instalaciones corresponden a una época en que todavía el Estado nacional chileno no dibujaba sus fronteras hacia el sur del Biobío y había sido incapaz, aún, de cometer la barbarie que, luego de vencer en la guerra del salitre, le permitió avanzar en la ocupación del territorio mapuche. Antes de eso, varios empresarios chilenos y extranjeros pusieron su atención sobre la explotación del oro negro, que dadas las transformaciones tecnológicas auguraba un promisorio mercado para quienes se empeñaran en esos arriesgos empresariales. Apellidos como los de Rojas, Alemparte, Délano, McKay, Garland, Cousiño y Schwager encabezaron dichos proyectos, pero dejaron en el anonimato el nombre de muchos de los miles que entregaron su fuerza y su inteligencia en esa “gesta” del capitalismo.<sup>156</sup>

Al igual que casi todos los centros mineros que jalonaron el territorio chileno — primero en el Norte Chico y en la zona central, y luego en los apartados rincones del Norte Grande y del Wallmapu—, se dio origen a complejos industriales que albergaron a cientos de trabajadores y luego a miles de ellos, como en el golfo de Arauco, al sur de la ciudad de Concepción. Así sucedió con las iniciativas industriales de Lota y Coronel, mientras que un fenómeno similar estuvo asociado a los demás yacimientos en que la demanda de carbón estimuló el levantamiento de las clásicas estructuras mineras. Hacia fines del siglo,

un cinturón de centros productivos se había entretejido desde Lebu y Curanilahue por el sur, con Lota y Coronel en el centro del mismo, para terminar la trama con los minerales de Lirquén y Cosmito por el norte.<sup>157</sup> Como en la mayoría de los campamentos de este tipo, inicialmente se concibió el diseño y habilitación de esos espacios sin ningún tipo de proyección. Estaban pensados para trabajadores, masculinos, sin familia, contenidos por mecanismos vinculados con el salario, pero también por la violencia y estrategias ilegítimas de retención, incluyendo la deuda, el uso de fichas y presiones extraeconómicas.

Se trataba de formas de acumulación sustentadas en el máximo de explotación posible, que si bien se fueron morigerando luego de la década de 1880, sus cambios de orientación no fueron lo suficientemente poderosos como para que la vida en los campamentos mejorara sustantivamente. Si se considera el caso de Lota, por ejemplo, hacia esa fecha el antiguo campamento minero había dado paso a la edificación de una estructura industrial y un espacio urbano más complejo, Lota Alto, amparada por la compañía minera que paulatinamente había cambiado de estrategia y se mostraba ante la comunidad como la gran benefactora del territorio y su gente (además, fortalecía la idea de la familia industrial).<sup>158</sup>

La actividad minera carbonífera ha sido abordada por la historiografía chilena hace ya algunas décadas. Pioneros en ese afán fueron los trabajos, en los 80, de Ortega, Mazzei y Venegas,<sup>159</sup> enfocados principalmente en el reconocimiento de las iniciativas empresariales de la época y, al mismo tiempo, de las transformaciones sociales derivadas de dichos esfuerzos. Una suerte de progresión empresarial, que terminó por consolidarse en la década de los años 40 del siglo

XX

, cuando las empresas vinculadas a esa actividad extractiva alcanzaron cuotas máximas de producción, inversión de capitales y concentración de la propiedad. Por otra parte, habían reclutado el mayor número de trabajadores de su historia, alrededor de 20.000, para el periodo que se inicia en 1920.<sup>160</sup> Como corolario de lo anterior, los mismos autores dieron luces acerca de la transformación de las condiciones sociales que experimentaron las comunidades que se congregaron en torno a dichas actividades. Colocaron indistintamente el acento en reconocer la evolución de los espacios mineros en términos físicos y urbanísticos, como en la formación de comunidades en que no solo estuvieron presentes los mineros,

sino que el conjunto de actores que conviven en espacios de creciente urbanización, incluyendo el desarrollo de actividades productivas no mineras, los servicios y el comercio.

Pionero en describir y analizar las transformaciones asociativas de los trabajadores fue el trabajo de Enrique Figueroa y Carlos Sandoval, quienes trazaron el itinerario movimental en la cuenca del carbón a través del seguimiento de la prensa local: una historia jalonada por huelgas, represión y politización popular, de acuerdo con los autores. En esa verdadera crónica, ordenaron los principales hitos del movimiento obrero en la zona, así como las expresiones de resistencia de los trabajadores organizados.<sup>161</sup> Como un esfuerzo distinto, habría que hacer mención del trabajo de Consuelo Figueroa, que mostró la riqueza de una cultura popular minera en que las mujeres, fuera de lo que pudiese pensarse en un mundo dominado por el trabajo masculino, jugaron un rol protagónico, incluso desde el punto de vista laboral.<sup>162</sup> Finalmente, quien aborda el tema referencialmente es Jody Pavilack,<sup>163</sup> interesada por reconocer las relaciones del Frente Popular con los mineros del carbón, en un novedoso trabajo que se aboca más bien a abordar un periodo en que la producción carbonífera se releva como parte de los esfuerzos de modernización industrial y económica del país a mediados del siglo

## XX

. En ellos, los trabajadores se configuraron como la palanca que acciona dicha modernización en favor de la nación en su conjunto.

Más recientemente se ha hecho un intento por abordar en términos más amplios las relaciones sociales y laborales tejidas en el ámbito minero carbonífero. Las investigaciones han estado encaminadas a reconocer las acciones y reacciones de los distintos actores asociados a esta esfera productiva, registrando la relación simbiótica que operó en dicho sector y cómo fue mutando en el tiempo. En su propuesta más compleja estas investigaciones explican cómo esas prácticas económicas o laborales van de la mano de la construcción de una rica experiencia cultural. La férrea explotación económica ejercida por los empresarios y sus administradores fue respondida con organización, y radicalización incluso, por parte de los trabajadores. Sin embargo, las entidades empresariales aprendieron también, junto con los agentes estatales, que el uso exclusivo de la violencia y otras formas de represión constituían un camino de suyo incierto, por lo que ensayaron formas de gestión laboral más sofisticadas,

sobre todo después de 1920. De esta forma intentaron combinar medidas de fuerza y “autoridad”, con otras de atracción y filantropía, que derivaron en concesiones que, prontamente, fueron interpretadas como derechos por parte de las masas proletarias. Así, el paternalismo industrial burocratizado adquirió forma y se preparó a enfrentar una mayor politización de los trabajadores, fundada sobre una poderosa identidad de clase combinada con una fuerte presencia del Partido Demócrata, el

POS

y luego el

PCC

h. En este sentido, los trabajos de Godoy, Videla, Morales, Brito, Venegas, Rock y Peñafiel<sup>164</sup> contribuyeron a la construcción de esta perspectiva, enfatizando el despliegue de iniciativas que intentaron rivalizar con las que surgían de la autonomía de los trabajadores y trabajadoras, revisando de paso el mundo cultural construido en torno a las comunidades. Por último, los estudios más recientes han insistido en relevar las estrategias empresariales focalizadas en la transformación tecnológica y las adecuaciones en la contratación del trabajo, destinadas, obviamente, a maximizar sus resultados, pero al mismo tiempo a librarse de la “tiranía” de trabajadores especializados, que, controlando su oficio, ejercían una cierta tutela sobre el funcionamiento de las minas.<sup>165</sup> Todos los actores sociales involucrados advirtieron el rol estratégico del carbón en el proyecto económico, y los propios trabajadores reconocieron su importancia en este verdadero motor productivo nacional. De allí la fortaleza de sus demandas y la utilización en su favor al momento de poner en la mesa sus exigencias.<sup>166</sup>

El propósito de este capítulo es reconocer la capacidad organizativa y de movilización de los trabajadores sustentada en una poderosa identidad de clase; la intensa movilización de las comunidades carboníferas en términos huelguísticos y su capacidad de articulación social, incluso más allá del espacio regional, y, por último, las estrategias utilizadas por los empresarios y el Estado para atenuar la autonomía de los trabajadores, pero también para asegurar el abastecimiento a un país que dependía, más que nunca, de este combustible fósil. Como correlato de este análisis se sostiene que muchas de estas transformaciones, pero también los conflictos e interrelaciones, se extendieron más allá de la zona carbonífera, por lo que su examen permite entender esta larga

transición social y económica experimentada por el país a nivel nacional.

## LOS AVANCES DEL CAPITALISMO MINERO Y LA BÚSQUEDA DEL “ORO NEGRO” EN EL SUR DE CHILE

En el último cuarto del siglo

### XIX

, la región minera albergaba a miles de trabajadores. Y no se trataba de trabajadores individuales. Muchos fueron estimulados para formar familias, mientras que el propio espacio local se transformó, dando paso a la construcción de habitaciones y algunos servicios, aunque precarios: los únicos existentes en la zona. Por otra parte, se instalaron las primeras entidades públicas que, si bien muchas veces se subordinaron al poder empresarial, hacían visible la presencia estatal en estos apartados territorios.<sup>167</sup> Naturalmente, la población se fue consolidando y el número de habitantes creció notoriamente a la par que lo hacía el número de trabajadores asociados a las empresas mineras. De acuerdo con los censos respectivos, la población de la región carbonífera llegó a 39.912 personas en la primera década del nuevo siglo, a 48.529 en 1920, mientras que veinte años después se alzaba a 68.941 habitantes.<sup>168</sup> Las ciudades más favorecidas eran las de Lota y Coronel dentro del conjunto de la región minera, en concordancia con su capacidad productiva.

Esto tuvo su correspondencia tanto en el tamaño de la población trabajadora como en los niveles de producción total de carbón. En los inicios de la segunda década del siglo (1911) la producción bruta de combustible se acercaba a las 900.000 toneladas y en su producción se involucraban 8.939 trabajadores.<sup>169</sup> Casi una década después, la producción había sobrepasado levemente el millón y medio de toneladas, mientras que el número de trabajadores llegaba a los 11.000, solo en los distritos de Lota y Coronel. Al mismo tiempo, se había producido una alta concentración de la propiedad y la producción de combustible bajo el control de dos consorcios, que en esta misma época habían adquirido algunas de las minas de menor envergadura. Las iniciativas lideradas por las familias descendientes de Matías Cousiño y Federico Schwager, controlaron casi el 90% de la producción total de carbón.<sup>170</sup>

Se trataba de empresas de larga data, originalmente organizadas por patriarcas familiares, que derivaron hacia compañías constituidas como sociedades por acciones que fueron copando el mercado nacional de producción de carbón, suscribiendo acuerdos comerciales con el mundo salitrero, las productoras de gas, los ferrocarriles del Estado y el transporte naviero. En el caso de la compañía de Lota esta tuvo centros productivos en Curanilahue, Lebu, Lota, y el sector de Coronel; administró además el ferrocarril privado que hacía el recorrido desde Curanilahue por el sur hasta los grandes distritos carboníferos y, finalmente, hasta la ciudad de Concepción. Por un largo periodo, la compañía de Lota combinó la producción de carbón con la fundición de cobre y una fábrica de ladrillos refractarios que más adelante se convirtió en su filial denominada Lota Green.<sup>171</sup> Disponía además de muelles y una flota naviera para la colocación del carbón y el traslado de los productos necesarios para las tareas subterráneas. También contaba con propiedades rurales para proveerse de madera y alimentos. Desde el punto de vista urbanístico, diseñó un espacio bajo su control reconocido como Lota Alto, un lugar en el que convivían los edificios de administración, con las habitaciones para los cuadros ingenieriles, los pabellones y las viviendas para los trabajadores y sus familias, así como con una incipiente propuesta institucional. En el caso de los demás asientos mineros sucedía otro tanto, aunque el único espacio que competía en dimensiones era el administrado por la Cía. de Schwager, que sentaba sus reales en la ciudad puerto de Coronel y algunos espacios menores, como Maule, a unos cuantos kilómetros.

Naturalmente, en iniciativas industriales que crecieron tan rápidamente, que emplearon un creciente número de trabajadores y donde el deseo de rentabilidad de las compañías llevó a estas a intentar bajar sus costos abusivamente, se potenció un conflicto que fue larvado en su larga trayectoria y que, en forma reiterada, cada cierto tiempo abrió pequeñas válvulas de escape, violentas, aunque esporádicas. Estas estuvieron motivadas por los justos reclamos de los trabajadores y por la represión de sus manifestaciones cuando aún no se ensayaban mecanismos negociadores para la superación de las diferencias.<sup>172</sup>

A pesar de que las empresas mineras introdujeron tempranamente formas de control de naturaleza extensiva hacia fines del siglo

## XIX

, en una suerte de intervención social que buscó consolidar formas de relaciones sociales más amigables, las paralizaciones de actividades fueron recurrentes y

arreciaron mientras más multitudinarias eran las faenas. Lo anterior hizo que las empresas tuvieran menos posibilidades para enfrentar el origen de los problemas: los bajos salarios y las deplorables condiciones de vida.

Una suerte de paternalismo tradicional cercano al patronazgo era poco probable en sociedades que habían crecido en proporciones tan superiores, sobrepasando las posibilidades en las que ese tipo de gestión del trabajo era viable, en el sentido de alcanzar una incidencia real en el comportamiento de sus trabajadores.<sup>173</sup> De allí entonces que las acciones benéficas de los dueños y dueñas de los establecimientos se hicieran insuficientes para contener la movilización de los trabajadores y alivianar su carga y las de sus familias. El ejercicio de la filantropía también fue incapaz de contener el uso de la violencia, que desde las esferas administrativas y de las representaciones empresariales aconsejaban aplicar. Eso llevó a que la conflictividad se arrastrara por décadas, hasta hacerse dramática a fines de la segunda década del nuevo siglo.

## LAS PRIMERAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y EL FANTASMA DEL SOCIALISMO EN EL MUNDO DEL CARBÓN

Si bien los conflictos abiertos estuvieron presentes en las últimas décadas del siglo

XIX

bajo la forma de motines populares, radicales, pero sin sostenimiento en el tiempo —e incluso hubo huelgas más organizadas, como la de 1884—, no fue sino hasta inicios del siglo

XX

que la organización de los trabajadores se fue perfilando con mayor relevancia y sistematización.

El periodo que va de 1900 a 1907 fue, al igual que en el resto del país, muy prolífico en la generación de instancias organizativas, así como de movimientos huelguísticos de corta duración nucleados en torno a cuestiones de carácter

gremial. Estas centraban sus demandas en el mejoramiento del nivel de salarios, la frecuencia en que se hacían los pagos, la disminución de las horas diarias de trabajo, el abastecimiento de artículos de comercio y cuestionaban el manejo del orden por parte de las policías particulares dependientes de las administraciones empresariales. Por ejemplo, durante el primer semestre de 1902 se produjo una serie de esas paralizaciones de faenas que, en promedio, no superaron una semana de duración. En ellas las posibilidades de negociación fueron mínimas y, no obstante alcanzar algunos beneficios, no lograron alterar estructuralmente las relaciones de los trabajadores con los sectores empresariales o la forma de gestionar el trabajo minero.<sup>174</sup> Se trató de circunstancias marcadas además por la presencia militar que el gobierno local (Intendencia) o central (Ministerio del Interior) dispuso para tales ocasiones.<sup>175</sup> Destacamentos del Ejército o de la marina coparon los asientos mineros e impusieron con su presencia, y a veces con sus acciones represivas, un orden a todas luces artificial.

Este primer ciclo de experiencia organizativa y de movilización permitió que se vislumbraran posibles “alianzas”. Los trabajadores unieron fuerzas primero con las dirigencias locales del Partido Liberal Democrático y del Partido Radical, y más adelante, con el Partido Demócrata, aunque en ocasiones estas alianzas fueran simultáneas.<sup>176</sup>

El otro rasgo interesante al despuntar el siglo es que se formaron las primeras organizaciones de carácter proletario propiamente tal bajo la forma de Mancomunal Obrera. Si bien este tipo de organizaciones habían tenido su origen en el norte salitrero y se habían proyectado hacia otras ciudades, incluyendo el puerto de Valparaíso y la capital nacional, hizo su estreno en la región carbonífera el año 1902 estrechamente asociada al movimiento huelguístico acaecido el primer semestre de ese año. La fundación de la Federación Mancomunal de Trabajadores de Lota i Coronel fue el gran salto adelante que dio la organización proletaria en la región. Al igual que sus congéneres del norte, la mancomunal del carbón compartió varios de sus atributos, iniciativas y debió enfrentar dificultades y enemigos de la misma calaña. Se trató de una primera entidad capaz de hacer converger a obreros vinculados a una actividad específica y sobre cuyos hombros se sostenía literalmente una enorme estructura productiva. La propia mancomunal se empeñó en resaltar el papel de esos trabajadores en la construcción de la riqueza, potenciando una identidad proletaria que era puesta en tela de juicio por las élites patronales y quienes estaban a su servicio como administradores, cuadros ingenieriles y mayordomos, el eslabón —este último— en el cual se había delegado el control del trabajo en



los espacios productivos de las minas. La Mancomunal de Lota i Coronel fue un importante ejercicio de democracia popular y de representación proletaria, que, si bien estaba estrechamente ligada al Partido Democrático, tuvo vida propia y se constituyó en la primera escuela de organización autónoma. Al mismo tiempo, se conformó una identidad que permitió que sus miembros se sintieran parte de un universo social mayor, porque puso en contacto a trabajadores de las localidades de Lota y Coronel,<sup>177</sup> pero además con los trabajadores del conjunto de la zona minera. También se generaron vínculos con otros actores productivos, como lancheros, gremios de zapateros, trabajadores portuarios e incluso organizaciones de trabajadores de la ciudad de Concepción. Esas redes se extendieron más allá de la región, lo que les permitió hacer causa común con proletarios que se habían organizado de la misma manera en ciudades a lo largo del país, como Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Chañaral, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Talcahuano, Curanilahue y Lebu. Esto posibilitó que la organización local proyectara una serie de iniciativas, donde la fundación del periódico El Alba resalta como su piedra angular. El semanario obrero editó su primer número el domingo 4 de mayo de 1902 y se definió a sí mismo como el órgano defensor de los mineros. Acompañando a su titular se leía la sentencia: La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, una clásica frase de Carlos Marx. El lenguaje ocupado por la publicación es una revelación de las ideas que animaban a sus editores, dentro de las cuales resaltaba la necesidad de la lucha anticapitalista, aunque en términos bastante eclécticos seguían aludiendo a los héroes patrios nacionales y a algunas sentencias bíblicas para reforzar ciertas ideas de igualdad social. Pero no había lugar a equívocos al plantear la necesidad de una revolución social de naturaleza socialista en que las clases proletarias alcanzaran la tan anhelada reivindicación social: sin duda se trataba de militantes del ala socialista dentro de la colectividad demócrata. Para ello lo que había que hacer era cambiar de raíz una sociedad desigual e injusta, pero planteaban que sin organización eso era imposible. De allí la necesidad de crear estructuras de carácter mancomunal, tomando como ejemplo los estatutos de la Federación Internacional de Trabajadores:

La Federación de Trabajadores declara a la faz de todos los hombres libres que siendo explotados i tiranizados los trabajadores por los patrones, industriales, jefes de talleres i maestranzas del Estado sin excepción alguna, que la mezquindad de los jornales significa que los capitalistas se apropian

indebidamente de las tres cuartas partes del trabajo de los productores... Teniendo presente que esta situación perjudicial no puede tolerarse impasible i con indiferencia por mas tiempo, siendo menester impedir la explotación inicua que se hace a los trabajadores poniendo en práctica métodos mas activos que los empleados hasta hoi por las sociedades obreras de socorros mutuos para impedir los abusos de los capitalistas i las medidas arbitrarias de las autoridades.<sup>178</sup>

*El Alba se mantuvo en circulación desde mayo de 1902 hasta mediados de 1904 y sirvió de portavoz a la mancomunal por todo ese periodo. La organización estuvo detrás de varias de las huelgas mineras ocurridas en Lota, que enfrentaron a los trabajadores del mineral con los administradores locales, pero también con los propietarios, representados en la figura de Carlos Cousiño, nieto del fundador de la compañía. La mancomunal llamó a dichas huelgas como un acto legítimo de redención social, pero para las cuales había que prepararse con recursos, participación masiva y organización.*

Para ello había que crear una comunidad, fortalecer la ayuda mutua, impulsar el cooperativismo y avivar la identidad proletaria, tanto en la región como estableciendo lazos con las demás organizaciones populares del mismo tipo a lo largo del país.<sup>179</sup> En noviembre de 1902, la mancomunal decía contar con 800 socios, aunque no desconocía las dificultades para seguir creciendo. Enfrentados a los enemigos externos (empresariales y administrativos), la mayor preocupación del directorio y su órgano de difusión, en el primer semestre del año siguiente, era la “indiferencia” y temor de los trabajadores locales. Lo que se precisaba era mayor involucramiento y disciplina; la única forma para lograr “la emancipación social i económica en las clases trabajadoras”.<sup>180</sup>

No obstante, una parte importante de su declaración de principios estuvo dedicada a restituir las demandas clásicas del mundo del trabajo de esos años: la reivindicación de las jornadas de 8 horas; reclamar la responsabilidad de los patrones en los accidentes de trabajo (en un momento en que no existía normativa alguna respecto a este asunto); jubilación a cargo del Estado para quienes se inutilizaran en el trabajo o por vejez. Al mismo tiempo, patrocinaba su organización y funcionamiento como sociedad de socorros mutuos y, principalmente, atendía iniciativas de educación para los asociados y sus hijos.

Otro de los aspectos que destacó de la mancomunal fue su capacidad para

conectarse con otras organizaciones similares que se fundaron a lo largo del país —lo que seguramente ayudaba a reforzar su prestancia a nivel local—. Por lo mismo, plantearon la necesidad de organizar el primer Congreso o Convención de mancomunales. También sus principales líderes patrocinaron la formación de entidades similares en ciudades de la región, tal como ocurrió en Talcahuano, Concepción y Lebu. Había que ayudar a construir la República Obrera Federal, una forma de hacerse fuertes y resistir a las entidades patronales y a las autoridades de un gobierno oligárquico. En ese afán llegaron a emplear, en más de una ocasión, el concepto de ejército mancomunal. En un tono desafiante, la Mancomunal de Lota i Coronel publicaba en su órgano oficial:

La espantosa miseria i las injusticias humanas que azotan despiadadamente a la clase obrera, ha hecho levantar un monumento de fuego en el corazón del pueblo trabajador, incendiando con sus ardientes llamas el espíritu frío e indiferente de los que hasta ayer doblegaban la cabeza como esclavos, sin protestar de los atropellos que frecuentemente descargaban sobre sus cabezas los capitalistas i patronos. Hoy ya es otro día, la antorcha luminosa de las modernas ideas sociales, ha alumbrado con sus poderosos rayos los oscuros cerebros de la multitud trabajadora i esta se da cuenta de la situación aflictiva por que atraviesa, i se siente avergonzada al estender su vista hacia el pasado, i solo se pregunta cómo puede haber tolerado impasible la pesada carga que ha llevado sobre sus fatigados hombros i piensa en la idea redentora que brota de su exaltado pensamiento que lo impulsa valientemente al camino de las reivindicaciones i de las conquistas de sus derechos desconocidos”.<sup>181</sup>

Había que crear un ejército mancomunal que hiciera frente a los atropellos y discutiera con los patronos las condiciones laborales, y que al mismo tiempo organizara a los trabajadores como forjadores de sus propios destinos y condiciones. Quizás el mayor esfuerzo hecho por la Mancomunal de Lota i Coronel fue su participación y organización del Primer Congreso realizado en Santiago (1904) por parte de las mancomunales que se habían forjado a lo largo del país.

Los dirigentes de la mancomunal se mostraron extraordinariamente activos durante el periodo que la entidad pudo funcionar, hasta que finalmente la

represión se hizo más intensa y sus directores terminaron encarcelados, como ocurrió con la mayor parte de sus congéneres en la primera década del siglo. De esta manera, no solo denunciaron los abusos de las empresas locales con los trabajadores, sino también fueron capaces de elaborar un discurso crítico que publicaron a lo largo de las páginas de su órgano de aparición quincenal. Asimismo, alentaron la creación de nuevas mancomunales, como en las localidades de Coronel, Talcahuano y entre gremios de artesanos en la ciudad de Concepción. Al mismo tiempo, elaboraron ácidas críticas al manejo de las empresas, a la persecución por parte de estas a los trabajadores federados (tal como se conocía a quienes habían resuelto enrolarse en la mancomunal), mantuvieron comunicaciones directas con figuras tan importantes como Abdón Díaz, uno de los liderazgos sobresalientes en el mundo salitrero y a nivel nacional.

A fines del año 1903 encabezaron un mitín, que congregó, según la prensa local, a cerca de 4.000 personas (trabajadores y sus familias), por la defensa de la producción local frente a la competencia desmedida del carbón importado, especialmente el combustible australiano que llegaba al país internado como lastre de los barcos que hacían el transporte salitrero. Los trabajadores señalaban a este tráfico como el causante de la cesantía local y exigían un mayor proteccionismo del Estado, cuestión que, curiosamente, los acercaba a los anhelos empresariales.

La mancomunal paulatinamente se fue perfilando en términos políticos y se identificó con los principales dirigentes que a nivel nacional se vinculaban con el Partido Demócrata.<sup>182</sup> Se interesó por la suerte corrida por Luis Emilio Recabarren e hizo de tribuna para publicar los escritos de líderes como Malaquías Concha, que para esa época aún utilizaba un discurso radical cercano a la suerte de los trabajadores explotados, a pesar de las grandes diferencias que los distanciaban al interior de la colectividad.<sup>183</sup>

Fue en mayo de 1904 cuando los dirigentes de la Mancomunal de Lota i Coronel se situaron en su mejor momento a nivel nacional. El día 15 de ese mes asistieron a la Convención de Mancomunales, celebrada en la ciudad de Santiago, reunión que fue presidida por Abdón Díaz y en la que al máximo dirigente local, Luis Morales, le cupo el honor de ser nominado como uno de los dos secretarios del encuentro. En dicha instancia estuvieron representadas las mancomunales de Tarapacá, Antofagasta, Chañaral, Taltal y Copiapó, por la zona norte; por Valparaíso, la Confederación Jeneral de Trabajadores en Chile, la

Unión de Obreros del Barón, la Unión de Zapateros, el Gremio de Panaderos, la Unión de Tripulantes de Vapores. Por Santiago, el Centro de Tapiceros y el Gremio de Panaderos (sección San Pablo). Finalmente, por la zona sur, la Mancomunal de Lota i Coronel, la Federación Marítima de Coronel y la Federación Mancomunal de Lebu.

Se trataba de una reunión auténticamente nacional, que afirmaba, tal vez exageradamente, representar a cerca de 40.000 afiliados.<sup>184</sup>

Sin duda, este tipo de organización se convirtió en el principal dolor de cabeza de las autoridades y gremios empresariales, pues en la reunión se editó un “Programa Jeneral de las Combinaciones, Confederaciones i Federaciones Mancomunales” que era el anuncio y un primer logro de este ciclo ascendente de la organización y movilización obrera. Dicha reunión acordó hacer suyo el estatuto elaborado por las mancomunales de Tarapacá, Valparaíso y Coronel, en cuyo segundo artículo afirmaban el

Compromiso de trabajar por la mancomunidad de los gremios de cada provincia con el propósito de que, mediante la diputación de cada gremio, se forme la Cámara del trabajo dentro de ella, como único medio que prevalezca la opinión autorizada del interés de cada gremio i que se establezca la primera representación del trabajo.<sup>185</sup>

Dicha organización se proyectaba para un mediano plazo, como el ariete del movimiento popular organizado, al mismo tiempo que eran conscientes de las dificultades para ampliar las bases sociales que pretendían representar. Tal como lo habían manifestado poco antes de la reunión, aspiraban a ajustar “nuestro modo de obrar, la propaganda futura para atraer a los gremios que aún permanecen indiferentes i tal vez en tres años de labor (sic) podemos ya autenticar nuestras potencias”.

La Convención de Mancomunales sirvió entonces para conocer la magnitud del mundo obrero organizado a lo largo del territorio nacional, y también para reconocer las potenciales fisuras existentes dentro del mundo popular asociado a los espacios fabriles, mineros y artesanales. Quizás el desencuentro que mayor aspereza produjo —y así fue comentado también por la prensa obrera y los

medios oficialistas— estuvo en las disputas surgidas entre la corriente cercana al Partido Demócrata, que se había mostrado muy activo en la conducción del órgano rector del movimiento mancomunal, y representantes de corrientes anarquistas que miraban con recelo la búsqueda de entendimiento con el Estado y sus órganos de representación. Si bien los dirigentes mancomunales trataron de minimizar el conflicto, mantuvieron una argumentación basada en el reconocimiento de la debilidad que aún mostraba el movimiento de trabajadores, afirmando “somos todavía muy pequeños para exigir por la fuerza”, en clara respuesta a los grupos que asomaban con propuestas más radicales, lo que llevó a la expulsión de los representantes anarquistas de dicha convención y a la profundización de las diferencias entre ambas corrientes de izquierda.<sup>186</sup>

La debilidad del grupo quedó en evidencia con la represión que se desató en la región minera, a raíz del movimiento contestatario de los trabajadores carboníferos. Muchos de los que habían participado en las huelgas reiteradas de esos primeros años, debieron sufrir en carne propia la arremetida patronal. Fueron comunes las noticias acerca del desalojo de trabajadores y sus familias, desde las habitaciones que las empresas disponían para el alojamiento de quienes contrataban. En junio de 1904, por ejemplo, 200 familias de trabajadores fueron afectadas por este tipo de medidas punitivas, que se acompañaron además con el uso de militares para contener el orden público y el encarcelamiento de los líderes mancomunales, que, como su presidente, Luis Morales, terminaron en los calabozos de Lota o Coronel.<sup>187</sup>

A pesar de la represión, los trabajadores realizaron esfuerzos para reunirse e inauguraron un espacio clásico en el movimiento obrero local: las reuniones en Playa Blanca, lugar predilecto que acogió a los trabajadores en los conflictos que se reiteraron durante, prácticamente, toda la década y la siguiente. Si bien se trató de formas de resistencia en que la huelga ocupó un lugar de privilegio, el ánimo de la dirigencia, y al parecer también de las bases sociales, fue posesionarse políticamente por la vía de la negociación y de los acuerdos, y fundamentalmente primó la idea de ampliar las bases sociales para otorgar legitimidad a la movilización.<sup>188</sup> No fue excepcional entonces que predominaran expresiones como “venid compañeros, hermanos de sufrimiento, venid i luchemos con las armas de la razón i de la justicia”, por sobre sentencias más radicales que otros actores sociales estaban esgrimiendo para ese momento.<sup>189</sup>

La represión y el amedrentamiento ejercido sobre los trabajadores, puso fin a una época de agitación y de avance de la organización del movimiento popular,

al menos en la magnitud que había logrado desarrollar hasta entonces. Sin embargo, su fermento no desapareció y siguió presente en la década siguiente. Durante esta, el sentido identitario estuvo vivo, tal como lo habían vaticinado los trabajadores al momento de su repliegue:

Como estaba anunciado, el domingo tuvo lugar la solemne reunión en Playa Blanca, donde se juntaron las dos federaciones, i hacer entrega honrosa del Estandarte social que, desde la prisión de los compañeros directores, estaba depositado en Coronel, huyendo también de la saña de los sabuesos que engordaron la tripa del mal año con sus maquinaciones. 1500 mineros solo de Lota concurren presurosos a saludar a su bandera sin temor de que mañana hubiesen sido vendidos.

¿Pueden los capitalistas pensar si podrán concluir con las federaciones?

Mientras quede una gota de sangre en las venas de los trabajadores ¡Nunca! No Importan las víctimas.<sup>190</sup>

En un ritmo muy parecido al exhibido por el movimiento popular en su conjunto, sobre todo después de la barbarie desatada en Santa María de Iquique en diciembre de 1907, los trabajadores del carbón entraron en latencia. Liderados todavía por dirigentes asociados al Partido Demócrata, mantuvieron sus rasgos identitarios y, al mismo tiempo, siguieron demandando sobre el Estado y las Compañías. Celebraciones del primero de mayo como la fiesta del trabajo y de los trabajadores, y conatos huelguísticos intermitentes y de corta duración, marcaron la actividad en el ámbito de las carboníferas sureñas y de sus pequeños pueblos de compañía. La represión y la indiferencia de las empresas para entregar solución efectiva a los pliegos obreros siguió marcando la tónica, con el agregado de que la violencia física sobre los trabajadores se hizo más radical. No fueron pocos los mineros que encontraron la muerte en choques con la policía y el Ejército, y tantas o más vidas cobraban las propias minas, dada la deficiente estrategia de seguridad al interior de los piques y galerías subterráneas y la

escasa supervigilancia estatal.

## LA HUELGA DE 1916 EN CURANILAHUE Y EL INICIO DE UN NUEVO CICLO MOVILIZADOR

La vida en los minerales estuvo marcada por la movilización permanente de los trabajadores, cuyos signos más recurrentes fueron la presentación de pliegos de peticiones a las empresas y las respuestas evasivas de las mismas, en un permanente flujo y reflujo de la marea social que se intentaba contener con mecanismos arbitrarios y escasamente empáticos.

Desde comienzos del año 1916, una serie de conflictos se sucedieron a lo largo de la región carbonífera. Algunos se solucionaron rápidamente por la vía pacífica, dependiendo muchas veces del estilo de administración de las minas, en otros las consecuencias fueron más dramáticas y alimentaron el distanciamiento clasista. Las demandas fueron más o menos parecidas y similares, también los términos en que se solicitaron. Se trataba de huelgas de naturaleza gremial, que paulatinamente fueron escalando hasta posesionar demandas de carácter más político, tal como quedó de manifiesto en las que movilizaron a la región en su conjunto.

Ese año se registraron huelgas en yacimientos muy disímiles por las circunstancias y las condiciones de trabajo, pero que acercaban a los trabajadores por estar sometidos a condiciones contractuales que operaban en términos que permiten suponer una cierta coordinación empresarial, incluso con empresas mineras más pequeñas que terminaron por ser absorbidas por la gigantesca Compañía explotadora de Lota y Coronel.

El 16 de marzo de 1916 se inició la huelga en Curanilahue, específicamente en la compañía Los Ríos, encabezada por los barreteros —los trabajadores más especializados y piedra angular de la producción—. A los dos días se plegaron por solidaridad, después de la masacre perpetrada sobre sus compañeros de oficio, los trabajadores Compañía Arauco de la misma localidad. En ambas situaciones se repiten las peticiones de los trabajadores: aumento de salarios, en esta oportunidad en un 50%; cambios en el sistema de pagos, exigiendo al menos ocho pagos en el año (en lugar de los cuatro existentes); supresión de las fichas



como retribución por el trabajo, cuestión solicitada a lo largo de todo Chile en este tipo de faenas; fin a los castigos arbitrarios en el cálculo salarial debido a la deficiente calidad del carbón extraído. Los 1.200 huelguistas movilizados solo consiguieron resolver parcialmente sus peticiones, porque ni las fichas ni las multas, y menos aún el sistema de trabajo de 24 horas seguidas que se aplicaba los sábados, desaparecieron. Sí lograron la reducción en las multas derivadas de la pureza del carbón extraído, una mayor preocupación por los accidentes de trabajo y ciertas garantías en alimentos expendidos por parte de la compañía.<sup>191</sup> En el caso de la Compañía Arauco, los trabajadores presentaron demandas similares. En todos estos casos no hubo aumento de salarios, no obstante ser este el periodo en que las compañías carboníferas alcanzaron sus mayores márgenes de utilidades.

Estas huelgas son recordadas por la comunidad de Curanilahue, pues en ellas la represión alcanzó dimensiones dramáticas. De acuerdo con la información de la Intendencia de Arauco, “hubo un choque el sábado 18 entre la tropa de líneas i los huelguistas resultando de estos, siete muertos i nueve heridos”.<sup>192</sup> La prensa de carácter oficialista, por su parte, retrató escenas bastante más dantescas y negaron la posibilidad de un enfrentamiento.

De acuerdo a El Sur, de Concepción, la represión estuvo a cargo del Regimiento Chacabuco, supuestamente a raíz del ataque de grupos de trabajadores al edificio de la administración de la empresa, pero el mismo medio rectifica e informa que se trataba más bien de una comisión, nombrada por los trabajadores, muy en sintonía con los mecanismos utilizados por la dirigencia demócrata. El medio destaca además que el número de trabajadores fallecidos fue de nueve y los heridos por proyectil de guerra, 17 personas más. Aseveró, también, que los que iniciaron los ataques con armas de fuego fueron empleados de la compañía que trataron de impedir que los trabajadores bajaran a los piques a alentar al resto para que se unieran a su acción de protesta. Una visión parcialmente distinta es la del comandante del destacamento, teniente de Ejército de apellido Soza, quien manifestó que una poblada de 800 a 1.000 personas intentó copar el recinto de las minas frente a lo cual debió abrir fuego. Finalmente, Pedro Fuentes, uno de los trabajadores heridos, relató los hechos de la siguiente manera:

“Íbamos como mil obreros a incitar a nuestros compañeros que trabajaban para invitarlos a que se plegaran a nuestro movimiento. Guardábamos una actitud

tranquila cuando de repente se nos hizo una descarga que dejó muertos a 9 de nuestros compañeros y 16 heridos, más o menos. Primero, dispararon los soldados del Chacabuco y después los empleados del establecimiento”.<sup>193</sup>

Con todo, la localidad de Curanilahue se vistió de luto y los primeros signos de solidaridad se empezaron a tejer en la cuenca carbonífera, especialmente en las minas cercanas a la amagada por la violencia de las compañías y el Estado.

La presencia de la muerte en los distritos mineros era permanente. No hubo actividad económica realizada en nuestro país en aquella época en que se generara mayor número de accidentes, y las víctimas fatales superan lo imaginable, así como quienes quedaron inutilizados parcial o totalmente en términos laborales.<sup>194</sup> Sin embargo, una cuestión muy distinta era que estas muertes se debieran a la represión de las policías particulares de las compañías, acompañadas en su afán represivo por el Ejército de línea. Estaba muy grabada en la memoria de las comunidades carboníferas el asesinato de decenas de víctimas en las masacres del norte del país (Iquique y Antofagasta), y ahora vivían los efectos de la represión en carne propia. El asesinato de trabajadores, incluyendo niños, potenció la identidad minera y la solidaridad entre los distintos yacimientos. Los mineros de la compañía Arauco, minas de Plegarias, distante a seis kilómetros, paralizaron sus funciones el mismo día de la masacre, mientras que los grandes yacimientos del Departamento de Lautaro mostraron su solidaridad con los compañeros del sur. Por otra parte, las circunstancias fueron ampliamente difundidas por los testigos, las organizaciones de trabajadores y la prensa local y regional que cubrió los dramáticos acontecimientos. La memoria de estas víctimas acompañó la trayectoria del movimiento sindical local y permitió que justamente fuera la región de Curanilahue la que encabezara la movilización huelguística por cambios más sustantivos en febrero de 1920. Fueron cuatro años de preparación de un nuevo esfuerzo, justamente en una época en que las empresas estaban saliendo de su periodo más exitoso y los trabajadores habían madurado su capacidad organizativa.

El camino para llegar a la huelga grande de 1920 fue largo y sembrado de movilizaciones parciales, en que los trabajadores fueron forjando sus formas organizativas y vínculos de solidaridad que les permitieron asumir paralizaciones más largas, creando un amplio tejido social. Numerosas huelgas parciales se generaron en los distintos distritos mineros, incluso en la misma localidad

amagada por la violencia de las autoridades. Por ejemplo, el mismo año 1916, pero en julio, se produjo una nueva paralización en la compañía Los Ríos de Curanilahue, esta vez el motivo era la solidaridad con los compañeros de la Compañía Arauco, es decir, justamente a la inversa de lo que había ocurrido meses antes. Paralizaron 1.250 trabajadores adultos y 250 niños mineros, al menos por seis días, y aunque no obtuvieron beneficios de parte de los patrones, sí fortalecieron los lazos que los ataron al conjunto de trabajadores.<sup>195</sup>

Se trataba de huelgas cortas, donde las empresas, en la mayoría de las oportunidades, respondieron en forma intransigente, tratando de preservar el principio de autoridad, sin negociación y menos cediendo a las demandas más importantes de los trabajadores. Paralizaciones breves no ponían en riesgo el cumplimiento de los compromisos empresariales con sus principales clientes. La huelga de 1916 es ilustrativa: se prolongó por ocho días y la paralización no impidió cumplir con la empresa de ferrocarriles demandante de combustible, mientras que se contabilizó la pérdida de salarios por parte de los trabajadores por un total de 65.000 pesos. Las ventajas de los trabajadores fueron mínimas a lo que se agrega la pérdida del empleo de varios. De hecho, una de las disposiciones más rechazadas por los trabajadores se mantuvo sin cambios, a pesar de los esfuerzos de las compañías por hacer más atractivas ese tipo de jornadas: “Jente al día que haga las veinticuatro se le paga el doble la noche de las 24 si no ha tenido falta en la semana”, consagrándose esta dura forma de explotación.

Quizás el signo más emblemático de esta huelga es que fue iniciada por 200 barreteros, el oficio más especializado en la escala laboral y, por lo mismo, los trabajadores con más poder al momento de decidir la paralización de las tareas, dada su posición central en la cadena productiva. Su iniciativa fue seguida por el resto de los trabajadores, que en número de 1.800 abandonaron sus tareas y desafiaron a las empresas.

La muerte de los trabajadores José Luis Figueroa, Carlos Oviedo, Eliseo Garcés, Honorindo Toledo, Andrés Ibarra, Eulio Alarcón, Rafael Sepúlveda, Francisco Fonseca, N. Vega y el niño-obrero Andrés Fierro, quedó grabada en la memoria de los trabajadores y sus comunidades.<sup>196</sup> Fue también un acicate para avanzar en el proceso de organización en el sentido de que, aprendiendo de su pasado, se diseñaran estrategias mejor elaboradas para enfrentar el dominio empresarial y la indiferencia estatal.

## EL CICLO ASCENDENTE DE LA PROTESTA OBRERA, LAS CLAVES DE 1920

Sin duda, lo que ocurría en la región carbonífera era el complemento de las transformaciones sociales y políticas experimentadas por el país en su conjunto. No solo los trabajadores de la región del carbón habían dado pasos importantes en su organización y en la construcción de lazos identitarios. Estos se fortalecían por los contactos estrechos que construyeron las organizaciones laborales y políticas que, como la Federación Obrera de Chile (

FOC

h), lograron articular su presencia a escala nacional. Como ya se señaló, el primer intento lo llevaron adelante las mancomunales a principios de siglo. En la segunda década era el turno de la

FOC

h y por su intermedio también el de otras iniciativas que, como la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (

AOAN

), movilizaron a trabajadores y trabajadoras de distinta extracción social a lo largo de Chile, cuyas acciones más importantes se verificaron justamente en el segundo lustro de la década que se había iniciado con el centenario. Quizás por su resonancia política y social, la

AOAN

impactó en la percepción que tuvieron las autoridades y los grupos oligárquicos de los cambios que se cernían sobre la realidad nacional y el riesgo sobre su capacidad de dominio hegemónico.<sup>197</sup> La Asamblea no solo había logrado convocar a organizaciones populares y de clases medias, y a cerca de 100.000 personas en uno de sus actos masivos, sino que además había extendido su influencia al resto del país.<sup>198</sup> Así, por ejemplo, en el verano de 1919, una

reunión de actores locales, en este caso del centro minero de Coronel, se hizo parte de una petición elevada al presidente de la República

En consecuencia, el pueblo pide a Vuestra Excelencia:

- 1°. Estatización de la moneda nacional.
- 2°. Creación de la Junta Nacional de Subsistencias.
- 3°. Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
- 4°. Derogación del decreto que alza las tarifas de los ferrocarriles del Estado.
- 5°. Dictación de una ley que garantice al obrero contra las intransigencias patronales cuando este reclama mejoras en sus condiciones de trabajo.

Excelentísimo señor

Las consideraciones, en que el pueblo obrero de Coronel se funda, para hacer estas peticiones, son las mismas que inspiran a la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, radicada en la capital de la República.<sup>199</sup>

En términos muy conceptuosos, los firmantes del documento reforzaban la idea de que el pueblo obrero de Coronel se encontraba expectante y confiado de la labor de la autoridad en un marco de “orden i respeto” propios de un ejercicio republicano. Esta es la postura que predominó en la experiencia colectiva de los trabajadores locales. Deseosas de no volver a repetir los trágicos sucesos de 1916, las organizaciones obreras y partidarias, como el Partido Demócrata, se mostraron respetuosas de los mecanismos legales disponibles para canalizar sus demandas, los que combinaron con energía y claridad de propósitos.

Por lo mismo, las movilizaciones huelguísticas de los años siguientes retomaron ese camino inicial de utilizar instancias formales, a través de la presentación de pliegos de peticiones, un acercamiento de los líderes sindicales a las instancias

administrativas de las empresas.

Sin duda, las peticiones laborales adquirirían un cariz más dramático, pues lo que estaba en juego no eran solo las mejoras sustantivas que los trabajadores solicitaban, sino que también, dada la intransigencia patronal, lo que estaba en cuestión era la mantención del empleo, el peligro de perder las habitaciones en las que se albergaban las familias obreras y en algunos casos las amenazas de lock out anunciadas por las propias compañías, tal como ocurrió en 1921. Este además era un momento de crisis por la caída de la demanda a la que se enfrentaron las empresas carboníferas. Hacia fines del año 1919 una cosa era clara, los trabajadores carboníferos y de la región habían urdido una trama bastante más sólida y la palabra solidaridad aparecía secundando las movilizaciones y huelgas. Por ello no es extraño que desde que se iniciaron una vez más los conflictos en Curanilahue, en febrero de 1920, se extendieran rápidamente hacia el conjunto de la cuenca minera, aunque a un ritmo que estaba marcado por las propias circunstancias locales de cada yacimiento. La gran diferencia con los conflictos anteriores era la idea de la huelga prolongada y general, por lo menos de los trabajadores mineros en su conjunto. Indudablemente esta era una situación compleja para la cual los empresarios no estaban preparados, y las autoridades políticas tampoco.

La huelga de 1920 marca un hito en la movilización obrera del conjunto de las provincias mineras de Arauco y Lautaro y del Gran Concepción, aunque sus ecos se hicieron oír a lo largo de todo el país. Naturalmente, las circunstancias eran otras. El país estaba en crisis, la posguerra había prácticamente barrido las exportaciones salitreras y más de 40.000 trabajadores deambulaban en busca de trabajo. Pero, además, los niveles de politización habían avanzado en su vertiente socialista. No solo el Partido Obrero Socialista (

POS

) había crecido en representación, sino también, con Recabarren a la cabeza, se había atrincherado en la

FOC

h, la sindical obrera más grande del periodo.

Para el caso que nos ocupa, los consejos federales, de la Federación Obrera de Chile, lideraban los eventos movilizadores en el sur de Chile y del país en su

conjunto. Todavía sin convertirse en la sindical roja, su discurso era lo suficientemente clasista para ser motejada como la representante del maximalismo en Chile. Las conexiones de la Federación estaban absolutamente ramificadas, por lo que una movilización liderada por ella en la zona del carbón perfectamente podía tener eco en la región de Concepción en su totalidad. De hecho, la convención que determinó su integración a la sindical roja internacional se llevó a efecto a fines de ese año en esa misma ciudad. Además, el despliegue a nivel nacional de la Federación fortalecía los contactos del sur carbonífero con los centros salitreros y cupríferos del norte, así como con las grandes organizaciones obreras en la ciudad de Santiago y Valparaíso, desde las cuales llegaban las notas de solidaridad, y también erogaciones necesarias para sostener el conflicto. Su vinculación con sectores medios, representados por la Federación de Estudiantes de Chile (

FEC

h), tampoco era despreciable, toda vez que los núcleos estudiantiles se venían expresando con radicalidad desde la década anterior, por lo que no es raro que se haya desarrollado una campaña de hostigamiento que llevó a muchos de sus dirigentes a la cárcel, al exilio o a la muerte.<sup>200</sup>

No hubo indiferencia respecto de la efervescencia social desatada a partir de la Huelga Larga, como se le denominó. Los motivos son varios. Desde el punto de vista patronal se trataba por primera vez de enfrentar una huelga general, que hacia mediados del conflicto incluía a todos los centros mineros de la región, pero además a aquellos ubicados en la vecina provincia de Valdivia. También se incorporaron los trabajadores de los muelles y asociados al transporte naviero, así como los ferrocarrileros de la compañía Arauco. Una huelga con esa capacidad de convocatoria puso en sobresalto no solo a los propietarios, sino también a las autoridades locales (Intendencia) y nacionales, preocupadas por el funcionamiento normal del país, dada la importancia estratégica del carbón a nivel nacional, y de la cual los trabajadores estaban conscientes.

Los senadores de la república discutieron ampliamente la evolución de las manifestaciones de descontento social, pasando de las miradas iniciales más halagüeñas, de senadores como el liberal Enrique Zañartu, a denuncias acerca de agitadores extranjeros que envenenaban y “perturbaban la vida tranquila de nuestros obreros”, de acuerdo al conservador Barros Errázuriz, compañero del anterior en el hemiciclo.<sup>201</sup> Para la situación del carbón el análisis catastrofista no

estuvo muy distante y se culpaba a las ideas maximalistas que dañaban a la nación en su conjunto amenazándola con dejarla sin combustible. El transporte nacional (ferrocarriles y transporte naviero), la incipiente actividad industrial (calderas), el mundo urbano (alumbrado de gas) y el sector exportador se veían amagados por una movilización tan vasta y, al pasar los días, de tanta prolongación.

La huelga también marca un hito pues, a regañadientes, las compañías se vieron obligadas a negociar, acudiendo a la intermediación del Estado y la puesta en práctica del decreto Yáñez de conciliación y arbitraje, publicado en diciembre del año 1917. El salto adelante era notable, pues obligaba a los propietarios a conferenciar con sus trabajadores y eventualmente ponerse de acuerdo, aunque las empresas demoraron al menos un par de meses en aceptar la medida, presionados por el gobierno que debía buscar una salida a esta nueva estrategia proletaria: la huelga prolongada. En dicha circunstancia, la huelga no solo comprometió a los trabajadores y trabajadoras asociados a la industria carbonífera, sino también a sus familias y comunidades más amplias, resaltando el liderazgo de mujeres como Micaela Troncoso, Dolores Amaya, Zoila Rubio, Isaura Visquet, Paulina Galloso y Tránsito Arriagada, quienes fueron resaltadas por la prensa obrera local.<sup>202</sup>

Las tratativas negociadoras se iniciaron solo el 26 de abril, cuando las compañías designaron a sus representantes, entre ellos Carlos Cousiño, mientras que los trabajadores propusieron a Isaías Inostroza, Pedro Segundo

Robles y Samuel Broughton, este último un importante líder obrero que sin embargo se rendiría a la presión empresarial y encabezaría, más adelante, la Federación del Trabajo, invento sindical de las compañías para intentar mellar el dominio de la

FOCH

en los reductos carboníferos.<sup>203</sup> Es el camino que se siguió en una serie de conflictos que movilizaron a la región en su conjunto hasta 1922-1923, y luego en paralizaciones parciales que no se detuvieron hasta que en julio de 1927 se impuso la dictadura ibañista.

El ejemplo de los mineros es notable. Primero porque fueron capaces de redactar pliegos de peticiones que, si bien se concentraban en propuestas de



transformación gremial, también apuntaban a la posibilidad de consolidar sus formas de organización, incluyendo sus orgánicas proto sindicales y los mecanismos de difusión de sus ideas a través de la prensa obrera y la defensa de la creación de espacios de representación autónomos como los consejos federales. Como corolario de esto, la organización de trabajadores y trabajadoras se articuló en torno a una organización nacional, la

FOC

h, que ya había iniciado su viraje hacia propuestas socialistas y anticapitalistas después de su convención de 1919. Así se dio origen, desde 1920, a una serie de consejos federales que además estaban articulados a nivel provincial. De acuerdo al Boletín de la Oficina General del Trabajo, en 1921, existían los consejos federales dependientes de la

FOC

h, distribuidos de la siguiente manera: en Concepción, 12 de diversos gremios (no mineros); en Schwager y Coronel (mineros); en Coronel, 3 (de obreros de maestranza); en Puchoco Schwager y Coronel, 1 femenino; en Coronel, 4 de mineros; en Maule y Coronel, 5 de mineros; en Lota, 1 de mineros; en Playa Negra, 2 de mineros; en Lebu, 1 de mineros; en Curanilahue, 1 de mineros; en Plegarias y Curanilahue, 9 de mineros; en Ramadilla, 1 de mineros, Lirquén, 1, y en Colico, 1 de mineros.<sup>204</sup> Se trata de una densa red de organizaciones que permitió como nunca antes la articulación de toda la región para intentar poner en jaque a las empresas, pero también a las autoridades que hasta entonces habían sido más bien indolentes.

Desde el punto de vista de las conquistas la huelga del año 20 también fue importante, aunque muchas de sus reivindicaciones consideradas por los laudos arbitrales, especialmente el dirigido por Luis Antonio Vergara, finalmente fueron tergiversadas por los administradores empresariales. Sin embargo, un informe técnico económico elaborado por el Ministerio de Obras Públicas daba a conocer los efectos negativos (desde el punto de vista de las empresas) de las medidas recomendadas por el laudo arbitral sobre la marcha de las compañías. En ese informe se reconocía el aumento de los costos y la baja de la producción debido a la implementación de tres turnos de trabajo, la disminución de las horas de labor y el exceso de días feriados derivados de los pagos mensuales.<sup>205</sup>

Así entonces, se regularizaron los pagos en periodos más breves hasta alcanzar remuneraciones mensuales; se puso fin al sistema de un turno largo de 24 horas los días sábados, que las empresas utilizaban para resarcirse de las pérdidas ocasionadas por el ausentismo laboral, especialmente provocado por los llamados “san lunes”; se reconoció la posibilidad de organizarse y finalmente se avanzó en la instauración de la jornada de ocho horas por parte del conjunto de las compañías, aunque, al igual que algunas otras concesiones, fueron burladas en el periodo siguiente.

La otra gran transformación fue el desplazamiento del liderazgo en favor del

POS

y luego del Partido Comunista en la conducción y organización de estas movilizaciones, a través de los Consejos Federales de la

FOC

h, toda vez que la Federación había sido copada políticamente por estos liderazgos.

Quizás el mayor peligro de una movilización de esta naturaleza, general y prolongada, era la capacidad de influenciar con su ejemplo a otros gremios y trabajadores de áreas productivas distintas de las actividades extractivas. Un detallado informe del Inspector del Trabajo instalado en la ciudad de Concepción informaba a sus superiores en Santiago la enorme movilización a fines de 1920 que articuló a todos los trabajadores carboníferos, dados los incumplimientos de las empresas. Lo diferente esta vez es que a esa movilización se unieron trabajadores y trabajadoras de toda la región, superando, de acuerdo al funcionario público, los 40.000 movilizandos, lo que incluía a mineros, gentes de mar, además de la masa laboral de las compañías azucareras, molineras, textiles, ferrocarrileras, tracción eléctrica, fábricas de cerveza, del dique del puerto de Talcahuano y varias otras empresas menores.<sup>206</sup> El peligro para el “orden establecido” era evidente, si además pensamos que dichos eventos se repitieron con mucha recurrencia, así como el peso del “maximalismo izquierdista” en su dirección y la fuerte identidad proletaria que se había construido.

Cuando estalló la segunda Huelga Larga, el 31 de diciembre de 1921, se reafirmaron muchas de estas sospechas por parte de los directores de empresa y las autoridades locales y nacionales. Era el comunismo nacional y sus

vinculaciones externas el que asumió la conducción junto a los referentes locales de la

FOC

h (Consejos), como la Junta Provincial de la Federación, ubicada en Concepción, y la Junta Central con sede en Santiago. Si bien esto puede leerse como positivo, por el apoyo del cual podían disponer, también entrabó la posibilidad de tomar decisiones en términos más eficientes y dinámicos y muchas veces las demandas locales y sus acciones debieron subordinarse a los criterios de la entidad a nivel nacional, en un marco caracterizado por el estado permanente de movilización local, realización de asambleas y presiones de los trabajadores sobre sus respectivas compañías.

Con todo, las compañías y el Estado debieron ocupar toda su imaginación para frenar la autonomía obrera. Todos los medios fueron puestos en marcha, algunos ya habían sido probados a lo largo de todo el periodo que había comenzado a inicios de siglo, como la represión selectiva y general de los trabajadores, enfocada especialmente en contra de los “indeseables”, tal como quedó inscrito en los prontuarios que las empresas construyeron en relación a cada uno de los trabajadores. Los otros mecanismos fueron mucho más novedosos. Dada su trascendencia, resaltan aquellos relacionados con las propuestas de transformación dirigidas de las relaciones sociales más allá de los espacios de trabajo; el impulso a la creación y estímulo de formas alternativas de organización obrera, así como la transformación profunda de las relaciones laborales, sobre todo de los mecanismos de contratación. No es arbitrario que, en 1922, en medio de la conmoción por la movilización obrera, se creara por parte de la Compañía de Lota el Departamento de Bienestar —y que fuera seguida en esa línea por todas las demás compañías de primer orden—, institución que pretendió incidir, y efectivamente lo hizo, en la vida de la comunidad carbonífera. No solo los trabajadores fueron condicionados por la acción de las ocho secciones en que fue organizado el departamento, sino que también el tejido familiar y las expresiones de vida colectiva ejercidas por los habitantes del pueblo administrado por la Compañía. Una segunda propuesta para enfrentar la radicalidad obrera fue el intento de dividir a los trabajadores, para ello la Federación del Trabajo —diseñada y financiada por la patronal— vino a competir, o al menos eso intentó, con el influjo de la

FOC

h en la región. En términos forzados o no, lo cierto es que en el corto plazo la nueva organización contaba entre sus filas a cientos de trabajadores y hacía más difícil la llegada de la

FOC

h al conjunto de trabajadores, sin tener que enfrentar la competencia que supuso esta nueva organización patrocinada por la Asociación del Trabajo, brazo representativo del sector empresarial.<sup>207</sup>

Finalmente, el reforzamiento del trabajo a trato condenó a los obreros al trabajo sistemático y autoexigente para alcanzar ingresos más altos. Ello, combinado con importantes transformaciones tecnológicas, particularmente en el plano de la extracción, favorecieron el retorno del control productivo a manos empresariales. La incorporación de cercadoras mecánicas, por ejemplo, permitió a los empresarios librarse de la posición estratégica de barreteros y disminuir así la capacidad disruptiva de los trabajadores más importantes en las labores subterráneas. Con todo, el periodo que se extendió hasta mediados de 1927 fue el escenario de confrontación entre las nuevas políticas empresariales y la movilización de los trabajadores. Es evidente que los trabajadores habían avanzado notablemente en sus demandas, organización y politización, pero también lo es que las empresas desplegaron enormes esfuerzos para conjurar el peligro, amparadas además por las iniciativas estatales en los ámbitos de las políticas sociales, que con el populismo alessandrista al menos habían alcanzado el plano de las definiciones. Cuando lo anterior ya no fue suficiente para conjurar el peligro, quedó el recurso de la violencia estatal y eso vino de la mano de Ibáñez con su propuesta autoritaria y populista.

## CONCLUSIONES

Cuando los trabajadores de primer turno de la mina Los Ríos de Curanilahue decidieron no bajar a realizar sus funciones, el 8 de marzo de 1920, probablemente no imaginaban que estaban dando el paso inicial del que quizás sea el conflicto más importante de la región carbonífera en el sur de Chile, por lo menos hasta entonces. La “Huelga Larga” tuvo varias características que la colocan en ese sitio. Por una parte, fue el punto de partida para un periodo en

que la movilización de trabajadores fue capaz de permear a la región carbonífera en su conjunto. Todos los asientos mineros, desde Lebu por el sur hasta Lirquén por el norte, participaron de la movilización y pusieron en jaque la producción de carbón, esencial en un país que aún desenvolvía su matriz productiva con ese combustible fósil. En segundo lugar, fue la primera de varias huelgas prolongadas que se sucedieron a nivel regional, pues desavenencias similares se repitieron en los años 1921 y 1922, que además, en algunos casos, se propagaron a otras actividades productivas regionales y nacionales, poniendo en alerta a la administración de turno, aún de corte oligarca, y por supuesto a los sectores empresariales que vieron en estas movilizaciones el fantasma del maximalismo comunista, el que, en su visión, había dejado de ser un fantasma y ahora se paraba en carne y huesos frente a ellos. Es más, la movilización alcanzó tantos bríos que solo la dictadura ibañista logró aplacar su empuje, aunque los efectos sociales más profundos no se detuvieron. Así entonces, dicha movilización dejó profundas huellas. Por una parte, obligó a la autoridad y a los empresarios a reconocer la capacidad negociadora de los trabajadores y de sus dirigencias. Mecanismos que habían asomado tímidamente en los años previos se establecieron como estrategias para lograr contener una marea social que amenazaba con desbordarse. Los tribunales de Conciliación y Arbitraje surgieron entonces como la alternativa a la cual se aferraron las élites administrativas para hacer más legítimas sus tradicionales herramientas represivas y dejaron en manos de laudos, dictados por hombres probos, la solución de los desacuerdos.

Las huelgas permitieron reconocer varias cualidades de los trabajadores carboníferos, al menos hasta ese momento. En primer lugar, la posición estratégica que ocupaban, en un tipo de minería que aún seguía dependiendo del trabajo, masificado, oportuno, permanente y muchas veces calificado, sobre todo de aquellos que ocupaban espacios específicos en las líneas de producción, tales como los barreteros, por ejemplo, formados en un oficio a lo largo de los años, difíciles de reemplazar en un momento en que las empresas no habían optado por una transformación tecnológica profunda de sus instalaciones. En segundo lugar, a esas alturas, después de casi dos décadas en que se habían construido las primeras formas de representación gremial, los trabajadores habían dado pasos sustantivos por lo menos en tres aspectos: sus formas de organización, sus mecanismos de representación política y la generación de identidades políticas, sociales y culturales que les permitieron entenderse a sí mismos como una pieza fundamental en el aparato productivo y en la construcción de la nación. Es justamente esta coyuntura histórica la que evidenció el desplazamiento de la

influencia demócrata y radical sobre los trabajadores y sus organizaciones, por una más elaborada articulación promovida por la

FOC

h y el recién creado Partido Comunista, que a lo largo de esa década que se inicia con el conflicto sentaron sus bases en el golfo de Arauco, epicentro de la región minera.

Por último, estas huelgas mostraron su capacidad para poner en tela de juicio no solamente el orden productivo, sino también la conformación política y social de la nación y obligaron a los poderes centrales del Estado y a las organizaciones empresariales a realizar enormes esfuerzos para ensayar de qué otra manera podían relacionarse con los sectores populares, los trabajadores organizados y la fuerza de trabajo que precisaban para desarrollar sus proyectos de acumulación. El movimiento de los trabajadores del carbón y quienes los acompañaron en su gesta reivindicativa, debe considerarse como parte de las demandas concretas y acuciantes con las que los trabajadores y trabajadoras obligaron a las élites dominantes, que se definían como progresistas, a transformar la institucionalidad del Estado, para a través de su cumplimiento, garantizar la paz social. Del mismo modo, los empresarios, no solo carboníferos, debieron incorporar nuevas ideas y estrategias para asegurar el concurso de los trabajadores, negociar con sus representaciones e incidir en la vida material, social y cultural de sus colaboradores. Había pruebas suficientes de que, en ambos casos, la fuerza bruta y la arbitrariedad no eran suficientes para sofocar las demandas legítimas de un pueblo organizado que se sabía importante desde el punto de vista productivo. Fue solo la dictadura ibañista la que logró poner freno, al menos en forma transitoria, a la movilización obrera. Sin embargo, los hombres y mujeres del carbón habían avanzado notablemente en su identificación de clase, un proceso que a todas luces fue acompañado por los cambios que operaron a nivel nacional y se confundió con ellos.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Brito, Alejandra y Ganter, Rodrigo, “Cartografías de lo cotidiano: usos, relatos y disposiciones del espacio en el contexto de la industria minera y textil del Gran Concepción (1940-1973)”, en Revista Austral de Ciencias Sociales, 33, Universidad Austral, Valdivia, 2017.

Craib, Raymond, Santiago Subversivo 1920. Anarquistas, universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas,

LOM

, Santiago, 1917.

DeShazo, Peter, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile: 1902-1927,

DIBAM

, 2007.

Figuerola, Consuelo, Revelación del subsole. Las mujeres en la sociedad minera del carbón 1900-1930,

ICSO

-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2009.

Figuerola, Enrique y Sandoval, Carlos, Carbón: cien años de historia (1848-1960),

CEDAL

, Santiago, 1987.

Godoy, Milton, “Las casas de la empresa: paternalismo industrial y construcción de espacio urbano en Chile: Lota, 1900-1950”, en Universum, 30, 1, Universidad de Talca, Talca, 2015.

Mazzei, Leonardo, “Los británicos y el carbón en Chile”, en Atenea, 475, Concepción, 1997.

, “Expansión de gestiones empresariales desde la minería del norte a la del carbón, Chile, siglo XIX”, en Boletín de Historia y Geografía, 14. 1998.

Morales, Diego, “Crisis de la autoridad patronal y el surgimiento de la Federación del Trabajo en Lota, 1922-1930”, en Videla, E.; Venegas, H. y Godoy M., El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1940, América en Movimiento, 2016.

Noiriel, Gerard, “Du ‘patronage’ au ‘paternalisme’: la restructuration des formes de domination de la main d’oeuvre ouvrière dans l’industrie méta- llurgique française”, en Le Mouvement Social, 144, 17-35, 1988.

Ortega, Luis, “La industria del carbón de Chile entre 1840 y 1880”, en Cuadernos de Humanidades, 1, Universidad de Santiago, Santiago, 1988.

, “La frontera carbonífera, 1860-1900”, en Revista Mapocho, 31, Santiago, 1992.

Pavilack, Jody, Black Gold in the red zone. Repression and contention in Chilean coal mining communities from the Popular Front to the advent of the Cold War, Duke University, 2003.

Peñafiel, Óscar, “Cuerpos fuertes, conciencias dóciles. La construcción del obrero soñado a través del deporte en la cuenca carbonífera, 1920-1950”, en Videla E.; Venegas, H. y Godoy, M., El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1940, América en Movimiento, 2016.

Pinto, Julio, Luis Emilio Recabarren. Una biografía histórica,

LOM

, Santiago, 2016.

Rock, María Esperanza, Voces de Lota: relatos de la ciudad del carbón, Santiago,



2018.

Videla, Enzo, “Los departamentos de bienestar en las compañías carboníferas y la implementación de un programa de higiene y medicina social, 1923-1952”, en Videla, H.; Venegas, H. y Godoy, M., El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1940, América en Movimiento, 2016.

Venegas, Hernán, “Políticas de bienestar y control social en la minería del carbón. Las experiencias de Lota y Coronel en el siglo

XX

”, en Revista Atenea, 511, Concepción, 2015.

, “Paternalismo industrial y control social. Las experiencias disciplinadoras en la minería del carbón en Chile, Lota y Coronel en el siglo XX”, en Cahiers ALHIM, Universidad de París, 8, París, 2014.

, “La posición estratégica de los trabajadores del carbón en Chile. De su fortaleza a la crisis, 1920-1960”, en Anos 90. Universidad Federal Río Grande do Sul, 19, 35, 2012.

, El carbón de Lota. Textos y fotografías del siglo XIX. Las visiones de Francisco Marcial Aracena y Guillermo E. Raby, Pehuén, Santiago, 2008.

, “Crisis económica y conflictos sociales y políticos en la zona carbonífera, 1918-1931”, en Contribuciones científicas y tecnológicas, Área Ciencias Sociales y Humanidades, 116, 1997.

, Morales, Diego, “Gestión paternalista y tecnología, una elección compleja. La

compañía carbonífera e industrial de Lota (1920-1940)”, en Revista Diálogo Andino, 58, 2019.

, “Trayectorias de vida y paternalismo industrial: la compañía carbonífera e industrial de Lota, Chile 1920-1950”, en Revista Historia 396, 9, n 2, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2019.

Womack Jr., John, en Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros,

FCE

, México, 2007.

\* Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.

## **IV. LA CALLE ES POLÍTICA: MOVILIZACIÓN OBRERA EN LA CIUDAD Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA.**

**SANTIAGO, 1905-1924**

JORGE NAVARRO LÓPEZ

### **INTRODUCCIÓN**

Los hechos que hemos presenciado desde octubre de 2019 han venido a recordarnos que el binomio agitación/represión es un fenómeno de larga duración en Chile y que las protestas populares no solo son protagonizadas por la clase obrera, sino también por la policía. Otro tema que se ha restituido en la discusión pública es la pertinencia o no de la utilización del espacio urbano como un lugar para hacer política. En conjunto, este tipo de discusiones nos sitúan en el debate sobre los medios y las formas de hacer política que tienen los sectores populares y, también, sobre la manera en que el Estado las enfrenta. Para contribuir a este debate, el objetivo de este artículo es analizar las formas e itinerarios de protesta desarrollados por la clase obrera en el primer cuarto del siglo

XX

y, también, los métodos de su contraparte: la represión estatal. En este sentido, el análisis que sigue busca responder dos preguntas: ¿de qué manera los obreros expresaron en el espacio urbano sus reivindicaciones y su protesta? Y, derivado de lo anterior, ¿cómo respondieron los sectores dominantes?

Históricamente, la clase obrera ha desarrollado distintos mecanismos para expresar sus reivindicaciones. La más extendida ha sido la huelga, es decir, cuando un grupo de trabajadores paraliza sus faenas con el fin de obtener sus

exigencias. Aunque muchas veces los huelguistas exceden el espacio de trabajo (la fábrica o el taller) y se vuelcan a la ciudad para presionar por el cumplimiento de sus reivindicaciones, estos movimientos no siempre tienen un carácter o una exigencia política. A diferencia de la huelga, la utilización del espacio urbano para protestar tiene una clara finalidad política. Grupos u organizaciones convierten a la ciudad en el escenario de sus manifestaciones públicas, porque estiman que de esa forma pueden comunicar ante el poder y al resto de la sociedad sus ideas, propuestas o exigencias.

Así entendida, la protesta urbana ha sido un método de presión, una forma de lucha y un acto de poder. Y como tal, a lo largo de la historia republicana de Chile han existido manifestaciones urbanas de distinto signo ideológico y con diversos resultados. A pesar de que no son un fenómeno exclusivo del siglo

XX

, fue durante sus primeras décadas que las manifestaciones callejeras se convirtieron en el medio de presión del movimiento obrero con mayor resonancia pública. En este trabajo me interesa analizar la manera en que la protesta fue utilizada con fines políticos por los trabajadores organizados, en especial, profundizando en las formas e itinerarios que adoptaron las manifestaciones callejeras, desde la revuelta de octubre de 1905 hasta la crisis del orden oligárquico en 1924. Durante este periodo, el movimiento obrero fue ampliando el rango de sus movilizaciones, tanto en términos políticos como espaciales, y si bien siguieron operando las modalidades de la tradición mutualista, se fueron incorporando nuevos elementos que perfilaron el carácter clasista y de oposición. Este tránsito hizo que desde 1920 la represión policial se agudizara y, como consecuencia de aquello, que el discurso obrero adoptara un tono más radical.

## DEL REFLUJO DE LAS MATANZAS OBRERAS A LA ACTIVACIÓN DE LA PROTESTA CALLEJERA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Devotas, nacionalistas, conservadoras y también en una incipiente clave clasista, la protesta callejera fue ganando presencia en la capital desde el último cuarto del siglo

## XIX

. Con la consigna de la defensa y protección de la industria nacional como estandarte, obreros y artesanos fueron ocupando las calles de Santiago y de las principales ciudades del país con mítines y concentraciones. En 1875, la finalmente fallida candidatura presidencial del político liberal Benjamín Vicuña Mackenna movilizó a importantes contingentes obreros en la que ha sido calificada como una “campana política de masas”. El llamado a la participación popular en las manifestaciones callejeras volvió a escena en abril de 1888, cuando el novel Partido Democrático (

PD

) implementó una “gran campana de masas” para protestar por el alza en el precio del pasaje de los tranvías. En aquella ocasión, y como sucedería muchas veces más en el futuro, los mítines y discursos dieron paso a la destrucción de los vehículos de transporte colectivo.<sup>208</sup>

La guerra civil de 1891 enfrió por un tiempo los caldos de la cuestión social santiaguina, hasta que una nueva alza —esta vez del precio de la carne— motivó la protesta popular callejera. A fines de octubre de 1905, una manifestación pública que tenía por objeto pedir la derogación del impuesto a la carne argentina terminó en una revuelta urbana de varios días, dejando más de un centenar de muertos. El escenario fue el centro de la capital, espacio del poder político y económico. Fue allí donde varios miles de trabajadores destruyeron mobiliario público, plazas, monumentos y atacaron violentamente a las odiadas casas de empeño, a algunos bancos, al edificio e imprenta de El Mercurio y también a varias mansiones de potentados políticos.<sup>209</sup> Lo que comenzó como una protesta cívica terminó en una revuelta con un marcado signo de clase.<sup>210</sup>

No tienen que haber sido pocos los que desde los balcones del exclusivo Club de la Unión observaron horrorizados cómo grupos de obreros/as, artesanos, gañanes y niños “lanzaban argumentos de adoquines”<sup>211</sup> para expresar su descontento atacando y destruyendo los símbolos de la ciudad oligárquica. Según Sucesos, una de las revistas de la élite, quienes ocasionaron los desórdenes en octubre de 1905 no eran más que una “turbamulta inconsciente, bullanguera, sedienta de pillaje [...] azuzada por algunos individuos de pésimas doctrinas”, a la cual había que diferenciar de los organizadores del mitín —las “clases obreras”— que por su “orden y compostura observados merecen el aplauso de todos”.<sup>212</sup> Esta

lectura era compartida por una parte de la clase obrera organizada, en especial de los sectores cercanos al mutualismo. Refiriéndose a la conmemoración del 1 de mayo de 1907 una revista de esta corriente utilizaba términos similares a los de Sucesos: “Muchos temían en ese día una repetición de las asonadas de octubre del año 1905. Pero esos temores eran infundados: las sociedades obreras, luciendo con orgullo sus estandartes y banderas prestigiaban el movimiento e imponían respeto a las turbas de vagabundos y curiosos”. Los mutualistas santiaguinos comprendían que de esta forma se diferenciaban de la “turbamulta inconsciente” y demostraban el progreso y la educación de una parte de la clase obrera, es decir, expresaban públicamente su cultura. Por ello llamaban a no olvidar que “un pueblo culto y regenerado consigue su demanda cuando se basa en la justicia y razón; pero un pueblo ignorante, que ve en la fuerza su poder, es desoído y repelido con la fuerza del sable y del cañón”.<sup>213</sup> Esta postura, que de cierta manera justificaba la represión estatal frente a la protesta popular, ponía de manifiesto las diferencias que ya existían entre los diversos grupos que buscaban movilizar a los trabajadores y que con los años fue distanciando a los sectores moderados de aquellos que sostenían su acción política en la lucha de clases, como lo hacían anarquistas y socialistas.

Con la matanza de diciembre de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique se cerró el ciclo represivo que le otorgó —sin que lo buscara— el carácter de “heroico” al movimiento obrero de la primera década del siglo

XX

. La violencia represiva del Estado aquietó la protesta popular por un breve periodo, hasta que el movimiento obrero fue reforzando sus organizaciones, que transitaban hacia instancias con un discurso más abiertamente político. Anarquistas y socialistas se esforzaron por sistematizar las orgánicas de trabajadores y comenzaron a hacer política, aunque con diferentes estrategias. La corriente socialista que militaba en el

PD

se nucleó en 1912 en el Partido Obrero Socialista (

POS

), que al poco tiempo de fundado ya contaba con pequeñas secciones en las principales ciudades del país. En Santiago, la agrupación socialista se formó en

septiembre de 1912 y uno de sus líderes, el obrero pintor Manuel Hidalgo, era un destacado y reconocido organizador de manifestaciones públicas. Entre su palmarés como dirigente resaltaba la organización en 1909 —cuando aún pertenecía al

PD

— de la conmemoración del 1º de mayo, en la que los demócratas tuvieron un importante rol dejando en un segundo plano a los anarquistas,<sup>214</sup> uno de los grupos más activos en las luchas obreras de la primera década del siglo

XX

.

La más universal de las fechas del calendario obrero fue motivo de disputa entre las distintas organizaciones de trabajadores chilenos. Para la línea más moderada se trataba de un día para celebrar la “fiesta del trabajo”, mientras que los más radicales la comprendían como un día de lucha y protesta. A pesar de estas diferencias, cada 1º de mayo unos y otros recordaban a los “mártires de Chicago” y seguían manteniendo la aspiración de la jornada laboral de ocho horas. Además de diferir en las estrategias, ambas posturas entendían también de distinta manera el modo de ocupar la ciudad para protestar y manifestarse. Los mutualistas preferían concentrarse en el centro y luego reagruparse en sus locales sociales. Este formato era también el que los medios periodísticos de la élite consideraban adecuado. Luego de felicitar a las sociedades obreras que el 1º de mayo de 1912 habían realizado “con gran entusiasmo, excursiones campestres y otros festejos preparados de antemano”, uno de los redactores de Zig-Zag se lamentaba, sin embargo, de que “no todo fue correcto en el día de la fiesta del trabajo”. ¿Cuál conducta era la incorrecta? La tomada por un “grupo numeroso de obreros encabezados y dirigidos por una sociedad subversiva”, que había decidido efectuar “una manifestación impropia a través de los barrios más concurridos de la ciudad”. Lo inadmisible y subversivo, entonces, era que los trabajadores transitaran por lugares que no eran los suyos, porque eran “propios” de otra clase, como el frontis del palacio de gobierno (La Moneda), la Alameda y la comercial calle Estado, ruta que siguió la marcha obrera hasta terminar sin “desórdenes, gracias a la bonhomía policial”,<sup>215</sup> en la plazuela Recoleta, estación final que calmaba las ansiedades del redactor. La ladera norte del río Mapocho parecía ser un lugar más adecuado para el proletariado que las burguesas



avenidas del centro de la capital, aunque su presencia allí durara unas pocas horas. En una ciudad organizada para funcionar de acuerdo a los intereses capitalistas, el problema no radicaba en que los trabajadores transitaran por aquellos lugares, lo subversivo era que lo hicieran no en su condición productiva sino en su condición política.

#### MAPA 1:

*Conmemoración del 1º de mayo de 1912<sup>216</sup>*

 INICIO MARCHA PRINCIPAL

INDEPENDENCIA

RECOLETA

LA VEGA

RÍO MAPOCHO

PZA.  
DE ARMAS

CONGRESO

TRIBUNALES

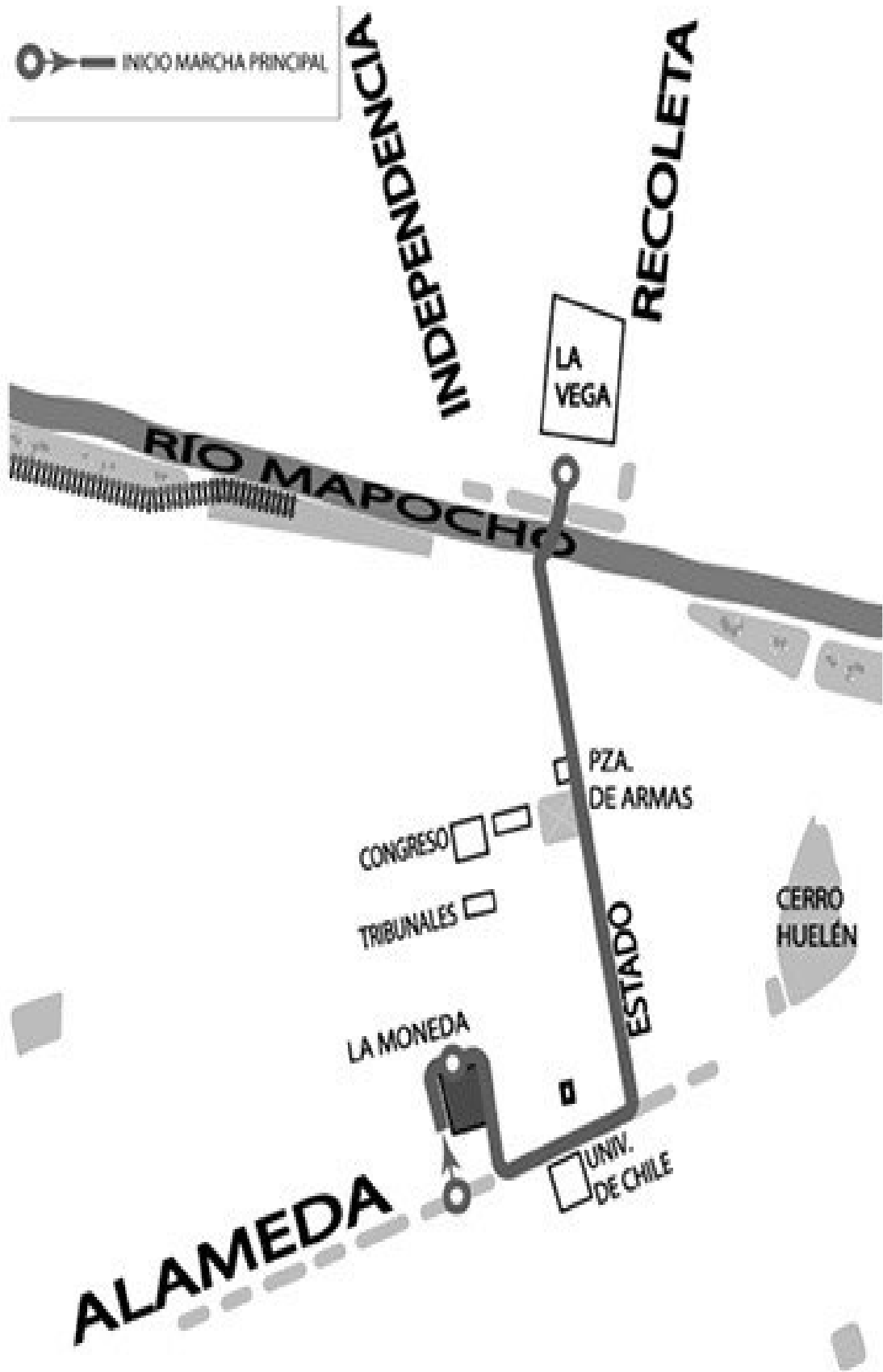
CERRO  
HUELÉN

ESTADO

LA MONEDA

UNIV.  
DE CHILE

ALAMEDA



La pertinencia y propiedad de las distintas zonas urbanas de Santiago no era un conocimiento exclusivo de los sectores dominantes. Los obreros eran conscientes de la distribución urbana y de sus desigualdades, de ahí que insistieran en manifestar sus demandas y desarrollar sus ritos y acciones en los lugares donde habitaban aquellos que detentaban el poder. En julio de 1912, el carpintero anarquista Efraín Plaza Olmedo cargó su revólver y caminó desde la pieza que arrendaba en la calle San Diego hacia el centro comercial de la capital. Es probable que en su trayecto recorriera algunas de las lujosas galerías comerciales de estilo parisino del sector para juntar rabia y reunir fuerzas. En algún punto de la calle Huérfanos detuvo su marcha, sacó el arma y apuntó a un grupo de jóvenes que conversaban animadamente. Entonces disparó. Intentó escapar, pero no pudo. Ya detenido, le preguntaron por qué había disparado a esas personas y en ese lugar. Respondió que debido al odio que sentía en contra de la burguesía había decidido matar a algunos de sus miembros, por eso se dirigió a aquel lugar, pues sabía que allí pululaban “insolentemente todos los explotadores de las clases trabajadoras”.<sup>217</sup> Reconocer los sentidos de clase de la ciudad podía llegar a tener derivaciones distintas a las manifestaciones multitudinarias, aunque no menos políticas.

La marcha “subversiva” del 1º de mayo y la acción de Plaza Olmedo encendieron el invierno santiaguino de 1912. A fines de julio, una organización denominada Federación Patriótica llamó a los “verdaderos chilenos” a ocupar la calle para exigir la reacción del Estado en contra de los individuos que, con sus manifestaciones callejeras, pancartas y gritos, trastocaban los valores patrios y también los de la “sociedad” urbana.<sup>218</sup> Los pocos patriotas que se congregaron aquel día en la Alameda escucharon a los organizadores calificar al anarquismo como una “carcoma [...] y plaga social que [...] pretende minar las bases mismas de la República”. Sin embargo, la manifestación se interrumpió cuando un pequeño grupo de anarquistas —ataviados “con largas corbatas rojas y una banderola del mismo color”— comenzó a proferir “términos incendiarios contra el orden social y la burguesía”, lo que disolvió al poco más de un centenar de personas reunidas en la Alameda con Lord Cochrane. La dinámica planteada por los anarquistas, más propia de la política obrera que de los salones burgueses, no fue respondida aquella vez por los manifestantes patriotas. Sin duda, los códigos políticos de la ciudad obrera no eran los mismos que los de la ciudad burguesa. El alboroto fue solucionado con la detención de una parte de los contramanifestantes, mientras el resto de los temidos anarquistas decidió

protestar por la arbitrariedad policial dirigiéndose ordenadamente a la imprenta de La Razón,<sup>219</sup> periódico publicado por la Juventud Radical cercana a la Federación de Estudiantes de Chile (

FEC

h), organización que sufriría los embates patrióticos ocho años después.<sup>220</sup>

Las manifestaciones en nombre de la patria no eran atípicas y congregaban a una gran cantidad de personas en fechas específicas, como la “Fiesta del Trabajo Cristiano”, que cada año organizaba la Sociedad de Obreros San José, institución creada en 1883 por la jerarquía católica con el fin de alejar a los trabajadores de la influencia de las corrientes rupturistas.<sup>221</sup> Aunque preferían reunirse en lugares cerrados, los “josefinos” no eran del todo ajenos a las manifestaciones públicas. En la celebración de 1912, el sacerdote Martin Rucker, conjugando la defensa de la patria y del Ejército con la fidelidad que los obreros le debían a la Iglesia, protestó por el “desfile semi-anarquista” del 1º de mayo y realizó “una justa defensa” del Ejército que, según un cronista, “hizo aparecer lágrimas en los ojos de los obreros”.<sup>222</sup>

Con el correr de los años, las organizaciones de obreros católicos dejaron a un lado la introversión e intentaron disputar la calle como espacio político, para lo cual se apoyaron en el Partido Popular, fundado en 1921 por el sacerdote Guillermo Viviani bajo la influencia de la actividad política del obispo y vicario castrense Rafael Edwards Salas. Este partido concentraba sus actividades en las cercanías del Mercado Central y de La Vega, un sector eminentemente popular. Influidos por la presencia de los “populares”, los socialistas decidieron realizar conferencias varias veces a la semana en la ribera norte del río Mapocho para contrarrestar la propaganda católica en el movimiento obrero. En 1923, la “Fiesta del Trabajo Cristiano” proyectaba una procesión que finalizaría en un comicio público en la Plaza de Armas. Finalmente, el mitín se suspendió y el acto principal fue llevado a un teatro de la zona sur.<sup>223</sup> Esta medida buscaba evitar los enfrentamientos callejeros con los socialistas-comunistas, que seguían con atención la agitación que realizaba la Iglesia entre los obreros. Un año más tarde, en un tono beligerante, el periódico de los comunistas de la capital exhortaba a sus militantes a concurrir a los mítines públicos de los católicos, con el “fin de rebatirles con éxito y si es posible darles una buena lección”.<sup>224</sup>

Para comienzos de la década de 1920, anarquistas y socialistas arrastraban una

larga experiencia en las luchas anticlericales, forjada en innumerables conferencias, debates públicos y también manifestaciones callejeras. En junio de 1913, los socialistas capitalinos se unieron a la protesta anticlerical que motivó la presencia en el país del funcionario papal monseñor Enrique Sibila. Según un periódico, en las cercanías del monumento a San Martín se congregaron más de 100.000 personas a escuchar a los oradores, entre los que se encontraba el dirigente socialista Manuel Hidalgo, recientemente electo como regidor municipal. Una parte del mitín, encabezada por los dirigentes de la

FEC

h y por mujeres estudiantes universitarias, se dirigió por Teatinos hacia La Moneda en donde el presidente de la República, Ramón Barros Luco, recibió el memorial redactado por la comisión organizadora. Luego de esta estación, la marcha continuó, acompañada por la estricta vigilancia de la policía montada, hacia la Plaza de Armas. Allí, los manifestantes desfilaron por la Catedral exhibiendo sus pancartas, entre las que se podía observar una con el símbolo pirata acompañando a una cruz, otra que ilustraba un puntapié a un sacerdote y una tercera en la que aparecía un cura local entregándole una bolsa de dinero a un funcionario del Vaticano.<sup>225</sup>

Aunque a nuestros ojos pueda resultar inaudita la disposición del gobierno para recibir a los manifestantes, en la década de 1910 no era una práctica poco común. Basta con recordar que el palacio de gobierno era una de las estaciones proyectadas por el mitín de la carne de octubre de 1905 y que la ausencia del presidente en ese lugar fue una de las mechas que encendió la revuelta. Un mes antes del mitín anticlerical en contra de Sibila, para la conmemoración del 1º de mayo de 1913, Barros Luco había recibido en su despacho al comité organizador encabezado por el

POS

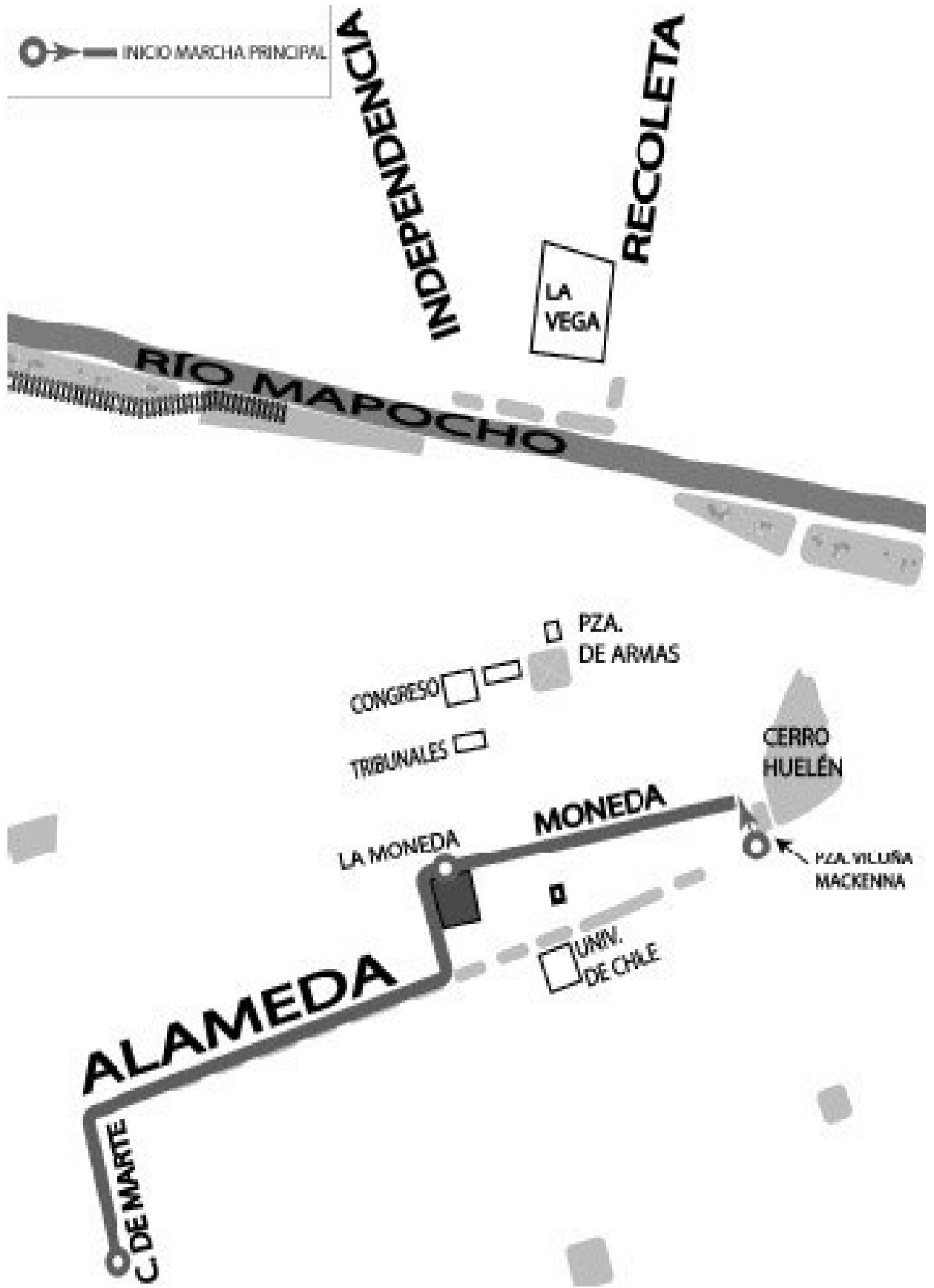
. Aún más, la máxima autoridad del país se asomó al balcón y saludó a los manifestantes mostrándoles el memorial como prueba de que había recibido y leído las demandas de los trabajadores.<sup>226</sup> Barros Luco era un experimentado político del Partido Liberal para nada afín a las demandas obreras y mucho menos a las ideas socialistas que profesaban sus interlocutores de aquel día. Por ello, se debe haber sorprendido con la delegación que entró a su oficina, pues era lógico que en lugar de los socialistas llegaran a La Moneda los dirigentes de las

demás sociedades mutualistas que participaban del mitín y que tenían más cercanía con los políticos que manejaban el Estado.

## MAPA 2:

*Conmemoración del 1º de mayo de 1913*

○➔ INICIO MARCHA PRINCIPAL



De cualquier manera, el presidente no fue el único asombrado con los acontecimientos de ese 1º de mayo. A los pocos días de ocurrida la manifestación, los socialistas de Iquique informaban con escepticismo sobre lo sucedido en la capital: “Por cierto que no han sido los elementos socialistas de Santiago los que han concurrido al presidente de la República”.<sup>227</sup> Ya confirmada la filiación política de la comisión que asistió a La Moneda, el líder del partido, Luis Emilio Recabarren, dirigió una dura carta al tipógrafo y dirigente del

POS

santiaguino Carlos Alberto Martínez: “¡Qué hermoso sería ver uniformada la acción socialista de las pocas agrupaciones que tenemos! Con el rumbo que vamos siguiendo no vamos a enseñar bien al pueblo ni vamos a alcanzar los triunfos que necesitamos. [...] ¡Yo estimo que jamás debemos tomar parte en ningún movimiento con otros elementos! ¿Por qué servir de instrumentos para acción de otros? Debemos obrar solos, opinar solos, crear solos”. El tono aleccionador daba paso a la rabia, a la amenaza y a la decepción: “Si siguen obrando así, yo les voy a pegar, muy a mi pesar, desde el periódico. Yo estimo esa conducta mistificación de buena o de mala fe. El 1º de mayo fue una mistificación y así veo que siguen marchando. ¡Es muy triste todo eso!”.<sup>228</sup>

Los socialistas iquiqueños no fueron los únicos que reaccionaron con acritud. Tal como lo preveía Recabarren, la participación conjunta de demócratas, mutualistas y socialistas fue duramente criticada por los anarquistas de Santiago, quienes desde su periódico calificaron la manifestación como una “comedia ridícula” y al

POS

como “un bálsamo para adormecer las energías del pueblo”.<sup>229</sup> Como pocas veces, Recabarren y los anarquistas coincidieron en el diagnóstico de esa jornada: la participación de los socialistas bajo las claves políticas del mutualismo dejaba en mal pie al nuevo partido y sembraba dudas sobre su propuesta rupturista basada en la lucha de clases. Al año siguiente, el

POS

de Santiago fue el único partido político en un comité organizador compuesto en



su mayoría por sociedades de resistencias, las organizaciones laborales más combativas. A diferencia de la conmemoración anterior, la marcha de 1914 no se acercó al palacio de gobierno y recorrió una ruta más popular, trasladándose por Matucana y San Pablo para finalizar en la recurrente plazuela Recoleta.<sup>230</sup>

En 1915, el

POS

hizo coincidir la inauguración de su primer congreso con la conmemoración del 1º de mayo,<sup>231</sup> que aquel año tenía anunciadas dos convocatorias. La manifestación socialista se reunió a escuchar a los oradores en la Plaza Vicuña Mackenna, a un costado del cerro Huelén (Santa Lucía), para luego marchar por la Alameda hacia el poniente. En la esquina de la calle Bandera un grupo de obreros reconoció a Recabarren y le pidió que pronunciara un discurso. Mientras el líder socialista defendía la acción política que proponía su partido, los participantes de la segunda marcha llegaron al lugar. Los conceptos de Recabarren fueron refutados con “entereza y valentía” por un dirigente anarquista que calificó a los socialistas como “falsos defensores del pueblo”.<sup>232</sup> El improvisado debate concluyó rápidamente porque los militantes del

POS

, quizá por desinterés o disgusto, decidieron seguir su marcha hacia el local donde continuaba el programa de su congreso.

## EL HAMBRE Y EL “ASEDIO” OBRERO A LA CIUDAD BURGUESA

Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial afectaron el débil equilibrio de la economía chilena, llevando al límite la precaria situación de la clase obrera. Desde fines de 1914 comenzaron a desembarcar en Valparaíso las familias de los cesantes de las faenas salitreras, lo que agravó aún más las condiciones de los trabajadores urbanos que experimentaban las consecuencias de la caída de los salarios nominales en un periodo de alta inflación<sup>233</sup>. Si bien la carestía de los alimentos fue el tema principal del movimiento obrero de la segunda mitad de la década de 1910, las manifestaciones callejeras comenzaron a tomar fuerza desde

1917. En abril de aquel año se organizó un mitín en las cercanías de La Moneda, para demandar medidas a favor del abaratamiento de los alimentos. El itinerario pretendía, nuevamente, llegar al despacho del presidente de la República. En los discursos iniciales destacó el dirigente socialista Mariano Rivas. A diferencia de lo ocurrido en 1913, en esta ocasión ningún socialista integró la comisión que se entrevistó con el presidente Sanfuentes, la que fue encabezada por el dirigente del

PD

Lindorfo Alarcón. De vuelta al mitín, Alarcón denunció que ninguna autoridad se había “tomado la molestia de leer las conclusiones” y aunque llamó a los manifestantes a “exigir, si fuese necesario, que sus peticiones no fueran letra muerta”, la reunión se disolvió al finalizar su discurso.<sup>234</sup>

El segundo plano que los socialistas de la capital ocuparon en este mitín se modificó un año y medio después. En septiembre de 1918, comenzaron a realizar concentraciones semanales para llamar la atención sobre el alza descontrolada de los precios. Un mes después, el periódico liberal La Nación editorializaba sobre la carestía de la vida, señalando con preocupación que dicho fenómeno “engendra descontentos peligrosos que son elementos de disociación”. Unas páginas más adelante se publicaba un ejemplo de aquello: la carta que el Consejo Federal N° 1 de la

FOC

h dirigía a las sociedades obreras de Santiago. El documento comenzaba calificando el laissez faire del gobierno como “una teoría [...] sencillamente monstruosa” y luego invitaba a la formación de un Comité Pro-abaratamiento de los Artículos de Primera Necesidad, manifestando combativamente: “es necesario que los desheredados de la fortuna abandonemos nuestra habitual apatía y nos pongamos en guardia para que nos defendamos de los mercaderes sin conciencia que especulan con los artículos alimenticios”. Y finalizaba con una declaración que avizoraba los eventos futuros: “Debemos mostrarles a los poderes públicos que ya nuestra paciencia se agotó”.<sup>235</sup> La carta llevaba la firma del dirigente socialista Carlos Alberto Martínez. Una semana después, veintiocho organizaciones respondieron a la convocatoria (representando aproximadamente a 20.000 obreros/as) y formaron la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (

AOAN

).<sup>236</sup>

La

AOAN

utilizó las manifestaciones callejeras como el principal medio de presión para conseguir sus aspiraciones. Debido a la convocatoria amplia que tenía la organización (la

FOC

h, el

POS

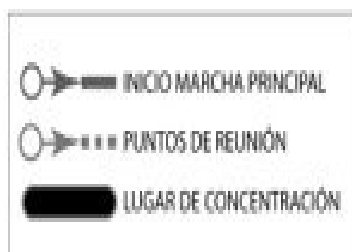
, anarquistas, obreros católicos, mutualistas, profesores, estudiantes, profesionales), se combinaron en las “marchas del hambre” elementos de protesta nuevos y antiguos. Por ejemplo, se recuperó la idea del memorial entregado al presidente de la República, recurriendo a un formato más cercano con las formas de hacer política de los mutualistas que de los sectores rupturistas, aunque los socialistas eran más proclives que los anarquistas a aceptar la intervención estatal en los conflictos laborales. Una forma novedosa que tuvo la primera “marcha del hambre” realizada en Santiago, el 22 de noviembre de 1918, fue la manera de aproximarse al centro del poder político y comercial de la capital. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez las organizaciones obreras decidieron avanzar desde la periferia hacia el centro de la ciudad, lo que tuvo que haber dotado de mayor espectacularidad a la manifestación. El asedio de las columnas de trabajadoras/es se produjo desde cuatro puntos: Sector Estación Central, desde la Plaza Argentina; Sector Matadero, desde Arturo Prat con Matta; Sector Recoleta-Independencia, desde la Plaza Recoleta, y Sector Providencia, desde la Universidad de Chile. El comercio, los talleres, las fábricas y los tranvías suspendieron sus labores a las 4 de la tarde, coincidiendo con la convocatoria en los cuatro sectores de la capital y que debían trasladarse una hora más tarde a la esquina de la Alameda con Lord Cochrane. Abrió los discursos el presidente de la

AOAN

, Carlos Alberto Martínez, atacando al “elefante blanco de la libertad de comercio” y saludando al “pueblo, que solo en los grandes momentos, en las ocasiones solemnes, tiene su gesto de soberanía [y] acude hoy a los sitios públicos en demanda de atención por el malestar que siente”. Luego de los discursos de los dirigentes de distintas organizaciones —como el de la representante de las sociedades obreras femeninas, Aurora Rojas—, comenzó la marcha en dirección a La Moneda.<sup>237</sup>

### MAPA 3:

*Primera “marcha del hambre”, 22 de noviembre de 1918*



La masiva concurrencia encandiló no solo a los organizadores. También la prensa burguesa demostró su asombro. “Ayer ha tenido lugar una manifestación que marcará época en los anales de esta ciudad” y “Nunca Santiago ha visto una manifestación más grande, más aplastadora por su grandiosidad y su compostura”, fueron las frases con que encabezaban dos importantes medios escritos las crónicas de aquella jornada.<sup>238</sup> Asimismo, llamó la atención la presencia de bandas de músicos y la ejecución de canciones, muchas de ellas de corte patriótico, entonadas probablemente por los miembros de las sociedades mutuales, pues ni los socialistas ni los anarquistas se caracterizaban por su cercanía y cariño a la patria. Otro punto de conflicto entre las distintas tradiciones rituales de los asistentes fue la medida adoptada por el comité organizador de prohibir las pancartas con “motes” o frases de corte polémico, ideológico y político, que regularmente acompañaban los estandartes de los consejos de la

## FOC

h y de las sociedades de resistencia. Para fiscalizar esta medida se organizó un comité ad hoc que recorrería la marcha retirando los carteles considerados ofensivos y expulsando, de ser necesario, a quienes los portaban. A pesar de estas precauciones, un grupo subió a las ventanas del Ministerio de Guerra y Marina para colocar una bandera roja y lanzar piedras hacia La Moneda, mientras sus camaradas destruían los jardines cercanos. Como era costumbre, un medio calificó a este grupo como “manifestantes extranjeros, exaltados en su mayor parte”. Sin embargo, este hecho no opacó la evaluación final: se trataba de “la manifestación más importante que se ha efectuado en la capital en estos últimos años”, no solo por el número de asistentes, sino también “por la forma culta y ordenada en que se realizó”.<sup>239</sup>

Esta recepción benevolente, un discurso poco habitual para las manifestaciones obreras en la capital —en especial, luego de 1905—, demuestra que la demanda por el abaratamiento del costo de la vida había alcanzado tal grado de unanimidad que hasta los medios de prensa de la élite concordaban con la justicia de la protesta de las organizaciones de trabajadores. Al referirse a la manifestación del 22 de noviembre, La Nación reconocía estar en presencia de una “época de transición y de cambio absoluto”, propiciada en mayor parte por un “orden de cosas creado por el desgobierno que nos ha afligido tanto tiempo”,

lo que anunciaba la “desaparición de la vieja política paternal que para nada tomaba en cuenta las necesidades de los pueblos”. Y si bien reconocía que había “puntos un tanto exagerados en las peticiones laboristas”, proyectaba que “de este movimiento solo beneficios y progresos podrán resultar”.<sup>240</sup>

Sin embargo, los buenos augurios del periódico liberal no se materializaron en una nueva era de diálogo entre el movimiento obrero y la élite política, ni tampoco en la atención a sus demandas. Por el contrario, luego de la manifestación se abrió un periodo de represión que comenzó con la aprobación de la Ley de Residencia, continuó con la persecución y encarcelamiento de dirigentes, la clausura de varios periódicos obreros y tuvo su punto cúlmine con la declaración del estado de sitio, el 3 de febrero de 1919.<sup>241</sup>

A pesar de este escenario adverso, la

AOAN

logró recomponerse y convocar a una segunda “marcha del hambre” para el último viernes de agosto de 1919. El impacto de esta manifestación fue mayor que la de noviembre del año anterior. Fábricas, comercio y locomoción pública dejaron de funcionar desde el mediodía. Ya en la mañana bandas de músicos recorrían los barrios más pobres y alejados de la ciudad para repartir proclamas e invitar al mitín en el centro de la capital. Esta vez, la ciudad fue dividida en ocho puntos (Plaza Argentina, Plaza Yungay, Plaza Manuel Rodríguez, Alameda con Ahumada, Plaza Almagro, Plaza Italia, Matta con San Diego y Franklin con San Diego), desde los cuales los grupos de manifestantes debían marchar hacia el punto de reunión: la Alameda entre Bandera y San Martín, en donde se levantaron ocho tribunas para los discursos. A diferencia del año anterior, a las más de sesenta sociedades que confirmaron su presencia se les permitió concurrir con letreros o pancartas con textos alusivos a la demanda del abaratamiento. A las cuatro de la tarde, la columna avanzó hacia el palacio presidencial. Desde los balcones de La Moneda observaban el desfile el presidente Sanfuentes, su familia y sus ministros, el vicepresidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el intendente de Santiago. Nunca una manifestación obrera había tenido tan selecto y sobresaltado público. El encargado de leer el memorial al presidente y sus ministros fue, nuevamente, el socialista Carlos Alberto Martínez.<sup>242</sup> Casi medio siglo después, el viejo tipógrafo y fundador del

POS

en Santiago recordaba el estado de ánimo de los políticos de la élite frente a la multitudinaria manifestación obrera: “Desde abajo [de La Moneda] vimos que varias veces don Juan Luis Sanfuentes atisbaba por entre las cortinas de su gabinete, muy temeroso por los gritos de la gente y la agresividad de las consignas. [...] Don Juan Luis nos recibió en su gabinete acompañado del ministro [del Interior] Serrano. Los dos estaban terriblemente pálidos y nerviosos. Al presidente le temblaba la barbilla. Lo recuerdo como si fuera hoy. No era para menos”.<sup>243</sup> Sanfuentes, quizá afectado por sus recuerdos de 1905, temía que los manifestantes entraran a La Moneda. Nada de ello ocurrió. Aunque la ansiedad del presidente de la República tardaría en calmarse, porque la columna demoró más de dos horas en pasar por la casa de gobierno en dirección al oriente hasta llegar a la Plaza Vicuña Mackenna, en donde continuaron los discursos.

Aún más que en noviembre del año anterior, La Nación no escatimó en calificativos de simpatía: “Pocas veces en nuestra vida republicana habíamos presenciado un espectáculo tan imponente, más entusiasta y al mismo tiempo más culto y ordenado que la manifestación popular de ayer”.<sup>244</sup> La tranquilidad con que más de 100.000 personas hicieron sentir su protesta por la situación económica no se vio opacada ni siquiera por la explosión a la medianoche de un cartucho de dinamita en un quiosco de lustrabotas ubicado en la Alameda. Aunque el hecho sirvió para que Sucesos, en lugar de centrarse en la suerte de los heridos —un suplementero y dos lustrabotas que dormían en el lugar—, diera rienda suelta a las teorías conspirativas. “Puede decirse, pues, casi con entera seguridad que ese cartucho de dinamita ha representado el aborto de un proyectado intento terrorista”, concluía la revista.<sup>245</sup> Este juicio aparece como un gráfico preámbulo de la criminalización de la protesta y la persecución de los “agitadores” que se verificarían en los meses venideros.<sup>246</sup>

Si bien los logros conseguidos por las movilizaciones de la

AOAN

fueron marginales, la experiencia fue recogida por una parte del movimiento obrero, en especial por el

POS



y la

FOC

h. Más que reeditar la convocatoria amplia y proyectarla en un movimiento político, ambas organizaciones tomaron nota de la forma que adoptó la movilización y de la presencia de la protesta en la ciudad, debido a que la base del movimiento de 1918-1919 fueron las organizaciones de los trabajadores y las familias obreras sus principales protagonistas. Esta lectura condujo a que se modificara la manera en que la clase obrera demostró su presencia en la ciudad y se manifestó en dos sentidos. Primero, se fortaleció la agitación en los barrios obreros durante los días de manifestaciones. Y segundo, se mantuvo el formato de la convocatoria temprana en distintos puntos de la ciudad para luego avanzar hacia el centro, es decir, el “asedio” obrero al polo del poder político y comercial.

Desde la conmemoración del aniversario de la Revolución Rusa de 1921, la

FOC

h y el

POS

implementaron esta táctica. Los preparativos comenzaron durante la última semana de octubre y la primera de noviembre con la organización de veinte conferencias a cargo de los diputados socialistas Luis Emilio Recabarren y Luis Víctor Cruz, que se distribuirían por diez puntos de la capital. Se escogieron lugares por donde transitaban mayormente obreros/as al finalizar su jornada y se encargó a los Consejos Federales de la

FOC

h la organización y la propaganda previa.<sup>247</sup> Además de Recabarren y Cruz, otros dirigentes socialistas se distribuyeron por la ciudad, como el Secretario General del

POS

, el obrero pintor Roberto Salinas, quien en una conferencia en las afueras de La

Vega Central manifestó que “había que ir de frente hacia la Revolución Social, para derribar el régimen capitalista, único causante de todas las injusticias sociales y reemplazar este régimen por el régimen comunista basado en el amor y el altruismo”. Uno de los oyentes, que dijo ser profesor del Ejército, refutó las ideas de Salinas de hacer la revolución social, aunque indicó estar de acuerdo con las demandas de los trabajadores. Tras el discurso del profesor, dos dirigentes socialistas tomaron la palabra para contradecirlo “dentro de la mayor cultura posible” y finalizaron invitándolo a comprar el folleto de Recabarren Los albores de la Revolución Social. La cívica contienda terminó con el folleto socialista en las manos del profesor del Ejército y con aplausos para todos los oradores. La manifestación se disolvió normalmente.<sup>248</sup>

Para la tarde del lunes 7 de noviembre, el

POS

y el Consejo Federal N° 28 de Oficios Varios de la

FOC

h establecieron trece puntos de reunión. Con el fin de evitar confusiones, el periódico socialista y fochista publicó el lugar y la manera en que cada columna debía aproximarse hasta la Alameda con Lord Cochrane, ubicación desde donde partiría el desfile central<sup>249</sup>. En cada uno de los trece puntos se escucharían conferencias a cargo de los principales líderes del partido y también de parlamentarios cercanos al movimiento obrero, como Juan Pradenas, Manuel Navarrete, Luis Enrique Concha, Luis Correa y Santiago Labarca. Si bien se trataba de dirigentes de otras tiendas políticas, todos alabaron el proceso bolchevique. En el escenario de la Plaza Brasil, por ejemplo, el senador demócrata Luis E. Concha “elogió con calor el régimen del Soviet, considerándolo el salvador del proletariado”.<sup>250</sup> Los diputados Pradenas y Navarrete, ambos correligionarios de Concha, se expresaron en términos similares. El primero llamó a los obreros a cobijarse bajo el estandarte rojo de la revolución, mientras que Navarrete exigió valentía a los trabajadores para “arrasar con los burgueses” y avanzar hacia la revolución social.<sup>251</sup>

A las ocho de la tarde las columnas obreras llegaron a la Alameda acompañadas de pancartas alusivas a la conmemoración (“Viva Trotsky, Lenin, Recabarren, Labarca y Cruz”, “Viva Lenin, el padre de la Rusia Libre”) y otras de carácter

político e ideológico que marcaban el tono distintivo de los manifestantes: “Exigimos la libertad de Sacco y Vanzetti”, “Encendamos la chispa de la revolución” y “Viva la revolución social”.<sup>252</sup> Estas consignas, si bien no eran inéditas, tomaron un nuevo sentido en un país convulsionado por la movilización popular que condujo a la elección de Arturo Alessandri como presidente en 1920. Aunque es evidente que el llamado a la revolución social no se asimilaba al lema alessandrista de “solo el amor es fecundo”, entre ambos existía una vinculación, por lo menos desde la óptica de las corrientes radicales que recogían como antecedente las grandes manifestaciones de la

AOAN

. A esto hay que sumar el optimismo que generó en el movimiento obrero la elección en 1921 de un conjunto de diputados —de distintas tiendas políticas— que se asumían como representantes de la

FOC

h y que participaban, al menos discursivamente, de la utopía revolucionaria de matriz bolchevique.

Con ese espíritu, más de 80.000 obreros marcharon por el frente de La Moneda, aunque en esta ocasión no hubo reunión con el presidente. Para el

POS

, organizador de la manifestación, la propuesta de Alessandri había demostrado sus límites luego de su abierto rechazo a la campaña de politización campesina que este partido y la

FOC

h llevaban a cabo desde mediados de 1920 y, más aún, tras la matanza obrera en la oficina salitrera de San Gregorio (Antofagasta) en febrero de 1921.<sup>253</sup> Debido a esto, los socialistas transformaron la conmemoración del aniversario de la Revolución Rusa en un acto de protesta en contra del gobierno de Alessandri: “La conducta correcta en que se desarrolló la grandiosa manifestación de anoche es un insulto para aquellos que, preconizando un amor inmaculado por la clase trabajadora, despliegan a todos los pacos de Santiago para que, armados hasta los dientes, asustaran a los trabajadores”.<sup>254</sup> Asimismo, el periódico fochista

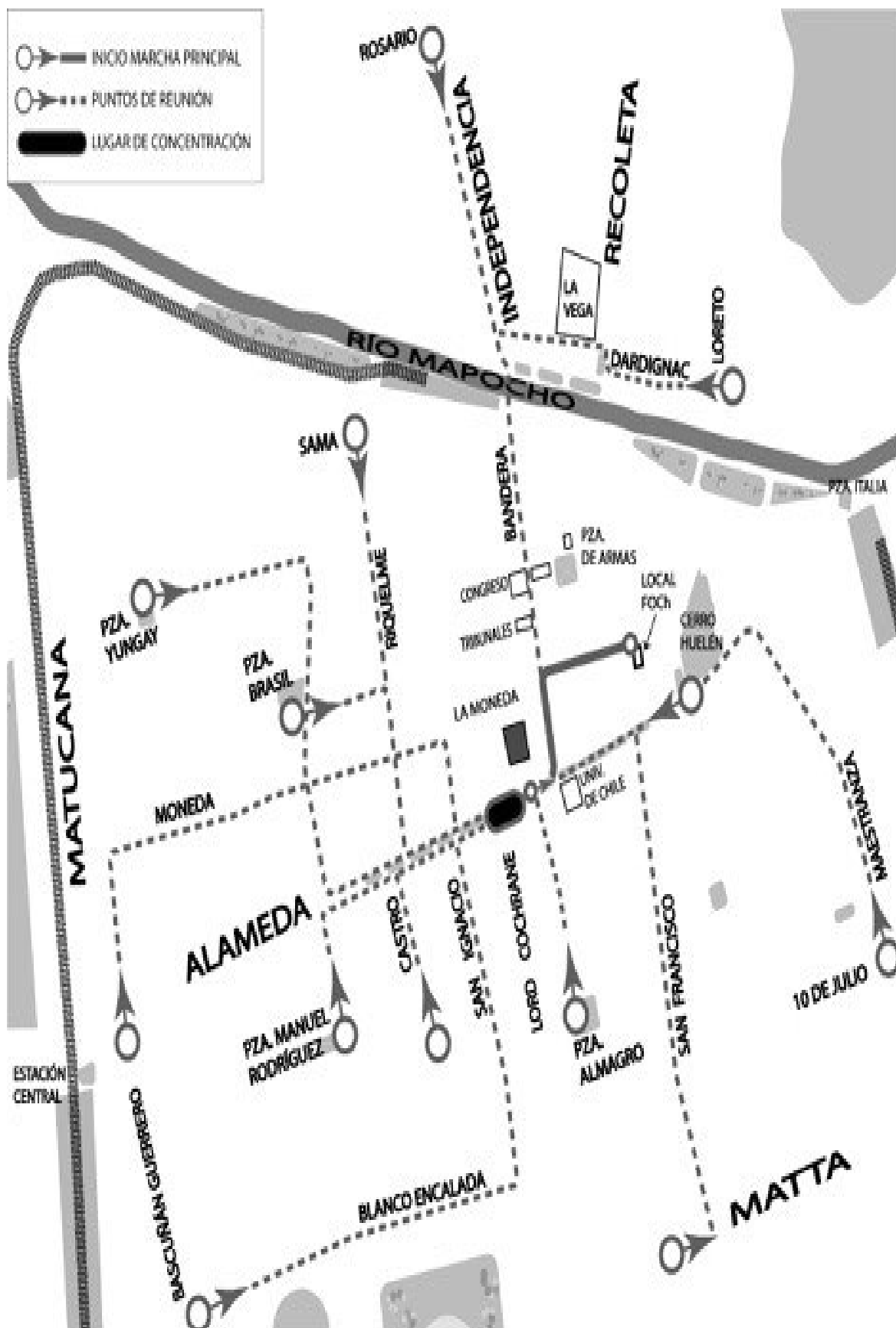
polemizó con una parte de la prensa que calificó a la manifestación como un desfile de los albergados, es decir, exclusiva de las familias obreras que se encontraban en la capital viviendo en locales estatales debido a la masiva cesantía del salitre. Sin ninguna intención de desentenderse de la realidad de los albergados (representados en el Consejo Federal N° 28 de Oficios Varios, uno de los organizadores de la marcha), el periódico obrero ampliaba el rango de participación: “Han sido los obreros, trabajadores, empleados y artesanos, [...] los que se cobijan bajo la sombra del emblema rojo y no solo los sacrificados en los albergues, como se ha querido decir en cuatro graznidos”.<sup>255</sup> No era solo una declaración de intereses, ya que por aquellas fechas la Junta Provincial de Santiago de la

FOC

h reunía a treinta y cuatro consejos que representaban a los gremios de la construcción, del transporte, fabriles, del comercio, la alimentación, de servicios, armamento, campesinos y albergados.<sup>256</sup>

#### MAPA 4:

*Conmemoración del aniversario de la Revolución Rusa, 7 de noviembre de 1921*



En el fondo de esta polémica se encontraba el rechazo al tono revolucionario de la convocatoria porque, a diferencia de las manifestaciones de la

AOAN

, en esta ocasión la prensa burguesa no dedicó términos favorables a la marcha. La asociación entre los albergados, el

POS

y la

FOC

h tampoco carecía de veracidad.<sup>257</sup> Además, desde que el número de cesantes y sus familias en la capital comenzó a aumentar —hasta alcanzar aproximadamente 16.000 personas albergadas en julio de 1921—, la élite demostró públicamente su preocupación.<sup>258</sup> En los meses siguientes a la conmemoración de noviembre de 1921 se produjo una serie de incidentes que involucraban a los albergados y que fueron recogidos y amplificados por la prensa. A fines del mismo mes, la

FOC

h movilizó a casi mil albergados para protestar por un conflicto laboral en el Fundo Lo Herrera (Peñaflor), de propiedad del senador liberal y dueño de La Nación, Eliodoro Yáñez. En los incidentes terminó muerto el obrero Luis Reveco, hecho que motivó enfrentamientos nocturnos entre la policía y los albergados, además de un paro tranviario de protesta, frente a lo cual el gobierno ordenó el acuartelamiento de las tropas del Ejército en la capital. El cuerpo del obrero fallecido fue llevado al local de la

FOC

h —ubicado en la calle Agustinas a un costado del Teatro Municipal— a la espera de la autorización del gobierno para el recorrido del funeral. Al velorio asistieron más de sesenta organizaciones con sus estandartes, casi la mitad correspondía a sub-consejos fochistas de las familias obreras de los albergues.<sup>259</sup>

Finalmente, las autoridades no aceptaron el recorrido propuesto por la

FOC

h y exigieron el entierro inmediato del cadáver. Como los primeros se negaron a acatar la orden, la policía allanó de madrugada el local de la federación, requisando el cuerpo y sepultándolo. Estas acciones derivaron en una marcha de protesta por la ciudad de varios miles de trabajadores y familias albergadas que concluyó tranquilamente.<sup>260</sup> Los socialistas vieron en la negativa a la autorización del recorrido una medida discriminatoria: “Nosotros sabemos que cuando se hacen los funerales de los burgueses, los cortejos respectivos pasan por cualquier calle que a los interesados se les ocurre”. También la interpretaron como una disposición de contención política con sesgo de clase, ya que se había “querido evitar el espectáculo, en las calles donde vive la plutocracia, del cortejo de 30.000 personas que, en un gesto de rebeldía y solidaridad, unen el dolor sordo y hondo a la protesta”.<sup>261</sup>

El funeral de Revecó no aquietó las relaciones entre el gobierno y los albergados. Unas semanas después, se produjo un enfrentamiento que incluyó disparos de revólver cuando la policía, aduciendo medidas sanitarias, disolvió una reunión de alrededor de cien obreros cesantes del albergue de Matucana 100. A los días, los cesantes del albergue de San Ignacio protagonizaron otro choque a tiros y a pedradas con la policía como protesta por la mala alimentación que se les entregaba. Como corolario de estos incidentes, la policía encontró cinco cartuchos de dinamita en el albergue de San Andrés.<sup>262</sup>

Hechos como estos convertían a los albergues, a ojos de la opinión pública, de la élite y de varios dirigentes socialistas, en “semilleros de la revolución”,<sup>263</sup> percepción reforzada por la constante agitación de la

FOC

h, que mantenía sub-consejos obreros en los albergues más grandes, en los que se organizaban niños, hombres y mujeres. A fines de mayo de 1922, estas últimas —agrupadas en la Sección Femenina del Consejo Industrial de Minas— convocaron a una manifestación en las cercanías de La Moneda para solicitar a las autoridades medidas para revertir la cesantía. Mientras las dirigentas desarrollaban sus discursos, un confuso incidente hizo que un grupo de federadas increpara y persiguiera a un vendedor de limonadas que fue defendido por la

policía. Enfrentado al tumulto, un comisario ordenó disolver el mitín y cargar sobre las manifestantes. Distintos piquetes de policías y carabineros desenvainaron sus espadas y comenzaron a perseguir y a golpear a las mujeres. Muchas de ellas recogieron piedras y las lanzaron en contra de los agentes. Otras utilizaron los palos de sus estandartes para defenderse. Se comenzaron a sumar a la refriega obreros cesantes que observaban en las cercanías. A los pies de la estatua de O'Higgins, un policía descargó los cinco tiros de su revólver e hirió al trabajador Juan de Dios Romero en el pecho. Los policías a caballo avanzaron hacia el herido y pasaron por encima de él. Fue el primer muerto. Una obrera que lo asistía recibió por varios minutos el ataque de ocho espadas policiales mientras intentaba defenderse con su estandarte federado. Fue la segunda víctima. A unas cuerdas de allí, un obrero que trataba de subir a un tranvía para escapar fue alcanzado por un grupo de policías. Fue el tercer muerto. Antes de caer al suelo por los sablazos policiales una mujer entregó a su hijo a un albergado. Cuando el obrero arrancaba con la guagua en los brazos, esta recibió un golpe de espada en la cabeza. Fue la cuarta víctima. Otra mujer intentó calmar a un agente que la perseguía enrostrándole a su hijo de seis meses. El policía levantó la espada y golpeó de todas formas. Fue otra de las guaguas muertas. En otro punto de la Alameda, una obrera enfrentó las agresiones de un policía montado tomando las riendas del caballo e hizo caer al jinete. El animal le pisó la cabeza. Murió en el hospital. Otro policía siguió su misma suerte. Transcurridas un par de horas del inicio del mitín el monumento a O'Higgins lucía, como un trofeo, custodiado por un grupo de agentes montados. Era un gesto de triunfo también.

IMAGEN 1: El albergado muerto, Juan de Dios Romero, Sucesos, Santiago, 1º d



De acuerdo con las cifras que recogió la

FOC

h, aquella jornada dejó al menos ocho federados/as muertos y más de un centenar de albergados/as heridos. Además, según los registros de las Escuelas Federales que funcionaban en los albergues Chacabuco y Matucana, veinticinco niñas/os estaban desaparecidos. Los testigos concordaban en que la provocación vino de la policía y que la violencia de estos últimos aumentó cuando el primer jinete cayó al suelo. La prensa burguesa habló de la acción de las temidas Guardias Rojas y de los agitadores. Por su parte, los comunistas señalaron que se trataba un mitín pacífico que reunía a mujeres, niños y obreros desesperados por la cesantía y acusaron el ensañamiento de la policía, en especial, con las federadas que ese día asistieron luciendo una insignia roja.<sup>264</sup> Según el cronista de La Nación, luego de la masacre la Alameda “presentaba un extraño aspecto, cubierta en algunos sitios de grandes manchas de sangre, y dispersos por el suelo se hallaban numerosas prendas de vestir de los albergados, sombreros, capotes de guaguas, zapatos y girones de vestidos”.<sup>265</sup> Al pasar los días, la tristeza que invadió al movimiento obrero se convirtió en rabia y desafío. Un articulista de La Federación Obrera escribió: “Es rencor, es abismo el que se va cavando. Es maldad la que siembra, es crueldad la que se propaga y esto dará sus frutos tarde o temprano. [...] Dando órdenes estúpidas a estúpidos delegatarios, no se obtendrá más que el crecimiento de una obstinación que traerá por resultado apresurar la caída del régimen actual, provocar más rápido el derrumbe del edificio podrido que nos cubre. Al fin y al cabo, eso nos beneficiará. Por ahora, debe saber la Policía que ha contribuido con un peñasco a la construcción del edificio futuro”.<sup>266</sup>

Los dirigentes de la

FOC

h buscaron por más de un día el cuerpo de Juan de Dios Romero: lo negaba la Asistencia Pública y, también, la Morgue. Luego de dos días las autoridades entregaron el cuerpo y la

FOC

h comenzó a organizar el funeral. Como señal de protesta, la federación y la

## IWW

llamaron a un paro general en la capital desde el mediodía del lunes 29 de mayo. El lugar del velorio y punto de partida del funeral se estableció en el local del Consejo Federal de Tranviarios. Se montó una “guardia proletaria permanente” para cuidar el cadáver de Romero. La dirigencia obrera decidió esta vez no pasar cerca de La Moneda, eligiendo una ruta más directa hacia el cementerio. El periódico comunista informó que asistieron más de 30.000 personas al funeral y desfilaron cincuenta y una organizaciones con sus estandartes rojos. Como señal de protesta y de identidad se cubrió el ataúd con una bandera de la Internacional de Sindicatos Rojos. La

## FOC

h arrendó una carroza y contrató una banda de músicos para acompañar el cortejo en su recorrido hasta el cementerio, en donde se montó una tribuna en la que hablaron trece dirigentes. Según el periódico comunista, “los oradores concordaron en que era necesario que la espontaneidad que había agrupado en un solo haz a tantos trabajadores para protestar del salvajismo de la clase capitalista debía de perdurar hasta la hora de la Revolución Social”. Preventivamente, las autoridades desplegaron en el recorrido a la policía y al Cuerpo de Carabineros, quienes, “como un sarcasmo, también concurrieron a la sepultación del camarada Romero”. Algunos se reían, otros “rindieron homenaje mudo a la nueva víctima de los capitalistas”.<sup>267</sup>

Otra versión que circuló sobre el origen de los incidentes fue que las federadas sospecharon de una persona que se encontraba escuchando los discursos. Cuando este escapaba, cayó de su ropa una carta de recomendación del jefe de la policía. Al intentar retenerlo, los policías lo defendieron y cargaron en contra de las manifestantes.<sup>268</sup> Según esto, entonces, la masacre habría sido incitada por infiltrados. Las sospechas de las federadas en la jornada de mayo de 1922 no eran exageradas, puesto que la policía se encargaba cotidianamente del espionaje de las organizaciones obreras y de la infiltración de las marchas. Era tan común este tipo de práctica, que la revista Sucesos la recogió en una ilustración que, a falta de fotografías, daba cuenta de las manifestaciones del 1º de mayo de 1913. En ella se aprecia a tres agentes ataviados de obreros, con gestos adustos y armados de garrotes. La descripción del dibujo señalaba irónicamente: “Alguno que otro agente de seguridad se confundían entre la multitud, obedeciendo sin duda a espontáneos impulsos de proletario”.<sup>269</sup>

IMAGEN 3:

*“Las manifestaciones populares”, Sucesos, Santiago, 8 de mayo de 1913*



Este tipo de maniobras fue recogido en un relato del Premio Nacional de Literatura José S. González Vera, sobre una manifestación por el centro de Santiago de mediados de la década de 1910. En un comienzo, la marcha avanzaba en un alegre ambiente: “Con los cantos, y los gritos de viva o muera, no sentíamos el camino y nuestro estado de ánimo era delicioso”. El regocijo de los compañeros de González se transformó en miedo y dolor con la aparición de los policías infiltrados: “Al llegar a un solar, algo más acá de Diez de Julio, los cuatro hombres que caminaban delante de nosotros, levantaron el brazo derecho a la vez y azotaron las cabezas de los que avanzaban en la fila delantera con sendos laques de goma, que llevaban ocultos en las mangas. [...] Algunos cayeron sangrando, otros quedaron atontados”. Sintiendo que los golpes no eran suficiente escarnio, los policías recogían a los magullados y los detenían. A uno de los amigos de González lo “condujeron al juzgado. Al mediodía se le dejó en libertad bajo fianza, sin perjuicio de seguir adelante el proceso y quedar obligado a toda suerte de requerimientos y citaciones. No pudo probar que fue atacado. ¿Quién podía atacarle si no daba motivos? El hecho de estar herido era presunción en su contra”. Este tipo de prácticas no tenían como fin el orden público, sino que eran utilizadas para provocar desórdenes mayores y justificar la represión, el actuar y el presupuesto de la policía política. También eran un medio para infundir temor sobre las consecuencias de participar en manifestaciones de protesta, como efectivamente le ocurrió al compañero de González que “espantado por tan atroz bautismo, no se dejó ver en ningún otro mitín o desfile”.<sup>270</sup>

A pesar de la crudeza de las represiones, el movimiento obrero no disminuyó ni modificó sustancialmente el despliegue de la protesta callejera durante este periodo. Las conmemoraciones del 1 de mayo de 1922 y 1923 mantuvieron la movilización desde la periferia hacia el centro que había inaugurado la primera “marcha del hambre” de la

## AOAN

. En 1922, se hizo efectivo el paro general convocado por el comité organizador. Así, a diferencia de los años anteriores, la capital se paralizó desde las cinco de la mañana, adoptando “un aspecto anormal a la uniformidad de los días”. A primera hora, distintas comisiones recorrieron hospitales, cuarteles y cárceles en los que se encontraban federados heridos o detenidos, para visitarlos y

obsequiarles comida y cigarrillos. Por su parte, desde el mediodía las tropas de caballería se posicionaron alrededor de La Moneda, secundadas por un moderno cuerpo de motociclistas de carabineros. A la misma hora comenzaban las concentraciones en los puntos establecidos (San Pablo y Matucana, Mercado, Plaza Italia y Matta con Arturo Prat) y a las cuatro de la tarde las columnas de manifestantes se dirigieron hacia la Alameda, llegando a ocupar casi siete cuadras. Tras los discursos, marcharon por el centro de la ciudad hasta las seis de la tarde. Un grupo numeroso de familias obreras se dirigió a la imprenta de La Federación Obrera, lugar donde cantaron “La Internacional” mientras se arriaba solemnemente la bandera roja del Soviet, acto que puso fin a la manifestación.<sup>271</sup> Al año siguiente se repitió el paro general y se siguió un formato similar, aunque aumentaron a cinco los puntos iniciales de reunión (Alameda con Bascuñán G., Bulnes con Martínez de Rozas, Plaza Italia, Plazuela de la Recoleta y Arturo Prat con Matta). En las tribunas de la Alameda los discursos fueron encabezados por dirigentes comunistas y de la sección chilena de la Industrial Workers of the World (

IWW

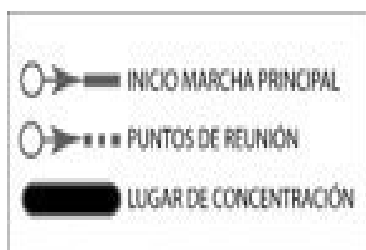
). Además, ese año destacaron las bandas de músicos y los coros infantiles que a lo largo de la marcha entonaban “canciones libertarias y de índole social”. La manifestación concluyó con un acto en el local de la

FOC

h, disolviéndose sin incidentes a las seis de la tarde. Según La Nación, merecía resaltarse “la cultura demostrada durante el desarrollo del comicio y el desfile de las organizaciones sociales, hecho en forma por demás moderada y culta”.<sup>272</sup>

## MAPA 5:

*Conmemoración del 1º de mayo de 1922*



Luego de la conmemoración de 1924 la cultura de la protesta pública volvería al centro del debate, pero en un sentido diferente. El 1º de mayo comenzó, como se venía haciendo costumbre desde 1922, con la ciudad paralizada. A las tres de la tarde empezaron a llegar a la estatua de O'Higgins las columnas desde los cuatro sectores en que se había dividido la ciudad. La primera en llegar al lugar fue liderada por los dirigentes de la

FOC

h y del

PC

. Luego lo hizo la del sector Matta, entrando por la calle San Diego a la Alameda y que era encabezada por los gremios agrupados en la

IWW

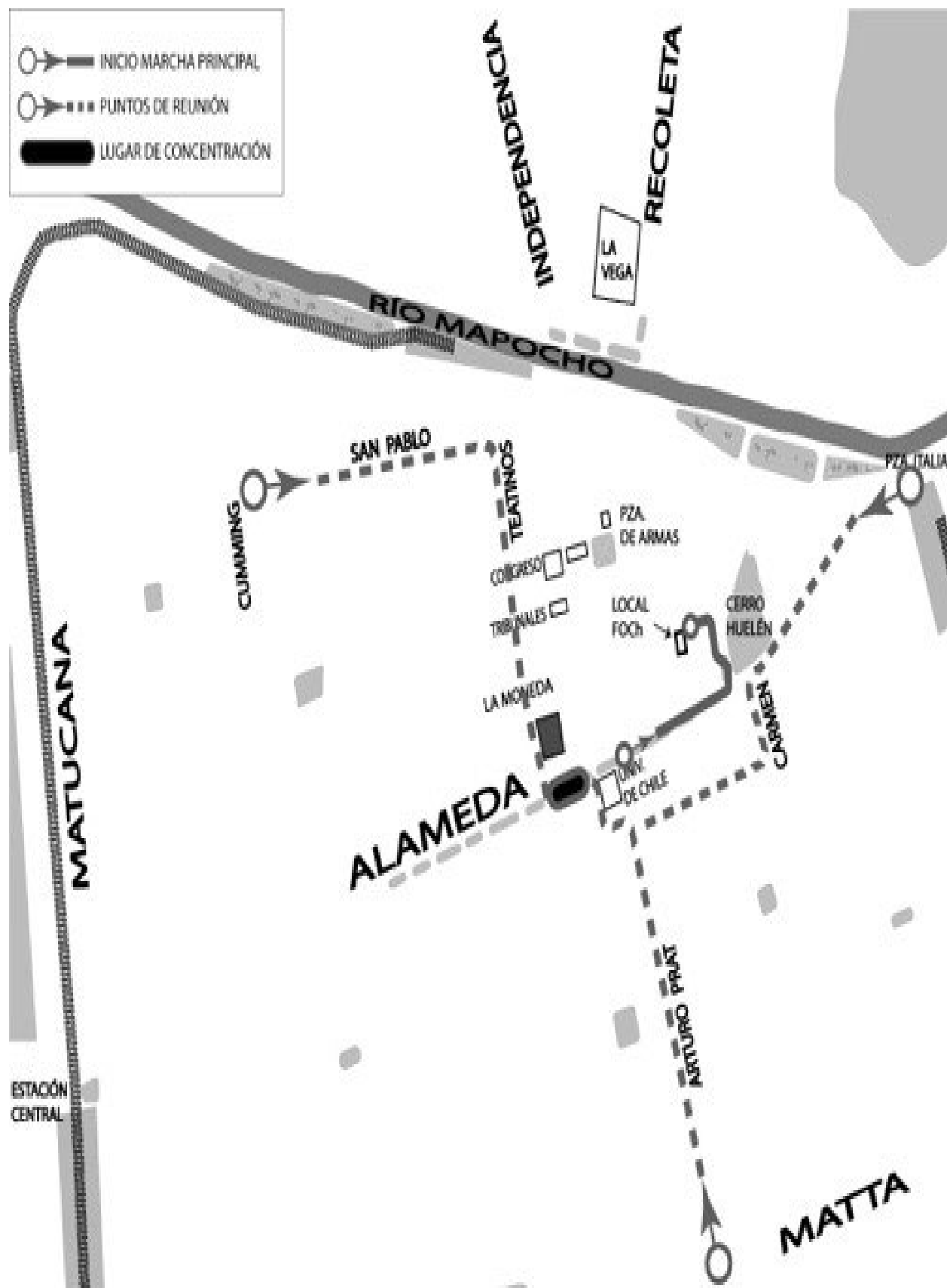
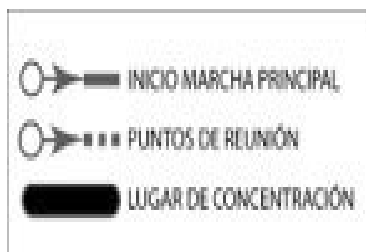
. Como se trataba de varios miles de manifestantes, el tránsito se detuvo por varios minutos, generando la protesta de las góndolas y autobuses que no se habían plegado al paro general. A los bocinazos e insultos de los gondoleros, los obreros respondían “¡traidores!”. En un momento los choferes decidieron avanzar para romper la columna y dejaron a un grupo de manifestantes heridos, motivando la agresión a pedradas contra los vehículos. Este hecho hizo que los jefes de la policía enviaran a la tropa de caballería que se encontraba apostada en La Moneda. Como dos años antes, los agentes usaron sus sables y comenzaron una sangrienta represión con el fin de disolver la marcha. Algunos manifestantes utilizaron sus estandartes para defenderse, otros corrieron y los dejaron en el suelo. Entre los heridos se contaban mujeres, hombres y niños. Entre los muertos, un obrero, una guagua con un golpe de sable y otra pisoteada por los animales de la policía.

MAPA 6:

*Conmemoración del 1º de mayo de 1924*







El parte de la jornada del 1º de mayo de 1924 informó de la detención de diez obreros por desórdenes públicos, la confiscación de una decena de estandartes — entre los que se contaban algunos de la

IWW

, de la

FOC

h y de secciones comunistas— y un par de banderas rojas. El mismo documento justificaba la actuación de la policía afirmando que habían sido los discursos subversivos de los oradores los que motivaron el ataque a los vehículos que transitaban por la Alameda. Aún más, acusaba a los miembros de la

IWW

como los instigadores de las primeras pedradas.<sup>273</sup> Los comunistas, en cambio, culpaban, en primer lugar, a la imprudencia de la policía y, en último término, al presidente Alessandri. De los primeros, en un discurso lleno de dolor y de simbolismo, comentaban: “La fiera pacuna dio rienda suelta a sus instintos feroces. Hacía días que no comía carne proletaria. Los jefes debían llevar a su amo, un valioso presente de trabajadores charqueados por las armas de la patria; debían mostrarle, por lo menos, algunas cabezas revolucionarias, asidas de los cabellos, levantadas en alto, destilando gruesos hilos de sangre”. De Alessandri resaltaban la debilidad y el oportunismo de su vínculo con la clase obrera, ya que la represión se había descargado sobre “aquella chusma que tanto ‘amó’ un candidato presidencial, para odiar después un Jefe Supremo”. Debido a esta actitud, comprendían que el legado del “régimen del amor” —ese en que supuestamente “las ideas se combatirían con ideas”— sería nada más que “de exterminio obrero, de masacres, de matanzas”. Por ello observaban: “Tomen nota los trabajadores de todo el país: se ha cambiado de amo. De uno déspota y opresor, por uno sanguinario y cruel”.<sup>274</sup> Con esta evaluación, la

FOC

h llamó a un paro general para el 2 de mayo al que adhirieron los tranviarios, lo que ayudó a paralizar la ciudad. Además, los organizadores del paro

recomendaron que las reuniones se mantuvieran en los locales gremiales, para evitar nuevos incidentes callejeros.

La policía informó de veinte obreros heridos (la mitad de lo declarado por el dirigente de la

FOC

h Julio Moya), sin reconocer la muerte de ningún manifestante. Algo similar hizo La Nación, medio que desacreditó la versión de la prensa obrera de que la represión había dejado tres muertos. Tampoco encontró términos simpáticos para referirse a la conmemoración, como lo había hecho en años anteriores, demostrando su “objetividad” al dar igual peso a las versiones de los policías, los gondoleros y los obreros.<sup>275</sup>

En esta ocasión, el movimiento obrero no promovió un funeral masivo. La protesta quedó expresada en el breve paro general del 2 de mayo y también a nivel discursivo, resaltando la cultura represiva de la policía y el Estado frente a la cultura cívica de los trabajadores organizados. Según los obreros fochistas, se trataba de dos bandos, cada uno con sus armas características. Los primeros, armados con sables y metrallas. Los segundos, el “ejército proletario”, blandiendo “las armas más modernas”, es decir, “el diario La Federación Obrera, los periódicos Acción Directa, Verba Roja, Claridad y varios volantes aportados por los compañeros de imprenta y metalúrgicos”.<sup>276</sup> Sin embargo, la moderna civilidad del movimiento obrero se comenzaba a horadar luego de las represiones que habían experimentado en el gobierno de Alessandri. Debido a ello, las evaluaciones que realizaban daban curso a invocaciones de una confrontación directa poco comunes en el discurso fochista y que dejaban abierta la puerta a la violencia: “No se quiere oír las palabras de los explotados; no se les quiere ver unidos, no se les quiere reconocer derecho alguno y se les atropella salvajemente; se les hiere, mata y se les rompen sus señas sociales. ¡Cuidado tiranos, que cuanto mayores son las opresiones y dolores, más pronto se levantan los pueblos!”.<sup>277</sup> Y aunque tras la represión, expresaban, “lo único que se viene a la mente es la palabra ¡Venganza!”, no efectuaban llamados a la vindicación individual, ya que se sostenía que el camino seguía siendo “la organización obrera, para desde allí vengar a todas las víctimas inocentes, para en un día no muy lejano hacer sentir a estos salvajes toda nuestra sed de venganza, saciando en ellos, con la misma moneda, todo nuestro odio inextinguible, odios concentrados con tanta arbitrariedad”.<sup>278</sup>

## CONCLUSIONES

Aunque el lugar que ocupó el discurso de la violencia al interior del movimiento obrero fue marginal y asociado a acciones individuales, su aparición en la prensa fochista es resaltable, teniendo en cuenta que el

PCC

h y la

FOC

h promovían la lucha sindical y política por canales más o menos institucionalizados. Más aún, su invocación se hacía como una acción de venganza, es decir, como una reacción a la abierta persecución y represión que sufrió el movimiento obrero y no como parte de una estrategia para tomar el poder. Incluso cuando se articulaba como un llamado a la acción futura, se argumentaba como una medida excepcional y ajena a las “modernas armas” de los trabajadores organizados: la prensa, la manifestación callejera y la política. Y si bien es posible reconocer en este discurso los influjos de la Revolución Rusa, no fue esta la que produjo el cambio en el tono del discurso de los obreros rupturistas, sino la experiencia de la recurrente represión estatal.

Durante la segunda década del siglo

XX

la protesta obrera se modifica, amplifica y sistematiza, como causa de la precarización de las condiciones de vida de los sectores populares y, también, como una manifestación de la toma de conciencia por parte del proletariado organizado de su pertenencia a Santiago y de la idea de que la capital le pertenecía. Al entender las calles de la ciudad como lugares propios, la política obrera sobrepasó los marcos de los barrios populares, de las fábricas, de los locales sindicales y de las sedes políticas, inquietando a las autoridades y a la policía, que respondieron a través de métodos violentos. Esta fue una de las formas en que las organizaciones obreras desarrollaron y cultivaron su

modernidad.

Los hechos con que concluyó el periodo de crisis del régimen oligárquico demostraron que las acciones extrainstitucionales no integraban la estrategia del movimiento obrero anticapitalista. En el escenario de quiebre e incertidumbre institucional que inauguró el golpe de Estado de fines de 1924, la

FOC

h y buena parte del movimiento obrero se levantaron para defender y reafirmar su compromiso con las libertades, principalmente con la necesidad de asegurar el derecho a la protesta, a manifestar públicamente sus reivindicaciones y a desarrollar acciones político-sindicales. Es decir, las actividades fundamentales de su cultura. Las mismas que, como hemos visto, los llevaban una y otra vez a la calle para hacer política.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

### *Prensa periódica*

*El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 1913.*

*El Obrero Ilustrado, Santiago, 1906-1907.*

*La Batalla, Santiago, 1913-1915.*

*La Federación Obrera, Santiago, 1921-1924.*

*La Nación, Santiago, 1917-1924.*

*La Razón, Santiago, 1913-1914.*

*La Unión, Santiago, 1913.*

*Sucesos, Santiago, 1905-1922.*

Zig-Zag, Santiago, 1905-1913.

### *Fuentes impresas*

López, Osvaldo, Diccionario biográfico obrero, Imprenta y Encuadernación Bellavista, Santiago, 1912, p. H5.

Gallardo, Jorge (comp.), Luis Emilio Recabarren. Cartas inéditas. Correspondencia con Carlos Alberto Martínez, dirigente de la Federación Obrera de Chile, Ediciones

LER

, Santiago, 2020, p. 109.

González, José S., Cuando era muchacho, Editorial Universitaria, Santiago, 1996.

Sagredo, Rafael (recopilador), Crónicas políticas de Wilfredo Mayorga. Del “Cielito Lindo” a la Patria Joven, Dibam/

RIL

ediciones/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1998, p.105.

### *Bibliografía*

Craib, Raymond, Santiago subversivo, 1920. Anarquistas, universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas,

LOM

, Santiago, 2017.

DeShazo, Peter, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile. 1902-1927, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2007.

Grez, Sergio, “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”, en Prohistoria, 4, 2000, pp. 59-93.

, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), RIL editores, Santiago, 2007.

, Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), LOM, Santiago, 2011.

Harambour, Alberto, “La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios y el ‘horizonte anarquista’. Santiago de Chile, 1911-1912”, en Lucía Stecher y Natalia Cisterna, América Latina y el Mundo. Exploraciones en torno a identidades, discursos y genealogías,

CECLA

-Universidad de Chile, Santiago, 2004, pp. 189-203.

, “‘Jesto y palabra, idea y acción’. La historia de Efraín Plaza Olmedo”, en Colectivo Oficios Varios, Arriba quemando el sol. Estudios de Historia Social Chilena. Experiencias de trabajo, revuelta y autonomía, 1830-1940, LOM, Santiago, 2004, pp. 137-193.

Illanes, María Angélica, Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las Visitadoras Sociales (1887-1940),

LOM

, Santiago, 2007.



Izquierdo, Gonzalo, “Octubre de 1905. Un episodio en la historia social chilena”, *Historia*, 13, 1976, pp. 55-96.

Navarro, Jorge, *Revolucionarios y parlamentarios. La cultura política del Partido Obrero Socialista, 1912-1922*,

LOM

, Santiago, 2017.

, “El despertar de los campesinos. El Partido Obrero Socialista-Partido Comunista de Chile y la sindicalización rural, 1912-1925”, en *Notas Históricas y Geográficas*, 23, pp. 14-58.

Pinto, Julio, “Donde se alberga la revolución: la crisis salitrera y la propagación del socialismo obrero (1920-1923)”, en *Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923)*,

LOM

, Santiago, 2007.

Recabarren, Floreal, *La matanza de San Gregorio, 1921: crisis y tragedia*, Santiago,

LOM

, 2003.

Rodríguez, Ignacio, “Las marchas del hambre en Santiago de Chile, 1918-1919”, en *Pensamiento Crítico. Revista electrónica de Historia*, 1, 2001, pp. 1-66.

Salinas, Maximiliano, “La Iglesia y los orígenes del movimiento obrero en Chile (1880-1920)”, en *Revista Mexicana de Sociología*, 49:3, 1987, 171-184.

Valdivia, Verónica, *Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo*

XX

(1918-1938),

LOM

, Santiago, 2017.

## SEGUNDA PARTE

AUGE Y AGOTAMIENTO DEL MODELO DESARROLLISTA, 1930-1973.  
MASIFICACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA PROTESTA POPULAR

## V. “EL PAN GRANDE FUE UN ENGAÑO”.

\*

### COLABORACIÓN Y CONFLICTO EN LA ZONA CARBONÍFERA DESDE EL FRENTE POPULAR HASTA COMIENZOS DE LA GUERRA FRÍA

JODY PAVILACK

\*\*

#### I

Una tarde en octubre de 1942, más de 2.000 hombres, mujeres y niños se juntaron en una plaza del pueblo de Lota Alto en el sur de Chile, para participar en una reunión del Sindicato Industrial de los mineros del carbón.<sup>279</sup> La sede sindical se ubicaba en un pabellón de dos pisos al borde de la plaza, y tanto el edificio como todo el terreno a su alrededor pertenecían a la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota (

CCIL

), una poderosa empresa privada, propiedad no de capitalistas extranjeros, sino de una familia pionera de la burguesía nacional de Chile.<sup>280</sup> En el momento de esta reunión pública, los mineros estaban envueltos en negociaciones contractuales, o “conflictos colectivos”, con la

CCIL

, llevadas a cabo de acuerdo con el Código de Trabajo de 1931 y mediadas por

las instituciones y personal del Estado. En este conflicto amargo, ambas partes acusaron a la otra de intransigencia antipatriótica. El sindicato había convocado la reunión para informar sobre el estado difícil de las negociaciones y el lugar elegido para esta, en el corazón de Lota Alto, se escogió para facilitar la asistencia de los mineros, sus esposas y sus vecinos. Los administradores de la

CCIL

negaron el permiso: decían que si el sindicato quería celebrar una reunión, esta tendría que ser en el estadio de la compañía, en las afueras de la ciudad. Enfurecidos por lo que percibieron como un intento de la empresa para limitar la participación democrática, los mineros desafiaron la orden. Alrededor de las 6:30 p.m., más de 2.000 personas se habían aglomerado en la plaza y llenaron gran parte de la calle, entre el sindicato y la iglesia parroquial que se elevaba enfrente.<sup>281</sup>

Pronto llegó al lugar el jefe de los carabineros de Lota Alto, el teniente Roberto Saa Sánchez, acompañado por una quincena de policías a caballo. Se movieron rápidamente para dispersar a la multitud. Blandiendo sables y disparando rifles al aire, cargaron con sus caballos calle abajo, obligando a hombres, mujeres y niños a huir en todas direcciones. Varios líderes y miembros sindicales encontraron refugio dentro de la oficina del sindicato, donde, después de recuperar el aliento, debatieron qué hacer. Fue entonces cuando el ex dirigente sindical Carlos Silva Torres decidió volver a la calle para intentar frenar el caos. Llevando la bandera chilena en alto, atravesó la puerta principal y comenzó a “hacer señales a sus compañeros para que lo siguieran hacia el estadio”. De repente recibió un balazo en el pecho.<sup>282</sup> Al caer, todavía sosteniendo la bandera, su sangre se derramó por el suelo, “tiñendo de rojo la tierra del oro negro de donde se extrae la energía por el impulso vital del país”, como describió el periódico comunista *El Siglo* su sacrificio patriótico.<sup>283</sup>

La

CCIL

había convocado a los carabineros (un agente esencial del Estado en términos weberianos) para defender el control de la empresa sobre la vida cívica en su propiedad privada. Además de Silva Torres, otras dos personas murieron en este enfrentamiento. Solo con dar una breve mirada a la historia chilena, no

sorprende que se utilice la fuerza estatal para violar los derechos humanos de los mineros y otros pobladores, teniendo en cuenta, además, la fuerza que el Partido Comunista había ganado en la ciudad de Lota y la región circundante, por la cual se calificaba a menudo como “zona roja” chilena. Lo sorprendente respecto a este caso, poco conocido, de violencia policial contra personas desarmadas, es el contexto histórico en que se produjo. No fue durante la gran ola de huelgas en la región a principios de la década de 1920, encabezada por la Federación de Trabajadores de Chile (

FOC

h); no fue durante la represión desatada por Carlos Ibáñez a fines de la década de 1920; tampoco fue al comienzo de la Guerra Fría a fines de la década de 1940, cuando el presidente González Videla se movió con fuerza contra comunistas y trabajadores; ni durante el régimen de Augusto Pinochet en los años 70 y 80.

Este asalto policial a una reunión de mineros del carbón y otros residentes de la comunidad tuvo lugar en 1942, un año crucial en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos y Gran Bretaña habían encontrado causa común con la Unión Soviética. La distensión global entre estos enemigos ideológicos creó la oportunidad en Chile para impulsar coaliciones electorales entre partidos marxistas y partidos centristas pro capitalistas, conocidas como “Frentes Populares”. Esta jugada, tanto política como socio-cultural, se tomó en respuesta al ascenso del fascismo global y también a los planes para el desarrollo industrial nacional creados en medio de la Gran Depresión.<sup>284</sup> De esta manera, en las elecciones presidenciales de 1938, una coalición entre socialistas, comunistas, el centrista Partido Radical y otros grupos más pequeños se unió detrás del candidato radical Pedro Aguirre Cerda. Su victoria marcó el inicio de tres gobiernos de coalición que generaron nuevas posibilidades políticas, institucionales y discursivas, para que los trabajadores chilenos consolidaran sus intereses en la esfera pública. La democracia y el capitalismo adquirieron nuevas dimensiones de reforma social, a medida que los partidos marxistas y sus seguidores de la clase obrera aumentaron su poder actuando dentro y no en contra de los sistemas constitucionales existentes. Desde la independencia del país hasta entonces, el Ejecutivo chileno había estado en manos casi exclusivamente de liberales y conservadores, ambos representantes de las clases altas, por lo que el triunfo de estos regímenes reformistas respaldados por los marxistas fue un paso histórico importante.

En este capítulo, exploro cómo esta época de “promesa democrática colaborativa” se experimentó en la región minera del carbón de Chile. Luego de una breve introducción a la región y su historia hasta la década de 1930, vuelvo al incidente del tiroteo policial en Lota en octubre de 1942, destacando las diferentes posiciones y acciones tomadas en sus secuelas por los trabajadores, el gobierno y la empresa. Mi propósito aquí es triple. Primero, destaco modos de activismo social y político llevados a cabo por trabajadores liderados por comunistas y otros residentes de la comunidad que considero emblemáticos de la era del Frente Popular. La decisión de los dirigentes sindicales de desplegar la bandera chilena mientras enfrentaban las balas de carabineros, revela tanto continuidades como novedades en la manera en que los mineros del carbón formularon sus demandas y lucharon por ellas en este momento histórico particular. En segundo lugar, quiero mostrar cómo estas perspectivas locales y formas de protagonismo popular se vincularon a los acontecimientos nacionales e internacionales. Finalmente, me interesa demostrar cómo coexistieron en estos años hebras entrelazadas en las relaciones de la clase obrera con sectores capitalistas y el Estado: hebras de esperanzas y promesas, colaboraciones y conflictos, confianza y traición.

Hacia el final del capítulo, traigo a primer plano las esperanzas renovadas y el vigor con que los mineros del carbón, ahora a la vanguardia de una amplia gama de organizaciones laborales y comunitarias regionales, afirmaron sus intereses y capacidad de acción en los primeros años de la posguerra. En 1946, estos trabajadores liderados por comunistas apoyaron la candidatura presidencial de Gabriel González Videla, líder del sector de izquierda del Partido Radical, quien prometió cumplir con muchas de las demandas reivindicativas que se habían pospuesto durante los años de la guerra. Pronto después de asumir el mandato, sin embargo, el presidente González Videla se volvió en contra de sus aliados comunistas y obreros. En octubre de 1947, aplastó una huelga legal de los mineros del carbón y luego intentó destruir las poderosas comunidades de clase trabajadora de la región. En este artículo, miramos las movilizaciones sociales y políticas en la zona carbonífera en octubre de 1942, en el apogeo de la década del Frente Popular, al lado de su trágico final, comenzando con los eventos de octubre de 1947. Así podemos ver la compleja relación entre el trabajo, el capital y el Estado en estos años, y contemplar la significación global del duro fin de este movimiento regional para la expansión y profundización de la democracia chilena en la mitad del siglo

## II

Comenzando a unos treinta kilómetros al sur de la ciudad de Concepción, la zona carbonífera se extendía por el golfo de Arauco desde el río Bío-Bío hasta la localidad costera de Lebu. Sus orígenes como una región distinta de clase trabajadora dentro de la nación se remontan a las últimas décadas del siglo

## XIX

, cuando los empresarios de la minería chilena comenzaron a invertir en la extracción industrial de carbón. A medida que los campesinos mapuche y mestizos emigraron del campo para convertirse en mineros del carbón, en trabajadores ferroviarios y en leñadores industriales, desarrollaron conciencia de clase y comenzaron a organizarse. Cuando sus esposas e hijos también emigraron a las minas, o se formaron nuevas familias allí, los pueblos mineros fronterizos se convirtieron en comunidades fijas y complejas. Las compañías necesitaban una fuerza de trabajo estable y “domesticada” que viviera dentro de sus recintos, y a este fin, ellos promovieron un cierto tipo de formación comunitaria, realizando bailes, eventos deportivos y concursos, como el de la casa más limpia o el mejor balcón adornado.<sup>285</sup> La hegemonía local de la élite empresarial, sin embargo, no quedaría sin oposición. Tal y como organizaciones de la clase obrera y de la izquierda política ganaban fuerza, competían con éxito para los “corazones y mentes” de los habitantes de la región.

En los primeros años del siglo

## XX

, los mineros del carbón seguían a los trabajadores portuarios del norte y los mineros del salitre, en formar filiales locales del Partido Obrero Socialista (

POS

) y de la Federación Obrera de Chile (



FOC

h). Cuando en 1921 estas organizaciones votaron por convertirse en el Partido Comunista de Chile (

PCC

h) y unirse a la Internacional Sindical Roja, la mayoría de los mineros del carbón apoyó la medida.<sup>286</sup> A finales de la década de 1920, los trabajadores organizados en todo el país se enfrentaron a una serie de leyes diseñadas para enmarcar un sistema “moderno” de relaciones trabajo-capital, el cual implicaba un nuevo papel regulador e intervencionista del Estado. Hasta ese punto los obreros habían luchado contra los patrones como colectividades independientes, derivando poder de su lugar en el proceso de producción. Bajo el nuevo modelo, que los obreros de Chile aceptaron lenta y cautelosamente, tanto ellos como los capitalistas cedieron algo de su poder al Estado para legislar y supervisar todos los aspectos de las relaciones laborales. Las leyes mismas eran progresistas, redactadas para corregir los desequilibrios estructurales que habían favorecido durante mucho tiempo a los patrones. Sin embargo, un código legal diseñado para llevar la justicia social al capitalismo organizado no significaba necesariamente su cumplimiento. La realización de la promesa radical de esta legislación social requería de la expansión y el empoderamiento de las oficinas y de los empleados del régimen estatal del trabajo, incluyendo los tribunales laborales. Esto no pasó en ninguna medida apreciable hasta el surgimiento del Frente Popular, cuando personas de tendencias progresistas ganaron puestos en agencias estatales de todo tipo y a todo nivel; muchos de estos nuevos funcionarios públicos provenían ellos mismos de la clase trabajadora y simpatizaban con el marxismo en alguna forma.

Varios académicos han descrito el Frente Popular en Chile como un esfuerzo de reformismo desde arriba fracasado, con regateos e intrigas entre los políticos santiaguinos en nombre de un futuro más próspero, democrático y justo, pero sin generar —o ni siquiera con la intención de generar— un movimiento social desde abajo.<sup>287</sup> Los obreros y sectores populares, según este relato, se mantenían en gran parte pasivos o, peor aún, habían sido engañados por agentes de la Unión Soviética para sacrificar sus propios intereses. No obstante, la experiencia de los mineros del carbón en estos años cuenta una historia diferente. Uno de los parlamentarios supuestamente regateando en Santiago detrás de puertas cerradas, por ejemplo, fue de hecho un exminero de Lota, Damián Uribe Cárdenas. Solo

un par de años antes, Uribe estaba excavando carbón en un frente a unos ocho kilómetros bajo el océano Pacífico y desempeñando el rol de delegado sindical por su sección en la mina. Después de ser elegido secretario del poderoso Sindicato Industrial de Lota, en 1941, Uribe ganó las elecciones como diputado por Concepción, postulando como comunista en una lista del Frente Popular. Después de diecinueve años en el fondo de las minas, Uribe “dejó sus herramientas de trabajo” y viajó a Santiago para “defender a sus compañeros” frente a los políticos conservadores y liberales, muchos de los cuales estaban íntimamente vinculados a las compañías mineras del carbón.<sup>288</sup>

Uribe no estaba solo en aprovechar las oportunidades creadas por el Frente Popular para hacer avanzar los intereses de los obreros. A lo largo de la década, comunistas, socialistas y demócratas fueron elegidos y designados para puestos clave en el gobierno: se convirtieron en alcaldes, concejales, gobernadores, congresistas, funcionarios del departamento de trabajo, secretarios judiciales y maestros de escuela. Los izquierdistas también ampliaron enormemente sus roles de liderazgo en foros sociales y culturales, como clubes deportivos, asociaciones de vecinos, grupos de jóvenes e incluso iglesias. Desde estas posiciones, comenzaron a cambiar la manera en que los ciudadanos de clase trabajadora experimentaban el ámbito político y las instituciones de gobierno. En la sesión inaugural de la Municipalidad de Lota en 1938, por ejemplo, el único comunista elegido, un exobrero de la

## CCIL

llamado Santos Medel Basualto, interrumpió la ceremonia para denunciar la práctica de prohibir la entrada a los ciudadanos comunes que no tuvieran “certificados de limpieza”.<sup>289</sup> Una vez que fueron mayoría, estos políticos locales de izquierda también realizaron “cabildos abiertos” e invitaron directamente a los sectores populares a participar. Oficiales recién ascendidos, como el diputado nacional Damián Uribe Cárdenas y el alcalde de Lota Santos Medel Basualto, junto con miles de otros activistas de la clase trabajadora que obtuvieron cargos públicos en toda la región, lucharon contra la exclusión y para cumplir con la potencialidad del Frente Popular como proyecto democrático transformador.

A fines de la década de 1930 y principios de los 40 también se produjo un aumento explosivo de militantes comunistas en puestos de liderazgo sindical en la región, transformando décadas de control ejercido por colaboradores de las compañías, conocidos como “dirigentes amarillos”. A contrapelo, los nuevos

“dirigentes rojos” se veían como “soldados de la democracia”, y así los tildaría el vicepresidente progresista de los Estados Unidos Henry A. Wallace cuando los visitó en el estadio de la

CCIL,

en marzo de 1943, durante su gira de buena voluntad por América Latina.<sup>290</sup> Bajo el nuevo régimen sindical, los obreros a menudo abrían sus reuniones al pueblo, incluso a veces realizándolas en espacios públicos e invitando a asistir a mujeres, niños, panaderos, pescadores y carpinteros, tal como ocurrió el 7 de octubre de 1942 en Lota Alto. Militantes de los partidos del Frente Popular, incluidos los comunistas y otros simpatizantes de la clase obrera, también ganaron posiciones en todos los niveles del Departamento de Trabajo (

DGT

), en los tribunales laborales y en los comités del arbitraje tripartitos, usualmente como representantes de los obreros, pero a veces del gobierno. Estas personas cambiaron el tono y la dirección de la intervención estatal, interpretando las reglas en forma más favorable a los trabajadores, lo que ayudó a consolidar la confianza de ellos en el sistema moderno de las relaciones industriales.

Cuando la Gran Depresión destrozó la economía chilena basada en las exportaciones y la nación se embarcó en un camino de industrialización, el carbón doméstico se convirtió en un producto tan vital que su escasez podía afectar gravemente a todo el país. La preocupación pública por la productividad en las minas de carbón aumentó durante la Segunda Guerra Mundial, y todo el país debatía temas como el control de los procesos de trabajo en las minas, el espectro de fuerzas políticas en la región y las condiciones de vida en los pueblos mineros. En las salas del Congreso, las páginas de los diarios, en los informes gubernamentales, y en sindicatos y bodegas del barrio a lo largo del país, se discutían problemas de la zona carbonífera, como los de la vivienda adecuada, la seguridad y la salud, la violencia doméstica, el alcoholismo y la indigencia. Estos eran problemas causados en gran medida por las empresas mismas, y aunque ellas intentaron presentarse ante la mirada pública como parte de la solución, con su Departamento de Bienestar y sus visitadoras sociales, el mero hecho de la preocupación nacional sobre las condiciones deficientes en los recintos mineros les dio a los obreros más poder para hacerse escuchar en la esfera pública.

Durante la década de 1940, los mineros del carbón, bajo la dirección comunista, surgieron en el centro de un amplio movimiento popular para profundizar la democracia y radicalizar la reforma social. Este movimiento ganó el apoyo de muchos pobladores que no trabajaban en las minas, incluidos comerciantes, panaderos, maestros de escuela y funcionarios públicos. Tanto en sus vidas personales como en su conciencia de clase, los mineros también se vinculaban con una variedad de obreros por toda la región: trabajadores agrícolas, forestales, madereros, ferroviarios, portuarios, alfareros, pescadores, cerveceros y fabriles, entre otros. El Partido Comunista (

PCC

h) sirvió como un paraguas unificador para estos diferentes grupos ocupacionales, y también para otros grupos regionales organizados en líneas de género, generación y comunidad, como el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (

MEMC

h) y las Juventudes Comunistas de Chile (

JJCC

), así como para una miríada de clubes deportivos y asociaciones de vecinos. El

PCC

h les coordinaba cada vez más sus actividades, promoviendo la participación amplia de los ciudadanos trabajadores en la vida política, social y cultural del vecindario y de la nación.

Así, una región distinta, la zona carbonífera, surgió a fines del siglo

XIX

y principios del

XX

, compuesta por pueblos, puertos, ferrocarriles, fincas y bosques, establecidos

para servir las necesidades de las minas y crear lucro para sus dueños. En 1940, un estimado de 137.720 residentes vivían en y alrededor de una docena de comunidades urbanas, urbanizadas y rurales, cada una vinculada al carbón de diversas maneras, con el núcleo demográfico y económico de la región en las ciudades adyacentes de Lota y Coronel. Casi 16.000 personas, o el 11% de la población regional, fueron empleadas directamente por una de las varias empresas mineras de carbón, que, a diferencia de las minas de cobre de Chile, estaban en manos exclusivamente de capital nacional.<sup>291</sup>

La capacidad de los mineros para actuar como la vanguardia de una “zona carbonífera” ampliamente inclusiva se basaba tanto en su papel esencial para la economía nacional como en su alto grado de organización. También estaban haciendo uso estratégico de los derechos legales y las vías de contestación que se les concedían en el sistema moderno de relaciones laborales que habían aceptado con cautela en la década de 1920. El proyecto del Frente Popular, que llegó a la escena nacional con la elección de Pedro Aguirre Cerda en 1938, promovió un ideal de desarrollo industrial donde el proletariado y la burguesía doméstica trabajarían juntos con la mediación justa de un Estado intervencionista. Pero incluso cuando lo apoyaron, los mineros del carbón no fueron fácilmente subyugados ni pacificados por este modelo. No se convencieron de que el conflicto de clases había desaparecido ni que sus patrones capitalistas podían ser sus aliados verdaderos. Más bien, se sintieron cada vez más poderosos, articulando una fuerte organización, liderazgos y peso electoral, para aprovechar oportunidades e influir tanto en la opinión pública como en actores políticos y gubernamentales.

Mientras afirmaban sus derechos y promovían sus intereses, sin embargo, se enfrentaron repetidamente a los límites del ideal. El 7 de octubre de 1942, cuando se reunieron en la plaza sindical de Lota Alto, los trabajadores y sus dirigentes creyeron que estaban actuando dentro de la ley y también conforme con las intenciones del Frente Popular. A pesar de eso, los carabineros, agentes del Estado, los atacaron con balas en el recinto y a instancias de la

## CCIL

. Además del ex líder sindical Carlos Silva Torres, quien llevaba la bandera chilena en mano cuando le dispararon, dos jóvenes mineros más murieron a manos de la policía ese día: Pantaleón Zambrano, quien se casó en el lecho de muerte con su novia desde la niñez, y Juan Antipil Maurelia, de 22 años,

comunista y mapuche. La ira fue palpable en toda la región, amenazando una irrupción violenta que podría destruir la política de conciliación.

### III

A medida que el caos en la plaza sindical de Lota Alto comenzó a amainar, amigos y familiares llevaron a los trabajadores muertos y heridos al hospital, mientras que la policía transportó a cerca de cincuenta detenidos a la cárcel de la vecina Coronel. Al día siguiente, *El Siglo* informó que “entre los obreros y la población reina una profunda indignación. Las calles han sido invadidas por los habitantes que piden la inmediata libertad de los detenidos y el castigo de los provocadores fascistas. El local del Sindical se encuentra lleno de obreros y mujeres que piden... la inmediata salida de Lota de los responsables”.<sup>292</sup> Al destacar el papel de las mujeres en esta protesta social, transmitió a un amplio público chileno —especialmente a los radicales “burgueses” o de clase media— que estas no eran solo las demandas de mineros ideológicamente rabiosos que intentaban destruir el capitalismo. Más bien, se trataba de ciudadanos pacíficos que defendían sus derechos: a reunirse públicamente, a gozar de la “libertad de vivir sin miedo” bajo la protección de la policía nacional y, tras los incidentes, a exigir el actuar de la justicia contra los autores de los delitos.<sup>293</sup>

A fines de 1942, mientras la Unión Soviética luchaba tenazmente para repeler el asalto nazi a Stalingrado, Chile aún tenía que romper los lazos con las potencias del Eje, y tanto los Estados Unidos como los comunistas chilenos intentaban persuadir al gobierno para que lo hiciera. A este fin, durante meses el

PCC

h había intentado fortalecer las fuerzas de centroizquierda en torno al presidente Ríos Morales. Ahora, los líderes comunistas de Lota, los que no habían sido fusilados ni detenidos, buscaban calmar la ira de los trabajadores, ya que una huelga ilegal u otra acción vengativa pondría en peligro la coalición frágil pero vital. Tuvieron cuidado especial de no acusar al gobierno, denunciando en cambio a la

CCIL

como “la única responsable de este criminal atentado contra la clase trabajadora”.<sup>294</sup> Los obreros de la región minera del carbón habían aceptado, en principio, el ideal de relaciones tripartitas armoniosas entre el trabajo, el capital y el Estado. En realidad, sin embargo, continuaron luchando en contra de la explotación por parte de sus jefes capitalistas, a diario en los pozos de las minas y en las tiendas de la empresa, y anualmente en las negociaciones contractuales. Lo que era diferente ahora, en el apogeo de su participación en el modelo de Frente Popular, era que los trabajadores se sintieron envalentonados para apelar a los actores estatales a que intervinieran en su nombre, incluso en los niveles más altos de gobierno.

Dos días después de los tiroteos, representantes de Lota viajaron a Santiago, donde el propio presidente Ríos Morales los invitó a una reunión. Esta rápida respuesta del Ejecutivo fue un sello distintivo de la época del Frente Popular, constituyendo una demostración pública del compromiso del gobierno con los derechos de los trabajadores en una democracia capitalista y moderna. El presidente Ríos les dijo a los dirigentes sindicales que ya había formado una comisión investigadora que iba en camino a la región. Esto pudo parecer una táctica para aplacar a los trabajadores indignados, quienes solo se habían abstenido de hacer una huelga ante la insistencia fuerte de sus líderes. Los dos hombres nombrados para informar sobre los acontecimientos eran radicales centristas muy respetados, pero ninguno con la reputación de simpatizante de los trabajadores. El director general de Información y Cultura, abogado de nombre Raúl Rettig Guissen, sería acompañado por el director general de Carabineros, Osvaldo Pazols Alfaro.<sup>295</sup> Los dirigentes sindicales de Lota tenían motivos para estar solo cautelosamente optimistas ante el anuncio de esta comisión investigadora.

El 8 de octubre, justo cuando los comisionados Rettig y Pazols abordaban un tren en ruta hacia la zona del carbón, los ataúdes de los tres muertos fueron dispuestos en la oficina del Partido Comunista en Lota Bajo. Al día siguiente, un cortejo fúnebre se abrió paso desde la sede del

PCC

h hasta la oficina del sindicato, y luego hasta el cementerio, donde miles de personas de toda la región se reunieron para elogiar a los trabajadores martirizados y denunciar a las fuerzas reaccionarias que amenazaban la promesa democrática de la época. La prensa comunista y de la clase trabajadora minimizó

el espectro de la violencia de clase, enfatizando en cambio el compromiso patriótico de los trabajadores con el proyecto del Frente Popular. Como argumentó, la Federación Nacional de Mineros (

FNM

) en su diario El Chiflón:

[E]l patriotismo de los obreros, tan calumniados por la prensa de la oligarquía, no estuvo solo en morir abrazados a la bandera chilena y defender los derechos constitucionales. Estuvo también [...] en el hecho de haber continuado trabajando, en el hecho de no interrumpir las labores de extracción de carbón. Como protesta, la masa no quería bajar a los piques. Pero bajó, ahogando sus sentimientos, ante el interés nacional de no ver disminuida la producción carbonífera. Ante este solo gesto, la patria debe rendir homenaje a los mineros, y el Gobierno premiarlos obligando a las compañías a aceptar los pliegos de peticiones que sus trabajadores les han elevado.<sup>296</sup>

Como parte de su llamado a amplias franjas de centristas chilenos, la prensa comunista y de la clase trabajadora también llamó la atención sobre los roles de las mujeres en el desarrollo de este movimiento popular regional —como trabajadoras; como madres, esposas e hijas de mineros; como encargadas del hogar, y como partícipes en asuntos sociales y políticos, como la asamblea sindical de Lota Alto el 7 de octubre de 1942—. En las semanas posteriores a los tiroteos, la prensa evocó a las mujeres y los niños para transformar la apariencia del conflicto industrial de los mineros masculinos en una lucha popular por la democratización. Mientras la policía estaba “golpeando salvajemente a los mineros”, decía un artículo, estos permanecían tranquilos, tratando solo de dispersarse lo más rápido posible. La violencia, sin embargo, “produjo un gran pánico entre las mujeres y niños”, y fue “cuando se producía el pánico [que]... el sargento Cerpa ordenó disparar”.<sup>297</sup> La escena en la que mujeres y niños entraban en pánico mientras la policía golpeaba a sus maridos y padres desarmados apeló a las simpatías y los ideales constitucionales promovidos por los centristas democráticos de Chile. No solo fueron sindicatos de la zona los que enviaron telegramas de apoyo a Lota y de protesta a las oficinas gubernamentales;



también lo hicieron diversos sectores políticos y sociales de todo el país, incluyendo organizaciones centristas tan destacadas como la Alianza Democrática de Santiago y el Comité Directiva de Trabajadores [del Partido] Radical.<sup>298</sup>

Entre las secuelas que tuvo el violento enfrentamiento en Lota, se realizó la primera Convención Departamental de Mujeres en la ciudad vecina de Coronel, liderada por mujeres comunistas asociadas en el

MEMC

h. Aspirando a “levantar un gran movimiento femenino con todos los sectores progresistas de la población chilena”, la Convención se centró más en las batallas socioeconómicas de clase y la política internacional que en cuestiones específicas de género. En su sesión de clausura, el 11 de octubre, Eva Rivas, líder de la

MEMC

h en Coronel, señaló que la Convención había estudiado a fondo las peticiones de contrato de los sindicatos y las apoyaba plenamente. Luego, refiriéndose a la reciente masacre en Lota, afirmó que los trabajadores asesinados “han caído por pedir más pan para sus hijos, más bienestar para sus compañeras y más seguridad para ellos mismos en el trabajo”. Rivas llamó también a todas las mujeres a unirse “en defensa de nuestro hogar y nuestra patria, hoy amenazada de caer en las garras de los fascistas”. Así prosigue su interpelación: “Madres, hermanas, esposas e hijas: el dolor de millares de mujeres que hoy gimen bajo la bota del fascismo nos obliga a redoblar nuestro trabajo, en defensa de nuestra libertad. Así ayudaremos a que esta guerra termine victoriosamente para las Naciones Unidas. Así aseguraremos para nosotros y para nuestros hijos, justicia y libertad”.<sup>299</sup> El mensaje de Rivas revela cómo la clase trabajadora de la región minera del carbón en las décadas de 1930 y 1940 experimentó sus compromisos entrelazados con sus familias y comunidades y también con los intereses nacionales e internacionales más amplios del Partido Comunista. Fue justo en este nudo de hilos entretejidos que la gente del carbón creó su propia visión de la democracia para la victoria en la guerra, tanto como para sus avances reivindicativos en la era de posguerra.

Días después de la clausura de la Convención de Mujeres, un accidente en el

pozo de la mina Piqué Grande de Lota hirió al menos a catorce personas, cinco de ellas de gravedad. La semana anterior, los delegados sindicales habían informado de un cable peligrosamente débil que sacaba carros de carbón de la mina, pero el jefe de sección no había tomado ninguna medida. Los trabajadores responsabilizaron a la empresa por un accidente que podría haberse evitado y continuaron insistiendo en que los supervisores de la empresa debían respetar los derechos y la autoridad de los delegados sindicales de planta, especialmente cuando se trataba de cuestiones de salud y seguridad. Al día siguiente del accidente, cuando las negociaciones del contrato de los trabajadores entraban en una nueva etapa legal, dirigentes de la región viajaron a Santiago para entablar conversaciones con representaciones de la empresa mediadas por el Director General de Trabajo (

DGT

). Estando allí, los dirigentes sindicales se reunieron tanto con el ministro del Trabajo como con el propio presidente Ríos Morales, lo que les transmitió el “alto nivel de interés mostrado por el gobierno en lograr una solución a este conflicto”. Una vez más, los líderes de la zona carbonífera destacaron la “posición patriótica de cooperación de los trabajadores con el Gobierno en su mayor impulso hacia la producción nacional y en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra el fascismo”.

Mientras los sindicalistas regresaban a la zona carbonífera, el presidente Ríos recibió el informe sobre el incidente en Lota elaborado por Raúl Rettig y Osvaldo Pazols, que primero presentó una breve narrativa de los hechos y, al final, conclusiones y recomendaciones. Una de las acusaciones del incidente del 7 de octubre de gran preocupación, no solo para los trabajadores de las minas de carbón sino para todos los ciudadanos democráticos de Chile, fue que un diputado nacional, el exminero del carbón de Lota Damián Uribe Cárdenas, había sido detenido en contra de su fuero parlamentario. Aún más problemático, Uribe Cárdenas afirmó que la policía lo había golpeado mientras estaba en custodia. Sobre estos cargos, los hallazgos de Rettig y Pazols fueron inequívocos en torno a que “el vejamen, desgraciadamente, se produjo”. Al mismo tiempo, sin embargo, el informe afirmaba que la policía había actuado en respuesta a la desobediencia de los trabajadores y exoneró a todos los agentes de delitos penales, incluido al teniente Roberto Saa Sánchez. Caminando sobre una línea delgada, Rettig y Pazols confirmaron así el uso ilegal de la fuerza estatal, pero a su vez reivindicaron a los perpetradores. Solo entre bastidores fueron trasladados

o disciplinados algunos de los policías involucrados.<sup>300</sup>

En la siguiente sección del informe, Rettig y Pazols abordaron lo que consideraron era el tema clave en el corazón del conflicto: la contradicción entre la jurisdicción de la empresa minera sobre los residentes de Lota en virtud de su posesión de propiedades, frente a la jurisdicción del gobierno sobre los ciudadanos estipulada en la Constitución. Esto presentó “una cuestión de trascendencia, que debe ser afrontada de inmediato”, dijeron Rettig y Pazols, ya que afectaba el derecho de los trabajadores a reunirse libremente, no solo en Lota sino en todo el país. Como explica el informe Rettig-Pazols:

En efecto, hasta aquí ha sido práctica uniforme, en todos los minerales del país, la de incluir entre los derechos que explotan dichos minerales, los de regular el ejercicio de numerosas facultades de orden ciudadano, mayor garantía se encuentra en nuestra propia Constitución Política. Aún más, los derechos que a los individuos y a los sindicatos corresponden en virtud de las leyes del trabajo, se ejercitan, bajo muchos aspectos, tutelados por las mismas empresas [...] El error parte de la extensión indebida dado al derecho de propiedad.<sup>301</sup>

El debate sobre los derechos a controlar las vidas de los mineros y sus familias se vinculaba con distintas visiones de la democracia que estaban en disputa a mediados de siglo. ¿Cuáles derechos adherían naturalmente a la posesión de propiedad? ¿Cuáles se debían al Estado? ¿Y cuáles a los propios trabajadores? En esta contienda, los líderes sindicales y políticos que representaban a los mineros del carbón intentaron utilizar aperturas democráticas para presionar al Estado a que intervenga en favor de un mayor control por parte de los trabajadores mismos. El gobierno de Ríos Morales, por otro lado, buscó utilizar el apoyo de los trabajadores y la conciliación de izquierda para reforzar su propio poder sobre los trabajadores y los capitalistas. Y, las compañías del carbón, por supuesto, buscaban mantener su control, ejercido por casi un siglo sobre “sus pueblos”, donde gran parte de todas las casas, las tiendas, los edificios, las calles, e incluso el pasto, les pertenecían.

Por su parte, los comisionados Rettig y Pazols apoyaron su discusión sobre los derechos asociados a la propiedad en las comunidades mineras en la decisión del

Consejo de Defensa Fiscal de abril de 1942, que “establece un distingo esencial entre lo que debe entenderse por recinto industrial en un campamento de esta especie, y la parte de las poblaciones que deben ser consideradas ciudad”. Este dictamen legal establecía que los derechos y obligaciones del Estado ponen límites inherentes a los derechos de los propietarios: “En lo que excede de las obligaciones contractuales que el obrero debe respetar al patrón, este deja de tener jurisdicción, y el obrero o empleado —ciudadano ahora— quedan sometidos solo a la tutela del Estado”. Partiendo de esta premisa, el informe Rettig-Pazols recomendó que solo las autoridades civiles deben ejercer el derecho a regular las reuniones públicas “en aquel sector del campamento que se considera ciudad o población”, sin importar la titularidad de la propiedad en cuestión. Sugirieron que el presidente otorgara este poder exclusivamente a los intendentes, gobernadores y subdelegados, todos siendo designados por el Poder Ejecutivo. Siguiendo este consejo, el 21 de octubre el presidente Ríos Morales y su ministro del Interior promulgaron un Decreto Supremo que prohibía a las empresas mineras restringir el horario y el lugar para las reuniones de los trabajadores. Los intendentes provinciales tendrían la responsabilidad exclusiva de presentar un “plan reglamentario”, enumerando los sitios apropiados para las reuniones públicas dentro de cada campamento minero. Esta fue una victoria importante para los obreros del carbón y para miles de otros ciudadanos, quienes vivían en ciudades de las empresas o “company towns”.

Luego, para la sorpresa de muchos, el informe Rettig-Pazols tomó un giro aún más radicalmente intervencionista al hacer recomendaciones directamente relacionadas con los asuntos internos de la

CCIL

. Comenzaron esta sección reflexionando sobre la naturaleza de las relaciones sociales: “La experiencia indica que una condición básica de la armonía entre obreros y patrones es la cordialidad que los jefes demuestran a sus subordinados. Es este un factor de orden humano cuya importancia no cabría discutir, ya que se ha comprobado que las actitudes arbitrarias o torpes de los jefes o administradores de industrias multiplican los conflictos del trabajo o dificultan su solución”. Rettig y Pazols se refirieron entonces directamente al jefe del Departamento de Bienestar de la

CCIL

, Octavio Astorquiza, denunciando sus actitudes y acciones como prejuiciosas, inflexibles y arbitrarias hacia los trabajadores, las cuales, dijeron, lo convertían en un grave impedimento para las relaciones armónicas entre la empresa y su personal. “Tenemos la certidumbre”, dijeron Rettig y Pazols, “que el señor Astorquiza debe ser relevado de su cargo actual”. Dando un paso más, recomendaron que el Ejecutivo intercediera directamente en la empresa para lograrlo. Explicando la lógica o la justificación de tal intervención estatal en una empresa privada, Rettig y Pazols argumentaron que:

El Supremo Gobierno y la Compañía tienen interés en mantener relaciones cordiales. De parte del Ejecutivo este interés radica, entre otros motivos, en su afán de procurar una mayor tranquilidad social. La Compañía requiere, a su vez, de la protección que el Gobierno debe a sus derechos. En nombre de esa recíproca necesidad se podría representar a la empresa mencionada la urgencia de cambiar a su jefe de Bienestar Social.<sup>302</sup>

Esta manera de entender las relaciones tripartitas en la era del Frente Popular indica tanto sus dimensiones utópicas como al menos una de sus premisas trágicamente erróneas: que los capitalistas alguna vez aceptarían tal nivel de intervención estatal en el funcionamiento interno de su negocio.

El director gerente de la

CCIL

, Juan Manuel Valle, respondió pronta y públicamente al informe Rettig-Pazols con una carta a la prensa, en la que se mostraba sorprendido por esta versión de los hechos. Valle defendió enérgicamente a Octavio Astorquiza como un “funcionario que después de veinte años de servicio, cuenta con la confianza de la Compañía, y que posee un carácter tranquilo y ecuaníme; y quien, con toda seguridad, no habría de faltar a las normas y a la tradición que la Empresa invariablemente exige”.<sup>303</sup> Esta fue una posición audaz, ya que las actitudes y acciones de Astorquiza estaban siendo criticadas como arbitrarias y abusivas por un abogado centrista muy respetado y por el jefe de la Policía Nacional, bajo la comisión del Presidente de la República. Sin embargo, en lugar de ofrecer gestos conciliatorios para mejorar la situación conflictiva, Valle rechazó

deliberadamente la evaluación de Rettig-Pazols y, al hacerlo, desafió los esfuerzos del gobierno por armonizar las relaciones laborales. A pesar de las medidas tomadas por la administración de Ríos Morales para tratar de frenar “la extensión indebida dado al derecho de propiedad”, no lograron eliminar a Astorquiza; muy por el contrario, su poder en la empresa aumentó en los años siguientes.

#### IV

El enfrentamiento en Lota y las respuestas que generó plantean algunos puntos clave para comprender todo el periodo del Frente Popular. Primero, el abrazo moribundo de Carlos Silva Torres a la bandera chilena encarnaba visiblemente una convergencia particular en este momento histórico, cuando el internacionalismo comunista se fusionó con su presunto opuesto, el nacionalismo patriótico. A nivel estratégico, esta convergencia se basó en la teoría marxista-leninista de las etapas, revivida por Stalin, en la que una revolución democrático-burguesa era necesaria como primer paso hacia una revolución socialista. Los obreros debían ver su trabajo como una contribución al desarrollo industrial nacional y concomitante a la causa de la democracia, tanto en el país como en el extranjero. Fue con estos objetivos en mente que las organizaciones sindicales dirigidas por los comunistas participaron en el modelo tripartito (Estado-trabajo-capital) para generar relaciones laborales armoniosas y acordaron compromisos de no hacer huelgas durante los años de guerra.

Al mismo tiempo, como hemos visto en los acontecimientos en Lota Alto de octubre de 1942, el patriotismo de los obreros y su plena aceptación de su identidad como ciudadanos no borró su sentido de los derechos de clase. Tampoco sofocó los esfuerzos de sus líderes de luchar tenazmente, aunque en esta época lo hicieran más a través de la negociación política y apelando al sentimiento nacional que por el enfrentamiento directo con los capitalistas o el Estado. La asamblea sindical que se disolvió con tanta brutalidad en octubre de 1942 había sido convocada para discutir las negociaciones contractuales anuales, durante las cuales los administradores de la empresa habían rechazado casi todas las peticiones de los trabajadores. Estos incidentes exponen así las contradicciones entre el modelo tripartito de relaciones laborales armoniosas y la

realidad de los intereses conflictivos de clase, contradicciones que hervían amenazadoramente y, de vez en cuando estallaron, a lo largo de la década del Frente Popular. Los bien organizados y disciplinados trabajadores del carbón insistieron en que no se abandonaran sus derechos bajo la estrategia de coalición del Partido Comunista. Para defender sus intereses mientras mostraban apoyo al gobierno, emplearon discursos estratégicos sobre el patriotismo, denunciando la intransigencia capitalista en las negociaciones laborales como sabotaje contra la economía nacional e incluso como fascista.

Estas maniobras complejas para conciliar una larga historia de conflicto de clase con un nuevo ideal de alianzas inter-clasistas nos llama la atención en torno a las formas de confrontación adoptadas durante estos años. Las disputas perennes entre el trabajo y el capital ya no se definían en términos de guerra de clases, sino que ahora se situaban en debates sobre el progreso nacional y la producción industrial, y en especial sobre definiciones operativas de “la democracia”. El reconocimiento por parte del gobierno de la justicia social como un elemento del modelo de desarrollo industrial reforzó las convicciones de los trabajadores y aumentó sus expectativas. Las batallas estratégicas libradas por los líderes sindicales tenían más que ver con obtener la simpatía del público y una intervención estatal favorable, que con enfrentar a las empresas directamente. El Estado surgió como un escenario de intrigas y negociaciones entre distintos intereses: todos —la clase obrera, los agricultores y los empresarios industriales— ejercieron una presión constante sobre las fuerzas gobernantes centristas para arbitrar, legislar y declarar a su favor.

Como fue destacado en el informe Rettig-Pazols, la historia del asesinato de mineros por parte de la policía nacional en propiedad de la compañía y a instancias de ella, también plantea cuestiones críticas sobre la jurisdicción, en términos de las dimensiones espaciales simbólicas tanto como legales, que regulaban las identidades de clase y de ciudadanía. ¿Qué papel debían tener los dueños de la propiedad para definir los límites entre la vida del trabajo y la vida de la ciudadanía en las comunidades mineras? Por casi un siglo, el mero hecho de ser dueños del terreno les había otorgado a los empresarios el derecho de controlar, casi complemente, las vidas de todas las personas que vivían en el recinto. Ahora, las coaliciones de centroizquierda querían recalcar la ciudadanía de los obreros industriales, tan vitales para el desarrollo nacional, y su derecho a protección estatal. La jurisdicción histórica reclamada por las compañías mineras en virtud de su propiedad se vio en conflicto con la jurisdicción legal otorgada al Estado. La pregunta que quedaba abierta era si el gobierno iba a poder reunir la

voluntad política y la capacidad para desafiar los derechos extralegales que ejercían los sectores propietarios.

Finalmente, la historia de octubre de 1942 destaca el sentido de posibilidades y esperanzas engendrado en este periodo de la historia chilena. Aunque los gobiernos de la era del Frente Popular a menudo actuaron para frenar los desafíos de los trabajadores a sus empleadores capitalistas, lo hicieron sin renunciar a un discurso de justicia y armonía en las relaciones laborales. Reconociendo la legitimidad de muchas de las quejas de los trabajadores y prometiendo intervenir en su nombre, los actores gubernamentales parecieron ponerse del lado de estos, al menos en algunas cuestiones. Esta fue una base poderosa desde la cual los trabajadores continuaron confrontando a sus empleadores. Y ocasionalmente, como después de octubre de 1942, representantes del gobierno incluso censuraron directamente a las empresas mineras del carbón. Con la efervescencia colectiva que se desarrollaba en la zona carbonífera en estos años, los tiroteos policiales en Lota fortificaron el sentido de la justicia de las reivindicaciones obreras, generando esperanzas de que el gobierno aumentase la intervención directa en su nombre.

## V

Estas esperanzas habían despertado de manera apreciable durante el gobierno del Frente Popular de 1938 hasta principios de 1941. Como observó el sociólogo chileno Jorge Marambio, se vio “una situación donde por primera vez, particularmente en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el mundo carbonífero deposita orgánicamente sus esperanzas en el Estado, como un agente mediador y eventualmente solucionador de conflictos”.<sup>304</sup> Pero después de haber pasado por muchas luchas difíciles con sus jefes y con agentes estatales durante los años siguientes, tal como el incidente de octubre de 1942 en Lota, la frustración de los trabajadores y su propensión a la movilización crecieron. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo una intensa disputa global y nacional sobre los contornos del orden de la posguerra, y muy rápidamente la alianza en tiempos de guerra entre los Estados Unidos y la URSS comenzó a romperse. Washington presionó cada vez más a los gobiernos centristas de América Latina para que rompieran con los comunistas y, especialmente después de la muerte de Franklin D.



Roosevelt y el ascenso de Harry S. Truman a la presidencia de Estados Unidos, para que tomaran medidas de exterminio o “contención”. Moscú, por su parte, instaba a sus afiliados comunistas en todo el mundo a denunciar, en nombre de la paz y la democracia, lo que veían como beligerancia e imperialismo de Estados Unidos.

En el ámbito doméstico, los trabajadores agrícolas e industriales empezaron a presionar fuertemente por el cumplimiento de promesas reivindicativas largamente postergadas. A pesar de las líneas de batalla emergentes de la Guerra Fría global y creciente anticomunismo en el país, la gran mayoría de los trabajadores chilenos aún elegían avanzar en sus reclamos a través del modelo de coalición de Frente Popular, en lugar de optar por huelgas generales o acciones violentas. De cara a las elecciones presidenciales de 1946, apoyaron con entusiasmo al candidato del Partido Radical Gabriel González Videla, quien había liderado durante mucho tiempo al ala izquierda de su partido y tenía estrechos vínculos con los comunistas. En agosto de 1946, González Videla hizo un viaje de campaña muy publicitado a la “zona roja” de Chile, donde habló con los trabajadores en el estadio de la

CCIL

, el mismo sitio donde la compañía había tratado de obligar a los trabajadores a reunirse en octubre de 1942 y donde el presidente de los Estados Unidos había aclamado a los mineros del carbón como valientes “soldados de la democracia” en marzo de 1943. Mientras estaba en la plataforma rodeado de venerados líderes comunistas locales, González Videla prometió al pueblo chileno que en su gobierno no habría tanto sufrimiento. Un residente de Lota, Manuel Cifuentes, quien estuvo allí entre la multitud cuando era niño, recordó que algunas “ancianitas, muy ancianitas, por todo lo que había sucedido” le entregaron a González Videla una barra de pan de minero, horneado en hornos comunales. El nuevo abanderado de la coalición centroizquierda respondió que “ese pan era chico [y] que iba a comer un pan grande”.<sup>305</sup>

Después de ganar las elecciones y asumir el cargo, el presidente González Videla tomó varias medidas que parecían muy prometedoras para los mineros del carbón, incluido el nombramiento de tres ministros comunistas por primera vez en las Américas. Muy pronto, sin embargo, se volvió en contra de sus antiguos aliados, haciendo llegar la Guerra Fría a Chile con fuerza. En octubre de 1947, los mineros del carbón y otros trabajadores de la región de nuevo se veían

envueltos en conflictos colectivos con las empresas, y de nuevo enfrentaron la represión estatal, aunque ahora de una magnitud e intención distintas a la de 1942. Después de agotar todas las fases legalmente ordenadas de las negociaciones contractuales, los mineros votaron para ir a la huelga, a partir del 4 de octubre. Aunque los funcionarios del Departamento de Trabajo declararon la huelga legal, el presidente González Videla necesitaba demostrar su lealtad con la causa anticomunista y la acusó de ser una “huelga política” orquestada por agentes extranjeros.

La respuesta del gobierno fue rápida y decisiva, destinada a eliminar toda duda respecto a la posición que tomara Chile en la Guerra Fría emergente. Incluso antes de que comenzara la huelga, regimientos del Ejército, buques de guerra de la Armada y escuadrones de la Fuerza Aérea se alistaban para ocupar la región. Con la ayuda de carabineros locales, saquearon oficinas sindicales, sedes de partidos políticos, clubes sociales y deportivos y casas de trabajadores. Disolvieron los gobiernos municipales, cerraron las escuelas, y se hicieron cargo del funcionamiento de las minas y otros sitios de producción. Mientras tanques y cañones llenaban las calles y soldados corrían con sables por las casas buscando a los obreros en huelga, toda forma de protesta y resistencia organizada era evidentemente difícil. En los primeros días, dirigentes y activistas, tanto en Lota y Schwager como en Curanilahue y Lebu, intentaron agruparse en las entradas de las minas para organizar piquetes, resultando detenidos en masa. Algunos fueron llevados en buques navales hasta campos de detención, mientras que otros fueron sujetos a una forma de exilio interno llamado relegación. Varios dirigentes y obreros lograron esconderse en las colinas circundantes o incluso huir de la zona. Uno de los dirigentes más perseguidos fue el adorado alcalde comunista de Lota, Santos Medel Basualto, quien tuvo que esconderse bajo sacos de papas en la parte trasera de un camión para escapar de la región hacia Santiago, donde pasó los próximos años clandestino.<sup>306</sup>

El mismo día que comenzó la huelga, el Ejecutivo aprobó decretos obligando a los mineros a volver al trabajo de inmediato, bajo términos supuestamente favorables para ellos. Con sus líderes en detención o escondidos y la prohibición de realizar reuniones o manifestaciones públicas, los obreros se negaron a cumplir con los decretos y siguieron en huelga. El jefe de la zona ocupada, el vicealmirante Alfredo Hoffman Hansen, tomó varias medidas para forzar a los obreros a volver al trabajo. En primer lugar, llamó a servicio activo a todos los reservistas del Ejército en la zona minera, que, según la ley chilena, incluía a todos los hombres que habían completado su año de servicio militar

obligatorio.<sup>307</sup> Convocar a los mineros al servicio militar los ponía bajo la jurisdicción de la ley militar y hacía de su negativa a trabajar un fundamento para la corte marcial. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas tomaron control de los puntos de entrada y salida de la zona, requiriendo que todo varón mayor de catorce años obtuviera una tarjeta de salvo conducto para moverse.<sup>308</sup> También prohibían que aliados de los mineros entraran para ver la ocupación de primera mano, tal como ocurrió el 9 de octubre cuando el vicealmirante Hoffman “comunicó a los parlamentarios Bernardo Leighton, Pablo Neruda, Damián Uribe y Natalio Berman, que no podían entrar a la zona”.<sup>309</sup>

Ya estando en control de todo ingreso de alimentos y mercancías a los pueblos mineros, la jefatura de la Zona de Emergencia puso en vigencia una política de “el que no trabaja no come”. Retiraron provisiones de las casas de los trabajadores y racionaron estrictamente las ventas posteriores. Cuando se enteraron de que los pobladores subsistían de los frutos del mar, “se prohibió la pesca”.<sup>310</sup> También estaba “prohibido en forma estricta” la formación de “ollas comunes” o cualquier tipo de reunión alrededor de los hornos colectivos donde se hacía el pan de los mineros. Los militares así privaron a las familias de los mineros de los modos comunales de abastecimiento que habían desarrollado durante muchas décadas para sobrevivir en tiempos de crisis, incluidos los movimientos huelguísticos.

En tales circunstancias, las mujeres de la zona se movilizaron para protestar por la detención de sus maridos e hijos, la violación de sus derechos democráticos y el hambre que el Estado imponía a sus familias. Temprano en la huelga, una delegación que se llamaba “Mujeres Unidas de Lota” se entrevistó con el vicealmirante Hoffman para entregar un memorándum en el cual exigían libertad para los detenidos y “respeto al Código del Trabajo en lo que se refiere al derecho de reunión”. Estas mujeres también le solicitaron permiso para realizar una “marcha de los canastos vacíos”. Afuera en las calles, tanto en Lota como en Coronel y otros pueblos mineros, cientos de mujeres se agruparon para presionar a los oficiales. El vicealmirante no se inmutó: rechazó la solicitud de hacer una marcha y ordenó que los carabineros y las Fuerzas Armadas disolvieran de inmediato todas las manifestaciones públicas, aunque estuvieran integradas por mujeres y niños.<sup>311</sup>

A pesar de todas estas medidas, casi dos semanas después del comienzo de la huelga, menos de 3.000 mineros —es decir, menos de uno de cada seis— habían vuelto a trabajar y la mayoría de ellos lo habían hecho a punta de ametralladora

o bayoneta. La administración de González Videla ahora se movió para reemplazar a los obreros en huelga con “elementos completamente nuevos”.<sup>312</sup> A partir del 15 de octubre, trenes empezaron a llegar a las estaciones de Lota y Coronel llenos de rompehuelgas reclutados en las áreas rurales del sur. En total, unos 1.500 de estos “enganchados” serían llevados a las minas, lo cual fue citado por el Auditor de Guerra, General Bravo Ríos, como “uno de los factores que más contribuyó al triunfo” sobre los huelguistas.<sup>313</sup>

Los mineros que permanecieron en la región comenzaron a volver al trabajo, juntándose en los piques con “los huasos rompehuelgas”. Como informó un oficial de la embajada estadounidense: “Para el 20 de octubre, parecía que las medidas delineadas anteriormente habían tenido éxito en terminar la huelga. La producción se estaba acercando a lo normal en Lota, y la mina de Schwager estaba trabajando”.<sup>314</sup> No obstante su aparente derrota, algunos mineros efectuaron una protesta final. El 21 de octubre, alrededor de 2.000 mineros en Schwager y 600 en Lirquén se apoderaron de las minas, negándose a salir al término de sus turnos y usando explosiones de dinamita para repeler a las tropas militares enviadas a desalojarlos. Exigían la liberación de todos los prisioneros políticos y que las Fuerzas Armadas dejaran la región. En cuanto las tropas, huyendo de las explosiones de dinamita, llegaron a la superficie, bombearon a los mineros con gases lacrimógenos puestos en el sistema de ventilación. Cuando los mineros emergieron, mareados y con asfixia, los militares arrestaron e interrogaron a más de doscientos, a quienes tildaban como “líderes del movimiento”.

Para fines de febrero de 1948, cinco meses después de que comenzara la huelga, más de 7.000 personas habían sido detenidas y deportadas por la fuerza de la región, ya fuese a sitios designados de exilio interno (relegación) o a campos de prisioneros militares, incluido uno en el puerto norteño de Pisagua que estuvo bajo la dirección durante un tiempo del joven capitán de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, quien llegaría a ser dictador de Chile entre 1973 y 1989. En sus memorias, Pinochet dijo que fue durante su estadía en el campo de Pisagua y luego como jefe del pueblo minero ocupado de Coronel donde primero calibró la amenaza que el comunismo representaba para su patria.<sup>315</sup>

Mientras tanto, las mujeres que habían acompañado a sus maridos en su relegación fuera de la zona, y las que habían sido también relegadas, trataban de luchar por sus derechos y su sobrevivencia de cualquier manera posible. En algunos lugares, se encontraron con aliados locales. Un grupo de mujeres de la

Asociación de Arrendatarios de la ciudad de Concepción, por ejemplo, escribió al jefe de la Plaza solicitando permiso, como dueñas de casa, “para hacer la comida en olla común, a las madres y sus hijos, de los obreros separados de ellas, por asuntos de la huelga de la zona del carbón; se trata de que muchas de estas madres con sus hijos alojan en el Gimnasio del local de la Fábrica de Paños de Concepción, solo falta que se les haga la comida en dicho local”.<sup>316</sup> No se conoce la respuesta, pero dada la prohibición “en forma estricta” contra las ollas comunes dentro de la zona de emergencia, lo más probable es que esta fuera negativa.

## VI

La historia de las décadas de los 30 y 40 en Chile vista desde el suelo y el subsuelo donde vivían, trabajaban y luchaban los mineros del carbón y sus vecinos, desafía la noción del “carácter pasivo” del Frente Popular, revelando en cambio una época de movilizaciones complejas, lideradas por los comunistas en nombre de su visión de la democracia que incluía la política participativa tanto como mayor justicia socioeconómica. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los sectores centristas de Chile se alejaron del Partido Comunista y de la clase obrera y volvieron a una coordinación abierta con las fuerzas de derecha, no estaban respondiendo simplemente a las presiones internacionales, sino también a las afirmaciones de protagonismo popular desarrolladas a lo largo de la década anterior. La clase trabajadora había comenzado a escaparse del control de los radicales en formas que alarmaron incluso a los elementos progresistas del partido. La percepción de la centroderecha de un movimiento surgiendo desde abajo explica la furia de la represión desatada contra los sectores populares de Chile al inicio de la Guerra Fría, y especialmente contra los mineros liderados por los comunistas. No fueron encarcelados, desterrados, incluidos en listas negras y privados del derecho al voto porque hubieran sido manipulados pasivamente desde arriba, sino porque de hecho habían encontrado nuevas y poderosas vías para movilizarse por sus derechos como trabajadores y como ciudadanos. En un sentido, la media vuelta represiva tomada por González Videla representaba la más temprana contra-revolución de la época de la Guerra Fría.<sup>317</sup> Nos ayuda así a comprender la radicalización de los sectores populares en las siguientes décadas, hasta la próxima fuerte reacción en contra de estos,

liderada por el ahora no tan joven general Augusto Pinochet, quien había comenzado a formar sus convicciones contra la izquierda y los obreros organizados durante su estadía en la zona del carbón a fines de los 40.

Aunque el contexto global jugó un papel importante, lo que ocurrió en Chile en las décadas de 1930 y 1940 fue en gran parte una lucha por las definiciones de la democracia y de la ciudadanía, cuyo resultado afectaría dramáticamente las relaciones sociales y las jerarquías de poder. Como observó el historiador Greg Grandin, la significación de los inicios de la Guerra Fría en América Latina radicaba en un distanciamiento de la promesa participativa de la era del Frente Popular, cuando mucha gente consideraba al menos un cierto grado de justicia social como un elemento integral de la democracia. Lo que lograron en los años después de la Segunda Guerra Mundial los EE.UU., la derecha política y las clases empresariales del hemisferio, fue el ascenso hegemónico de una noción restringida de la democracia “en los términos astringentes de libertad personal más que de seguridad social”. El presidente de Chile, antiguo amigo de los comunistas, se convirtió en uno de los líderes más vociferantes del hemisferio en promover el nuevo orden anti-comunista y en contra de cualquier movilización de los sectores populares.

En abril de 1950, mientras los efectos de la

LDD

y otras medidas anti-comunistas y antiobreras estaban en pleno apogeo en Chile, el presidente González Videla y la primera dama Rosa Markmann se fueron de viaje por dos semanas a los Estados Unidos, donde tuvieron varias reuniones agradables con el presidente Truman y su esposa.<sup>318</sup> A partir de la represión del paro carbonífero y la militarización de la región a fines de 1947, el gobierno de González Videla había convencido a los Estados Unidos de que su ruptura con el comunismo era sincera y total, y lo premiaban con una recepción oficial en la Casa Blanca. Mientras tanto, los jóvenes de los pueblos mineros, donde estuvo una vez González Videla brazo a brazo con líderes comunistas prometiendo un “pan minero grande”, corrían grandes riesgos bajo la ocupación militar, escabulléndose al amparo de la oscuridad para cubrir los muros con grafitis incendiarios: “Abajo la tiranía”, “Abajo el 8987”, “Muerte a Videla el traidor” y “Gabriel González de Truman”, denunciándolo así como si fuera una mujer mantenida, emasculado y dependiente. Las líneas de batalla de la Guerra Fría sí habían llegado a Chile, y tomaban forma en las vidas y acciones de los

obreros/as del país y sus familias. En juego, por supuesto, estuvo la lucha entre el comunismo y el anticomunismo, pero también, fue una contestación entre diferentes nociones de la democracia íntegramente vinculadas a la larga historia de la lucha de clases en el país. El anhelo de los mineros por una democracia centrada en “la libertad de la miseria”, como fue promovida por el presidente Roosevelt, fue aplastado por la aceptación por parte de González Videla de la doctrina Truman. En pos de la muerte del Frente Popular, modos de la democracia capitalista excluyente y opresiva llegaron a dominar en los EE.UU. y su esfera de influencia, lo cual provocaría ciclos repetidos de “violencia insurgente y contrainsurgente” durante los siguientes 70 años, y más allá. <sup>319</sup>

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

### *Entrevistas Citadas*

*(todas realizadas y transcritas por mí, a menos que se indique lo contrario)*

Azócar Medel, Evaristo. Residente de por vida de Lota y Coronel; exminero del carbón; militante del Partido Socialista; sobrino del alcalde comunista de Lota en la década de 1940, Santos Medel. Entrevistas en su restaurante, Playa Blanca, 18-19 de junio de 1998.

Basa Ramírez, Manuel. Panadero de Lota que hizo su servicio militar en Concepción en 1946. Entrevista en la Plaza de Armas, Lota Bajo, 10 de agosto de 1996. Transcrita por Verónica Garcés Fuentes.

Cifuentes, Manuel. Pastor de la Iglesia Evangélica de Huechuraba nativo de Lota, donde vivió hasta 1954, cuando tenía 23; hijo de obrero de la compañía minera. Entrevista realizada y transcrita por Mario Garcés Durán, Santiago, junio de 1993. La transcripción fue proporcionada por el profesor Garcés con el permiso del Pastor Cifuentes.

Corvalán Lepe, Luis. Líder de largo plazo del

PCC

h. Entrevista en su domicilio, San Bernardo, Gran Santiago, 3 de julio de 1998; co-conducida con Mario Garcés Durán, y transcrita por Verónica Garcés Fuentes.

Ramírez Flores, Juan Osvaldo. Nativo de Lota; hijo de un empleado administrativo de la empresa de carbón. Entrevista en su domicilio de Coronel, 14 de febrero de 1998.

Sanhueza Segunda, Omar. Exminero del carbón; hermano de un relegado bajo



González Videla en 1947-48; dirigente comunista del sindicato de mineros de Lota en 1968-70 y 1971-73; víctima de la dictadura de Pinochet. Entrevistas en su domicilio de Lota Alto, 10 y 13 de septiembre de 1997.

Vidal Ojarse, Fresia. Residente de Lota de por vida; activista política independiente. Entrevistas en su domicilio de Lota Bajo, 15 de agosto de 1996 y 15 de septiembre de 1997.

### *Libros, Artículos y Documentos*

Astorquiza, Octavio, Lota: antecedentes históricos, con una monografía de la Compañía La Minera e Industrial de Chile, Sociedad Imprenta y Litografía, Concepción, 1929.

, Lota: antecedentes históricos, con una monografía de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota, en ocasión de celebrar el noveno aniversario de la explotación de sus minas, 1852-1942, Imprenta Universo, Valparaíso, 1942.

y Galleguillos V., Oscar, Cien años del carbón de Lota, 1852-septiembre 1952: antecedentes históricos, monografía y estudios sobre el desarrollo industrial, económico y social de las minas carboníferas de Lota en su primer siglo de vida, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1952.

Bravo Ríos, Leonidas, Lo que supo un Auditor de Guerra, Editorial del Pacífico, Santiago, 1955.

Dinius, Oliver J. y Ángela Vergara (eds.), Company Towns in the Americas: Landscape, Power, and Working-Class Communities, University of Georgia Press, Athens, GA, 2011.

Grandin, Greg, The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War, University of Chicago Press, Chicago, IL, 2004.

y Joseph, Gilbert M. (eds.), *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America's Long Cold War*, Duke University Press, Durham, NC, 2010.

Huneus, Carlos, *La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la ley maldita*, Editorial Debate, Santiago, 2009.

Klubock, Thomas M., *Contested Communities: Class, Gender, and Politics in Chile's El Teniente Copper Mine, 1904-1951*, Duke University Press, Durham, NC, 1998.

Loveman, Brian, *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, tercera edición, Oxford University Press, New York, 2001.

y Lira, Elizabeth, *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política, 1932-1994*, LOM/DIBAM, Santiago, 2000.

Marambio, Jorge. *Identidad cultural en la zona del carbón*, Santiago,

LOM

, Santiago, 1996.

Milos, Pedro Hurtado, *Frente Popular en Chile. Su configuración: 1935-1938*,

LOM

, Santiago, 2008.

Moulian, Tomás, *Líneas estratégicas de la izquierda: "Frentismo", populismo, anti reformismo, 1933-1973*,

FLACSO

, Santiago, 1982.

, Fracturas: De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938–1973), LOM, Santiago, 2006.

Pavilack, Jody, Mining for the Nation: The Politics of Chile's Coal Communities from the Popular Front to the Cold War, Pennsylvania State University Press, University Park, PA, 2011.

, “Henry A. Wallace y sus ‘Amigos’ en América Latina (1940-1949)”, en Patricio Herrera González, ed., El Comunismo en América Latina: Experiencias militantes, intelectuales y transnacionales (1917-1955), Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 2017, pp. 441-55.

, “Compañeros de ruta panamericanos: movimiento progresista al comienzo de la Guerra Fría”, en Patricio Herrera González, ed., América y la Guerra Fría Transnacional, Editorial América en Movimiento, Valparaíso, 2021, pp. 45-82.

Watson, Thomas. Visita del Excelentísimo señor don Gabriel González Videla, Presidente de la República de Chile a los Estados Unidos de América, 12 de abril-3 de mayo de 1950,

IBM

, n.p., 1951.

\* Entrevista a Manuel Cifuentes en la que describe la visita a Lota del candidato presidencial Gabriel González Videla, realizada por Mario Garcés Durán, Santiago, junio de 1993. El profesor Garcés me proporcionó la transcripción con el permiso de Pastor Cifuentes.

\*\* University of Montana.

## **VI. CUERPOS Y FORMAS DE LUCHA CAMPESINA Y MAPUCHE Y SUS ARTICULACIONES CON EL MOVIMIENTO OBRERO. CHILE, 1ª MITAD DEL SIGLO XX**

M. ANGÉLICA ILLANES OLIVA

[\\*](#)

A los humildes obreros de la tierra como parias nos trataron hasta hoy.  
Lograremos una vida más humana con obreros y mapuches haciendo unión. <sup>320</sup>

### **PRESENTACIÓN**

El siglo

XX

fue un periodo donde el capitalismo se logró consolidar en todos sus rostros y figuras (de modo mercantil, industrial, financiero, colonial/imperialista), expandiéndose hasta los más remotos confines. Pero, al mismo tiempo, es un periodo de emergencia y presencia de las luchas del pueblo, en todas sus formas y en todos los campos de su realidad. Luchas sociales que son el pulso crítico y el movimiento de la historia y que, en la coyuntura del siglo

XX

, pusieron a menudo en jaque al capitalismo y al Estado liberal en diversos países del mundo.

Mientras la clase obrera se enfrentaba a las burguesías que operaban capitales en

industrias, manufacturas y/o faenas extractivas, los campesinos, campesinas y originarios/as en muchos países y territorios fueron fuerzas/cuerpos movilizados en pos del derrocamiento de órdenes sociales opresivos, cuasi coloniales, que bloqueaban los cambios históricos exigidos. El siglo

XX

quedó, así, marcado por el levantamiento, casi al unísono, de estas fuerzas de la clase obrera y fuerzas sociales de la tierra, generando un temblor intenso en los órdenes ancestrales estatuidos por los Estados, las burguesías y las aristocracias.

Las fuerzas sociales de la tierra en Latino/IndoAmérica alcanzaron distintas formas y configuraciones como, primero, cuerpos revolucionarios que apuntaban a un cambio radical de la estructura de la propiedad y del modo de producción de la tierra (México, Bolivia y Cuba) y segundo, como movimientos de campesino/as y originarios que, en mayor o menor medida, desarrollaron luchas y generaron organizaciones y demandas, iniciando un proceso fragmentario pero progresivo de configuración identitaria o de auto-reconocimiento como etnias y como clase.

Es decir, podríamos plantear que el movimiento campesino y de pueblos originarios constituye una fuerza social importante que se suma, desde inicios del siglo

XX

, a las fuerzas de trabajadores urbanos, generando en conjunto una significativa desestabilización del régimen capitalista, lo que produce nuevos pactos y proyectos políticos en las décadas de 1930 y 1940, los que maduran y fructifican posteriormente en los 60 y primeros años de los 70.

¿Qué entenderemos al hablar de movimiento de campesinos/as y originarios/as? Desde el punto de vista conceptual, nos parece pertinente la definición que da Joachim Rashke para movimiento social, como “un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social”;<sup>321</sup> definición muy amplia que apunta fundamentalmente a comprender el movimiento social en base a tres elementos: a) la constitución de un cuerpo-colectivo; b) que genera acción; c) como presión transformadora. Para los objetivos de este texto y, principalmente, para comprender el movimiento social de la tierra generado en Chile en la primera mitad del siglo

XX

, esta definición nos parece adecuada.

Desde una perspectiva histórico-teórica, los movimientos sociales anteriores a los regímenes neoliberales, se analizaron desde teorías estructurales que los comprendían como movimientos que apuntaban a realizar cambios en las estructuras económicas, sociales y políticas, definiéndose sus sujetos en función de luchas de carácter principalmente laborales y de clase. A partir de los años 60, y con mayor claridad desde el establecimiento de los regímenes neoliberales en la década del 1980, se pudo apreciar la proliferación de movimientos de sujetos no considerados por dichas teorías, especialmente movimientos indígenas, de mujeres, ambientalistas, transexuales, etc., que recibieron la nomenclatura de Nuevos Movimientos Sociales (

NMS

), los que se comprendieron como movimientos culturales, básicamente identitarios, en lucha por la construcción y reconocimiento de su sujeto histórico, bastante ajenos a la lucha por cambios en las estructuras económico-sociopolíticas.

Actualmente se tiende a revisar esta dicotomía teórica, falsa a nuestro juicio, para comprender las luchas de los distintos sujetos y movimientos sociales tanto desde la acción por el cambio de las estructuras económico-sociopolíticas, como por su lucha cultural por la construcción y reconocimiento de sus identidades colectivas. Tal como plantean Wickham-Crowley, Timothy P. y Susan Eva Eckstein, “los focos en la cultura y el discurso de la teoría de los

NMS

y el análisis de las nuevas identidades colectivas emergentes fraguadas en algunos movimientos sociales, deben integrarse (...) con las perspectivas de la economía política y la sociología política”. Como bien dicen estos/as autores/as, la teoría cultural e identitaria viene a enriquecer las teorías estructuralistas — incorporando la cuestión de las identidades en los movimientos sociales de clase y otros—, así también las teorías culturalistas han de considerar que los sujetos forman parte de “relaciones estructurales y desiguales en las cuales está inserta la vida de las personas”.<sup>322</sup> Los/as autores señalados relevan el hecho de la existencia de numerosos estudios de las últimas décadas que

destacan rutinariamente la importancia crítica de las condiciones económicas y políticas en la activación de identidades (a veces previamente latentes) y en la configuración de las trayectorias de los movimientos, lo que sugiere implícita si no explícitamente que el estudio de tales condiciones debe ser parte de toda teoría de los movimientos sociales.<sup>323</sup>

En este ensayo nos interesa comprender los movimientos populares campesinos e indígenas de la primera mitad del siglo

XX

desde esta perspectiva teórica híbrida, que busca integrar las luchas por demandas económico-políticas y socioculturales que apuntan, en conjunto, tanto a la construcción de identidades colectivas, como al buen vivir económico familiar, comunitario y societario. Esta perspectiva teórica integradora nos permite establecer interrelaciones comprensivas entre las luchas de múltiples sujetos, en este caso, entre el movimiento de obreros/as, de campesinos/as y de los pueblos originarios; luchas que estuvieron presentes en las calles y en las organizaciones en forma simultánea en el siglo

XX

y después.

Como hemos podido mostrar en una investigación reciente, este mundo social rural se encontraba convulsionado en las primeras cuatro décadas del siglo

XX

, especialmente durante los gobiernos del Frente Popular y radicales, cuando irrumpió en la escena nacional un nuevo discurso que enunciaba los derechos del campesinado y del pueblo mapuche, llamándolos a organizarse y levantar la bandera de sus demandas y el rostro de su dignidad.<sup>324</sup>

En este ensayo nos preguntamos por las distintas formas de lucha con que los grupos sociales oprimidos de la tierra manifestaron su presencia y su demanda



respecto de un otro reconocido como opresor. También nos interrogamos por su articulación con el movimiento obrero urbano y con los partidos de izquierda y gobiernos de la primera mitad del siglo

XX

. Al respecto pensamos que esta lucha de los trabajadores campesinos y pueblos de la tierra fue la manifestación de una pulsión decisiva generada a inicios del siglo

XX

, cuya forma y modo de acción se centró —al igual que el mundo obrero urbano— en la lucha por la conformación de cuerpos colectivos a través de los cuales se buscaba crear y guardar identidad, producir (auto)reconocimiento e inducir transformaciones sociales sustantivas en sus mundos sociales y en sus campos de acción laboral y existencial.

En concreto, quisiéramos mostrar cómo estos movimientos de la tierra, al mismo tiempo que luchaban por la salvaguarda y la construcción de su identidad étnica, campesina y de clase, y al paso que levantaban sus demandas propias en el ámbito económico y social, se vieron influidos y articulados con el mundo urbano y las luchas de los y las trabajadoras y las mujeres, construyendo cuerpos colectivos que, desde su propia posibilidad o, incluso, desde su negación histórica, tejieron una red de luchas sociales que, en una coyuntura de transformación del Estado (décadas del 30 y 40), trabajaba por configurar el rostro de una nueva sociedad que, por causas represivas, solo logró cristalizar años más tarde. Sin embargo, esta etapa primera constituyó, a nuestro juicio, un momento decisivo del despertar popular en la tierra, entendido como la configuración de una conciencia colectiva crítica que supo auto-reconocerse desde su relación con el otro opresor.

“DESPUÉS DE SER NOSOTROS LOS PRIMEROS, AHORA NOS  
ENCONTRAMOS OLVIDADOS...”

El primer sujeto que salta a la luz al hablar de movimiento en la tierra en Chile es el pueblo mapuche, el cual a comienzos del siglo

XX

se encuentra reducido y diezmado por el avance y la conquista de su territorio por parte del Estado republicano de Chile. Para el pueblo mapuche, su “otro” es el Estado de Chile, que se concibe como nación extranjera y oponente de la nación mapuche. Por su parte, para este Estado, el pueblo mapuche es concebido como un resabio pre-colonial enquistado en el moderno Chile, por lo que no se reconoce como un “otro”, ni menos como una igual-nación. Negación de un estatus político que, sin embargo, no ha sido capaz de suprimir al sujeto propiamente tal: el mapuche como pueblo-etnia.

Todos los observadores creyeron que la sociedad mapuche no resistiría el impacto de la derrota. Se pensó que estas transformaciones tan profundas, tan desarticuladoras, provocarían el colapso y la integración total a la sociedad chilena. (...) Sin embargo, ocurrió algo diferente. La sociedad mapuche mostró una vez más su enorme capacidad de adaptación y su admirable fuerza de resistencia.<sup>326</sup>

La historicidad del pueblo mapuche en el siglo

XX

y

XXI

nos habla de esa “admirable fuerza de resistencia”, la que se sobrepuso a la opresión y al trauma a través del auto-reconocimiento de su identidad como pueblo y de la incansable lucha por la recuperación de tierras. ¿Cuál fue la vía o el camino emprendido en esta lucha social identitaria y por recuperación de su Wallmapu en las décadas siguientes a la conquista armada de La Araucanía por el Estado chileno?

Tal como fue también la experiencia del pueblo chileno luego de las luchas y derrotas vividas en las guerras civiles del siglo

XIX

, el pueblo mapuche adoptó, principalmente, la vía de la organización como forma de lucha desde las primeras décadas del siglo

XX

. Organizaciones que, emulando la historicidad del temprano movimiento artesano y obrero, tomaron principalmente la figura de asociaciones de protección mutua, las que tenían fines de autoayuda colectiva y eran reconocidas por la ley constitucional chilena, con derecho a obtener personalidad jurídica. Esta figura organizativa de la asociatividad tuvo varias expresiones en la sociedad mapuche del temprano siglo

XX

, tales como la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, la Sociedad Mapuche de Protección Mutua de Loncoche, la Sociedad de Aborígenes Quilapán, la Sociedad de Araucanos Colo-Colo, la Sociedad Galvarino, entre varias otras, las que, portando el nombre de los héroes de sus batallas, buscaban reconstruir su identidad herida y seguir luchando por su tierra o su patria. Como decíamos, estas asociaciones desplegaron una lucha de doble carácter, identitaria y estructural: se levantaban a nombre y para el pueblo mapuche y en pos del resguardo de sus intereses, principalmente, de su vulnerado derecho a la tierra de sus ancestros; para lograr estos objetivos se buscaba, asimismo, acceder a una educación formal.<sup>327</sup>

Pero ya era un tiempo en que las sociedades de socorros mutuos en el país vivían su ocaso. Otras formas organizativas tomaban nombre, figura y liderazgo en el seno del movimiento obrero en los años 20 del siglo

XX

, especialmente entre aquellos grupos que visualizaban la organización no solo como autoprotección, sino también como instrumento de lucha por sus legítimos derechos como trabajadores. Mancomunales, sindicatos, federaciones, corporaciones eran los modernos nombres y conceptos que se levantaban para

expresar la intención de hacer de las organizaciones obreras cuerpos colectivos que generasen fuerza social y poder de acción y contestación. Este cambio de concepto y objetivo tendrá también su impacto en sectores del movimiento mapuche chileno de los años 20, como fue el caso de la Federación Araucana, la que transitó de una sociedad de socorros mutuos a una “federación” y cuyo desarrollo nos interesa exponer en este ensayo. El fundador de la Sociedad Mapuche de Protección Mutua de Loncoche (1916), Manuel Aburto Panguilef, fue un líder político-cultural mapuche nacido en Loncoche en los años posteriores a la guerra de conquista de La Araucanía (1887). A los 23 años, en 1910, fue testigo de los graves sucesos de violencia ocurridos en Loncoche, donde un grupo de colonos chilenos, por el solo hecho de defenderse de ser expulsados de la tierra de su habitar, fue masacrado.<sup>328</sup> El impacto de la conquista armada de su pueblo y esta matanza de colonos chilenos de Loncoche de la que fue testigo, lo instó —a semejanza de los trabajadores y artesanos chilenos— a constituir un cuerpo societario para la defensa de su pueblo a través de vías orgánicas político-culturales que, por medio de la asociatividad, la educación y el teatro (La Compañía Araucana) difundiesen entre la sociedad winca y resguardasen en el seno del pueblo mapuche sus ritos, su lengua y sus tradiciones ancestrales, demandando liberación de tributos y defendiendo el modo comunitario de poseer, habitar y cultivar la tierra. Y no solo la tradición, sino también lo moderno a través de la lucha por la educación y la acción política como vías de defensa, participación e integración.

A través de su itinerancia por pueblos y ciudades del norte y el sur, Aburto mantuvo contacto en la década del 20 con el movimiento obrero chileno y sus dirigentes, haciendo suya la consigna obrera “la unión hace la fuerza”. Tomando el nombre y concepto moderno de “Federación” y con el objetivo de utilizar este nuevo instrumento político-socio-cultural para los propios fines del pueblo mapuche, Aburto transforma en 1922 la Sociedad Mapuche de Protección Mutua de Loncoche en la Federación Araucana, la que, a similitud de la Federación Obrera de Chile (

FOC

h), buscaba unificar la “raza mapuche”. La Federación Araucana, como las obreras, realizó amplias asambleas denominadas “Congresos”, donde se expresó la hibridación entre tradición y modernidad que inspiró al grupo: dichos congresos se inauguraban con multitudinarios nguillatunes, en los que se hacían denuncias contra los abusos winkas y se trazaban los lineamientos político-

culturales a seguir.

Clara expresión de esta hibridación entre tradición y modernidad en la lucha mapuche del temprano siglo

XX

es Herminia Aburto Colihueque, hija de Aburto, quien tuvo acceso a la educación formal en el sistema escolar, trabajó como secretaria de la Federación Araucana y fue la primera mujer mapuche que se presentó a un cargo público al postularse como candidata a regidora por Temuco en 1935. En 1938 asumió como presidenta de la Sociedad Femenina Araucana Yafluayin, asociación mapuche de mujeres creada en 1937. Su objetivo era: “Trabajar por organizar a todas las mujeres araucanas”, levantando “una institución que sea netamente de la raza”, afiliada a la Federación Araucana. “Organizadas las araucanas lucharán por las reivindicaciones de sus intereses y para conquistar el derecho de voz y voto, como la mujer chilena en nuestro país...”.<sup>329</sup>

La coyuntura del año 1925 marca un hito en la historia nacional y mapuche, así como un quiebre en el seno de las organizaciones de estos últimos: fue el momento en que se presentó por el gobierno de Emiliano Figueroa la Ley de División de Comunidades Indígenas.<sup>330</sup> En torno a este proyecto de ley, en el

V

Congreso de la Federación Araucana, organizado en diciembre de 1925, se creó la figura del Comité Ejecutivo de La Araucanía (

CEA

), presidido por Aburto Panguilef, como órgano llamado a unir a todas las organizaciones mapuche que estaban en contra del proyecto de ley de división de comunidades. Es decir, el camino del movimiento conducía a una mayor concentración de fuerzas en la medida que el Estado continuaba amenazando la sobrevivencia del pueblo mapuche como comunidad y cultura. Con este nuevo cuerpo orgánico, la lucha se dio a través de memoriales, cartas, asistencia de dirigentes mapuche a Santiago y realización de congresos del

CEA

en distintas localidades con asistencia de miles de mapuche, agitando las demandas contra la división de comunidades, la usurpación de tierras y abogando por la fundación de un internado agrícola-industrial especial para ellos, también por el nombramiento de funcionarios mapuche en oficinas públicas relacionadas con la propiedad indígena, entre otras demandas.

Acusado de subversivo y comunista por parte de sacerdotes católicos y del gobierno de Carlos Ibáñez, Manuel Aburto fue detenido y relegado a Chiloé en noviembre de 1927, expresión de que la lucha desarrollada por la Federación Araucana tocaba el nervio del poder político y su brazo armado represivo. Continuó, sin embargo, en pie firme el cuerpo orgánico de dicha federación en ausencia de su líder. En el

XI

Congreso de la Federación Araucana (diciembre, 1930), “como corolario de su alianza política con los sectores más radicales de la izquierda, la

FOC

h y el

PC

”, y con la asistencia de la

FOC

h y de la Liga Cívica Femenina, se rechazó la ley de división de comunidades, demandando la devolución de terrenos usurpados y la suspensión de remates de tierras fiscales. Aún más, conectándose con el discurso de la izquierda socialista y comunista de la década de 1930, la Federación Araucana se declaró “en contra del latifundio y a favor de la tierra para los que la trabajan”, reforzando la idea de la “unificación total de la raza en una sola institución que comprenda en su seno a todas las actuales organizaciones, dirigida por una Junta Ejecutiva que cuente con agrupaciones en las distintas ciudades”. Siguiendo con los lineamientos discursivos de la

FOC

h-

PC

, la Federación Araucana planteaba que esta Junta Ejecutiva debía tener el carácter de un “partido de clases, una línea revolucionaria de lucha y conectar el movimiento social indígena con el movimiento social obrero y campesino”. Esta articulación “movimiento mapuche-movimiento obrero”, no sacrificaba el horizonte identitario del primero, por el contrario, buscaba constituirse en la piedra de fundación de un proyecto político genuino para el pueblo-nación mapuche. Así se planteó en el

XI

Congreso de la Federación Araucana:

La constitución de la República Indígena (...) eco de la más sentida aspiración de la raza para que pueda desenvolver su vida de acuerdo a su psicología, costumbres y rituales; ser dueña de su tierra, ocupando las provincias en las cuales puedan vivir sus 150.000 indígenas (considerando las reservas para el crecimiento de la población), en la que la educación sea orientada hacia la realización de su propio bienestar; en que el pueblo araucano se gobierne a sí mismo y en que su progreso y cultura sean creados por él mismo.<sup>331</sup>

En dicho Congreso se aseveró que este anhelo sería realidad toda vez que estuvieran unidos mapuche, campesinos y obreros: “el día que el proletariado chileno unido fraternalmente conquiste el poder y haga efectivas sus justas reivindicaciones”.<sup>332</sup> Se trataba de un proyecto político que levantaba el ideario de una República Indígena al interior de la misma República de Chile, es decir, un proyecto de plurinación.

Con la esperanza de que el proyecto político del Frente Popular chileno llevase a cabo transformaciones en el orden del Estado y en el régimen social oligárquico, la Federación Araucana, junto al movimiento obrero chileno y a numerosas organizaciones mapuche de esa hora histórica, se sumó a la campaña de esta coalición. Acogiendo la invitación de la

CTC

h obrera y del

MEMC

h (Movimiento de Emancipación de Mujeres de Chile) los/as líderes de dicha federación acudieron a Santiago en abril de 1938, donde fueron recibidos con un acto en su honor. Quien agradeció la recepción del

MEMC

h fue Herminia Aburto Colihueque, lideresa mapuche que, habiéndose relacionado con el

MEMC

h desde el año de su fundación (1935, año en que Herminia se presentó como candidata a Concejala en Temuco), se refirió a esta organización feminista como “su propia casa”, agradeciendo su recepción y agregando su intención política: “el triunfo del Frente Popular significará el triunfo de los anhelos de liberación de nuestra raza”.<sup>333</sup>

En plena campaña presidencial del radical Pedro Aguirre como líder de la coalición

FPC

h y con ocasión del Congreso Nacional de la Raza Mapuche realizado en Temuco en septiembre de 1938, los mapuche congregados declararon estar dispuestos a “trabajar ardientemente” en la causa del

FPC

h “convencidos de que la solución a sus problemas inmediatos de vida está condicionada estrechamente a la más rotunda victoria del pueblo”.<sup>334</sup> Realizando los dirigentes mapuche sus propias giras de campaña política por las reducciones, aseveraban que “el gobierno del

FPC



h sacará (a la raza araucana) de la miseria en que actualmente vive”.<sup>335</sup> Esperanza que se expresó en sufragios, los que en la zona de Arauco dieron ventaja a Pedro Aguirre (610 votos) sobre su contendor Ross (388 votos).<sup>336</sup> En suma, podemos apreciar que el triunfo del Frente Popular constituye un hito de confluencia histórica de los diferentes brazos del movimiento mapuche, obrero y de mujeres en Chile, los que se trenzan y abrazan en la misma voluntad y esperanza política de un cambio justiciero en el país.

### “DISPUESTA A LUCHAR... A FIN DE GANAR UN PAN MÁS PARA NUESTROS HIJOS”

337

Luego de haber vivido el país en las décadas de 1920 y 1930 distintos regímenes autoritarios, estas culminaron con el gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938), amparado en milicias compuestas por 100.000 civiles armados que marchaban por las calles de la ciudad. Ante esta degradación de la política, el advenimiento de la coalición de centroizquierda Frente Popular (octubre, 1938) levantó un discurso y programa de gobierno en pro de una amplia democratización del país. La democracia que se buscaba consideraba tanto el ejercicio de la libre ciudadanía de todo el pueblo —incluyendo el voto de las mujeres— y el respeto de todas las organizaciones partidarias y gremiales, así como la superación de la ancestral marginación del campesinado apatronado chileno, a través del goce de los derechos sociales que el Código del Trabajo contemplaba para los trabajadores asalariados del país. Es decir, una democratización socialmente inclusiva, en vista de la construcción de una nación integrada y moderna.

En este periodo la tradicional hacienda chilena vivió un intenso revuelo, caracterizado por la amplia activación del campesinado apatronado, en todos sus rostros, el que luchó por desprenderse del vasallaje político patronal. Lo que entonces los patrones denominaron “agitación en los campos”, fue literalmente eso: una “agitación” que recorrió los cuerpos-corazones-mentes campesinas instándoles a romper la inercia histórica de su opresión y llamándoles a mirarse entre sí como un rostro colectivo y una fuerza-otra, capaz de oponerse al patrón.

A esto le hemos llamado “el despertar” campesino en Chile, fenómeno y energía que levantó una polvareda de múltiples batallas y un intenso fuego de ira patronal, el que al final de la década de 1940 lanzó la democracia al abismo.

¿Cuáles fueron las características y qué formas y vías asumió la lucha campesina de esta hora en Chile? A partir de una larga investigación realizada sobre el periodo 1927 a 1947, podemos identificar tres tipos de lucha de los campesinos apatronados: por la sindicalización, las batallas de los pliegos de peticiones (P/p) y las huelgas campesinas.<sup>338</sup>

Como se sabe, al fundarse la Organización Internacional del Trabajo (

OIT

) después de la Primera Guerra Mundial —llamada a evitar las revoluciones sociales a través del respeto de los derechos laborales y de organización de los trabajadores—, esta instó a los gobiernos y empresas occidentales a reconocer legalmente, como un derecho legítimo, la libertad de organizarse y sindicalizarse de los trabajadores en defensa de su clase. Llamado que en Chile el gobierno autoritario de Carlos Ibáñez transformó en ley de obligación en 1931, levantando la figura del “sindicato legal” como organización obligatoria para todos los trabajadores, sujetos a las normativas del Código del Trabajo y bajo la tutela del Estado. Si por un lapso de tiempo los trabajadores se opusieron a este mandato y a la tutela de sus libres organizaciones sindicales por parte del Estado, a poco andar no solo aceptaron esta institucionalización sindical, sino que la exigieron para todos los trabajadores, incluidos aquellos apatronados del campo en sus distintos rostros. El advenimiento del Frente Popular al gobierno excitó el llamado de los trabajadores urbanos (a través de la

CTC

h y los partidos de izquierda) a la organización sindical de los campesinos, los que se apresuraron a conformar dichos cuerpos.

Para muchos fue sorpresiva la respuesta del campesinado, generándose un movimiento organizativo caracterizado por novedosas acciones sociales que rompieron la cotidianidad ancestral: concertación de los trabajadores del campo, en sus distintos rostros, al interior de fundos y haciendas; emergencia de dirigentes campesinos que, a menudo capacitados y apoyados por la

## CTC

h local o por partidos de izquierda, levantan un discurso crítico, fuerte, sobre el derecho a una mejor vida y un salario digno, por la necesidad de defensa de sus intereses como trabajadores ante la opresión patronal; elección de una directiva; composición de un cuerpo orgánico titulado Sindicato

## X

, escriturado en papel y tinta con las firmas de la directiva y de los trabajadores dispuestos a formar dicho cuerpo; partida de la directiva a la Oficina del Trabajo de la localidad a lograr el reconocimiento de su organización escriturada o llegada del Inspector del Trabajo local al fundo a reconocer la organización. Finalmente, la directiva sindical campesina se aboca a la escritura de un pliego de peticiones que presenta al otro-patrón. Todas estas acciones organizativas nos hablan de un suceso histórico que se vive en la coyuntura: la emergencia y proceso de construcción y auto-reconocimiento de sujetos que, desde el seno de la tierra, buscan y actúan para hacer un cambio en sus vidas, en las de sus compañeros y compañeras, enfrentando a un sujeto que ancestralmente se ha negado a verlos.

Los patrones de fundos y haciendas se negaron terminantemente a dicha sindicalización y se situaron en una postura fuera del estado-de-derecho, actuando con el látigo de amo en furia: arrancaron y arrojaron a los caminos a trabajadores con raíces profundas en los campos por el solo hecho de organizarse.

Si bien el gobierno del radical Pedro Aguirre echó pie atrás respecto de la sindicalización campesina, prohibiéndola en marzo de 1939, los pliegos de peticiones tuvieron libre vuelo durante los gobiernos radicales: se han podido contabilizar un total de 1.514 P/p presentados entre 1939 y 1947,<sup>339</sup> los que empoderaron al campesinado y generaron sus propias directivas de gestión. En ellos se expresaron demandas que presionaron a los patrones, firmando los trabajadores con su nombre o pulgar su compromiso con ese acto político-social, lo que ponía en riesgo la vida propia y la de los suyos. Aún más, en el periodo de los gobiernos radicales se generaron numerosas huelgas de campesinos, como acción culmine ante el fracaso en las negociaciones en torno a los pliegos de peticiones levantados. Se han podido contabilizar 131 huelgas ocurridas entre 1939 y 1947, sintetizando diversas luchas del campesinado.<sup>340</sup>

Una huelga es, históricamente, una situación radical, límite, que saca a la luz la situación que vive la comunidad que la protagoniza, así como las figuras de hombres y mujeres que generan esa historia crítica. En la huelga emergen líderes y discursos otrora ocultos que hablan a “su-pueblo” en términos de la defensa de sus intereses, realizando una pedagogía de toma de conciencia colectiva y de identificación de clase. Al generar paralización de faenas, la huelga rompe la cotidianidad y abre un espacio inédito para visualizar a la comunidad en pugna, a modo de un espejo crítico que permite reconocer cuerpos y clases en relación y conflicto. La huelga es la manifestación de un enfrentamiento entre poderes, en este caso, entre el poder patronal y el poder campesino, poderes desiguales en cuanto el patrón controla el habitar y la propia supervivencia de los campesinos y sus familias. Sin embargo, es un enfrentamiento entre poderes sociales en el que cada oponente toma conciencia de sí.

Queremos enfocar la mirada en dos huelgas campesinas emblemáticas del momento, producidas en los años de 1940 y 1942: la huelga de la Hacienda San Luis y la huelga de la Hacienda Chacabuco, huelgas campesinas pioneras en la historia agraria chilena. A través de ellas buscamos, con cierto afán comparativo, desentrañar algunos de los desafíos, obstáculos y logros del movimiento campesino de esa hora. Más allá de indagar en los resultados inmediatos en la coyuntura de dichos movimientos huelguísticos campesinos, nos interesa ver dichas huelgas como un momento crítico y decisivo de la maduración de la conciencia de clase de un segmento del campesinado chileno en la primera mitad del siglo

XX

. Nos importa indagar en una relativa escala mayor, pues dicha paralización de labores producida por la huelga general, a nivel ampliado, ocasiona un eco que induce la intervención de múltiples aparatos culturales de poder y con ello una concientización en cadena en el seno de la sociedad toda, que mira la condición histórica de la comunidad en conflicto y el consiguiente reconocimiento de su sujeto como clase en oposición y disputa de intereses. El desarrollo de la conciencia de clase no es un fenómeno íntimo o interno de una comunidad, sino que ha de ser comprendido como un fenómeno y acto de reconocimiento de clase a nivel ampliado, generando una red de discursos e identificaciones de clase compartidos, entre distintos grupos y otras clases de la sociedad. La conciencia de clase es una mirada entrecruzada, una relación social, simultáneamente a nivel de comunidad laboral local y de la sociedad general.

¿Cómo realizaron y enfrentaron los y las campesinas chilenas la huelga en tiempos del

FPC

h? ¿Cómo actuó la oposición patronal? ¿Cuál fue la actitud de los gremios obreros respecto del movimiento campesino en huelga? ¿Cómo fue la actuación (mediadora o represiva) de los gobiernos radicales?, son algunas preguntas que se hace este texto.

\*\*\*

A 12 kilómetros al norte de la capital se levantan tres cerros que le dan nombre en mapudungun al lugar: Kulakura (hoy Quilicura). Tierras fértiles de las que tomaron posesión los conquistadores españoles, quienes las pasaron de mano en mano por legado o venta de parcialidades entre familias de la aristocracia agraria. En el temprano siglo

XX

, Julio Zegers García Huidobro (1861-1936), abogado y político liberal, poseía tres fundos en Quilicura (San Luis, Santa Ana y Los Cerrillos), un predio en La Granja (Santiago sur) y propiedades agrícolas en Osorno y Carelmapu.<sup>341</sup> Fallecido en 1936, en los albores del Frente Popular en Chile, el fundo San Luis pasó a ser regentado, al parecer, por su hijo Alfonso Zegers Baeza, del cual la leyenda popular cuenta haber enfermado a raíz de su pacto con el diablo: este le habría multiplicado la producción del fundo, recargando de trabajo a inquilinos y peones; a cambio, el patrón Zegers le debía entregar su alma. El hecho llevó a que su angustiada mujer instalara un Cristo Crucificado, el que hoy se ha convertido en lugar de peregrinación y oración del pueblo quilicurano.<sup>342</sup>

La leyenda del pacto de Zegers con el diablo —un personaje muy familiar en las narrativas populares— no es sino la interpretación simbólico-religiosa del campesinado a la explotación de las y los trabajadores del fundo San Luis y su secreto deseo de castigo al patrón. Sin embargo, pronto, con la llegada del Frente Popular al gobierno de Chile en 1938, el diablo ya no tendría trabajo en San Luis

y habría de recoger su capa y desaparecer en la noche de Quilicura, acallado por el protagonismo activo y en lucha, a pleno rostro y a luz del día, de los propios campesinos y campesinas del fundo San Luis.

Hacia 1940, el fundo San Luis era una gran propiedad de 1.800 hectáreas en plena zona central metropolitana, explotada con viñas, cereales y ganadería. Lo administraba el hijo ingeniero Julio Zegers Baeza (1885-1952), con un tipo de explotación bastante intensiva (1.000 hectáreas regadas), realizada por 118 trabajadores, quienes, apenas asumido el gobierno del Frente Popular y respondiendo al llamado de la

CTC

h, se apresuraron en constituir un sindicato agrícola, el que alcanzó a ser reconocido antes del decreto gubernamental de marzo de 1939 que los prohibió.

La sindicalización de los campesinos fue combatida drásticamente por los terratenientes en tanto la vieron como un factor amenazante a su ancestral poderío, ejercido sobre individuos a quienes deseaban frágiles, oprimidos y, en definitiva, presas fáciles de su autoridad. En este sentido, el sindicato agrícola era sin duda una amenaza a la arbitrariedad patronal, por cuanto era la agrupación colectiva y altiva de los trabajadores de la tierra, articulados con otros cuerpos-sindicatos del campo y/o con organizaciones y centrales sindicales de la ciudad capital. De hecho, el sindicato campesino de San Luis estaba apoyado por la central obrera

CTC

h y por la Unión Provincial de Sindicatos Agrícolas de Santiago, presidida esta última en los años 40 por el dirigente del Partido Comunista, Luis Coray.

Uno de los actos que definía la existencia y sentido del sindicato campesino era la presentación de pliegos de peticiones ante el dueño del capital, los cuales debían contar con el 55% de las firmas de los trabajadores del colectivo. El día 4 de noviembre de 1940, el sindicato campesino del fundo San Luis presentó su pliego de peticiones, el que de inmediato y por dos veces consecutivas fue declarado ilegal por la Junta de Conciliación y Arbitraje, presidida por el Inspector Provincial del Trabajo, el pro-nazi Hernán Cousiño.<sup>343</sup> Acto seguido, el patrón Zegers, haciendo una demostración de poderío, caducó los contratos de los 62 trabajadores firmantes del P/p, quienes, a su vez, haciendo demostración

de fuerza colectiva, declararon la huelga. Zegers calificó como ilegal la determinación, ratificando el despido de los involucrados, aunque no realizó un desalojo inmediato del total de trabajadores (figuran 10 despedidos el 23 de noviembre).<sup>344</sup> Declarados los trabajadores en resistencia contra los despidos y por la legalidad de sus demandas, mantuvieron su movimiento durante el mes de noviembre y diciembre de 1940. Realizaron asambleas donde levantaron la voz y el discurso de su lucha, pronunciando la trabajadora campesina Blanca Zapata su voluntad de “luchar cueste lo que cueste por nuestras justas peticiones, a fin de ganar un pan más para nuestros hijos”.<sup>345</sup> Rompiendo el cerco interno del campo, los y las trabajadoras de San Luis salieron afuera, solicitando apoyo solidario a los obreros urbanos y desfilaron por las calles de la capital, dirigidos por el presidente de la Unión Provincial de Sindicatos Agrícolas, Luis Coray.

Esta presencia pública de campesinos declarados en huelga abrió la intervención del gobierno Frente Popular, generando una reunión entre las partes en conflicto, con la presencia del ministro del Trabajo, Pradenas, y de Salvador Ocampo, dirigente de la

CTC

h, el 6 de diciembre de 1940. Buscando Zegers el control político del movimiento de trabajadores en huelga en vista de aniquilar la organización, propuso la reanudación de los trabajos a costa del despido de 18 trabajadores “dirigentes del movimiento”. Como demostración del carácter no solo reivindicativo del movimiento, sino político, es decir, de reconocimiento de su sujeto y de su poder como la unidad absoluta de sus miembros, los/las huelguistas rechazaron dicha propuesta patronal de despido de sus dirigentes. En nueva reunión en la Inspección del Trabajo el 20 de diciembre, Zegers siguió apuntando a lo político-social, en otras palabras, a la eliminación de los dirigentes y de la organización sindical, planteando el retiro del P/p y el despido de 18 dirigentes: siete inquilinos, siete voluntarios y cuatro lechadoras, a quienes pagaría indemnizaciones y abonos de chacras. Propuesta que volvió a ser rechazada por la delegación de campesinos en huelga: no sacrificarían a sus dirigentes para salvarse el resto. El conflicto ha dejado ver su carácter político como manifestación de poder contra poder. Zegers recurre al sobre-poder del capital, siempre apuntando a lo político: juicio de desalojo para los 18 dirigentes mientras esperarían, sin apuro, el quiebre del movimiento; en efecto, este se fue produciendo... Finalizaba el año 1940.

\*\*\*

En la primavera del año 1941 y verano de 1942, la zona agrícola norte de Santiago entró en efervescencia de movilizaciones campesinas y de presentación de pliegos de peticiones. Se vivía un ambiente de agitación política en el marco de la campaña presidencial del candidato de la coalición de centro-izquierda, el radical Juan Antonio Ríos, quien asumió el gobierno como sucesor electo del fallecido Pedro Aguirre.

La agitación más intensa se experimentaba en la Hacienda Chacabuco, en Colina, en las cercanías de la capital de Santiago (a 27 km), propiedad entonces del magnate croata Francisco Petrinovic, quien desde el negocio del salitre en Chile (en sociedad con el millonario Pascual Baburizza) y de la minería de estaño en Bolivia, hacia 1930 se expandió a los negocios marítimos, comerciales, agrícolas y financieros a nivel nacional e internacional.<sup>346</sup> Entre las empresas de Petrinovic destacaba la Hacienda Chacabuco (que adquiere el año 1927), productora y exportadora de aceite de oliva chileno, entre otros productos.

La Hacienda Chacabuco porta una interesante y emblemática historicidad: tenía una extensión de más de 28.000 hectáreas cuando fue donada a los jesuitas, a fines del siglo

## XVII

y hasta la expulsión de estos, en 1776. Durante la guerra de Independencia, la hacienda fue ocupada por los patriotas, quienes lucharon y triunfaron en esas comarcas sobre el ejército realista, sellándose en su campo de batalla la Independencia de Chile (12 de febrero de 1817). A principios del siglo

## XX

, la Hacienda Chacabuco pertenece a los Fernández Solar, familia de Santa Teresa de Los Andes. Es decir, se trata de un espacio agrario marcado por personajes y sucesos históricos que dejaron huella, como lo seguiría haciendo a raíz de los sucesos huelguísticos campesinos de la década de 1940.



En 1922, la Hacienda Chacabuco, de 26.869 hectáreas, ha pasado a manos de los mineros y millonarios inmigrantes croatas Pascual Baburizza y Francisco Petrinovic. La hacienda contaba con 500 hectáreas regadas, con gran producción de cereales (trigo y cebada), chacarería, crianza y engorda de animales (vacunos, ovejunos y caballares) y 300 hectáreas de pastos naturales y empastadas de alfalfa, además de viñas y cultivo de olivos.<sup>347</sup> Los 400 campesinos de la Hacienda Chacabuco se encontraban gremial y políticamente activos en tiempos del advenimiento del Frente Popular al gobierno, en 1938. Antes del decreto de prohibición, ya se habían constituido en sindicato, cuya directiva levantó, a fines de 1941, un pliego de peticiones apoyado por la gran mayoría de sus afiliados, trabajadores de la hacienda, con el que se buscaba un notable mejoramiento: alza de jornales de \$3.50 a \$14.00, alimentación con carne tres veces por semana y liberación de los niños hijos de inquilinos del trabajo en las viñas.<sup>348</sup>

La respuesta patronal al pliego se fue dilatando...; en este compás de espera los trabajadores y sus familias, apoyados por la Unión Provincial de Sindicatos Agrícolas (

UPSA

) y el Partido Comunista, se concentraban en el área pública colindante a la hacienda, presionando por la aprobación de su P/p y levantando la bandera de la libertad de sindicalización para el campesinado del país, por la discusión del proyecto de reforma agraria presentado por el reciente electo diputado dirigente del Partido Comunista, Justo Zamora<sup>349</sup>, y a favor de la candidatura del radical Juan Antonio Ríos. Petrinovic esperó que pasaran las cosechas del verano de 1942 para rechazar el P/p, ante lo cual los trabajadores propusieron acudir a un Tribunal Arbitral, lo que el dueño de la hacienda también rechazó, ante lo cual los campesinos de Chacabuco votaron la huelga el 9 de abril de 1942: “la primera huelga legal de los asalariados agrícolas”.<sup>350</sup> Las mujeres de la Hacienda Chacabuco sostuvieron la huelga prendiendo una olla común permanente en el local del sindicato de la hacienda y movilizándose hacia Santiago, donde pidieron el apoyo de gremios y sindicatos obreros. Se movilizaban también diputados, la

CTC

h y el ministro del Trabajo, buscando conciliaciones, mientras que el patrón ponía trabajadores de reemplazo. Antes de finalizar el mes de abril de 1942, la

huelga de Chacabuco finalizó con la aceptación patronal de un aumento salarial, lo que se calificó como un triunfo de los trabajadores, destacándose el rol de las “mujeres de Chacabuco por una clara conciencia de sus derechos y una decidida capacidad de defenderlos”.<sup>351</sup>

Dos años más tarde, en abril de 1944, un nuevo P/p presentaban 300 trabajadores campesinos de la Hacienda Chacabuco, que apuntaba a un nuevo aumento de jornales (\$7 pesos más), una disminución de la jornada de trabajo (jornada de medio día los sábados y un recargo de salario por el trabajo nocturno), regalía de tierra y mejoramiento de la alimentación (carne dos veces por semana, un qq de harina) y de la vivienda. El proceso negociador se repetía: la Junta de Conciliación no logró un acuerdo, dejando el paso abierto a la huelga legal. Reunidos en asamblea con la presencia de varios sindicatos obreros capitalinos, los trabajadores acordaron seguir buscando un acuerdo a través de negociaciones a nivel del Ministerio del Trabajo —que resultaron infructuosas—, mientras las mujeres chacabucanas organizaban una concentración solidaria para apoyar las demandas del P/p de los y las trabajadoras de la hacienda. A comienzos del mes de junio de 1944, los trabajadores votaron la huelga legal contando con el apoyo incondicional de la

CTC

h y la

FINTA

(Federación Industrial de Trabajadores Agrícolas), al paso que el patrón enganchaba trabajadores y buscaba, de noche, firmas de huelguistas para volver al trabajo intentando, infructuosamente, quebrar el movimiento. En el curso de la huelga se recogieron los aportes solidarios de feriantes de La Vega y de los trabajadores capitalinos, quienes llegaban a los alrededores de la hacienda los domingos a realizar asambleas y apoyar la causa, mientras el ministro del Trabajo, Mariano Bustos, intercedía en el conflicto. A los 35 días de huelga y ante la posible pérdida del tiempo de siembra del trigo, se logró un avenimiento entre el patrón Petrinovic y los trabajadores, acordando un aumento de salarios de entre un 15% y un 25%, un alza en las asignaciones familiares, carne una vez por semana y la promesa de un refugio para el pastoreo de cordillera.<sup>352</sup>

En suma, observando ambos pioneros movimientos huelguísticos del

campesinado, ocurridos en esos años de 1940 en las haciendas San Luis y Chacabuco, resalta el hecho de que, mientras la primera se ve como un fracaso, las dos huelgas de Chacabuco se evalúan como un triunfo de las y los trabajadores campesinos/as. ¿Qué elementos las asemejan o las distinguen? A partir de la información con que contamos, podemos identificar algunos elementos a considerar para su análisis.

Respecto de sus semejanzas, se trata de dos haciendas aledañas a la metrópoli capitalina, ambas con explotaciones bastante intensivas, con una extensión de superficie regada, con cultivos variados, crianza de animales y venta al mercado de sus productos. Las dos se muestran como empresas agrícolas bastante modernas para su época, con uso de mano de obra inquilina y de trabajadores en sus distintos rostros, quienes, en la coyuntura del Frente Popular, se apresuran a sindicalizarse y a levantar sus demandas a través de pliegos de peticiones y cuyas directivas y movimiento campesino se articula fluidamente con los dirigentes y el movimiento obrero ciudadano. En una y en otra se han declarado huelgas a partir de pliegos de peticiones presentados ante oficinas del trabajo por reivindicaciones laborales y en ellas han intervenido tanto la central de trabajadores urbanos y organizaciones campesinas articuladas con partidos, como el propio gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Es decir, desde el punto de vista de su operatividad, ambos movimientos huelguísticos son semejantes, asumiendo un carácter complejo, en tanto ponen en acción a todo el campo social, rural y urbano, tanto civil como institucional, buscando las distintas instancias intervenir el conflicto. ¿Cómo se explican, sin embargo, los resultados diferentes de ambos movimientos huelguísticos: la derrota de uno y el triunfo de los otros?

Se trata de haciendas muy diferentes desde varios puntos de vista. En primer lugar, respecto de su extensión (1.800 ha S. Luis<sup>353</sup> y 26.800 ha Chacabuco) y en cantidad de trabajadores sindicalizados, los que superan de cinco a siete veces los de la Hda. Chacabuco respecto de la de S. Luis. La diferencia más importante, a nuestro juicio, radica en la naturaleza de sus propietarios: en el caso de la Hda. S. Luis, se trata de una familia aristocrática de origen europeo que, habiendo inmigrado a Chile en los albores de nuestra Independencia, se enlazó con familias de la oligarquía colonial santiaguina; en el caso de la Hda. Chacabuco, sus propietarios eran inmigrantes recientes, del siglo

, que corresponden a una burguesía empresarial minera, comercial, financiera y agrícola, cuyos negocios en distintos campos le confieren el carácter de gran empresa. El primero, Zegers, aplicó una acción patronal autoritaria enfocada en tres actos eminentemente políticos: a) el desconocimiento del pliego de peticiones declarándolo ilegal; b) la destrucción de la organización campesina de su hacienda descabezando-desalojando a sus dirigentes, y c) el desarticulamiento del movimiento huelguístico propiamente tal, dejándolo caer en el desgaste del tiempo. Los trabajadores respondieron a esta ofensiva patronal también a través de un acto político, declarando la huelga en defensa de sus dirigentes. En el caso de la Hacienda Chacabuco, el patrón forma parte de una sociedad empresarial que reconoció la legalidad de los pliegos de peticiones presentados por sus trabajadores, lo que también dio paso al carácter legal de las huelgas cuando no hubo respuesta al mismo. Este hecho marca una diferencia notable, por cuanto los trabajadores campesinos en movimiento fueron reconocidos, por primera vez, como sujetos pertenecientes al sistema y código legal que regía las relaciones laborales en la época. Si bien la empresa trató de quebrar el movimiento a través de manipulaciones oscuras, los trabajadores mantuvieron su unidad incólume, expresión del carácter político-social de su movimiento, logrando algunas reivindicaciones económicas que pusieron fin a una lucha que rindió frutos en un doble sentido, cuantitativo y cualitativo, como aprendizaje político, gremial y de clase.

“LA GRAN MASA QUE CONSTITUYE LA PEQUEÑA AGRICULTURA SE DIRIGE AL PAÍS...”

354

No solo el pueblo mapuche y el campesinado apatronado se pondrá en movimiento en las primeras décadas del siglo

XX

, y con mucho ímpetu durante los gobiernos de centroizquierda de los años de 1938 a 1947. También los pequeños y medianos campesinos, con y sin títulos, arrendatarios y ocupantes, se pondrán en movimiento, generando organizaciones y levantando congresos y demandas.<sup>355</sup>

El Censo Agrícola de 1936 nos muestra la gran dimensión que alcanzaba en el país la pequeña propiedad. Las propiedades pequeñas, que abarcaban una extensión de entre 1 y 49,9 hectáreas, eran 161.575, el 94% del total; las propiedades medianas abarcaban una extensión de entre 50 ha y 999,9 has., siendo 7.543 propiedades, el 4,4% del total; mientras la gran propiedad abarcaba entre 1.000 y más de 5.000 hectáreas, existiendo un total de 2.806 propiedades en el país, el 1,6% del total.<sup>356</sup> Así, el campesinado pequeño constituye una gran fuerza productiva en el país de entonces, muy afectado por las contribuciones, sufriendo muchos el remate de sus propiedades, con escaso acceso al crédito; por esto, su configuración en cuerpos orgánicos en movimiento constituye un hecho socio-político significativo en la época. ¿Cuáles fueron las principales orgánicas que se dieron en estas capas del campesinado en los años 40 del siglo

XX

? Ligas, cooperativas y asociaciones fueron los cuerpos que se dio este pequeño campesinado a lo largo de todo el país, el que unido al mediano campesino, levantó sus demandas en pos de la regularización de sus títulos, la facilitación de créditos, la liberación de impuestos territoriales y por un amplio apoyo fiscal en materia de fomento agrícola productivo y comercial. Movimiento y demandas levantadas ante un Estado que en esos días adquiría gran protagonismo en materia de dirección y fomento económico.

En efecto, este movimiento de pequeños y medianos campesinos surgía cuando la Segunda Guerra Mundial estancaba la economía chilena por falta de materias primas y flujo comercial, generando cesantía. En paralelo, la especulación con los productos de subsistencia básicos encarecía la vida. Ante esta situación, el gobierno de Juan A. Ríos contó con una Ley de Emergencia (Ley 7.200, julio, 1942) que le otorgó amplias atribuciones, lo que se expresó en la Ley Económica (N° 7.747) que hacía del Estado un agente activo en el control, planificación y fomento de la economía nacional. Esta ley contempló un Plan Agrario que, entre múltiples atribuciones, permitía al Estado otorgar subsidios, organizar cooperativas, fomentar producciones, instalar plantas agroindustriales, crear mercados estatales administrados por cooperativas, planificar zonas de cultivo, así como expropiar tierras en función de la “utilidad pública”, con claros lineamientos de una “reforma agraria”: atribuciones que beneficiaban principalmente a pequeños y medianos campesinos y que hacían de este ideario de Estado fomentista agrario la principal esperanza de este campesinado que se movilizó requiriendo su presencia y su compromiso social-agrario nacional.

Fruto de aquel amplio movimiento de base de asociaciones de pequeños y medianos campesinos surgidos esos años en los territorios del país, fue la Asociación Nacional de Agricultores de Chile (

ANAC

h), organización pionera y líder de este mundo asociativo campesino en los años de 1940, liderada por la ya existente Asociación de Agricultores de Concepción (creada en 1942), junto a otras asociaciones y cooperativas de campesinos. La

ANAC

h nació como resultado del Primer Congreso Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores realizado en Santiago en enero de 1944, que congregó, por primera vez en Chile, a cerca de 25.500 agricultores provenientes de todo el país, desde Coquimbo a Chiloé. El congreso fue presidido por Sylvio Lazzarini, presidente de la Cooperativa de Pequeños Agricultores de Peñaflor, y su directiva la compusieron representantes de diversas agrupaciones de pequeños campesinos de distintas localidades. Su objetivo era trabajar por un acceso adecuado a la tierra, por la liberación de contribuciones, por un aumento productivo a través de métodos modernos de explotación; abogaban por una planificación agraria, por la solución del problema mapuche y el fortalecimiento del régimen democrático como condición del desarrollo agrícola. Desde el punto de vista del ejercicio de su poder y gobernabilidad política, la

ANAC

h aspiraba a tener representantes en todas las reparticiones gubernamentales y fiscales relacionadas con la agricultura, así como a la organización de Consejos Agrarios provinciales y departamentales, con el fin de estudiar, junto al Estado, los problemas agrarios de cada región.

Ante la actitud beligerante de los hacendados respecto de las demandas de fiscalización e intervención del gobierno en materia agraria, a través de un Manifiesto dirigido al país en el invierno de ese año 44, la

ANAC

h insistió en el ideario patriótico que la inspiraba y en la necesidad de permitir que el gobierno pudiese cumplir su programa salvador en una hora de

desesperación social: “cuando los pequeños agricultores han pedido a las autoridades que se declare de primera necesidad el uso y goce de los terrenos agrícolas, no les ha animado ningún propósito de perturbación ni menos crear beligerancia con los dueños de fundos o grandes agricultores...”.<sup>357</sup>

Esta voluntad de “servir a la patria” la expresaron las asociaciones de pequeños y medianos campesinos a través de una multitud de iniciativas desarrolladas en sus territorios, las que, sin esperar la acción del Estado, comenzaron de inmediato a fomentar la producción y comercialización de sus productos a nivel interregional, así como la organización de nuevas asociaciones y cooperativas de campesinos, mientras lograban parar los remates de tierras. En septiembre de 1945, la

ANAC

h, a través de las asociaciones territoriales, instaba al gobierno de Ríos a apresurar la aplicación del Plan Agrario. En paralelo, se levantaba un gran movimiento, especialmente en la zona sur, liderado por la Asociación de Agricultores de Concepción, dictando conferencias y realizando asambleas, concentraciones y congresos regionales de agricultores y mapuche destinados a divulgar dicho Plan. Se crearon Comités Agrícolas Provinciales, llamados a ser “los verdaderos impulsores del Plan apoyados por las masas campesinas y el pueblo”. La

ANAC

h llamaba a los pueblos a hacerse parte de esta campaña, divulgando el Plan Agrario en los cafés, casas, radios, escuelas... mientras se realizaban múltiples actos culturales en las localidades, que buscaban preparar el camino para la aplicación de dicho Plan Agrario, la gran esperanza del campesinado de esa hora histórica.

Expresión de esta amplia movilización fue el Congreso de la Asociación de Agricultores del Sur, realizado, con gran bombo y platillo en Concepción el 27 de mayo de 1945, con la invitación de gremios, estudiantes y autoridades y en el que el ingeniero agrónomo y ensayista Jorge Ahumada expuso el Plan Agrario del gobierno. Los discursos inaugurales estuvieron a cargo de los dirigentes de la

ANAC

h y del presidente del Frente Único Araucano, Juan Aliñir, quien declaró la necesidad de que la “raza indígena tiene que incorporarse a la agricultura progresista del país”.<sup>358</sup>

Los pequeños y medianos agricultores continuaron su movimiento organizativo y de acciones de demanda a pesar de la nula respuesta del gobierno de Ríos, sintiéndose este incapacitado de cuerpo y de voluntad para la aplicación del Plan Agrario.

Fallecido Ríos, el movimiento de pequeños y medianos agricultores se reunió con el candidato radical Gabriel González,

haciéndole entrega de un memorándum en el que se solicitaba la expropiación inmediata de las tierras mal cultivadas para ser entregadas a los campesinos y agricultores modestos a través de pagos a largo plazo; la asignación a título gratuito de los predios fiscales y semifiscales entre los mapuche y los campesinos empobrecidos; la creación de cordones agropecuarios alrededor de los núcleos urbanos para asegurar su abastecimiento...<sup>359</sup>

Es decir, los campesinos seguían demandando lo proyectado: el Plan Agrario, el que tampoco fue aplicado por el gobierno de González, temerosos siempre los radicales de la ira de los señores, a quienes este gobierno se subordinó promulgando la Ley Maldita (1947), que persiguió el movimiento campesino en todos sus rostros y expresiones.

En suma, a través de las páginas precedentes hemos podido observar el amplio movimiento en la tierra que se ha levantado por parte del pueblo mapuche, del campesinado apatronado y de los pequeños y medianos campesinos independientes en la década de 1940 en Chile, quienes se articularon con el movimiento obrero urbano y levantaron sus más sentidas demandas ante los poderes estatales y civiles enseñoreados del país. Dicho movimiento de sujetos de la tierra tomó forma a través de la construcción de cuerpos organizativos que, al mismo tiempo que fueron sus instrumentos de acción para la transformación de las condiciones materiales, políticas y sociales de la realidad, fueron principalmente cuerpos sociales que otorgaron a sus miembros identidad colectiva y conciencia de pueblo y de clase llamada a fructificar en el porvenir.



## BIBLIOGRAFÍA

Alderete, Pablo, “Tras las huellas de la politización campesina: sociabilidades, conflictividad laboral y movilización social (Curicó, 1934-1947)”, Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2021.

Avendaño, Octavio, Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1946-1973. Representación de intereses, gradualismo y transformación estructural,

LOM

, Santiago, 2014.

Bengoa, José, Historia del Pueblo Mapuche (siglos

XIX

y

XX

),

SUR

, Santiago, 1987.

Berger, Luis, “La matanza de colonos nacionales de Loncoche: lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910), en Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N° 27.

Calfío, Margarita, “Mujeres mapuche, voces y acciones en momentos de la historia”, en A. Pequeño (comp.), Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes,

FLACSO

Ecuador, 2009.

Foerster, Rolf y Sonia Montecinos, Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900-1970), Ediciones Centro de Estudios de la Mujer (

CEM

), 1988.

Illanes, M. Angélica, Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947,

LOM

, Santiago, 2019.

Rashke, Joachim, “Sobre el concepto de movimiento social”, en Zona Abierta 69, 1994.

Sepúlveda, Boris, “Pan, techo y abrigo... ¿Y la tierra? Política agraria y sindicalización campesina en el periodo del Frente Popular en Chile (1938-1952)”, Memoria para optar al título de Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica,

UMCE

, Santiago, 2013.

Valenzuela, Juvenal, Álbum Zona Central de Chile. Informaciones Agrícolas, Santiago, 1923.

Wickham-Crowley, Timothy P. y Susan Eva Eckstein, “Los movimientos sociales latinoamericanos y la ratificación del poder de las teorías estructurales”, en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate (eds.), Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos. Buenos Aires,

CLACSO

, 2017.

\* Universidad Austral de Chile – Valdivia.

## **VII. SANTIAGO Y LA CONQUISTA DE LAS CALLES: LA REVUELTA DE LA CHAUCHA EN AGOSTO DE 1949**

VIVIANA BRAVO VARGAS

\*

“La represión trajo el silencio, el gran silencio, presagio del estruendo, del gran estruendo”.<sup>360</sup>

“Se sembraron vientos y ahora se cosechan tempestades”, dijo el dirigente y diputado Humberto Martones Quezada en agosto de 1949, cuando quiso explicar la ira popular desatada en la llamada Revuelta de la chaucha.<sup>361</sup> “Tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe”, escribió por su parte el dirigente y escritor radical Arturo Olavarría al hacer lo propio con la revuelta de abril de 1957.<sup>362</sup> Ambas frases, fueron utilizadas para dar cuenta de una situación que se repite y que llegado el momento explota. Una situación que genera ánimos que no nacen de un día para otro, sino que se propagan y acumulan, que desgastan la paciencia y se socializan, que transforman la rabia individual en agravio colectivo. Eso pasó con el alza del transporte público; elemento detonador en las revueltas populares de aquella década.

Hay algo asombrosamente parecido en 1949 y 1957, parecido en los fondos y en las formas. Es cuando pareciese que la historia se repite, aunque no sea posible una copia exacta. Coincidimos con el historiador Daniel Palma, pionero en el análisis de la Revuelta de la chaucha, cuando propone pensarla como un antecedente directo de los sucesos de 1957.<sup>363</sup> Y es que en ambos episodios, el alza del transporte público fue el elemento detonador, aunque las causas subyacentes eran más profundas. Las dos revueltas se gatillaron al compás de una convocatoria estudiantil para protestar en el centro de las ciudades contra las alzas. En ambas, el componente mayoritario fue de obreros y empleados, que, junto a estudiantes, las emprendieron preferentemente contra microbuses y

garitas. Con piedras y palos, los manifestantes rompieron vidrios, volcaron microbuses, les prendieron fuego o los machacaron. También atacaron otros símbolos que alojan materialmente el poder político y económico, como vitrinas, carteles, edificios públicos y comisarías.

Gracias a ambas revueltas, por cierto, el alza fue suspendida y tuvieron diversas repercusiones que estremecieron la política nacional y que revisaremos en estas líneas. Ciertamente, después de estos hechos, el país no podía ser el mismo. Por supuesto, también hay diferencias, en 1957 los sucesos se gatillaron primero en Valparaíso y Viña del Mar, para luego seguir hasta Concepción y Santiago, lugar donde se recrudecieron los enfrentamientos. En cambio, la Revuelta de la chaucha fue eminentemente santiaguina, aunque tuvo continuidad en el movimiento huelguístico que al calor de ella se extendió hacia el sur, en la zona del carbón. Además, en los meses siguientes, el repunte huelguístico alcanzaría otras zonas y masa laboral del país. Y si hay que calibrar la represión, sin duda la de 1957 fue más cruenta y extensa en los barrios capitalinos, cobrando la vida de más de veinte personas y cientos de detenidos.

La desconexión de las élites y el gobierno con las clases populares es una de las tesis de Pedro Milos para explicar el 57.<sup>364</sup> Por su parte, Luis Thielemann aporta a su interpretación llamando la atención sobre la expresión de los conflictos de clases que se manifiestan en la génesis de esa revuelta.<sup>365</sup> Y tienen razón. La misma desconexión y conflictos sociales asoman en el 49. Estas revueltas nos permiten observar, en un tiempo muy corto, los malestares, las fracturas y tensiones que dan cuenta de una sociedad en crisis y que los que mandan no saben ver ni comprender hasta que les revienta. Pero lo central es que dan cuenta, por una parte, del cuestionamiento o la crisis de conducción política de las clases dominantes, que intentaban retomar la iniciativa y la conducción política a través de políticas represivas;<sup>366</sup> y por otra, en un sentido más profundo aún, de los límites del modelo desarrollista para cumplir con su propósito medular: subsanar la dependencia, la desigualdad y la pobreza o el pecado original de nuestro capitalismo periférico, y generar mecanismos de participación popular que fortalecieran y ampliaran efectivamente las bases sociales del Estado. Cuestiones imperativas que requerían, entre otras cosas, de un sólido proceso de industrialización que se estancaba y de reformas estructurales que, hasta el momento, eran del todo insuficientes, y por las que habría que emprender nuevas y significativas movilizaciones y programas políticos. Esa fue la fuerza movilizadora que acompañó la campaña electoral de 1958.

No en vano, los historiadores y economistas que han revisado el periodo coinciden en que la década del 50 fue la más difícil para la clase trabajadora y que si el impulso distributivo durante el desarrollismo conoció de avances y retrocesos, frenos e impulsos, estos años fueron regresivos.<sup>367</sup> La modernización desarrollista trajo expectativas que no se condecían con la realidad ni se correspondían con la percepción social. Las alzas insostenibles provocadas por la inflación acelerada depreciaban los salarios, hacían más cruenta la fragilidad social, la profunda escisión clasista y la violencia que deriva de ella. El poblamiento de la periferia y la desigualdad entre barrios era solo una manifestación de ello. En su prolijo análisis, el economista Aníbal Pinto insistió en la tesis de un “desarrollo frustrado” para el caso chileno.<sup>368</sup> Y en efecto, la frustración sería manifiesta y fuerza propulsora de cambios en los años por venir.

Por tanto, sostenemos que estas revueltas son parte de un mismo ciclo y fueron expresión de un conflicto de clases dentro del dificultoso proceso de desarrollo del capitalismo. Para comprenderlas y explicarlas es necesario tener presente el encadenamiento de luchas, más o menos masivas, más o menos confrontacionales, que caracterizaron el periodo. Contrario a lo aparente, las revueltas vienen acompañadas de micromovilizaciones previas. Vienen precedidas de aguantes y frustraciones, de muchos intentos y negociaciones. Hasta que un día un pueblo dijo ya no más y las piedras lanzadas enviaron un claro y fuerte mensaje a La Moneda: “nosotros/as, hasta aquí aguantamos”. En efecto hay sorpresa, porque es sorprendente la potencialidad impugnadora y transformadora del todos juntos y al mismo tiempo.

Aún más, es importante considerar que ambas revueltas se desarrollaron bajo el imperio de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (

LDD

), o también llamada Ley Maldita, promulgada en septiembre de 1948. ¿Qué implicancias tuvo esa ley en el desarrollo de la vida política chilena? Se ha documentado bastante sobre la proscripción del Partido Comunista, de los más de 30.000 militantes que quedaron fuera de los padrones electorales y exonerados del sector público, de sus dirigentes perseguidos, detenidos y relegados a diversas localidades del país.<sup>369</sup> Menos se ha insistido en el carácter antiobrero de la llamada Ley Maldita y es que la ecuación comunismo y organización obrera era igual a subversión. Debemos tener presente que durante sus diez años de vigencia fue utilizada sistemáticamente para desincentivar la

huelga, censurar y neutralizar a dirigentes y a los/las trabajadores/as a través de diversos dispositivos de represión, espionaje y castigo. Además de la promulgación de decretos que intervinieron directamente en la vida sindical, como el Decreto Yáñez-Koch promulgado después del exitoso paro nacional de 1955 y que prohibió la elección de dirigentes que tuviesen condenas o antecedentes por violar las disposiciones de la

LDD

, es decir, por participar en huelgas, paros nacionales o por haber sido detenidos en movilizaciones. Y aún más. Tanto

G.G.V.

como Ibáñez del Campo recurrieron en diversas ocasiones a mecanismos jurídicos normativos como la Ley de Facultades Extraordinarias, que entregaba aún más atribuciones al Ejecutivo a la hora de reprimir.<sup>370</sup> Por esta y otras razones, Marcelo Cavarozzi —siguiendo a Aníbal Pinto— caracterizó al periodo como una “democracia frustrada”.<sup>371</sup>

¿Existirá alguna relación entre la clausura del espacio público, la clandestinidad y persecución de dirigentes, la declinación de la huelga y otras formas de protesta y negociación, que podamos asociar a las formas de lucha modernas del movimiento obrero organizado y el rebrote de un ciclo de protesta popular con características de revuelta? Es muy probable. Lo cierto es que en esos diez años en que estuvo vigente la

LDD

, Chile presenció dos de las revueltas populares más relevantes del siglo

XX

.

Por otra parte, recordemos que el giro conservador de González Videla se tradujo en la incorporación al gobierno de ministros de derecha, como Jorge Alessandri en el Ministerio de Hacienda. Quien fuera hasta entonces presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio asumió sus tareas, en agosto de 1947, con la firme idea de implementar la llamada “política de estabilización

económica”. La propuesta era disminuir la inflación vía reducción de los salarios reales, ya que los culpables de la inflación para los empresarios eran los trabajadores y sus aspiraciones de reajustes según el costo de la vida. A juicio de Alessandri, tal como ha sostenido Javier Rodríguez Weber, además había otro elemento: “las políticas en favor de los asalariados de la década de 1940 no solo eran insostenibles sino que minaban la autoridad de los patrones sobre sus trabajadores”.<sup>372</sup> Por ello intentó aprobar un reajuste inferior al de la inflación, la disminución de sueldos y salarios afectó no solo a los llamados empleados de cuello y corbata, sino especialmente a los obreros, que ya cargaban desde hace varios años con la depreciación de sus ingresos y condiciones laborales.

El remezón político de la Revuelta de la chaucha provocó, entre otras cosas, tensiones en el interior del gobierno en torno a las diversas posturas a la hora de enfrentar las demandas sociales y de los trabajadores, que continuaron en los meses siguientes. Presenciamos así, a principios de 1950, la salida de Alessandri de Hacienda y de Alberto Baltra de Economía, y en su lugar, la conformación de un gabinete llamado de “sensibilidad social”. Una preocupación por la clase trabajadora que, al menos en el discurso o la proyección puertas afuera, volvía a ser parte del discurso radical. El nuevo ministro de Hacienda, Carlos Vial, bajo este nuevo impulso, llegó a otorgar los reajustes más expansivos de la década<sup>373</sup>. Pero el malestar continuaba.

En la campaña presidencial de 1952 triunfó Carlos Ibáñez del Campo, hombre independiente, que prometió barrer con “los políticos de izquierda o derecha” en beneficio de los más pobres y de los trabajadores. Además, se comprometió a derogar la Ley de Defensa de la Democracia, pero, por el contrario, la utilizó reiteradamente durante su gobierno para desincentivar la organización y aplacar la protesta obrera. Cuando la inflación se aceleró entre 1953 y 1955, contrató a la misión de expertos norteamericanos “Klein & Sacks”, para reorganizar la política económica bajo la órbita del Fondo Monetario Internacional. Los consejeros propusieron una mayor apertura económica, ajuste de corte monetarista y abandono parcial del impulso interventor del Estado.<sup>374</sup> Sin duda, las iniciativas “rectificadoras” ensayadas por ambos gobiernos fueron percibidas como un castigo para las clases populares. La ola de alzas, coronada por la del transporte, terminó por propulsar los sucesos de abril de 1957.

En las páginas que siguen nos concentraremos en reconstruir los sucesos de agosto de 1949, ya que salvo los escasos aportes que hemos referido no ha concentrado un detenido interés por parte de la historiografía. De alguna manera,



las escasas referencias la caracterizan como una revuelta de los empleados e incluso se ha tendido a exagerar el protagonismo del dirigente sindical Clotario Blest a la hora de dirigirla.<sup>375</sup> Veremos que la verdad es que fueron muchos y muchas, actuando juntos/as y al mismo tiempo, los que protagonizaron la conquista de las calles en 1949. Se trató de hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, en su mayoría pertenecientes a la clase trabajadora, y estudiantes universitarios, que generaron hechos políticos en el espacio público en los años previos y siguientes, que levantaron pancartas y banderas, que se apropiaron de las esquinas y sus intersticios a través de marchas y concentraciones masivas, que socializaron en torno a sedes sindicales y partidarias. Se vincularon, militaron y organizaron; discutieron en plazas públicas, en bares o negocios populares y colmaron los teatros que vibraban al calor de asambleas obreras y estudiantiles. A la hora de la revuelta, disputaron a viva voz los límites de la desigualdad, el abuso y la injusticia a través de formas de lucha directa que inscriben la protesta social chilena dentro de una perspectiva de más larga duración. Una tradición que se fue sedimentando, reproduciendo y escuchando en las calles y, así también, en sus ruidos, en sus órdenes y desórdenes.

## AGOSTO, 1949: “SANTIAGO DECLARÓ LA GUERRA EN CONTRA DE LAS ALZAS”

376

Durante cinco días con sus noches del mes de agosto de 1949, Santiago fue escenario de intensas protestas protagonizadas mayoritariamente por obreros y jóvenes estudiantes. Turbas incendiaron y apedrearon garitas y microbuses. También hubo barricadas, marchas, rayados. Hubo tres muertos, varios heridos a bala en estado grave y más de doscientos detenidos.

Las autoridades habían esperado un día viernes para hacer público el decreto que finalmente declaraba el alza del transporte público en 20 centavos, una chaucha (es decir, subía de \$1.40 a \$1.60) para la tarifa diurna, y de un peso para la tarifa nocturna (de \$2 a \$3 pesos entre las 22 hrs y las 5 AM). Y aunque fue conocida como la Revuelta de la chaucha, el aumento de la tarifa nocturna era aún más sensible, en cuanto gran parte del estudiantado secundario, perteneciente a

familias de clase trabajadora, estudiaba en la noche, al igual que los contingentes de obreros que salían de su turno en las fábricas en horario nocturno. Al conocer el decreto, de inmediato se organizó una asamblea en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Los y las estudiantes decidieron salir a protestar a la calle y marchar hacia Plaza Italia, un lugar consolidado como espacio de encuentro y manifestación política. Una vez ahí, gritaron consignas, detuvieron el tránsito y apedrearon algunos microbuses. Ese día no eran más de cincuenta jóvenes los que engrosaron las filas de trabajadores que se plegaron a la manifestación, mientras emprendían una marcha hacia el centro. Junto a la protesta, lo que llamó la atención de la prensa fueron los aplausos que la muchachada recibió de algunos transeúntes y provenientes también de calles y balcones. Antes de ser disuelta por carabineros, el acuerdo de los muchachos fue volver a protestar al día siguiente e insistir, hasta derogar el alza.

En los meses anteriores a los sucesos conocidos como la Revuelta de la chaucha, se experimentó un clima de incertidumbre social. El 5 de junio, tras prohibir una reunión de trabajadores en el teatro Caupolicán, 18 obreros fueron baleados por carabineros en el sector de Av. Matta con San Diego, mientras protestaban por la medida. Además, se desarrollaban diversos conflictos laborales. Los diarios anunciaban el posible despido de 3.000 trabajadores de la Cía. de Aceros del Pacífico en Huachipato y, a pesar de lo difícil que era mantener esta forma de lucha, desde fines de abril los obreros de

## INDAC

se declararon en huelga en uno de los conflictos más extensos del periodo y se mantuvieron firmes por más de 80 días. No eran los únicos, entre abril y agosto casi un centenar de conflictos se desarrollaron a lo largo del país. En diversas áreas de la industria y minería existían procesos o amenazas de desahucio, reducción de personal, reubicaciones y disminución de jornada laboral.<sup>377</sup>

Las alzas también eran una amenaza constante, como la del pan, anunciada días antes. Dando cuenta de este preocupante cuadro, la revista Ercilla analizaba las cifras del costo de la vida entregadas por la Dirección de Estadísticas en 1949, y señalaba que, sin aumentar los salarios, entre enero y julio de 1949 el costo de la vida subió 12 puntos por mes, cuando en 20 años había subido un promedio de 3.2 puntos mensuales. En tanto los sueldos, añadía, se desvalorizaron en un 20%.<sup>378</sup>

En Santiago se implementaban políticas de racionamiento eléctrico, que implicaban cortes de energía eléctrica durante largos periodos y que, entre otras consecuencias, acrecentaban las consecuencias del invierno. También la irritación se dirigía al transporte. Quizás en lo concerniente al espacio público, la experiencia más ingrata era a bordo del transporte de pasajeros. La clase trabajadora pasa mucho de su tiempo en micros y autobuses, lidia cada día para alcanzar un asiento o un espacio cómodo para soportar largos tramos. Al cansancio después de la jornada, se le sumaba el tener que reunir día a día el dinero para pagar el servicio, la prepotencia de los choferes, el mal estado de las máquinas. No es casual, por tanto, que genere el resentimiento de clase, y así haya sido en diversos episodios de nuestra historia.

De hecho, un mes antes de la Rebelión de la chaucha, el periódico Las Noticias de Última Hora hacía referencia en su editorial a lo que llamaba “el flagelo santiaguino”: “En cuanto a la movilización pública todos los adjetivos peyorativos tienen cabida para hacer una referencia. Se advierten en esos servicios el más espantoso desorden, el más inicuo desprecio por los pasajeros, la más flagrante violación de las ordenanzas”. La nota culpaba principalmente a la mala gestión y desencuentros entre la Dirección del Tránsito Municipal y la fiscal; lo incómodo y pequeño de los microbuses; la brusquedad de los conductores en el manejo de las máquinas (frenadas y arrancadas).<sup>379</sup> Pero además del mal servicio, el rumor de una inminente alza de los pasajes caldeaba los ánimos. Entonces las emprendieron contra las máquinas. Otro reportero intentaba al calor de los hechos explicar los motivos y razones de las violentas acciones en contra del transporte público que se sucedían en distintos puntos de Santiago: “El furor contra los micros fue solo la manifestación física de una válvula contenida. El micro era lo que estaba más a mano. Lo que pasaba por el frente de la casa. El dolor de todos los días al ocuparlo lleno y dejar con varios botones menos el vestón, amén del vejamen que supone la incultura de sus choferes”.<sup>380</sup>

Los estudiantes ya se habían declarado en estado de alerta ante lo que consideraban una nueva arremetida contra los bolsillos populares. Entre ellos destacaban los jóvenes comunistas al interior de la Universidad de Chile, liderados por el estudiante de historia y miembro del comité ejecutivo de la

FEC

h, Fernando Ortiz. Es importante consignar que, ante la relegación de muchos

dirigentes del partido y el clima de persecución, la juventud había tomado la posta y convertido las asambleas universitarias en centros de socialización y agitación política. En esa línea, previamente habían levantado y conseguido un voto de repudio en la

FEC

h a toda posibilidad de alza.

El sábado al mediodía se reunieron en las puertas de la casa central de la Universidad de Chile y partieron en marcha por Ahumada hacia el centro, hasta llegar a Plaza de Armas. El propio Fernando Ortiz era destacado por la prensa al encabezar una de las columnas.<sup>381</sup> Al son de consignas como las que vociferaban los estudiantes de derecho: “Código civil, código penal, esta alza es criminal”, o la entonación del Himno Nacional y de sonidos que repercutían entre los edificios del centro, la composición de la protesta se complementó con la participación de numerosos contingentes de obreros y trabajadores. En calle Huérfanos con Ahumada un grupo de manifestantes quitó algunas señalizaciones del tránsito y las emprendió a golpes y puños contra una micro Ovalle-Negrete. En tanto en calle Estado, otro grupo se organizó para intentar volcar un microbús Mapocho-Tobalaba, instando al chofer y a los pasajeros a abandonar el vehículo. Las crónicas volvieron a detenerse en “un público que los aplaudió complacido”.<sup>382</sup> Si bien Carabineros respondió apaleando a los manifestantes, logrando disolver la manifestación a poco andar, ese sería solo el preludio de los días de furia que vendrían. El domingo 14 y el lunes 15 —que era feriado— fueron solo una pausa. Un receso que aprovecharon diversos sectores para condenar el alza y expresar públicamente su posición. Algunos lo hicieron a través de la sátira, como el diario El Pueblo: “OTRA ALZA. Se alzó el precio de la bencina. Esta es un alza inflamable”.<sup>383</sup>

Y así fue. El martes 16 y miércoles 17 fueron los días y noches más intensos de la revuelta, que algunos llamaron la “conquista de las calles”.<sup>384</sup> La protesta despuntó en barrios obreros como La Legua, Mapocho y Vivaceta, donde además de diversas manifestaciones de repudio a la medida, fueron apedreados microbuses e incendiadas algunas garitas. Y es que, en la madrugada, los obreros se encontraron con que debían desembolsar un peso más, protagonizando diversos encontronazos con los choferes. De hecho: “En el paradero de los micros Vivaceta-La Legua numerosos vehículos resultaron con todos los vidrios quebrados y tres de ellos fueron incendiados en gran parte, quedando

inutilizados”.<sup>385</sup> Para asegurar el orden, las autoridades dispusieron que una pareja de carabineros viajara en cada máquina. No sirvió de mucho.

Desde temprano, aquel martes, hubo intensas reuniones de diversas organizaciones que se pronunciaron ante la protesta en las calles. Entre ellas, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación de Trabajadores de Chile hicieron un llamado a formar un amplio Comando Unitario de obreros, empleados y estudiantes contra las alzas y la carestía de la vida.<sup>386</sup> También manifestó su apoyo el Comité Nacional de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas y el Partido Democrático del Pueblo, que acordó “adherir a la valiente y espontánea manifestación de protesta realizada por los estudiantes de Chile y las fuerzas organizadas”.<sup>387</sup> En general, los comunicados solidarizaban con los manifestantes, exigían la inmediata libertad de los detenidos, el fin de la represión y de las alzas.<sup>388</sup>

Si incluso sectores radicales y del Partido Agrario Laborista atribuyeron los disturbios al descontento reinante, sectores liberales y conservadores bajaron el perfil a las manifestaciones y defendieron la necesidad de subir el transporte. Uno de los más comentados fue el gesto de Ladislao Errázuriz —senador latifundista, al igual que su padre y abuelo, también abogado y presidente del Partido Liberal—, quien, consultado sobre las movilizaciones, respondió con desinterés: “Esta es una algazara estudiantil. Por lo demás, yo tengo auto”.<sup>389</sup> ¿Cuántos gestos de desdén plutocrático habrán soportado las clases populares en aquellos años? Quizás era verdad, poco podía conmover el alza de una o tres chauchas a alguien que pertenecía a ese ínfimo sector de la población que en 1949 podía darse el lujo de tener un auto. Donde había agravio solo vieron rabietas infantiles, pulsiones injustificadas. Otros, que hablaban desde El Mercurio y el Diario Ilustrado, se lo achacaron a un complot internacional del comunismo. Volveremos sobre ello.

En tanto, la revuelta continuaba desarrollándose en las calles de Santiago con un componente bastante festivo. La Primera Comisaría de Carabineros informaba que a las 10:30 de la mañana del día 17, aproximadamente 120 estudiantes atravesaron una camioneta en el Puente Pío Nono, con el objeto de interrumpir el tránsito. Mientras marchaban, grupos de alegres muchachos levantaban un pizarrón que sacaron de alguna sala de clases que les sirvió de pancarta y estandarte, que marcaba con tiza blanca: “Micros a un peso”. A los estudiantes movilizados en las calles se les sumaron centenares de trabajadores. La manifestación no fue una sola, sino que se desarrollaron simultáneamente

diversas micromovilizaciones, como marchas y reuniones relámpago, donde hubo cantos, gritos, lanzamiento de piedras, mientras diversos microbuses eran tumbados.

#### IMAGEN 1:

*Revuelta de la chaucha, 18 de agosto de 1949*



*Fuente: Fotografía Patrimonial. Museo Histórico Nacional.*

En la esquina de Gran Avenida con Berlín en la comuna de San Miguel fueron detenidos e ingresados posteriormente a la Cárcel Pública una decena de trabajadores de la Hilandería Nacional mientras intentaban volcar un microbús.<sup>390</sup> En Morandé esquina Agustinas, una decena de estudiantes y trabajadores fueron detenidos al mediodía por promover desórdenes y dos horas más tarde, a pocas cuadras, otro grupo era alcanzado por carabineros (Moneda con Morandé). Muchos corrieron la suerte de Hernán Aliste Aliste, obrero de 26 años detenido mientras apedreaba a los vehículos que aún insistían en transitar, o de Lucy Rivera, modista, también de 26 años, detenida junto a otros trabajadores, acusada de ser parte de la “poblada” que incendió un microbús en calle Santa Victoria.

Mientras algunas micros ardían, en calle Ahumada, entre Moneda y Agustinas, un grupo de estudiantes y obreros parapetados desde las alturas de un edificio de doce pisos que se encontraba en construcción, dejaron caer una contundente lluvia de ladrillos y piedras contra las micros y tranvías que circulaban por esa arteria. Los choferes debieron incluso abandonar sus vehículos cuando se vieron imposibilitados de continuar en servicio. Por ejemplo, una micro Ovalle-Negrete quedó “virtualmente convertida en un montón de fierros desarmados por las piedras y la acción de la muchedumbre estacionada en este sitio”.<sup>391</sup> Considerando que no estaban las condiciones de seguridad, los empresarios de microbuses procedieron a retirar todas sus máquinas de circulación. Ante ello, en los días siguientes, un gran número de camiones de carga debió dedicarse al traslado de pasajeros a los diversos puntos de la capital. Posteriormente se supo que muchos establecimientos de educación primaria y secundaria no abrieron sus puertas durante aquellas jornadas por falta de trabajadores, profesores y estudiantes, presumiblemente por la falta de locomoción. ¿Cuántos de ellos estarían en las calles protestando?

Mientras tanto, el apoyo popular no solo se manifestó con aplausos. En diversas intersecciones de Santiago, como en la de Alameda con San Antonio, los manifestantes recibieron refuerzos desde los edificios cercanos, que ayudaron a romper el cordón conformado por carabineros, lanzando tablas, piedras e incluso



maceteros desde las alturas.<sup>392</sup>

En aquellos tiempos no era usual que ante una movilización popular se cercaran de inmediato los accesos al palacio de gobierno. Y esta revuelta, que la prensa llamó “asonada obrero-estudiantil”, llegó hasta las puertas mismas de La Moneda. Incluso, según señalan algunas fuentes, fueron lanzadas piedras hacia sus ventanas, por lo que sus puertas debieron ser cerradas, al igual que las de la Intendencia de Santiago.<sup>393</sup> Fueron tantas las lacrimógenas con que repelió Carabineros que con la jornada debutó la novedosa forma de autodefensa que consistía en patear o agarrar las lacrimógenas para devolverlas a las fuerzas represivas, cuestión ampliamente destacada por la prensa.<sup>394</sup> La amplia participación de las mujeres también fue una característica de esta revuelta, documentada en fotografías y testimonios de testigos, incluso muchas cayeron heridas o fueron detenidas. Participación que ya venía masificándose con los contingentes femeninos que desfilaban en las jornadas de 1° de mayo y en otras convocatorias que se desarrollaron en aquellos años.

Cuando cayó la noche aún se encontraban desfilando y protestando más de 10.000 personas por las calles céntricas. Una columna de alrededor de quinientas personas avanzaba por la Alameda hacia Estación Central, algunas con palos, otras con piedras. ¿Cuáles fueron sus blancos?, los cristales del Club de la Unión, espacio de reunión de la oligarquía chilena y extranjera; también recibieron lo suyo los ventanales y puertas del edificio del Sindicato y Cooperativa de Autobuseros y, de paso, los relojes controles de los paraderos de micros que encontraron en el camino. Como vemos, los objetivos de la multitud distaban de ser irracionales y, más bien, en el marco de un conflicto de clases, expresaban un profundo resentimiento hacia la opulencia y el abuso.

En lo álgido del momento, la

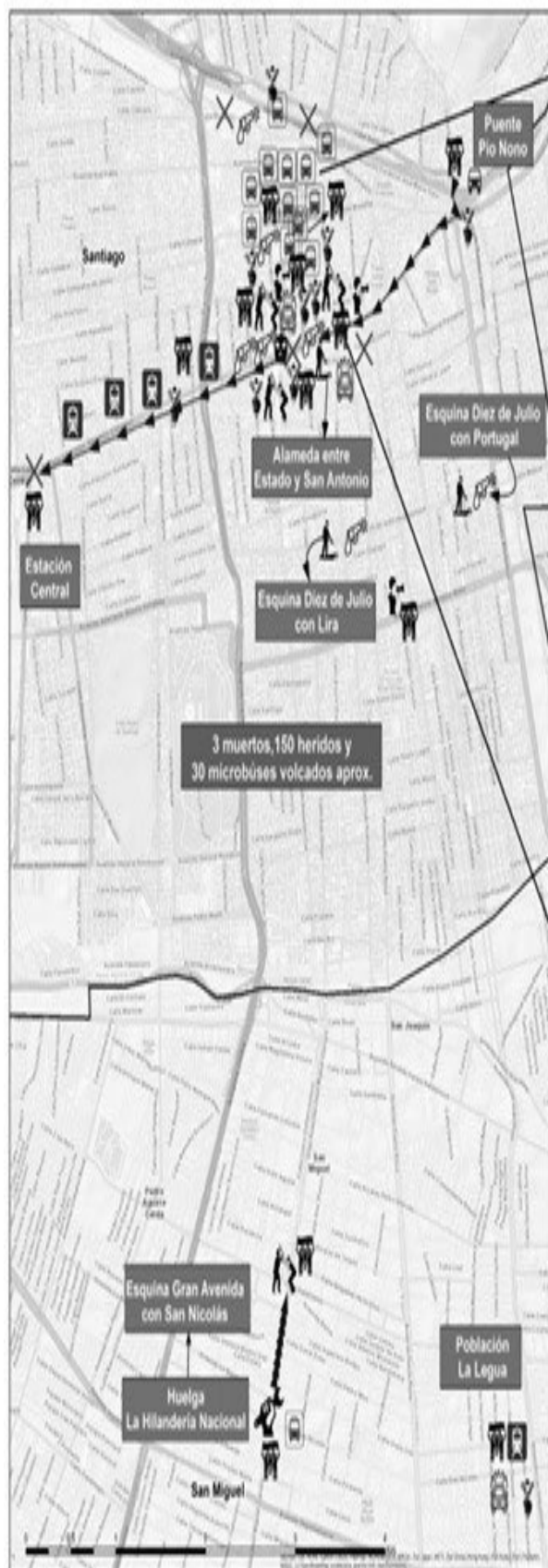
FEC

h convocó a una asamblea con carácter de urgencia para evaluar la jornada y saber de detenciones y heridos. En ella participaron también dirigentes secundarios. Entre las resoluciones, se acordó declarar una huelga general estudiantil, en especial de los Liceos nocturnos,<sup>395</sup> hasta obtener la derogación del alza de tarifas de la locomoción colectiva y la libertad de los detenidos. En apoyo solidario, se sumarían también los estudiantes de Valparaíso. Parte de los hechos urbanos relatados pueden observarse gráficamente en la cartografía

anexa, donde se evidencia la masividad dentro del cuadrante burocrático de la ciudad, pero también en las zonas periféricas, mayoritariamente pobladas por sectores obreros.

IMAGEN 2:

*Revuelta de la chaucha. Agosto 1949*



### Legenda

Comunas 1947	Destrución de garitas y relojes	Incitar a la huelga
Trayectoria de manifestantes	Sabotaje	Disparos
Volcamiento de micros	Represión	Concentración
Volcamiento de autos	Quema de Micros	Apedreamiento
Saqueo	Muertos	
Huelga		

*Fuente: Mapa realizado por Imara Álvarez, en el marco del proyecto*

FONDECYT-ANID

N°11180315.

¿Y qué pasaba con el gobierno? Le tomó algo de tiempo reaccionar. Desde la implementación de la

LDD

la protesta en los espacios urbanos continuó, pero se hizo más fugaz y escurridiza, se refugió en el pequeño formato clandestino y en dinámicas diseminadas para evadir la represión. Y si bajo esa modalidad continuaba en la ciudad, no había sido experimentada ocurriendo en tantas partes y al mismo tiempo. Tampoco con la fuerza y el apoyo que proyectaba esta revuelta. Hasta entonces, la administración de González Videla y sus compañeros de ruta anticomunista, apostaban a que la legislación represiva impediría manifestaciones masivas y desincentivaría la organización. Incluso Carabineros quedó desorientado en un primer momento, con dificultad para controlar el orden público.

Finalmente, el gobierno decidió actuar y hacerlo bajo la política del pan y garrote. Por una parte, anunció que derogarían el alza de tarifas y, por otra, solicitó al Congreso la aprobación de facultades extraordinarias, por quinta vez en su gobierno. Si bien la solicitud fue aprobada en solo 12 horas, lo que era un tiempo récord, fue fruto de una intensa discusión por parte de sus pocos opositores, entre ellos, el senador Salvador Allende, Eugenio González y Eduardo Frei, que entre otros puntos consideraban que la

LDD

ya entregaba suficientes atribuciones al presidente para controlar la revuelta. El general Ibáñez del Campo —que bajo su gobierno enfrentaría una situación similar— se plegó con la oposición y se abstuvo de votar.

De esta manera, se declaró a Santiago zona en estado de emergencia. El Ejecutivo y sus FF.AA. estaban autorizados para relegar, desterrar y detener a las personas en sitios que no fuesen cárceles sin consultar al Poder Judicial; impedir reuniones y censurar las informaciones de prensa y radio, como también activar las redes de vigilancia a sospechosos. El primer afectado con la censura fue el diario Noticias Gráficas, que no salió a circulación junto al vespertino Última Hora.

El jefe de zona, General Danús Peña, dio órdenes estrictas para prohibir la circulación o reunión de personas (en cualquier número) en el cuadrante comprendido entre las calles San Antonio, Santo Domingo, San Martín y la Alameda. Además, estipuló que los vehículos de locomoción colectiva debían circular resguardados por las Fuerzas Armadas. Era obligatorio que los negocios y establecimientos comerciales desarrollasen sus actividades en forma normal. Las radioemisoras debían evitar cualquier transmisión que tendiese a causar inquietud o provocar alarma pública, en tanto los diarios y periódicos tenían que evitar hacer publicaciones de carácter tendencioso y alarmista.<sup>396</sup>

La ciudad se militarizó. A las 16 comisarías de Carabineros de Santiago se sumaron regimientos desde distintos puntos del país. Contingentes del Ejército a bordo de carros blindados, reforzados por tropas de carabineros montados a caballo, despejaron las calles y se apostaron en ciertas intersecciones para impedir nuevas manifestaciones.

El escritor francés Albert Camus se encontraba aquellos días de visita en Santiago presentando uno de sus últimos trabajos y le tocó presenciar la revuelta al salir de una conferencia en el Instituto Chileno Francés. El miércoles 17 escribió en su diario: “Día de disturbios y revueltas. Ya en el día de ayer se habían registrado manifestaciones. Pero hoy esto parece un terremoto. El motivo es el aumento del pasaje de las ‘micros’ (los autobuses de Santiago). Se dan vuelta los autobuses y se les incendia. Se rompen los vidrios de los que pasan”. El observador francés continúa: “La tropa con casco y armada ocupa la ciudad. A veces dispara al blanco. Es el estado de sitio. Durante la noche oigo disparos aislados”.<sup>397</sup>

Por su parte, el ex auditor de guerra Leonidas Bravo aseveró en sus memorias: “creo poder declarar que nunca el país había vivido horas de mayor peligro que los días 16, 17 y 18 de agosto de 1949”. En sus páginas, Bravo recuerda que la jefatura militar se había apostado en el sexto piso del Ministerio de Defensa para

lograr ver desde buena óptica el desarrollo de los sucesos. Desde ahí lograron captar diversas dinámicas, que observaremos en diversos hitos de protesta a lo largo del siglo

XX

. Aquí una de ellas: “Repentinamente, cruzó desde avenida Bulnes un camión cargado de ripio en dirección a un edificio en construcción. Simultáneamente, la Alameda, hasta ese momento desierta, se llenó de gente que surgió de todas las puertas y rincones cercanos, se abalanzó al camión que se detuvo en plena calzada, y en menos de un minuto lo vaciaron totalmente, volviendo a sus refugios con los bolsillos llenos de piedras”. Según un cálculo hecho ese mismo día —señalaba Bravo— entre las once de la mañana y las once de la noche, en ese sector, se dispararon mucho más de mil tiros. “Hubo muchas bajas, pero nunca pudo establecerse el número exacto, pues solo uno que otro herido fue a la Asistencia Pública”.<sup>398</sup>

Ese día miércoles había caído muerto el canillita de 17 años Francisco del Carmen Gutiérrez Aros, mientras ayudaba a su madre a guardar apresuradamente los diarios y revistas de su quiosco, ubicado en la esquina de Portugal con Diez de Julio. Conscientes de la pobreza de su familia, la

FEC

h costeo el ataúd y participó en la organización del funeral. La romería que le acompañó al cementerio días más tarde, transformó los funerales en un hecho político, con alta carga combativa. A pesar de que los incidentes con la policía en las cercanías del cementerio no permitieron que la columna llegase en forma compacta hasta este recinto, se realizaron discursos de sus compañeros, de dirigentes políticos y jóvenes estudiantes en distintos puntos del camposanto.<sup>399</sup>

Otra bala disparada en la zona centro alcanzó a Guillermo Cuellar Soto de 20 años, mientras celebraba su graduación de la Escuela de Aviación en el café Bosco, ubicado en la Alameda, entre Estado y San Antonio. La misma suerte tuvo el empleado del Banco Español Sergio Jofré Cavieres, de 24 años, cuando transitaba por Avenida Diez de Julio hacia Lira, lo que originó como protesta un paro parcial de los empleados bancarios.

El día jueves continuaron las movilizaciones. Ante el paro estudiantil, el ministro de Educación ordenó cancelar la matrícula de todos los alumnos que no

concurriesen a clases, pero de poco sirvió la amenaza. Además, diversas industrias comenzaron a parar con distintos grados en el país. Esto demuestra que había una clase trabajadora dispuesta a responder, lo que planteaba un escenario aún más complejo para el gobierno. Ante esto, además de la capital, fueron declaradas zonas de emergencia las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Concepción y Arauco.

En la oficina salitrera de Prosperidad pararon 800 obreros, en Lota 1.100 obreros del carbón se apoderaron del Pique Grande y apertrecharon ahí por más de 24 horas, hasta que fueron desalojados por divisiones de la Armada que ocuparon ambos territorios; pararon los obreros de la industria del cuero y calzado, de las faenas camineras, y la Fábrica Pólvora de la Provincia de Coquimbo. En tanto en Santiago, alcanzaron a declararse en huelga alrededor de 17.000 obreros.<sup>400</sup> Entre muchos otros, un parte confidencial informaba que 190 obreros de la fábrica de juguetes Kodelit S.A. habían votado por abandonar su trabajo el 19 de agosto, por lo que el Ministerio del Interior requería antecedentes, a la brevedad, sobre la filiación política de sus dirigentes, a fin de tomar cartas en el asunto.<sup>401</sup>

Simultáneamente, en distintos puntos se constataron detenciones de grupos de trabajadores por incitar a la huelga. Por ejemplo, carabineros de la 2ª Comisaría informaron sobre un grupo de 20 hombres y 12 mujeres detenidos en Porvenir con San Isidro “promoviendo desórdenes e incitando a los obreros a la huelga”.<sup>402</sup> En otro sector de Santiago, Carabineros acusaba que en horas de la mañana: “un grupo numeroso de exaltados, impidió la entrada de sus demás compañeros de trabajo a la Hilandería Nacional, ubicada en la calle San Nicolás, esquina de Gran Avenida. Al mismo tiempo lanzaron pedradas al edificio de la fábrica, quebrando algunos vidrios. Luego, ese grupo avanzó por la Gran Avenida hasta la calle Berlín, donde intentó volcar un microbús”.<sup>403</sup>

Hasta el domingo se registraron esporádicos apedreamientos a algunos microbuses en los barrios de la capital.<sup>404</sup> También continuaron los interrogatorios y las sanciones durante las semanas siguientes, mientras los heridos a bala y contusos con sables y bastones sumaban alrededor de trecientas personas. Entre los heridos había jóvenes como Waldo Guevara Guzmán, empleado de 24 años, o como Neptuno Rossel Rodríguez, de 19 años, estudiante de 1er año de leyes. También como Juana Martínez Sáez, que era dueña de casa, o como Emelinda Pérez Tobar, joven empleada de 18 años.<sup>405</sup> Eran quienes no andaban en auto, quienes pasaban varias horas del reloj apretujados en micros destartalladas. Eran sus hijos o hermanos los que iban a la escuela nocturna para poder trabajar durante el día.

Debido a que muchos de los microbuses se encontraban en reparaciones, durante los días siguientes muchos pasajeros continuaron siendo trasladados en camiones.<sup>406</sup> Y tomaría algo de tiempo reintegrarlos. Según el sindicato de dueños de autobuses, el cálculo estimativo de pérdidas y gastos ocasionados por “los desmanes de las masas desorbitadas por la propaganda subversiva de los enemigos de la Patria”, cuantificaba una suma no menor y exhortaba al Ejecutivo a responder por ellas:<sup>407</sup>

TABLA 1:

*Sindicato General Profesional de dueños de autobuses de Santiago*

Cálculo estimativo de pérdidas y gastos ocasionados por los desmanes de los últi

3.850 vidrios quebrados. \$300.- promedio

11 carrocerías destruidas por volcamiento

Desperfectos mecánicos generales

1 micro destruido por incendio

20 garitas incendiadas o destruidas

15 relojes control destrozados

Primer día mantención de tropa

Segundo día mantención de tropa

Tercer día mantención de tropa

Total

---



Lo propio hacía don Anatolio Soto, presidente de la Línea San Francisco-Bellavista, que indignado llegó hasta la 6ª Comisaría de Carabineros para reportar daños de 25 a 30 máquinas, que según su estimación avaluaba en 200.000 pesos.<sup>408</sup> Y la molestia de los dueños de autobuses se acrecentaba. No solo habían sufrido serias pérdidas y se había derogado el alza del transporte, sino que, a solicitud de la

FEC

h, el gobierno anunció la tarifa de \$1 para los/las estudiantes y la implementación de un pase escolar. Algo sin precedentes en la época y, sin duda, una conquista valiosa para ellos y sus familias. De todas formas, no fue fácil hacer respetar la medida y las quejas y denuncias contra los choferes llegaron a caudales a la prensa en los meses siguientes. Se acusaba prepotencia y malos tratos, además denunciaban que “se niegan a llevar a estudiantes e incluso lanzan u obligan a bajarse de las máquinas”.<sup>409</sup> Esa odiosidad intensificada en la relación choferes/estudiantes se iría acumulando en los años siguientes y también estaría presente en las razones de los sucesos de abril de 1957.

Para seguir poniendo paños fríos, el gobierno anunció, además, que bajarían los precios en el consumo de agua potable y arrendamientos, y prometió que estudiaría las rebajas en la luz eléctrica. Asimismo, hubo castigos ejemplares, como el que recibió el gerente de la Compañía de Consumidores de Gas, Reinaldo Bonn Picarni, relegado por haberse adelantado 16 días a cobrar el alza de las tarifas<sup>410</sup>. También se aceptó la renuncia del director general de Transporte y Tránsito Público, general de Carabineros en retiro, Óscar Reeves Leiva. Lo reemplazó en el cargo otro general en retiro, Jorge Contreras Angulo.

¿Quién era Contreras Angulo? Aquí también hay una versión oficial que contrasta si hacemos memoria de la represión. Veamos: según el gobierno, el general Contreras “goza de alta estima, y ya tiene veintiocho años de abnegados servicios en las filas de los guardianes del orden y la seguridad públicos”.<sup>411</sup> Al parecer pocos recordaban que Contreras Angulo había estado implicado en la masacre de la Plaza Bulnes. En enero de 1946 era nada menos que jefe de la Prefectura General de Santiago y fue quien ordenó el acuartelamiento previo de la tropa, al igual que la dotación, formación y despliegue de fuerzas destinadas al comicio que acorralaron a los asistentes esa noche en la capital.<sup>412</sup> Eran hombres, mujeres y niños, familias obreras que solidarizaban con sus compañeros del

salitre en huelga. A pesar de que se trataba de una actividad autorizada y pacífica, convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile (

CTC

h), aquella tarde fue asesinada la joven comunista Ramona Parra, Filomeno Chávez y otros cuatro trabajadores.

El propio Contreras Angulo, para justificar su proceder y el movimiento inusitado de tropas, posteriormente declaró en virtud del sumario abierto para esclarecer los hechos: “el coronel Galindo me llamó a su oficina y me ordenó que tomara el mando de las fuerzas policiales que iban a actuar en el comicio, en razón de que, por la efervescencia política del momento, consideró que debía tomar el mando un Jefe superior”.<sup>413</sup> Cuestionado por falencias en el procedimiento, para poder despejar dudas en torno a los disparos, confesó que simplemente “no se efectuó examen de armas y municiones de los Jefes y Oficiales porque me asistía la convicción de que dichos Jefes y Oficiales de Carabineros no habían hecho uso de sus armas de fuego”.<sup>414</sup> Esa noche se dispararon 256 balas y hubo más de cincuenta heridos con armas de fuego. La insistencia del

PCC

h y las organizaciones de trabajadores en establecer juicio, castigo y reparación a las familias, fue una demanda que no encontró buen puerto. Y quienes prometieron hacerlo, como Gabriel González Videla (

G.G.V.

) en su campaña presidencial, la desecharon en el camino. Por el contrario, posteriormente a estos sucesos, uniformados como Contreras Angulo fueron ascendidos y reconocidos por el Estado.

### III

Aún nos falta observar un punto importante. ¿A quién responsabilizó el gobierno

por la Revuelta de la chaucha? Continuando con la tónica de los últimos años, de inmediato achacó las responsabilidades al Partido Comunista y su afán de desestabilizar al gobierno, en tanto insistió en que los hechos tenían “un indiscutible propósito revolucionario”. El gobierno insistía en su desconexión y en responsabilizar al comunismo internacional. Fue enfático: “El Partido Comunista unido a elementos que son sus aliados y cómplices como ya se había previsto intentan producir la subversión del orden público atacando a las personas y la propiedad privada y agrediendo también a la fuerza pública. Se trata de una agitación que se provoca por el comunismo, valiéndose de los estudiantes que pertenecen a esos sectores, todo lo que corresponde a un plan sedicioso de que el Gobierno está impuesto”.<sup>415</sup>

De esta manera, podemos encontrar en los archivos del Ministerio del Interior decenas de órdenes levantadas en las semanas siguientes para relegar a personas acusadas de “profesar el comunismo”, las que serán previamente apresadas en lugares no destinados a detención. Muchos de los telegramas provienen de zonas declaradas en estado de emergencia como Concepción, Coronel y Yumbel. Además, a diversos dirigentes comunistas se les abrió sumario y relegó por estar acusados de provocar desórdenes en las calles, como fue el caso de los exparlamentarios Natalio Berman, Humberto Abarca y el dirigente José Orellana.

Para el gobierno, como hemos señalado, los aliados y cómplices del comunismo eran los trabajadores organizados. Continuando con la ecuación perversa,

G.G.V.

acusó un complot de los empleados públicos, individualizados en la figura de Clotario Blest. Y es que en las semanas previas los empleados habían concretado los esfuerzos para materializar una orgánica unitaria y defenderse de las medidas gubernamentales que depreciaban sus salarios y atentaban contra su calidad de vida. “Unidad contra la miseria” fue la consigna que a comienzos de agosto de 1949 reunió a 4.000 empleados en el Teatro Caupolicán, para anunciar oficialmente la creación de la Junta Nacional de Empleados de Chile (

JUNEC

h), que agrupó a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (

ANEF

), a los empleados municipales y a la Federación Industrial Ferroviaria. En su intervención, Clotario Blest —al igual que el resto de los oradores— increpó al gobierno y a su ministro de Hacienda, denunció el proceso inflacionario y exigió la derogación de la

LDD

.<sup>416</sup>

Quizás no sospechaban que entre los asistentes se encontraban infiltrados diez funcionarios de carabineros vestidos de civil, siguiendo atentamente y tomando nota de cada detalle del acto. Según consignaron en un informe redactado por el comisario y mayor de Carabineros Pedro Toledo, hubo duras palabras hacia la política económica del ministro Jorge Alessandri y contra el alza del costo de la vida, incluidas las referencias a la huelga de 90 días de

INDAC

, que, según denunciaron, se topó con la intransigencia de los patrones. No obstante, celebraron el “resurgimiento” de los empleados, gracias al proceso unitario en marcha. Un lugar destacado en el informe del comisario, lo tuvo la intervención de Blest. Según los informantes: “pronunció un encendido discurso que fue muy aplaudido en muchos de sus pasajes. Se refirió al alza del costo de la vida, expresando que había miseria en el país, tanto en los empleados como en los obreros (...) agregando que no creía en los informes de los técnicos en materias económicas pues bien se sabía que dichos informes favorecían siempre al que pagaba más”.<sup>417</sup>

Los empleados sellaron su desafío al gobierno con una marcha por las calles del centro de Santiago hasta llegar a la Plaza de Armas.<sup>418</sup> Concluía el informe: “desfilaron aproximadamente 2.000 personas y durante el trayecto los manifestantes gritaron consignas en contra del Ministerio de Hacienda, a quien trataban de incapaz, Ministro del hambre, etc., exigiendo su salida del gobierno”. Al día siguiente, la prensa enfatizó lo subido de tono de los discursos pronunciados por “los obreros del cuello almidonado”.<sup>419</sup>

El gobierno, a la hora de achacar responsabilidades, desarchivó el informe y lo relacionó directamente con la revuelta.

G.G.V.

insistió enfáticamente en que esos mismos empleados habían urdido la revuelta: “en esa oportunidad el representante de los empleados fiscales, señor Clotario Blest, anunció que el propósito que se pretendía era derrocar el Gobierno”.

Si algo tienen claro los sectores dominantes es que la movilización social y la expresión pública del descontento puede ser fermento para la organización y nuevos encadenamientos de luchas. Así lo podemos observar, por ejemplo, en las medidas que toman para controlar “sus brotes” y desincentivar por distintos medios ese terreno. En los días posteriores a la revuelta, Gabriel González Videla, representante de esas fuerzas, envió una clara advertencia al movimiento sindical: “el Gobierno no aceptaría por ningún motivo huelgas de solidaridad o suspensión inmotivada del trabajo, anunciando que el empleado que falte a sus labores sin motivo justificado, o promueva desórdenes en el mismo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia ordinaria”.<sup>420</sup>

A pesar de ello, la revuelta popular sirvió de plataforma para dos iniciativas que serían protagonistas de los años por venir: una instancia de articulación multisectorial entre estudiantes (

FEC

h), empleados (

JUNEC

h) y obreros (bloque sindical) bajo el llamado “Comando Nacional de Resistencia a las Alzas”. Si bien comenzó paulatinamente, en los meses siguientes la iniciativa se reactivó con la incorporación de diversas organizaciones que impulsaron una serie de actividades, entre ellas, por ejemplo, surgió la comisión que organizó el Día del Trabajo el 1° de mayo de 1951, logrando que, por primera vez desde 1946, se conmemorara de manera unitaria.<sup>421</sup>

En segundo lugar, observamos la reactivación del movimiento huelguístico que ya iba repuntando desde los meses previos a la revuelta. Como hemos señalado, las políticas represivas implementadas durante el gobierno de

G.G.V.

incidieron en una dramática disminución de la huelga y la movilización obrera.

No obstante, un estudio estadístico realizado por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile en 1956, sostenía que desde 1950, fruto de la “intranquilidad obrera”, las huelgas ilegales muestran un fuerte aumento, “ocurriendo con una frecuencia entre tres y cuatro veces mayor que las huelgas legales y afectando, también, de dos a cuatro veces más trabajadores que aquellas”.<sup>422</sup> Veamos:

TABLA 2:

*Huelgas en Chile*

				Trabajadores afectados	Días-H
	Legal	Ilegal	Total	Legal	Ilegal
1947-1950 Promedio anual	39	82	121	13.034	31.569
1951-1954 Promedio anual	55	176	231	36.219	73.320
1955	62	212	274	23.262	104.364

El gobierno al querer buscar responsables culpó a los empleados de convocar a la revuelta, cuestión que debieron salir a desmentir ante la opinión pública: “La Junech no fabrica asonadas: es solo de carácter gremial”, dijeron como defensa. No obstante, recalcaron su compromiso: “Continuará firmemente unida en su lucha contra el alza constante del costo de la vida y en defensa de los derechos e intereses de los asalariados”.<sup>423</sup> En definitiva, recalcaban dos cuestiones imperativas que estarán en el centro de las preocupaciones de la clase trabajadora durante el periodo. Por su parte, a pesar de que Clotario Blest puso a disposición su cargo al frente de la

ANEF

, debido a los cargos señalados en su contra, esta le fue rechazada.

Desde entonces, la recién nacida

JUNEC

h se tomó los diarios y las radios haciendo noticia constantemente en la política nacional, y su líder, Clotario Blest, comenzaría a alcanzar mayor notoriedad en las luchas sociales en las décadas siguientes (fue un “salto a la fama”, dirían sus compañeros), bregando por la conformación de una central unitaria. Sin duda, las atribuciones que había merecido reafirmarían las confianzas del sector e incluso la posibilidad de tener un poder de convocatoria insospechado. Como señalamos anteriormente, tan influyente fue esta apreciación, que parte de la historiografía chilena la caracterizó como una revuelta de los empleados.

Pero sin duda, una de las consecuencias de esta revuelta fue su fermento para la organización y nuevas disputas en el campo laboral que se expresaron en la ciudad. A inicios de 1950 se desató una huelga encabezada por los empleados públicos cuando el gobierno patrocinó el proyecto de ley llamado “estabilización de precios, sueldos y salarios” para contrarrestar la inflación, que, entre otras cosas, proponía terminar con el reajuste anual del sueldo de los empleados particulares y suspender el aumento de remuneraciones a los trabajadores del Estado. La movilización laboral que siguió a continuación fue conocida como el “volcán gremial”.<sup>424</sup> Fueron días de agitación que removieron el piso nacional. Fue cuando, despuntando febrero, el Partido Radical decidió mover el timón desde la derecha hacia el centro político, para apoyar el movimiento, cuestión que impulsó la salida de Alessandri del Ministerio de Hacienda y la

conformación del llamado gabinete de “sensibilidad social”. Aún más, el gobierno decretó una amnistía a todos los detenidos, condenados o procesados por infracción a la

LDD

, acusados de haber participado en el movimiento.<sup>425</sup>

También los comunistas, en especial sus juventudes, continuaron en las calles manifestándose en contra de las disposiciones de la

LDD

. Un hito bastante complejo se vivió en el mes de noviembre en el centro de Santiago durante las fiestas de la primavera de aquel año. Las Juventudes Comunistas aprovecharon la actividad para movilizar a sus militantes e ingresar a la Plaza de Armas en dos columnas que irrumpieron con consignas, gritos y panfletos que hacían referencia a la conmemoración del 32° aniversario de la Revolución rusa. Pronto llegó Carabineros. En esa jornada hubo 20 heridos a bala, entre ellos cayó gravemente herida la secretaria de la Federación de Estudiantes Secundarios, Virginia Vidal, de solo 15 años. Posteriormente, se decretaron diversos allanamientos y órdenes de detención a más de 200 personas sindicadas como dirigentes comunistas.

#### IV

Pero la Revuelta de la chaucha no había sido solo una protesta de los empleados, aunque se hicieran parte de las movilizaciones. Tampoco solo de estudiantes, aunque fueran quienes convocaron a las primeras movilizaciones, agitaron asambleas y protagonizaron marchas y enfrentamientos en la ciudad. Tampoco solo de obreros, que se sumaron a las listas de detenidos. La revuelta había sido cuestión de todos y todas, incluso de quienes esbozaron una sonrisa ante el ajuste de cuentas y explicaron sus razones en columnas y comunicados. Y si algo podemos cuestionar es su carácter espontáneo. Hubo advertencias previas, hubo un llamado centralizado a concentrarse y marchar. Efectivamente, como suele suceder en este tipo de manifestación popular, más tarde hubo diversas



micromovilizaciones, enfrentamientos y se desarrollaron formas de lucha que nadie pudo prever, porque se desarrollan al calor de los sucesos, echando mano de la sedimentación histórica que conforma la trayectoria de la protesta en Chile.

Los costos ya los señalamos, tres muertos, decenas de heridos, centenares de detenidos, relegados, allanados, etc. ¿Qué se logró? Desde nuestro punto de vista, el logro más relevante fue la activación del pase escolar, hasta entonces inexistente en Chile, que significaba una tarifa menor y un alivio para el bolsillo de numerosas familias populares. Punto aparte fue lo mucho que costó hacerlo respetar en las calles y paraderos, y que marcará parte de la tensa relación entre choferes de micro y estudiantes de los años siguientes. También, la derogación del alza del transporte público fue una importante conquista, después de años de soportar la presión de la inflación y el alza de la vida. No es poca cosa. Aún más, durante un tiempo las autoridades siguieron sintiendo el temblor que recorrió a la clase política en aquellos días. Lo vimos, por ejemplo, a la hora de optar por una nueva configuración ministerial a inicios de 1950, y también lo veremos en la campaña presidencial de 1952.

Por otra parte, las energías movilizadoras de la revuelta fueron canalizadas por diversos referentes orgánicos. Por un lado, la

FEC

h, gracias a una alianza de izquierda, rompió con la hegemonía socialcristiana, logrando el triunfo del socialista José Tohá en 1950. Como hemos señalado, empleados y obreros reactivaron la huelga como forma de lucha ante la depreciación de sus salarios y en aras de mejorar las condiciones laborales. Los y las trabajadores/as serán un protagonista fundamental en las luchas sociales que se avecinaron y lograrán constituir la

CUT

en 1953. Además de instancias multigremiales de protesta contra las alzas, que seguirán movilizándolo Chile de los años 50.

Por contraste, las elecciones presidenciales de 1952 no lograron ser hegemonizadas por una izquierda fragmentada, con un

PCC

h en clandestinidad, un Partido Socialista que se dividió ante la candidatura de Ibáñez, y serias diferencias y enemistades entre ambos. Si bien el gran castigado fue el Partido Radical, que después de tres gobiernos solo logró el 20% de los votos, la pobre votación del socialista Salvador Allende a nombre del llamado Frente del Pueblo, con el 5,5% de los votos, es prueba de esa debilidad unitaria.

El ganador indiscutible fue el General Carlos Ibáñez del Campo, con un 47% de los sufragios. El hombre prometía mejoras sociales dentro de un clima de orden y autoridad, el fin de los abusos y de las leyes represivas. Aún más, se presentaba como una opción apolítica, fuera de pugnas de izquierda o derecha, pero siempre del lado de los trabajadores. Incluso el presidente Ibáñez fue invitado a la primera conmemoración del 1° de mayo organizada por la

CUT

, reconociendo a la central como legítima interlocutora de los trabajadores. Pero esta fraternidad duró poco o casi nada. El alza de la inflación, las reorientaciones en las políticas económicas de corte ultraliberal y el recrudecimiento de las leyes represivas, por un lado, y el proceso huelguístico que se activó ese mismo año, además de las convocatorias a paros nacionales en los años 1954, 1955 y 1956, por el otro, terminaron por romper cualquier atisbo de acercamiento. Fue un periodo autoritario y represivo. Clotario Blest en diversas ocasiones y por varios meses durante el periodo de Ibáñez estuvo preso en la Cárcel Pública y relegado en diversas zonas del país, al igual que otros dirigentes sindicales. No es casual que el periodo 1955-1970 sea llamado por Crisóstomo Pizarro como de sindicalismo politizado antiestatal, proveyendo parte importante del liderazgo político.<sup>426</sup>

Pronto, muy pronto, el propio General Ibáñez debería enfrentar otra revuelta, la de abril de 1957, que resonaría en las ciudades de Valparaíso, Concepción y Santiago.

IMAGEN 3:

*Revuelta de abril de 1957 en Santiago de Chile*



*Fuente: Fotografía patrimonial. Museo Histórico Nacional.*

La revuelta de 1957 se extendería por días, y tendría como saldo muertos que lamentar y la consiguiente radicalización de los manifestantes. Las problemáticas que abrió serían los desafíos de los años siguientes. Nuevamente, como señaló Salvador Allende ante el Congreso Nacional, un temblor recorrería a la clase política, y sus ecos seguirían resonando en las calles y en las luchas, en las esquinas y en las memorias que marcaron el siglo

XX

.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

### *Fuentes Documentales*

Fondos Ministerio del Trabajo y del Interior 1949, Archivo Nacional de la Administración (

ARNAD

).

*Sumario por sucesos ocurridos en la Plaza Bulnes, Causa rol N° 80-1946. Segunda Fiscalía Militar de Santiago.*

### *Prensa Periódica*

Revista Ercilla

Revista Vea

*El Pueblo*

*Las Noticias Gráficas*

*Noticias de Última Hora*

*El Mercurio*

### *Fuentes Impresas*

Bravo, Leonidas, Lo que supo un auditor de guerra. Editorial Pacífico, Santiago, 1955.

Instituto de Economía, Universidad de Chile. Desarrollo económico de Chile 1940-1956, 1956.

Misión Klein & Saks, El programa de estabilización de la economía chilena y el trabajo de la misión Klein & Saks. Editorial Universitaria, Santiago, 1958.

Olavarría, Arturo, Chile entre dos Alessandri. Memorias políticas. Tomo

*III*

, Editorial Nascimento, Santiago, 1962.

Pizarro Navea, Eduardo, Victoria al amanecer. Intimidades y trayectorias de la huelga gremial de enero de 1950. Imprenta La Sudamericana, Santiago, 1950.

### *Bibliografía*

Álvarez, Rolando, Forjando la vía chilena al socialismo. El Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970). América en Movimiento, Santiago, 2020.

Plaza, Camilo, “Policialización de la protesta y de la seguridad interior: Carabineros de Chile (1946-1970), en Santibáñez, Camilo; Thielemann, Luis, Revueltas, Disturbios y lucha de clases en la metrópolis (Chile, siglos

*XX-XXI*

), América en Movimiento, Santiago, 2021. Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo, Memoria de la izquierda chilena. Tomo

*I.*

Javier Vergara Editor, Santiago, 2003.

Barría, Jorge, Historia de la

*CUT*

. *Prensa Latinoamericana, Santiago, 1971.*

Bravo, Viviana, “¡Ni fiesta ni congoja! El primero de mayo en tiempos de la Ley Maldita, Santiago de Chile, 1948-1958”, en Bravo, Viviana; Mastrángelo, Mariana, *La izquierda en movimiento: clase trabajadora y luchas populares en América Latina s.*

*XX*

y

*XXI*

,

CLACSO

, Buenos Aires, en imprenta.

Bravo Vargas, Viviana, “Lucha de calles en Santiago de Chile: reflexiones en torno a la trayectoria de la protesta popular (1946-2019)”, en Santibáñez, Camilo; Thielemann, Luis, *Revueltas, disturbios y lucha de clases en la metrópolis (Chile, siglos*

*XX-XXI*

). *América en Movimiento, Santiago, 2021.*

, “Chile no va hoy a la fábrica: Protesta obrera y represión política en el verano de 1946”, en *Izquierdas, IDEA-USACH, N° 35*, septiembre de 2017.

Cavarozzi, Marcelo, *Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964,*

LOM

, Santiago, 2017.

Echeverría, Mónica, Antihistoria de un luchador, Clotario Blest 1823-1990,

LOM

, Santiago, 2013.

Fajardo, Marco, “Albert Camus en Chile: a 70 años de la conferencia ‘El Tiempo de los asesinos’ que dio el Nobel en Santiago en medio de las protestas callejeras”, en El Mostrador, 5 de agosto de 2019. Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/08/05/albert-camus-en-chile-a-70-anos-de-la-conferencia-el-tiempo-de-los-asesinos-que-dio-el-nobel-en-santiago-en-medio-de-protestas-callejeras/>

Huneeus, Carlos, La Guerra Fría Chilena. Gabriel González Videla y La Ley Maldita, Debate, Santiago, 2009.

Loveman, Brian y Elizabeth Lira, Poder judicial y conflictos políticos (Chile:1925-1958),

LOM

, Santiago, 2014.

Ljuvetic, Iván, Fernando Ortiz. Lecciones de clase, Ediciones Horizonte, Santiago, 2016.

Martínez, Pamela, Los casos de vulneraciones a la libertad sindical cometidas por Chile. Ediciones Jurídicas, Santiago, 2019.

Milos, Pedro, Historia y memoria. 2 de abril de 1957,

LOM

, Santiago, 2007.

Moulán, Tomás, Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973),



LOM

, Santiago, 2006.

Muñoz Gomá, Óscar, Chile y su industrialización: pasado, crisis y opciones,

CIEPLAN

, Santiago, 1986.

Palma, Daniel, “La ‘Revolución de la Chaucha’, Santiago de Chile, 16 y 17 de agosto de 1949”, en Revista Alamedas, N° 6, Santiago, pp. 138-151, 1999.

Pinto, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Editorial Universitaria, Santiago, 1973.

Pizarro, Crisóstomo, La huelga obrera en Chile, Sur, Santiago, 1986.

Rodríguez, Javier, Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política, Dibam, Santiago, 2017.

Salazar, Gabriel, La violencia política popular en “Las Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórica popular),

LOM

, Santiago, 2006.

Santibáñez, Camilo; Thielemann, Luis, Revueltas, disturbios y lucha de clases en la metrópolis (Chile, siglos

XX-XXI

), América en Movimiento, Santiago, 2021.

Thielemann, Luis, “‘Sectores sociales subordinados a las más bajas pasiones’. Notas sobre la lucha de clases y disturbio callejero en la batalla de Santiago. Enero-abril, 1957”, en Santibáñez, Camilo y Thielemann, Luis, Revueltas, Disturbios y lucha de clases en la metrópolis (Chile, siglos

XX-XXI

), América en Movimiento, Santiago, 2021.

Valdivia, Verónica, Pisagua, 1948, anticomunismo y militarización política en Chile,

LOM

, Santiago, 2021.

\* Académica Licenciatura en Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Este texto forma parte del proyecto

FONDECYT-ANID

N°11180315 “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo. Santiago y Valparaíso 1947-1963”. Agradezco la importante colaboración de Gustavo Palma, ayudante de este proyecto.

## **VIII. SANTIAGO DE CHILE, 1970-1973: MOVILIZACIONES OBRERAS, CORDONES INDUSTRIALES Y PROTESTAS URBANAS DURANTE LA “VÍA CHILENA AL SOCIALISMO”**

FRANCK GAUDICHAUD

[\\*](#)

“Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir”

SALVADOR ALLENDE

[427](#)

### **MIL DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO... Y A SANTIAGO DE CHILE**

“Fiesta, drama y derrota”: así definió el sociólogo Tomás Moulian (una sentencia que se volvió ya clásica) el periodo de gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y de la Unidad Popular (

UP

). Aquellos mil días transformaron a Chile, marcaron el siglo

XX

latinoamericano y estremecieron al mundo por la fuerza telúrica de sus luchas y de sus sueños, la originalidad de sus propuestas de transformación y la violencia

de su desenlace. El periodo de la

UP

corresponde a un proceso prerrevolucionario que sigue siendo hoy uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente chilena. Electo en septiembre de 1970, el médico y parlamentario socialista Salvador Allende asumió el Ejecutivo de la República con la ambición de conducir El país —de forma legal y pacífica— hacia un régimen socialista democrático. La “vía chilena al socialismo” se definió tanto por el rechazo de la vía armada como por el respeto a las instituciones vigentes; según el presidente Allende y los partidos de la

UP

, la “tradición” democrática del país, la Constitución de 1925 y el “legalismo” de sus Fuerzas Armadas autorizaban los profundos cambios defendidos en su programa.<sup>428</sup>

Llevado al poder por una coalición de izquierda amplia, articulada en torno a dos grandes partidos —el Partido Comunista (

PC

) y el Partido Socialista (

PS

)—, con presencia parlamentaria de notable influencia en el movimiento popular, de inspiración marxista y antiimperialista, este intento de “nueva” vía socialista, en plena Guerra Fría, fue aplastado con violencia y sangre tanto por la bota militar como por la reacción cívica. Como se sabe, el golpe de Estado encabezado por el general Pinochet, con el activo apoyo del gobierno de Nixon, abrió un nuevo ciclo histórico en el que Chile se convirtió en uno de los estandartes del terrorismo de Estado y, después, del neoliberalismo. El 11 de septiembre de 1973, la fiesta popular y revolucionaria inicial quedó en la oscuridad de la represión. Un mundo se derrumbaba.

No obstante, la memoria de estos mil días está todavía muy presente y su importancia histórica también en el Chile actual, tanto por su impacto de largo

alcance, como también por su legado. La

UP

podría verse en perspectiva como la culminación de un ciclo de mediana duración, heredado de los Frentes Populares de los años 30 y 40, del que el gobierno de Allende fue —en cierto modo— el punto de llegada, al mismo tiempo que el punto de ruptura. La temporalidad 1970-1973 fue sumamente agitada y densa en el plano sociopolítico<sup>429</sup>. Electoralmente, Allende supo aprovechar una situación favorable y, después de tres campañas presidenciales, logró finalmente vencer a una oposición dividida (entre la derecha y la Democracia Cristiana) y a una DC desorientada por el fracaso de su propuesta de “revolución en libertad”, con el gobierno de Frei (1964-1970). La victoria en las urnas de la izquierda era sin embargo frágil: recordemos que Allende conquistó el Ejecutivo con un poco más del 36% de los votos. Las primeras aplicaciones de las “40 medidas” prometidas durante la campaña fueron rápidamente posibles gracias al carisma del presidente, a su discurso nacional-popular, democratizador y antiimperialista y a una importante movilización popular y clasista.

Además de la expropiación (sin indemnización) de las grandes minas de cobre en manos del capital extranjero (aprobada por unanimidad por el Congreso en 1971), el gobierno impulsó la nacionalización del 90% del sector bancario, de decenas de empresas y la profundización de la reforma agraria, iniciada con el gobierno anterior. Inmediatamente, esa política hirió a muchos intereses privados nacionales, al tiempo que se atacaba frontalmente a las multinacionales estadounidenses. Frente al peligro de una “nueva Cuba” en el continente, la administración Nixon preparó activamente la desestabilización del gobierno y la posibilidad de un golpe militar.<sup>430</sup> La táctica de la izquierda fue, en primera instancia, tomar el control del sector moderno y “monopólico” de la economía (unas 200 empresas, según los economistas de izquierda), para poder regular la actividad productiva nacional. Este reto fue más complejo en cuanto la

UP

era minoritaria en el Congreso y no controlaba las demás instituciones (como la Contraloría de la República) ni tampoco la mayor parte del poder mediático. Este contexto obligaría a la presidencia a entablar interminables negociaciones con el “centro político”, o sea con la

DC

(fuerza cada vez más hostil a Allende a partir de 1971). Ante la sistemática obstrucción parlamentaria, el plan de nacionalización allendista se redujo finalmente a 91 empresas, en ámbitos clave. La coalición proyectó también la creación de un sistema original de cogestión y participación de los trabajadores para este sector, conocido como “Área de Propiedad Social” (

APS

).<sup>431</sup> La participación se consideraba tanto como un instrumento para la “batalla de la producción” al servicio del país, como una manera de incluir a los trabajadores en los procesos de decisión.<sup>432</sup> Esta innovación fue posible gracias a la estrecha colaboración con la poderosa Central Única de Trabajadores (

CUT

), principal organización sindical nacional interprofesional. Desde 1953, la

CUT

fue un instrumento esencial del movimiento sindical, ya que le daba, por lo menos en teoría, una dirección unitaria más allá de las distintas tendencias políticas que la componían (comunista, socialista, demócratacristiana, esencialmente). Con Allende, la creciente integración de la

CUT

al proyecto político de transformación de la izquierda no estuvo exenta de conflictos y debates en torno al necesario respeto de la autonomía sindical (siempre reivindicada por figuras del tamaño de Clotario Blest).<sup>433</sup> Esta integración relativa alcanzó su punto álgido con el nombramiento de los dos principales dirigentes de la central —uno socialista y otro comunista—, junto a tres generales, como ministros del gobierno, tras la gran crisis de octubre de 1972.

El análisis estadístico de los conflictos laborales del periodo revela que los trabajadores vieron la llegada de Allende como una “estructura de oportunidad política” favorable al despliegue de sus movilizaciones y demandas. El número de huelgas aumentó considerablemente, pasando de 977 en 1969 a 3.526 en

1972. Se produjo un fenómeno de difusión de un lugar de conflicto a otro, y de una fábrica a otra: las y los asalariados de la pequeña y mediana industria (que gozaban de poca influencia política), también se lanzaron en este ciclo de protestas. Otro rasgo llamativo de este momento es el uso masivo de huelgas ilegales (un fenómeno ya existente anteriormente, pero que se aceleró con Allende). Así, desde sus orígenes, la

UP

se enfrentó a una gran tensión: daba como perspectiva a sus partidarios —y al pueblo chileno— un camino de ruptura con el imperialismo y el capitalismo, aunque, al mismo tiempo, proponía canalizar las dinámicas del conflicto de clase dentro de su proyecto de transición no armada, legalista y gradual (“por etapas”) al socialismo. Las demandas de los actores movilizados entraron rápidamente en tensión con los límites institucionales y políticos de esta estrategia.

Progresivamente, el movimiento popular, los sindicalistas y los mismos activistas de la izquierda, presionaron “desde abajo” al gobierno para ampliar la redistribución de la tierra, la política de construcción de viviendas o el número de empresas nacionalizadas, regularmente sin preocuparse por los acuerdos institucionales “en las alturas”. Esta compleja interacción entre lo social y lo político, en medio de un contexto de agitación revolucionaria y de reacción conservadora, se hizo cada vez más tensa y conflictiva.<sup>434</sup>

En el centro de las contradicciones irresueltas de la “vía institucional al socialismo” se encuentran, por supuesto, numerosos otros factores clave (geopolíticos, culturales, económicos, etc.). Entre ellos: el poderoso efecto desestabilizador del intervencionismo de los Estados Unidos, las deficiencias en la política económica del gobierno (con una inflación y un mercado negro crecientes) o la progresiva división dentro de la coalición del bloque de izquierda gubernamental. En efecto, un polo “rupturista” (con parte del

PS

agrupada en torno a su secretario general Carlos Altamirano, la Izquierda Cristiana (

IC)

y el



## MAPU

) reclamaba la aceleración de las reformas y un enfrentamiento más directo con la burguesía (sobre todo a partir de 1971). A pesar del apoyo crítico inicial, la pequeña formación revolucionaria liderada por Miguel Enríquez, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (

## MIR

), también denunció las vacilaciones y el “reformismo obrero y pequeño-burgués” del gobierno. Del otro lado, un polo “gradualista”, estructurado en torno al

## PC

y al “compañero-presidente”, subrayaba la necesidad de buscar acuerdos con la

## DC

, de “consolidar para avanzar” y de respetar la institucionalidad vigente para evitar crear más “enemigos de clase”. Finalmente, más allá de esta dicotomía discursiva, estas dos opciones fueron derrotadas por el golpe de Estado, abriendo numerosos debates dentro de las filas de la izquierda mundial en cuanto a las “lecciones” que se podían sacar de esta tragedia.

En este capítulo volveremos esencialmente sobre la acción colectiva de los obreros movilizados y de sus sindicatos: actores populares esenciales de estos años 70.<sup>435</sup> Nos centraremos además en la capital, Santiago de Chile, un espacio urbano fundamental por su peso político, económico, demográfico y simbólico. Más que un análisis general de la Unidad Popular, intentaremos reflexionar sobre un aspecto relevante de las protestas populares: la territorialización de las luchas obreras en la capital chilena. Este examen se inscribe dentro de lo que el sociólogo Manuel Castells ha nombrado (precisamente en base a su experiencia chilena) las “luchas urbanas”,<sup>436</sup> pero abriendo la reflexión a las movilizaciones específicas de los trabajadores en Santiago.

Mucho antes, el intelectual marxista Henri Lefebvre insistió en la importancia de la “producción del espacio urbano” por los actores en conflicto y evocó su tridimensionalidad: el espacio “concebido” (por ejemplo, por las políticas públicas), el espacio “percibido” de la experiencia social y material, y el espacio

“vivido” por los actores (y por los movimientos sociales). En este espacio urbano, se inscriben las distintas clases sociales de forma diferenciada, particularmente en momentos de cambios sociopolíticos radicales.<sup>437</sup> Santiago de Chile ha sido claramente un escenario de protesta popular y un espacio de lucha colectiva durante la

## UP

, interrogando esta tridimensionalidad. En un estudio reciente, el arquitecto Marco González Martínez analiza la capital durante el periodo de Allende como “espacio disputado”. Aunque este autor no aborda las movilizaciones obreras y sindicales (para centrarse más bien en el transporte, la planificación urbana o la segregación territorial), recuerda que el Gran Santiago fue uno de los espacios urbanos más debatidos políticamente a nivel nacional. Recalca también que Allende y las izquierdas tuvieron conciencia de la importancia de comenzar a gestar una propuesta de justicia social acoplada a un proyecto de justicia espacial.<sup>438</sup>

Lo que nos interesa aquí es recordar que no fue solo el espacio concebido por las políticas públicas de la izquierda las que disputaban la ciudad a las clases altas: el ejercicio práctico de las protestas obreras y, progresivamente, la gestación de formas auto-organizativas dentro del movimiento obrero-popular, también vinieron a interrogar, subvertir y transformar el conjunto de los territorios de la ciudad. Las movilizaciones de las y los trabajadores irrumpieron en el espacio productivo, en las empresas y fábricas, pero también en el espacio público, en las calles y avenidas, tanto en el centro como en las periferias de Santiago de Chile.

Dentro de lo que se denominó “poder popular” y de estas experiencias “tejedoras de la revolución” (descritas por el historiador Peter Winn en su estudio sobre la fábrica textil Yarur), el surgimiento de los “cordones industriales” representó un elemento clave.<sup>439</sup> Asimismo, intentaremos aclarar las formas organizativas, “repertorios de acción”,<sup>440</sup> reivindicaciones, así como el despliegue territorial de estas organizaciones de trabajadores, en alianza con otros sectores sociales. También recordaremos los debates que generaron en el campo de la izquierda y de la “transición al socialismo”. Finalmente, daremos algunos ejemplos de la dimensión de la polarización social y violencia política que invadieron las calles y avenidas de la capital, antes del golpe de 1973.

## LOS “CORDONES DE LA REBELDÍA” EN SANTIAGO

Tras un primer año triunfante, en el que las importantes reformas democratizadoras prometidas por Allende dieron sus frutos, con el apoyo de un desbordante entusiasmo popular, el comienzo de 1972 anunciaba tiempos difíciles. Las fuerzas conservadoras estaban cada vez más convencidas de la necesidad de terminar con un gobierno considerado peligroso para la estabilidad de la República del 1925, ya fuese por medios legales o, de ser necesario, extraparlamentarios. La crisis económica también comenzaba a ganar terreno y Allende estaba perdiendo progresivamente el apoyo de los sectores medios. Desde mediados de 1971, la

### SOFOFA

(Sociedad de Fomento Fabril), el sindicato patronal de la gran industria, se puso en orden de batalla, organizando una intensa campaña de prensa, orquestada por El Mercurio, sobre el tema del “caos económico”. Estas maniobras condujeron, entre otras consecuencias, a la “marcha de las cacerolas vacías” el 1 de diciembre de 1971, logrando una notable movilización de mujeres del barrio alto de Santiago, pero también de extracción popular.<sup>441</sup> La

### DC

, el Partido Nacional y también activistas de extrema derecha estuvieron presentes. En paralelo, la irrupción cada vez más fuerte de las movilizaciones populares y revolucionarias en la escena política nacional inició un fenómeno de desborde del gobierno por parte de su base social y política. Esta polarización significó el uso de diversas formas de lucha callejera, donde podían expresarse reivindicaciones encontradas entre partidarios del gobierno y de la oposición (en un contexto en que el Ejecutivo intentó limitar considerablemente las formas de represión policiaca hacia las manifestaciones). Como lo subraya Eugenia Palieraki:

El principal escenario donde se ejerció esta violencia política fue la calle, a través de manifestaciones y contramanifestaciones, mítines y concentraciones políticas. [...] El periodo 1970-1973 conoció un desbordamiento progresivo de

la violencia callejera, que de ser un fenómeno bastante marginal —y puntual—, se volvió al hilo de este periodo una práctica cada vez más recurrente. Otro aspecto relevante de este tipo de violencia fue su utilización por grupos sociales cada vez más amplios, hasta volverse un fenómeno cotidiano de los chilenos en vísperas del Golpe de Estado.<sup>442</sup>

Desde esta óptica, la

UP

se enmarca en un periodo caracterizado por la importancia de lo que Gabriel Salazar denomina “violencia política popular en las grandes alamedas”, fenómeno que ha cruzado toda la historia contemporánea de Chile hasta nuestros días, pero que fue particularmente intenso en estos años 70.<sup>443</sup>

Esta radicalización se expresó claramente en octubre de 1972, con la convocatoria a una gran “huelga patronal” por parte de camioneros, empresarios, de quienes ejercían profesiones liberales, taxistas, etc., con el apoyo de toda la oposición parlamentaria (ahora unida en una Confederación de la Democracia -

CODE

). Este llamado condujo al lockout de empresas y a la paralización de la producción y la distribución económica, en una estrategia de enfrentamiento con el gobierno que el sociólogo Armand Mattelart llamó “la línea de masas de la burguesía”.<sup>444</sup> Una acción de “resistencia civil” respaldada también por la

CIA

, como lo confirmaron archivos desclasificados años después.

Descolocado por la magnitud de la ofensiva en el terreno extrainstitucional, el gobierno reveló también sus propias debilidades, terminando por convocar a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden público. En estas condiciones, fueron los militantes de base, dirigentes de izquierda a nivel local, pobladores y estudiantes organizados, sindicalistas y trabajadores movilizados los que aplicaron, de forma no planificada, una praxis de movilización colectiva contra el cierre de fábricas y la paralización económica. Este fenómeno de auto-

organización representa una característica fundamental del “Octubre Rojo” chileno.<sup>445</sup> Se multiplicaron las acciones directas —a veces violentas— para requisar comercios o transportes, para ocupar fábricas o abastecer con productos básicos a la población de Santiago (con el apoyo de las Juntas de abastecimiento y control de precios,

JAP

). Este movimiento se llevó a cabo fuera de cualquier esquema preconcebido por las jefaturas de los principales partidos, yendo mucho más allá de lo planificado por la dirección nacional de la

CUT

o del mismo Ejecutivo.

Al final, tras las ocupaciones (las “tomas”) de fábricas de octubre del 72, fueron por lo menos 65 nuevas empresas las que se integraron al sector nacionalizado del Área de Propiedad Social (

APS

). De ellas, solo nueve estaban previstas inicialmente en el plan del Gobierno. Este movimiento de ocupación obrera involucró principalmente a las empresas medianas, que también apoyaron la lucha por mantener la producción de las principales empresas “estratégicas” del

APS

. Algunos trabajadores y sindicalistas consiguieron que su empresa ocupada volviera a funcionar, muy a menudo sin la ayuda de los ingenieros y directivos: un “poder obrero” magnificado por Patricio Guzmán en su documental *La batalla de Chile*.<sup>446</sup> La efervescencia también vino de los barrios populares. Las formas de abastecimiento directo fueron practicadas por el movimiento de pobladores, los centros de madres y los campamentos más organizados; los estudiantes (afines al gobierno) multiplicaron las iniciativas de trabajo voluntario, en relación con las empresas ocupadas y las poblaciones. Asistimos así a una explosión de autogestión, que permanece en la memoria de las y los militantes como un momento intenso de dignidad y fuerza colectiva.<sup>447</sup> La emulación, la intermediación y la difusión de esas luchas facilitaron la creación

de nuevos vínculos entre varios actores sociales hasta el momento poco conectados entre sí. La prensa de la época contiene numerosos ejemplos de la riqueza creativa de esta coyuntura de movilizaciones multisectoriales.

En paralelo, se multiplicaron las coordinaciones territoriales destinadas a resistir el paro patronal: el espacio urbano se inscribió entonces plenamente como elemento de un poder popular todavía embrionario y no exento de múltiples contradicciones. Las principales periferias obreras e industriales de Santiago se convirtieron, por lo tanto, en verdaderos “cinturones rojos” movilizados.<sup>448</sup> Comités de pobladores, comandos comunales, cordones industriales, florecieron según diversas configuraciones locales. Sin duda —y sin poderlo detallar en el marco de este capítulo—, fueron los cordones industriales los que tuvieron mayor impacto y capacidad de incidencia sociopolítica a partir de 1972. Estos últimos se pueden definir como tentativas de coordinación sindical-territorial, que facilitaron la acción en red de los trabajadores movilizados, de forma horizontal, de puerta a puerta, de empresa a empresa, en el espacio urbano industrial. El objetivo declarado de los cordones fue, primero, oponerse al boicot económico de la contrarrevolución y protegerse de acciones violentas de la extrema derecha; segundo, volver a poner en marcha la fábrica o por lo menos ocuparla; tercero, “expropiar” temporalmente algunos medios de transporte y organizar el abastecimiento directo en los barrios circundantes. Rápidamente, y una vez la urgencia del paro resuelta, estas organizaciones exigieron al gobierno la ampliación del sector nacionalizado, la aceleración de las reformas económicas y la radicalización de la transición al socialismo. Las consignas de “avanzar sin transar”, de “crear, crear poder popular” e incluso de “cerrar el parlamento burgués para formar una asamblea popular” comenzaron a circular en las calles, en las asambleas de las empresas movilizadas y en periódicos militantes próximos al “poder popular”, particularmente los ligados a los comités regionales del

PS

de Santiago (como Tarea Urgente o La Aurora de Chile).

En 1970, el 75% de la población chilena vivía en la ciudad, y el área metropolitana de Santiago albergaba aproximadamente un tercio de la población del país (3,2 millones de habitantes). Casi la mitad de la población urbana trabajaba en la industria, una cifra considerable, aunque el 70% de estas industrias se encontraba solo en cuatro municipios (en la comuna de Maipú en

particular). En este espacio tomaron forma los territorios industriales y populares, producto de varias décadas de acción pública y privada, pero también a través del establecimiento no planificado de numerosos barrios populares (“poblaciones”) y campamentos bajo la presión del éxodo rural. Su organización lineal está directamente vinculada a los principales ejes de comunicación, distribuidos en forma de estrella a lo largo de las principales avenidas y de la línea ferroviaria que conduce al puerto de Valparaíso (ver mapas N° 1 y 2). Animados por sindicalistas, la mayoría de las y los trabajadores más activos en la organización de los cordones eran también militantes del ala izquierda de la

UP

y, a veces, del

MIR

. Los comunistas fueron hostiles con los cordones, tanto por su “color” político, como porque consideraron que eran una organización paralela que corría el riesgo de debilitar el funcionamiento de la

CUT

(que en realidad no tenía organización territorial comunal en este momento) y de crear más problemas políticos al gobierno. Sin embargo, a partir de 1973, el

PC

intentó integrar los cordones, para canalizarlos mejor bajo sus opciones tácticas “gradualistas”, sin real éxito.

Uno de los principales cordones industriales fue el de Cerrillos, en la comuna de Maipú, bastión de la clase obrera manufacturera (textil, metalúrgica, automotriz, conservera)<sup>449</sup>. Es interesante señalar que las condiciones para el desarrollo de este cordón pueden ser descifradas gracias al trabajo de campo coordinado en 1972 por el sociólogo y urbanista Eder Sader, del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano y Regional de la Universidad Católica.<sup>450</sup> Este “Cordón de la Rebeldía” (retomando un título de la revista Chile Hoy<sup>451</sup>) se formó incluso antes de la crisis de octubre, en un sector de la ciudad que tenía la mayor concentración de industrias modernas del país, con unas 250 empresas empleando a unas 46.000 personas. El nudo gordiano de la “experiencia de

clase” (según el clásico concepto del historiador E. P. Thompson) en el municipio de Maipú era la tradición sindical y las tendencias, ya experimentadas, hacia la organización territorial interprofesional, combinando lucha sindical y movilizaciones callejeras amplias. Lo que facilitó esta dinámica fue la presencia de una zona industrial especializada, donde se concentraba gran cantidad de empresas de distintos rubros y tamaños, a lo largo de dos grandes vías de comunicación (ver mapa N° 3).

Hacer, hoy, una valoración realista del peso de las diferentes coordinaciones territoriales que nacieron al calor de octubre de 1972 es complejo. La prensa militante de izquierda de la época describe a menudo la existencia de estos “comités de coordinación” con admiración y cierta exageración. En Santiago, los cordones Cerrillos-Maipú y Vicuña Mackenna fueron los más importantes, junto con algunos otros como Macul u O’Higgins (ver mapa 2). En la capital, concentraron unas decenas de miles de trabajadores, pero también se encontraban a lo largo del país: en Arica, Concepción, Talcahuano y Punta Arenas. Es posible estimar que entre 20.000 y 30.000 trabajadores se identificaron con la acción de los cordones industriales del Gran Santiago y respondieron a sus llamados a marchas o movilizaciones. A nivel nacional, esta cifra debe ser de casi el doble (es decir, mucho menos que las cifras anunciadas por la prensa en su momento). Esta forma original de lo que hemos propuesto llamar poder popular constituyente también fue facilitada por la dinámica radical del movimiento de pobladores.<sup>452</sup> Sin embargo, los “comandos comunales” que, según el

## MIR

, debían aglutinar a obreros, estudiantes y pobladores no lograron desarrollarse por la falta de una conjunción estable entre estos diferentes actores sociales: la coordinación no siempre logró mantenerse en el tiempo frente a las dificultades de lo cotidiano y producto de culturas sociopolíticas muy diferenciadas.

Gracias a la resistencia popular, Allende consiguió recuperar el control del país nombrando inmediatamente un gabinete cívico-militar, el que, pese a permitir cierta normalización institucional, provocó un retroceso en las formas de “poder popular”. Se produjo entonces un interesante y duro debate entre los militantes, sobre si había que dar prioridad a los cordones industriales (deseo del

## PS



) o directamente a los comandos comunales (que fue el llamado del

MIR

). Esta discusión también era el reflejo de la implantación social de cada partido. En efecto, los cordones estaban dirigidos esencialmente por sindicalistas socialistas, mientras que el

MIR

estaba sobre todo arraigado en sectores del semiproletariado urbano. Sin embargo, los activistas miristas consiguieron organizar otras formas de “poder popular” territorial, como fue la experiencia en el campamento Nueva La Habana, una verdadera aldea autogestionada en la comuna de La Florida.<sup>453</sup>

## ESPACIOS, PROTESTAS Y REPERTORIOS DE ACCIÓN DE UN “PODER POPULAR” EN CONSTRUCCIÓN

Después de haber sido dirigidos esencialmente en la emergencia de octubre por dirigentes sindicales y militantes políticos, se crearon asambleas obreras en las fábricas más combativas para estructurar mejor los cordones industriales. El objetivo declarado era que los trabajadores eligieran a dos o tres delegados por empresa, que a su vez votarían las decisiones en el seno de una asamblea del cordón y elegirían una dirección territorial, que funcionaría con la ayuda de diversas comisiones y partidos que apoyaran esta iniciativa. Sin embargo, los cordones no tardaron en tropezar con numerosas dificultades: la mayoría del tiempo las asambleas de los cordones se parecían a una asamblea de dirigentes sindicales o de cuadros de izquierda (además estaban animadas casi solo por hombres, eso cuando muchas trabajadoras estaban presentes en las fábricas de los cordones), lo que a su vez favorecía diversos “caudillismos” o verticalismos partidarios en la conducción del “poder popular”.<sup>454</sup> Los activistas de los cordones también se enfrentaron a los propios límites de la estrategia de la

UP

, de la que muy a menudo formaban parte. Su posición intermedia, situada en el

cruce entre la clase y el campo partidista de las izquierdas, no impidió que se multiplicaran las críticas al “compañero-presidente”, pero sin nunca romper con el gobierno. Estos trabajadores exigían la ampliación del Área de Propiedad Social y la conquista de un control obrero real no solo de la producción, sino también de la planificación económica. Estos debates se prolongaron hasta la carta enviada a Salvador Allende por la Coordinadora de Cordones Industriales de Santiago el 5 de septiembre de 1973, verdadera denuncia de la ceguera de la

UP

, así como un último apoyo ante el peligro. La misiva (en realidad redactada en gran parte por el dirigente socialista Carlos Altamirano)<sup>455</sup> comenzaba así:

Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el Socialismo se estaba transando para llegar a un Gobierno de centro, reformista, democrático-burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de preservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ese, ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo.<sup>456</sup>

No obstante, antes de este fatal desenlace, los cordones lograron iniciar múltiples formas de auto-organización desde sus empresas, e iniciaron también varias protestas desde la calle y los diferentes territorios periféricos de la capital. Asimismo, apareció una geografía social, simbólica y política del “poder popular” en Santiago. Los cordones eran el territorio donde vivía una fuerza de trabajo muy joven y subempleada. La emigración que se produjo hacia Santiago entre los años 1942 y 1962, se componía mayoritariamente por una población que tenía menos de 20 años y fueron principalmente las nuevas industrias las que absorbieron esta mano de obra barata. Más del 50% de estos jóvenes trabajadores se instalaron en la periferia de la metrópolis y numerosos dirigentes obreros de los cordones tenían menos de 30 años en 1972. Es el caso, por ejemplo, de Armando Cruces, presidente socialista del Cordón Vicuña Mackenna o de Santos Romeo (

PS

y después

MIR

) del Cordón Cerrillos, aunque Edmundo Jiles, también sindicalista en Cerrillos, relativiza un poco esta situación en su testimonio: “la mayoría éramos jóvenes, o sea la gente mayor que había, era gente que sabía poner su experiencia, su sabiduría, para a veces hacer bajar un poco el nivel de adrenalina y morigerar un poco las acciones”.<sup>457</sup>

La dinámica colectiva inducida por estos jóvenes trabajadores radicalizados transformó las relaciones capital-trabajo en estos espacios de la ciudad. Según Luis Cruz:

Esta mano de obra está constituida, por lo general, por trabajadores jóvenes con un grado de escolarización mayor que sus predecesores y con una experiencia urbana de larga data. Son estos trabajadores los que desarrollan las luchas más radicales a partir de 1967 y que en 1972 se encontrarán a la cabeza de los “cordones industriales”.<sup>458</sup>

Aunque Augusto Samaniego comparta la observación sobre la existencia de una ruptura generacional en la forma de “hacer sindicalismo”, esta la atribuye más bien a la mano de obra recién llegada a la ciudad, poco diplomada, la que no tendrá prácticas tan institucionalizadas como la clase obrera instalada desde hace más tiempo.<sup>459</sup> Mario Olivares (obrero metalúrgico del

MIR

y delegado del Cordón Vicuña Mackenna) y Carlos Mujica (también metalúrgico y militante del

MAPU

)<sup>460</sup> son ejemplos típicos de esta nueva fuerza de trabajo que se radicalizó en los años 60 y 70. Obligados a comenzar a trabajar desde los 18 o 20 años, en paralelo buscaron adquirir una formación político-sindical y, a veces, un cierto

nivel escolar.<sup>461</sup> La construcción identitaria de los obreros de los cordones se forjó de esta manera en sus lugares de residencia, de sociabilidad y de trabajo, a menudo ubicados en la periferia urbana y cercanos entre ellos, que también podemos denominar espacios-rutina, los que Javier Auyero entiende como “las estructuras espaciales ordinarias de la vida cotidiana”.<sup>462</sup> La apropiación del territorio fue así un factor esencial no solo en el ámbito productivo, sino también en el cultural y deportivo: las fiestas populares, el teatro, los festivales o los campeonatos de fútbol se multiplicaron en las empresas ocupadas o nacionalizadas, en las calles de los alrededores de los cordones y en las poblaciones. Más allá de la fábrica, a menudo se privilegiaba la comuna como espacio de movilización para, desde ahí, alcanzar un eco político nacional. De hecho, los mapas revelan la intrincación de los diferentes territorios: espacios obreros, poblaciones y campamentos (ver mapa 1).

El lugar de trabajo era un espacio estratégico para la acción, desde el cual desplegar diferentes formas de movilización o protestas callejeras. Controlar la unidad de producción permitía enfrentar directamente al patrón, interpelar al gobierno y también sentirse dueño de un espacio-atributo portador de sentido para la clase obrera.<sup>463</sup> La toma fue una de las formas de acción colectiva más significativas de los cordones. Estas ocupaciones podían ir desde la toma “pasiva” a la espera del paso al Área de Propiedad Social presionando al Ejecutivo, hasta intentos de control de la producción y autodefensa del lugar por los trabajadores, quienes, a menudo, desplegarían con orgullo en el frontis de las empresas lienzos declarándolas “territorio liberado”, “en manos de sus trabajadores” e incluso, como en el caso de la simbólica textil Yarur, “territorio libre de explotación”.

#### IMAGEN 1:

*Empresa “Ex-Yarur” declarada “territorio libre de explotación” (1972)*



*Fuente: Winn, Peter, Tejedores de revolución, op. cit., p. 210.*

IMAGEN 2:

*Movilización de los trabajadores de Elecmetal para su nacionalización  
(noviembre de 1972)*

POR EL FRENTE PATRIÓTA  
ELECTOMETAL AL AREA SOCIAL

TODOS  
A  
PRODUCIR  
XCHILE

ELECTOMETAL  
AL AREA  
SOCIAL

LOS OBREROS  
SONOS

CAJUN

TRABAJADORES  
MANO FIRME  
Y AL ATAQUE!

*Fuente: Posición, Santiago, N° 31, 14 de noviembre de 1972.*

En otros momentos, la protesta obrera también invadió el espacio público urbano y las calles, tanto en el medio de convocatorias más amplias en defensa del proceso revolucionario, pero también para proclamar reivindicaciones propias y, a veces, contradictorias con los llamados del mismo gobierno. Las barricadas fueron de esta manera ampliamente utilizadas. Los cordones sacaron provecho de su situación geográfica: ubicados sobre las principales arterias de la ciudad, y controlando las vías de acceso a la capital, este repertorio de acción fue también ideal para seguir marcando un territorio en el plano simbólico. Según un folleto del

MAPU

acerca de “las técnicas de acción de masas” que se debían y podían utilizar con éxito en estos casos:

Las barricadas son protecciones ligeras, de construcción rápida que interrumpen toda la circulación por la calle [...]. Por la forma como desorganizan la circulación de vehículos en la ciudad, aumentan el impacto de otras acciones, especialmente marchas.<sup>464</sup>

### IMAGEN 3:

*Barricadas del Cordón industrial Vicuña Mackenna, “territorio de trabajadores”, a favor de la extensión del “Área Social” (agosto de 1973)*



*Fuente: La Aurora de Chile, Santiago, N° 34 y 37, 2 y 23 de agosto de 1973.*

Su temible eficacia impulsaba su emulación en todos los cordones. En julio de 1973 y después de la obtención de varias nacionalizaciones de empresas ocupadas, un manifestante declaraba: “en los rostros había mezcla de satisfacción y desconfianza. Por ahí se comentaba ‘¿será viejo el método este de las barricadas... pero siempre resulta!’”.<sup>465</sup> Otro repertorio callejero del “poder popular” fueron las marchas y las manifestaciones. Esas eran consideradas por los militantes como “la más dinámica de las acciones callejeras y la más impactante por su movilidad y la manera como interfiere la vida de la ciudad”.<sup>466</sup> Fueron utilizadas para difundir las consignas políticas del “poder popular” en toda la ciudad y demostrar su fuerza, también para denunciar las veleidades de Allende y del Partido Comunista de devolver empresas ocupadas a sus dueños (“plan Prats-Millas”). Los cordones utilizaban regularmente este modo de movilización para inundar la ciudad con sus pancartas y consignas. En cada oportunidad, los organizadores consideraban varios factores, entre los cuales, el principal era lograr reunir la mayor cantidad de personas. Estas protestas urbanas fueron facilitadas por la menor represión social ejercida por el Estado, gracias a la intervención del gobierno socialista, aunque en varias oportunidades los cordones movilizados tuvieron que enfrentar el despliegue policial por parte del intendente de Santiago, exigiendo el despeje de las vías de circulación.

A partir de cálculos realizados en base a una revisión exhaustiva del periódico El Mercurio, son los obreros de los cordones y los pobladores organizados quienes, progresivamente, se convierten en los principales actores de las estrategias callejeras de la izquierda. Entre abril de 1972 y septiembre de 1973, 52% de las manifestaciones se realizan por iniciativa de los obreros de los cordones o de pobladores en lucha, contando así con más “fuerza callejera” que la dirección de los partidos de la

UP

o de la propia

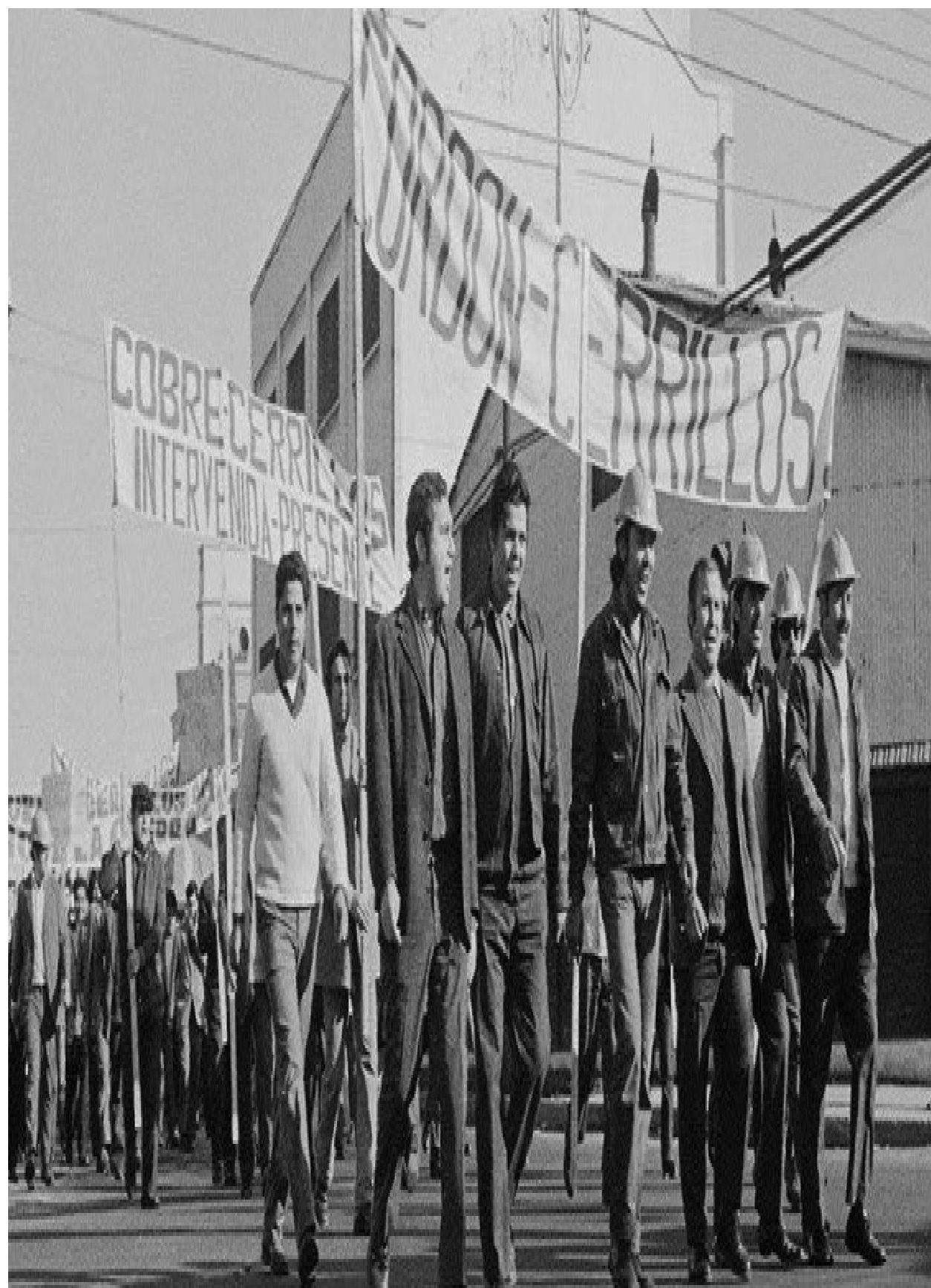
CUT

.<sup>467</sup> Además, los dirigentes de los cordones se preocupaban de que las marchas

fueran ordenadas y compactas, y que eventualmente en primera línea se desplegaran militantes armados de bastones. En la mayoría de estas movilizaciones, el nombre del cordón y las reivindicaciones del “poder popular” aparecían claramente identificados en banderas, lienzos, afiches...

#### IMAGEN 4:

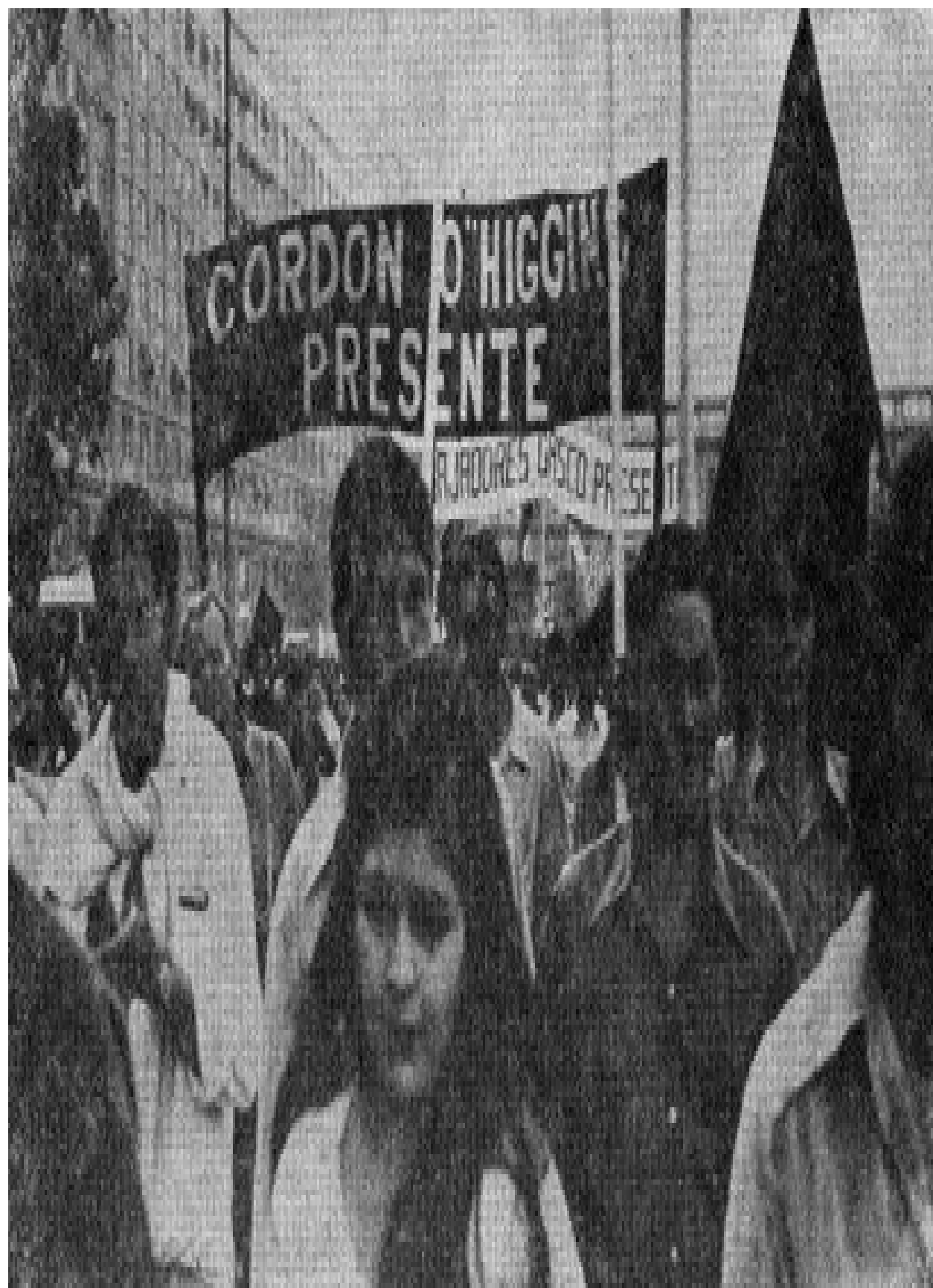
*Movilización del Cordón industrial Cerrillos en Santiago, agosto de 1973*



*Fuente: Chile Hoy, Santiago, N° 62, agosto de 1973 (foto de Armino Cardoso).*

IMAGEN 5:

*Participación en una marcha en el centro de Santiago del Cordón industrial  
O'Higgins (1973)*



*Fuente: Punto Final (suplemento), Santiago, N° 183, mayo de 1973.*

Las instrucciones del

MAPU

hacia sus militantes en ese sentido eran muy precisas: selección de un equipo de conducción de la marcha, formación que se debía adoptar durante esta según la situación política, ubicación de las banderas, etc.<sup>468</sup> Esta geografía del “poder popular” permitía trazar las fronteras físicas, pero también las subjetivas e ideológicas del movimiento. Estas fronteras inscritas en el paisaje urbano formaban una oposición entre un “ellos” y un “nosotros”, reforzando el imaginario de clase y el “espacio vivido” de la ciudad. Por consecuencia, esas políticas del espacio público nacieron de una voluntad de “conquistar la calle”, como lo recuerda Camilo Trumper en su estudio del arte público y político durante la

UP

. Tanto los opositores al proceso revolucionario como sus partidarios, buscaron ocupar y controlar esos territorios en función de sus objetivos políticos, y esto con más fuerza a partir de finales de 1972.<sup>469</sup> Poco a poco, la lucha callejera ya no estaba solo presente en el centro de Santiago, sino también cada vez más en sus periferias, bajo el impulso del “poder popular”:

los pobladores y obreros tomaron conciencia de su poder y de su capacidad para organizar de una manera alternativa la sociedad. Esto se expresó explícitamente a través de las manifestaciones callejeras. Hasta octubre de 1972 la mayoría de las manifestaciones habían sido organizadas en el centro de Santiago, pero a partir de aquel momento se empezaron a organizar en la periferia. Allí, los enfrentamientos con las fuerzas del orden fueron cada vez más frecuentes; las barricadas levantadas obstruían el tráfico en las grandes arterias, donde habían sido construidos los cordones industriales. De esta manera, los manifestantes conseguían aislar el centro de la ciudad, cuestionando así la legitimidad del

poder oficial para controlar la periferia obrera. [...] La periferia de Santiago, por mucho tiempo ignorada, empezó entonces a reivindicar un papel activo en la vida política. La influencia ideológica del

## MIR

era evidente. En los discursos de los obreros y pobladores que participaban en aquellas manifestaciones se distinguían elementos de la concepción mirista del “poder popular”: este tenía que ejercerse a través de órganos locales de poder, cuya construcción debería pasar también por la utilización de una violencia “prerrevolucionaria”.<sup>470</sup>

El colectivo de investigadores de Cartografías de la memoria ha mostrado recientemente como este “espacio de la acción” del “poder popular” creó un “engranaje” entre varios actores (obreros, pobladores, estudiantes, campesinos) y organizaciones movilizadas: cordones industriales,

## JAP

, comandos comunales, sindicatos campesinos (en Maipú en particular), las que van modelando el paisaje urbano político de Santiago entre 1970 y 1973. Así, el mapa 4 destaca el lugar creciente de la acción popular y cómo existió una “tensión espacial centro periferia” entre las acciones desplegadas en los espacios de producción industrial versus los espacios de la autoridad: “En colaboración y disputa, se entrelaza el sistema urbano de relaciones donde los espacios de producción se transformaron en espacio de acción política”.<sup>471</sup>

Frente a esas protestas populares, las y los “de arriba” también se movilizaron, incentivados por el temor a la “amenaza roja”, muy anclado históricamente en Chile (como lo ha mostrado Marcelo Casals).<sup>472</sup> Este anticomunismo y la lucha contrarrevolucionaria de las derechas pasaban también por la movilización callejera de “grupos de choque” cada vez más paramilitarizados. Fue el caso del Comando Rolando Matus, ligado al Partido Nacional, y del Frente Nacionalista Patria y Libertad, de ideología fascista. Los dos son creados en 1971:

El comunismo como peligro para la sociedad chilena, reemplazando el orden por

el odio y la violencia, el marxismo totalitario amenazando las libertades y los derechos del individuo..., fueron los temas desarrollados por Patria y Libertad, e integrados rápidamente en el discurso de la

DC

. La influencia de Patria y Libertad, no solamente se manifestó en el aspecto puramente ideológico, sino que también se dio a conocer en la organización y en el desarrollo de las manifestaciones callejeras conjuntas. A pesar de condenar la violencia en su discurso, los jóvenes militantes de la oposición supieron utilizarla en la calle rápida y eficazmente, tanto en los enfrentamientos con la policía como contra los jóvenes contra-manifestantes de izquierda.<sup>473</sup>

La oposición y la mayoría de los medios de comunicación alimentaron hábilmente una auténtica psicosis sobre un posible cerco de los “barrios altos” y del centro de la ciudad por el “poder popular” y los cordones industriales.

#### IMAGEN 6:

*Declaración del presidente del Senado, Eduardo Frei (*

*DC*

*), en contra del “poder popular”*



Publicado el 18 de octubre de 1973.  
 Precio 100 — Teléfono 8000  
 Calle 21 y V

Edición de 20 páginas

# LA PRENSA

## DE SANTIAGO

Edición • Precios:

Antena ..... P 100

Impresión ..... P 100

Precios de venta, en:

Atacama, Ant y Na

gillón (antes):

Antena ..... P 100

Impresión ..... P 100

Domingo 8 de Julio de 1973

ASO III — N° 100

# "PODER POPULAR" NO ES EL PUEBLO DE CHILE

DECLARACION DE LOS  
 PRESIDENTES DEL  
 SENADO Y LA CAMARA



El presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, lee la declaración del Parlamento sobre las insurrecciones armadas que vive el país. A su lado, el presidente de la Cámara, Ricardo Lata Pardo.

*Fuente: La Prensa, 6 de julio de 1973.*

Creció durante el año 1973, entre las élites y gran parte de las capas medias, especialmente en los barrios del noreste de Santiago, ese odio de clase. Las capacidades de los cordones se consideran gigantescas como “dispositivos de fuerza” a través de los cuales:

el marxismo está en condiciones de ejercer el control sobre medios de producción, sectores residenciales, establecimientos de enseñanza y, en general, sobre toda la actividad ciudadana en el Gran Santiago.<sup>474</sup>

La idea del “copamiento” de las calles por “extremistas” incontrolados es una constante en la prensa conservadora. En su editorial del 5 de agosto de 1973, El Mercurio afirmaba que “la acción de grupos armados continúa, pese a los esfuerzos de los militares por contener esta acción subversiva”.<sup>475</sup> El efecto buscado era claramente aterrorizar a la población, preparando así la legitimación del golpe de Estado. Una convicción que también afectó a los oficiales del Estado Mayor, como relata el general Augusto Pinochet en sus memorias, cuando describe los cordones “de la muerte” (sic).<sup>476</sup> Un vistazo a los mapas podría sugerir que este “cerco” era efectivo (ver mapas 1 y 2). Sin embargo, la imponente presencia de los cordones en el espacio urbano no significaba —de forma mecánica— que encarnaran un fantasmagórico “ejército de los cordones industriales”, como lo quiso hacer creer la dictadura después. De hecho, estamos ante un germen de “poder popular”, que ha tenido muchas dificultades para poner en común su energía colectiva, con una débil coordinación, y que no pudo hacer frente a la violencia del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“UNA DE LAS EXPERIENCIAS MÁS IMPORTANTES DE LA UNIDAD  
POPULAR”

Según la historiadora María Angélica Illanes, el “poder popular” hace:

referencia a una de las experiencias más importantes y exitosas de la Unidad Popular: aquella en la que los trabajadores se construyeron a sí mismos como actores históricos con una fuerte responsabilidad económica y política colectiva dentro del proceso en marcha.<sup>477</sup>

Una dinámica que Peter Winn, por su parte, ha denominado, de forma ciertamente demasiado unilateral pero muy sugestiva, la “revolución desde abajo” de la experiencia chilena. A pesar de la magnitud del fenómeno, esos “poderes populares constituyentes” tuvieron un carácter aún en construcción, aún incierto y muy frágil. Estas movilizaciones y formas de autogobierno desde las empresas y el sindicato, desde las calles y la protesta popular, eran esencialmente defensivas: fue el caso en octubre de 1972 y, de nuevo, en junio de 1973, durante el “tancazo”, esbozo de asonada militar (apagado por la decisiva reacción del general legalista Carlos Prats). La coordinación de los cordones a escala de la Región Metropolitana en 1973 encarnó sobre todo una superestructura dirigida por ciertos sindicalistas de izquierda, y no una organización democrática masiva, nacida del control obrero y de asambleas de trabajadores organizados. Acusándolos de “paralelismo”, la

CUT

, al igual que el

PC

, pretendió frenar activamente su constitución, rechazando cualquier “creación de un poder alternativo al gobierno”. En cuanto al

PS

, en busca de una síntesis imposible, reconoció a los cordones industriales como “poder popular alternativo a las instituciones burguesas, pero no al gobierno”.

Para entender su posicionamiento, es interesante citar un extracto de la “Declaración de la Coordinación provincial de los Cordones industriales de Santiago” de julio de 1973:

Los cordones se plantean el problema del Poder y la constitución de las organizaciones gérmenes del Poder Popular (Comandos Comunales de Trabajadores) por lo que requieren de la autonomía necesaria para cumplir el papel de conductor de los diferentes sectores sociales aliados del proletariado en la lucha por el socialismo. [...] Los cordones industriales son organismos amplios de la clase que agrupan y organizan a los trabajadores por encima de sus colores políticos. La conducción política estará dada por los partidos proletarios que asumen el papel de vanguardia en la lucha misma y en el seno de la clase obrera. [...] Los objetivos generales de los cordones industriales son:

- a. Defensa y ampliación de las conquistas del gobierno y de la clase.
- b. Representar en forma directa y democrática a los trabajadores del cordón.
- c. Constituirse en organismos de defensa del actual gobierno en la misma medida que este represente los intereses de los trabajadores.
- d. Organismos encargados de la profundización del proceso y de la agudización de las contradicciones de clase.
- e. Luchar en forma enérgica por una mayor participación de la clase en las decisiones inherentes a sus intereses e incrementar el poder de los sindicatos y de las organizaciones de la clase.
- f. Cooperar en forma decisiva en la organización y preparación de los organismos de defensa del sector de tal manera que garanticen el control territorial y político por parte de la clase.<sup>478</sup>

La distancia entre Allende y el “poder popular” se acentuó a medida que la política de transición legalista de la

pareció haber entrado en un callejón sin salida. A partir de enero de 1973, los cordones se opusieron al proyecto del ministro comunista Orlando Millas y del general Prats (nombrado ministro por Allende), que exigía que las empresas “no estratégicas” fueran devueltas a sus propietarios, para no aumentar las dificultades del gobierno.

A lo largo de 1973, las Fuerzas Armadas, lejos de ser una fuerza neutral o “constitucionalista” como lo rezaba la izquierda parlamentaria, comenzaron su labor de represión. Aprovechando una ley aprobada por el Parlamento sobre “control de armas” —rápidamente llamada “ley maldita”—, los militares intervinieron violentamente en las fábricas y en los cordones y evaluaron la resistencia.<sup>479</sup> Al mismo tiempo, se reprimían las denuncias de los marinos de Valparaíso que habían detectado la preparación del golpe. Para completar la embestida, el 23 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acusación constitucional en contra del gobierno por haber sobrepasado sus atribuciones. Este texto que sirvió después para “justificar” en un plano institucional el golpe militar, denunciaba explícitamente el “llamado ‘poder popular’, cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria”.<sup>480</sup>

El 9 de agosto, Allende ya sin ningún margen de maniobra legal, pero siempre hostil a buscar una salida político-militar al enfrentamiento de clases (así como lo reclamaba el

MIR

), formó un nuevo gabinete cívico-militar, mientras preparaba un llamado a referéndum y a Asamblea constituyente. La sedición militar no le dejó tiempo para esta última jugada democrática. El 23 de ese mismo mes había designado comandante en jefe al general Pinochet, en reemplazo del renunciante Carlos Prats. El día 11 de septiembre, al igual que algunos barrios populares, los territorios de los cordones industriales fueron escenario de varios enfrentamientos, a pesar de la falta de preparación político-militar por parte de la izquierda y de la ausencia casi total de medios sustanciales de autodefensa. Después del bombardeo de La Moneda (y de la muerte del Presidente), los trabajadores de varias fábricas esperaron ese día durante horas consignas y armas para organizar la resistencia. Fue en vano. En las calles de la población La Legua, y en particular entre las empresas Indumet y Sumar, se desarrollaron varios escenarios de confrontaciones entre fuerzas policiales y militares contra

grupos de trabajadores y militantes armados de las fuerzas centrales del

PS

y del

MIR

.<sup>481</sup>

En este capítulo hemos tratado de recordar cómo los cordones industriales intentaron articular formas de auto-organización, control obrero, democracia asamblearia y lucha callejera en alianza con varios actores sociales del pueblo chileno. La protesta popular y el conflicto de clase estaban así claramente situados en la geografía urbana de Santiago: el “poder popular” también fue poder local y territorial. Se configuraron territorios para el movimiento obrero, es decir, espacios no solo de lucha sino en lucha, donde la acción colectiva se realizó por y para el territorio de lo popular y de las periferias de la capital. Asimismo, a los procesos de cuestionamiento de las dominaciones sociales, de las relaciones entre los movimientos sociales y el campo político, hay que añadir, por lo tanto, una ruptura de las jerarquías y segmentaciones espaciales, que hasta entonces estructuraban la ciudad, sus representaciones y sus desigualdades. Esta apropiación “desde abajo” apareció claramente a través de las diversas acciones y repertorios puestos en marcha por los cordones, y facilitaron la aparición de nuevas experimentaciones y sociabilidades populares.<sup>482</sup> Estas luchas y su territorialidad son características de este “espacio en disputa” que fue Santiago durante los mil días de la

UP

.

En lo que se refiere a las dinámicas de movilización de los cordones se inscribieron finalmente dentro de un repertorio de acción bastante clásico de la era del capitalismo industrial: el “modelo nacional autónomo de la acción colectiva” según la categorización de Tilly.<sup>483</sup> Es decir, el uso de la mayoría de las herramientas colectivas tradicionales de la clase obrera industrial organizada del siglo

XX

: manifestaciones, huelgas, petitorios, bloqueo de caminos, llamado a control obrero... El instrumento de la huelga fue central en esas acciones y se articuló con otros tipos de luchas colectivas. Entre ellos, destacan diversas estrategias de luchas callejeras: manifestaciones, desfiles, barricadas y bloqueo de caminos. La toma de fábricas (a veces incluso manteniendo la producción) fue una de la “gama” mayor de esas movilizaciones obreras, con las asambleas sindicales o el involucramiento en diversas formas de abastecimiento directo en los momentos de crisis y boicot económico.

Estos territorios apropiados, esas formas de auto-organización, sociales y espaciales como esas diversas luchas y protestas callejeras, fueron desplegados por una fracción de la clase obrera y de los sectores populares en nombre de la defensa del proceso revolucionario socialista, reivindicando el derecho a soñar en un mundo sin opresión capitalista ni dominación imperial. Si las y los obreros, las y los sindicalistas fueron los primeros blancos de la represión pinochetista se debió esencialmente a esta razón. Al fin y al cabo, si el “poder popular” y los cordones industriales quedan hoy en la memoria de millones de latinoamericanos fue por ese fulgor revolucionario. Una estrella fugaz que supieron encender miles de trabajadores entre 1972 y 1973 y que sigue brillando hasta hoy, contra vientos y mareas.

#### MAPA 1:

*Cordones industriales y campamentos en Santiago – 1973*

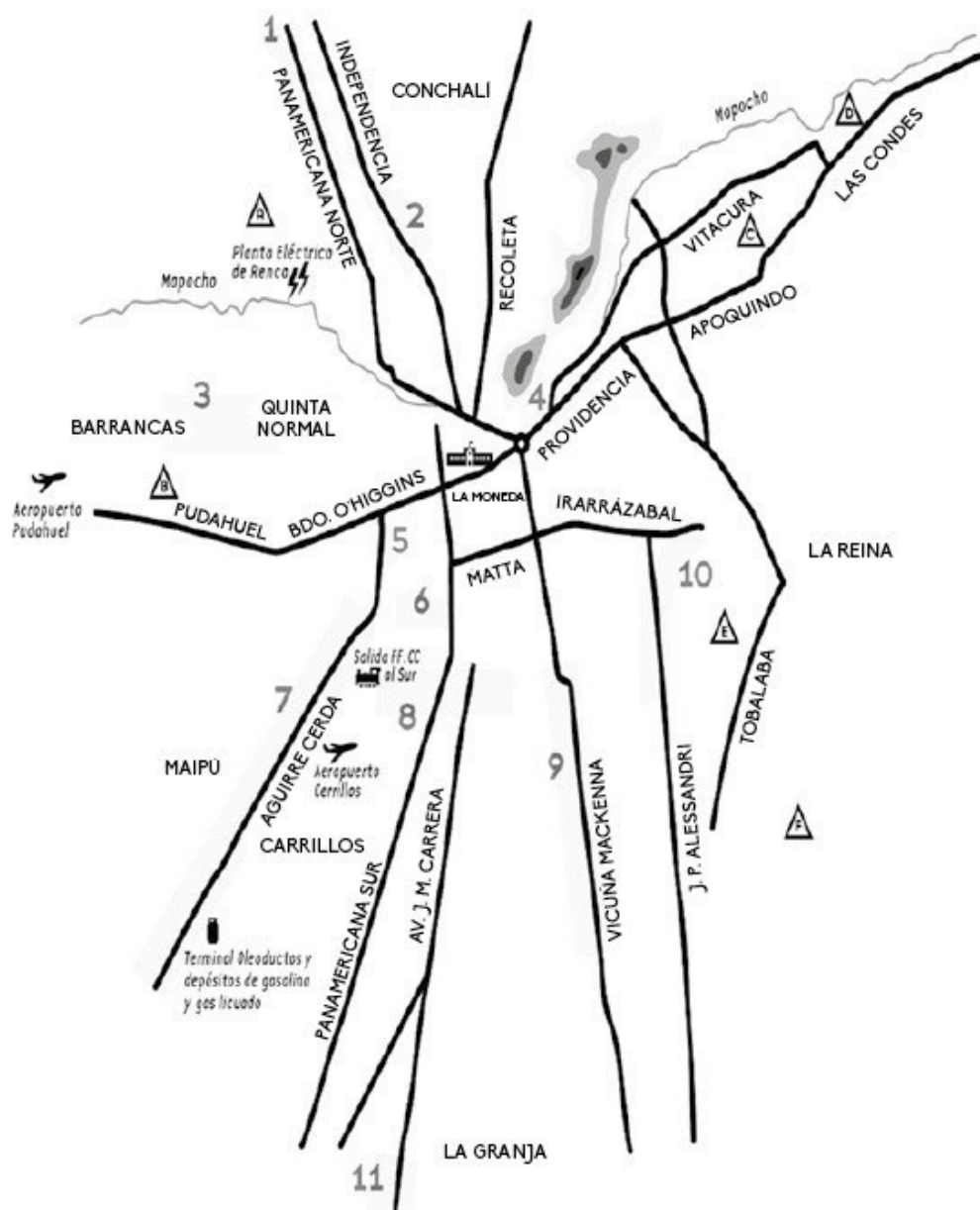




*Fuente: Archivo personal de René Urbina (director del Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Chile entre 1970 y 1973), publicado en Gaudichaud, Franck, Chile 1970-1973, op. cit., p. 465.*

## MAPA 2:

*Geografía esquemática del “poder popular” en Santiago – 1973*



#### CORDONES INDUSTRIALES

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1.- Panamericana Norte        | 7.- Cerrillos             |
| 2.- Conchalí                  | 8.- San Miguel            |
| 3.- Barrancas - Quinta Normal | 9.- Vicuña Mackenna       |
| 4.- Mapocho - Cordillera      | 10.- Macul - Nunoa Centro |
| 5.- Estación Central          | 11.- San Bernardo         |
| 6.- Parque O'Higgins          |                           |

#### CAMPAMENTOS

- △ Renca (Blanca Vergara, 1º de mayo, José Tohá)
- △ Pudahuel (O'Higgins)
- △ Av. Kennedy (Ho Chi Minh)
- △ Las Condes (Fidel- Ernesto, Luciano Cruz)
- △ Lo Hermida
- △ La Florida (Nueva La Habana)

*Fuente: Adaptado de la revista Qué Pasa (Santiago, N° 104, 12 de abril de 1973), publicado en Gaudichaud, Franck, Chile 1970-1973, op. cit., p. 466.*

### MAPA 3:

*Geografía del Cordón Industrial Cerrillos-Maipú – 1973*

# COMUNA DE MAIPÚ

--- LÍMITE COMUNA

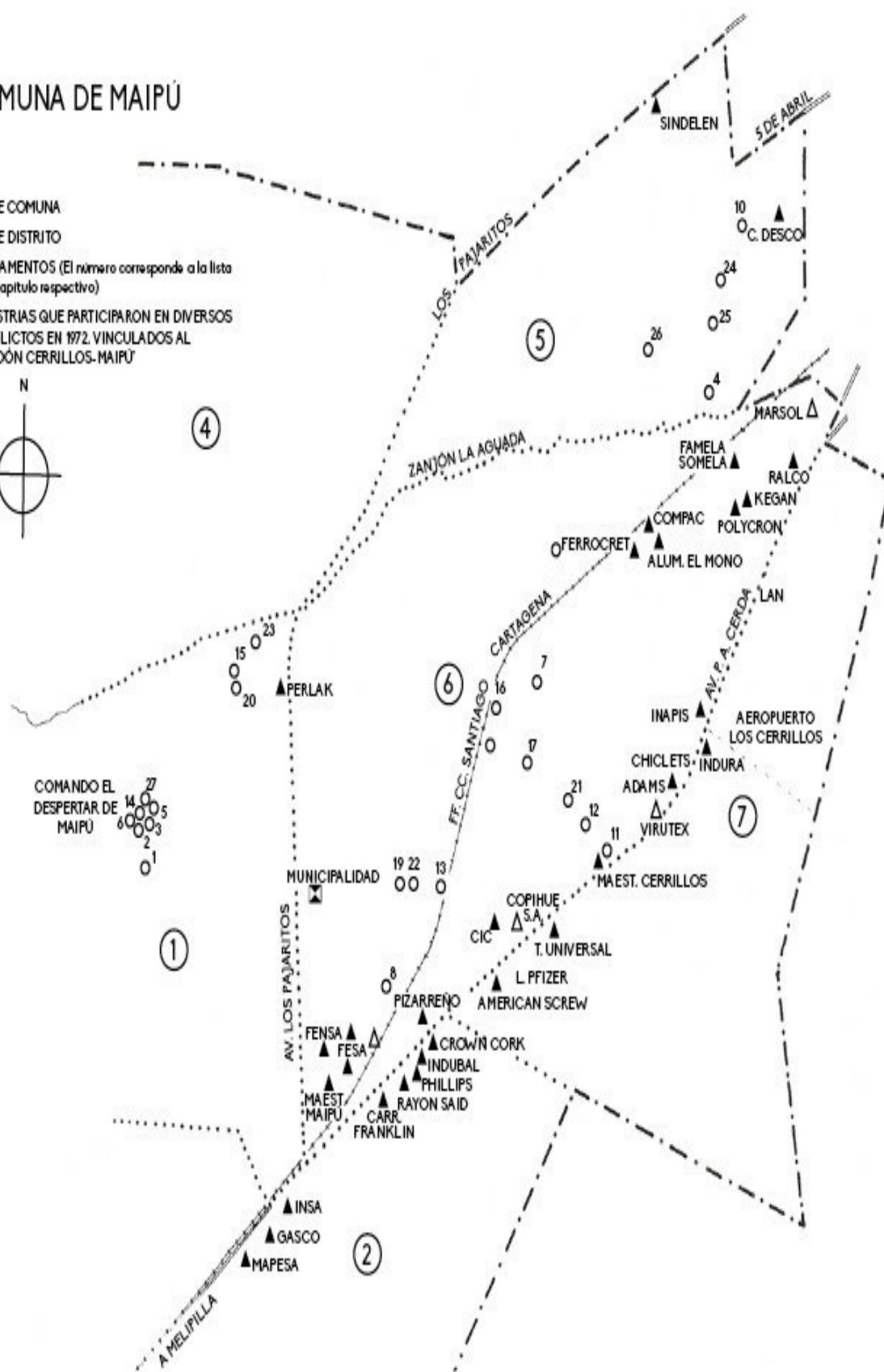
.... LÍMITE DISTRITO



CAMPAMENTOS (El número corresponde a la lista en el capítulo respectivo)



INDUSTRIAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSOS CONFLICTOS EN 1972, VINCULADOS AL 'CORDÓN CERRILLOS-MAIPÚ'



*Fuente: Cordero, C.; Sader, E.; Threlfall, M., Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú:1972, op. cit.*

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Auyero, Javier, “L’espace des luttes. Topographie des mobilisations collectives”, en Actes de la recherche en sciences sociales, N° 160, 2005, pp. 122-132.

Austin, Robert; Salém, Joana y Canibilo, Viviana (comp.), La vía chilena al socialismo. 50 años después,

CLACSO

– Ocho Libros, Buenos Aires, 2020.

Cancino, Hugo, La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-1973, Aarhus University Press, Aarhus, 1988.

Castillo, Sandra, Cordones Industriales. Nuevas formas de sociabilidad obrera y organización política popular (Chile 1970-1973), Escaparate, Concepción, 2009.

Cartografías de la memoria, Utopías y terror en Santiago de Chile, 1970-1976, Santiago, 2019.

Casals A., Marcelo, La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campana del terror” de 1964,

LOM

, Santiago, 2016.

Castells, Manuel, La lucha de clases en Chile, Siglo 21 Editores, Buenos Aires, 1974.

Cofré, Boris, Campamento Nueva La Habana: el

*MIR*

*y el movimiento de pobladores: 1970-1973, Escaparate, Concepción, 2007.*

Cordero, María Cristina; Sader, Eder; Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú: 1972. Balance y perspectivas de un embrión de poder popular,

CIDU

, Documento de trabajo N° 67, Santiago, agosto de 1973.

Corvalán M., Luis, Los partidos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico, Cesoc, Santiago, 2000.

Cruz Salas, Luis, “Estado, partidos y movimiento obrero”, en Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende, Pinochet, Ed. ChileAmérica – Cesoc, Santiago, 1999, pp. 393-394.

Espinoza, Juan G.; Zimbalist, Andrew, Democracia económica. La participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973, Fondo de Cultura Económica, México, 1984.

Farías, Víctor (comp.), La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica,

CEP

, Berlín, 6 tomos, 2000-2001.

Fillieule, Olivier, Stratégies de la rue: manifestations en France, Presses de Sciences Po, París, 1997.

Garcés, Mario, El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular, 1970-1973,

LOM

, Santiago, 2015.

Garcés, Joan, Allende y la experiencia chilena, Ariel, Barcelona, 1976.

, El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, Siglo XXI,

México, 1974.

Gaudichaud, Franck, “Una fuerza popular latente. La comuna de Maipú y los orígenes de Cordón Industrial Cerrillos (Santiago de Chile)”, en Boletín

CLACSO

*Izquierda: teoría y praxis, Año 2, Número 1, noviembre 2020, pp. 20-33.*  
*Disponible en: [www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V2\\_Izquierda-teoria-y-praxis\\_N2-1.pdf](http://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V2_Izquierda-teoria-y-praxis_N2-1.pdf)*

, Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo, LOM, Santiago, 2016.

, “Quand l’État chilien se proposait de construire la démocratie économique. Nationalisations, Aire de propriété sociale et système de participation des salariés durant l’Unité populaire (1970-1973)”, en *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM*, 28, 2014, 5 diciembre 2014. Disponible en: <http://journals.openedition.org/alhim/5084>

, Poder popular y cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano 1970-1973, LOM-Dibam, Santiago, 2004.

González M., Marco, “El tiempo del espacio disputado. Santiago de Chile durante la Unidad Popular”, en *Revista Izquierdas*, N° 50, 202. Disponible en: <http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2021/n50/dossier1.pdf>

Guzmán, Patricio, *La Batalla de Chile*, Chile/Cuba/Venezuela, 1975-1979.

Henríquez G., Renzo, *El poder del campo. Los campesinos de Maipú durante el gobierno de Allende*, Ediciones Londres 38, Santiago, 2015.

Illanes, María Angélica, *La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Chile, 1900-2000*, Planeta, Santiago, 2002.



Kornbluh, Peter, *The Pinochet File. A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*, New Press, New York, 1989.

Lefebvre, Henri, *La production de l'espace*, Anthropos, París, 1974.

Mattelart, Armand, "La bourgeoisie à l'école de Lénine", en *Politique aujourd'hui*, París, enero-febrero de 1974, pp. 23-46.

Orellana V., Paola, *Clotario Blest en la*

*CUT*

*: por la democracia de los trabajadores, América en Movimiento, Santiago, 2018.*

Palieraki, Eugenia, "Las manifestaciones callejeras y la experiencia de la Unidad Popular (1970-1973). Una interpretación a partir de la violencia política en las calles de Santiago", en *Pensamiento Crítico*, N°3, 2003.

, *Manifestations de rues à Santiago durant l'Unité populaire*, Mémoire de maîtrise d'histoire Université Paris I-La Sorbonne, 2001.

Power, Margaret, *La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973*, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Dibam, Santiago, 2008.

Pinochet, Augusto, *El día decisivo*, Andrés Bello, Santiago, 1980.

Pinto, Julio (ed.), *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*,

LOM

, Santiago, 2005.

, *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular*, LOM, Santiago, 2014.

Salazar, Gabriel, *Violencia política popular en las "grandes alamedas"*, Santiago:

1947-1987,

LOM

, Santiago, 2006.

Samaniego M., Augusto, “Octubre al rojo: fulgor y agonía de la unidad de los trabajadores”, en Contribuciones científicas y tecnológicas, Santiago, Usach, Área de Ciencias Sociales y Humanidades, N° 130, abril de 2002, pp. 1-22.

, Unidad sindical desde la base. La Central Única de Trabajadores, Chile 1953 – 1973, Ariadna, Santiago, 2016.

Trumper, Camilo, A ganar la calle. The Politics of Public Space and Public Art in Santiago Chile (1970-1973), PhD of philosophy in history, University of California, Berkeley, 2008.

Tilly, Charles; Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, Presses de Sciences Po, Paris, 2008.

, La France conteste de 1600 à nos jours, Fayard, Paris, 1986.

Vidaurrázaga M., Ignacio, Martes once. La primera resistencia,

LOM

, Santiago, 2013.

Winn, Peter, Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo,

LOM

, Santiago, 2004.

, La revolución chilena, LOM, Santiago, 2013.

\* Catedrático en Historia de América Latina contemporánea en la Universidad  
Toulouse Jean Jaurès.

## TERCERA PARTE

INSTAURACIÓN, DESPLIEGUE Y CRISIS DEL NEOLIBERALISMO, 1973-2019.

DIVERSIFICACIÓN Y RADICALIDAD EN LAS FORMAS DE LUCHA

## **IX. TODOS JUNTOS Y AL MISMO TIEMPO CONTRA LA DICTADURA DE PINOCHET. EL PARO NACIONAL DEL 2 Y 3 DE JULIO DE 1986**

CLAUDIO PÉREZ SILVA\*

Sin duda, el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986 fue la jornada de movilización más importante y característica en cuanto a formas de protesta popular desplegadas en contra de la dictadura de Pinochet. Primero, por su masividad, radicalidad y combatividad, por la diversidad de formas de lucha desplegadas en todo el país, así como por la multiplicidad de actores sociales y políticos involucrados y los imbricados niveles de organización y articulación nacional logrados. Segundo, por la cruenta represión desatada por el conjunto de los cuerpos represivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Por último, por las trascendentales consecuencias políticas que tuvo dicha jornada para fijar los contornos de la denominada transición democrática chilena, que implicó la participación e intervención directa del Departamento de Estado Norteamericano en el apuntalamiento de la salida negociada y pactada entre un sector de la oposición y la dictadura, así como la subsecuente derrota para la izquierda chilena que apostaba por la salida popular y el fin del régimen.

Por ello, en este capítulo hemos decidido caracterizar y analizar las principales dinámicas, escenarios y actores involucrados en dicha jornada de paralización, destacando en particular la participación de la clase trabajadora chilena y los sectores populares.

En cuanto a las jornadas de protesta y paros nacionales en contra de la dictadura, estas se presentaron con fuerza desde mayo de 1983 hasta 1987. Diversos factores se conjugaron en la trama que posibilitó la emergencia e irradiación del descontento popular en contra de Pinochet. Por una parte, la grave crisis económica que afectó a Chile entre los años 1981 y 1983, la cual golpeó fuertemente a la clase trabajadora, al amplio segmento de la población desempleada y, sobre todo, a los sectores populares más empobrecidos producto

de la implementación del modelo neoliberal. Dicha crisis, la más grave desde los efectos desastrosos de la crisis mundial de 1929, trajo consigo la quiebra de empresas, un aumento significativo de la inflación, la caída del

PIB

y la tasa de crecimiento, siendo las áreas más afectadas las de industria (-21%) y construcción (-23,4%). El milagro económico chileno se desvanecía con cifras de cesantía que superaban el 30% durante el año 1983 y la insolvencia de la banca.<sup>484</sup>

Un segundo factor dice relación con el proceso de recomposición experimentado por el movimiento popular y la izquierda chilena desde fines de la década del 70. A pesar del intenso y cruento ciclo represivo inaugurado por la dictadura desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que afectó fundamentalmente a la militancia de los partidos de izquierda, a la clase trabajadora organizada y las diversas expresiones del movimiento popular, la política represiva y contrainsurgente no logró completamente su objetivo de “extirpar el cáncer marxista” y terminar con el estrecho vínculo, construido al calor de las luchas sociales, entre las dinámicas y reivindicaciones de la clase trabajadora y los sectores populares organizados y la trayectoria y experiencia de la izquierda chilena. Por ello, es posible identificar un rearme, desde 1978 en adelante, por parte de las distintas estructuras partidarias que fueron fuertemente golpeadas por la represión, lo que posibilitó el reingreso de manera clandestina a Chile de importantes cuadros dirigentes para asumir las labores de reconstrucción partidaria, salir de la sobrevivencia y concretizar las tareas relativas a la lucha en contra de la dictadura. Del mismo modo, se produce la reanimación de diversas expresiones del movimiento popular a nivel de base social poblacional y adquieren un importante protagonismo las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, las que, a través de la ocupación del espacio público, comenzaron a denunciar la situación que se vivía en Chile, principalmente en torno a la problemática de los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, el exilio, la tortura y la política sistemática de violación de derechos humanos por parte de la dictadura.

Dicho proceso de reanimación política y rearticulación social, caracterizado por el levantamiento de reivindicaciones y luchas sectoriales, marchas del hambre, las llamadas acciones audaces y sabotajes menores desplegados por las organizaciones de izquierda entre 1978 y 1982, se transformó en una importante

experiencia y en un vertiginoso proceso de acumulación de fuerzas para el conjunto del movimiento popular y las distintas vertientes de la oposición. Será justamente en el escenario político abierto por el alargue e institucionalización de la dictadura a partir del establecimiento de la Constitución de 1980, así como por los graves efectos de la crisis económica en curso, donde dichas experiencias acumuladas se conjugarán con el malestar generalizado de la población en contra de la dictadura, inaugurando con ello el ciclo de movilizaciones y protestas populares que irrumpió con fuerza desde 1983.

Si bien suele situarse la jornada de protesta del 11 de mayo de 1983 como el inicio del ciclo de movilizaciones, debemos señalar que dichas manifestaciones arrancaron mucho antes, aunque no con el nivel de articulación, combatividad, masividad y radicalidad que alcanzaron las jornadas desde mayo del 83 en adelante.<sup>485</sup> A fines de la década del 70 se presentaron numerosas movilizaciones de las agrupaciones de derechos humanos al alero de la Iglesia católica, del mundo de los trabajadores en contra del plan laboral de la dictadura, así como una importante reactivación de las expresiones artísticas culturales y de los sectores poblacionales y estudiantiles, principalmente universitarios. Lo anterior dio paso al levantamiento de demandas y luchas sectoriales que se tradujeron, entre otras cosas, en tomas de terrenos por parte de los pobladores y en un incremento de huelgas y movilizaciones en lo tocante a los trabajadores.

Por otro lado, se produce una intensificación del accionar de las organizaciones de izquierda a través de numerosas acciones de sabotaje menores y mayores en contra de la infraestructura económica y los cuerpos de seguridad de la dictadura. En la misma línea, existe un incremento y una cualificación de las convocatorias para manifestarse masiva y públicamente en contra del régimen, principalmente por parte de los sectores de izquierda que no aceptaban el itinerario impuesto por la dictadura para el proceso transicional. Reflejo de lo anterior son los llamados a las “marchas del hambre” realizadas durante 1982, las cuales tuvieron mayor desarrollo en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. Según el Partido Comunista de Chile (

PCC

h), durante ese año, la lucha de masas se había incrementado notablemente, demostrando “que el estado de ánimo del pueblo” no era “de abatimiento sino, muy por el contrario”, de “disposición de lucha”, de búsqueda de unidad y coordinación en el combate, de pérdida del miedo, donde abundaban “las



iniciativas de guerra psicológica, los chistes, los rumores, las denuncias, los petitorios, las presiones desde la base hacia las cúpulas sindicales”<sup>486</sup> tendientes a profundizar la lucha antidictatorial. En la misma línea de análisis y resaltando el aumento y las distintas formas que asumía la lucha contra el régimen, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (

## MIR

), a propósito de la huelga ilegal protagonizada por los trabajadores de la Celulosa Arauco y la agitación que generó esta entre los trabajadores del carbón en septiembre de 1982, señalaba que dichas formas de protesta, “así como las tomas de terrenos y las marchas contra el hambre”, tenían “raíces profundas en el movimiento de masas” y que en el contexto de la lucha contra la dictadura, estaban determinadas “por la agresión al nivel de vida de las masas que comete la dictadura militar mediante la cesantía, la rebaja de sueldos y el proceso inflacionario”. En base a lo anterior, vaticinaban que “la lucha contra el hambre y la opresión, no tenderá a decaer sino que, por el contrario, tenderá a multiplicarse”.<sup>487</sup>

En cuanto a las “marchas del hambre”, estas tomaron protagonismo durante 1982 y se desplegaron en diferentes ciudades del país. De acuerdo a una evaluación del

## PCC

h, la marcha del 19 de agosto había “sido la manifestación pública más concurrida y combativa de los últimos años”, la cual “obligó a las fuerzas represivas al uso de bombas lacrimógenas en toda el área central de Santiago”, donde miles de manifestantes ocuparon calles, levantaron “consignas, estribillos y volantes”, se enfrentaron “con las fuerzas policiales” y desarrollaron “acciones diversionistas en Estación Central (trenes) y estaciones del metro donde se colocaron bombas de humo”. Del mismo modo, agregan, se produjeron “tacos de tránsito y el saludo con bocinazos de los taxistas”, contando con “la simpatía de transeúntes y comerciantes”.<sup>488</sup> Según estos, la preparación de la jornada había implicado un importante esfuerzo orgánico en función de incorporar a la mayor cantidad de sectores sociales a la convocatoria. Lo anterior habría permitido la participación de diversos actores, “incluida la iglesia, quienes, a través de sus relaciones con los trabajadores, contribuyeron al éxito de esta jornada”.

Posteriormente, el 30 de septiembre se desarrolló otra “marcha del hambre”. La dinámica de la protesta se dio a través de la ocupación del espacio público y la lucha callejera, enfrentamientos con los cuerpos represivos de la dictadura, acciones de sabotaje como quemas de buses de locomoción colectiva y marchas por las principales arterias de las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. A juicio del

PCC

h, lo llamativo de esta jornada fue el incremento de la represión a las manifestaciones y el masivo lanzamiento de “panfletos llamando a preparar el Paro Nacional” en contra de la dictadura.<sup>489</sup>

Posteriormente, en Valparaíso, cerca de un millar de personas se congregó el 27 de octubre en torno a “una marcha contra el hambre y la opresión y por la defensa del principal puerto del país”. En ella participaron “trabajadores, estudiantes, cesantes, dueñas de casa y pobladores”, quienes, según la revista El Rebelde, a través de gritos, lanzamiento de volantes y consignas, “notificaron a la dictadura que los porteños” estaban “firmes en la lucha por la dignidad y el trabajo”. De igual forma, destaca la serie de manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron con las fuerzas policiales durante el 18 de noviembre en la sureña ciudad de Concepción. En la mañana, precisan, los estudiantes protestaron en el “barrio universitario con marchas y gritos contra los abusos económicos y represivos”. Por la tarde, “se realizaron varias marchas del hambre en el centro de Concepción y se tiraron volantes atacando a la dictadura”. De manera simultánea, agregan, “varias bombas explotaron en distintos puntos de la ciudad”.<sup>490</sup>

INVITACION

# CONCURRE AL CENTRO A LA PROTESTA MASIVA CONTRA LA TIRANIA DE PINOCHET

**JUEVES**

**24**

**MARZO**

**19 HRS.**

**¡FIN A LA DEBACLE!**

**¡TODOS UNIDOS AL COMBATE! POR:**

- Reajuste salarios
- Fin cesantía
- Respeto a los Derechos Humanos
- Disolución CNI
- Retorno exiliados

**¡DEMOCRACIA AHORA!**

**¡1983 SIN PINOCHET!**

## JORNADA NACIONAL DE PROTESTA CONTRA PINOCHET

Las experiencias de luchas y los incipientes niveles de reorganización social y política de la oposición logrados durante el año 1982 hicieron que las dinámicas de conflictividad continuaran con más fuerza en 1983. Lo anterior se tradujo en una convocatoria a una jornada nacional de protesta contra Pinochet para el jueves 24 de marzo, la cual se convirtió en una especie de preámbulo o introducción al ciclo de protestas, movilizaciones y paros nacionales que se desarrolló en contra de la dictadura. El llamado a protestar conjugaba la diversidad de problemáticas que afectaban a la población chilena desde el punto de vista político, económico y social, denotando ya, para inicios de 1983, una importante articulación de la oposición y el campo popular en cuanto al establecimiento de las principales demandas por las cuales se lanzarían a la calle para exigir “El fin a la debacle” del régimen y la “tiranía de Pinochet”. Así, entre el llamado a entrar “¡Todos unidos al combate!” y la consigna “¡Democracia Ahora!” y “¡1983 sin Pinochet!”, destacaban las siguientes reivindicaciones: “Reajuste salarios”, “Fin cesantía”, “Respeto a los derechos humanos”, “Disolución de

CNI

”<sup>491</sup> y “Retorno exiliados”.<sup>492</sup>

## LA IRRUPCIÓN DE LAS PROTESTAS Y EL DESARROLLO DE TODAS LAS FORMAS DE LUCHA

Como vemos, tanto las diversas expresiones del movimiento popular como de la oposición a la dictadura llegaron a la denominada primera jornada de protesta nacional del 11 de mayo de 1983 con un importante capital político-social y múltiples experiencias de organización y lucha, expresadas en “ollas comunes”, “marchas del hambre” en las principales ciudades del país, manifestaciones estudiantiles, actos artísticos culturales, ocupaciones del espacio público, sabotajes, asambleas populares, tomas de terreno, bombazos, huelgas de trabajadores vinculados a las políticas de empleo levantadas por la dictadura para paliar la cesantía (Programa de Empleo Mínimo,

PEM

, y Programa de Ocupación para Jefes de Hogar,

POJH

), numerosas movilizaciones sectoriales y una protesta nacional previa, en marzo del mismo año.

La convocatoria para la protesta del 11 de mayo de 1983 tuvo como protagonista al mundo sindical que ya daba muestras de reanimación y rearticulación. El llamado fue realizado específicamente por la Confederación de los Trabajadores del Cobre (

CTC

). En el camino, distintas expresiones sindicales, sociales y políticas acompañaron la citación a movilizarse, lo que significó desde el punto de vista político y coyuntural, un cambio importante en la correlación de fuerzas en el conjunto de la oposición a la dictadura. Por otra parte, el arraigo de la convocatoria en diversos actores de la sociedad chilena (trabajadores, pobladores, juventud, mujeres), en los partidos políticos y las organizaciones populares que emergieron desde fines de la década del 70 y en el contexto de la grave crisis económica que afectaba al país, así como las experiencias de lucha desarrolladas previamente por el movimiento popular, hizo que aquella primera jornada de protesta se manifestara de forma radical, masiva y con despliegue en algunas de las ciudades más importantes del país. La potencia de aquella protesta no solo sorprendió a la dictadura, sino también a los convocantes, inaugurando con ello un nuevo ciclo político y de conflictividad social, el cual se caracterizó por la recurrencia de las protestas nacionales, los crecientes niveles de participación y violencia política protagonizadas por un amplio abanico del movimiento popular y sectores de la izquierda chilena. La dinámica anterior trajo consigo la reconfiguración del campo de fuerzas sociales y políticas de la oposición, en el marco de las propuestas y estrategias de lucha desplegadas en contra de la dictadura.

La sorpresa por tanto no está en la convocatoria, sino en la masividad, multiplicidad de formas de lucha y radicalidad que adquirió la jornada de protesta, así como en los actores protagónicos y los escenarios donde se desplegó o expresó esta.<sup>493</sup> Según Viviana Bravo, durante el día, “en algunos

lugares de trabajo hubo paros parciales, asambleas, los comedores se vieron desocupados, y el trabajo fue más lento... el ausentismo escolar superó el 70% como promedio, bajaron las ventas del comercio y disminuyó la locomoción colectiva. También hubo asambleas, actos culturales y manifestaciones en campus universitarios, donde comenzaron los arrestos”.<sup>494</sup> No obstante, la masividad y combatividad de la protesta fue tomando fuerza al caer la noche en las principales poblaciones periféricas y populares de Santiago, la que vino acompañada de saqueos a locales comerciales, oficinas públicas, supermercados y masivos enfrentamientos con las fuerzas represivas.

A juicio del

PCC

h, “fue en las poblaciones donde la protesta alcanzó niveles mucho mayores, tanto desde el punto de vista de la participación de masas como en la combatividad”.<sup>495</sup> Lo anterior lo podemos graficar a partir del relato de un militante comunista que da cuenta de dichas expresiones de lucha y, sobre todo, de los niveles de organización alcanzados antes de la protesta convocada para el 11 de mayo. Según relata, en las poblaciones La Legua y Aníbal Pinto, en la zona sur de Santiago, a través de la realización de asambleas, las diversas organizaciones de base del sector decidieron constituir comandos de protesta y llamar públicamente a los pobladores a ser parte del proceso. Para ello, recorrieron las poblaciones rayando muros y lanzando volantes en las industrias localizadas alrededor. De igual modo, se crearon talleres “para fabricar miguelitos” y repartieron “propaganda mano por mano a los comerciantes y público en las ferias y comercio establecido”.<sup>496</sup>

Al respecto, creemos que la dinámica previa de articulación alcanzada entre diversos actores sociales y políticos presentes en los territorios y la existencia de orientaciones generales en el marco de una convocatoria nacional a protestar, son elementos centrales para explicar la masividad y energía de la movilización en algunos sectores de Santiago. Bajo este contexto, podemos inscribir la antesala de la protesta, donde fueron lanzados miguelitos la noche anterior, se bloquearon algunas calles fugazmente y se cortó la electricidad producto del lanzamiento de cadenas al alambrado público (cadenazos). Durante la jornada, se levantaron cientos de barricadas donde se aglutinaron los participantes, quienes interrumpieron el tráfico y la llegada de los cuerpos represivos. La imagen de la barricada quedó en la retina de muchos y pasó a ser un elemento característico

de cada protesta, al iluminar esquinas y avenidas producto de los cortes de luz provocados por cadenas, y por acompañar a decenas de personas que se aglutinaban alrededor de ellas al son del ruido de cacerolas y cánticos en contra de la dictadura.

Al respecto, el testimonio del militante comunista es decidor respecto de la dinámica que adquirió la protesta, particularmente en los sectores populares. Según señala, la jornada partió en la madrugada, desde muy temprano. A eso de las 05:30 horas se congregaron diversos piquetes de pobladores para lanzar miguelitos en las principales arterias en el sector de La Legua. En estas acciones, precisa, “los que participan son militantes de izquierda y gente sin partido”.<sup>497</sup> Posteriormente, a eso de las 09:00 horas, se levantan las primeras barricadas y se “apedrean micros y liebres”<sup>498</sup> en la esquina de Pedro Alarcón con Santa Rosa, las cuales no acataron el llamado a protesta. En la tarde, indica, a partir de las 18:30 horas, comenzaron “a tomar posición las fuerzas populares, compuestas por combatientes de los organismos de masas, y dirigidos por militantes” realizando barricadas en varios lugares de la población y en donde aparecen “las primeras fuerzas represivas, compuestas por una micro de Fuerzas Especiales (Carabineros) y los bomberos, los cuales son recibidos por fuego graneado de piedras, siendo repelidos; la micro con los vidrios rotos”.<sup>499</sup>

En paralelo, añade, surgen otras barricadas, “en pasaje 6 con Oriente, que es la primera línea de defensa, otra en pasaje 4 con Oriente que extiende dicha línea”. Lo anterior, afirma el militante comunista, permite declarar a la población como “zona liberada”. A partir de “entonces salen en marcha, cacerola en mano, por la población 60 mujeres que, de casa en casa, pasaje por pasaje, hacen salir a las demás gentes y empieza el cacerolazo que se hace general”.<sup>500</sup> Agrega, además, que se sumaron al levantamiento de barricadas distintas poblaciones aledañas, donde también se lanzan cadenas, se desarrollan enfrentamientos con las fuerzas represivas y “un quiosco de diarios de un sapo”<sup>501</sup> resulta quemado. La represión se agudiza con la llegada de refuerzos y agentes de civil, comenzando “el bombardeo de la población con lacrimógenas y ráfagas de ametralladoras”<sup>502</sup> mediante el apoyo de helicópteros, ante lo cual, los pobladores responden con el lanzamiento de piedras y el fortalecimiento de las barricadas con el objetivo de impedir el ingreso de carabineros al interior de la población.

La dinámica de la protesta descrita más arriba se repitió en gran parte de las poblaciones de Santiago, según el relato señalado. Como contraparte, la respuesta de la dictadura se hizo notar durante la jornada de protesta y los días

posteriores. El resultado de la represión fue de medio millar de detenidos, decenas de heridos y dos pobladores asesinados.<sup>503</sup> Una vez finalizada la protesta, se llevó adelante una serie de allanamientos en poblaciones de Santiago, sobre todo en aquellas que habían tenido gran protagonismo. De igual modo, se disolvieron brutalmente las nuevas manifestaciones callejeras que se presentaban en los centros cívicos de cada ciudad y se clausuraron medios de comunicación asociados a la oposición. Por último, un número significativo de dirigentes sindicales fueron detenidos y relegados a distintas partes del país.

A juicio del Partido Comunista de Chile, el ciclo político que se abría con las “combativas manifestaciones callejeras del 24 de marzo” y “la Jornada de Protesta del 11 de mayo”, se caracterizaba por “la agudización de la crisis económica, así como por la profundización del aislamiento del régimen y la elevación en el nivel de conciencia, combatividad, unidad y organización de las masas”.<sup>504</sup> Bajo este escenario, concluye, “la represión no es lo nuevo: lo nuevo, en cambio, es (el) enfrentamiento en el centro de Santiago el 24 de marzo, en los barrios y poblaciones populares el día 11 de mayo y posteriormente”.<sup>505</sup>

En dicho contexto político provocado por la protesta del 11 de mayo, que entre otras cosas permitió el agrupamiento de un importante sector sindical en torno al Comando Nacional de Trabajadores a fines de mayo, se llevó adelante una nueva convocatoria por parte de este referente sindical y bajo la consigna: “proteste como pueda, pero proteste”, fijó para el día 14 de junio la segunda jornada de protesta nacional.

La dinámica de la protesta se mantuvo, no obstante, se producen dos importantes procesos. Por un lado, la masividad y la extensión territorial, y por otro, la diversificación de las formas de lucha y la radicalidad de ellas, caracterizadas por importantes y crecientes niveles de violencia política por parte de los sectores populares y las organizaciones de izquierda. Tal como vimos para la primera jornada, la protesta se preparó días antes en los territorios a través de rayados, lanzamiento de panfletos, actividades sociales y culturales reforzando la convocatoria o mediante la acumulación de material (bencina, parafina, miguelitos, neumáticos, escombros) para el levantamiento de barricadas y el corte de luz.

Durante el día, se produjeron numerosas marchas por las principales ciudades del país, los trabajadores del



PEM

y el

POJH

ocuparon el espacio público y privado, se paralizaron parcialmente las faenas y se bajó el ritmo de trabajo en las empresas y fábricas, y se realizaron “viandazos” (protestas en los casinos durante el horario de colación). De igual forma, se desarrollaron sabotajes a la producción, llamados de bombas falsos en la gran industria y en las instituciones públicas para desalojar los espacios de trabajo.

Por su parte, gremios de profesionales y agrupaciones de derechos humanos se manifestaban en los centros de justicia y el ausentismo escolar volvía a ser significativo durante el día de protesta. Los estudiantes universitarios se hacían presentes a través de actividades y manifestaciones al interior de los recintos educacionales, para luego salir en marcha por las arterias cercanas, donde también se levantaban barricadas y producían enfrentamientos con las fuerzas represivas. Durante la mañana, fueron quemados buses de la locomoción colectiva y, durante la noche, se lanzaron cientos de cadenas al alambrado público, dejando sin luz a gran parte de las poblaciones populares. Solo la luz que nacía de las enormes barricadas levantadas en cada esquina iluminaba la ciudad. Una vez controlado el territorio, se producían saqueos a locales comerciales, edificios públicos y privados de cobranza de servicios de luz y agua y se atacaba a los cuarteles de carabineros que se localizaban al interior de las poblaciones.

Así como la segunda jornada de protesta fue más radical y masiva que la primera, con la represión fue lo mismo, contándose un número de 4 muertos, 70 heridos y 1.351 detenidos.<sup>506</sup> Al amedrentamiento y relegamiento de dirigentes sindicales, sociales y políticos a otras ciudades, se sumó el despido masivo de cientos de trabajadoras y trabajadores, el allanamiento y la destrucción de sedes sindicales y políticas, las limitaciones y cierre de medios de comunicación alternativos a la dictadura, el encarcelamiento y tortura de diversos dirigentes, así como el allanamiento de enormes poblaciones de Santiago, donde se desplegaban miles de soldados y miembros de los cuerpos de seguridad del régimen, los cuales traían a la memoria colectiva y popular las ocupaciones militares de fábricas y poblaciones durante el golpe de Estado de 1973.

A pesar de la cruenta represión desatada contra el movimiento sindical, lo que significó una importante pérdida de protagonismo en los siguientes llamados a movilización, la conflictividad social y laboral entre una jornada de protesta y la otra no se atenuó. Lo anterior se vio reflejado en la continuidad de las luchas sectoriales, la denuncia nacional e internacional en contra de la dictadura ante la escalada represiva, el fortalecimiento y reagrupamiento de los partidos políticos de oposición y un nuevo llamado a protestar para el día 12 de julio. A diferencia de las jornadas anteriores y acusando los golpes represivos por parte de la dictadura, el movimiento sindical perdió centralidad en la conducción y capacidad de convocatoria. A juicio de Viviana Bravo y Mario Garcés, ese lugar fue ocupado por los partidos políticos y las nuevas agrupaciones sociales que surgieron al calor de las protestas anteriores a nivel sectorial y territorial, particularmente del sector poblacional.<sup>507</sup>

La dinámica de la protesta se mantuvo, aunque la diferencia estuvo en los preparativos y la ofensiva represiva de la dictadura que buscaba evitar la propagación y amplitud de la protesta. Para ello, en los días previos a la jornada se llevó adelante la detención de numerosos dirigentes sociales y políticos, se copó con un fuerte contingente militar los centros cívicos de las principales ciudades del país y los alrededores de los recintos universitarios con más protagonismo en la movilización. En la misma línea, se estableció toque de queda desde las 20:00 a las 24:00 horas durante el mismo día 12 de julio, situación que facilitó la política de amedrentamiento hacia las poblaciones a través de la presencia de militares en las calles y el vuelo de helicópteros a muy baja altura. El resultado de dicha política fue de dos mujeres muertas, más de un millar de detenidos y decenas de heridos.<sup>508</sup>

En el ámbito político, después de la tercera protesta se producirá la articulación en bloques por parte de los principales partidos de oposición. Por un lado, la Alianza Democrática (Democracia Cristiana, sectores socialdemócratas, radicales y de centroderecha), la que, a juicio de Viviana Bravo, desde sus inicios demandó la “abdicación de Pinochet, la convocatoria a una asamblea constituyente y una rápida transición hacia la democracia”. Asimismo, fijó los contornos de sus alianzas políticas con el resto de la oposición, dejando en claro que no se “entendería con corrientes marxistas y específicamente con el Partido Comunista”.<sup>509</sup> Por otro, se configura una mesa de izquierda entre el Partido Comunista de Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (

MIR

), el Movimiento de Acción Popular Unitario Obrero Campesino (

MAPU-OC

) y el denominado Partido Socialista de Chile Clodomiro Almeyda, la cual se transformará posteriormente en el Movimiento Democrático Popular.<sup>510</sup> Según Bravo, a partir del surgimiento de estos bloques, la relación entre estos se caracterizará por los constantes y álgidos debates y tensiones, fundamentalmente en torno a los esfuerzos por “hegemonizar la conducción del movimiento popular”. También sobre las posibilidades y pertinencia de “dialogar (o no) con el régimen, legitimar (o no) la Constitución de 1980 y el uso de la violencia política”.<sup>511</sup>

La dinámica de tensionamiento al interior de la oposición descrita más arriba será alimentada y se profundizará al calor de la trayectoria y las dinámicas de la protesta popular en contra de Pinochet. La masividad, los distintos escenarios de la protesta, la diversidad de actores sociales y políticos invalorable en ella, la creciente radicalidad, el protagonismo de la juventud urbano popular en las calles y en el enfrentamiento directo con las fuerzas represivas, la extensión territorial que adquiere (a nivel nacional) y las multifacéticas formas de lucha desarrolladas durante las jornadas de protestas y paros nacionales, se convertirán en un importante insumo y acelerante de la discusión entre las distintas expresiones y bloques de la oposición. De esta manera, la relación entre la protesta popular y las trayectorias políticas de la oposición se estrechará, incidiendo con ello en los ritmos, radicalidad y masividad de las convocatorias a futuras movilizaciones.

La convocatoria a la cuarta jornada nacional de protesta también mostraba los resultados de las diferencias al interior de los bloques de oposición y del debilitamiento del movimiento sindical. Fue llamada por la Alianza Democrática para el día 11 de agosto, y por parte de los partidos de la izquierda y distintas expresiones del movimiento popular para los días 11 y 12 de agosto. A pesar del fuerte dispositivo militar dispuesto días previos a la manifestación, que se tradujo en el establecimiento del toque de queda entre las 18:00 horas y las 05:30 horas y el llamado a 18.000 militares para ocupar calles y principales poblaciones del país, la protesta se desplegó como de “costumbre”, tal como se venía haciendo y aprendiendo desde marzo de 1983. Es decir, antes y durante el 11 de agosto se presentaron diversas manifestaciones estudiantiles, de las agrupaciones de derechos humanos y de colegios profesionales, marchas

relámpagos en los lugares céntricos de cada ciudad, ausentismo escolar, paros parciales en los centros productivos, sabotajes menores, quema de locomoción colectiva, manifestaciones callejeras y ocupación de espacios públicos por parte del emergente movimiento de mujeres y del combativo movimiento de pobladores a través de asambleas populares, actividades artísticas culturales, marchas y del levantamiento de barricadas al interior de las principales arterias de cada población y la masificación de la autodefensa de masas a través del uso de bombas molotov, armamento casero y la realización de zanjas para evitar el ingreso de tanquetas militares.

A pesar del enorme contingente militar que ocupó las principales ciudades del país con sus caras pintadas, tenidas y carros de combate, pese a los allanamientos a casas y la utilización de armamento de guerra de grueso calibre que atravesaba las endebles casas populares y el vuelo de helicópteros a baja altura, la protesta se desarrolló con fuerza, particularmente en las poblaciones periféricas del país durante el 12 de agosto. El resultado de la jornada fue cruento, según Mario Garcés y Viviana Bravo:<sup>512</sup> más de un millar de detenidos y un centenar de heridos, 29 muertos en total, entre niñas, niños, hombres y mujeres (la totalidad perteneciente a los sectores populares de Santiago).

En este escenario de movilización y bajo dinámicas políticas de tensionamiento en la oposición se convocará a nuevas y numerosas jornadas nacionales de protesta, las cuales con altos y bajos en términos de masividad perdurarán hasta 1987.

La movilización popular no solo desbordaba con creces los días de protesta, sino, además, destacaba por el carácter pacífico de esta. La experiencia popular acumulada durante los días de protesta ya tenía recorrido conocido y memoria dentro de la población. Era un caudal de experiencias de lucha que nacía al alero de la propia organización popular y de las expresiones de la izquierda chilena con base territorial de antaño, con capacidad de gestión, planificación, una logística mínima y la voluntad de derrotar a la dictadura. Sin duda, la relación construida en la lucha, entre las diversas expresiones organizativas del mundo popular y la izquierda chilena, es la base fundamental para entender el protagonismo, la fuerza, las transformaciones y dinámicas que adquirió el movimiento popular durante este periodo. ¿Dónde cortar una calle?, ¿por dónde ingresan las fuerzas represivas?, ¿dónde arrancar o dónde refugiarse?, ¿dónde llevar a un herido?, ¿quiénes son los sapos o chivatos dentro de una población?, ¿dónde cavar una zanja?, ¿dónde guardar los neumáticos los días previos a la

protesta?, ¿dónde conseguir los pertrechos?, ¿qué se programaba durante el día?, ¿a qué hora y por dónde transitaría la marcha por el interior de la población?, son, sin duda, las preguntas y desafíos que el movimiento popular chileno comenzó a resolver semanas previas al desarrollo de cada jornada de movilización.

Todas las jornadas de protesta fueron fuertemente reprimidas, con resultados fatales, centenares de detenidos y heridos. Pero no se quedó ahí, la dinámica represiva también persistió y diversificó, readecuándose a medida que el movimiento popular y las diversas expresiones de la oposición intensificaban sus esfuerzos por derrotar a Pinochet. Fue selectiva en la censura a la prensa de oposición y contra dirigentes sociales y políticos de la oposición, vía seguimientos, encarcelamiento, tortura, relegamiento. También fue masiva e indiscriminada mediante el establecimiento del estado de sitio, el toque de queda durante las jornadas de protesta. A lo anterior se suma la intensificación de dispositivos militares tendientes a controlar a la población, mediante allanamientos selectivos y masivos, el relegamiento de un número considerable de dirigentes sociales y establecimiento de puestos militares en lugares estratégicos de la ciudad y cierre de avenidas principales en algunas poblaciones.

Otro aspecto a relevar dice relación con la continuidad de la movilización entre cada una de las convocatorias. La conflictividad laboral continuó, el movimiento estudiantil masificó y amplió sus luchas y el movimiento de pobladores adquirió gran protagonismo al alero de multitudinarias tomas de terrenos que no pudieron ser desalojadas por la dictadura.<sup>513</sup>

Como ya hemos señalado, la profundidad, significado y alcances de las jornadas de protestas abrieron importantes escenarios políticos, produciéndose reconfiguraciones en las alianzas. En el caso de la oposición, se profundizaron las diferencias en torno a los intentos por parte de la Alianza Democrática de negociar con la dictadura. En la misma línea, se presentaron nuevos conflictos entre las diversas expresiones de la oposición debido a la presión ejercida por la Democracia Cristiana sobre los distintos conglomerados políticos a objeto de condenar la violencia patrocinada por un sector de la izquierda, evitando así cualquier posibilidad de entendimiento con el Partido Comunista de Chile.

Durante 1984, las movilizaciones retomaron su dinamismo y protagonismo. Según Viviana Bravo, las convocatorias de 1984 fueron “las jornadas nacionales de protesta más masivas, organizadas y confrontacionales realizadas hasta

entonces”. Señala, además, que si “en algún momento se pudo confiar en una salida ‘a la plebeya’ fue en ese tiempo”.<sup>514</sup> No obstante lo anterior, las distintas convocatorias realizadas durante el año pasaron por altos y bajos en cuanto a masividad, dando cuenta de las distintas tensiones al interior de la oposición y de las gestiones de la dictadura tendientes a dividirla y atraer el interés de los sectores medios por la salida negociada y pacífica a mediano plazo.

La salida de Pinochet y la derogación de la Constitución de 1980, que institucionalizaba a la dictadura y el proyecto neoliberal en Chile, se pusieron nuevamente como las principales banderas de lucha del amplio abanico de la oposición. Por otro lado, las experiencias de organización y luchas adquiridas durante 1983 al calor de la propia protesta, el trabajo de base unitario logrado en los diferentes espacios y actores en lucha, como el estudiantil universitario y secundario, el movimiento de pobladores, el de mujeres y el sindical, entre otros, se condensaron en una mayor y amplia unidad a lo largo de todo el país. En otro sentido, los aprendizajes y la recomposición del movimiento sindical después de la fuerte represión de la cual fue objeto, le permitieron recuperar el protagonismo y la iniciativa perdida desde las dos primeras convocatorias de 1983.

Por último, el crecimiento de la militancia y la recomposición de los partidos de izquierda, en conjunto con el movimiento popular, posibilitaron un nivel creciente de madurez y organicidad, expresada en el fortalecimiento programático y la articulación a lo largo de todo el país de los diversos referentes sociales antidictatoriales que protagonizaron la protesta popular durante 1983. Del mismo modo, el regreso de un importante contingente de exiliados y el ingreso clandestino de cientos de cuadros destinados a fortalecer las estructuras partidarias, y particularmente las vinculadas a la política militar —como en el caso del Partido Comunista de Chile, que desde 1980 venía desarrollando centenares de acciones audaces y sabotajes menores—, crearon las condiciones para un significativo incremento de las acciones armadas en contra de la dictadura, las cuales comenzaron a acompañar desde muy temprano las convocatorias a cada jornada de protesta. En este escenario, apagones en las principales ciudades del país mediante la voladura de torres de alta tensión, el hostigamiento y castigo a los cuerpos de seguridad del régimen, responsables directos de la represión durante las jornadas de protesta, pasarán a ser parte de la rutina de las movilizaciones.

Por su parte, la sumatoria de nuevos actores en algunas jornadas de protesta,

como el transporte y el comercio, resultarían fundamentales en la paralización de las grandes ciudades. Del mismo modo, la combatividad de estudiantes y pobladores, así como la participación de sectores medios, hicieron de algunas convocatorias verdaderos éxitos, incluso alcanzando niveles de paralización importantes.

Como dijimos, no todas las jornadas tuvieron los mismos resultados y fueron masivas, tampoco se presentaron de forma ascendente en cuanto a niveles de lucha. Incidían en ello las tensiones al interior de la oposición, los acercamientos de algunos sectores y la presión de la Iglesia católica por retomar las conversaciones con la dictadura con el objetivo de buscar una salida pacífica al conflicto. Lo anterior significó que algunos intelectuales y sectores de la oposición comenzaran a hablar con mayor fuerza de rutinización de la protesta y falta de proyecciones políticas de esta, en cuanto objetivos futuros.

En ese marco comienza a fraguarse la denominada transición chilena, con el involucramiento de un sector de la derecha pinochetista y los partidos que conformaban la Alianza Democrática. Esto se tradujo en el retiro o pérdida de centralidad, por parte de este sector de la oposición, respecto al reclamo por la ilegitimidad de la Constitución de 1980, saliendo, por tanto, de los marcos reivindicativos en las negociaciones y en las convocatorias de las futuras movilizaciones.

A pesar de lo anterior, los diferentes bloques de la oposición siguieron convocando a nuevas movilizaciones. Unos, con el objetivo de enfrentar y retomar con mayor fuerza el naciente proceso de negociación. Otros, en función de retomar la iniciativa de la protesta y las condiciones mínimas para la salida y derrota de la dictadura. Bajo estos objetivos, el Partido Comunista intensificó, a través de su aparato militar (el Frente Patriótico Manuel Rodríguez), el desarrollo de acciones armadas tendientes a golpear a la dictadura, subir el estado de ánimo de las masas y resituar el camino de la protesta popular como el principal vehículo para la derrota del régimen.

En ese contexto se desarrolló una de las movilizaciones más importantes del ciclo de protestas, la convocatoria del 29 y 30 de octubre de 1984 (protesta el primer día y paro nacional el segundo). Mario Garcés señala que en esta jornada se trastornó significativamente el normal funcionamiento de las principales ciudades del país.<sup>515</sup> Según este autor, “el paro alcanzó su más alto nivel de concreción el día 30 de octubre, incorporándose diversos actores, entre ellos los

trabajadores organizados, a pesar de que de todas maneras fueron los pobladores sus principales protagonistas”. En cuanto al resultado de la jornada, precisa que el ausentismo llegó al 70% y, en el ámbito laboral, la paralización alcanzó al 46%; a lo anterior debía sumarse como factor el cierre de una parte del comercio, lo que profundizó la dinámica de paralización. En la misma línea, Viviana Bravo señala que la paralización fue más significativa que las otras jornadas y superó las expectativas de los convocantes, siendo la “última de las grandes Jornadas Nacionales de Protesta, cuya masividad e impacto quizás solo tendría réplica casi dos años después durante el paro del 2 y 3 de julio de 1986”.<sup>516</sup>

La contundencia, amplitud y combatividad del paro, aparte de las tradicionales consecuencias en víctimas fatales, detenidos y heridos, trajo consigo la inmediata reacción por parte del régimen, echando mano a un antiguo dispositivo de control militar: el estado de sitio. Este fue decretado por Pinochet el 6 de noviembre, como una respuesta rápida al escenario ascendente de movilizaciones sociales, protestas populares y a las diversas formas de lucha desarrolladas hasta ese momento. Desde el punto de vista político, buscaba frenar la reactivación que mostraba la oposición, la cual era resultado, en parte, de los procesos unitarios experimentados en las organizaciones sociales de base. Por otro lado, debemos destacar el incremento acelerado del accionar armado de las organizaciones de izquierda, particularmente del

MIR

y el

FPMR

, que en el marco de las protestas de septiembre y octubre lograron acompañar con sus acciones la dinámica de la movilización popular, mediante sabotaje a las líneas férreas, voladuras de torres de alta tensión que generaban cortes de electricidad en las principales ciudades del país por largas horas, el hostigamiento a los cuerpos represivos, ataques armados a comisarías, el desarrollo de la autodefensa de masas y la masificación tanto de las “milicias de la resistencia popular” como de las “milicias rodriguistas”, las cuales, a diferencia de las jornadas anteriores, enfrentaron con armamento casero y tradicional a las fuerzas represivas en numerosas poblaciones del país.



El entramado político militar que contemplaba el estado de sitio tenía por finalidad inmediata cortar o detener al menos, el incremento de la protesta antidictatorial, y fundamentalmente, terminar con el protagonismo alcanzado por un sector de la izquierda chilena, la cual patrocinaba la derrota de la dictadura a través de todas las formas de lucha, incluida la violencia. La ofensiva represiva fue totalizante, dirigida a los actores políticos, al movimiento popular y todas sus expresiones sociales (allanadas sus dependencias), a los medios de comunicación vinculados a la oposición (fueron prohibidos) y a las organizaciones de izquierda (detenciones y relegamientos). Las medidas tomadas por la dictadura se convierten en una especie de “parteaguas” en la trayectoria de la protesta, iniciándose a partir de entonces un intenso proceso de desmovilización y repliegue, principalmente por el peso que tuvo la represión sobre el conjunto de la población.<sup>517</sup> No se podía circular por las calles entre las 00:00 y las 05:00 horas (toque de queda). La activa y pública vida política alcanzada hasta entonces quedó interrumpida radicalmente, al prohibirse las reuniones y todo tipo de elección de representantes a nivel de base social.<sup>518</sup>

El inicio de 1985 no fue diferente, la convocatoria a la 13ª jornada de protesta, para el 27 de marzo de 1985, no gozó de amplitud ni de fuerza, lo cual explica, junto a los niveles importantes de represión y las tensiones en los bloques opositores, la baja participación.<sup>519</sup> No obstante, un importante factor externo a las dinámicas propias de los actores de la movilización impactó en la trayectoria de las protestas. El 3 de marzo de 1985, un fuerte terremoto azotó la zona central de Chile (regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Región Metropolitana), ocasionando numerosas muertes (177 fallecidos) y casi 3.000 heridos y la destrucción de miles de viviendas (142.489), que dejaron como resultado alrededor de un millón de damnificados. Las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza se hicieron sentir inmediatamente. El miedo, la destrucción de algunas fuentes de trabajo y el empobrecimiento ensimismaron a la población por meses, cambiando radicalmente el foco de preocupación de gran parte de los habitantes de estas regiones, incidiendo con ello en los ritmos, intensidad, masividad y radicalidad de las futuras movilizaciones.

A los efectos traumáticos del terremoto, debemos sumar dos importantes acontecimientos, el secuestro, la ejecución y degollamiento de tres militantes comunistas (Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada) y el asesinato de tres jóvenes militantes del

MIR

, Paulina Aguirre Tobar y los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, a fines de marzo de 1985. De esta forma, la dictadura dejaba en claro que no negociaba y que tenía el control de la situación política.

A pesar de lo anterior, las protestas mantuvieron la importancia para los distintos bloques opositores debido a los pocos avances en las negociaciones con la dictadura. En función de lo anterior y basándose en el caudal de experiencias acumuladas en las movilizaciones anteriores y en la supuesta debilidad de la dictadura, a fines de 1984, el

PCC

h propuso un Plan de Sublevación Nacional, el cual consideraba la intensificación de la lucha social y el accionar armado contra la dictadura.

Bajo este escenario, se llevaron adelante nuevas jornadas de protesta, concentraciones masivas y se intensificaron las movilizaciones sectoriales, particularmente las estudiantiles, de los colegios profesionales y del movimiento de pobladores desde fines de 1985, lo cual implicó una reanimación de las bases sociales en torno a la lucha contra la dictadura. A juicio de Patricio Quiroga, las diversas expresiones del movimiento popular no solo habían repuesto la protesta por la vía de los hechos, sino, además, su masividad, radicalidad y profundización a través de la movilización permanente en términos políticos y sociales, generando con ello un cuestionamiento global al régimen de Pinochet. Para Quiroga, esto demostraba la capacidad de convocatoria que lograban tener los movimientos sociales, la unidad política en la práctica (como la lograda por los estudiantes universitarios en la elección de la

FEC

h) y la factibilidad del empleo de todas las formas de lucha en el terreno concreto del enfrentamiento con la dictadura.<sup>520</sup>

## 1986. EL AÑO DECISIVO: DE LA PROTESTA AL PARO NACIONAL

Además del rechazo absoluto de la dictadura al Acuerdo Nacional promovido

entre algunos personeros de derecha y de la oposición, fundamentalmente de la Democracia Cristiana, 1986 se vislumbraba como un año muy distinto en cuanto a movilización.<sup>521</sup> A juicio de la revista

*APSI*

, a fines de 1985, los tiempos de espera para los diversos sectores de la oposición se habían acabado, así como también los diversos intentos “de buscar vías de diálogo con el gobierno y de insistir por audiencias, encuentros y conversaciones”.<sup>522</sup> Según señala

*APSI*

, son varios los dirigentes de la Alianza Democrática que, al igual que Pinochet, “también darán vuelta la hoja”. De esta manera, agrega, “las primeras páginas de este nuevo año traen, para la disidencia, énfasis distintos, urgencias ineludibles y un solo gran objetivo: ‘paralizar al país ojalá antes de mayo’” de 1986, como aseguró un dirigente de la Alianza Democrática. Lo anterior, a criterio de

*APSI*

, daba cuenta del acento movilizador con el cual la totalidad de la oposición pretendía asumir 1986, ya que, por distintos medios y dirigentes, habían explicitado “la necesidad de una creciente movilización... con mayor o menor fuerza, por los partidos miembros de la Alianza Democrática que firmaron el Acuerdo y, por cierto, por los integrantes del

MDP

”.<sup>523</sup>

Por su parte, desde el mundo sindical, también es posible identificar una importante concordancia con el análisis y las apuestas de los distintos bloques opositores para el año 1986. A juicio de Rodolfo Seguel, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y del Comando Nacional de Trabajadores, la tarea fundamental a la que debían abocarse las distintas fuerzas sociales y políticas era la creación de “una multigremial que agrupe a trabajadores, estudiantes, comerciantes, transportistas, pobladores y profesionales”. Esto, con el objetivo de “enfrentar más cohesionados al régimen y hacer de 1986 un año decisivo a través del paro nacional”.<sup>524</sup>

Los balances políticos realizados por el Partido Comunista de Chile a fines de 1985, también concluían que había llegado el momento decisivo para que el pueblo chileno diera los impulsos definitivos y necesarios para terminar con Pinochet lo antes posible. A juicio de estos, lo anterior implicaba, “por una parte, desarrollar una serie de tareas de preparación orgánica, material y combativa de nuestro partido y, por otra, un trabajo sostenido de convencimiento, agitación, organización y preparación de las masas”.<sup>525</sup> El objetivo, precisan, era “llegar al PARO NACIONAL PROLONGADO en los primeros meses del año 1986”, que permita, “por la amplitud y fuerza del combate de las masas, cumplir con el objetivo de echar a Pinochet”.<sup>526</sup> Para ello, estimaban necesario reforzar los niveles de organización y planificación durante los meses de diciembre de 1985 y enero y febrero de 1986, de lo que, señalan, dependía lograr “o no hacer realidad el anhelo de la gran mayoría de los chilenos, de echar a Pinochet en el transcurso del próximo año”.<sup>527</sup> De esta manera el

PCC

h sentenciaba a 1986 como el año decisivo para terminar con la dictadura y no esperar hasta el año 1989.<sup>528</sup>

Bajo este gran objetivo y en concordancia con la apuesta de Sublevación Nacional planteada también por el

PC

—la cual contemplaba entre otras cosas, la realización de un gran paro nacional prolongado, levantamientos populares en las ciudades y el campo, la paralización del transporte y las comunicaciones, la autodefensa y la lucha decidida frente a la represión, así como el copamiento de los centros administrativos—,<sup>529</sup> se lanzaron a la tarea de lograr una mayor amplitud en las próximas convocatorias y el fortalecimiento de las organizaciones de base y territoriales, con el fin de lograr la unidad política más grande en relación con el término de la dictadura para 1986.

A partir de entonces, un sector de la izquierda chilena, aglutinado mayormente en torno al Movimiento Democrático Popular (

MDP

) y con mayor protagonismo de los comunistas, se abocó a la tarea urgente de

preparar el gran paro nacional. En lo concreto, señalaba el

PCC

h, esto implicaba el involucramiento de cada sector social en torno a las plataformas reivindicativas existentes hasta ese momento, como “el Pliego de Chile de la

CNT

, el pliego del Comando Único de Pobladores, la plataforma de la

CONFECH

, la de los deudores, la de los profesionales de la salud”.<sup>530</sup> Por su parte, en el plano sindical, los esfuerzos debían dirigirse al desarrollo de la lucha por ramas de la producción levantando pliegos extraordinarios por los cuales luchar. Del mismo modo, agregaba el

PC

, debían actuar “unidos los organismos poblacionales de cada sector (comités de pobladores, comité de mujeres y de jóvenes, clubes deportivos, comités de autodefensa, milicias, comités de allegados, de deudores, etc.”.<sup>531</sup> Finalmente, en cuanto a las responsabilidades propias del

PCC

h, en relación con la sublevación nacional y la preparación del gran paro nacional prolongado previsto para el año 1986, el partido establecía la necesidad de una gran campaña de agitación y propaganda, “una gran jornada de instrucción del partido y las masas, así como ayudar al apertrechamiento material y desplegar una amplia solidaridad nacional e internacional con los combatientes”.<sup>532</sup> Respecto de este último punto, establecía que era responsabilidad de toda la militancia comunista el tema de la “autodefensa de masas” y “el trabajo hacia las fuerzas armadas”, precisando que, para fortalecer el trabajo de autodefensa de masas, era fundamental “el desarrollo de las milicias rodriguistas en las poblaciones, universidades y escuelas”.<sup>533</sup>

Como vemos, en el caso del

PCC

h, los preparativos para el año decisivo y las grandes jornadas de lucha que se vislumbraban, comenzaron a planificarse al menos desde noviembre de 1985. Lo anterior nos permite dimensionar el carácter que irá asumiendo el enfrentamiento con la dictadura y las proyecciones fijadas para ese año. Por otro lado, podemos afirmar que, al igual que las primeras jornadas nacionales de protestas de 1983, los importantes niveles de articulación y unidad logrados durante el año 1986 en torno a la protesta popular, son en gran medida resultado de los distintos y previos esfuerzos orgánicos, tanto políticos como sociales, que pusieron en primer lugar el tema del fin de la dictadura y la recuperación de la democracia, más allá de las diferencias que habían caracterizado la dinámica de los bloques opositores desde 1983 a inicios de 1986. Por tanto, la intensidad, masividad y combatividad desarrolladas en las movilizaciones de 1986 no fueron ni espontáneas ni al azar, sino que el resultado de las distintas apuestas que para ese año tenían los distintos bloques de la oposición, como el amplio abanico de expresiones sociales, gremiales y profesionales, para poner fin a la dictadura durante ese año.<sup>534</sup>

## LA MÁS GRANDE DE LAS JORNADAS DE MOVILIZACIÓN: EL 2 Y 3 DE JULIO

Es en este contexto donde se produce una de las jornadas de lucha más importantes en el denominado ciclo de protestas nacionales en contra de la dictadura: el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986. Los ánimos y los esfuerzos unitarios en torno a la movilización y la salida de la dictadura cuajaron por abajo, por la presión de las diversas organizaciones sociales, sindicales, artísticas, de derechos humanos, de mujeres y profesionales. La efervescencia social, la dinámica conflictividad social y política, lo crudo de la represión, aceleró la necesidad de contar con un gran referente de lucha, capaz de aglutinar tanto a los diversos actores y sus demandas sectoriales, como a las expresiones partidarias de la oposición y sus articulaciones en torno a una propuesta global de término de la dictadura. Los primeros pasos en dirección a ese objetivo se dieron a fines de marzo de 1986, cuando se plantearon y sentaron las bases de la unidad social y política de la oposición en torno a la Asamblea de la Civilidad (

AC

), la cual se oficializará un mes más tarde, el 26 de abril. Así nacía “La Demanda de Chile”, que fijaba la hoja de ruta de la movilización antidictatorial bajo los nuevos aires de lucha para 1986. Lo importante de este proceso es que logró reunir a numerosos y diversos actores sociales y políticos alrededor de un solo referente y una sola propuesta de movilización, desde la Democracia Cristiana y la Alianza Democrática hasta el Partido Comunista y el Movimiento Democrático Popular.

# PARO NACIONAL 2 y 3 JULIO!

¡ TODOS JUNTOS  
AL MISMO TIEMPO!



asamblea de la civilidad



*Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Estantería Digital.*

La potencia de esta nueva colectividad y el llamado a movilización para el 2 y 3 de julio fue leída con gran preocupación por parte de la dictadura. De inmediato puso en juego sus múltiples dispositivos represivos, desde allanamientos masivos a poblaciones, detenciones selectivas de dirigentes sociales y políticos, a la disolución violenta de manifestaciones estudiantiles, tanto de secundarios como de universitarios. En la otra vereda, se intensificaron los esfuerzos y la logística para echar a andar los preparativos de la paralización.

Mayo y junio de 1986 fueron meses de importantes movilizaciones sociales y de avances cualitativos con miras a la unidad antidictatorial. Miles de estudiantes secundarios protestaron en contra de la municipalización de la educación. Por su parte, gremios de profesionales retomaron la movilización a través de demandas sectoriales; también los trabajadores irrumpieron con fuerza en las calles, en el marco de la conmemoración del 1° de mayo y ante la política laboral y represiva de la dictadura. En la misma línea, las agrupaciones de derechos humanos intensificaron la campaña de denuncia nacional e internacional en contra de la dictadura y cientos de mujeres protestaron en defensa de la vida y el trabajo digno. De igual modo, desde junio en adelante los universitarios se tomaron las calles y recintos de educación superior exigiendo la democratización de las universidades, la salida de las autoridades militares y la renuncia del ministro de Educación Sergio Gaete.<sup>535</sup>

En cuanto a los preparativos de la paralización del 2 y 3 de julio, como hemos visto, partían semanas antes de la jornada con una consigna central, con rayados, murales, declaraciones y conferencias de prensa, actividades artísticas y culturales, donde se difundía el llamado. Al igual que las anteriores jornadas se imprimieron miles de instructivos y panfletos donde se señalaba el itinerario y el carácter de la movilización. En términos organizativos y logísticos la rutina era la misma, recolectar el material, la bencina, los migueltitos y neumáticos, repartir responsabilidades por sectores, fijar los puntos de sanidad y primeros auxilios y la ubicación de las milicias en el caso de las poblaciones más combativas. No obstante, lo nuevo o agregado de esta convocatoria era el escenario político en el cual se inscribía y la fuerza de masas y de convocatoria que tenían las

organizaciones que llevaron adelante esta jornada. Del mismo modo, como vimos, para un sector de la izquierda chilena, agrupados en el Movimiento Democrático Popular, el año 1986 había sido definido como el año decisivo y dicho paro de julio fue entendido y programado como una de las coyunturas y punto central de la apuesta. Estos elementos de análisis son fundamentales para dimensionar y comprender los niveles alcanzados por esta gran movilización, en términos de masividad, extensión territorial, diversidad de actores involucrados, escenarios en los cuales se desplegó y, sobre todo, respecto de los niveles de radicalidad alcanzados.

Según señala la Vicaría de la Solidaridad, durante “los días 2 y 3 de julio el oscuro y frío invierno hizo una tregua. El sol alumbró con fuerza, desde muy temprano, las vacías calles de Santiago... La locomoción colectiva prácticamente no circuló, una buena cantidad de locales comerciales no levantó sus cortinas y en los establecimientos educacionales (que no estaban en vacaciones) maestros y alumnos brillaron por su ausencia. Lo mismo ocurrió en hospitales, universidades y algunos centros laborales”.<sup>536</sup> De esta manera, precisa el análisis, “el paro nacional convocado por la Asamblea de la Civilidad comenzaba así a hacerse efectivo sorprendiendo con sus resultados a sus promotores, participantes y detractores”.<sup>537</sup> A juicio de la Vicaría de la Solidaridad, el éxito del paro no fue “producto de la espontaneidad”, sino de la capacidad organizativa de la Asamblea de la Civilidad que desde sus orígenes se dio a la tarea de agrupar a la “más amplia gama de sectores y organizaciones sociales del país”, y levantar la “Demanda de Chile”, logrando construir “un conjunto de reivindicaciones sectoriales y globales, partiendo por la recuperación de la democracia”.<sup>538</sup>

En la misma línea, el historiador Patricio Quiroga señala que de nada habían servido los diversos dispositivos represivos de la dictadura para frenar el ánimo y la voluntad de movilización de la población ya que la “paralización fue total. Sorprendiendo, incluso, a los convocantes”.<sup>539</sup> Fue todo un éxito, precisa, “si se toma en cuenta la virulencia de los enfrentamientos, porque mientras miles de ciudadanos protestaban en los barrios cívicos, se producían vuelos rasantes de helicópteros, baleos y acciones que culminaron incluso con dos manifestantes quemados vivos por parte de una patrulla militar”, los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, este último con resultado de muerte.<sup>540</sup>

Las medidas represivas de carácter general por parte de la dictadura se hicieron sentir al primer día de paro. Según la Vicaría de la Solidaridad, la respuesta del

régimen “ante la paralización que se hacía evidente (aunque con diferente intensidad) prácticamente en todo el país, no se hizo esperar”, emitiendo “un bando a través del cual restringían las transmisiones de radios Chilena, Cooperativa, Carrera y Santiago”, solamente pudiendo emitir “avisaje comercial, música e informaciones oficiales”.<sup>541</sup> De igual modo, la dictadura requirió judicialmente a la mayoría de las dirigentes de la Asamblea de la Civilidad (17 de 22) y a dos revistas de oposición, Cauce y Análisis. A juicio de esta última, “la censura a las radios fue especialmente significativa, pues cuando se ordenó suspender los informativos ya había tres víctimas fatales y los testigos de muertes acusaban a civiles no identificados y patrullas militares de ser los responsables de estos hechos”. Precisan, además, que “los reporteros de dichas estaciones transmitían lo que observaban en diferentes puntos de la capital y se daban despachos de lo ocurrido en provincias, graficando las dimensiones nacionales del Paro”.<sup>542</sup>

En cuanto a los organizadores y convocantes del paro, estos evaluaron la jornada como histórica y exitosa, particularmente por la magnitud alcanzada en la movilización durante esos dos días a pesar de la cruenta represión.<sup>543</sup> Los niveles de paralización, como señaló el dirigente metropolitano del comercio detallista, Jaime Pérez, habían sido de un 95%. Algo similar detalló el presidente del Colegio de Profesores Osvaldo Verdugo, “manifestando que a nivel nacional el ausentismo escolar y docente había sido de un 80%”. Entre los estudiantes universitarios la paralización fue total. Por su parte, el presidente de la Confederación Metropolitana de Dueños de Camiones, Héctor Moya, informó que el paro “nacional en su sector fue de más del 90%”. Finalmente, “Rodolfo Seguel, presidente del Comando Nacional de Trabajadores, indicó que las industrias habían parado en un 60%”.<sup>544</sup>

Por su parte, los partidos aglutinados en torno al Movimiento Democrático Popular también catalogaron como exitoso el paro del 2 y 3 de julio. A juicio de este conglomerado opositor, dicha paralización “ha sido la movilización más amplia y masiva de repudio al régimen que se haya realizado desde 1983”. El sorprendente éxito de la jornada, asegura el grupo, se debió a la enorme extensión territorial que asumió, lo cual le dio un carácter nacional al paro. Del mismo modo, “la participación de sectores medios de profesionales, comerciantes, camioneros y transportistas, junto a estudiantes, pobladores y trabajadores” confirmaba “la gran capacidad de convocatoria de la Asamblea de la Civilidad”.<sup>545</sup>

En la misma línea de análisis, el Partido Socialista de Chile (Clodomiro Almeyda) señala que la extraordinaria movilización abrió una “nueva y vertiginosa coyuntura política”. Según este sector del socialismo chileno, “el carácter efectivamente nacional de la jornada, la activa participación de las capas medias junto a los sectores populares, y la fuerza desplegada por la izquierda, constituyen algunos de los aspectos más relevantes del Paro”. La dinámica anterior habría permitido el fortalecimiento de la Asamblea de la Civilidad, tanto así, que despertó “gran preocupación en La Moneda y en el Departamento de Estado”.<sup>546</sup> De igual modo, el consejero nacional del

## MDP

, Sergio Edwards, señaló en una entrevista que el “2 de julio a las 2 de la tarde Chile estaba parado de Arica a Magallanes. Y el 3 pasó lo mismo”. Precisa, además, que lo exitoso del paro nacional se debió, en primer lugar, “a la convocatoria de la Asamblea de la Civilidad”, la cual agrupaba a “todos los sectores sociales con intereses democráticos”, lo que habría permitido vincular “estrechamente a la oposición con la movilización social”. Por tal razón, concluía, “se logró que el 2 y 3 fuera Paro Nacional y también una gran protesta”.<sup>547</sup>

Por su parte, el balance realizado por el

## FPMR

destaca el éxito de la convocatoria y la diversidad de formas de lucha desarrolladas durante la paralización: “La jornada vivida al calor del Paro Nacional del 2 y 3 de julio, convocada por la Asamblea de la Civilidad, mostró que, en presencia de un organismo amplio y decidido, nuestro pueblo está dispuesto a pasar a niveles superiores en el combate antidictatorial”. A juicio de los rodriguistas, la dinámica anterior no solo explicaría la alta participación, sino también las multifacéticas expresiones de lucha desplegadas en ambos días: “Inasistencia a lugares de trabajo y estudio, cierre del comercio, paralización del transporte, manifestaciones antidictatoriales de distinta índole, enfrentamientos en las poblaciones, marchas de protesta, realización de barricadas, bombazos y un apagón generalizado en seis principales regiones del país, fueron la expresión de los chilenos para manifestar su repudio”.<sup>548</sup>

En el caso del Partido Comunista de Chile, estos también evaluaron como un

éxito la jornada, sobre todo, por el papel jugado por la clase obrera. Tomando como base de análisis algunos elementos clave de su apuesta de Sublevación Nacional mediante un Paro Nacional Prolongado, señalan que la paralización se logró porque como partido venían trabajando durante meses “en un plan central y (en) un listado de empresas estratégicas” a movilizar. Por otro lado, precisan, se consiguió definir tres grandes cordones productivos en Santiago y un conjunto importante de medidas y dispositivos partidarios para lograr su paralización. Entre las que destacan, “reuniones intersindicales, reuniones especiales de la dirección con los secretarios de los comités regionales, atenciones especiales, actividades, dislocación prioritaria de dirigentes nacionales hacia esos lugares”. También se “fortalecieron las coordinadoras sindicales” y se crearon “comandos sindicales amplios”.<sup>549</sup> Desde el punto de vista político, destacaron además el papel jugado por la Asamblea de la Civilidad. Según el

PCC

h, “el llamado amplio y unitario de la Asamblea de la Civilidad sirvió para multiplicar la llegada a muchos sindicatos e industrias, más allá del espectro tradicional”. Lo anterior habría facilitado, a juicio de los comunistas, “la creación de organismos amplios, o trabajo de conjunto con los aliados”. Por ejemplo, precisan, “para el trabajo de los Cordones Cerrillos y Vicuña Mackenna fue muy importante la creación de la Asamblea de la Civilidad comunales con la participación con la

DC

”.<sup>550</sup> Misma situación, agregan, se habría repetido en los otros cordones y comités regionales del partido.

Como vemos, hay consenso en cuanto a la evaluación exitosa del paro por parte de la oposición y de los actores sociales que protagonizaron la convocatoria.<sup>551</sup> Al respecto, queda preguntar por aquellos aspectos que permitieron el éxito. Identificar las nuevas dinámicas y formas de lucha que se hicieron presente o que lograron desarrollarse. En definitiva, por qué este paro nacional es catalogado como la última gran movilización del ciclo de jornadas de protestas nacionales inauguradas en mayo de 1983 o, en otro caso, como la más importante de las jornadas de lucha en contra de la dictadura. En función de responder dichas interrogantes, reconstruiremos el recorrido de esta jornada de movilización, dando cuenta de los principales escenarios y actores del paro, así

como de las formas de lucha desplegadas durante los días de movilización.

Como todas las jornadas de protestas anteriores, la movilización, por lo general, partía uno o dos días antes y el Paro del 2 y 3 de julio de 1986 no fue la excepción. El lunes 30 de junio, a eso del mediodía, la calle peatonal más importante de Santiago, el Paseo Ahumada, quedó invadida de pelotas de plástico de diversos colores, lanzadas desde distintos edificios cercanos. En pocos minutos, “la arteria peatonal se convirtió en una improvisada cancha de fútbol”. La particularidad de dichas pelotas era que venían impresas con caricaturas y consignas en contra de Pinochet. Según la revista *Análisis*, “carabineros solo entendió el sentido de la original manifestación cuando una lluvia de volantes anunciando el Paro cayó desde lo alto, mientras se escuchaban gritos de ‘y va a caer’”.<sup>552</sup> En paralelo y muy cerca del improvisado campo de fútbol, a solo tres cuerdas, “más de un centenar de estudiantes protagonizaban un hecho histórico, por primera vez en estos trece años”, señala *Análisis*, “los universitarios se tomaban la Casa Central de la Universidad de Chile”<sup>553</sup> en señal de protesta por la intervención militar en las universidades y en apoyo a la paralización nacional convocada por la Asamblea de la Civilidad para los siguientes días. No obstante, un par de horas más tarde, se produce el desalojo del recinto universitario por parte de Carabineros y la posterior detención de los estudiantes. Lo interesante de dicha acción de protesta es que mientras se producía el desalojo universitario, “los periodistas eran informados de los nombres de la directiva de reemplazo”.

A juicio de la revista *Análisis*, el rápido y novedoso reemplazo de la dirigencia estudiantil, daba cuenta de un hecho cada vez más evidente: que la situación desde el punto de vista organizacional no era la misma que hace tres o cinco años atrás, cuando partían las protestas. En el marco de esa actividad, precisa, “cuando el Gobierno detiene un dirigente se puede encontrar con otro y otro más, tras él”. La dinámica anterior expresa justamente los niveles de maduración alcanzados para 1986 por parte de las distintas organizaciones sociales que se fueron fortaleciendo y creciendo al alero de la movilización. Este ejercicio de reemplazo de dirigentes lo veremos posteriormente en otras movilizaciones y en el propio paro del 2 y 3 de julio, cuando en el transcurso del primer día de paro la dictadura requiera a la mayoría de los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad.

Resaltan al respecto dos importantes aspectos: el orgánico, que demuestra coordinación, capacidad de respuesta, voluntad y recambio; y el del crecimiento o masividad que fueron adquiriendo las organizaciones, en este caso la

estudiantil, que permite disponer de nuevos dirigentes para ponerse a la cabeza de manera inmediata y en un fuerte escenario represivo, de nuevas movilizaciones y conflictos. En función de la dinámica anterior, plantea Análisis, los aspectos señalados son tal vez “una de las causas que explique los avances evidentes que hicieron posible el paro del 2 y 3, considerado por los opositores la más importante expresión de movilización social desde 1973”.<sup>554</sup>

Como de costumbre, las primeras barricadas, cortes de luz y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de la dictadura ocurrieron durante la noche anterior y en la madrugada del 2 de julio. En distintas poblaciones comenzaban las tareas de excavación de zanjas, trincheras y preparación de los materiales para el levantamiento de barricadas. Unas horas más tarde, en las plazas o centros cívicos de las principales ciudades del país, se desarrollaron las tradicionales marchas de gremios profesionales y de dirigentes sociales que convocaban a la paralización, se ocuparon los espacios públicos y se llevaron adelante bocinazos y la obstaculización del tránsito mediante tacos o atochamientos producidos por automovilistas que adherían al paro.

En paralelo, durante la mañana del 2 de julio, la falta de locomoción colectiva daba muestra del nivel de arraigo, organización y proyecciones de la convocatoria. A la suma voluntaria de choferes y dueños de transporte, debemos sumar las acciones de sabotaje realizadas durante la noche anterior y la madrugada del 2 de julio, con lanzamiento de miguelitos, levantamientos de barricadas en las afueras de las garitas de algunos recorridos y la quema de micros. Según la revista

*APSI*

, “la baja de la locomoción colectiva fue, seguramente, una de las más notorias. Fuentes gremiales la estimaron en más de un 85%”.<sup>555</sup>

Una evaluación del

PCC

h sobre el paro establecía que en este sector se dio “un nivel de paralización casi total, destacándose el hecho de que a diferencia de otras oportunidades gran cantidad de líneas acuerdan el Paro previamente”.<sup>556</sup> Dicho resultado, indica el balance comunista, obedecía a las propias dinámicas organizativas de los choferes y dueños de locomoción colectiva, por un lado, y a las labores

realizadas por distintas estructuras del

## PCC

h con este sector previo a la paralización, por el otro. Entre ellas, resaltaban los trabajos “de persuasión hechos por los comités regionales, conversaciones con choferes, delegados de organización de masas en los terminales, reuniones con los sindicatos de líneas, incluso, asambleas conjuntas y participación de los micreros en actividades poblacionales”,<sup>557</sup> como había sido el caso de la línea 118 y 4 Álamos en Maipú. El proceso anterior, concluye el informe, fue “un paso superior en la comprensión del Partido acerca de lo decisivo que es la locomoción colectiva. Realmente en esta oportunidad los mercurios fueron lo ‘adicional’”.<sup>558</sup>

Por otro lado, respecto de la poca locomoción que circuló el jueves 3 de julio durante la mañana —producto de las presiones de la dictadura—, el partido señala que gracias a los mercurios y particularmente al “clima general de paralización y pelea (se) restableció rápidamente la situación”.<sup>559</sup> En base al balance de este aspecto del paro, el

## PCC

h establecía como fundamental el trabajo partidario y de masas a realizar y profundizar con el sector de la locomoción colectiva, así como con la preparación de los “mercurios”, ya que consideraban estas labores “vitales” para el éxito de las futuras movilizaciones. Como habían podido observar en el paro, estaba “claro que la paralización general mayoritaria en muchos casos se debió a la paralización de la locomoción colectiva”.<sup>560</sup>

Al respecto, creemos que la participación de la locomoción colectiva en la movilización es un aspecto importante a considerar en la dinámica de la paralización y en el éxito de la jornada del 2 y 3 de julio. En este sentido, fueron relevantes en el proceso la incorporación del gremio de transportistas y de choferes a la jornada, como la amplitud social alcanzada por la Asamblea de la Civilidad y su capacidad de convocatoria desde los distintos gremios. Del mismo modo, la organización de los propios choferes de la locomoción colectiva es otro ingrediente para destacar, lo cual implicó la participación voluntaria de estos en el paro. Por último, los distintos esfuerzos partidarios desarrollados a nivel territorial con choferes y sus organizaciones sindicales es también otro factor



para tener en cuenta, agregando con ello coordinación, vínculos políticos y articulación con las diversas expresiones sociales de base de los territorios.

El comercio también jugó un papel importante en la paralización. Como vimos, el presidente de la Federación Metropolitana del Comercio Detallista, Jaime Pérez, indicó que “el gremio cerró en un porcentaje superior al 70% y que, a partir del mediodía, cuando los locales del centro bajaron sus cortinas, el 95% de los locales comerciales acató el paro”.<sup>561</sup> Dinámicas similares a la de la locomoción colectiva se presentaron previamente con comerciantes a nivel territorial y gremial. Para Santiago, según la revista Análisis, “en las primeras horas de la tarde, el cierre del comercio superaba el 90%”.<sup>562</sup> A juicio del

PCC

h, en cuanto a la actividad comercial, “se dio un alto nivel de paralización, por acuerdo de las Asociaciones y de la Federación Metropolitana, y por las medidas de guerra sicológica y presiones adoptadas por las organizaciones populares al inicio del paro”.<sup>563</sup>

En cuanto al sector de la salud, la información es diversa según sectores. De acuerdo con el balance del Colegio Médico, en el hospital “traumatológico, 85%; Roberto del Río, 100%; Félix Bulnes, 98%. Según esos antecedentes, el promedio de trabajadores de la salud ‘parados’ en la Región Metropolitana fue superior al 80% y en provincias cercano al 75%”.<sup>564</sup> En la misma línea de análisis, el

PCC

h señaló que hubo un “gran éxito de la paralización en este sector, donde los médicos y profesionales de la salud lo han paralizado cercanamente al 100% por 100%”. No obstante, precisan, “los trabajadores de la salud lo han hecho por regla general con porcentajes (que) oscilan alrededor del 50%”.<sup>565</sup> Por el lado de los trabajadores de empresas del Estado, estimaron también “un alto grado de paralización, por acuerdos de trabajadores”. Lo importante a destacar según el

PCC

h para este sector de trabajadores, es que “se logró desarrollar un trabajo de conjunto con la

DC

dándole nuevos bríos de defensa de las empresas del Estado”.<sup>566</sup> Respecto de los trabajadores bancarios, la paralización fue escasa y con pocas manifestaciones locales por parte de este gremio. No obstante, la poca asistencia de público durante los días del paro entregó aires de paralización para este sector, según balance del

PCC

h.

La situación fue totalmente distinta por parte de los estudiantes. En todo el país, los días previos al paro se presentaron importantes manifestaciones estudiantiles, las cuales incluyeron tomas de recintos universitarios en distintas regiones del país y masivas marchas de secundarios, lo que permitió llegar a la jornada del 2 y 3 de julio en un ambiente de efervescencia y ascenso en cuanto a dinamismo de la protesta. Por ello no es de extrañar la alta participación de los estudiantes, su combatividad y el éxito alcanzado por este sector durante los dos días de paro en distintos escenarios, particularmente en las poblaciones. Se debe considerar también que la dictadura había adelantado las vacaciones de invierno a objeto de restarle importancia y protagonismo en las calles a los estudiantes. Según el

PCC

h, “la inmensa mayoría de los establecimientos paralizó, gran cantidad de ellos por acuerdo y otra por efecto del clima general de paralización”.<sup>567</sup>

En el caso de los trabajadores vinculados a la producción industrial, la participación también fue importante respecto de las anteriores jornadas. El dirigente Rodolfo Seguel fue categórico al evaluar la participación de su sector en la paralización, resaltando que esta fue rotunda: “el 90% de los trabajadores no concurrió a sus faenas de trabajo; en sector gráfico, el ausentismo fue de un 80%”<sup>568</sup>, aseguró. En el caso del

PCC

h, estimó el porcentaje de paralización en un 80%, siendo muestra clara de una “tendencia a una paralización mayoritaria, cuyos distintos matices y cualidades no conspiran contra la tendencia general”.<sup>569</sup> Al igual que en las dinámicas de la

paralización de la locomoción colectiva y el comercio, fue relevante el trabajo partidario y de las distintas expresiones políticas sociales en la preparación del paro en este sector de trabajadores. Destacan al respecto las tareas previas de creación de Coordinadoras Sindicales Zonales y Comandos Zonales y provinciales; campañas de agitación permanente con una gran cantidad de sindicatos y asambleas sindicales que facilitaron los acuerdos en torno al paro.<sup>570</sup> También resalta la organización territorial surgida al alero de la paralización entre los sindicatos, sus trabajadores y los actores sociales que se localizan alrededor de las industrias, pobladores y estudiantes principalmente. Al respecto, señalan que en el caso de la empresa Sumar, “se desarrolló en la mañana del 2 una gran cantidad de presión de los pobladores, con mítines, conversaciones con trabajadores, bombazos, apedreos a vidrios de la empresa, que en su conjunto terminaron con la paralización total” y “que en muchos otros lugares se sacó de las industrias a los trabajadores que llegaron”.<sup>571</sup> Finalmente, agregan dos factores que facilitaron el éxito del paro en las industrias. Por un lado, “la paralización de la locomoción colectiva, que contribuyó decididamente a parar a sectores de trabajadores indecisos, que encuentran allí el pretexto”; y por el otro, el importante papel que jugaron “las acciones de sabotaje, guerra sicológica, y la presión social de masas en el mismo momento del paro”. Por ejemplo, señalan, en la empresa Londa, que contaba con 600 trabajadores, “paralizó a las 11 hrs del 2 (julio) por llamada de bomba falsa”. Del mismo modo, agregan, se llevó adelante una “buena cantidad de mufas y bombas de ruido en industrias, en algunos casos tres por día en una industria, lo que atemoriza y neutraliza a los patrones”.<sup>572</sup>

Como podemos observar, en la paralización de los trabajadores de la industria se combinaron importantes formas de lucha. A la tradicional participación en una huelga, se sumaron la paralización de la locomoción colectiva, los sabotajes y la presión social por parte de otros actores, como pobladores, factores que en su conjunto permitieron una amplia movilización de este sector en comparación con las jornadas de protestas desarrolladas desde 1983 en adelante.

Donde sí tuvo una amplia acogida la paralización, con una alta adhesión en términos de masividad y combatividad, fue en las poblaciones de las principales ciudades del país. Según señala la revista

*APSI*

, a diferencia de los amplios sectores medios, donde podía identificarse algún

malestar por la paralización o simpatías por ella (la cual no siempre se manifestaba en hechos concretos), “una vez más —en lo que va siendo una tónica predominante— la mayor parte del peso, del rigor, de las acciones y de las consecuencias, le correspondieron a los sectores más desposeídos, que volvieron a jugarse el todo por el todo”.<sup>573</sup>

El desarrollo del paro en las poblaciones del país vino acompañado desde muy temprano por la represión indiscriminada de las fuerzas represivas de la dictadura. Se repetían las formas tradicionales de represión, copamiento militar sobre poblaciones, vuelos rasantes de helicópteros, balaceras, militares carapintadas recorriendo las calles principales, autos de civiles armados disparando a manifestantes. A pesar de ello, miles de chilenas y chilenos desafiaron a la dictadura y salieron a las calles, tal como estaba previsto desde hace días. Barricadas por cuadras, zanjas para evitar el ingreso de tanquetas, trincheras para protegerse de las balas indiscriminadas y selectivas que provenían de camionetas de las Fuerzas Armadas y de civiles asociados a los servicios de seguridad (

CNI

). Milicias populares, comités de autodefensa, brigadas sanitarias y casas de seguridad comenzaron sus labores desde muy temprano. Como vemos, la protesta en la población tenía sus propias dinámicas y, entre cosas, se caracterizó por sus altos niveles de confrontación y despliegue de formas de lucha violentas.

A juicio del Partido Comunista de Chile, la lucha desatada en las poblaciones más populares durante la jornada de paralización “revistió caracteres de levantamientos y enfrentamientos decisivos a la represión, con la utilización de diversas formas de lucha”. Las calles fueron el principal escenario de la movilización y confrontación, en ellas se materializó gran parte de las tradicionales formas de expresar el malestar por parte de los sectores populares durante el ciclo histórico de protestas iniciado en mayo de 1983. Según la evaluación comunista, “la pelea en general comenzó el 1 de julio y duró en varios casos hasta el 4 de julio y el grueso de las actividades proyectadas para esos días fueron cumplidas: ‘Ollas comunes; marchas masivas; concentraciones; mítines; velatones; caceroleos; votaciones por la democracia; actividades confraternización con las FF.AA. misión de comunicación y partes informativos, conferencia de prensa con periodistas nacionales y extranjeros, petitorios a las municipalidades, accionar dirigido hacia el accionar de la industria, comercio y

locomoción colectiva; obras de teatro y otras actividades recreativas y culturales; y un rico accionar de autodefensa de masas’’.<sup>574</sup>

La masividad y radicalidad de la movilización se expresó en el surgimiento de nuevos focos de resistencia y control territorial, como “El Castillo, Granja sur, población San Miguel y San Joaquín”, en Nos y otras poblaciones de Puente Alto. De igual modo, precisaron, “la disposición combativa de las masas se mostró con creces” a pesar del poderío militar de las fuerzas represivas que operaron en esos días, incluso “en aquellos lugares donde la represión cobró vida, el combate se desarrolló enseguida con más fuerza: La Legua, La Victoria, Pudahuel, Los Copihues”<sup>575</sup> y los funerales se transformaron en potentes expresiones de solidaridad y combatividad, con la participación de miles de personas.

Entre los aspectos que destaca el

PCC

h en su evaluación, se encuentra la participación de militantes demócratacristianos y sus aliados en muchas luchas territoriales, así como el importante papel jugado por “los curas y las monjas, funcionando acuerdos previos en cuanto a (que) las parroquias sirvieron como puestos médicos y locales de ollas comunes”. En algunas zonas, incluso participando de los distintos organismos de base que coordinaban la protesta, como “el comando pro paro de Lo Hermida”.<sup>576</sup>

Otros aspectos destacados en la evaluación del

PCC

h dicen relación con el nivel de combatividad alcanzado, particularmente la autodefensa de masas en las tareas de creación de zanjas y levantamiento de miles de barricadas. Por otro lado, resaltan la creación de puestos médicos y unidades de primeros auxilios, así como las diversas acciones desarrolladas en distintas localidades en contra de soplones de la dictadura y fuerzas represivas a través de emboscadas, utilización de armamento casero, molotov y granadas. Por último, enfatizan la importancia del accionar paramilitar del partido: bombazos, voladuras de transformadores locales e industriales y apagones.<sup>577</sup>

Como señalamos, son las poblaciones los escenarios más combativos de las

jornadas de movilización. En estos lugares habitan e interactúan diversos actores sociales, como los trabajadores, los cesantes, la juventud urbana popular, las organizaciones de mujeres, comunidades cristianas de base y los estudiantes, por ello la riqueza de experiencias de lucha y organización que irrumpen en un mismo lugar. Lo anterior lo podemos graficar a través de una de las tantas reconstrucciones realizadas sobre la paralización del 2 y 3 de julio de 1986. Según describe la evaluación del

## PCC

h, en la zona de la Cañada y Manuel Rodríguez (actualmente comuna de Lo Prado), el levantamiento popular se produce a partir de las 05:00 del 2 de julio, “con la construcción de las barricadas estratégicas y el sonar de dianas”. Durante gran parte del día se generan las condiciones para la defensa de la población. En la tarde noche “se inician marchas y mítines poblacionales y un gran caceroleo en todo el sector. A las 20:30 hrs, los pacos, intentan ingresar a pies, por Dorsal hacia Neptuno, disparando hacia todos los lados, en ministro Gana con Dorsal, una milicia responde, con un bombazo y dos granadas de mano además con fuego de revólver, contra la represión, al ver la resistencia, los pacos huyen despavoridos hacia la micro, alejándose del sector velozmente”.<sup>578</sup>

La descripción de más arriba pudo corresponder a la de cualquier población de Santiago durante esos días, ya no solo las más combativas o con larga tradición organizativa y de lucha, con orígenes en tomas de terreno. Durante esa jornada, germinaron nuevos territorios liberados, estos reprodujeron gran parte de los aprendizajes previos experimentados en barricadas y enfrentamientos con fuerzas represivas durante las jornadas anteriores. Acumularon fuerza social y confianzas políticas durante años de clandestinidad, represión y pobreza. Pero también se reanimaron y fortalecieron con fuerza propia, imitando otros espacios de lucha. Poblaciones vecinas se instruyeron en base al ensayo y error y en reuniones, discusiones y talleres del gran movimiento de pobladores y, en más de alguna ocasión, sufrieron el peso de la represión a través del encarcelamiento y la muerte. El sedimento de cada experiencia de lucha y organización tomó protagonismo en esta histórica paralización y quedó en la retina y memoria histórica de la lucha en contra de la dictadura como la más grande de las batallas en contra de Pinochet.

## CONCLUSIÓN

A pesar de las positivas evaluaciones y proyecciones políticas realizadas por la Asamblea de la Civilidad y los diversos bloques de la oposición respecto del paro del 2 y 3 de julio, así como del gran prestigio y reconocimiento nacional adquirido por estos últimos y el nuevo escenario político que abrió la paralización —principalmente por el nivel de masividad, adhesión, radicalidad y extensión nacional alcanzado—, la dinámica de la protesta antidictatorial entró, a unos pocos meses de julio, en un franco retroceso. Dos grandes apuestas que apuntalaban la estrategia de uno de los bloques opositores en torno a la salida popular y la derrota de la dictadura para el año decisivo, y que tenía como responsable al Partido Comunista de Chile, fracasaron. Por un lado, la internación de toneladas de armas al país para dotar de materialidad a la sublevación nacional, y resolver las fallas o debilidades observadas en la paralización del 2 y 3 de julio, fue descubierta y gran parte del armamento requisado por la dictadura. Por otro lado, el fallido intento de “ajusticiamiento” a Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1986. Independiente de la fuerza con la cual había quedado el proceso de unidad política y social construido por la Asamblea de la Civilidad, ambos acontecimientos y principalmente el fracaso de estas iniciativas, señalan algunos autores, sepultaron la política del

PCC

h y terminaron por cerrar toda posibilidad de alianzas con el resto de los partidos opositores a la dictadura.<sup>579</sup> Como contraparte, salieron fortalecidas aquellas apuestas que desde las primeras jornadas de protesta condenaron categóricamente el empleo de las formas violentas. Así, a fines de 1986 (una vez aislado el

PCC

h y el

MIR

), no quedaba otra alternativa, ni menos otra fuerza, que se pusiera en el camino de la negociación con la dictadura y la aceptación de su itinerario de transición

democrática. Comenzaba de esta manera el desmantelamiento de la protesta en contra de Pinochet y de las diversas organizaciones y expresiones del movimiento popular nacientes bajo el ciclo histórico de jornadas nacionales de protesta. Nacía así una transición a la democracia sin actores ni fuerza por abajo que velase y exigiese el cumplimiento de las grandes demandas populares emanadas en el Chile neoliberal de Pinochet.



## BIBLIOGRAFÍA

Bravo, Viviana, “Neoliberalismo, protesta popular y transición en Chile, 1973-1989”, en *Política y Cultura*, N° 37, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco Distrito Federal, México, 2012, pp. 85-112.

, Piedras, barricadas y cacerolas: las jornadas nacionales de protesta, Chile 1983-1986, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2017.

De la Maza, Gonzalo, y Garcés, Mario, *La explosión de las mayorías. Protesta nacional, 1983-1984*,

ECO

, Santiago, 1985.

Garcés, Mario, “Los pobladores y la política en los años ochenta: reconstrucción de tejido social y protestas nacionales”, en *Historia* 396, Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2017, pp. 119-148.

Meller, Patricio, *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*, Uqbar Editores, Santiago, 2006.

Moulian, Tomás, *Chile actual, anatomía de un mito*,

LOM

, Santiago, 2002.

Reyes, Jaime, “El Partido Comunista de Chile y las manifestaciones sociales contra la dictadura: violencia política y ruptura del orden dictatorial. Santiago, 1980-1987”, en *Historelo*, N° 21, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), Colombia, 2019, pp. 91-32.

Quiroga, Patricio, “Las jornadas de protesta nacional. Historia, estrategias y

resultado (1983-1986)”, en Encuentro

*XXI*

, año 4, N° 11,

CENDA

, Santiago, 1998, pp. 42-60.

\* Académico. Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.

## **X. DEL MOCHILAZO A LA MARCHA DE LOS PARAGUAS: LA PROTESTA ESTUDIANTIL EN EL CHILE NEOLIBERAL (2001-2011)**

IVETTE LOZOYA LÓPEZ

\*

VIVIANA CUEVAS SALAZAR

\*\*

Desde la ocurrencia de las protestas de octubre de 2019 mucho se ha escrito y debatido respecto al “No lo vimos venir”, la afirmación repetida por los actores institucionales ante la masividad, violencia y amplitud de demandas populares. Quienes, desde el movimiento mismo, participábamos en las protestas y marchas mirábamos con alegría el fenómeno, pero también con un grado importante de asombro, porque en las esquinas del centro de Santiago y en muchos barrios, no solo estaban manifestándose los sujetos activos y movilizados de siempre, sino un espectro amplio de trabajadores, estudiantes, mujeres, marginados, jóvenes y niños.

Pese a lo anterior y a la evidente desconexión de la élite, las protestas del 2019 no emergieron intempestivamente, sino que fueron el corolario de un ciclo de protesta de casi 20 años, en los que se acumularon decepciones, rabias y muchas demandas, las que finalmente explotaron con la chispa que encendieron los estudiantes secundarios.

El 7 de octubre de 2019 comenzaron las evasiones masivas en el metro de Santiago, luego de que la ministra de Transportes anunciara un alza de 30 pesos en el pasaje del transporte público. Estas acciones fueron protagonizadas en un primer momento por estudiantes secundarios que se autoconvocaban y hacían

ingreso masivo a los andenes, saltando los torniquetes para no pagar el pasaje. Después de unos días se sumaron los trabajadores que a esa hora iban camino a sus labores.

Los llamados a evadir fueron liderados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la que convocó a estudiantes de distintos establecimientos, llamado que fue paulatinamente contagiando al mundo adulto, que denunciaba la continuidad del neoliberalismo pinochetista y la complacencia de la centroizquierda con su legado.

Las pensiones de hambre, el maltrato a los niños del

SENAME

, la crisis hídrica, los femicidios, todo explotaba ante la evidente burla de la élite que nos recomendaba levantarnos más temprano para usar el transporte público en horario económico o comprar flores, porque era el único producto que no había aumentado de precio en los últimos meses. Los estudiantes secundarios saltaron los torniquetes y todos detrás de ellos salimos a descargar nuestro descontento. No era la primera vez que los estudiantes secundarios daban origen a una movilización masiva. Llevaban ya 20 años manifestándose junto a otros actores, sin embargo, la élite política y económica del país ignoró los reclamos, no quiso verlo venir.

En este texto analizaremos las tres coyunturas que conforman el ciclo de protestas estudiantiles desarrollado entre el 2001-2011 y que dan origen al movimiento estudiantil chileno del siglo

XXI

. A lo largo de los 10 años que revisaremos, este sector va reinventándose y adquiriendo fuerza a partir de una reivindicación general: el cambio del modelo educativo construido por la dictadura. Para cada episodio se analizarán el contexto movimental, las demandas convocantes, las formas que adquiere la protesta y los actores relevantes. A la luz de la historia podemos afirmar que los estudiantes movilizados en la década del 2000 rompen con el mutismo de los movimientos sociales y vuelven a instalar la protesta por los derechos sociales como un acto legítimo y validado por la sociedad chilena. No obstante, y pese al uso de la violencia y la innovación en las formas de protesta y organización, los estudiantes chilenos no lograron legitimarse como un actor político en la toma de

decisiones, manteniéndose la distancia entre la ciudadanía que demanda y los políticos profesionales que deciden, dándoles continuidad a las prácticas políticas de la transición.

## LOS PENDIENTES DE LA TRANSICIÓN. CHILE Y LA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL 2001-2011

El retorno a la democracia en Chile durante los años 90 dejó muchos pendientes en el ámbito de las demandas sociales. El pacto transicional situó a la democracia como una gran conquista, sin reflexionar sobre la calidad de esta. El resultado fue el desarrollo de una democracia electoral que dejó fuera a los movimientos sociales, sus demandas y formas de participación. Esta exclusión durante una década fue además una autoexclusión, ya que los efectos de la dictadura se hicieron sentir retrasando la rearticulación del movimiento popular, debido, entre otras cosas, a la existencia de una generación desinteresada en la política y pesimista respecto a los cambios. Así, los estudiantes que habían tenido un rol preponderante en la lucha contra la dictadura en los 80, al igual que los otros movimientos sociales, dejan de tener protagonismo durante los años 90.

Debido a esta misma ausencia de relación directa entre las organizaciones sociales y el Estado, hacia el año 2000 la transición chilena era cuestionada.<sup>580</sup> El argumento más esgrimido fue el pacto de consenso con la dictadura de Pinochet, lo que limitó los cambios institucionales y la mantención del modelo económico. Como resultado de esto, la democracia chilena sería incapaz de responder a las demandas sociales. Según autores como Moulian, Maldonado, Garretón, Huneeus,<sup>581</sup> esta percepción explica en parte el desinterés que comenzó a demostrar la ciudadanía respecto de la política formal y la imposibilidad de los partidos y la institucionalidad vigente de captar adhesión. Esta crítica estructural tuvo su propia expresión en el ámbito de la educación, la que fue escalando sobre la base de tres concepciones básicas: la incapacidad del sistema educativo chileno de incorporar socialmente a los adolescentes marginales, la implementación de reformas educativas ineficientes y la naturalización del neoliberalismo que implicó concebir la educación como un bien de consumo y no como un derecho.<sup>582</sup>

El movimiento estudiantil chileno que comienza a articularse en el año 2001<sup>583</sup> rompió con la exclusión institucional de los movimientos sociales, instalándose en la arena de lo político a través de una demanda gremial que recogía aspiraciones y formas de acción históricas del movimiento e incorporando otras nuevas. Entre las acciones clásicas encontramos el uso medido y racional de la violencia (que fue escalando) y, entre las nuevas, tenemos las formas de organización horizontal. Las diversas expresiones de protesta provocaron que el movimiento fuera reconocido y valorada su demanda, sin embargo, no logró penetrar las instancias de definición debiendo ceder ese rol a la representación parlamentaria, reproduciendo las lógicas de funcionamiento de la tan criticada democracia posdictatorial chilena.

El proceso de ascenso en la crítica y la protesta vivido por los estudiantes chilenos entre el 2001 y el 2011, se desarrolló en tres episodios movimentales: el primero de ellos fue llamado el mochilazo y se desarrolló en el año 2001; el segundo, fue el movimiento pingüino del 2006, y el tercero, fueron las masivas movilizaciones por la gratuidad del 2011. En ellos, los estudiantes comenzaron una lenta rearticulación no solo del movimiento sectorial, sino también del movimiento social amplio, y que tendrá como una de sus consecuencias de mediano plazo, los intentos de ampliación y profundización de la democracia a la que muchos chilenos aspiran.

No es de extrañar que en el Parlamento, las alcaldías y hasta en los ministerios del actual gobierno reconozcamos a jóvenes dirigentes de esos episodios de protesta, ya que en ese ciclo de movilizaciones se abrieron oportunidades políticas para los actores más “adelantados” y bien situados, quienes lograron plantear exigencias que encontraron eco en otros, lo que fue generando articulaciones entre sujetos y colectivos de distintas características, por ejemplo, entre estudiantes secundarios y universitarios.<sup>584</sup> Muchos de esos actores se han proyectado en la escena política estableciendo vínculos, formalizando militancias, fundando partidos, manteniendo o reformulando un discurso crítico de las élites, aunque la mayoría anónima no experimentó mayores cambios en sus trayectorias de vida y tampoco en las condiciones estructurales en las que se desenvuelve esta. Este último punto es relevante para evitar el análisis mecanicista del desarrollo de los movimientos en forma ascendente, porque la institucionalización de las demandas, el posicionamiento en espacios políticos de varios referentes estudiantiles y la consecución parcial de algunos de sus objetivos, también ha significado una resolución del conflicto a partir de la cooptación y la profundización del modelo neoliberal. De la misma manera, el

movimiento, desencantado por estos resultados, no ha podido mantenerse como tal, pasando por periodos de profunda desarticulación, con una esporádica activación en torno a demandas específicas, y de asambleísmo con muy baja participación, especialmente en el movimiento universitario.

Las demandas y protestas que explotaron en el 2001 en los años siguientes fueron confluyendo con elementos de contexto favorables que permitieron la coordinación entre universitarios, secundarios y otros actores de la educación. Se levantó en conjunto —aunque cada uno de los actores desde su especificidad— una crítica profunda al modelo de educación chileno, luego de eso, los episodios movimentales del 2006 y 2011 generaron enseñanzas políticas en los involucrados, haciendo escalar la demanda específica hacia objetivos más amplios y aumentando la adhesión ciudadana.<sup>585</sup>

Intentando reconstruir la trayectoria de las protestas estudiantiles debemos situar históricamente los episodios y darles importancia a elementos que no necesariamente son evidentes u objetivos, como las identidades y proyectos en tensión entre los protagonistas. Creemos que el movimiento estudiantil chileno posdictatorial se articuló en base a una identidad y códigos de conducta comunes, siendo responsable de la reedición en dicho contexto de una cultura de la protesta que había desaparecido con el fin de la dictadura. El movimiento estudiantil chileno, entre los años 2001 y 2011, “permite la emergencia de una cultura política que se entreteje con la vida diaria, proveen nuevas expresiones de identidad y van en oposición directa al orden dominante”.<sup>586</sup>

Respecto de las formas, el movimiento estudiantil en ese ciclo emplea distintas formas de manifestación y protesta, incluyendo la violencia como un instrumento racionalmente utilizado. Las marchas, tomas de establecimientos, barricadas y enfrentamientos con la policía rompieron con la rutina, logrando asombrar a quienes fueron testigos y desorientar por un tiempo a la élite gobernante.<sup>587</sup>

## EL MOCHILAZO DEL 2001

La aparente pasividad que caracterizó al movimiento estudiantil y a la sociedad chilena en general en la década de los 90 se quiebra el año 2001 con un episodio



de protesta que será bautizado por la prensa como “Mochilazo”. Esta sucesión de marchas, enfrentamientos con la policía y concentraciones en el centro de Santiago, fue protagonizada por estudiantes secundarios, muchos de ellos de colegios periféricos que protestaban por el alto costo del pase escolar.<sup>588</sup>

Desde la reforma educativa de 1981 que se realizó durante la dictadura, una serie de ámbitos de la educación chilena pasaron a manos de privados convirtiéndose así en un espacio más de inversión del mercado. La descentralización administrativa de la educación pública, el financiamiento a través de la subvención a la demanda y la creación de instituciones privadas fueron algunos de esos aspectos de mercantilización educativa.<sup>589</sup> Para los estudiantes secundarios, nacidos en los últimos años de dictadura y con bajo nivel de politización, las primeras protestas, más que estar guiadas por una crítica profunda y sistémica, fueron un alzamiento contra las perversiones del modelo que se hacían cada vez más evidentes.

Un primer elemento que podemos advertir en la protesta del 2001 es que contiene una demanda muy acotada: la distribución, costo y calidad del pase escolar. La rebaja en la tarifa del transporte no era administrada por el Estado, sino por el gremio de microbuseros que cobraban a los estudiantes por la elaboración de la tarjeta estudiantil. La indignación se apoderó de los estudiantes por el retraso en la entrega en los años 2000 y 2001 y aumentó cuando se percataron de que los pases estaban siendo reimpresos sobre tarjetas antiguas que al pasarles una moneda descubrían su impresión anterior. Los estudiantes llamaron a la tarjeta “los pases raspe”.<sup>590</sup>

Un segundo elemento, es que quienes protagonizaron la protesta fueron jóvenes de entre 12 y 18 años que se organizaron en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (

ACES

), integrada por representantes de los centros de alumnos o de las asambleas de estudiantes de los liceos de Santiago. La

ACES

retoma la lucha histórica llevada a cabo por la

FESES

(Federación de Estudiantes Secundarios), formada en los años 60 y que durante la dictadura había liderado las protestas a favor de una tarifa estudiantil reducida. Sin embargo, la

ACES

se diferenciaba de la

FESES

en términos organizativos. Mientras que la segunda respondía a la lógica federativa, la primera convocó a los estudiantes ensayando fórmulas horizontales de coordinación que daban cuenta del nuevo contexto. Otra diferencia era que los jóvenes, a diferencia de aquellos de generaciones pasadas, no tenían militancia política y sus asambleas y organizaciones se distanciaban de las agrupaciones políticas tradicionales, lo que facilitó el proceso de aprendizajes propios a partir de la experiencia. Los adolescentes rompían no solo con el inmovilismo de la sociedad chilena, sino también con la concepción tradicional respecto de quiénes son los sujetos que legítimamente pueden realizar demandas al Estado. A partir del 2001, los estudiantes secundarios se posicionan como un actor político más en la transición chilena.<sup>591</sup>

La transición democrática había neutralizado, cooptado o deslegitimado las formas de organización y participación autónoma.<sup>592</sup> En el caso de los estudiantes secundarios, la Cámara de Diputados había creado y financiado a fines de los años 90 el Parlamento Juvenil en el que participaban representantes de centros de alumnos de todo el país, no obstante, la mayoría de los estudiantes no se sentían representados por estas instancias institucionales.<sup>593</sup>

Durante la dictadura, quienes habían participado habitualmente de las jornadas de movilización eran los colegios tradicionales del centro de Santiago. Esto cambia a partir del 2001, cuando se integran masivamente estudiantes de colegios marginales, donde la política no llegaba, pero con mayor fuerza se vivían las consecuencias de la neoliberalización de la educación.<sup>594</sup> Los estudiantes de colegios para pobres irrumpieron en los procesos de movilización y en la política nacional de manera violenta, con desprecio por la institucionalidad y subvirtiendo las “formas” de la política, lo que significó que fueran catalogados por la prensa, e incluso por la autoridad, como lumpen, delincuentes, infiltrados.<sup>595</sup> El neoliberalismo no tiene lenguaje crítico, dirá

Henry Giroux, y en el Chile del 2001 no había otra forma para conceptualizar la protesta. Solo era posible, desde aquella óptica, ver anomia social.

En abril de 2001, tras desconocer el acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Parlamento Juvenil y la asociación de microbuseros, la

ACES

convocó a un paro y una movilización estudiantil.

El llamado fue exitoso, lo que se reflejó en un ausentismo escolar del 85% en los colegios del centro de Santiago y de un 25% en el resto de la Región Metropolitana.<sup>596</sup> Este éxito permitió la legitimación de esta organización horizontal y resolutive entre los propios estudiantes, aunque para las autoridades era incomprensible esta forma de articulación. La ministra de Educación, Mariana Aylwin, hablaba de prácticas de “democracia directa” entre los estudiantes y señalaba que era imposible lograr acuerdos con jóvenes que no respondían a formas de representación clásica. Los periódicos destacaban que quienes estaban liderando las protestas eran niños que no superaban los 18 años.<sup>597</sup>

La incorporación de estudiantes secundarios a la política fue valorada de distintas formas por otros actores políticos nacionales. Mientras que el presidente de la República, Ricardo Lagos, trataba a los estudiantes de “chiquillos”, la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados desconocía a los jóvenes como interlocutores válidos, señalando que “Chile es el único país donde un gremio poderoso como el de la Asociación Gremial de Transporte negocia con estudiantes secundarios con la complacencia del Estado”.<sup>598</sup> En una posición distinta, los profesores, agrupados en la Asociación Gremial Metropolitana, llamaban a apoyar el paro y sumarse a la movilización por la gratuidad del pase.<sup>599</sup>

La fuerza y masividad de la protesta obligó a iniciar conversaciones con los transportistas, los que acordaron la entrega gratuita del pase en 2001 a todos los alumnos que habían recibido credenciales momentáneas y “pases raspe”. Además, al final del periodo de protesta, los estudiantes habían logrado que el control del pase escolar volviera a manos del

MINEDUC

terminando con décadas de administración privada.

Una de las características que podemos destacar de esta coyuntura, es la masividad que adquirieron las convocatorias de las marchas y, por otro lado, la violencia con que se desarrollaron dichas manifestaciones. La imagen que quedaba de la protesta en distintos medios de comunicación era la de miles de adolescentes corriendo por el centro de la ciudad, sin conducción, rompiendo ventanales, apedreando a la policía y a los microbuses, escapando de los carros lanzagua y gases. La sociedad chilena era sacudida por miles de niños y jóvenes que denunciaban la corrupción, exigían derechos y balbuceaban las primeras demandas de reconstrucción de lo público (véase cuadro 1: jornada de protesta estudiantil, 2001).

Las acciones de protesta estrenadas por los secundarios eran distintas a las ritualizadas manifestaciones universitarias. Eran espontáneas, desordenadas y con objetivos múltiples. Los actos de violencia no consistían solo en apedrear a carabineros y eludir las bombas lacrimógenas, sino que se manifestaban en contra de la propiedad y de símbolos que representaban la diferenciación social, como bancos o la Scuola Italiana.<sup>600</sup>

Si superamos el análisis psicologista de las acciones de violencia, podemos señalar que aquellas formas de protesta desplegadas por los secundarios tienen directa relación con el nivel organizativo y los componentes estratégicos de la acción. El estreno de formas de organización asamblearia y el móvil de la protesta ligado a una “indignación” producto de los llamados “pases raspe”, genera un accionar violento de carácter volcánico, organizado “desde abajo” y defensivo, que podemos comparar con las revueltas de hambre organizadas en la sociedad rural tradicional. Siguiendo a Tilly,<sup>601</sup> decimos que la debilidad de las redes de relaciones internas y la situación política —marginal— de los actores condicionan las formas de violencia a las que acceden.

CUADRO 1:

*Características de las protestas de 2001*

Fecha	Convoca
Abril 4	ACES
Abril 9, 10, 11 y 12	ACES
Abril 16, 17 y 20	ACES
Abril 23	Parlamento Juvenil.
Mayo 16, 17, 23, 24, 29, 30 y 31	Federaciones de Estudiantes universitarios. Un
Mayo 31 Junio 1, 7, 8, 14 y 22	CONFECH

Los periódicos consignaron algunas informaciones interesantes para el análisis global de estos episodios de protesta: primero, que la adhesión a la movilización en los liceos emblemáticos fue de un 80%, contrastando con 20% del resto de la Región Metropolitana;<sup>602</sup> segundo, que existió un apoyo por parte de los funcionarios de los establecimientos de la demanda estudiantil y la autoridad ministerial, representada en la figura de Mariana Aylwin, reconoce su impotencia frente al sistema de cobro de los pases,(a través de cuentas privadas, sin dineros estatales comprometidos), y finalmente, que según una encuesta de la Universidad Mayor, el 88% de los santiaguinos apoyaban las demandas del movimiento estudiantil. Las cifras definen una tendencia que se instala en las manifestaciones estudiantiles en la década analizada: la alta convocatoria, la defensa de las autoridades al modelo neoliberal y la favorable recepción que las demandas estudiantiles tienen en la ciudadanía.

La presencia masiva de estudiantes populares en las manifestaciones del centro de la capital fue vista por muchos con horror. Les atemorizaba observar a los jóvenes marginales apropiándose del espacio público, lo cual generó que la prensa nacional los denominara como infiltrados, violentistas y delincuentes, instalando mediáticamente estos calificativos en el discurso público. Con el argumento de resguardar el orden y la seguridad, las autoridades les exigían a los convocantes a las marchas el control de los manifestantes. A fines de abril, un diputado manifestaba su “preocupación por la incapacidad de los dirigentes escolares para controlar la convocatoria que concluyó con violentos disturbios, más de 500 detenidos y graves daños a la propiedad pública y privada”.<sup>603</sup>

Más allá de los logros reivindicativos de la movilización, esta terminó siendo un estallido que visibilizó a los secundarios como sujetos políticos, a los cuales el mundo político adulto comenzó a mirar. Basándonos en las afirmaciones de Tilly, la protesta, como cualquier otra acción colectiva, es una acción marcada por la racionalidad, por lo que, pese a que la prensa y parte de la opinión pública calificaron la movilización como una acción espontánea y un ejercicio de violencia irracional, debemos reconocer un conflicto y analizarlo más allá de esperar el logro de un consenso. En este conflicto, el estado es un actor más. Siguiendo la línea de autores como George Rudé, podemos ver multitud donde otros solo ven turba.

## LA REVOLUCIÓN PINGÜINA DEL 2006

Hacia el 2006 en Chile las contradicciones de la transición política se hacían más evidentes, los gobiernos de la Concertación habían profundizado el modelo y esto fue más claro aún durante la presidencia de Ricardo Lagos, debido al extenso plan de privatizaciones que implementó continuando con la tendencia impuesta por Frei. Estas políticas generaron una ampliación de las críticas hacia el conglomerado de centroizquierda. En el plano educativo, la Jornada Escolar Completa estaba pronta a cumplir 10 años desde que se decretó para todos los colegios municipales y subvencionados por el Estado, sin cumplirse las promesas de mejoramiento de la infraestructura y formación integral con la que se había implementado en 1997. A esto se sumaba un par de reformas curriculares y la medición de la calidad a través de pruebas estandarizadas.

En la educación universitaria se hacía evidente el crecimiento de la demanda, que era visto por los gobiernos de la Concertación como un indicador de desarrollo, pero al que no respondieron con una ampliación de recursos para las universidades públicas, sino estimulando la oferta de las instituciones privadas de educación superior a través del otorgamiento de créditos bancarios para los estudiantes que no pudieran pagar, a eso se le llamó “crédito con aval del Estado”. La política pública una vez más se convertía en sostén del mercado financiando la demanda y legitimando el endeudamiento con créditos usureros.

Existía, además, una articulación mayor de las demandas en varios movimientos sociales que comenzaban a manifestarse. Respecto del movimiento estudiantil, la experiencia del 2001 fue heredada por otros estudiantes secundarios que se mantuvieron articulados en la

ACES

.

Como una forma de enfrentar las críticas, la centroizquierda presentó a una mujer como candidata en las elecciones del 2005, la que triunfó en segunda vuelta derrotando a Sebastián Piñera en su primer intento por ser presidente. Michelle Bachelet sería entonces la mandataria que debería enfrentar la protesta estudiantil secundaria del 2006 a meses de asumir el gobierno.

La característica principal de la coyuntura de protesta del 2006 fue la superación de la demanda gremial y la instalación de la demanda política desde una crítica profunda a la Ley Orgánica Constitucional,<sup>604</sup> lo que implicaba cuestionar una de las bases de la continuidad dictatorial. Esta demanda, que no era economicista, alentó a algunos intelectuales y analistas a decretar el fin de la transición.

La coyuntura nuevamente estuvo protagonizada por los estudiantes secundarios que cambiaron los repertorios de movilización callejera por la ocupación de los establecimientos o “tomas” como forma principal de presionar al gobierno.

El episodio que origina la “revolución pingüina”<sup>605</sup> fue la inundación por lluvia de un liceo en la ciudad de Lota, en el sur de Chile. Este hecho catalizó el descontento de los estudiantes y dio visibilidad al proceso de politización que se había desarrollado a partir del episodio de protesta anterior. La denuncia de las precarias condiciones en las que funcionaban los establecimientos, la inexistencia de actividades recreativas o culturales y la falta de espacios para almorzar se comenzó a replicar en distintos lugares del país. El inundado Liceo de Lota pasó a ser el símbolo de la crisis de la educación secundaria chilena.

## CUADRO 2:

### *Características de las jornadas de protestas de 2006*

Fecha	Convoca	Móvil de la protesta
Abril 26 y 27	Estudiantes secundarios CONFECH	Rebajas en el pase escolar
Mayo 4	ACES	Gratuidad de la PSU. Moc
Mayo 10	ACES	Gratuidad de la PSU. Moc
Mayo 17	Estudiantes secundarios CONFECH.	Rechazo a la municipaliza
Mayo 19	Centros de estudiantes por liceos.	
Mayo 30 y 31	CONFECH	



Junio 5

Secundarios

---

La crítica de los estudiantes tenía dos niveles: por un lado, el estructural, donde se señalaba a la

## LOCE

como un resabio de la dictadura que consagraba la libertad por sobre el derecho de enseñanza y, por otro, el concreto, en que se criticaba a la

## JEC

y su implementación, por no garantizar la calidad de la educación ni las condiciones mínimas para su funcionamiento.<sup>606</sup>

Las primeras convocatorias a protesta en esta coyuntura siguieron el patrón de la movilización del 2001, es decir, principalmente compuestas por estudiantes secundarios, con acciones violentas y sin mucha articulación, mientras en paralelo se comenzaba a desarrollar una línea más institucional. Los partidos políticos habían desarrollado vínculos militantes con algunos secundarios, que desde las vocerías se instalan a la cabeza de las demandas. Esto le otorgó al movimiento masividad y transversalidad. Así, las acciones de explosión violenta se desarrollaron en paralelo con acciones de negociación y de movilización dentro de la institucionalidad.

Si analizamos algunos hitos, destacan, por ejemplo, el escalamiento de los niveles de masividad y violencia de la protesta, pero también de la demanda gremial (ver cuadro de protestas 2006). Si bien los disturbios de abril se insertan en la protesta que año a año realizaban los universitarios para exigir más fondos estatales para los créditos, en las jornadas siguientes se van a sumar los estudiantes secundarios y sus demandas, llegando así a los violentos disturbios del 10 de mayo que dejaron más de 1.200 detenidos. Después de ese episodio, los presidentes de los centros de alumnos de los liceos tradicionales de Santiago comenzaron a ganar visibilidad. Coordinados en la

## ACES

, asumieron el rol de voceros. Las protestas dejaron una gran cantidad de denuncias por abuso policial, lo que generó dos consecuencias: la primera fue que los estudiantes optaron por cambiar la forma de movilización, comenzando las tomas de colegios;<sup>607</sup> y la segunda, que fuera reconocido por parte del

gobierno y la policía el uso de fuerza excesiva, lo que ocasionó la remoción de sus cargos de los encargados de Fuerzas Especiales de Carabineros.<sup>608</sup>

El 30 de mayo se convocó a un paro nacional y el gobierno aceptó negociar, se constituyó el Comité Asesor Presidencial de Educación para discutir los temas de largo plazo planteados por los escolares; los secundarios tenían seis representantes. La movilización colectiva adopta una condición dialéctica entre apertura y resistencia,<sup>609</sup> diferenciándose en algunos elementos de las jornadas de protesta del 2001 (véase cuadro 2: jornada de protesta estudiantil 2006).

Si bien las acciones de violencia se mantuvieron, el desarrollo en paralelo de tomas de colegios impresionó de manera positiva a los chilenos. La opinión pública dejó de centrarse en la crítica a la violencia para simpatizar con la demanda y las tomas.<sup>610</sup> La televisión hizo notas mostrando la rigurosa organización interna de los liceos tomados y los sacrificios que los estudiantes hacían por lograr sus demandas. Los líderes estudiantiles, a diferencia del 2001, pertenecían a los colegios emblemáticos de Santiago y la mayoría tenía vínculos con partidos políticos tradicionales. Estas características les permitieron ser reconocidos como interlocutores válidos, comenzando el proceso de negociación con el gobierno.

Las tomas se masificaron rápidamente, incorporándose al movimiento algunos colegios pagados de élite. Todos estaban a favor de derogar la

## LOCE

. Las modestas reivindicaciones del Liceo de Lota dieron paso a demandas políticas transversales negociables. Sin embargo, los partidos políticos retiraron a sus voceros cuando el movimiento comenzó a radicalizarse y no aceptó las propuestas oficialistas. Finalmente, se constituyó un panel de expertos que tendría como tarea la elaboración de la nueva legislación. En esa instancia no tenían participación los estudiantes movilizados.

Pese al desenlace, hay una serie de elementos poco considerados posibles de destacar. Según el historiador español Eduardo González Callejas, en los ciclos de movilización se desarrolla un proceso de particularización ideológica, de diferenciación estratégica y de adopción de tácticas distintivas entre los diferentes competidores por el mismo espacio político.<sup>611</sup> Siguiendo este análisis, podemos afirmar que en el 2006 se generan diferencias en las posturas entre los

colectivos estudiantiles y dirigentes. Muchos estudiantes no se tomaron los establecimientos para evitar la violencia, sino como una forma de apropiarse de sus espacios y construir política desde ahí. Los estudiantes de los colegios marginales, donde no existía tradición de participación política, se sintieron convocados y aprovecharon la coyuntura para expresar su propio descontento. En estos colegios, la fuente de conflicto se movía en una sintonía distinta a los emblemáticos, ahí el nudo central del conflicto era la mala gestión, la deficiente infraestructura y la calidad de la enseñanza. Las tomas les permitieron a los alumnos visibilizarse en sus comunidades y legitimar la protesta en un sector social poco politizado y alejado de las luchas sociales. Esos estudiantes marginales carentes de tradición política incorporaron nuevas experiencias y construyeron formas de participación que, sin embargo, no lograron dialogar con el poder y se siguieron manifestando en forma de resistencia.

El 29 de septiembre fue presentado el primer informe del consejo asesor que planteaba, entre otros acuerdos, la sustitución de la

## LOCE

por la Ley General de Educación. Los escolares se manifestaron disconformes y el conflicto rebrotó el 6 de octubre, no obstante, la movilización no logró alcanzar el éxito de las primeras manifestaciones. El día 5 de diciembre, la

## ACES

decidió retirarse del consejo asesor. Finalmente, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza fue enviado por la presidenta Bachelet al Congreso Nacional el 10 de abril del 2007<sup>612</sup> cerrando el episodio movimental.

“Los ciclos de protesta son los crisoles o encrucijadas en donde se inventan, evolucionan y se perfeccionan nuevos repertorios de acción colectiva, y donde se produce la socialización política de las nuevas generaciones. Son además profundamente creativos: amplían los límites del pensamiento político popular, innovan las tácticas y las estructuras políticas y sindicales, o permiten la constitución y ruptura de alianzas estratégicas entre los grupos políticos y sociales”.<sup>613</sup> El movimiento del 2006 estrenó formas de movilización para esa generación relegada de la política institucional y formal, pero también generó una profunda ruptura entre actores de la misma. Esta ruptura fue evidente cuando un año más tarde la

LOCE

fue reemplazada, en un acuerdo unánime entre la izquierda y la derecha institucional, por la Ley General de Educación (

LGE

), que profundizó las características de mercado de la educación chilena. Ese proceso es reconocido por los estudiantes chilenos como “La traición de la clase política”.

### 2011, MOVIMIENTO POR LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN: A PROTESTAR COMO EN DICTADURA

Un antecedente del movimiento de 2011 fueron las jornadas de protesta universitaria en el año 2008, lideradas por una nueva organización que coordinaba al movimiento secundario y universitario. Es visible a partir de aquí la emergencia de una nueva generación, formada políticamente en las anteriores coyunturas de movilización. Los estudiantes que participaron como secundarios en la Revolución pingüina, lo harán también en el 2008 y en el 2011 como universitarios.<sup>614</sup>

En específico, las jornadas de protesta del 2008 fueron menos masivas e igualmente violentas, pero se insertan entre la desilusión respecto de los efectos de la movilización del 2006 y la escalada radical de las demandas gremiales que va a ocurrir en el 2011. La conducción de esas jornadas de protesta estuvo en manos de la

ACEUS

, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios, que aglutinó de manera coyuntural a cerca de un centenar de estudiantes y grupos políticos disconformes.<sup>615</sup> En los estudiantes secundarios, se observa una politización y radicalización del discurso, y frente a la aprobación de la Ley General de Educación (

## LGE

) se levantó un amplio movimiento que basaba su crítica en que el cambio era solo cosmético y no revertía el principio de desigualdad y segregación de la educación chilena. Los universitarios comenzaron a tener un papel importante, instalando una crítica a la educación de mercado politizando la demanda. Durante el 2007, las universidades habían estado hasta dos meses en paro con el fin de impedir la aprobación de la

## LGE

,<sup>616</sup> no obstante, esta había sido aprobada en el marco de un acuerdo entre gobierno y oposición.

Así entonces, el movimiento estudiantil chileno del 2011 se configura a partir de experiencias organizativas existentes desde hace una década y emerge con un importante grado de desconfianza ante los partidos y la institucionalidad política por los resultados del 2006. Pero además, posee otros elementos coyunturales que le dan masividad, uno de ellos es que correspondía en ese año la implementación de la última etapa de la reforma educacional que involucraba a la educación superior; el otro elemento de contexto, tiene que ver con las características del gobierno en curso. El año anterior había llegado a la presidencia una coalición de derecha, lo que rememoró en un sector importante de la población las prácticas de protesta y resistencia utilizadas durante la dictadura de Pinochet. La lucha contra la educación de Pinochet se convirtió en un discurso legitimador de la protesta e incluso de la violencia, alimentado por la consigna a “protestar como en dictadura” (véase cuadro 3: jornada de protesta estudiantil 2011).

La movilización de los estudiantes universitarios fue convocada por la

## CONFECH

(Confederación de Estudiantes de Chile), liderada por el Partido Comunista, exigiendo un aumento en los aportes basales para los planteles públicos y levantando una crítica al sistema del voucher.<sup>617</sup> A semanas de comenzar el conflicto, los estudiantes secundarios de los colegios emblemáticos comenzaron a tomarse sus establecimientos con cuatro demandas específicas y una estructural: la tarifa reducida para el transporte público todos los días del año, la estatización de los colegios, el financiamiento para la enseñanza técnico-

profesional y la destinación de recursos para mejorar la infraestructura de los colegios dañados por el terremoto que había afectado al país en febrero del 2010. Estas demandas específicas fueron poco a poco dando paso a críticas y exigencias más de fondo. Con el desarrollo de la protesta, la que se constituyó en la demanda fundamental fue el cambio de la Constitución para consagrar como garantía el derecho a la educación y la responsabilidad del Estado en la satisfacción de este derecho.

Las federaciones de estudiantes de provincias más la federación de la

UTEM

(Universidad Técnica Metropolitana) —que eran las más precarizadas, con mínimos aportes estatales y que recibían a los estudiantes más pobres— lideraban posiciones más radicales al interior del movimiento, las que poco a poco se fueron imponiendo, generando un escalamiento en las demandas.

### CUADRO 3:

#### *Jornadas de protesta estudiantil 2011*

Fecha	Convoca
Del 12 de abril al 5 de junio	Federación de Estudiantes de la Univers
Del 7 al 15 de junio	Estudiantes secundarios FEMES ACES.
Del 16 de junio al 24 de agosto	CONFECH Estudiantes secundarios.
Agosto 24 y 25	CONFECH . CUT .
Del 15 de septiembre al 2 de noviembre	CONFECH .

Así, la educación pública y gratuita se convirtió en la consigna fundamental del movimiento, y a eso se agregó la prohibición del lucro en la educación<sup>618</sup> y la democratización de las instituciones de educación superior, esto sumado a las demandas específicas de los estudiantes secundarios.

Las manifestaciones multitudinarias en todo el país adquirieron formas muy heterogéneas. Se convocó a marchas a las que acudieron hasta 100.000 personas (contando solo las de Santiago), hubo caceroleos, campañas para lograr la adhesión de artistas, intelectuales y personalidades de todo el mundo y también acciones de violencia como barricadas y jornadas de enfrentamiento con la policía, tomas de colegios y universidades, ocupaciones de instituciones emblemáticas como la

## UNICEF

y hasta una huelga de hambre de algunos estudiantes secundarios. A las demandas iniciales, se fue sumando la indignación por la falta de respuesta de las autoridades.

Los dirigentes universitarios representaban a distintas orientaciones políticas, pero la prensa advertía que se estaban imponiendo las posturas “ultras” al interior de la

## CONFECH

,<sup>619</sup> refiriéndose así a los representantes de organizaciones con posturas más radicales o que eran parte de la izquierda extraparlamentaria.

Los estudiantes secundarios en esta coyuntura actuaban divididos en dos organizaciones: la Coordinadora Nacional de Estudiantes y la

## ACES

. Mientras los primeros representaban la línea histórica de participación política de los colegios emblemáticos, los segundos agrupaban a estudiantes descontentos con las formas tradicionales de hacer política, se identificaban con militancias autodefinidas como revolucionarias y ejercían y reivindicaban la violencia.<sup>620</sup> Fuera de estos espacios, había una serie de estudiantes que recién se iniciaban en la politización, levantando organizaciones de bases, como



colectivos y cordones zonales.

Los jóvenes de sectores marginales y aquellos vinculados a pequeñas organizaciones antisistémicas concurrían en masa a las marchas y jornadas de protesta, manifestando su rechazo a la institucionalidad tanto política como gremial. Su accionar, que podemos definir como de violencia social en un contexto de violencia política, era la continuidad de las formas utilizadas por los marginales para manifestarse desde tiempos remotos, cuando no existía ninguna otra forma de participación política. La institucionalidad democrática acepta la manifestación, pero niega la protesta sobre todo si esta es violenta. Es por eso que una vez más la prensa denuncia la presencia de “infiltrados”.

Otros repertorios de violencia identificables son aquellos utilizados por los estudiantes que forman parte de organizaciones políticas radicales, como las bombas molotov, barricadas y enfrentamientos en las universidades. Estas formas de violencia en general son rechazadas por la opinión pública, pero en ocasiones adquieren legitimidad, sobre todo cuando una demanda es aprobada masivamente y no encuentra respuesta por parte de la autoridad. También la violencia es aceptada cuando se manifiesta contra un símbolo de abuso. Así sucedió, por ejemplo, cuando en el contexto de las jornadas de protesta del 2011, una multitienda cuestionada por haber cobrado intereses abusivos contra los clientes fue incendiada.<sup>621</sup>

Las formas de violencia expresadas en este conflicto pueden interpretarse desde la clasificación que Charles Tilly nos entrega. Para el autor, existen varias localizaciones de violencia, que varían de acuerdo al grado de coordinación entre los protagonistas de esta y el grado de importancia o proyección que adquiere dentro de la acción colectiva. En una primera clasificación, encontramos la que Tilly define como una violencia de tipo resistencia fragmentada o dispersa y que se produce cuando, en el curso de una manifestación pequeña y generalmente no violenta, un número de participantes interactúan a través de actos no legales y lesivos. En esta coyuntura la encontramos en las marchas pacíficas convocadas por las organizaciones estudiantiles: en ellas, al final de la columna de participantes, un grupo de estudiantes se descolgaba de la trayectoria de la marcha y comenzaba a provocar a los carabineros, ocasionando destrozos de mobiliario urbano y lanzando objetos contundentes a la fuerza pública.

La otra forma de violencia es la que se manifiesta como una especie de ritual en los espacios universitarios. La capucha, la barricada, las piedras, son parte de

una cultura violenta que se utiliza con cierta regularidad y que tiene un grado de ritualización, ya que es organizada y apunta a objetivos específicos. No incluye saqueos ni violencia desatada en contra de todo lo que se cruce como la anteriormente descrita, sino que consiste básicamente en el enfrentamiento con la fuerza pública desde un espacio que se considera como propio. A esta forma de violencia Tilly la denomina juegos y rituales violentos.

Una de las últimas marchas masivas de la coyuntura del 2011 fue la llamada Marcha de los paraguas, nominada así porque se desarrolló en un día con mucho frío y lluvia en Santiago. Convocó a 100.000 personas solo en Santiago, las que con paraguas de distintos colores transitaban por las calles definidas por los convocantes.

## LAS RESPUESTAS DESDE EL PODER: LOS DISCURSOS SOBRE LA VIOLENCIA POPULAR Y LAS ACCIONES REPRESIVAS DESDE EL ESTADO

“La violencia es uno de los recursos de acción más potentes de un movimiento, pero se transforma en una grave responsabilidad cuando otros actores de la escena política se atemorizan ante su presencia, las elites se agrupan en nombre de la Paz social y las fuerzas del orden aprenden a responder eficazmente”  
(Gonzáles Calleja, 2002, p. 251)

Como analizábamos en párrafos anteriores, uno de los elementos que resalta en las manifestaciones estudiantiles es la fuerte adhesión que concita la demanda educativa en la población chilena, sin embargo, las acciones de violencia no son aprobadas por la mayoría de la población. Esto les da argumentos a los representantes del gobierno y a los medios de comunicación para construir un discurso de deslegitimación de la protesta, haciendo un llamado a los estudiantes a “manifestarse” respecto a sus “legítimas demandas” pero dentro de la institucionalidad. Una forma de interpretar este mensaje es que, para la democracia chilena, los movimientos sociales pueden manifestar un descontento y definir una demanda, sin embargo, no deben aspirar a ser parte de la solución, porque esta debe quedar en manos de las instituciones, entendidas estas como paneles de expertos, funcionarios de gobierno y parlamentarios.

Los medios de comunicación y el discurso oficial despojan de toda racionalidad a la violencia ejercida por los estudiantes, llamando infiltrados a los jóvenes que realizan destrozos, saqueos y barricadas, levantando todo tipo de tesis psicologistas sobre su accionar. Sin embargo, esta visión no es nueva. Los estudios históricos sobre la violencia han destacado el carácter político de la violencia ejercida por la élite y el carácter irracional que ha tenido aquella ejercida por los sectores populares. Es decir, la violencia desplegada desde las clases dominantes se ha considerado como un instrumento racional, sin embargo, la violencia utilizada por los dominados es explicada desde la rabia, la frustración, como la respuesta a la violencia estructural. Bajo esta lógica, la violencia popular no es un instrumento, sino que es consustancial al estado de precariedad organizativa y de frustración de los subordinados. En las jornadas de protesta que se suceden desde el 2001 y que tienen como protagonistas a los estudiantes, se utiliza esta clásica interpretación, explicando la violencia como arranques de irracionalidad perpetrados por encapuchados que se infiltran entre los manifestantes.

Las acciones de violencia que inauguran el ciclo se desarrollan el 4 de abril del 2001 y tienen como consecuencia más de 500 detenidos, además

de millonarias pérdidas. Para un país que no vivía jornadas de protestas masivas desde la década de 1980 era algo difícil de entender. Los propios organizadores se asombraron frente al grado de violencia desplegado, por lo que la

## ACES

señala días después que para las próximas convocatorias informará solo con una hora de anticipación para evitar infiltración de grupos foráneos y delincuentes.<sup>622</sup>

El informe de Carabineros de Chile, levantado luego de la primera semana de protestas, señala que en promedio los jóvenes tienen 15 años y que las manifestaciones han dejado una veintena de efectivos de la policía heridos, indicando que “no es normal que personas tan jóvenes actúen con la agresividad que han demostrado”.<sup>623</sup> Respecto a la acción policial, el 58% de los encuestados manifestó que Carabineros había hecho un uso excesivo de la fuerza.<sup>624</sup>

La fuerza pública utilizó en el periodo 2001-2011 algunos protocolos que son fuertemente cuestionados por los movimientos sociales y las organizaciones de Derechos Humanos. Las detenciones ilegales son las más cotidianas. Debido a

estas acciones, la

## ACES

en el 2001 interpone una querrela contra Carabineros por apremios ilegales y maltrato. Los hechos en concreto eran la detención de 10 jóvenes por carabineros sin identificación, seguimientos a estudiantes e interrogatorios ilegales.

En el informe elaborado por los observadores de Derechos Humanos para el periodo agosto-octubre del 2011 se denunciaron los métodos represivos utilizados por la policía chilena y, como introducción a la denuncia de casos específicos, se consigna que “las actuales violaciones a los derechos humanos para la policía y los agentes del Estado involucrados en ellas constituyen una continuidad, y el Estado ampara esa impunidad. Frente a los hechos acontecidos en los últimos años con la protesta mapuche, estudiantil y de otros sectores, a nivel de la represión se han utilizado varios de los mismos mecanismos y métodos usados por las fuerzas represivas durante la dictadura; si bien es cierto, el terrorismo de Estado de antaño no está plenamente resucitado, existen elementos que permiten visualizar la criminalización de la protesta social y la represión a los manifestantes como una política de Estado, que persigue amedrentar y atemorizar a quienes plantean modificar el actual sistema político, económico y social que impera en Chile”.<sup>625</sup>

Las acciones de violencia policial en Chile han tenido un amplio grado de respaldo en la institucionalidad y un bajo nivel de resistencia o denuncia por parte de la ciudadanía. Esto lo podemos explicar históricamente aludiendo a distintas causas. La primera tiene que ver con el exitoso proceso de neutralización de las organizaciones político-militares que lucharon contra la dictadura. Esta desarticulación y neutralización se realizó durante el proceso de transición democrática<sup>626</sup> y en la práctica significó el monopolio absoluto del uso de la violencia por parte del Estado y la legitimidad de ese uso. Por otro lado, existía hasta el 2011 un bajo nivel de conciencia de derechos por parte de la ciudadanía chilena. Estos dos factores determinan que los ciudadanos chilenos hayan normalizado acciones como la exposición a bombas lacrimógenas, la presencia de carros lanzagua en las protestas y las detenciones con golpes.

Las manifestaciones estudiantiles han desarrollado en la sociedad chilena una mayor conciencia sobre algunos derechos, sin embargo, antes de las protestas de

2019 existía poca valoración de algunos derechos sociales. Según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el 2013 solo el 55% respondió que el poder manifestarse libremente es parte de los derechos humanos, mientras que solo el 51% de los encuestados consideró que el no ser arrestado arbitrariamente es un derecho. Solo el 1% de los encuestados respondió que en Chile se respetan los derechos humanos a toda la población (

INDH

, 2013).

Pese a las denuncias de diversos organismos nacionales e internacionales, la ciudadanía chilena valoraba positivamente a las fuerzas de seguridad. En la encuesta antes referida, el 35% señalaba que en caso de que sus derechos humanos fueran pasados a llevar, recurriría a las policías, siendo la institución que más preferencias tuvo.

En un artículo publicado en el 2004, el cientista político chileno Claudio Fuentes daba a conocer la gran cantidad de denuncias por violencia excesiva de parte de Carabineros, y la baja influencia que estas denuncias tenían en promover un cambio hacia el respeto a los derechos humanos por parte de la institución. La explicación que ofrecía el autor a tal fenómeno era el grado de corporativismo de la policía chilena, “la institución policial es organizada jerárquicamente y tiene las capacidades y recursos para responder a ‘amenazas externas’. Las disputas internas son procesadas dentro de la institución, existen bajos niveles de filtración de comportamientos erráticos por parte de los policías y existe una defensa corporativa de las acciones de sus integrantes. Una institución con altos niveles de corporativismo es probable que desarrolle un sistema de relaciones públicas para responder a eventuales denuncias de abuso”.<sup>627</sup>

Las denuncias de los observadores de Derechos Humanos relataban uso de balines, tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, uso desmedido de la fuerza en manifestaciones y detenciones arbitrarias. Los reiterados casos de violencia policial llevaron a los dirigentes estudiantiles en el 2011 a presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<sup>628</sup> Frente a esas denuncias y refrendando las conclusiones de Fuentes, la institución policial ha actuado corporativamente y, si bien una de las consecuencias ha sido la expulsión de algunos funcionarios,<sup>629</sup> los procedimientos policiales no han sufrido ninguna variación significativa hasta la actualidad.

## EPÍLOGO: DE LA MARCHA DE LOS PARAGUAS HASTA EL SALTO DE LOS TORNIQUETES

Desde el 2001 al 2011 se desarrolló en Chile un ciclo de protestas que confluyeron en la conformación de un movimiento social por la educación que involucró a cada vez más actores y cuyo más reciente episodio ocurrió el 2019.

Los estudiantes chilenos, durante los años 2001, 2006 y 2011, desarrollaron diversas formas de organización y protesta para visibilizar sus demandas. Los usos de la violencia y los repertorios de la protesta adquieren distintas formas de acuerdo a las experiencias e identidades históricas de los actores; así, mientras que entre los estudiantes secundarios de los colegios tradicionales o emblemáticos existe una tradición y memoria de politización y participación, los estudiantes de colegios periféricos no tienen ese pasado al cual echar mano, lo que determina que cada episodio se viva como si fuera la primera experiencia, inventando formas de protesta que incluyen manifestaciones de violencia desarticulada. Estas últimas es posible compararlas con las históricas acciones de las turbas o multitudes y definirlas como manifestaciones de violencia social en un contexto de protesta política.

El grado de institucionalización de los grupos que se manifiestan también define distintos repertorios de violencia y de protesta. Las organizaciones estudiantiles universitarias son reconocidas por su poder como actores políticos legítimos, lo que define las lógicas de diálogo con la autoridad. Por el contrario, los estudiantes secundarios siguen siendo tratados como niños y pese a que se reconocen sus demandas, no son incorporados al diálogo ni a la búsqueda de respuestas. Esa es otra de las razones por las que las manifestaciones donde la presencia de estudiantes secundarios es masiva, la violencia tiende a presentarse con mayor recurrencia.

Desde el 2011, nuevas demandas han surgido, aunque se mantiene la crítica principal al neoliberalismo en educación, que se ha profundizado en la respuesta que han dado los distintos gobiernos a cada una de las exigencias de los estudiantes. El sistema de voucher existente para los créditos universitarios se implementó también en la gratuidad luego del 2011, lo que significó que una vez

más se subvencionaba la demanda, asignándole gratuidad a los estudiantes de los quintiles más bajos. Es decir, no existe en realidad educación gratuita, sino el pago del arancel por parte del Estado de los estudiantes más pobres a las universidades públicas o privadas donde estos decidan matricularse.

En paralelo a la exigencia de gratuidad se levantó la demanda por la eliminación de las deudas universitarias o créditos con aval del Estado, que habían sido otorgados a los estudiantes con un alto interés, por lo que, muchas veces, los nuevos profesionales pagaban un valor total superior al costo de una vivienda.

Pero ha habido otras reivindicaciones de naturaleza distinta, la más relevante de las cuales ha sido la desarrollada entre el 2017 y 2018 en torno a las demandas de género, la principal de ellas contra el acoso sexual que estimuló la movilización en casi todas las universidades públicas del país y en muchas de las privadas también. Este episodio fue bautizado como el paro feminista y, a partir de él, se han implementado una serie de protocolos y de políticas de inclusión en las instituciones de educación superior, con resultados bastante limitados.

Los secundarios se han mantenido activos, aunque sin lograr grandes convocatorias. Por el contrario, muchas de sus acciones han generado un apoyo restringido al activo político más radical y solo se han acotado a los colegios tradicionales del centro de Santiago. Vinculado con esto, la organización interna ha tendido al asambleísmo, existiendo periodos donde predominan las acciones conducidas por pequeños grupos anarquistas.

Realizando un listado esquemático de las características y móviles de la protesta en este periodo podemos reconocer:

La mantención de acciones de protesta violenta, conocidas como “salidas a la calle”, consistentes en el uso de molotov, cortes de calle y enfrentamientos con la policía.

La reacción represiva por parte de las autoridades nacionales, municipales y también de los propios colegios, se expresó en un discurso criminalizador que propuso soluciones legislativas como Mochila Segura y Aula Segura, que eran leyes que permitían la persecución y expulsión inmediata de los estudiantes involucrados en actos de violencia. Esto generó a su vez una ola de protesta por parte de los estudiantes.

Se desarrollaron también una serie de protestas para terminar con los colegios

divididos por sexo.

Durante este periodo las demandas se han complejizado y dividido a los estudiantes entre quienes asumen y aceptan modificaciones dentro del modelo y aquellos que plantean una transformación radical. Los primeros tienden a movilizarse siguiendo los rituales de la manifestación pacífica, y los segundos utilizan la acción violenta también ritualizada.

Hasta octubre de 2019 se expresaba una paradoja en la opinión pública chilena, ya que, si bien mayoritariamente condenaba el uso de la violencia estudiantil, no manifestaba mayor crítica a la violencia de la policía. Reconocíamos entonces la existencia de una débil concepción de derechos de los chilenos, cuestión que parece estar cambiando paulatinamente.

Como señalábamos al inicio de este texto, las protestas de 2019 fueron originadas por las evasiones masivas que realizaron los estudiantes secundarios en el metro de Santiago y que luego se expandieron al metro de Valparaíso. La expresión “saltar el torniquete” se convirtió en la definición no solo de la evasión del transporte, sino de todos los efectos provocados por la Constitución y el modelo económico de la dictadura de Pinochet. Quienes salieron a protestar manifestaban que estaban en deuda con los estudiantes secundarios por iniciar el movimiento, por despertar a Chile.



## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Alzate, Mary, “Esbozo teórico de la acción política colectiva. Experiencias colectivas alternativas frente a las relaciones hegemónicas de dominación”, en Investigación y Desarrollo, vol. 16, N° 2, 2008, pp. 278-303.

Castro, Lucas, Morales, Felipe y Ossandón, Gonzalo, “El Mochilazo. Buscando nuevas formas de organización al comenzar el siglo

XXI”

, en De actores secundarios a estudiantes protagonistas versión 2.0, Santiago, 2010.

Cornejo, Rodrigo, “El experimento educativo chileno 20 años después: Una mirada crítica a los logros y falencias del sistema escolar”, en Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, España, vol. 4, N° 1, 2006, pp. 118-129.

Cox, Cristian, La Reforma de la Educación Chilena: “Contexto, Contenidos, Implementación”. Disponible en:  
[http://www.oei.es/reformaseducativas/reforma\\_educacion\\_chilena\\_cox.pdf](http://www.oei.es/reformaseducativas/reforma_educacion_chilena_cox.pdf)

De la Cuadra, Fernando, “Movimiento estudiantil en Chile: Lucha, participación y democracia”, en Revista Electrónica Síntesis. La Democracia en Disputa: Trabajo Social y Movimientos Sociales en América Latina. Disponible en:  
<http://jovenesenmovimiento.celaju.net/wp-content/uploads/2012/09/CHI-14.pdf>

Fuentes, Claudio, “La inevitable ‘mano dura’: sociedad civil y violencia policial en Argentina y Chile”, en Revista de ciencia política, Santiago, vol. 24 N° 2, 2004, pp. 3-28.

Garcés, Mario, El despertar de la sociedad. El Movimiento estudiantil en América Latina y Chile,

LOM

, Santiago, 2011.

Garretón, Manuel Antonio y Garretón, Roberto, “La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales”, en Revista de ciencia política, vol. 30 N° 1, 2010, pp. 115-148.

Giroux, Henry, “El neoliberalismo y la crisis de la democracia”, en Revista Anales de la Educación Común, Buenos Aires, vol. 1, N° 1, 2005.

González, Eduardo, La Violencia en la Política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Editorial

CESIC

, Madrid, 2002.

Gómez, Juan, “La rebelión de las y los estudiantes secundarios en Chile. Protesta social y política en una sociedad neoliberal triunfante”, en

OSAL

, *Observatorio Social de América Latina*, año

VII

, N° 20,

CLACSO

, Argentina, 2006 1515-3282, pp. 107-116.

Huneus, Carlos. La Democracia Semisoberana. Chile después de Pinochet, Editorial Taurus, Santiago, 2014.

y Maldonado, Luis, “Demócratas y nostálgicos del antiguo régimen. Los apoyos a la democracia en Chile”, en Revista Reis, N° 103, julio-septiembre de 2003, pp. 9-49.

Jocelyn Holt, Alfredo, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin

parar, Editorial Planeta, Santiago, 1998.

Lozoya, Ivette, “Democracia y Violencia política. El Mapu Lautaro y la derrota de la vía revolucionaria en los 90”, en Pozzi y Pérez, Historia oral e historia política,

LOM

, Santiago, 2012.

Melucci, Alberto, The Process of Collective Identity. Challenging Codes. Collective Action in Information Age Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 68-77.

Moulián, Tomás, Chile actual anatomía de un mito,

LOM

, Santiago, 1997.

Natanson, José, “El retorno de la juventud”, en Revista Nueva Sociedad, México, n° 243, 2013, pp. 92-103.

Retamal, Jaime, Nos siguen pegando abajo. Jaime Guzmán, dictadura, concertación y alianza: 40 años de educación de Mercado, Editorial

CEIBO

, Santiago, 2013.

Revilla, Mary, “América Latina y los movimientos sociales: el presente de la ‘rebelión del coro’”, en Revista Nueva Sociedad, México N° 227, 2010, pp. 51-67.

Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza Editorial, Madrid, 1994.

Tilly, Charles, “Acción Colectiva”, en Apuntes de Investigación del

CEC

y

P

, 2000, pp. 9-32.

\* Profesora Titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Doctora en Estudios Americanos.

\*\* Magíster en Gobierno y Gerencia Pública por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

## **XI. CONTRA LA PRECARIZACIÓN LABORAL.**

### **LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS EN EL ALBOR DEL SIGLO XXI**

JOSÉ IGNACIO PONCE LÓPEZ

[\\*](#)

“Se abre una posibilidad infinita para dar una nueva lucha, un reimpulso al movimiento de los trabajadores, a nivel de nuestro país y sobre todo, para terminar con la precarización y, avanzar en la negociación colectiva interempresa y esto lo vamos a hacer, si no es en el marco legal, vamos a romper los candados de la institucionalidad heredada de la dictadura y que estos gobiernos profundizaron y no han modificado en nada los derechos de los trabajadores de nuestro país”.

CRISTIÁN CUEVAS

[630](#)

Tras años de diagnosticarse una profunda crisis sindical, la irrupción de movimientos de trabajadores subcontratados en 2007 llevó a que se hablara de un “nuevo” sindicalismo. A partir de dichas movilizaciones se identificaron nuevas líneas de acción, liderazgos y estrategias que, según algunos autores, diferían con el sindicalismo tradicional.<sup>631</sup> Otros más cautos, definieron a esta coyuntura de protestas solo como un “renacer de la huelga obrera”.<sup>632</sup> En este artículo se indaga en el ciclo de movilizaciones desplegado por subcontratados entre 2006 y 2009. Son abordadas las causas, desarrollo e impacto de estas paralizaciones, sobre todo para ver en qué medida significaron una continuidad o cambio respecto al devenir histórico de las organizaciones de trabajadores,

especialmente en su periodo más reciente.

Se plantea que el disruptivo ciclo de luchas acontecido en la primera década de los 2000 evidenció: a) más que la aparición de un “nuevo sindicalismo”, una revitalización de la lucha laboral más disruptiva de la reconfigurada clase trabajadora chilena; b) las precarias condiciones de trabajo en el país, en especial de los sectores más dinámicos del esquema productivo local; c) un proceso organizativo que se venía dando de forma fragmentaria desde antes en torno a los trabajadores en general, y respecto a los precarizados en particular; d) una mixtura de ideas y prácticas novedosas dentro de las lógicas históricas de la cultura político-sindical criolla; y e), cierta reformulación de las estrategias y recursos de poder de las organizaciones laborales en el marco de la posdictadura chilena.<sup>633</sup>

## LA PRECARIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA CHILENA EN EL CAMBIO DE SIGLO

La precarización laboral ha sido un aspecto característico del modelo económico neoliberal, tanto en su fase dictatorial como bajo los gobiernos posteriores. En efecto, más allá de las grandes cifras macroeconómicas que se resaltaron en torno al “modelo” chileno, hacia el 2003 todavía se mantenían cerca de tres millones de personas bajo la línea de la pobreza por ingresos. Proporción acompañada de una enorme franja de personas en condiciones de “vulnerabilidad”, es decir, que apenas pasaban ese umbral y que la pérdida del empleo las podía llevar nuevamente a una situación de pobreza.<sup>634</sup> Lo que era muy probable en un país con altos índices de precariedad laboral, tal cual detectó un informe de la

OIT

en 1998, justo tras haber vivido Chile el ciclo de mayor crecimiento de su historia, como resaltaban los defensores del modelo.<sup>635</sup> Por lo mismo, no fue extraño que por esos mismos años la Dirección del Trabajo (

DT

) tratara de mapear un problema que parecía estructural en el esquema productivo local, como eran las precarias condiciones laborales. Retomando los debates internacionales epocales, entre sus informes se concluyó, por un lado, que se había configurado un complejo panorama ocupacional de formas “típicas” y “nuevas”, con una alta movilidad en las trayectorias de trabajo de las personas, que oscilaban entre la inactividad, la desocupación, el empleo protegido y el desprotegido. Por otro, que si bien durante la primera mitad de los 90 el mercado de trabajo formal y los mecanismos de protección social empezaron a expandirse de manera consistente, en la segunda mitad se estancaron, trayendo no solo el crecimiento de la desocupación y la inactividad laboral a propósito de la crisis “asiática”, sino que también la expansión del empleo desprotegido y con alta inestabilidad, que afectaba principalmente a mujeres, jóvenes y adultos mayores.<sup>636</sup> Lo anterior tuvo sus manifestaciones más nítidas en lo que se denominó empleo temporal y en la subcontratación, que se incrementaron de manera constante en el cambio de siglo. Por ejemplo, si en 1998 un 20% de las empresas subcontrataba, el 2002 lo hacía el 48%.<sup>637</sup> En este sentido, no solo la informalidad laboral era un problema estructural del “modelo” chileno, sino que la precarización de las condiciones de trabajo se volvió una de las vías para salir del estancamiento causado por la crisis económica entre fines del siglo

XX

e inicios del

XXI

.

Lo que no se condijo con el discurso legitimante de estas condiciones de trabajo, que sostenía que ello traería mejores ingresos para la clase trabajadora. Por ello, lo que se denominó como la “política del chorreo”, esto es, un incremento sistemático de los salarios en la medida que crecía la productividad económica del país, no tuvo un impacto significativo en la década de los 90 y 2000. Los salarios crecieron muy por debajo del

PIB

, e incluso sus aumentos anuales se fueron estancando conforme pasaban los años.<sup>638</sup> De allí que el difundido mejoramiento de las condiciones de vida en la década de 1990 no se dio por un cambio sustantivo en la redistribución de los



ingresos laborales, sino por la expansión del gasto público focalizado y el endeudamiento de las personas. Esto generó un vertiginoso crecimiento de la deuda de los hogares entre 1990 y 1998 en los sectores medios y populares, que se volvió a incrementar desde el 2003. Endeudamiento y consumo que no tenían que ver con cuestiones “hedonistas”, pues se vinculaban con la necesidad de acceder a bienes y servicios indispensables para la reproducción de la vida en un país donde el capitalismo neoliberal había mercantilizado prácticamente todo, y donde el Estado jugaba solo un papel subsidiario. La trenza entre consumismo y endeudamiento que se dio en la posdictadura fue consecuencia de la apertura económica, la financiarización de los sectores medios y populares, y la necesidad de estos para cubrir el rezago en el acceso a bienes que habían vivido durante la dictadura.<sup>639</sup> Por lo mismo, la movilidad social que experimentaron algunas capas medias de la población chilena fue más bien “espuria”, basada en la disponibilidad crediticia en un mercado financiero con baja regulación, que convivía con una “sociedad de consumo sin capacidad de consumo” a partir de los salarios.<sup>640</sup> Consagrándose así en la posdictadura “nuevas” formas de pobreza, que con el tiempo se redefinieron como “multidimensionales”, sumando a las personas de más bajos ingresos con aquellas en condiciones de “vulnerabilidad” o “precariedad”.<sup>641</sup>

Junto con esto se configuró una subjetividad sobre la precariedad. Aunque sin estos términos, en el momento de mayor euforia con el “modelo chileno”, el mismo

## PNUD

evidenció que la “paradojal modernización” criolla estaba plagada de “malestares” que se daban por diversas “incertidumbres”, como consecuencia de los empleos precarios, el difícil acceso a los servicios, la competencia en el trabajo, la privatización económica y social, además del achicamiento del papel del Estado.<sup>642</sup> Este “malestar social” tenía como uno de sus principales aspectos la “inseguridad laboral”, cuestión que se mantuvo años después y que la

## DT

también pesquisó en un informe sobre las condiciones de empleo. Esta institución concluyó que existían diferentes niveles de satisfacción y descontento entre las personas respecto a sus trabajos, celos que eran mayores entre operarios y empleados no profesionales. En general, sus argumentos giraban en

torno a los bajos salarios y limitaciones para aprender nuevas tareas, mientras las mujeres reclamaban contra las prácticas machistas y diferencias de género. La inseguridad en el trabajo, que se había agudizado con la crisis económica, derivó en una valorización de la “estabilidad laboral”, que convivía con un profundo temor a perder el empleo, lo que provocaba dos fenómenos: un débil autocuidado de las personas, evidenciado en diversos trastornos de salud que no eran tratados por el miedo de los trabajadores a quedar cesantes, especialmente en el caso de las mujeres; la autoinhibición para vincularse a distintos conflictos laborales, incluyendo la participación en los sindicatos.<sup>643</sup> Así, a comienzos del siglo

## XXI

, el endeudamiento, los bajos salarios y los empleos precarios provocaban un fenómeno subjetivo de contención, como era el miedo a “perder la pega”, que limitaba la disposición de los trabajadores a la conflictividad laboral.

Por esto, la precarización del empleo de la clase trabajadora tuvo como correlato un debilitamiento del sindicalismo. Si la expoliación de los recursos de poder de los trabajadores, en particular su estructura organizativa, fue condición de posibilidad para hacer más vulnerables las relaciones laborales bajo el régimen de Pinochet, esto no varió de manera sustantiva durante la posdictadura, tanto por la falta de voluntad política de los gobiernos de la Concertación para reformar el Código del Trabajo como por las limitaciones propias de las estrategias de los dirigentes sindicales y las disputas entre estos.<sup>644</sup> A esto se sumó un creciente distanciamiento de sus bases, fuera por el miedo al desempleo o por el desinterés general en la política, que ya se consolidaba en los 90. De modo que al comienzo del nuevo siglo, entre los trabajadores se percibía una serie de obstáculos para el desarrollo de las organizaciones sindicales, pero también se hacía una dura crítica a la forma de actuar de sus dirigentes durante la década de 1990.<sup>645</sup> Esta precarización del sindicalismo se expresó en una oscilante actividad huelguística y en una afiliación que no superó el 15% de la fuerza laboral durante casi toda la posdictadura, particularmente en el otrora poderoso sector industrial.<sup>646</sup>

Así, al inicio del siglo

## XXI

se configuraba una triple precarización: en lo laboral, pero también en el espacio reproductivo y en la organización sindical de la clase trabajadora chilena. Entre otras cosas, esto tendió a consolidar la idea de la obsolescencia de esta como sujeto neurálgico para la transformación social y, por añadidura, del sindicalismo como espacio organizativo clave para luchar por sus intereses colectivos. Desde una perspectiva estructuralista, la clase trabajadora y los sindicatos parecían perder sus recursos de poder, vía los procesos de “flexibilización”, caminando casi sin vuelta atrás hacia su disolución como sujetos sociopolíticos relevantes. Entonces, ¿cómo fue posible que los sectores más precarizados del sistema reposicionaran la acción sindical el 2007? Para comprender esto, a la creciente expansión de los trabajadores en condiciones precarias, se debe sumar el análisis de las luchas y estrategias sindicales entre 1990 y 2003.

## ESTRATEGIAS Y LUCHAS SINDICALES EN LA POSDICTADURA

Durante la década de 1990 existieron dos grandes líneas estratégicas que se disputaron la hegemonía del campo sindical chileno. Por un lado, los partidos y liderazgos laborales cercanos a la coalición gobernante impulsaron la llamada “concertación social”. Esta se caracterizó por tener como centralidad consolidar la democracia en el país; mostrar al movimiento de trabajadores como actor autónomo pero dispuesto al diálogo con el empresariado; y canalizar las reivindicaciones sindicales a través de prácticas dentro del marco legal vigente. Aunque se enfatizaba en algunas dimensiones históricas del movimiento sindical, también se pretendió desincentivar otras, tales como las acciones por fuera de la ley, la disposición más confrontacional y su “extrema” politización. De esta forma, apuntaba a consagrar un poder institucional desde una lógica corporativa y basada en los acuerdos, dejando en un segundo lugar la presión a partir de la fuerza estructural, asociativa y social que habían desarrollado tradicionalmente las organizaciones de trabajadores. Por lo mismo, esta apuesta sindical no se legitimaba en la trayectoria histórica del movimiento obrero, sino que muchas veces —siguiendo el ambiente de la época— se planteaba como un indispensable “nuevo sindicalismo” o “nueva cultura laboral”, que asumía los errores cometidos por los trabajadores en el pasado y pretendía adaptarlos a las nuevas lógicas del capitalismo.<sup>647</sup>

De otro lado, un sector del campo sindical —encabezado por el Partido Comunista (

PC

)— planteó una estrategia que se podría denominar “confrontacional-clasista”. Su objetivo también era contribuir al desarrollo democrático, pero buscando su profundización, para lo cual era necesario que la clase obrera no solo fuera un sujeto independiente, sino que principal en la construcción de una hegemonía política con perspectiva socialista. Aunque este sector no criticaba el diálogo en sí, planteaba que el desarrollo de la clase trabajadora no rendiría frutos sin la movilización decidida contra el empresariado y la derecha. En este sentido, se fomentaba que el sindicalismo asumiera un posicionamiento político contrario al modelo heredado por la dictadura, se articulara con otras organizaciones de clase y presionara por profundizar los cambios gubernamentales, desde su posición fundamental en el esquema productivo. De tal modo, se buscaba un despliegue más activo de los recursos de poder sindical asociativo y social, que aprovechara su potencialidad estructural disruptiva para consagrar cambios institucionales. De allí que los promotores de esta orientación, vieran la “concertación social” como una forma de desmovilización y pérdida de “autonomía” de clase. El planteamiento, en definitiva, apuntaba a recuperar los derechos perdidos por los trabajadores durante la dictadura y conectaba la lucha bajo la “nueva democracia” con la tradición y cultura política sindical histórica en el país, notándose las reminiscencias del pasado y el carácter de resistencia que tenía esta estrategia bajo el naciente régimen político.<sup>648</sup>

Estas propuestas gozaron de trayectorias divergentes en los 90. En la Central Unitaria de Trabajadores (

CUT

) y en las más importantes organizaciones sectoriales, como el Colegio de Profesores y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (

ANEF

), tendió a preponderar la estrategia de “concertación social” en los primeros años de la “transición” (1990-1993).<sup>649</sup> Esto se evidenció en la canalización institucional de sus reivindicaciones y una general —aunque no permanente— disposición al diálogo, que tuvo como sus hitos más expresivos los intentos de

Acuerdos Marcos entre la

CUT

, los empresarios y el gobierno. Sin embargo, desde algunos sectores laborales se desarrollaron tempranas movilizaciones: en la minería cuprífera los subcontratados de El Teniente (1990),<sup>650</sup> los acereros de Huachipato (1991),<sup>651</sup> los mineros de Chuquicamata (1991),<sup>652</sup> el profesorado (1991) y los trabajadores de la salud (1991 y 1993).<sup>653</sup> Esto reflejaba que en algunos sectores existía disposición a la movilización sindical impulsada “desde abajo” por los trabajadores, buscando mejorar sus condiciones económicas y/o posicionar a la clase como una actoría relevante en el proceso transicional. Esto tensionó la estrategia de “concertación social” y abrió una brecha para el avance de las propuestas de “confrontación-clasista”.<sup>654</sup>

A esta situación se sumarían la sistemática negativa empresarial para cambiar el corazón de la legislación laboral, el compromiso cada vez más tenue del gobierno de Patricio Aylwin con las reivindicaciones de los trabajadores y, por ende, los constantes fracasos de los Acuerdos Marcos, donde participaban los dirigentes sindicales promotores de la “concertación social”.<sup>655</sup> De tal modo, se fueron erosionando de forma lenta pero permanente los liderazgos que impulsaban esta orientación, e incluso algunos dirigentes de base del oficialismo comenzaron a cuestionar esta apuesta, distanciándose de ella, haciendo críticas al gobierno y llamando a movilizarse. Así fue entrando en crisis la lógica subyacente de la “concertación social”, lo que se reflejó en la postura más crítica que asumió la

CUT

al final del gobierno de Aylwin; el leve crecimiento de la acción huelguística entre 1992-1994, principalmente “extra-legal” y encabezada por trabajadores de la salud, profesores y mineros del carbón; pero también en la permanente caída de la sindicalización y el recelo que se instaló en grandes franjas de trabajadores para sumarse a organizaciones y/o a canalizar sus demandas dentro de la institucionalidad laboral. Se empezaba a diluir en el movimiento sindical la esperanza de rescatar los antiguos derechos perdidos o de lograr algunas mejoras sin recurrir a la lucha bajo la “nueva democracia”.

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con una posición más tecnocrática y

privatizadora, tuvo una mayor distancia con el mundo sindical.<sup>656</sup> Incluso cuando el socialista Jorge Arrate en el Ministerio del Trabajo impulsó una nueva reforma laboral, que terminó fracasando al final del mandato,<sup>657</sup> la estrategia de “concertación social” se debilitó de manera clara bajo el nuevo gobierno, pues su gestión provocó tempranas movilizaciones del profesorado (1994-1997), los funcionarios de la salud municipalizada (1995), los médicos (1996), los trabajadores de la salud (1996) y los mineros del carbón (1994-1997).<sup>658</sup> Se agregaron también los cuestionamientos por la privatización de empresas públicas estratégicas, tal cual ocurrió tenuemente con los mineros del cobre, pero sobre todo con los portuarios, quienes desataron una violenta movilización en 1999. Si esto daba cuenta del distanciamiento entre el gobierno y el mundo sindical con mayor tradición organizativa, también evidenciaba que los trabajadores del Estado eran los más activos, lo que —mirado desde otro ángulo— mostraba la debilidad en las organizaciones del sector privado. Con todo, aunque sin la capacidad de impactar en la agenda política como en otras épocas, la lucha sindical mantenía cierta vigencia, aunque con limitaciones.

Efectivamente, incluso cuando estos procesos sindicales parecieron abrirle paso a la apuesta de “confrontación-clasista”, ello fue con obstáculos. A pesar de que los sectores de izquierda del campo sindical le propinaron importantes derrotas a los demócratacristianos en las dirigencias del Colegio de Profesores (1995), la

ANEF

(1996) y la

CUT

(1997), ello fue con bulladas tensiones. La más difundida fue cuando en 1996 no se eligió a María Rozas (

DC

) como presidenta de la multisindical, quedando en la testera el

PS

Roberto Alarcón, en torno a lo cual se especuló un posible quiebre de la Central, que si bien no se dio, contribuyó a un mayor debilitamiento de su imagen como organización representativa de los trabajadores.<sup>659</sup> A su vez, aunque diferentes

sectores laborales asumían una mayor disposición de lucha, su accionar era limitado por el definitivo cierre de algunas empresas (Empresa Nacional del Carbón), o por las importantes reformulaciones que traían las nuevas formas de gestión concesionada (Empresa Portuaria de Chile). Por otro lado, el impacto de la “crisis asiática” y el alto desempleo que trajo, dejaron en mal pie a los trabajadores que conservaron sus puestos, siendo ya no solo presionados por un agresivo empresariado,<sup>660</sup> sino que también por un amplio contingente de cesantes disponibles como “ejército de reserva” del capital. A lo que se sumaba un contexto cultural que pretendía difuminar las identificaciones en torno a la clase trabajadora en favor de las nociones de “clase media” y “emprendedor”.<sup>661</sup>

En resumen, aunque los impulsores de la “confrontación-clasista” avanzaron, el contexto era complejo y quienes promovían la “concertación social” no habían perdido toda su influencia, constituyéndose un equilibrio de fuerzas, que, en vez de reactivar al campo sindical, lo sumergía en una situación crítica que se prolongó por al menos un lustro (1998-2003). Esto pareció ratificarse por la poca capacidad de convocatoria que tuvo la

## CUT

al inicio del gobierno de Ricardo Lagos y en las derrotas de importantes movilizaciones de trabajadores, como fueron las luchas contra la privatización de los puertos (1999-2001) y en aquellas de los docentes por mejorar sus condiciones salariales y laborales (2002-2003).<sup>662</sup>

La imposibilidad de reposicionar a las organizaciones de trabajadores durante la posdictadura motorizó una reformulación de las estrategias sindicales. En este sentido, una de las ideas que se reafirmaron fue la “autonomía” del movimiento laboral, pero con diferentes énfasis. Por un lado, quienes habían promovido la “concertación”, ahora planteaban la “paz social” como forma de adaptarse a la sociedad globalizada y a un mercado ocupacional más “flexible”. Desde este ángulo, se buscaba alejar a las organizaciones de proyectos sociales antagónicos y reafirmar la colaboración, apostando al desarrollo de la participación sindical con “diálogo” a nivel de empresa y desde allí integrar a los trabajadores con el empresariado, con una mera tutela estatal.<sup>663</sup> En otras palabras, mantener la centralidad en el desarrollo de recursos de poder sindical institucional. Mientras que los impulsores de la estrategia “confrontacional-clasista”, asumiendo la consolidación del capitalismo neoliberal, empezaron a promover un sindicalismo “socio-político”, con el fin de construir un proyecto alternativo pero a través de

un sujeto más amplio, que articulara un “movimiento de movimientos”, donde los trabajadores debían jugar un rol central pero junto a otras organizaciones sociales.<sup>664</sup> Es decir, continuar activando las diversas formas de poder sindical. Una de las cuestiones más notables de esta última apuesta fue la necesidad de sindicalizar a los sectores precarizados y desregulados del cobre, forestal, de la pesca y la fruta, entre otros, los que también debían asumir una actitud más confrontacional con el sistema. Este lineamiento cobró cierta hegemonía en el campo sindical entre el 2000 y 2003, expresándose de forma más consistente en el Colegio de Profesores (con la promoción de “Fuerza Social y Democrática”) y en la

## CUT

(con las movilizaciones por un “Chile Justo y Solidario”). Esto último, en gran parte porque los dirigentes socialistas habían asumido una estrategia sindical “socio-política” bajo un discurso “autonomista”, pero abierta al diálogo social, pues a pesar de ser críticos del modelo neoliberal, asumían que las organizaciones de trabajadores debían centrarse en la lucha por mejoras laborales y salariales, buscando para ello también organizar a los sectores precarizados.<sup>665</sup> De tal modo, la organización de los trabajadores en condiciones más precarias se volvía una especie de consenso en el campo sindical, tanto en lineamientos más moderados del mundo concertacionista, como en los sectores comunistas y hasta en las posiciones más radicalizadas que criticaban la estructura sindical del país.<sup>666</sup> Fue un consenso con diferencias, que permitió articular al creciente campo de trabajadores subcontractados, pero mantuvo diferencias respecto a un despliegue más disruptivo de sus recursos de poder sindical. Con todo, a pesar de sus derrotas, las dirigentes laborales buscaban reposicionarse y desplegar su accionar en sectores con enormes obstáculos para organizarse, apostando a revertir la “crisis sindical” que algunos actores políticos concebían como terminal.

En este marco de condiciones estructurales y elaboraciones estratégicas de los actores políticos y sindicales, sumado a los impulsos de los mismos trabajadores para resistir o revertir las políticas neoliberales, se fueron abriendo espacios para el desarrollo de la acción de trabajadores precarizados hacia la primera década del 2000.



## UNA EXPERIENCIA EMERGENTE ANTES DEL CICLO DE IRRUPCIÓN: LAS MOVILIZACIONES DE LOS SUBCONTRATADOS DE CODELCO, 2003-2006

El 2003 fue importante para el reimpulso de las movilizaciones sindicales, pues diferentes sectores desarrollaron huelgas y paralizaciones. Dicho año, que tuvo como gran hito el paro nacional convocado por la

CUT

el 13 de agosto, fue parte de un ciclo de acciones que movilizó entre otros a los empleados fiscales, en especial de la salud y el profesorado, a quienes se sumaron trabajadores municipales, portuarios y mineros del cobre. Estos últimos vivían una coyuntura particular, pues el repunte histórico del metal rojo desde el 2003 se cruzó con un ciclo de negociaciones colectivas en la estatal

CODELCO

, agitándose el sector. Esto aumentó las expectativas salariales de los mineros, quienes reactivaron a sus organizaciones luego de varios años sin movilizaciones, lo que llevó, entre otras cosas, a que el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (

FTC

), encabezada por Raimundo Espinoza, buscara una reunificación de sus sindicatos de base con otros del campo privado.<sup>667</sup> Si bien esto último no se logró, las grandes ganancias en el cobre y las movilizaciones de sus trabajadores instalaron en la agenda política la situación del sector, generando un amplio debate sobre la necesidad de un Royalty minero.

Sin embargo, un amplio grupo de trabajadores del cobre se mantenía excluido del repunte que tenía el metal rojo: los subcontractados. Dada la poca tradición organizativa de estos obreros y la inexistencia de un reconocimiento legal como trabajadores por parte de las grandes mineras, era bastante difícil que pudieran acceder a los beneficios que habían obtenido los mineros de planta, particularmente de

## CODELCO

, entre 2003 y 2004. Ello a pesar de que por entonces los subcontratados alcanzaban cerca del 60% de quienes laboraban en torno a la compañía. Para ilustrar la precariedad de sus condiciones, se puede señalar que estos trabajadores eran trasladados en camiones por más de dos horas desde sus casas a los puestos de empleo, sin ropa adecuada para el frío de las mañanas, porque debían comprarla ellos mismos con sus bajos salarios.<sup>668</sup> Además, tenían una enorme inestabilidad contractual, pues existía una serie de mecanismos para que las empresas contratistas eludieran el pago de vacaciones y su antigüedad, a diferencia de los mineros de planta de

## CODELCO

, quienes tenían estos derechos y condiciones laborales garantizadas. No obstante esto, la masificación de los subcontratados en un sector estratégico de la economía nacional, que podía generar enormes pérdidas al Estado, les entregaba un poder estructural potencialmente disruptivo.

Teniendo en cuenta estos aspectos, incluyendo el ambiente de la época, no fue raro que los subcontratados de la estatal también fueran parte de las movilizaciones del 2003. Durante ese año, el sindicato

## SITECO

, de la división El Teniente (Rancagua) de

## CODELCO

, impulsó una negociación interempresa, presentando un contrato colectivo a varias compañías contratistas para que se comprometieran legalmente a entregar una serie de condiciones laborales y salariales comunes a sus trabajadores. Dado que este tipo de negociación no era contemplado en la ley, la argumentación de los dirigentes se sustentó en los tratados internacionales que el país había firmado hasta ese momento, pero comprendiendo que la lograrían desplegando el poder asociativo que habían articulado hasta ese momento.<sup>669</sup> La situación era compleja, pues el

## SITECO

tuvo en sus primeros años una dura derrota (1991), que terminó debilitándolo por más de una década. La empresa estatal se aprovechó de esto para “demonizar” al sindicato y endosarle la responsabilidad de los despidos que aplicó junto a las contratistas tras dicha movilización. Pero a inicios de los 2000, el

## SITECO

revirtió esta realidad a través de diversas acciones. Un dirigente de la época señaló que se había mezclado una antigua dirigencia sindical con otra franja más joven de subcontratados, quienes aun cuando se habían formado de manera muy precaria, se pusieron como primera tarea incrementar la cantidad de afiliados y diluir la estigmatización del sindicato. Lo que también había sido facilitado por las redes que tejieron los dirigentes militantes de partidos, tal cual era el caso del experimentado Danilo Jorquera y el joven Jorge Peña, quienes eran apoyados por “compañeros” sindicalistas comunistas de planta para conseguir espacios de reunión.<sup>670</sup>

La hostil actitud de

## CODELCO

hacia el

## SITECO

provocó que el actuar de este fuera casi “clandestino”, desarrollándose a partir de lazos de confianza con los trabajadores de base de diferentes contratistas, tanto en instancias ajenas al espacio laboral que frecuentaban los mineros — bares, asados y canchas—, como en los largos periodos de transporte hacia el lugar de trabajo, donde conversaban sobre la realidad que vivían. Luego de eso, los dirigentes buscaron mostrar la “otra cara del sindicato”, es decir, como instancia de organización y lucha, para que los “ganchos” se hicieran delegados en cada empresa, y desde ahí incluir a nuevos trabajadores. No menos importante fue que el ser delegado permitía a los obreros tener fuero, accediendo a un mayor grado de estabilidad laboral, siendo otra motivación para que se sumaran a la dirigencia sindical. Pero la falta de tradición organizativa de buena parte de ellos obligó a que su formación fuera al calor de la lucha: una franja de jóvenes dirigentes de base conoció la práctica sindical a través de procesos de negociación donde presentaban petitorios a las contratistas, que en varias

ocasiones terminaron en derrotas, pero que también les permitió “foguearse”, mantener presente el actuar del

## SITECO

y mostrar a sus afiliados que se podía luchar. Este trayecto contribuyó a que el sindicato instalara un discurso que ponía como responsable de la realidad de los subcontratados a la mandante, planteando la necesidad de “presentarle un petitorio a

## CODELCO

”, cuestión que estaba fuera de la ley, obligándolos a lograr una negociación con ella mediante la movilización.<sup>671</sup>

Desde un principio la posición de la compañía fue durísima. A comienzos del 2003 los dirigentes del

## SITECO

habían convenido una serie de mejoras con las contratistas, que obligaba a la estatal a incrementar sus gastos para que ellas costearan dichas demandas. Esta negociación interempresa en ciernes que pretendían consagrar los subcontratados también buscaba que la mandante los reconociera como trabajadores partícipes de su proceso productivo. Sin embargo,

## CODELCO

se negó sistemáticamente, provocando una serie de movilizaciones. La más importante ocurrió el 17 de abril, la que —según un dirigente— inició el movimiento de subcontratistas, ya que activó a sus bases y proyectó un proceso de presión para negociar con la compañía. Para ese entonces, el sindicato articulaba a cerca de 6.000 afiliados, que le permitió alcanzar el preacuerdo con las contratistas, a lo que la estatal se negó tajantemente, obligando a que las empresas no firmaran el convenio. La desazón y rabia de los obreros se reflejó en que tras una asamblea recurrieron al repertorio de acción tradicional de los mineros: “se juntaron 1.200 viejos que se sintieron engañados, y ahí se tomó la decisión al interior de la mina de hacer copamientos de los accesos principales, el área 71 y otros lugares estratégicos”.<sup>672</sup> La “toma de la mina”, que era un momento final dentro del largo proceso de movilización, se pensó que obligaría

a

## CODELCO

a dar una respuesta, por lo cual los dirigentes se quedaron en el centro de la ciudad para abrir rápidamente las negociaciones. Un sindicalista definió esto como un “error garrafal”, pues la acción fue reprimida de forma dura y rápida por la empresa, que llamó a Carabineros para desalojar los accesos del yacimiento, dejando un saldo de 100 detenidos y 40 heridos por balines, uno de ellos con pérdida parcial de la vista.<sup>673</sup> Las represalias continuaron luego de la movilización, al ser despedidos prácticamente todos los dirigentes del

## SITECO

, y quienes fueron reincorporados, lo serían a condición de crear organizaciones controladas por las empresas, para entregar algunos beneficios a través de ellas. Esto debilitó al sindicato, bajando a la mitad sus afiliados, pero — paradójicamente— según un dirigente, “en la memoria o en la conciencia de todos los viejos, cachan que esa es una pelea del

## SITECO

, y si no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió, no se hubiese logrado jamás”.<sup>674</sup> De tal modo, en esos claros y oscuros de la paralización, calificada como una “gran derrota” por los dirigentes, el

## SITECO

se reinstaló como una organización de lucha, pero que había traído problemas a sus afiliados. A partir de esa experiencia debían reformular y reimpulsar su actuar para potenciar su poder sindical asociativo, lo que harían en dos dimensiones: a escala local, incluyendo a los trabajadores de servicios en las minas, que eran mayoritarios; y a nivel general, activando los vínculos que venían generando con sindicatos de otras divisiones de la compañía.

Lo último mostraba otra vía de acción de los subcontractados, que se fortalecería en los años siguientes: los procesos de articulación nacional. Desde el

## SITECO

trataron, primero, de relacionarse con subcontratados de Calama que también estaban en procesos de organización, para luego impulsar un encuentro en esa ciudad.<sup>675</sup> Aunque en 2003 no lograron concretar el espacio nacional por diferencias políticas, finalmente, como ha relatado otro dirigente, entre los militantes comunistas y los dirigentes cercanos a ellos se tomó “una decisión política, pensada, planificada” para realizar encuentros en Antofagasta, Diego de Almagro y Caldera, concretándose el 2005 una plataforma nacional de trabajadores subcontratados del cobre, llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas.<sup>676</sup> A través de esta organización delinearon principios que consideraban históricos del movimiento obrero, como la “solidaridad”, “lealtad” y “honestidad” de la clase trabajadora, con propuestas políticas de larga data como la “nacionalización del cobre” y otras nuevas, como la de “igual trabajo, igual sueldo” y el “fin al subcontrato”.<sup>677</sup> Entroncaban así reivindicaciones actuales en una tradición histórica construida, integrando sus luchas con las del pasado de los trabajadores, con el objetivo de fortalecer el poder asociativo de los subcontratados. De paso, empezaban a perfilar una estrategia sindical más movilizadora, distinta a la hegemónica entre los mineros de planta de la estatal.<sup>678</sup> Por tanto, ni la represión, persecución y derrota inhibieron el actuar de los trabajadores, sino que los llevó a profundizar su organización, permitiéndoles volver a expresarse al final del gobierno de Ricardo Lagos.

El 2005 estaba signado por una nueva elección a la presidencia de la República del país. Hacia ese momento, el mandatario concertacionista ya se había ganado la simpatía del empresariado.<sup>679</sup> Entre otras cosas, por la reactivación económica, que se tradujo en un crecimiento resaltado constantemente en los medios de comunicación, pero que no se reflejaba en una mejor situación de la clase trabajadora, pues —tal como enfatizaron desde el sindicalismo— los empleos eran de mala calidad y los salarios se expandían por debajo del incremento productivo.<sup>680</sup> Además, la discusión sobre el proyecto de Ley de Subcontratación enviado por Lagos, recién se reactivó a fines del 2005 en el Senado. Con este panorama económico y laboral, se realizaron las elecciones donde era incierto si la candidata Michelle Bachelet continuaría el legado concertacionista.

Esto ocurría mientras se volvía a tensionar el sector cuprífero, marcado por las enormes ganancias de las empresas y una creciente presencia de trabajadores subcontratados. Los dirigentes continuaban reclamando respecto de las pésimas condiciones laborales, la desregulación legal respecto a estas, sumado al desconocimiento sindical que mantenía

## CODELCO

hacia ellos. De allí que, a fines del 2005, justo entre la primera y segunda vuelta presidencial, la naciente Coordinadora de Trabajadores Contratistas desarrolló distintas acciones en las divisiones de la compañía, que tuvieron sus principales focos en El Teniente y Andina. Sus demandas estaban dirigidas directamente a la empresa del Estado, lo que implicaba que los reconocieran como actores colectivos dentro de su proceso productivo, cuestión que debía materializarse en una bonificación de 500.000 pesos (a modo de compensación por las altas ganancias alcanzadas por la empresa ese año, cifradas en U\$5 mil millones) y una ley de subcontratación que contara con su participación.<sup>681</sup> O sea, a partir de la presión pretendían consagrar ciertos recursos de poder institucional.

Dada la falta de respuesta, la primera semana del 2006 los trabajadores realizaron un paro que remeció el escenario, provocando declaraciones cruzadas entre el candidato opositor derechista, Sebastián Piñera, y el gobierno. Esto porque, sorpresivamente, el primero apoyó las demandas de los subcontratados, en particular el bono que solicitaban, mientras el Ejecutivo se negaba a ello, pero interpelaba a Piñera para que alineara a su coalición en aprobar el proyecto de subcontratación que estaba en el Congreso. En el marco de una estrategia electoral, Lagos le dio suma urgencia al debate de esta ley en el Parlamento, manteniéndola como uno de los principales temas a días de la segunda vuelta presidencial y acusando a Piñera, en su condición de empresario, de promover la precarización laboral.<sup>682</sup> Más allá de esta instrumentalización política de sus demandas, los trabajadores las habían instalado en la agenda pública y, luego de una semana de movilizaciones, obligaron a

## CODELCO

—con venia del gobierno— a establecer una mesa de negociación. Esta se dilató por casi un mes y cruzó todo el proceso electoral, mezclando paralizaciones de los subcontratados y amenazas del gobierno de reprimirlas, siendo la bonificación el tema más complejo a resolver, dado que implicaba un reconocimiento del papel de los trabajadores en la compañía.<sup>683</sup> Terminada la contienda presidencial, los subcontratados perdieron capacidad de presión, más cuando el gobierno quitó la suma urgencia al proyecto de ley, por lo que sus dirigentes se abrieron a un acuerdo con las contratistas y la estatal, que si bien no contemplaba el bono compensatorio, sí abordó diversos aspectos:

## CODELCO

obligaría a las compañías que le prestaran servicios a cumplir con la ley de trabajos pesados, accidentes, enfermedades laborales y capacitación; además de agregar un bono mensual de \$15.000 desde el 1 de febrero de 2006. La negociación, que en cierta medida los reconocía como actores en la empresa, no alcanzaba todas sus demandas, pero tal como señaló el vocero de la Coordinadora, Cristián Cuevas, los dejaba “conformes”, pues era “un avance que reduce la discriminación de los trabajadores contratistas. Pero cuando asuma Michelle Bachelet vamos a exigir un bono de recompensación justa a los trabajadores contratistas”.<sup>684</sup>

De tal modo, los subcontratados de

## CODELCO

terminaban su primer momento de movilización con un tono amenazante hacia el entrante gobierno, que se sustentaba en una emergente trayectoria de lucha y el desarrollo de distintos recursos de poder. Por un lado, fortalecieron su dimensión asociativa, reimpulsando sindicatos de base, articulando una plataforma nacional y configurando aspectos discursivos (principios, apuestas de largo plazo y demandas concretas). Esto les permitió utilizar la potencialidad estructural disruptiva que ostentaban al ser una creciente franja de trabajadores de un sector estratégico de la economía local. Además, de otro lado, obtuvieron de facto ciertos recursos institucionales. El incipiente reconocimiento de la empresa, les ayudó a generar un mecanismo de negociación, que mezclaba lo “legal” y “extra-legal”, expresado en: a) negociaciones por empresa, donde las estructuras sindicales “base” eran asesoradas por las mayores para conseguir mejoras en convenios colectivos; y b) “acuerdos marco”, donde se negociaba con

## CODELCO

para cuestiones transversales, como la extensión mínima de contratos, el pago de horas extras, vacaciones e indemnizaciones para todos los trabajadores. Esta última era entendida por los trabajadores como la negociación de “verdad”.<sup>685</sup> Eso sí, dada su experiencia, los sindicatos no olvidaban que la movilización era central para el desarrollo de estos recursos. De allí que para seguir fortaleciendo su poder sindical era vital que, de ser necesario, cumplieran la amenazante



advertencia que le habían hecho a la electa presidenta Bachelet.

## EL AÑO DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL: LA IRRUPCIÓN DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS

Este proceso de movilización de los subcontratados de

CODELCO

puede entenderse como parte de un punto de inflexión que vivía la acción colectiva en el país durante la primera década del 2000. Con oscilaciones, las protestas sociales se fueron reactivando bajo el gobierno de Lagos, no solo por las luchas sindicales que se nombraron anteriormente, sino también por otros actores, lo que se reflejó en el denominado “mochilazo” de los estudiantes secundarios el 2001 y la multitudinaria movilización contra la

APEC

en noviembre del 2004. Esto, junto al agotamiento de la Concertación en el gobierno y el reordenamiento electoral que ocurrió en esos años, daban cuenta de la configuración de un nuevo marco político y social en Chile, en torno al cual se desenvolvían los movimientos sociales en general y los trabajadores subcontratados en particular. Esta inflexión se confirmó durante el primer año del gobierno de Michelle Bachelet, tras una nueva movilización de estudiantes secundarios, conocida como la “revolución pingüina”, que se extendió por varios meses y tuvo como aspecto particular la evolución de reivindicaciones de carácter económico hacia el cuestionamiento de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y, por ende, del modelo educativo.<sup>686</sup> Esto mostró una politización más holística de algunos sectores sociales subalternos, como también una capacidad más clara de estos de impactar en la agenda pública. De allí que el 2006 quedó marcado en la historia reciente como uno de los primeros momentos en la posdictadura en que un movimiento social instaló un tema (la educación) en el debate político, tal como en cierta medida los trabajadores de

CODELCO

habían hecho con el proyecto de Ley de Subcontratación meses antes.

Por lo mismo, a pesar de la continuidad que marcaba el nuevo gobierno de la Concertación, la llegada de Michelle Bachelet trató de darle una impronta distinta a su mandato. La jefa de Estado, asumiendo cierto agotamiento de la coalición, pretendió imprimir un sello más “ciudadano” a su gabinete. Esta nueva “sensibilidad” política permitió que el Ministerio del Trabajo, encabezado por el socialista Osvaldo Andrade, tuviera desde un inicio mayor protagonismo en comparación con sus antecesores, sobre todo por la necesidad de promulgar rápidamente la ley de subcontratación. Aunque esta se vio al comienzo como un avance del ala “progresista” del gobierno, terminó siendo limitada tanto por el accionar de la derecha y del empresariado, como del sector más neoliberal del oficialismo, encabezado al interior de la administración Bachelet por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Esto reavivó la tesis de las “dos almas” de la Concertación.<sup>687</sup> El desenlace de esta normativa provocó que algunos parlamentarios de gobierno afirmaran que era una mera “ley para hacer cumplir la ley”.<sup>688</sup> En paralelo a esto, eclosionó la “revolución pingüina” que, aun cuando fue sorteada con modificaciones menores de gabinete y con el establecimiento de un Comité Asesor para la Educación, La Moneda terminó mostrando las limitaciones del sistema político para canalizar las demandas sociales. Vulnerabilidad que se volvió a repetir entre marzo y abril del 2007, cuando el nuevo sistema de transporte público capitalino (Transantiago) desató violentas protestas. El segundo año de la administración Bachelet partía con enormes dificultades políticas.

En el plano sindical, los subcontratados no solo estaban preocupados de la ley que los iba a regular, sino también de sus problemáticas específicas. Durante el 2006, los trabajadores de

## CODELCO

mantuvieron mesas de diálogo con la empresa y el gobierno para materializar los acuerdos que habían obtenido durante las elecciones. Sin embargo, luego de varios meses los subcontratados sintieron que la cuprífera dilataba su respuesta. Por lo mismo, tras reorganizarse bajo una nueva estructura llamada Confederación de Trabajadores del Cobre (que rescataba el nombre de la antigua organización de trabajadores del sector), el 8 de junio decidieron llamar a una “huelga general” en la compañía, con el objeto de resolver sus demandas salariales y presionar para el establecimiento de una negociación interempresa y

sectorial,<sup>689</sup> siguiendo el camino que consideraban ya habían iniciado semanas antes los subcontratados de la segunda área productiva más relevante del país: la industria forestal.

Uno de los pocos sectores manufactureros que se desarrollaron bajo el neoliberalismo chileno fue el forestal.<sup>690</sup> Durante la posdictadura se volvió la segunda área en importancia del esquema productivo local. La alta rentabilidad del sector a inicios del siglo

## XXI

provocó que sus principales inversionistas, los grupos empresariales Matte y Angelini, se consolidaran entre los más grandes del país. Este carácter de emergente sector estratégico de la economía chilena contrastaba con las condiciones de sus trabajadores. En efecto, las ciudades aledañas al mundo forestal se constituyeron en espacios con altos índices de pobreza, sobre todo en las regiones del Biobío y La Araucanía.<sup>691</sup> Esto, en parte, era consecuencia de los salarios entregados en esta industria, muy por debajo de la media nacional, lo que estaba condicionado por la alta precarización laboral, pues los obreros tercerizados se cifraban en cerca del 50%, llegando en algunos casos, como en la empresa Bosques Arauco, a tener un 96% de externalizados en 2006. Esto se sumaba a cierta falta de tradición organizativa, que se reflejaba en un bajo índice de sindicalización en el sector, en comparación a otros como el mundo cuprífero.<sup>692</sup> De allí que, a pesar de que los subcontratados tenían una organización desde finales de los 80, como era la Confederación Forestal de Trabajadores (

## CFT

), no habían podido articularse, manteniendo una fragmentación entre los distintos tipos de trabajadores que laboraban en los bosques, el transporte y la industria.<sup>693</sup> A inicios del 2000 se buscó revertir esta dispersión, tras coincidir algunos dirigentes en la necesidad de luchar juntos, desplegando un proceso unitario que desembocó en 2006 en la formación de la Unión de Sindicatos Forestales (

## USINFA

). Este impulso de poder asociativo tuvo su principal desarrollo en la empresa Bosques Arauco, del grupo Angelini.<sup>694</sup>

Al calor de esto, los subcontratados forestales forjaron sus demandas y se propusieron una negociación interempresa. Reivindicaciones que fueron presentadas a Bosques Arauco el verano del 2007 y que constaban de 23 puntos, entre ellos: un reajuste del 40% para alcanzar un sueldo base del mínimo nacional de la época (\$135 mil), el pago de horas extras, un nuevo sistema de transporte, la indemnización por años de servicios y accidentes fatales, el respeto de la jornada semanal de 45 horas y mayor fiscalización a las contratistas. Recién en marzo la gerencia respondió a 21 de los puntos, negándose al reajuste salarial y sobre todo a que fuera la empresa mandante quien firmara la negociación.<sup>695</sup> Debido a esto las organizaciones sindicales desarrollaron un paro de 48 horas el 11 y 12 de marzo. Cerca de 1.000 trabajadores y 2.000 personas de zonas aledañas se tomaron los accesos al Complejo Horcones del holding, obligando a reinstalar mesas de negociación (con representantes de la mandante, contratistas y trabajadores) por cada tema, que sesionarían por 45 días.<sup>696</sup> Lo que pudo verse como un avance en el poder institucional de los trabajadores, al abrir una negociación interempresa de facto, también era una apuesta de la gerencia para dilatar el conflicto, desactivar la movilización y restarse del acuerdo. De allí que, tras el periodo convenido, Bosques Arauco mantuvo su posición e hizo escalar el conflicto.

Sin saber cómo terminaría, los trabajadores reactivaron su poder asociativo con un nuevo paro desde el 30 de abril. De forma rápida frenaron el funcionamiento de la empresa.<sup>697</sup> Al cuarto día de la movilización, cuando las pérdidas económicas de la compañía se volvían un tema nacional, se produjo un hecho clave, que no solo marcó la huelga forestal, sino que la acción sindical durante todo el 2007. El jueves 3 de mayo, a propósito de una solicitud de monseñor Ricardo Ezzati, los subcontratados despejaron los accesos a la planta Horcones, esperando volver a reunirse con representantes de las empresas, pero estos no se presentaron, enardecido la posición de los obreros, quienes decidieron tomarse la carretera para mantener el conflicto visible. Estas acciones fueron duramente reprimidas. Según un dirigente, esto fue “una provocación” para doblegarlos y que solo aumentó la violencia en la movilización. El mismo sindicalista retrató que Carabineros “tiraban gases para todos lados”, mientras “los trabajadores [botaban] árboles con las moto-sierras” para defenderse. Momento en que un grupo de forestales intentó usar algunas máquinas para frenar la represión policial, siendo solo el obrero Rodrigo Cisternas quien pudo subir a una, el que en “una actitud desesperada” empezó a dar “vuelta los carros de Carabineros”, enfrentándolos, pero ellos “lo llenaron a balazos”. La acción de Cisternas para resistir la violencia policial terminaba así en su asesinato, por lo que los

dirigentes sindicales en medio de los bosques recurrieron a sus contactos políticos con el

PC

para que abrieran conversaciones con el gobierno e intentaran frenar el actuar de Carabineros, mientras se difundía en los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo en la provincia de Arauco. Tras salir durante la noche de los bosques, los dirigentes recién pudieron aquilatar al día siguiente lo que había sucedido, cuando vieron que en la ciudad “andaban más periodistas que trabajadores”, dándose cuenta de “que el país se había conmocionado”. Efectivamente, lo ocurrido ese día agitó la realidad nacional, activando movilizaciones de solidaridad en Santiago y otras regiones, incluyendo el ataque a comisarías en localidades cercanas, como Laraquete. Esto permitió reabrir las negociaciones, en paralelo a los preparativos del funeral de Rodrigo Cisternas. Luego de un masivo sepelio, que congregó a más de 20.000 personas en Curanilahue, en menos de dos días, y bajo mediación de la Iglesia, las empresas ratificaron los puntos solicitados por los trabajadores, incluyendo un aumento salarial cercano al 40%, donde Bosques Arauco se comprometió a través del arzobispo Ezzati a garantizar los fondos para ello. De tal modo, la movilización y la vida de Rodrigo Cisternas, un trabajador altamente precarizado, habían permitido lograr lo que ningún otro actor sindical había conseguido hasta ese instante en la posdictadura: una negociación interempresa de facto, que, por su alta concentración de trabajadores en un mismo territorio, podía percibirse como una de tipo ramal, a lo cual se negaban de forma intransigente los empresarios. Por lo mismo, el dirigente Jorge González señalaría tras la huelga: “perdimos un compañero, pero le mandamos un mensaje al movimiento sindical de lo que puede lograr con unidad; le mandamos un mensaje al país”.<sup>698</sup>

IMAGEN 1:

*Funeral de Rodrigo Cisternas*



*Fuente: Las Últimas Noticias, 7 de mayo de 2007, p. 3.*

Los subcontratados forestales parecían alcanzar algo histórico. Entre el desarrollo de sus recursos de poder asociativo y el ensanchamiento de su legitimidad social, sobre todo por la trágica muerte de Rodrigo Cisternas, habían obligado al holding Angelini y a las contratistas a responder sus demandas, reconociéndolos como actores sindicales del sector. Situación que provocó “terror” a los empresarios, quienes —retomando su anticomunismo— a través de sus medios acusaron una maniobra del

PC

para instalar “por la fuerza” la negociación interempresa y sectorial.<sup>699</sup> Pero también porque se generó un ambiente que mostró a otros trabajadores que se podía luchar y revertir el poder de la patronal, a pesar de estar en contextos de alta precarización laboral en el sector privado.

En este escenario se desataría una nueva huelga de los subcontratados de

CODELCO

. Al estar posados los ojos en el mundo laboral —como pocas veces en la posdictadura—, la dinámica de la huelga debía ser sorpresiva y muy planificada para no fracasar en descolocar al gobierno y obligarlo a una rápida negociación. La fecha elegida y anunciada solo días antes fue el 25 de junio. El llamado respondió a los trazados iniciales, teniendo la huelga un efecto enorme, ya que controlaron las diferentes divisiones de

CODELCO

, aunque sin parar toda la producción. El impacto fue tal que los medios de comunicación rápidamente se enfocaron en la huelga y calcularon la fuerza de la organización, diciendo que aglutinaba a cerca de 30.000 trabajadores, cuando en realidad solo llegaban a los 15.000, en los cálculos más optimistas. Esta sobreestimación también se debió a un simbólico hecho no planificado por los sindicalistas: la quema de buses en la división El Teniente. Según un dirigente,

esto fue sentido por los trabajadores como “una liberación colectiva de estrés” y demostración de fuerza sindical.<sup>700</sup> Sin embargo, ello motivó una dura respuesta del gobierno:

## CODELCO

se negó a conversar y se desató una fuerte represión, que obligó a los obreros a escapar del enfrentamiento para no repetir lo ocurrido en Arauco con Rodrigo Cisternas. De tal modo, los subcontratados no pudieron cumplir su objetivo de establecer una pronta negociación.

La huelga se extendió por varios días. En este periodo, los cupríferos agregaron a su capacidad asociativa, recursos de poder social, al sumar apoyos para presionar a la empresa, teniendo como aliados a los dirigentes de la

## CUT

, sectores de la Iglesia (particularmente en Rancagua) y distintos diputados de la misma Concertación. La relevancia del conflicto trajo el establecimiento de una mesa de negociación, pero que, al quinto día, el 10 de julio, puso a los sindicalistas en una encrucijada: una movilización en El Salvador que terminó en nuevos enfrentamientos con carabineros fue usada por

## CODELCO

para trabar la negociación y dividir a los trabajadores, exigiendo que la

## CTC

condenara esos actos. Sorpresivamente para la estatal, los dirigentes accedieron y criticaron los hechos. Esto mostraba que no solo la sorpresa inicial y la radicalidad de la lucha eran elementos fundamentales de la huelga, sino también la unidad en torno a un objetivo que, pese a las diferencias respecto a las formas de acción, se podía mantener y ser comprendida entre los subcontratados.

Esto reavivó las diferencias al interior del gobierno, entre quienes querían allanarse a una negociación (el Ministerio del Trabajo) y los que se negaban (el Ministerio de Hacienda y el directorio de

## CODELCO



). Esta dinámica, donde ni la fuerza obrera ni tampoco la empresa se imponían, y con un gobierno que se replegó de la mediación, hizo que la huelga superara los 30 días. De allí que, al igual que en Arauco, ambas partes buscaran a la Iglesia para mediar en el conflicto. A través del obispo Alejandro Goic, representantes de

CODELCO

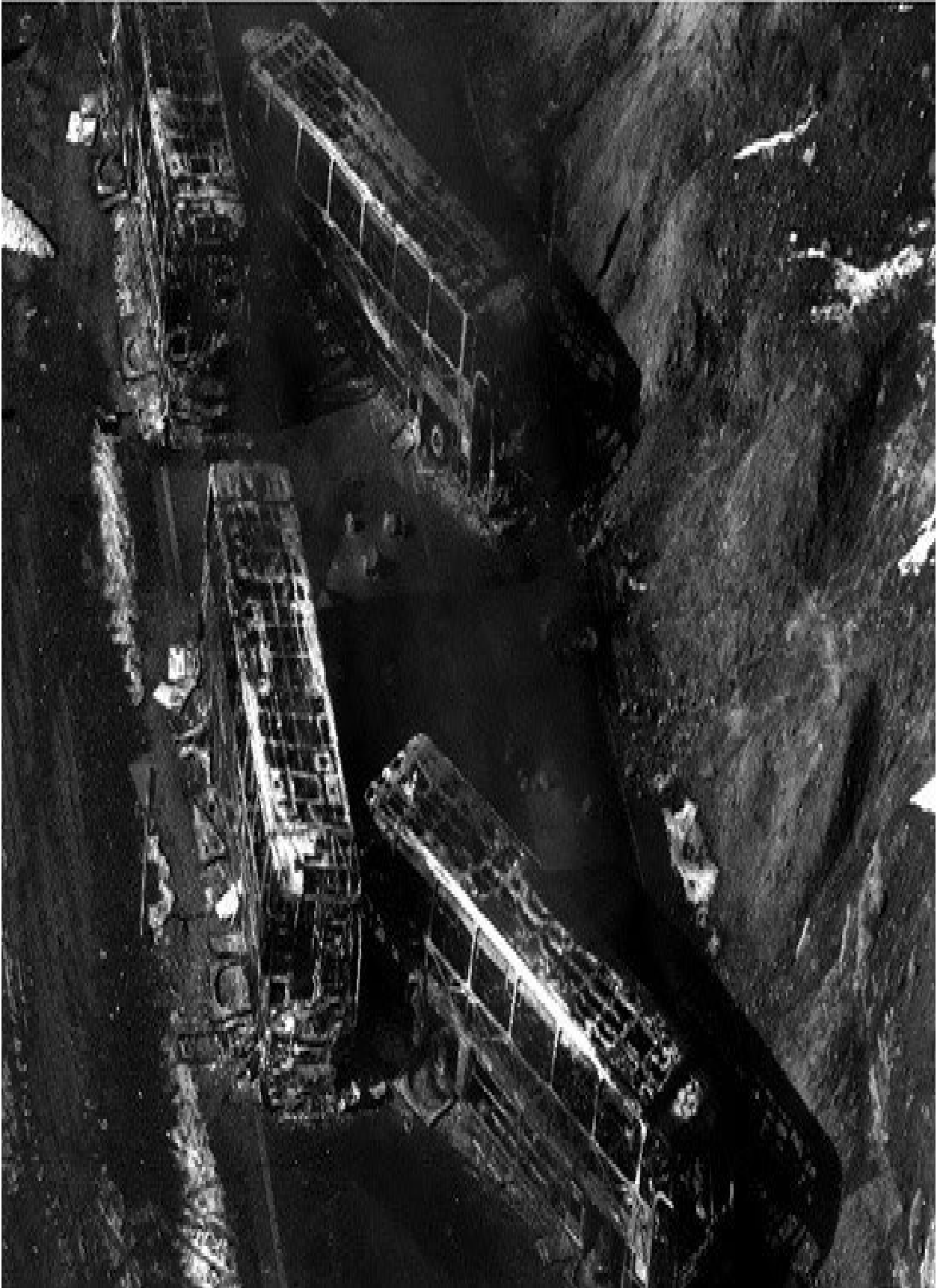
y dirigentes nacionales de la

CTC

construyeron una propuesta “destinada a poner fin a la huelga”. Rápidamente el gobierno y José Pablo Arellano —sin participar de la negociación— reconocieron el acercamiento y el rol de Goic.<sup>701</sup> Este papel jugado por la Iglesia fue relevante para el Ejecutivo, ya que puso a un actor social ocupando en público un rol que los trabajadores reclamaban para el gobierno, que operó tras bambalinas a través de contactos entre el ministro Andrade y el obispo. A pesar de esto, los trabajadores habían alcanzado sus principales demandas: que se respetaran los contratos, contar con seguridad laboral y salud, pago de horas extraordinarias e indemnizaciones por despido, y la entrega de un bono de productividad por \$450.000, que había quedado pendiente el 2006. Sin embargo, aunque la estatal firmó el documento y en la práctica reconocía a los subcontratistas como parte de su producción, en lo legal aparecía solo como “garante” del uso adecuado de los recursos que entregaba a las empresas contratistas. Se diluía así la posibilidad de un precedente legal donde se reconociera la negociación corporativa de la compañía más grande del país con sus subcontratados, que, dada su dimensión nacional, simbólicamente se vería como la primera negociación sectorial. Sentido que disputarían los dirigentes, declarándola como una “gran victoria” por haber negociado “con la empresa principal e instalar en Chile en los hechos junto con las partes y mañana en derecho la negociación ramal y sectorial”.<sup>702</sup>

## IMAGEN 2:

*Buses quemados en camino a El Teniente, Rancagua*



*Fuente: [www.mch.cl](http://www.mch.cl)*

Estas huelgas, junto a los discursos de los sindicalistas forestales y del cobre, encendieron todavía más las alarmas empresariales. Dejando en un lugar secundario las pérdidas económicas, su crítica se centró en torno al desborde de la legalidad, particularmente respecto a lo que leyeron como la instalación por la “fuerza” de la negociación interempresa y sectorial. Reafirmando una especie de “conspiración comunista” para alcanzar dicho objetivo, los empresarios enfocaron sus dardos en el forestal Jorge González, el salmonero Ricardo Casas, el portuario Jorge Bustos y, sobre todo, en el cuprero Cristián Cuevas. Este temor pareció confirmarse luego de que el espíritu movilizador impregnó otros sectores, tal como ocurrió con los trabajadores de la

#### ENAP

, de la minería privada, la agroindustria y el retail. A ello se sumaba una supuesta condescendencia del ministro del Trabajo, que los llevó a cuestionar constantemente al gobierno de Bachelet por no hacer cumplir la ley y garantizar el orden público.<sup>703</sup> Aquella presión, luego de dos años sociales álgidos, provocó un cambio de gabinete, reforzando las posiciones más conservadoras a comienzos del 2008, con la llegada del político y empresario

#### DC

Edmundo Pérez-Yoma al Ministerio del Interior. El remezón político generado durante lo que la misma élite económica denominó con preocupación como “el año de la conflictividad laboral”,<sup>704</sup> obligó a que la Presidenta intentara retomar la batuta del país, mientras el empresariado impugnaba cualquier pretensión gubernamental de apoyar un fortalecimiento institucional del poder sindical.

#### MOVILIZACIONES Y LIMITACIONES TRAS LA IRRUPCIÓN NACIONAL: 2008-2009

Hacia finales del 2007 comenzó a torcerse el contexto favorable para los subcontratados. En diciembre, pareció seguir soplando viento a favor de la dirigencia sindical, ya que la

DT

concluyó que

CODELCO

debía internalizar cerca de 5.000 empleados externos que participaban del giro principal de la empresa. Pero el directorio de la estatal se negó a esta resolución, poniendo un recurso de protección, judicializando el conflicto.<sup>705</sup> A la postre, la sentencia favoreció la negativa empresarial, con lo cual se alineó el gobierno, mostrando que la posición del Ministerio del Trabajo había quedado subordinada a la de Hacienda y del directorio de la compañía. Esta misma estrategia siguieron las mineras privadas, estableciéndose un mecanismo empresarial para frenar las conquistas que pretendían tener los subcontratados.<sup>706</sup> El gobierno adoptaba una interpretación similar a los empresarios respecto de la ley de subcontratación y las movilizaciones de los trabajadores precarizados, por lo que tomó la decisión de no intervenir políticamente en lo que definieron como “conflictos entre privados”, incluso si se daban en compañías estatales.<sup>707</sup>

No obstante lo anterior, las organizaciones sindicales seguían impregnadas del espíritu movilizador del 2007, promoviéndose acciones en otros sectores, como la industria salmonera. Esta área económica era la tercera de mayor relevancia en las exportaciones del país. El dinamismo que alcanzó esta industria en la década de los 2000 transformó buena parte de la fisonomía de las zonas de Puerto Montt y la Isla Grande de Chiloé, generando un territorio funcional a la cadena productiva del sector y de una serie de empresas, tanto nacionales como transnacionales. Si bien creó diversos empleos, con mejores salarios que otras ramas productivas en una zona deprimida en términos económicos, dichos trabajos eran muy precarios.<sup>708</sup> En efecto, las empresas tenían en torno a un 50% y un 60% de subcontratados, con una cadena productiva sumamente fragmentada, dado que los tres grandes procesos de la salmonicultura (cultivo, procesamiento y reproducción) se hacían en lugares diferentes. Esto provocaba una serie de limitaciones para el sindicalismo, agudizado esto último también por la débil tradición organizativa industrial en la zona.<sup>709</sup> Pese a las vulnerables condiciones laborales, los subcontratados del salmón generaron una “identidad

precaria”, en gran medida por el contraste de su realidad respecto a la de los trabajadores de planta y al discurso empresarial que enaltecía el aporte de sus compañías a la economía local. A través de estas diferencias y precariedades fue que los salmoneros desarrollaron formas de solidaridad, que derivaron en formas de organización y movilización en cada compañía contratista, constituyendo el sustrato de su poder asociativo. Empapados de la agitación laboral del 2007, buscaron pasar a negociar a nivel interempresa el 2008.<sup>710</sup>

Como alertaban los mismos medios empresariales meses antes, los subcontratados del salmón de una de las compañías nacionales más importantes, Aguas Claras, iniciaron un proceso huelguístico. Tal cual ha relatado en detalle otra investigación, la de los trabajadores de esa compañía terminó siendo una “Huelga Larga”, donde el proceso y los resultados no fueron los planificados por la organización sindical.<sup>711</sup> Durante el 2007, los trabajadores de AquaChile notaron un cambio unilateral de su empleador, pasando a laborar en cinco razones sociales distintas (Aguas Claras S. A., Servicios Aguas Claras Calbuco, Gente de Mar y Pesquera Antarfood Chonchi), mientras seguían obteniendo sus salarios de Antarfish, dependiente de AquaChile. Esto evidenciaba un uso flagrante de la estrategia del “multi-Rut”, que las empresas utilizaban para subdividir sus procesos productivos, y así limitar los incrementos salariales y fragmentar la fuerza laboral en pequeñas unidades. Si legalmente el reclamo de los trabajadores aparecía contra diversas compañías, ellos sostenían que era contra una misma empresa, Antarfish, que utilizaba de manera “burda” la ley.

La respuesta de los trabajadores siguió el ímpetu y la lógica de los subcontratados que se habían movilizado anteriormente, es decir, actuar más allá de la ley para presionar una negociación, que luego fuera sustentada por un acto legal. En dicho sentido, a mediados de diciembre de 2008 elaboraron un petitorio que buscaba homogeneizar los diversos salarios existentes en las distintas empresas del holding Antarfish, en torno a los \$350 mil, junto a otras mejoras en sus precarias condiciones de trabajo. Con el respaldo de los tres sindicatos de las empresas del grupo, presentaron sus demandas a la gerencia y a la

DT

, en el marco de la negociación colectiva legal respectiva para 2008. Pero existía un problema: algunas firmas (Gente de Mar y Antarfood) tenían un convenio laboral vigente, por lo que la empresa y la institución gubernamental rechazaron el petitorio. Esta posición de la

DT

le quitaba un recurso de poder institucional a los salmoneros que había sido importante en los casos anteriores analizados. De paso, fortalecía la inflexible posición del holding, que se negó a reabrir las negociaciones, a pesar de que los trabajadores votaron hacer una huelga legal y ocupar las dependencias de la planta de procesamiento en Calbuco. Con el correr de las semanas, la compañía decretó el cierre de ella. Lockout que —como dejaron entrever— podía derivar en una clausura definitiva de la planta, implicando el fin de centenares de empleos. A su vez, los gremios de empresarios, especialmente del salmón, comenzaron a presionar al gobierno para que restableciera el orden público, desalojando los lugares tomados y que impidiera cualquier acción callejera que limitara el funcionamiento productivo.

Aun cuando el gobierno se manifestó contrario a intervenir en un conflicto “privado”, se movilizaron decenas de carabineros para controlar los desórdenes. Incluso cuando el intendente Sergio Galilea se mostró disponible para generar instancias de diálogo, rápidamente fue presionado por los empresarios y llamado desde el Ejecutivo para no intervenir. Cuestión similar sucedió con el representante de la Iglesia en la zona, el arzobispo Cristián Caro, quien también buscó generar “puentes de diálogo”, pero en marzo, cuando la movilización alcanzó cerca de un mes, diluyó su presencia en la disputa. De tal modo, los subcontratados del salmón terminaron con un poder social muy limitado, basado en el apoyo irrestricto de sus bases, las familias de estas, de ciertos sectores de la comunidad, de otras organizaciones sindicales (entre ellas la

CUT

y los subcontratados de

CODELCO

) y el

PC

.

La huelga terminó dilatándose y las intenciones de los salmoneros terminaron siendo torcidas, ya que su resolución fue situada al interior de la legislación,

poniéndole una serie de obstáculos a la acción sindical, sobre todo cuando esta apuntaba a negociar a nivel interempresa. Luego de 50 días de movilización, una trabajadora evidenció la compleja situación que vivían: “acá la empresa ha ofrecido pagarnos los días para que uno se descuelgue de la huelga y una está toda aporreada, llevamos tanto tiempo sin sueldo, hay casas donde la luz está cortada, pero uno dice ¡si hemos llegado hasta aquí, aquí nos mantenemos juntos!”.<sup>712</sup> Con una patronal sin signos de retroceder, un gobierno sin pretensiones de involucrarse en el conflicto y unas apremiadas bases, los dirigentes diseñaron una estrategia de repliegue, aceptando la propuesta empresarial previa a la huelga: acuerdos diferenciados, donde los sindicatos de Estuario y Chonchi recibirían un reajuste de un 5,6% y un bono de productividad por un 9%, mientras los demás mantenían sus convenios ya negociados.<sup>713</sup>

Esta movilización, que había estado desde un inicio en el ojo del huracán, por la preocupación que tenían los empresarios, y que tuvo enormes grados de confrontación por la represión policial, más allá de la unidad alcanzada por los sindicatos y la disposición de sus bases a mantenerse en huelga, terminó corroída por la estrategia patronal. De tal modo, los recursos de fuerza sindical estructural, asociativa, social e institucional, tenían otra importante condicionante para su desarrollo, como era el poder empresarial. El cual, a partir de este caso, daba cuenta de potenciales vías para desarticular la acción de los subcontratados.

En paralelo a esto, comenzaba otra movilización de los subcontratados de

CODELCO

. Los dirigentes de la

CTC

reclamaron que la estatal de nuevo dilataba la entrega de los beneficios que había comprometido en agosto del 2007.<sup>714</sup> Ahora bien, a diferencia de las acciones anteriores, entre los sindicalistas no existía una visión unánime respecto a realizar una nueva huelga. Estas diferencias se dieron particularmente entre los voceros de la

CTC

(Cristián Cuevas y Manuel Ahumada), quienes no veían condiciones para

hacerla, y los dirigentes del

## SITECO

(Jorge Peña y Julio Araya), los que realizaban su experiencia, sobre todo cuando el paro comenzó en abril del 2008, y mostraron una mayor efectividad en paralizar la producción de la compañía.<sup>715</sup> Primaba la voluntad de los trabajadores por ir a una huelga, pero comenzaba fisurado su poder asociativo a nivel dirigencial.

Aunque los subcontratados evidenciaron capacidad de movilización y rápidamente activaron su poder social, comenzaron a enfrentar distintos obstáculos. En efecto, si bien presionaron a otros actores para que abrieran conversaciones, como el obispo Goic y el presidente de la

## CUT

, Arturo Martínez, desde el Ejecutivo y

## CODELCO

señalaron que no habría negociación tripartita, alineando esta vez al Ministro del Trabajo.<sup>716</sup> Incluso, los dirigentes de los trabajadores de planta de

## CODELCO

, encabezados por Raimundo Espinoza, se posicionaron contra los subcontratados, al criticar la “violencia” de la cual habrían sido víctimas al momento de ser bloqueados los accesos a los yacimientos. En esta tensión se centraron los medios de comunicación y el gobierno para mostrar a los trabajadores divididos. Por ello, la Iglesia se distanció de los subcontratados, mientras se postergaba la solución del conflicto, y el presidente de la

## CUT

se “aburría” de poner a la organización como puente entre la estatal y los trabajadores.<sup>717</sup> La

## CTC,



con pocos aliados para imponer sus términos, se allanó a conversar bajo las condiciones del gobierno. Tras 20 días de huelga, el vocero Francisco Vidal y Cristián Cuevas, a través de carriles distintos, dejaron entrever que había “buena voluntad de las partes” para “buscar una salida pronta a este conflicto”.<sup>718</sup>

En dicho escenario, la mayoría de los dirigentes subcontratados —no todos— le entregaron la interlocución a Arturo Martínez, quien llegó a un acuerdo con Edmundo Pérez Yoma y Osvaldo Andrade.<sup>719</sup> Como consignaron los medios de la época, la solución fue: a) no habría mesa tripartita y la negociación se haría entre empresas contratistas y la

CTC

, sin participación de

CODELCO

, siendo los ministros de Interior y Trabajo, junto al presidente de la

CUT

, los garantes del acuerdo; b) se entregaría un bono de \$500 mil; y c), se propondría una mesa de discusión de agenda corta para resolver otros beneficios. Luego de esa cita, tres dirigentes de la

CTC

, Cristián Cuevas, Manuel Ahumada y Julio Araya, llevaron la propuesta a las diferentes divisiones de

CODELCO

, la que fue acogida por la mayoría, pero rechazada en El Teniente.<sup>720</sup> Esto consolidaba las distintas posturas sobre la huelga y las posibilidades de acción entre los trabajadores: mientras unos veían un contexto adverso que limitaba su capacidad, otros creían que podían revertir la situación en la cual se encontraban. Los trabajadores, si bien ratificaron algunos logros del 2007, no pudieron “correr más el cerco”, viendo los límites de su poder cuando enfrentaban un contexto adverso y con fisuras internas.

Los meses siguientes golpearon a los subcontratados. De un lado, por los masivos despidos en el marco de una crisis económica mundial que impactaba a la producción cuprífera, que sirvió de argumento para que

CODELCO

y las contratistas “cortaran” a los trabajadores que se habían movilizado. Y de otro, porque el

SITECO

, la organización impulsora de la organización de subcontratados en la estatal, terminó saliéndose de la

CTC

al considerar que la negociación de esta no respondió a los intereses de los trabajadores.

De tal manera, los obstáculos políticos a las estrategias de los subcontratados se conjugaban con el impacto de la crisis económica mundial. Esta comenzó a sentirse a fines del 2008 en el país, particularmente en estos agitados sectores exportadores estratégicos para la economía chilena.<sup>721</sup> Cuestión que, al generar incertidumbre laboral, obstaculizaba de manera fuerte su reactivación sindical. En el plano más político-institucional, el alineamiento del gabinete en torno a una posición única, pretendía frenar la efervescencia social de cara a las elecciones del 2008 (municipales) y 2009 (presidenciales y parlamentarias), lo que derivó también en acercamientos entre la coalición de gobierno con el

PC

, para desarrollar un “pacto por omisión”, que permitiera a la Concertación, por un lado, mantener su mayoría en ambos comicios y, por otro, romper la “exclusión” parlamentaria de los comunistas.<sup>722</sup> Ello repercutía en los trabajadores subcontratados, pues el

PC

tenía la hegemonía en gran parte de sus organizaciones, por lo que su disposición al diálogo con el oficialismo los llevó a una actitud menos beligerante y, por

ende, menos movilizadora. Estos vínculos se expresaron a nivel sindical cuando se consolidó la alianza entre los dirigentes del

PC

y Arturo Martínez en la

CUT

.<sup>723</sup> De allí que, incluso cuando existieron acciones laborales que impactaron en la agenda pública, como el paro del sector público del 2008 y la movilización docente por el “Bono

SAE

” en 2009, fueron mucho menos disruptivas que la agitación laboral antes analizada.<sup>724</sup>

Solo una nueva huelga de los subcontratados forestales en Bosques Arauco, durante el segundo semestre del 2009, pareció revertir esta tendencia. Pero, a diferencia del 2007, también afrontaron el proceso de manera fragmentada. Esto se expresó en una división entre la

CFT

, conducida por el sindicalista comunista Jorge González, y la

USINFA

, liderada por dirigentes sin militancia, como Mario Bravo. En un contexto donde se les imputaba a los líderes del

PC

una estrategia para instalar la negociación interempresa, la compañía prefirió reconocer como organización representativa de los trabajadores a la

USINFA

. No obstante, al igual como había ocurrido con los subcontratados de

CODELCO

, Arauco empezó a desconocer algunos acuerdos del 2007. En respuesta, la

CFT

se preparó para alcanzar dos grandes objetivos: aumentar el salario hasta \$250 mil, lo que la Iglesia había planteado como “sueldo ético”, junto al cumplimiento de todo el pliego de reivindicaciones laborales alcanzadas el 2007; pero también que la organización fuera reconocida por el holding.

Para ello, durante agosto de 2009 presentaron un pliego a la empresa, poniendo como plazo el mes de septiembre para obtener una respuesta. La estrategia de la

CFT

fue centrar la movilización en paralizar las plantas de celulosa que no podía externalizar Arauco. Es decir, el lugar estratégico para la producción del holding. En este sentido, la acción fue altamente efectiva, pues logró bloquear las cuatro plantas de la empresa (Cholguán, Horcones, Constitución y Aldea) el 24 de septiembre, obligando a que un día después la gerencia respondiera. Los sindicalistas, al tener en cuenta la negativa generalizada del empresariado de mostrarse nuevamente débil en un proceso de movilización laboral que buscaba una negociación interempresa, presionaron al intendente regional de la época, Jaime Tohá, para que conversara con la gerencia y llegara a una propuesta de consenso. De allí que, aun cuando el holding negó públicamente que negoció con la

CFT

, la gerencia, por un lado, comunicó que exigiría a sus empresas contratistas pagar como mínimo 260.000 pesos a sus trabajadores, y por otro, a través del gobierno, hizo llegar una propuesta a los sindicalistas, donde su organización era reconocida como representativa de los subcontratados y aceptaba iniciar mesas de diálogo en las que se tratarían distintos temas laborales.

Teniendo esta respuesta, la

CFT

aprobó la propuesta en su asamblea, terminó con el paro y reinició sus conversaciones. En un empate político y con una estrategia pragmática, la organización sindical conseguía sus objetivos, pero el holding no aparecía públicamente mostrando debilidad y negociando con trabajadores que afirmaba no eran suyos. De todos modos, la

CFT

recobró un poder institucional de facto que se le había negado en la compañía, cuestión que resaltó su dirigencia: “los trabajadores agradecen el apoyo de todos quienes participaron en este movimiento que fueron capaces de paralizar cinco complejos industriales de esta poderosa empresa y que permitió a través de la lucha y la unidad, recuperar el respeto y reconocimiento de las organizaciones sindicales vinculadas con el Holding Arauco”.<sup>725</sup>

Sin embargo, la mencionada unidad no era del todo real, ya que un mes después la

USINFA

impulsó otra huelga al interior de la empresa forestal, con el objetivo de aumentar los salarios en \$80 mil. Incluso, la organización fue capaz de involucrar a cerca de 8.000 obreros y paralizar 16 plantas de trabajo, pero más centrada en los aserraderos. Estos espacios no eran neurálgicos para Arauco, ya que podía externalizarlos, no como ocurría con sus plantas de celulosa, las cuales no dejaron de funcionar. La postura del holding nuevamente fue inflexible, sosteniendo que la movilización era ilegal y que las demandas eran injustificadas.<sup>726</sup> Aunque la

USINFA

solicitó mediar al gobierno y a la Iglesia, no tuvo una respuesta positiva, y al no sumarse la

CFT

, la organización quedó sin capacidad de presión, por lo que luego de una semana de huelga se comenzaron a descolgar distintos grupos de trabajadores. La movilización había fracasado, evidenciando el debilitamiento de la

## USINFA

y la fragmentación del poder sindical asociativo forestal, lo que estrechaba su potencialidad disruptiva, en particular del uso del poder estructural. Por lo mismo, cualquier estrategia de movilización debía ser muy cuidadosa y altamente pragmática para articular los limitados recursos sindicales disponibles en un escenario como el de 2009, tal cual había hecho la

## CFT

.

El ciclo de irrupción de los subcontratados tuvo una serie de avances, pero también limitaciones. Si el bienio 2006-2007 marcó un ascenso, en medio de un momento de agitación social más amplio en el país, que irradió su espíritu hacia otros sectores del mundo laboral, los años 2008 y 2009 fueron de estancamiento. Se cerraba así el ciclo de emergencia de los trabajadores subcontratados, que les había permitido instalar sus demandas en la agenda pública y desarrollar estrategias para articular sus propios recursos de poder, con el fin de avanzar en la negociación colectiva de los trabajadores. Gracias a ello, contribuyeron a fortalecer el sindicalismo, pero también vieron una respuesta empresarial, que los hizo reformular sus objetivos. De todos modos, ya no los excluirían del escenario sindical, pero sí tendrían que repensar sus perspectivas en un contexto laboral donde eran protagonistas.

## CONCLUSIONES

El 2007 quedó marcado a sangre y fuego en la historia del sindicalismo chileno. Las movilizaciones de subcontratados que remecieron el país estuvieron signadas por la muerte de Rodrigo Cisternas y el incendio de buses en El Teniente, justo un siglo después de la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Ello demostró, entre otras cosas, una continuidad histórica en la beligerancia de la élite económica y política para responder a las luchas de la clase trabajadora, en especial cuando estas movilizaciones han correspondido a sectores emergentes del mundo subalterno, cuyas demandas tocan los núcleos del poder económico empresarial, como son las relaciones laborales capitalistas.

Con el objetivo de resolver sus necesidades materiales, los dirigentes de los subcontratados desarrollaron estrategias que intentaron rearticular distintos recursos de poder de las organizaciones de trabajadores. Entre tradiciones e innovaciones, retomaron su fuerza asociativa en torno a sindicatos para emprender sus luchas; desarrollaron un actuar dentro y fuera de la ley para conseguir sus objetivos; impulsaron dinámicas de sociabilidad interna para fortalecer sus organizaciones, además de lazos de solidaridad o alianzas tácticas con otros actores sociales (laborales, políticos o religiosos); rescataron distintos simbolismos históricos del movimiento de trabajadores del país, para entroncar sus luchas con una larga trayectoria, permitiendo dotar de sentido temporal hacia el pasado, presente y futuro las reivindicaciones que levantaron sectorialmente; elaboraron petitorios que articulaban demandas económicas con otras más políticas que cuestionaban las relaciones laborales, tal cual eran la misma subcontratación y formas de negociación colectiva; y se dispusieron tanto a la movilización como también a la negociación, dependiendo de las coyunturas que enfrentaban o las lecturas que hacían sobre ellas. En este sentido, más que un nuevo sindicalismo, que si bien ostentaba prácticas novedosas (como un mejor uso en las formas de comunicar ideas, estrategias de negociación interempresa no contempladas con anterioridad y cierto “asambleísmo” en la toma de decisiones), lo que hicieron estos trabajadores fue revitalizar una forma de acción laboral que en la ecuación movilización/negociación ponía el eje inicial más en la primera que en la segunda. Esta lógica de innovación dentro de una continuidad lo demuestran las mismas limitaciones de este sindicalismo. Ello porque luego del ciclo de irrupción y donde los subcontratados fueron reconocidos como una franja importante del esquema productivo criollo, tuvieron que afrontar un momento de “institucionalización” de su poder, donde operaron tensiones del pasado reciente del sindicalismo, como ha sido la tendencia a la fragmentación y división política. De esta manera, puede entenderse que las acciones laborales de los subcontratados mixturaron ideas y prácticas novedosas, pero dentro de lógicas históricas de la cultura político-sindical criolla.

Pero este proceso que podría leerse como una forma de politización lineal y ascendente, estuvo lejos de ser tal. Incluso cuando los dirigentes podían reconocer avances en sus luchas, que les permitían establecer nuevos objetivos a sus organizaciones y bases, también tenían bastante claro que la centralidad de los intereses de sus trabajadores eran las soluciones salariales concretas. De allí que los temas más políticos, pese a que eran contemplados y en cierta medida reflexionados por sus representados, quedaban en un lugar secundario a la hora

de consagrar mejoras económicas. Prioridad que no debería ser extraña en un país donde el acceso a cualquier bien o servicio se da a través del mercado, haciendo del dinero y los salarios un factor indispensable para la reproducción de la clase trabajadora y sus necesidades. Pero lo interesante es que dicha centralidad pudo ser combinada con luchas laborales más políticas, aunque fuera contingentemente. En este sentido, en el plano de la subjetividad sindical, un elemento importante había sido la capacidad de generar procesos de identificación en los sectores subcontratados movilizados. De allí que, más allá de las paupérrimas condiciones laborales y su estacionalidad, los subcontratados generaran una “identidad precaria”. Fuera por oposición hacia otros actores (trabajadores de planta y la patronal) o por el mismo discurso que realzaba a sus industrias en la economía nacional, que fortalecieron su orgullo de ser parte de esos sectores productivos y su visión de que debían ser reconocidos por esto, a través de una compensación material salarial. Eso sí, tal identificación, que conllevaba cierta lógica de politización, no era necesariamente un encuadramiento proyectual de esos mismos trabajadores. La construcción de esa identidad podía ser muy vertiginosa y dotar de sentido político su actuar, como ocurrió particularmente durante el 2007, pero también era muy precaria, por ende, susceptible de difuminarse.<sup>727</sup>

Con todo, el ciclo de movilización de los subcontratados revitalizó el sindicalismo y reposicionó la “huelga” como una forma de acción que podía trastocar el escenario político nacional. Para ello, habían operado condiciones contextuales, de tipo socioeconómico, como la masificación de las formas de precarización del trabajo, y otras políticas, como las regulaciones impulsadas desde la misma institucionalidad estatal que consolidaban el modelo. También la potencialidad estructural que ostentaban ciertos subcontratados que laboraban en industrias estratégicas de la economía chilena, como la minería cuprífera y las forestales. Pero sobre todo fue determinante en esta nueva efervescencia el actuar de los trabajadores, quienes buscaron reformular dichas tendencias en su favor, presionando para obtener mejoras laborales, salariales y sindicales. De allí que —todavía cuando los factores contextuales o accidentales, como el asesinato de Rodrigo Cisternas, contribuyeron a sensibilizar el escenario para la irrupción de los subcontratados, dotándolos de legitimidad e incrementando su poder social— fuera más relevante el proceso de organización y las estrategias desplegadas en su emergente trayectoria para ponerse entre sus objetivos algo que otros sectores laborales con mayor tradición no habían alcanzado, como era desbordar las relaciones del trabajo enfocadas solo a nivel de empresa.



De esta manera, los trabajadores más precarizados, utilizando distintos recursos de poder, particularmente su fuerza disruptiva en aquellos sectores que eran posiciones “estratégicas” en el esquema productivo local, combinado con la organización unitaria y el uso táctico de articulación con otros actores sociales y políticos, pudieron pensar en mejorar sus condiciones laborales y apostar a lograr la negociación interempresa o sectorial. Es decir, incrementar su poder institucional y alcanzar triunfos históricos para la clase trabajadora local. Sin embargo, la fuerza del empresariado y su capacidad de elaboración táctica y estratégica, les puso límites y revirtió avances importantes a las organizaciones sindicales.

A pesar de esto, la gran novedad respecto de la posdictadura estuvo en la propia capacidad de los subcontratados de instalar sus demandas en el escenario político, no obstante el poco interés de la élite económica y política por reconocerlos como actores colectivos. La lucha por plantear la precarización del trabajo en la agenda pública, a través de su reclamo contra la subcontratación y las relaciones laborales que se configuraban en torno a esta, demostró que el campo sindical todavía tenía la potencialidad de reflexionar sobre la realidad que enfrentaba la clase trabajadora local y, sobre todo, buscar cambiar dicha situación. A contrapelo de las pretensiones empresariales, fueron pioneros los subcontratados en instalar una dimensión de la precarización de la clase trabajadora, como era aquella que se daba en el mundo laboral, que pasaba por lo sindical y se proyectaba hacia los demás espacios de vida. Otros campos sociales y organizativos, de los cuales fueron parte trabajadores que participaron en estas movilizaciones, metabolizarían en los años posteriores la lucha contra la precarización de la vida en otros sentidos.

Los subcontratados, de quienes no se esperaba mucho a fines del siglo

XX

, aunque no ganaron la lucha contra la precarización de la clase trabajadora bajo el neoliberalismo, sí consiguieron algunas conquistas y contribuyeron al inicio de una coyuntura histórica donde la movilización social jugaría un papel más relevante en la política nacional.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Agacino, Rafael, “El capitalismo chileno y los derechos de los trabajadores”, en Cuadernos de Trabajo, Universidad Veracruzana, 2001.

, González, Cristián y Rojas, Jorge, Capital transnacional y trabajo. El desarrollo minero en Chile, LOM, Chile, 1998.

Álvarez, Rolando, Gremios Empresariales, política y gobierno. Los casos de Chile y Perú (1986-2010),

LOM

, Santiago, 2014.

, “¿Desde fuera o dentro de la institucionalidad? La ‘Huelga larga’ del salmón y las nuevas estrategias sindicales en Chile (2006-2008)”, en Aravena, Antonio y Núñez, Daniel (eds.), El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo XXI, ICAL, Santiago, 2009, pp. 60-90.

, “La ‘identidad precaria’: Sumisión y resistencia laboral en Chile. El caso de los trabajadores precarios del salmón”, en Alternativa, N° 24, diciembre de 2006.

y Aravena, Antonio (eds.), Los trabajadores y la nueva cuestión social. Repensando la realidad laboral y sindical en Chile, ICAL, Santiago, 2004.

Amtmann, Carla; Barrera, Esteban y Serra, María, “Revirtiendo la derrota histórica del sindicalismo. La conformación de la Confederación de Trabajadores del Cobre y la Gran Huelga del año 2007”, Tesis para optar al grado de

Licenciado en Educación, Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 2011.

Araujo, Kathya y Martuccelli, Danilo, Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Tomo

I

,

LOM

, Santiago, 2012.

Aravena, Antonio y Núñez, Daniel (eds.), El renacer de la huelga obrera en Chile,

ICAL

, Santiago, 2009.

, “Los trabajadores de la industria del Salmón en Chile”, en Alternativa, N° 24, diciembre de 2006.

Araya, Rodrigo, Organizaciones sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los consensos: 1983-1994, Universidad Finis Terrae, 2015, Santiago.

Ariztía, Tomás, “El consumo y los sectores medios en el Chile de los 90”, Tesis para optar al Título de Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2002.

Ayala, Jorge, Historia del movimiento sindical de Huachipato 1979-2013, Escaparte, Concepción, 2016.

Baltera, Pablo y Dussert, Juan, Liderazgos sindicales emergentes. El caso de los trabajadores subcontratados de la salmonicultura, cobre y forestales, División de Estudios, Dirección del Trabajo de Chile, Santiago, 2010.

Canals, Mauricio, “Los Trabajadores Forestales de la

## VIII

Región. Condiciones de Vida y Horizontes Políticos 1990-2013”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2014.

“Chile. Crecimiento, empleo y el desafío de la justicia social”, Informe Oficina Internacional del Trabajo, Santiago, 1998.

## CONAF

, “Plantaciones y pobreza en comunas forestales”, 2014. Documento de trabajo.

Contreras, Rodolfo, Más allá del Bosque. La industria forestal en Chile, Amerindia Estudios, Santiago, 1989.

Díaz, Estrella; López, Diego y Riquelme, Verónica, “Los derechos laborales del Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos en la industria Forestal y en la industria del Salmón”, en Cuaderno de Investigación, N° 32, Dirección del Trabajo, 2007.

Durán, Gonzalo y Kremerman, Marco, “Informe Industria Forestal”, en Cuaderno de Investigación, N° 3, Fundación Sol, 2007-2008.

Organización Internacional del Trabajo, “El Trabajo decente en la Industria Forestal en Chile”, en Documento de Trabajo,

## OIT

, 2012.

Echeverría, Magdalena y López, Diego (resp.), “Flexibilidad laboral en Chile: Las empresas y las personas”, Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo, 2004.

“Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional,

## CASEN

2013”, Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, 2013.

Espinosa, Malva (resp.), “Calidad de Vida en el Trabajo: Percepciones de los

trabajadores”, en Cuadernos de Investigación, Dirección del Trabajo, 2002, pp. 64-74.

Frank, Volker, “Políticas sin política: el fracaso de la concertación social en el Chile democrático, 1990-2000”, en Ponce, José; Santibáñez, Camilo y Pinto, José, Trabajadores & trabajadoras. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno. 1979-2017, América en Movimiento, Valparaíso, 2017.

Frigolett, Hernán y Sanhueza, Alejandra, “Evolución del gasto en consumo de los hogares en Chile, 1985-1995”, Documentos

MIDEPLAN

, Unidad de Estudios Prospectivos, 1999.

Garretón, Manuel, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile. 1990-2010,

ARCIS-CLACSO

, Santiago, 2010.

López, Diego, El movimiento sindical en el gobierno de Michelle Bachelet: nuevas acciones y liderazgos, Friedrich Ebert Stiftung, Santiago, 2009.

Marambio, Alejandro, “Bancarización, crédito y endeudamiento en los sectores medios chilenos: Tácticas de acceso, diferenciación social y el espejismo de la movilidad”, Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización, Universidad de Chile, Santiago, 2011.

Marticorena, Clara y D’Lurso, Lucila, “El poder de los/as trabajadores/as: una revisión crítica de los abordajes conceptuales para su estudio”, en Revista de Estudios Marítimos y Sociales, N° 18, enero 2021, pp. 171-198.

Martínez, Arturo, “Estrategia sindical en un Chile internacionalizado”, en Ensigna, Jaime (ed.), Mitos y realidades del mercado laboral en Chile, Fundación Friedrich Ebert, Chile, 2005.

Meller, Patricio, “La Historia Reciente Contada Gráficamente. Comparación de los Indicadores económico-sociales del gobierno de Pinochet con los Gobiernos

de la Concertación”, Documento

CIEPLAN

, Santiago, 2005.

Montecinos, Alejandro, “Sindicato siteco: Memorias, Identidad, Hegemonía. 2000-2006”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Santiago, Chile, 2014.

Moulian, Tomás, El consumo me consume,

LOM

, Santiago, 1998.

Muñoz, Óscar y Stefoni, Carolina (coord.), El periodo del Presidente Frei Ruiz-Tagle, Editorial Universitaria, Santiago, 2003.

Núñez, Daniel, “El suministro de personal en la industria del salmón y la degradación social del trabajo”, en Alternativa, N° 24, diciembre de 2006.

Osorio, Sebastián, “De la estrategia concertacionista al sindicalismo de contención. Un balance de la

CUT

en la postdictadura, 1990-2016”, en Ponce, José, Santibáñez, Camilo y Pinto, José, Trabajadores & trabajadoras. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno. 1979-2017, América en Movimiento, Valparaíso, 2017.

, “Trayectoria y cambios en la política del Movimiento Sindical en Chile, 1990-2010: El caso de la CUT, entre la independencia política y la integración al bloque Histórico Neoliberal”, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2014.

Pinto, Francisco y Kremerman, Marco, “Cultivando Pobreza: Condiciones laborales en la Salmonicultura”, Terram Publicaciones, 2005.

Ponce, José, “Huelgas y conflictos en democracia. Cultura política y estrategias sindicales en la postdictadura chilena (1990-2003)”, Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2021.

, “Movimiento sindical en transición: Conflictividad y cultura política sindical en la postdictadura chilena (1990-2010)”, en Ponce, José, Pérez, Aníbal y Acevedo, Nicolás, Transiciones. Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena. 1988-2018, América en Movimiento, Valparaíso, 2018, pp. 311-350.

, “Vino viejo en copas nuevas. Los trabajadores subcontratados y la acción sindical cuprífera en la postdictadura chilena (2005-2008)”, en Ponce, José; Santibáñez, Camilo y Pinto, Julio, Trabajadores y trabajadoras. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno, 1979-2017, América en Movimiento, Valparaíso, 2017.

y Álvarez, Rolando, “¿Comunismo en una era postcomunista? La política sindical del partido comunista de Chile, 1990-2010”, en Revista Nuestra Historia, N° 1, CIM, España, 2016.

“Las Paradojas de la Modernización”, Programa de Desarrollo Humano en Chile, Chile, 1998.

Rojas, Jorge y Aravena, Antonio, “El mundo del trabajo y el trabajo asalariado en Chile”, en Escobar, Patricio (ed.), Trabajadores y empleo en el Chile de los noventa,

LOM-PET

, Santiago, 1999, pp. 137-222.

Rozas María, Globalización y Concertación social,

OIL

, Santiago, 1998.

Ruminot, Nelson, “La huelga en Forestal Arauco: de las acciones sindicales al forzamiento de la negociación colectiva inter-empresa”, en Aravena, Antonio y Núñez, Daniel (eds.), El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo

*XXI*

,

ICAL

, Santiago, 2009, pp. 110-125.

Schmalz, Stefan, “Los recursos de poder para la transformación sindical”, en Nueva Sociedad, Número Especial: Sindicatos en Transformación, 2017, pp. 20-42.

“Umbrales sociales 2006. Propuesta para la Futura Política Social”, Fundación para la Superación de la Pobreza, 2005.

Villalobos, Cristóbal, “Subcontratación y sindicalismo en el siglo

*XXI*

: Relaciones sociales, Trabajo y Organización Sindical en la gran minería del cobre chileno”, en Revista

*GPT*

, N° 8, Universidad de Santiago, Santiago, 2010.

Zapata, Francisco, Historia mínima de: el sindicalismo latinoamericano, Colegio de México, México, 2013.



\* Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

## **XII. UN LARGO MAYO EN CHILOÉ: TERRITORIO Y LUCHAS SOCIOAMBIENTALES EN EL CHILE NEOLIBERAL**

ROBINSON SILVA HIDALGO



### **LOS TERRITORIOS SE LEVANTAN**

Desde los años 2000 un nuevo ciclo comienza a aparecer en el horizonte político y social chileno. Ese nuevo ciclo tiene un componente que, si bien es recurrente en el pasado histórico del país, ahora toma una fuerza inusitada; desde territorios lejanos al centro político, múltiples movilizaciones gestionadas por nuevas grupalidades comienzan a tejer un reclamo antineoliberal que se emparenta con el actual escenario que enfrenta Chile desde 2019, aquel marcado por la revuelta y/o estallido de octubre. Es así como muchas de las cuestiones que hoy se toman el debate público tienen antecedentes en las reivindicaciones nacidas y desarrolladas desde las afueras del centro político nacional.

Pero si la revuelta popular reveló estos malestares en los territorios que no son el centro, que van mucho más allá de la Plaza Dignidad y del 18 de octubre como el punto de fuga de los pueblos de Chile que se movilizan, debemos abrir el campo de mira para preguntarnos acerca de qué significa esta pluralidad de zonas que, desde el denominado “afuera”, apuntan al modelo económico y social neoliberal.

Aludimos a nuevas articulaciones de protesta social y política que, paulatinamente, van a devenir en la revuelta de octubre, porque en pequeñas localidades y regiones apartadas el malestar afloró con fuerza. Ahora bien, ese malestar tuvo múltiples referencias específicas, las que pusieron a los territorios

al centro de la movilización.

Puestos en este contexto, un elemento esencial que moviliza a los territorios guarda relación con la conflictividad socioambiental. El avance de una serie de proyectos de carácter extractivista por todo el país ha hecho que las comunidades de diversas zonas levanten movimientos que, categorizados como sociales, se han transformado en nuevas subjetividades políticas. En este sentido nos interesa observar cómo devienen de lo social a lo político a través de la protesta, qué conflictos maduran desde la articulación de comunidades amenazadas por proyectos extractivistas y qué aliados colaboran en la definición de ese proceso de politización.

Pues bien, si tenemos al territorio como uno de los sujetos contendientes, son las instituciones estatales, en su versión ultraliberal, las que se comprenden como parte del otro en pugna; ese Estado se presenta en el debate como el articulador de políticas proempresariales que gatillan conflictos localizados pero profundamente dañinos para la sobrevivencia y proyección de los territorios.

De esta manera, creemos que se está produciendo una nueva politización de las comunidades alejadas política y geográficamente del centro, espacios afectados por la política extractivista, donde capas de población poco atendidas por la política convencional utilizan la movilización como forma de incidencia en el debate nacional. En ese proceso hay politización que quiebra con el sistema de partidos tradicional y construye nuevas formas de participación política: una participación asamblearia, contestataria y generadora de organización social y política de nuevo tipo.

Anexo a ese planteamiento podemos señalar que la revuelta de octubre fue la catalizadora que sacó a la luz este tipo de movilización política, la que, a partir del alegato socioambiental, ha impulsado eventos de protesta contra el Estado neoliberal incorporándose al torrente histórico que ha exigido la clausura de la era ultraliberal de origen dictatorial. Por otra parte, también ha colaborado en abrir la discusión acerca de las formas descentradas de organizar la vida social y política en el país. La historia del presente en Chile se está tejiendo en esa disputa.

Abordamos este problema desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, que trata las cuestiones abiertas en el debate social y político, desde las memorias de los territorios y sus luchas, las que antes se entendían solo como

historia local y que hoy se imponen como un elemento disruptivo frente al neoliberalismo. En esta línea, consideramos el conflicto como una cuestión situada en el territorio que debate directamente con el actual Estado neoliberal, es decir, la razón sociopolítica radicada en el territorio movilizado se enfrenta a la razón jurídica de las instituciones, dos formas de racionalidad que se encuentran y desencuentran en la discusión, apelando a la dominación del contrario a través de sus políticas.

El tratamiento del “mayo chilote”, en tanto estudio de particular interés para este trabajo, se sustenta en la investigación histórica documental y se asienta en dos partes: por un lado, toma las declaraciones, documentos y noticias producidas por medios de comunicación digitales que han sido difundidas a partir de protestas y manifestaciones denominadas locales o regionales; y por otro, hacemos uso de la bibliografía producida por la academia y diversos estudios sociales de centros de pensamiento en torno al problema.

Para especificar las fuentes primarias sobre las que trabajamos, consideramos medios de prensa digitalizados, cuya fiabilidad se da por tener ediciones sostenidas en el tiempo. El estudio del presente desde la historia tiene en la producción de este tipo de información una gran ayuda, dentro de esta tipología de fuentes encontramos prensa regional o local y de carácter nacional. Consideramos editoriales, noticias, entrevistas y reportajes.

Otro grupo de fuentes de primer orden son los testimonios que hemos recabado gracias a la generosa colaboración de activistas y actores presentes en la movilización chilota de 2016; ellos representan el pensamiento de los movimientos, grupos y asambleas que dan vida a las organizaciones que se han manifestado en el territorio. En ese sentido, hemos perfilado a jóvenes, hombres y mujeres, que definen la nueva politicidad emergente a partir de las protestas causadas por el daño ambiental en la isla.

Por último, este texto se organiza en un primer apartado que nos pone en situación, categorizando el neoliberalismo chileno y su carácter extractivista, la emergencia de la cuestión socioambiental como productora de hechos políticos y el carácter de la protesta en su definición urbana y rural respecto a los factores políticos y económicos del presente.

## EL TERRITORIO CONTRA EL NEOLIBERALISMO

Los tiempos neoliberales en Chile tienen, hoy por hoy, una serie de contradictores que han venido incubándose en las últimas décadas. Es imperioso, entonces, conocer el carácter general del neoliberalismo actual y, por sobre todo, dar una mirada a las impugnaciones hacia el modelo económico, el cual ha sido elogiado hasta la saciedad en sectores de la academia, los medios y la política internacional. Para considerar las voces contrarias a las políticas ultraliberales chilenas presentamos elementos que nos parecen insoslayables: la aparición del territorio como receptáculo de la protesta y, desde ahí, la articulación de las nuevas formas de organización y protesta que acompañan la crítica al neoliberalismo.

El neoliberalismo irrumpe en Chile de la mano de la dictadura cívico-militar, la que arroja a un grupo de empresarios de nuevo tipo, quienes asumen las premisas del grupo de políticos en el poder,<sup>728</sup> viejos personeros de la derecha tradicional, algunos renegados democristianos y, sobre todo, gremialistas, la nueva derecha liderada por Jaime Guzmán, tendencia que se abre a las ideas del ultraliberalismo de la Escuela económica de Chicago.<sup>729</sup> En efecto, los Chicago Boys, como se le denominó al grupo de economistas chilenos que estudió en la Universidad de Chicago, tuvieron amplia llegada en el sector gremialista, compuesto principalmente por jóvenes meritocráticos, quienes, instalados en el aparato del Estado, se transforman en líderes a medio camino entre el anticomunismo y estas nuevas corrientes economicistas.<sup>730</sup>

El planteamiento neoliberal en Chile se sustentó en un rápido crecimiento económico vinculado a la explotación desmesurada de materias primas; los llamados commodities fueron la catapulta de ese nuevo empresariado.<sup>731</sup> Es así como el país se va llenando de explotaciones mineras en el norte, de extensos campos frutícolas en el centro y de plantaciones igualmente masivas de monocultivos forestales en el centro sur. Poco a poco esta forma de explotación se va masificando y expandiendo y aparecen así las piscifactorías, como los cultivos de salmones, de las que trataremos más adelante.

Chile llegó a los años de la transición democrática, la década del 90, como una gran zanja de explotaciones de materias primas que no hizo más que aumentar durante el periodo concertacionista, coalición política que aprovechó al máximo

los años de bonanza de esta forma de explotación: su máxima fue la profundización del modelo de negocios. Apoyándose en el mayor prestigio de las instituciones,<sup>732</sup> firmó decenas de Tratados de Libre Comercio que ayudaron a que las exportaciones de materias primas no dejaran de crecer. Los años dorados de la nueva democracia se sustentaron en una montaña de desechos y malos salarios que aún pesan en el sistema social y político chileno, pesan como una deuda para los constructores de la riqueza de la nueva burguesía neoliberal. Los trabajadores y trabajadoras, sin interlocutores en los partidos que antes lucharon contra la dictadura, buscaron otras formas de articulación y organización, centraron sus batallas en ámbitos específicos y se reencontraron en el gran levantamiento del 18 y 19 de octubre de 2019.

En cuanto a la acusación por los efectos indeseados de la política económica neoliberal, esta se basa en el enfrentamiento entre economía y ecología expuesto por los neoliberales. Gudynas define que los cambios en los discursos transformadores deben venir de la unión entre la noción de justicia social y justicia ambiental, puesto que ambas no pueden seguir planteándose como dicotómicas.<sup>733</sup>

Estas luchas se imbrican en la historia latinoamericana como parte de las movilizaciones de campesinos e indígenas, sujetos sociales que han agregado a sus repertorios clásicos de movilización la agresión ambiental del capitalismo neoliberal. En esa tesitura, la definición de los territorios como espacios afectados por la transformación del régimen económico neoliberal toma un papel central. Al decir de Svampa:

...el extractivismo no contempla solamente actividades típicamente consideradas como tales (minería e hidrocarburos), sino también los agronegocios o la producción de biocombustibles, lo cual abona una lógica extractivista mediante la consolidación de un modelo tendencialmente monoprodutor, que desestructura y reorienta los territorios, destruye la biodiversidad y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras.<sup>734</sup>

De esta manera, es importante considerar un elemento importante: la aparición del concepto territorio como una referencia que agrupa a organizaciones, sujetos

y prácticas políticas y sociales de determinada comunidad y su decisión de enfrentarse al poder neoliberal —representado en proyectos empresariales de diverso orden— o a la implementación de políticas públicas que consideran atentatorias con sus formas de vida.<sup>735</sup> El territorio se transforma en un sujeto de protesta, no se moviliza una organización, sindicato o partido, es el territorio el depositario del mandato soberano de la acción política, cuestión que entrega nuevos elementos éticos a la lucha emprendida, incluso significando una nueva epistemología, al entender la realidad desde otras dimensiones, que incorporan la historicidad del espacio, pero también sus características ambientales, étnicas y de género, por mencionar las más evidentes en las luchas del presente.<sup>736</sup>

Ya sea en Mehuín (Los Ríos) o en Freirina (Atacama), en Ancud (Chiloé) o en Quintero (Valparaíso), los conflictos se han venido localizando y, desde sus respectivos territorios, han referido una directa crítica al neoliberalismo. Es así como la territorialidad de las nuevas organizaciones comienza a tomar el centro del discurso, constituyéndose en un sujeto político que se ha denominado, coloquialmente, el territorio en lucha. En efecto, todo aquello que se define como espacio de desarrollo de una comunidad social y política ha sido proyectado como territorio opuesto a las instituciones del Estado neoliberal.

Las explotaciones más allá de lo permisible fueron generando vastos territorios agotados por la depredación industrial de la naturaleza, tierras secas y muertas por la forestación de pinos y eucaliptus, zonas contaminadas por relaves mineros y mares depredados por la pesca intensiva. Estos hechos fueron tomándose los titulares de la prensa y abrieron el debate respecto a los daños ambientales del modelo económico.

Este desafío de los territorios contra el neoliberalismo se ha revelado en la protesta manifestada desde los espacios y territorios periféricos. Si la imagen más significativa del éxito neoliberal ha sido el Sanhattan de la opulencia capitalina, la imagen contraria es la de las movilizaciones por todo el país que se enfrentan a la fuerza represiva, por ejemplo, a propósito del subcontrato forestal, lucha por la cual resultó asesinado Rodrigo Cisternas en Arauco. La protesta se presenta en los territorios de Chile en acciones de diverso tipo: marchas, denuncias mediáticas, cortes de ruta, y acaban en el enfrentamiento con la policía. Todo ello redunda en la generación de discursos criminalizadores por parte de la clase política y los medios de comunicación, de un lado, y en el fortalecimiento de organizaciones territoriales al interior de las comunidades que las referencian, por el otro.

Asimismo, los beneficios del negocio extractivista neoliberal aumentan todavía más cuando consideramos el régimen de trabajo que acompaña a las explotaciones. Las formas de precarización laboral fueron ampliándose y afinándose durante el periodo, la subcontratación comenzó a vislumbrarse como el modo preferido de relaciones laborales por parte del empresariado neoliberal, afectando los ingresos de los y las trabajadoras, lo que ha generado daños previsionales y de seguridad social, situaciones que, sin duda, contribuyeron a poner muchos ladrillos en las barricadas de octubre.<sup>737</sup>

De esta forma, revisaremos a continuación los territorios significativos en el periodo reciente de la historia de Chile, para observar con mayor detalle los elementos aportados hasta aquí. Tomaremos algunos casos de amplia difusión en los medios dado el nivel de conflicto que representan y, por parte de las comunidades, de cuestionamiento, mediante la protesta y la manifestación, al modelo imperante durante la era del duopolio Concertación-derecha.

## PROTESTAS DE NORTE Y SUR

En las últimas décadas la movilización social producto de los daños socioambientales ha tomado un protagonismo no del todo considerado a la hora de sopesar los cambios en las dinámicas políticas que Chile está viviendo. Para ello revisaremos el rol que ha ido dibujando la manifestación del tipo ambientalista, pero que recoge una serie de otras cuestiones, y repasaremos algunos elementos que tocan derechos sociales negados, conceptos territoriales y situaciones económicas que podrían explicar la emergencia del problema en el país. Planteamos conflictos a nivel urbano y rural, pues muestran especificidades muy marcadas, aunque encuentran un punto común en la protesta contra el régimen neoliberal, origen de las situaciones vividas.

En razón de la crítica social y política que se ha constatado con el inicio del nuevo siglo, podemos señalar que el eje socioambiental ha sido fundamental para movilizar los territorios de todo el país. Las distancias pueden ser geográficas en muchos casos, pero también la brecha se establece en la gestión política del territorio; de esta forma sectores muy cercanos a las urbes han presentado tremendos conflictos relacionados con el extractivismo, pero también



debido a la indolencia de la gestión y la nula participación de las comunidades en las políticas públicas.

En ese sentido Quintero-Puchuncaví (Valparaíso) tuvo fuertes eventos de contaminación y derrames de hidrocarburos. Desde inicios de los años 2010 el conflicto define su tono por la zona de sacrificio establecida producto de la saturación de plantas industriales en el área de Ventanas; por otra parte, Coronel (Biobío) es una ciudad marcada por las instalaciones de termoeléctricas tras el cierre de las minas de carbón a fines del siglo pasado; las plantas energéticas instaladas en el radio urbano desatan un importante conflicto en 2010. Estos son dos sectores de saturación industrial —los más conocidos en el país, aunque no los únicos— que han provocado la movilización de organizaciones sociales locales. En este sentido, la prensa digital ha hecho seguimiento a situaciones como estas, desde la perspectiva judicial y social en que se han visto involucradas las comunidades, con especial interés en los daños sanitarios.

Uno de los recursos, que presentaba un listado de nombres de 180 menores con exámenes médicos adjuntados, fue declarado improcedente y rechazado por los Tribunales de Justicia de Concepción y la Corte Suprema de Santiago. “No solo perdió Coronel, perdimos todos y todas quienes luchamos por un país con mayor justicia social”, dice Lorena Bustamante, directora de Red de Infancia Chile a INTERFERENCIA, organización que ha representado también a los menores de Quintero-Puchuncaví.<sup>738</sup>

Las denominadas zonas de sacrificio dan cuenta de este tipo de efectos y, de esta forma, han provocado la movilización social. La Escuela La Greda, en Puchuncaví, en 2011 fue tristemente conocida por la afectación de decenas de niñas y niños derivados al hospital local producto de intoxicaciones provocadas por el polígono industrial aledaño.<sup>739</sup> Resulta paradigmático que la respuesta estatal haya sido el cierre del establecimiento y su conversión en un centro de monitoreo ambiental. Ciertamente el derecho social no está en el centro de las preocupaciones de la administración pública, cuestión fuertemente cuestionada por las organizaciones locales.<sup>740</sup>

Podemos constatar que los conflictos desarrollados en estas zonas urbanas guardan estrecha relación con la denegación de derechos humanos y sociales. Las manifestaciones son evidentes en este punto y, en particular, en las repercusiones sanitarias que han sufrido las personas de las comunidades. De esta manera, el asunto se vuelve claramente socioambiental y así es comunicado

por las organizaciones sociales, poniendo en el centro que la estabilidad del medio ambiente es vital para el desarrollo de la vida humana.

Por otra parte, si revisamos la experiencia de las manifestaciones ocurridas en sectores alejados de urbes importantes, en el norte y sur del país, encontramos movilizaciones que se centran en una lucha muy específica que alude a algún proyecto muy concreto que altera no solo un paisaje, también una comunidad y su forma de relaciones sociales construida a espaldas del Estado neoliberal, tal vez buscando esa distancia que ayuda a abstraerlos de la racionalidad asfixiante de la precarización laboral o la destrucción del medio ambiente. En este sentido, son paradigmáticos conflictos como los de Mehuín (Los Ríos), producto de la instalación del ducto de celulosa Arauco en 1996, y Freirina (Atacama) y sus conflictos con Agrosuper en 2012.

La sureña caleta de Mehuín fue elegida para recibir el ducto de expulsión de efluentes de la planta de celulosa ubicada en Mariquina. Además de los conflictos propios del daño ambiental, las comunidades de pescadores artesanales y de mapuches lafquenches de la zona han esgrimido argumentos de orden social, económicos y étnicos para resistir la instalación industrial. En este caso vemos una importante diversidad de sujetos en contra del proyecto, tal como señalan 23 años después de iniciada la lucha contra Celco.

Las Comunidades Indígenas Lafkenches, sus dirigentes y el Comité Defensa del Mar, han conmemorado públicamente otro año más de resistencia en la defensa del patrimonio costero en contra del proyecto de la construcción del ducto y posterior contaminación del mar en la zona de Mehuín, y que significaría el término de la base alimentaria, cultural, tradicional y de subsistencia de los mapuches lafkenches, y el fin de las actividades extractivas de pescadores artesanales y sus familias.<sup>741</sup>

De la misma manera, Freirina, en la Región de Atacama, vivió un conflicto de proporciones. La tranquila localidad se movilizó fuertemente contra una industria de suyo contaminante. Agrosuper se dedica a la producción masiva de productos cárnicos, la instalación en una pequeña y lejana comuna del norte de la planta de cría y faenamiento de cerdos más grande de Sudamérica no podía sino terminar en un conflicto. Los olores insoportables llevaron a una gran movilización que acabó con duros enfrentamientos con la policía. Aun así, los logros son importantes, pues las protestas obtuvieron algunos resultados: “Tal fue la repercusión de este conflicto que impulsó al Ministerio del Medio

Ambiente (

MMA

) a elaborar la primera norma de olores en Chile, que actualmente está a mitad del proceso para su entrada en vigencia”.<sup>742</sup>

Ahora bien, la detención de proyectos, los cambios legislativos y el fortalecimiento de organizaciones socioambientales han ido cimentando la aparición de un movimiento de carácter nacional que se acompaña de otras organizaciones a medio camino entre la academia y el activismo, como Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

OLCA

, Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (

MODATIMA

) o el Movimiento por el agua y los Territorios (

MAT

).

Los conflictos en zonas alejadas de grandes ciudades, en espacios rurales, muestran un acento importante en los denominados derechos de la naturaleza y las culturas ancestrales. El cuestionamiento hacia el extractivismo se da por su carácter invasivo y el rechazo es total por parte de las comunidades implicadas. Resulta interesante que el único argumento relevante a favor de las industrias sea la creación de puestos de trabajo, apelando a un elemento propio de la promesa del desarrollo, aunque ahora en clave neoliberal, es decir, un trabajo flexibilizado y carente de derechos.

Visto todo lo anterior y la acritud que define al debate socioambiental chileno de inicios del siglo presente quisiéramos tratar estos puntos en el Archipiélago de Chiloé, zona donde se reúnen muchos de los elementos planteados y que explotan en 2016 con el mayo chilote. Antes de adentrarnos en ese importante conflicto, centro de este estudio, revisemos la industria salmonera y los efectos

de la misma en el área.

Si bien pasó bastante desapercibido por los medios de comunicación de masas, siempre instalados en la capital y desde ahí observando los conflictos, con sus lógicas y sentidos de Estado, las manifestaciones del “mayo chilote” en 2016 nos permiten indagar en el conflicto socioambiental desde sus vertientes más diversas, como abriendo una caja de Pandora. Las cuestiones laborales, étnicas, de género y ambientales se fueron articulando para construir un sujeto-territorio que se manifestó en toda la Isla Grande y su hinterland, el que incluye las costas del Seno de Reloncaví y las islas interiores del mar de Chiloé y de Palena.

De esta forma, el territorio de Chiloé se nos presenta como un caso paradigmático de crítica a la lógica y política neoliberal desde los más diversos espacios sociales y con una fuerte identidad territorial que cuestiona la organización del Estado y sus políticas.<sup>743</sup> En ese marco se produce una gran movilización social que deviene en manifestaciones que se extendieron durante mayo de 2016 en todo ese gran territorio. En efecto, al poco tiempo de instalado el conflicto se descubrió el vertimiento de la industria salmonera en la bahía como el causante del nauseabundo panorama en el idílico paisaje chilote. Es menester preguntarse por este primer elemento: ¿qué es la actividad salmonera y qué representa en este territorio?

La actividad pesquera y acuícola ha estado presente desde hace décadas en el territorio chilote, con la adopción del negocio neoliberal en este ámbito, cuando la actividad se masificó de la mano del Estado, el que prestó subvenciones y ayudas para hacer de la producción salmonera un importante motor de las exportaciones.<sup>744</sup> Ahora bien, la política de impulso a la actividad no fue explícita a través de planes específicos. El apoyo se focalizó en la instalación y desarrollo de la explotación a través de subvenciones a la formación y el desarrollo tecnológico con la complicidad de instituciones del Estado y del sistema de universidades. Esas ayudas se tradujeron en el acceso a mercados internacionales y la inserción en las llamadas Cadenas Globales de Valor.<sup>745</sup>

Ello significa que el Estado neoliberal impulsó un tipo de desarrollo movido por el desmesurado crecimiento económico, materializado por las divisas de la exportación masiva del producto. Nunca se desarrollaron políticas de cuidado del medioambiente o la correcta y sustentable acción sobre el territorio, lo que incluye las relaciones laborales y sanitarias, que también fueron transgredidas por las explotaciones salmonícolas.

Es así que las crisis medioambientales, producto de la explotación masiva de las salmoneras en Chiloé, han venido dando muestras de conflictos desde hace bastante tiempo. Tal vez el primero de estos avisos fue la aparición del virus

ISA

, ocurrida en 2007. Ya desde aquel momento se puede asociar el daño ambiental a las prácticas del negocio salmonero, marcado por el tipo de alimentación en las piscifactorías, los residuos y efectos en el suelo marino, así como en el proceso de faenamiento y el control de enfermedades, todas actividades fuertemente cuestionadas por la academia durante los últimos años.<sup>746</sup>

La salmonicultura se establece como una actividad propiamente orientada a la exportación desde la década de los 80. La actividad se centró en el sur de Chile, produciendo el grueso de salmones y truchas entre las regiones de Los Lagos y Aysén e instalándose en el segundo lugar mundial en producción.<sup>747</sup> Respecto a los inversionistas del negocio, entre los principales están Agrosuper, Camanchaca, Blumar, Invermar, Grupo Hurtado Vicuña, Aquachile, Marine Harvest (compañía noruega).<sup>748</sup> Ahora bien, esta enorme producción solo es un problema para el Estado en cuanto las empresas son de capitales transnacionales y requieren del apoyo fiscal cuando se produce alguna crisis ambiental,<sup>749</sup> todo ello considerando la mala calidad de los salarios que entregan y los pocos derechos laborales para la población que ocupa.

En este aspecto, la precarización laboral es evidente en la industria, con un Estado ausente en las regulaciones del trabajo en las plantas de cultivo y faena de los salmones. Estos niveles de desprotección social están ligados al contrato flexible o por temporada que ha redundado en el empobrecimiento general de la población.<sup>750</sup> Visto en términos territoriales, para las y los chilotes esto ha trastocado relaciones sociales de producción tradicionales vinculadas al minifundio de producción agrícola y pesquera, cuestión resentida por el régimen neoliberal de trabajo extractivista.

## EL MAYO CHILOTE, LUCHA SOCIOAMBIENTAL

El conflicto desatado en mayo de 2016 en Chiloé recibió el nombre de “mayo

chilote” y se difundió ampliamente en la prensa nacional dada su masividad y extensión por toda la Isla Grande y el mar interior, pero también en diversos puntos del país, donde en distintas ciudades los migrantes chilotes se organizaron y manifestaron en solidaridad con su territorio. La rebelión entibió el otoño de aquel año, en medio del segundo gobierno de Michelle Bachelet y logró capturar la atención de una sorprendida opinión pública.

Pero el gran movimiento de mayo tuvo avisos, y no menores. Ya en 2013 un grupo de activistas y dirigentes sociales y territoriales chilotes se reúnen en Ancud en el encuentro “Pensar Chiloé”, donde plantean cuestiones relativas a las demandas socioambientales que tanta fuerza tomarían pocos años después.<sup>751</sup> Nuestros entrevistados señalan a esta instancia como un hito relevante para la definición política de las movilizaciones sociales de corte territorial en el archipiélago. “Esta organización comenzó a fomentar todas las asambleas, organizaciones territoriales y a la vez se empezaron a articular espacios de organización en el continente”.<sup>752</sup>

Sumado a ese espacio de reflexión y organización, y ahora en el ámbito de la movilización, encontramos una importante protesta denominada “Chiloé está priva’o”, ocurrida en el verano del 2016, donde se acusaba ya directamente al extractivismo salmonero como el causante de la depredación del territorio.<sup>753</sup> Sobre estas situaciones previas, un hecho relevante es el marcado por las manifestaciones de Quellón en 2013:

...movilizaciones que se habían dado antes, que mostraban un poco lo que se podía gestar en algún momento en Chiloé, por ejemplo, lo que había pasado en Aysén o en otros lugares y la movilización de Quellón igual fue un hito importante, que fue un par de años antes, donde ya se podía ver que había un malestar generalizado que en ese momento apuntaba a la salud pero que podía abrirse a otras problemáticas.<sup>754</sup>

Uno de nuestros testimonios, correspondiente a una trabajadora del área de la salud, dice: “En Chiloé no tenemos hospitales que estén a la altura para resolver las necesidades en salud”.<sup>755</sup> Así se plantea la explicación al conflicto de Quellón antes mencionado y este debe entenderse como demanda a un derecho social

vulnerado que moviliza a la población y que actúa como acelerante en los procesos de manifestación social.

Como una suerte de alarma no escuchada en Santiago, los territorios de Chiloé estaban avisando por distintas vías la emergencia del conflicto, a veces vestido de reclamo por la salud pública, otras por el daño ambiental o los derechos laborales. Estos reclamos sordos comenzaron a unificarse con fuerza en la segunda mitad de la década.

Los hechos de la gran manifestación bautizada como el “mayo chilote” fueron tan rápidos como inusitados para el territorio. El lunes 2 de mayo, en la madrugada, la ciudad y puerto de Quellón —la más meridional de la isla grande— amanece bloqueada en su acceso, casi al mismo tiempo sucede algo similar en Queilén y ya a mediodía, Ancud, la ciudad más septentrional, se suma a los cortes de ruta. De esta forma, el bloqueo de caminos es la acción que enciende la movilización y da la voz de alerta a las comunidades chilotas para iniciar la protesta. Días después fue todo el archipiélago el que se manifestó con vehemencia en los caminos y rutas.

Las manifestaciones de los primeros días esgrimieron como causa la pérdida de miles de trabajos por la imposibilidad de pescar en las costas del mar chilote; así, el centro de la cuestión fue una demanda al Estado por derechos laborales conculcados producto de la marea roja, que al tiempo se ha considerado como producto del mal manejo de residuos de la industria salmonera.<sup>756</sup>

La varazón de peces frente a la bahía Mano y en Pulelo, Ancud, y la putrefacción que comenzó a contaminar todo el sector hicieron que la comunidad fuera explícita en su reclamo. Esa chispa hizo que surgiera una serie de demandas que vinieron desde diversos sectores sociales del archipiélago. La molestia frente a esto fue acicateada por el argumento gubernamental, el que insistía en la responsabilidad de la marea roja en el fenómeno de las varazones, cuestión que las comunidades repelieron con fuerza y, en primer término, por vía judicial.

En este conflicto se cruzan distintas y complejas aristas. Este año (2018), la Corte Suprema acogió un recurso de protección por el vertimiento, presentado por pescadores y organizaciones civiles. El fallo reconoce que Sernapesca y la

autoridad marítima, aun estando en conocimiento de las condiciones climáticas que propician el bloom algal, no desplegaron medidas para prevenir impactos como la mortalidad masiva de salmones. Y, lo que es clave, determina que existe responsabilidad concreta de las autoridades marítimas, sanitarias y medioambientales por incumplimiento de protocolos y reglamentos que resguardan y previenen la contaminación del mar y eventos nocivos para la fauna marina como para la población.<sup>757</sup>

Esta última cuestión resulta esencial para comprender el proceso de movilización vivido en 2016. Los incumplimientos reconocidos por el Poder Judicial dan con la sentida demanda chilota por el abandono y la desidia del Estado para con el territorio y maritorio chilote. Sin lugar a duda, el asunto estalla en torno a la querella por la pesca, actividad tan antigua como tradicional en la zona. Los pescadores artesanales se instalan como el primer y principal sujeto movilizado.

El conflicto visto desde la pesca tiene bastante de demanda social clásica, en el sentido de exigir al Estado regulaciones y apoyo para desarrollar la actividad, aludiendo al derecho al trabajo. Ahora bien, esto, en el contexto de un conflicto fuertemente regionalizado, toma otra dimensión. La demanda tradicional se asocia al sujeto-territorio con tanta fuerza que la pesca artesanal y sus tareas asociadas —como la recolección de orilla y por buceo— son defendidas como parte constitutiva de la identidad chilota, o lo que se entiende por ella en el imaginario social, y desde ahí se expande como una defensa de todos y todas aquellos que se posicionan a favor del territorio demandante frente al Estado demandado.

De esta manera, los pescadores artesanales lograron algunos beneficios de tipo subsidiario por parte de la administración Bachelet. La prensa chilota lo definió así:

...al menos se logró que el Aporte Solidario anunciado por el Estado se ampliara al mundo informal de recolectores de orilla, trabajadores del mar que estaban desprotegidos y fuera de las medidas estatales por los efectos de la marea roja (se relajaron las medidas para los que no poseían Registro Pesquero Artesanal). Además, se lograron subsidios para servicios básicos (luz y agua), lo último que



se discutió para finiquitar la firma. Por otro lado, se pactó conformar mesas de trabajo para discutir una serie de problemáticas inherentes al territorio, así como planes de fomento productivo y programas de empleo.<sup>758</sup>

La desactivación del conflicto se da en los términos del régimen, es decir, con la batería tradicional de medidas subsidiarias (bonos y aportes económicos focalizados y la generación de espacios de diálogo mediados por expertos y gestores para avanzar en el marco de las políticas estatales neoliberales). Es interesante constatar que los sectores de la pesca hayan sido los interlocutores para la salida al conflicto. Es la forma de diálogo más conocida y que da mejores frutos al Estado, aquella que conoce y ha adaptado en los últimos treinta años.

De esta manera, el conflicto iniciado por la afectación a la pesca artesanal se desbordó por el cúmulo de descontento de la sociedad chilota. La solución dada a los artesanales fue vista con escepticismo porque “se generó un gran nivel de presión al gobierno durante esas dos semanas, y se generó una desazón por el hecho de no haber conseguido mucho”.<sup>759</sup>

Pero este conflicto entre el Estado neoliberal y los pescadores artesanales abrió puertas inesperadas, tan antiguas como la historia chilota. Por esas manifestaciones se colaron cuestiones que pulsan en los movimientos sociales conectados con la postergación de Chiloé; así, es necesario profundizar en las especificidades de la protesta chilota.

Las demandas se estructuraron con acento en el desastre ambiental provocado por la industria salmonera, pero es interesante observar cómo los reclamos emanan también desde la definición explícita del lugar. Uno de los puntos de la Mesa Provincial de Chiloé indicó: “Exigimos que el representante que nombre el gobierno, venga a entregar su propuesta a Castro, capital provincial del archipiélago de Chiloé”.<sup>760</sup> El llamado al centro político para tratar el problema se hace para que se apersona este en el territorio, muy al contrario de cómo sucedía tradicionalmente en Chile con las movilizaciones, marcadas por el “asalto al palacio”, es decir, desplazarse al lugar del poder para buscar un asiento allí y negociar la solución.

Las protestas, especialmente los cortes de ruta mediante barricadas, marcaron el mes de mayo y en gran parte de las localidades isleñas el estado de movilización

fue evidente. Sin duda, la anormalidad de la situación fue sentida por los habitantes y, en ese sentido, el conflicto marcó un punto de inflexión, como relata un testimonio:

No solo Ancud, sino que Castro, Dalcahue, Quinchao, Quellón y eso ya incluye a cinco, siete comunas de las diez que son estaban efectivamente organizadas a través de las barricadas y a través de asambleas. Fue difícil, de una u otra manera, superar las dirigencias propiamente tal para poder tener una coordinación de asambleas como se pudiese pensar de una manera simple, pero sí se pudo dar diagnósticos en común, eso sí lo pudimos compartir.<sup>761</sup>

El punto de inflexión que señalamos refiere a ese diagnóstico común, realizado territorialmente y que marca una nueva etapa en el desarrollo de la conciencia política de los sectores movilizados, los que incorporan el daño socioambiental al discurso, la organización y la acción de los últimos años, rompiendo con la lógica subsidiaria del bono o la ayuda frente al desastre ambiental provocado por la industria extractivista. Ahora bien, como señala un testimonio: “Claro, efectivamente sí hay una visión crítica a nivel de organizaciones, pero que no necesariamente es mayoritaria”.<sup>762</sup> Las múltiples manifestaciones vienen sumando a ese proceso de cambio hegemónico en la conciencia política, pero este aún está en construcción.

Las marchas y reuniones asamblearias comenzaron a acumularse por todo Chiloé, desbordando incluso a la organización espontánea que emergía en medio del conflicto: “había mucha más gente que estaba dispuesta a la movilización sin participar directamente de los espacios”.<sup>763</sup> La masividad ayudó, sin duda, a generar un estado de situación especial que no se había visto en tiempos recientes. La rebelión tuvo la clásica forma de revuelta social que apela a la defensa territorial y el control del espacio propio.

Una vez que esto empezó a funcionar de manera asamblearia, con cortes coordinados, porque en un principio no se sabía cómo iba a venir el conflicto propiamente tal, cómo iba a ser la represión que iba a llegar desde el continente, entonces no solo había una sola barricada estratégica, sino que había muchas

barricadas y esas representaban, cada una, a su territorio, es decir, a su población.<sup>764</sup>

La cuestión fundamental está dada por esa masividad, pero también por el carácter sin igual del momento de ruptura que significa la protesta. Así lo explica una entrevistada: “marcó un precedente, un grado de unidad de distintos sectores... colgaron banderas negras acá en Ancud todos los comerciantes”.<sup>765</sup> La diversidad de sujetos presente en las manifestaciones, en sus distintas formas y con sus propios acentos, fue la tónica que marcó la singularidad del mayo chilote.

Antes de eso, es menester analizar cómo fuera de Chiloé las manifestaciones de solidaridad con el conflicto se dieron potentemente. Estas acciones las vemos en dos sentidos: por una parte, por las comunidades chilotas migrantes, fundamentalmente colectivos de estudiantes universitarios, y por otra, por diversas comunidades afectadas por la crisis de la pesca artesanal y organizaciones estudiantiles todas ellas generaron acciones y muestras de solidaridad en zonas de trabajo pesquero, como Valparaíso y Osorno, entre muchas otras y también en Santiago, mediante “funas”<sup>766</sup> a oficinas de las empresas responsables del daño ambiental.<sup>767</sup>

Respecto a ello, esos múltiples colectivos y agrupaciones de chilotes reunidos en diferentes ciudades del centro y sur de Chile tienen una experiencia que deviene de esos conflictos y encuentros ya relatados, justamente anteriores al “mayo chilote”. En ese sentido, los estudiantes “exiliados” de Chiloé jugaron un papel muy relevante para, por una parte, visibilizar el conflicto fuera del archipiélago y, por otra, expandir los límites del debate abierto entre el Estado y las comunidades.

Había conversaciones con personas que habían participado de una instancia anterior que ya tenía el nombre de colectivo de chilotes en Valparaíso que había hecho una acción cuando fue la movilización en Quellón... gente que quedaba de ese espacio. Algunos seguimos tratando de generar actividades, hicimos un ciclo de documentales tratando problemáticas de Chiloé. Cuando el 2016 la gente decía que teníamos que tomar acciones concretas estuvo dispuesta al tiro a

organizarse... no fue difícil organizarse en ese momento, tuvimos también el apoyo de las federaciones de las distintas universidades, de algunas agrupaciones, de gente que igual estaba dispuesta a movilizarse, pero claro, ese apoyo venía desde un punto de vista más asistencialista, nunca dando espacio a discutir las problemáticas, sino más bien a ayudar en ese momento, a una urgencia por el tema de la pesca.<sup>768</sup>

Así, en todo Chile, la discusión por el conflicto chilote se tomó la agenda en las primeras semanas de mayo. Las repetidas imágenes de postal o catálogo de viajes fueron reemplazadas por barricadas, caminos cortados y marchas en las ciudades chilotas, como un preludio de la gran revuelta de 2019. Pero es necesario hacer algunas puntualizaciones respecto de qué significaron los temas para Chiloé en la protesta de 2016, qué caminos abrieron y cómo se replantean las cuestiones de la política y la manifestación como herramientas para su desarrollo.

La conectividad interrumpida no es un tema menor para los chilotas. Esta forma de protesta es muy significativa, porque siempre ha sido una de las cuestiones demandadas al Estado. Por lo tanto, el corte de rutas no tiene el mismo tono que puede alcanzar en el continente: la forma de acceder a servicios es vital en Chiloé, de modo que asumir esos cortes de vías con ciudades y puertos fue una apuesta importante, por no decir peligrosa para los manifestantes. Esto se expresa en cómo se enarbola el derecho a la conectividad por parte de los y las chilotas. En este asunto tenemos una perspectiva de derechos territoriales que alude a la especificidad chilota, siempre incomprendida por el centro y, por ello, nunca tratada por las políticas públicas.

Es más, la cuestión toca fondo si se considera el proyecto de obras públicas presentado como emblemático por el Estado, el puente Chacao, y que los manifestantes consideran de interés para la industria extractivista pero no esencial para las comunidades. En esa línea se entiende la reflexión de una entrevistada, que apunta hacia el sentido profundo que moviliza el conflicto chilote:

Las cuestiones ambientales tocan a la gente, pero la tocan por una fibra cultural,

más que otro tipo de situación. Una de las cosas que más me impactaron era encontrarme, por ejemplo, con personas de otras islas más alejadas que llegaban en sus lanchas y decían nos están matando el mar. Era algo que pasaba de la lógica más netamente política, de movilización, a algo cultural, enfocado en nuestra forma de vida.<sup>769</sup>

Al remover cuestiones fundamentales para la producción de la vida en Chiloé, el cuestionamiento hacia la acción política es inevitable. Entregar las formas de sustento y trabajo y, en el fondo, facilitar el desarrollo de una cultura que ha aprendido a convivir con el ambiente, debe ser tarea de quienes gestionan políticamente el territorio. Desde ahí que resulta interesante preguntar por el rol de las autoridades en relación con el conflicto desatado por la movilización popular.

En este sentido, la opinión es lapidaria desde la vereda de los pescadores: “había toda una complicidad entre las autoridades locales, regionales, intendente, todas esas personas de alguna manera cooperaron para que los salmoneros se pudieran zafar de este gran problema que era la mortalidad de los salmones”.<sup>770</sup>

Es importante anotar esta desconfianza para con las autoridades que representan al territorio frente al aparato público. Con ello se aporta a la idea de distanciamiento entre las comunidades y los sectores sociales con la representación política. El territorio se vuelve lejano al Estado, la expresión de soberanía se hace cada vez más difusa y el apego a las instituciones se va resintiendo; las manifestaciones hacen gala de esa brecha que se observa en la aparición de nuevas grupalidades políticas, como nos señalan todos nuestros testimonios.

Pero dada la defenestración del régimen vigente, es importante indagar en la irrupción de nuevas formas de organización que buscan superar el estado de situación de la política en el territorio, especialmente pensando en el tributo que debe darse entre los aprendizajes y saberes que emergen con la protesta chilota y su necesaria expresión material en nueva institucionalidad o, por lo menos, los elementos que marcan esos cambios.

Visto lo anterior, sin duda el carácter de la movilización en Chiloé articula cuestiones que tienen profundas raíces históricas, pero que encuentran en el

convulso presente del extractivismo neoliberal un argumento de gran peso para definir un presente lleno de luchas en defensa de la naturaleza, y con ella, de las comunidades que se han imbricado en el archipiélago. Al decir de un investigador que reflexiona sobre los efectos del mayo chilote:

Consideramos que las grandes movilizaciones y el despertar soberano-territorial de este último tiempo, no solo hacen frente al insultante modelo extractivo, la arbitrariedad antidemocrática de muchos proyectos (públicos y privados) o el permanente centralismo político, sino que hacen frente a la estructura colonial de poder que los contiene y ejecuta en Chiloé. Se vive, por tanto, un cada vez más creciente proceso de auto-reconquista insular, de recuperación de un orgullo autónomo arrebatado.<sup>771</sup>

De esta forma, es importante avanzar en cuestiones relativas al carácter de las organizaciones surgidas al calor de la protesta chilota de 2016 y a las proyecciones que han tenido, cómo conectan con la rebelión popular de 2019 en todo el país y con el proceso constituyente que devino de aquello. Una entrevistada señala: “En algunos lugares yo creo que esas organizaciones perduraron, si bien no se transformaron en organizaciones reconocidas, organizadas jurídicamente, pero siguieron”.<sup>772</sup> Los testimonios refuerzan esta idea: las comunidades chilotas, pequeñas y donde sus miembros se conocen entre ellos, se han afianzado en esos vínculos de vecindad permanente para organizar sus proyectos.

Ello ha significado redefinir el carácter y tipo de organizaciones que hoy surgen como la expresión transformadora del régimen neoliberal, “primero las asambleas sociales y territoriales que empezaron a ser una herramienta válida, también las organizaciones medioambientales que venían conflictuando de Chiloé”.<sup>773</sup> La asamblea como instrumento y el conflicto ambiental como argumento están en el centro de estas nuevas grupalidades chilotas, y a partir de allí se articulan otros sujetos con anclajes históricos en el territorio.

Es muy relevante, como se ha dicho, atender al rol de los estudiantes exiliados en el continente, los cuadros profesionales que, desde Pensar Chiloé en adelante, han nutrido las nuevas organizaciones durante y después del mayo chilote. Una

línea interesante por explorar tiene relación con los saberes y conocimientos de estas personas, quienes desarrollan discursos estructurados para proyectar los movimientos y, además, conectarlos a los procesos sociales y políticos que vive el país en su totalidad; ello se denota en su activa participación en los hechos del estallido de octubre en Chiloé.

A la par de ese nuevo carácter en las organizaciones, surge —entonces— un elemento insoslayable, que guarda relación con el rol de esas generaciones de jóvenes, quienes en su mayoría son profesionales formados en el continente.

Siento que hay fuerza joven, nueva, que también está más consciente, tiene más información, de cierta forma se está organizando, se está empezando a organizar en otros grupos, en otros colectivos, personas que vuelven a su archipiélago después de haber salido a estudiar o que quieren construir o quedarse aquí y tener un mejor vivir acá.<sup>774</sup>

Las organizaciones asamblearias que aparecen en las reuniones, marchas y barricadas, son fuertemente activadas por las y los jóvenes, los que se erigen como nuevos líderes, ocupando algunos cargos electos, dirigencias y, especialmente, en la Convención Constitucional, tal como Adriana Ampuero, la constituyente electa por una lista independiente: “hemos estado levantando luchas por la protección de este territorio, por lo menos desde hace diez años atrás: somos herederos probablemente de buena parte de los levantamientos sociales que se dieron en el territorio”.<sup>775</sup>

A partir de la experiencia movilizadora que entrega el “mayo chilote” y después de ello, se abren nuevas líneas que irrumpen y enriquecen el debate chilote, desde la materialidad de la lucha de las mujeres en las manifestaciones y protestas, el rol que ellas se plantean críticamente al revisar el ciclo de protesta y que se proyecta de manera insospechada, tal como ocurre en todo el país.

Desde el mayo chilote increíblemente quienes sostenían las barricadas, quienes sostenían las ollas comunas siempre eran mujeres, pero quienes hablaban eran hombres. Suele pasar lamentablemente. En cierta medida eso se ha ido

rompiendo un poco, por ejemplo, han existido marchas masivas del 8M donde igual Chiloé ha tenido varios quiebres, porque Chiloé igual que todos los otros territorios, es muy patriarcal, muy tradicional, entonces donde todo esto es un conflicto la posición de las mujeres... cada vez ese rol va avanzando, se va haciendo más visible. En el mayo chilote no tuvimos esa fuerza, pero todavía era un movimiento muy patriarcal.<sup>776</sup>

Todo este reconocimiento al papel de las mujeres movilizadas por su territorio obedece a la aparición explícita de su participación no solo ahora, sino que, en un sentido amplio y profundo de aquello, como dice una de nuestras entrevistadas, “también estuvieron presentes las algueras, recolectoras de orilla”,<sup>777</sup> es decir, las mujeres y su adscripción de clase se funden en el conflicto general para dar mayor fuerza al reclamo, constituyéndolas en agentes del ciclo transformador.

Por otra parte, así como las mujeres adquieren protagonismo mediante su activa participación en la protesta chilota, las comunidades de pueblos originarios también centran sus demandas y las suman a la manifestación del territorio total.

De alguna forma el mayo chilote tuvo también como resultado la toma de conciencia. He visto también que, en el caso de las comunidades indígenas, hay muchas que están solicitando la aplicación de la ley lafquenche acá en el territorio, y la solicitud de espacios costeros marinos, que considero que es importante porque los que han concentrado la propiedad del mar interior de Chiloé en todos estos años han sido las empresas salmoneras.<sup>778</sup>

Las necesidades de Chiloé son tan vastas como la exploración que las organizaciones vienen haciendo en la última década. La movilización es evidente y potente, y da luces de una nueva politicidad que solo ha comenzado a irrumpir.

## CONCLUSIONES



El derrotero de los últimos años en Chile ha estado marcado por la movilización social. Las protestas van generando los ritmos de las agendas políticas y todo se mueve en función de la calle, cuestión criticada amargamente por el sistema de partidos. En Chiloé, esta situación tuvo un antecedente que nos enseña el carácter de este nuevo ciclo de movilización popular en el país.

A partir de un conflicto ambiental con implicancias sociales y económicas, se dejó entrever una serie de nuevas organizaciones y asambleas de diverso tipo que acompañaron la protesta de mayo de 2016. Por los intersticios del conflicto aparece la cuestión socioambiental como un eje articulador que da nuevo sentido a la lucha contra el neoliberalismo.

Entre las cuestiones que emergen en el conflicto desatado por la fuerza de los trabajadores de la pesca están el daño socioambiental, los derechos territoriales y, por último, la instalación de nuevas demandas asociadas a la plurinacionalidad y los derechos culturales y de género. Todas estas cuestiones expandieron el conflicto y abrieron nuevas líneas argumentativas, desbordando el clásico conflicto laboral o ambiental, pues el “mayo chilote” conecta con el denominado despertar de Chile, que eclosionó el 18 y 19 de octubre.

De esta manera, en el fragor de la protesta chilota vemos un proceso de politización que se expresa en las movilizaciones, pero sobre todo en una generación de activistas chilotes que motivados por la cuestión socioambiental están construyendo una crítica profunda al régimen neoliberal, crítica que incluye una revisión histórica del abandono del territorio por parte del Estado y que busca nuevas maneras de entender esa relación entre las comunidades del archipiélago y las instituciones.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Aravena, Antonio, “La industria del salmón en Chile: ¿crecimiento social o explotación laboral?”, en

CLACSO

(ed.), Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales, vol. 1,

CLACSO

, Buenos Aires, 2009, pp. 397-427. Disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160216050551/20.pdf>

Aros, Felipe y Marchant, Carla, “Transformaciones en la identidad territorial en Chiloé desde la llegada de la industria salmonera: el caso de la localidad de Quemchi”, en Espacios: Revista de Geografía, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, vol. 7, N° 13, 2017, pp. 47-71. Disponible en:  
<http://revistas.academia.cl/index.php/esp/article/view/743>

Buschmann, Alejandro y Fortt, Antonia, “Efectos ambientales de la acuicultura intensiva y alternativas para un desarrollo sustentable”, en Revista Ambiente y Desarrollo,

CIPMA

, vol. 21, N° 3, 2005, pp. 58-64. Disponible en:  
[https://www.researchgate.net/publication/237744781\\_Efectos\\_ambientales\\_de\\_la](https://www.researchgate.net/publication/237744781_Efectos_ambientales_de_la)

Gárate, Manuel, La revolución capitalista de Chile (1973-2003), Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2012, p. 589.

Garretón, Manuel Antonio, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010,

ARCIS-CLACSO

-El Desconcierto, Santiago, 2012, p. 199.

Gudynas, Eduardo, “Si eres tan progresista, ¿por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas”, en Ecuador Debate, Centro Andino de Acción Popular, Quito, 2010, 79, pp. 61-81. Disponible en: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3531/1/RFLACSO-ED79-05-Gudynas.pdf>

Harvey, David, Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Akal, Madrid, 2009, p. 447.

, Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid, 2007, p. 214.

Machado, Horacio, “Crítica a la razón progresista. Una mirada marxista sobre el extractivismo/colonialismo del siglo

XXI

”, en Actuel Marx Intervenciones,

LOM

, Santiago, N° 19, 2015, pp. 137-173.

Mondaca, Eduardo, “Acumulación salmonera en Chiloé. Las tensiones territoriales de una relación desigual”, en Mondaca, Eduardo, Uribe, Esteban, Henríquez, Sebastián y Torres, Vladia (eds.), Archipiélago de Chiloé: nuevas lecturas de un territorio en movimiento, Centro de Estudios Sociales de Chiloé (

CESCH

), Chiloé, 2018, pp. 21-32. Disponible en: <https://www.territoriocesch.com/general-1/jtezux8517/Acumulaci%C3%B3n-salmonera-en-Chilo%C3%A9-las-tensiones-territoriales-de-una-relaci%C3%B3n-desigual>

, El Archipiélago de Chiloé y los contornos inciertos de su futuro. Colonialidad y saqueo extractivista, Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH), Chiloé, 2016, p. 33. Disponible en: [https://30f7b93d-3010-4618-8538-c297f7e9581c.filesusr.com/ugd/3f1b41\\_4e0d962eeff6486f9ffc342429f54454.pdf](https://30f7b93d-3010-4618-8538-c297f7e9581c.filesusr.com/ugd/3f1b41_4e0d962eeff6486f9ffc342429f54454.pdf)

Muñoz Tamayo, Víctor, Historia de la

*UDI*

. *Generaciones y cultura política (1973-2013)*, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2016, p. 398.

Muñoz Gomá, Óscar, Aguas Arriba: la transformación socioeconómica del ecosistema Llanquihue-Chiloé (Chile) durante los años 90,

CLACSO

, Buenos Aires, 2009, p. 165. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160318022432/cap4.pdf> el 16/08/2020

Montero, Cecilia, Formación y desarrollo de un clúster globalizado: el caso de la industria del salmón en Chile, Serie Desarrollo Productivo,

CEPAL

Santiago, 2004, p. 75. Disponible en: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/4538/1/S04119\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/4538/1/S04119_es.pdf) el 15/08/2020

Ponce, José Ignacio, “Movimiento sindical en transición. Conflictividad y cultura política sindical en la postdictadura chilena (1990-2010)”, en Ponce, José Ignacio, Pérez, Aníbal, Acevedo, Nicolás (comps), Transiciones. Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena 1988-2018, América en Movimiento, Valparaíso, 2018, pp. 311-350.

Ramos, Virginia, “El retorno de los clústers en Chile: La no sustentabilidad del clúster del salmón en Chiloé”, en Revista Encrucijada Americana, Universidad

Alberto Hurtado, Santiago, año 7, N° 1, pp. 43-55. Disponible en:  
<https://encrucijadaamericana.uahurtado.cl/index.php/ea/article/view/59>

Santarcángelo, Juan; Schteingart, Daniel y Porta, Fernando, “Cadenas globales de valor: una mirada crítica a una nueva forma de pensar el desarrollo”, en Cuadernos de Economía Crítica, Sociedad de Economía Crítica (

SEC

) de Argentina y Uruguay, Buenos Aires, 2017, vol. 4, N° 7, pp. 99-119. Disponible en:  
<http://sociedadeconomiacritica.org/ojs/index.php/cec/article/view/219>

Sunkel, Osvaldo, El presente como historia. Dos siglos de cambio y frustración en Chile, Catalonia, Santiago, 2011, p. 320.

Svampa, Maristella, “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”, en Revista del Observatorio Social de América Latina,

CLACSO

, Buenos Aires, 2012, vol. 13, N° 32, pp. 15-38. Disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf>

Torres, Vladia y Montaña, Álvaro, “Acumulación salmonera en Chiloé. Las tensiones territoriales de una relación desigual”, en Mondaca, Eduardo, Uribe, Esteban, Henríquez, Sebastián y Torres, Vladia (eds.), Archipiélago de Chiloé: nuevas lecturas de un territorio en movimiento, Centro de Estudios Sociales de Chiloé (

CESCH

), Chiloé, 2018, pp. 61-96. Disponible en:  
<https://www.territoriocesch.com/general-1/jtezux8517/Acumulaci%C3%B3n-salmonera-en-Chilo%C3%A9-las-tensiones-territoriales-de-una-relaci%C3%B3n-desigual>

Weyland, Kurt, “La política económica en la nueva democracia chilena”, en Drake, Paul y Jaksic, Iván (comps.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo

en los noventa,

LOM

, Santiago, 2002, pp. 65-92.

\* Universidad Austral de Chile – Valdivia.

# **XIII. CAPITALISMO, ESTADO Y PROTESTA SOCIAL MAPUCHE**

CLAUDIO ESPINOZA ARAYA



## **PRESENTACIÓN**

Las dinámicas de las sociedades y culturas humanas son incomprensibles si no se presta atención a sus interrelaciones e interdependencias mutuas y a los escenarios sociales de las cuales forman parte. Como lo ha sostenido con fuerza el antropólogo Eric Wolf, el mundo de la humanidad constituye un total de procesos múltiples interconectados y los empeños por descomponer en partes a esta totalidad terminan por falsear la realidad.<sup>779</sup>

La obra de Wolf está cruzada por esta idea acerca de las interconexiones. Nos dice una y otra vez que las sociedades siempre formaron parte de sistemas más amplios, que se trata de una disposición que cruza los diversos periodos de la historia humana y que en los últimos siglos tal disposición se incrementó de manera notable en la medida en que el capitalismo colonizó cada vez más los espacios de la vida social y cultural en todo el planeta.

En este sentido, las dinámicas de la sociedad mapuche, tanto en el pasado como en el presente, se vuelven incomprensibles si no se presta atención a los campos de fuerza mayores entre los cuales ha debido necesariamente desenvolverse. El devenir y la historia contemporánea de este pueblo, léase desde el siglo

XIX

en adelante, se vincula fuertemente con el desarrollo y la expansión del capitalismo y con los procesos que lo acompañaron, entre ellos la constitución



de los Estados nacionales y el pensamiento evolucionista decimonónico.

De allí que el esfuerzo interpretativo de los procesos políticos vinculados a la lucha del pueblo mapuche deba necesariamente incorporar estos elementos para comprender que, en verdad, las acciones de las organizaciones, los líderes y las comunidades mapuche que observamos en la actualidad obedecen a una historia más larga y compleja y que, en definitiva, se trata de una respuesta colectiva a procesos avasalladores que afectaron de manera violenta y decisiva el desarrollo de su historia.

Así entonces, capitalismo y Estado aparecen como ejes centrales para la comprensión de esta trama. Por un lado, la expansión del sistema capitalista provocó transformaciones significativas en los dispositivos sociales y culturales de los pueblos y, al mismo tiempo, un conjunto de respuestas por parte de ellos. Y por otro, es importante distinguir la órbita política de tales respuestas, cuestión que nos lleva a compartir lo relevado por Talal Asad en el sentido de que el elemento distintivo de la organización política que caracteriza a la modernidad es que los diversos grupos sociales se ven obligados a conseguir sus intereses dentro del dominio organizado por el Estado.<sup>780</sup>

Por ello, en este trabajo analizaremos el impacto que significó la expansión del capitalismo y la acción del Estado en Wallmapu, el país mapuche, así como las respuestas de este pueblo tratando de revertir los procesos de despojo e injusticia social que les fueron impuestos.

Al mirar esta historia se percibe con claridad que los mapuche<sup>781</sup> han mostrado una enorme capacidad de adaptación y resistencia ante los procesos que los han afectado.<sup>782</sup> Vemos que el Estado chileno se ha relacionado con ellos fundamentalmente a través de leyes, en su mayoría de corte asimilacionista y que, a pesar de ello, los mapuche han intentado aproximarse a la sociedad y el Estado chilenos, pero que finalmente no han sido escuchados, cuestión que, como ha sucedido a lo largo de la historia humana, conduce de manera inevitable a un endurecimiento de la protesta social.

## LOS MAPUCHE EN LA HISTORIA

La densidad histórico-cultural del territorio que hoy conocemos como Chile es enorme. La arqueología ha logrado mostrar que la presencia humana en esta parte del mundo posee una antigüedad que se mide en miles de años. Sus antiguos habitantes consiguieron adaptarse a la naturaleza, moverse por el espacio y generar formas de vida diversas. En fin, lograron desarrollar aquello que la antropología llamó cultura.

Los distintos pueblos que se fueron asentando en el territorio debieron establecer relaciones entre sí. Como en toda la historia de la humanidad, estas relaciones de intercambio a veces fueron amistosas y otras hostiles, a veces llevaron a la fusión y otras al alejamiento. Uno de estos pueblos fueron los mapuche, probablemente el pueblo de mayor influencia cultural y de una centralidad insoslayable en el acontecer nacional hasta nuestros días.

Los datos arqueológicos señalan que desde hace por lo menos 2.500 años es posible hablar de una cultura mapuche desplegada por el territorio. A la llegada de los españoles, momento en que se empieza a dejar un registro histórico de lo observado, se percibe una influencia cultural mapuche en un amplio espacio geográfico. Se señala, por ejemplo, que el idioma mapuche se hablaba desde el río Choapa hasta el archipiélago de Chiloé,<sup>783</sup> es decir, una vasta zona que va desde la Región de Coquimbo a la Región de Los Lagos.

Esta influencia cultural se percibe de forma cotidiana hasta nuestros días. Santiago, la capital de Chile, posee una toponimia mapuche elocuente. Entre otros aspectos, los nombres de los sectores donde vive la población capitalina son, en su mayoría, mapuche: Tobalaba, Apoquindo, Manquehue, Vitacura, Ñuñoa, Peñalolén, Huechuraba, Pudahuel, Quilicura, Mapocho, entre muchos otros, dan cuenta de lugares ya nombrados, de un señalamiento ancestral. Así entonces, la antigüedad y la pertenencia del pueblo mapuche a este territorio es irrefutable.

Aquí, a lo largo de miles de años, desarrollaron sistemas económicos, políticos, religiosos, en fin, una suma de dispositivos de adaptación material y simbólica que produjeron una determinada forma de vida, ni mejor ni peor que otras, solo que, como todas, distinta. Esta forma de vida, al contrario de la imagen construida por las teorías evolucionistas del siglo

y cuyas secuelas vemos hasta la actualidad, tuvo poco de precaria, poco de escasez. Como bien ha mostrado el profesor José Bengoa, todo parece apuntar a que se trató, más bien, de una sociedad de la abundancia, donde las necesidades de sus habitantes podían ser resueltas satisfactoriamente por los sistemas creados para ello.<sup>784</sup> Es decir, una sociedad que logró alcanzar un equilibrio entre sus integrantes y lo que la naturaleza podía proveer. No intentamos idealizar esta configuración social, no afirmamos que se trate de una sociedad idílica ni que no existieran conflictos internos ni con otros pueblos, pues eso no se ha dado en ninguna parte; solo afirmamos que hubo un determinado desarrollo cultural que permitió el florecimiento y la consolidación de una sociedad particular.

Esta trayectoria, sin embargo, fue interrumpida por la llegada de agentes colonizadores externos. Primero los incas, cuyos efectos fueron menores, y luego los españoles, cuya presencia desató procesos que golpearon fuertemente a la sociedad mapuche y, aunque la transformaron, no lograron desarticularla. Por el contrario, la resistencia desplegada por este pueblo configuró un nuevo cuadro político en la conquista de América y permitió su propia reestructuración y fortalecimiento. Fue a mediados del siglo

## XIX

cuando la sociedad mapuche sufrió un cambio brutal e irreversible en el momento en que el Estado chileno invadió su territorio. Este proceso, conocido equívocamente como “Pacificación de la Araucanía”, es el que gatilló los conflictos que perduran hasta la actualidad. A partir de la derrota militar a manos del Ejército chileno, los mapuche fueron arrinconados, saqueados, violentados, empobrecidos, estereotipados, excluidos y marginados. Sin embargo, esta historia en sí misma de una brutalidad categórica, no es una historia particular de los mapuche, se trata de una historia global que afectó a numerosos pueblos del mundo y que sirvió como preparativo para la instalación de un orden mundial caracterizado por el Estado liberal moderno y el capitalismo mundial.

## CAPITALISMO Y DESPOSESIÓN

La llegada de los europeos a América se tradujo en la apropiación de sus recursos y de la población. De esta forma, convirtieron a esas regiones en

fuentes de explotación para satisfacer los requerimientos del centro colonizador.

En el caso mapuche este proceso tuvo algunas particularidades. Para empezar, la conquista resultó un intento fallido. Los mapuche resistieron la invasión y lograron neutralizar, mediante la guerra, el afán conquistador. Por supuesto, este proceso tuvo serias consecuencias, entre ellas el desplazamiento de los mapuche hacia el sur: una reducción, por tanto, de su territorio; una drástica disminución poblacional, debido a los muchos muertos producto de la guerra y muchos más por efecto de las epidemias; y una lenta transformación de su sociedad que se reflejará en sus estructuras políticas, en sus sistemas económicos, en la configuración de un nuevo territorio y, sobre todo, en la conformación de un nuevo cuadro político que se mantendrá por siglos.

Si bien en un primer momento los españoles, en su búsqueda de oro y plata, lograron establecer el mecanismo de explotación que impusieron en toda América, la encomienda, los mapuche revirtieron la conquista y contuvieron el asedio conquistador con la expulsión de los extranjeros de los territorios del sur mediante numerosas batallas, una de las cuales dejó muerto al primer gobernador de Chile. Tras estos enfrentamientos comenzó lo que se conoce como la Guerra de Arauco, que tiene una duración de alrededor de tres siglos. La Corona española, al no poder someter a los mapuche, se vio en la obligación de entrar en un nuevo escenario de relaciones que se institucionalizaron en los llamados Parlamentos, instancia sociopolítica establecida entre dos naciones: entre los españoles y los mapuche.

Las consecuencias de los parlamentos son varias, pero aquí interesa remarcar solo una: la autonomía y la independencia del pueblo mapuche. El primer parlamento celebrado, conocido como las Paces de Quillín, que tuvo lugar en 1641, cien años después de la fundación de Santiago, estableció una serie de acuerdos que se replicaron en los siguientes siglos, entre ellos: el reconocimiento de una frontera territorial, el río Biobío, y la autonomía del territorio mapuche. Los españoles debieron abandonar esas tierras y los mapuche se comprometieron a respetar la frontera, liberar a los prisioneros de guerra y dejar predicar a los misioneros en su territorio. Este fue el cuadro que dominó el periodo histórico conocido como la Colonia; sin embargo, la guerra no desapareció del todo; cada cierto tiempo surgían campañas militares, sobre todo de españoles que se introducían en el país mapuche con diversos objetivos.

A pesar de ello, esta paz entre comillas permitió a la sociedad mapuche asentarse

con comodidad en el nuevo escenario, se volvieron una sociedad ganadera y ampliaron su territorio hacia lo que hoy son las pampas argentinas. Es decir, durante aquellos años, a fines del siglo

## XVIII

, los mapuche lograron establecer un territorio transoceánico, que iba desde el mar Pacífico hasta el Atlántico, y una economía, nuevamente, de la abundancia.

Todo ello cambió con el surgimiento y la consolidación del Estado-nación chileno, la expansión del capitalismo mundial y el desarrollo del racismo científico articulado a las teorías evolucionistas propias del siglo

## XIX

. Veamos.

La relación del Estado chileno con el pueblo mapuche se origina en el momento mismo en que se concreta la independencia y se constituye el Estado nacional, es decir, en las primeras décadas del siglo

## XIX

. No obstante, se trató de una relación más bien discursiva, donde el elemento central tuvo que ver con la inclusión en el ámbito simbólico de los mapuche en el imaginario nacional.<sup>785</sup>

Al momento de la independencia chilena, los nuevos gobernantes miraron hacia el territorio mapuche que se había mantenido autónomo durante toda la colonia, tratando de asociar la lucha independentista con la férrea oposición de este pueblo al control hispano. Se produjo así, en esa primera etapa, una alta valoración del mismo, relevando su carácter indómito, que no se entrega a poder extranjero, e incluyéndolo en el discurso patriótico como los altivos luchadores por la libertad.

Sin embargo, cuando las tropas chilenas arrinconaron a las últimas fuerzas realistas en la frontera del territorio mapuche, los mapuche actuaron en coherencia con los tratados alcanzados durante la Colonia y pelearon a favor de los españoles. Este hecho, enmarcado en lo que se conoció como la “Guerra a Muerte”, hizo decaer en el imaginario nacional la figura del mapuche, dando

paso, en la segunda mitad del siglo

## XIX

, a todos los estereotipos derivados del paradigma evolucionista.

Los mapuche, al oponerse a los intereses del centro del país, pasaron de ser el sustento heroico de la independencia a convertirse en las fuerzas bárbaras que impedían la construcción de la nación. Ya en la segunda mitad del siglo

## XIX

, justo cuando ocurre la crisis económica provocada por la caída de los mercados californiano y australiano, y el territorio mapuche comienza a ser visto como un manantial desaprovechado de recursos y materias primas, esta visión evolucionista, difundida principalmente a través del diario El Mercurio de Valparaíso, se convirtió en la justificación para tomar medidas que acabaran con la “barbarie” y permitieran la explotación moderna de dichos recursos y la construcción de un país “civilizado”.<sup>786</sup>

El profesor Pinto alude en su libro a una serie de titulares, notas, columnas y comentarios difundidos a través del citado diario<sup>787</sup> que reflejan cierta “ideología de la ocupación” y que se inscriben, con absoluta claridad, en los prejuicios del evolucionismo decimonónico:<sup>788</sup>

No se trata de la adquisición de algún retazo insignificante de terreno, pues no le faltan terrenos a Chile; no se trata de la soberanía nominal sobre una horda de bárbaros, pues esta siempre se ha pretendido tener: se trata de formar de las dos partes separadas de nuestra República un complejo ligado; se trata de abrir un manantial inagotable de nuevos recursos en agricultura y minería; nuevos caminos para el comercio en ríos navegables y pasos fácilmente accesibles sobre las cordilleras de los Andes [...], en fin, se trata del triunfo de la civilización sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad.<sup>789</sup>

Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la

civilización.<sup>790</sup>

Es en ese momento que el Estado chileno decide emprender la invasión del territorio mapuche y radicar a su población en pequeñas porciones de tierras, llamadas reducciones y entregadas como Títulos de Merced. Este proceso, llevado a cabo entre 1884 y 1930, significó que los mapuche en Chile pasaran de controlar aproximadamente 10.000.000 de hectáreas a poseer legalmente alrededor de 500.000. Posteriormente, dichas tierras volvieron a ser objeto de usurpación por parte de particulares. Tal cual quedó establecido en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, ese proceso de invasión y usurpación del territorio mapuche durante la segunda mitad del siglo

## XIX

es el que ha motivado, hasta la actualidad, los conflictos entre los mapuche y el Estado chileno:

El Estado chileno fue el responsable de crear un conflicto que tuvo efectos inmediatos en la zona y que afectó fuertemente a la sociedad mapuche; pero además el Estado proyectó el conflicto indígena, haciéndolo permanente hasta el día de hoy, no solo por haberse apropiado de un territorio que no le pertenecía, sino porque además, a través del proceso de radicación y reparto de tierras de la Araucanía, entrampó a numerosas comunidades mapuches en fuertes y largos litigios con particulares, cuestión que puede verse con toda claridad hasta nuestros días. En muchas ocasiones se repartieron tierras a particulares donde ya se había radicado a mapuches, entregando al particular una parte o la totalidad del Título de Merced, como ocurrió con la comunidad Huenual Ivante de Lonquimay, la que fue expulsada de sus tierras por los “nuevos dueños”, a pesar de que la misma había recibido con anticipación el título de merced. En otros casos se radicó a mapuches al lado de tierras rematadas y adjudicadas a particulares. En estos casos, la ambición de los colonos poco a poco llevó a las corridas de cerco y a la progresiva usurpación de los Títulos de Merced. Finalmente, la Comisión de Radicación indígena, en muchas ocasiones, no entregó a los mapuches lo que realmente correspondía en el Título de Merced, reduciendo aún más la superficie que quedaba en poder de aquellos.<sup>791</sup>

De más está decir que todo este proceso estuvo lleno de arbitrariedades y violencias de todo tipo. Frente a los hechos, el pueblo mapuche respondió a la nueva situación generada y las organizaciones mapuche no tardaron en aparecer.

## EL MOVIMIENTO MAPUCHE CONTEMPORÁNEO

Pensando que un movimiento social se caracteriza por un conjunto de acciones que buscan transformar las relaciones sociales de dominación,<sup>792</sup> es posible asignar una fecha de nacimiento a lo que hoy en día es considerado como movimiento mapuche. En las primeras décadas del siglo

XX

, y como respuesta a las consecuencias que acarreó la ocupación del territorio mapuche, surgieron las primeras organizaciones de este pueblo. Fue la necesidad de defensa por parte de las comunidades frente a la reducción territorial y a los atropellos que dicho proceso implicó, lo que explica su surgimiento.<sup>793</sup> Tales organizaciones entraron prontamente a contender —casi siempre en alianza con los partidos políticos— en el escenario político nacional.

Surgieron así organizaciones tales como la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, la Sociedad Mapuche de Protección Mutua (posteriormente Federación Araucana) y la Unión Araucana. Dichas agrupaciones, si bien diferían en muchos de sus planteamientos, mostraban un elemento común relacionado con cierta adaptación de la sociedad originaria a la lógica del Estado chileno para alcanzar sus objetivos. Es lo que Bengoa ha denominado como la lucha por la integración respetuosa de los mapuche a la sociedad chilena, queriendo señalar con ello el intento de las organizaciones mapuche por participar a plenitud de la vida política nacional, adoptando de forma coincidente modos organizacionales análogos a las organizaciones chilenas de aquella época.<sup>794</sup>

Otra característica compartida es que los dirigentes de aquella época habrían tenido plena conciencia de que el medio más viable para obtener cambios



significativos para su pueblo era a través de la representación parlamentaria, una postura que, por cierto, formaba parte de las estrategias asumidas por los movimientos de masas a partir de la década de 1930.<sup>795</sup>

Se percibe, entonces, un temprano interés de organizaciones mapuche por participar en la vida política nacional, camino que no será interrumpido sino hasta el golpe de Estado en 1973.<sup>796</sup> Durante gran parte del siglo

XX

hubo una movilización mapuche que buscó, con matices y a través de diversos mecanismos, dar cabida a sus demandas. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970.

A juicio de Bengoa, este nuevo ciclo se inicia con el agotamiento del indigenismo Coñoepanista, haciendo referencia con este nombre al destacado dirigente mapuche Venancio Coñoepan, identificado como el principal impulsor de políticas indigenistas en Chile. Y es que si bien hubo logros durante el periodo que va desde 1930 hasta fines de la década de 1960, solo tuvieron un alcance limitado. Estos escasos resultados fueron, entonces, el motor que provocó un primer giro de las movilizaciones mapuche.

Los mapuche intentan en esa época conseguir que se respeten sus derechos y obtener respuesta a sus demandas y reivindicaciones por la vía de los hechos. Esto se tradujo en acciones concretas: las “recuperaciones” o “tomas” de fundos que estaban en manos de particulares, pero que habían formado parte de la propiedad mapuche estipulada en los Títulos de Merced.<sup>797</sup> Estas recuperaciones de tierra, por lo demás, no eran un tipo de acción que ejecutaron solo los mapuche, sino que se inscribían en un proceso y clima más amplio que se vivía en el país: era el tiempo en que se discutía la Reforma Agraria, proceso que iba a poner fin al sistema hacendal.

El primer proceso de reforma agraria, durante el gobierno de Alessandri (1958-1964), no tuvo mayores consecuencias; de hecho, recibió el nombre de “reforma de macetero”. Durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) se buscó beneficiar a 100.000 campesinos, pero solo se benefició a cerca de 30.000.<sup>798</sup> Ante la frustración que provocó el escaso alcance de esta reforma, surgió una gran demanda social al inicio del gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Muchos de estos reclamos se canalizaron a comienzos y durante el gobierno de

Allende por la vía de los hechos. Los mapuche, una vez más, no estuvieron ajenos a estos procesos nacionales.

El gobierno de la Unidad Popular respondió a esta demanda aumentando considerablemente el ritmo de las expropiaciones, lo que para el caso mapuche se tradujo en el denominado Cautinazo. En las elecciones de 1964, el entonces candidato a la presidencia Salvador Allende se había comprometido con los mapuche a dictar una nueva ley indígena que contemplara la restitución de todas las hectáreas usurpadas de los Títulos de Merced. Al asumir la presidencia en 1970, y considerando que la ley indígena de ese momento no contemplaba la restitución de tierras, Allende decidió no esperar la aprobación de una nueva ley y aplicó la Ley de Reforma Agraria para la restitución de las tierras mapuche.

Jacques Chonchol, ministro de Agricultura de ese entonces, se desplazó al sur del país y se instaló en la zona del Cautín, ciudad de Temuco (de ahí el nombre de Cautinazo). Chonchol explicaba por aquella época esta política señalando que cuando se encontrase un fundo que estuviera en proceso de expropiación y que, al mismo tiempo, hubiese evidencia de que dicha propiedad contuviera tierras usurpadas de los Títulos de Merced, lo primero que debía hacerse era restituir las tierras a las comunidades afectadas.<sup>799</sup> A pesar de que no se restituyó todo lo que se demandaba, sí se entregó una cantidad importante, cerca de 80.000 hectáreas de 100.000 que se denunciaban y reclamaban como usurpadas.

Este periodo, marcado por esta política de restitución dejó al menos tres consecuencias: i) se logró una importante restitución de tierras; ii) se produce un fortalecimiento organizacional mapuche al crearse la Confederación Nacional Mapuche, que ejercerá una fuerte presión para cambiar la Ley Indígena 14.511 de 1961, proceso que derivará en, iii) la dictación de la Ley Indígena 17.729 de 1972.

Sin necesidad de entrar en detalles, puede decirse que dicha ley contemplaba un significativo número de medidas tendientes a mejorar la situación de los pueblos indígenas en Chile, lo que, en palabras de Rupailaf, la situaba en la vanguardia de las políticas indígenas latinoamericanas.<sup>800</sup> Sin embargo, este periodo fue demasiado breve. El golpe militar en septiembre de 1973 acabó abruptamente con tales procesos y dio paso a un nuevo ciclo en las relaciones entre los mapuche y el Estado.

## GOLPE DE ESTADO Y NEOLIBERALISMO

Hacia fines del periodo de la Unidad Popular, y a raíz de ciertas acciones concretas de parte de algunos sectores de la sociedad mapuche, sumado al clima “revolucionario” que se vivía en la época, en el centro del país se formó un nuevo imaginario respecto de los mapuche. Se pensaba que en la Araucanía, “plagada de revolucionarios indígenas”, existía un conflicto armado.<sup>801</sup> Como han mostrado Correa, Molina y Yáñez, la represión en esta zona comenzó incluso antes que se diera el golpe de Estado.<sup>802</sup> Después se intensificó y, al igual que en el resto del país, fue brutal.<sup>803</sup>

Entre las consecuencias concretas que se produjeron tras el golpe militar está, en primer lugar, el proceso de contrarreforma agraria llevado a cabo por la junta militar, que significó revocar los acuerdos expropiatorios y la devolución de las tierras recuperadas por las comunidades mapuche. Muchas de estas tierras fueron traspasadas luego a empresas forestales.

En segundo lugar, hubo un retroceso en materia de legislación indígena. Durante el gobierno de Allende se había creado el Instituto de Desarrollo Indígena, órgano encargado de todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas. El gobierno militar lo suprimió, con lo cual la Ley 17.729, a pesar de estar vigente, no tuvo ninguna aplicación práctica.

En tercer lugar, se desarticuló el movimiento indígena a través de medidas represoras<sup>804</sup> y se dictó el Decreto Ley 2.568 de 1978, que produjo la división y la liquidación de las comunidades mapuche al legitimar la propiedad privada al interior de los Títulos de Merced. Esta ley, además, implicó un duro golpe al tema del reconocimiento, pues tal como lo planteaba el ministro de Agricultura de la época, “la nueva ley implica un nuevo enfoque: en Chile no hay indígenas, son todos chilenos”.<sup>805</sup>

Fue este nuevo escenario el que provocó un cambio en las aproximaciones de la sociedad mapuche hacia el Estado y la sociedad nacional. Si hasta antes del golpe militar primaron los intentos de integración, después de esa fecha, y como producto de los elementos que acabamos de enumerar, la movilización se va a caracterizar por una voluntad “de separación de la cultura mapuche de la chilena, por la afirmación de las propias características indígenas y por el rechazo a la

asimilación”.<sup>806</sup>

En términos específicos, la gestación de este nuevo cuadro de movilización se debió en gran medida a la promulgación de la Ley 2.568 de división de comunidades. El 12 de octubre de 1978 se reunieron en Temuco representantes mapuche de 90 comunidades de las regiones del Biobío y La Araucanía para analizar el anuncio de esta ley. Como resultado de esa reunión se crearon los Centros Culturales Mapuches, una de las primeras organizaciones sociales en oponerse a la dictadura militar.

Los Centros Culturales Mapuches, reuniendo a dirigentes con trayectoria y otros que recién se iniciaban, asumieron una posición culturalista<sup>807</sup> para oponerse a la división de las comunidades mapuche, generando con ello un movimiento étnico de larga duración. A diferencia de lo que había ocurrido en épocas anteriores, en las que los mapuche se habían plegado a otras luchas sociales, a partir de la década de 1980 el movimiento se va a caracterizar por la distancia con otros grupos, por subrayar su diferencia étnica y por levantar reivindicaciones autónomas. Las décadas siguientes quedaron marcadas por este distanciamiento.

## TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y PROFUNDIZACIÓN NEOLIBERAL

La historia que sigue se enmarca en lo que se ha dado en denominar la emergencia o la reemergencia indígena en América Latina<sup>808</sup>. El caso mapuche en Chile no dista mucho del derrotero que siguieron estos procesos en otros países del continente. A pesar de ello, tuvo sus propias particularidades. Con el retorno de la democracia en Chile (1990) se observó un marco que abría posibilidades a las demandas del mundo mapuche, aunque con el tiempo dicha expectativa mostró tener un techo muy bajo.

La transición democrática supuso un nuevo escenario para todas las fuerzas sociales del país. Los mapuche no estuvieron al margen. Las fuerzas políticas opositoras al régimen militar acogieron en su programa de gobierno las demandas indígenas, cuestión que quedó sellada en el Pacto de Nueva Imperial de 1989, entre el entonces candidato a la presidencia Patricio Aylwin y las organizaciones y comunidades mapuche.

Este pacto se tradujo en concreto en dos instancias: la Ley Indígena 19.253 aprobada en 1993, que impuso al Estado el respeto, la protección y la promoción de los derechos y culturas indígenas y sus tierras, y en la creación, a través de la misma ley, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (

CONADI

), entre cuyas tareas principales se encontraba la restitución y la compra de tierras para las comunidades afectadas por la escasez de ellas.

A pesar de todas las limitaciones de esta ley y de las críticas realizadas con el tiempo a la

CONADI

, se trató de un cuerpo legal que permitió posicionar la temática indígena en el Estado mismo y que le otorgó un marco legal al reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas del país. A partir de ese momento puede hablarse del inicio de políticas multiculturales por parte del Estado chileno, en el sentido de las definiciones expuestas por algunos liberales comunitaristas, como Kymlicka o Taylor, de manejo de las diferencias culturales en el espacio público otorgando derechos específicos con base en el reconocimiento de estas diferencias culturales, tal cual ocurrió en otros países del continente.<sup>809</sup>

Sin embargo, esta incipiente política multicultural, tanto en Chile como en la región, mostró prontamente su limitado alcance al consolidar un “multiculturalismo oficial” o “neoliberal”, caracterizado por mostrarse proclive a ciertos procesos de reconocimiento y ciertos derechos estratégicos, pero no así a los de redistribución. Dejó pendientes, por lo tanto, cuestiones relativas a la desigualdad económica y la injusticia social, entre otros aspectos. Así, por ejemplo, el proceso de restitución de tierras caminó a paso lento, lo que provocó que muchas comunidades indígenas comenzaran a presionar a los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014/2018-2022) ocupando las tierras sobre las cuales tenían claridad de posesión.

Junto con ello, comenzaron a emerger organizaciones con la demanda del reconocimiento como pueblo y/o nación mapuche y la bandera de la autonomía. Paralelamente, surge y se agudiza un conflicto en torno a la construcción de represas en tierras pehuenche —el conocido caso Ralco— que conllevó más

movilizaciones mapuche y que permitió cierta consolidación de un discurso unitario.

Respecto a este conflicto de las represas en el Alto Biobío, ejemplo paradigmático del multiculturalismo a la chilena, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle decidió no “intervenir” en el conflicto, señalando que se trataba de un litigio entre particulares y que, por tanto, el Estado nada podía hacer. Los particulares que intervenían, valga la aclaración, eran, por una parte, la transnacional Endesa, y, por la otra, un conjunto de familias pehuenche que no querían dejar sus tierras.

No obstante, el gobierno de Frei, a su modo, sí interviene en dicho conflicto. La Ley Indígena imponía al Estado el deber de proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación y por su equilibrio ecológico. A propósito de la construcción de la segunda represa en la cordillera pehuenche —la central Ralco—, uno de los estudios de impacto ambiental rechazó dicha obra, pues afectaría territorios indígenas y pasaría por encima de la Ley 19.253. Dos directores de la

## CONADI

, Mauricio Huenschulaf y Domingo Namuncura, nombrados por el mismo presidente Frei, se opusieron a la construcción. Tras esta postura fueron removidos de sus cargos y reemplazados por funcionarios proclives a la construcción.

Las movilizaciones mapuche fueron en aumento y se volvieron materia de discusión nacional. A fines de la década de 1990, los medios de comunicación acuñaron el concepto de “veranos calientes” queriendo aludir, con ello, a las acciones que se comenzaron a observar en La Araucanía, en las que personas encapuchadas invadían predios forestales y cortaban y quemaban los bosques de pinos y eucaliptos.

Como ha sostenido Fernando Pairican, el inicio de esta estrategia ocurrió el primero de diciembre de 1997, con la quema de tres camiones en la comuna de Lumaco, en el corazón del territorio mapuche, acción que fue reivindicada por una nueva organización, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, más conocida como

## CAM

. Esta nueva postura provocó una ruptura en las negociaciones con el gobierno y dio paso a recuperaciones efectivas de control territorial en busca de la autonomía.<sup>810</sup>

#### IMAGEN 1:

*Portada del Diario Austral, martes 2 de diciembre de 1997*

# EL DIARIO AUSTRAL

Año LXXVII N° 29.547

La Araucanía, martes 2 de diciembre de 1997

\$ 250

## Violenta protesta mapuche

# Queman 3 camiones

## Asalto a vehículos de forestal



El asalto y el incendio ocurrido a las cercanías de la Villa Portada San Juan de los Rios, los que desde hace días están siendo víctimas de la acción de los delincuentes a través de robos, asaltos a buses, arboles y animales. El último delito cometido es el asalto a una camioneta de forestal





El gobierno creó mesas de diálogo a las que invitó a dirigentes mapuche, pero en paralelo decidió aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Muchos líderes mapuche fueron encarcelados bajo las prerrogativas de esta ley y otros tantos pasaron a la clandestinidad.

Así, aunque públicamente Eduardo Frei señalaba la imposibilidad de intervenir en el conflicto de Ralco, los hechos demostraban cuál era su apuesta. El último día de su mandato, el presidente de la República firmó el decreto que permitía la construcción de la represa y, finalmente,

[...] en el año 2001 se vieron ingresar los gigantescos generadores de energía por los caminos de la zona pewenche, con camiones que avanzaban lentamente protegidos por la policía fuertemente armada, mientras los indígenas ocultos tras la espesa vegetación arrojaban palos y piedras.<sup>811</sup>

Como es evidente, estos hechos generaron una enorme desconfianza entre ciertos sectores mapuche hacia la institucionalidad estatal, lo que llevó a más movilizaciones.

En este contexto asumió la presidencia Ricardo Lagos (2000-2006). Al inicio de su gobierno, este señaló como tema prioritario la situación de los pueblos indígenas. Para ello decidió crear una nueva comisión, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que apoyara al gobierno en la elaboración de una nueva política hacia los pueblos indígenas.

Esta comisión se conformó en enero de 2001 y culminó su tarea en octubre de 2003. A pesar de que los informes de la Comisión —sobre todo el de historia y el de los aspectos jurídicos— fueron contundentes en cuanto al diagnóstico del conflicto, así como en la elaboración de recomendaciones, la realidad mostró un estancamiento en la generación de medidas satisfactorias para las demandas indígenas presentes en el discurso público.

El gobierno de Lagos respondió con un programa de inversión social millonario, denominado Programa Orígenes, financiado por un crédito del Banco

Interamericano de Desarrollo (

BID

) —de 80 millones de dólares y por aportes del gobierno chileno de 53 millones de dólares— destinado a los pueblos indígenas aymara, atacameño, quechua y mapuche en el área rural, que comenzó a ser ejecutado en 2001.

Sin embargo, al mismo tiempo, implementó una fuerte política de represión policial de las protestas mapuche y aplicó, además, la Ley Antiterrorista —creada en dictadura— en contra de algunos dirigentes mapuche<sup>812</sup>. Esta forma de operar consolidó la judicialización o criminalización de las demandas mapuche. Los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet —gobiernos autodenominados como de centroizquierda— utilizaron la misma estrategia, una que comparten todos los gobiernos posdictatoriales, caricaturizada con la imagen del garrote y la zanahoria, en el sentido de que, por un lado, se crean instancias de diálogo y reconocimiento, mientras que, por el otro, se aplican medidas represoras. Medidas que se han intensificado de manera trágica en el último gobierno de Sebastián Piñera.

Así, con el inicio del siglo

XXI

se comienza una progresiva represión de personas mapuche que protestaban por la devolución de sus tierras, sus derechos políticos y en contra de la explotación de sus recursos a manos de empresas forestales y proyectos hidroeléctricos. Algunas investigaciones han dado cuenta de alrededor de 15 personas mapuche muertas desde el año 2001 a la fecha.<sup>813</sup> Entre los casos descritos hay una mayoría de jóvenes que son muertos por la policía mientras desarrollan acciones de protesta en tierras que les pertenecen, pero que permanecen en manos de empresas forestales o de personas particulares; por ejemplo, la muerte del joven de 17 años, Alex Lemun, en 2002, en los primeros años del gobierno de Ricardo Lagos, o Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, muertos de manera similar en 2008 y 2009 respectivamente. Otras muertes han ocurrido en los mismos hogares de los comuneros mapuche mientras la policía llevaba a cabo operativos de allanamiento; por ejemplo, la muerte del lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril. También, en circunstancias no aclaradas, murió Zenén Alfonso Díaz Necul, joven de 17 años, quien fue atropellado por un camión en una protesta en la Ruta

5 sur.

Esta política represiva se intensificó a fines del gobierno de Michelle Bachelet, cuando desde el Ministerio del Interior, órgano de gobierno encargado, entre otros asuntos, de la seguridad pública, se implementó la llamada Operación Huracán, la que consistió en un despliegue de inteligencia policial que perseguía el control de los grupos que lideraban la protesta social mapuche. El resultado fue la detención y el posterior confinamiento en prisión de dirigentes mapuche, entre los cuales se encontraba Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (

CAM

). Lo interesante es que al poco tiempo surgieron enormes dudas respecto a las pruebas presentadas contra estos dirigentes para, finalmente, demostrarse la falsedad de las pruebas y, con ello, visibilizar la existencia de un claro montaje por parte de las policías y el Ministerio del Interior.

Con el regreso al gobierno de Sebastián Piñera, estas fórmulas de “inteligencia” retomaron el camino de la represión, cuyo reflejo por excelencia fue la creación del llamado “Comando jungla”, un grupo especializado de policías, con entrenamiento militar en Colombia, y cuyo objetivo era enfrentar acciones terroristas. El resultado de su ingreso en el territorio mapuche no podía ser otro que el del que fue testigo todo el país: la muerte en 2018 del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por policías al interior de su comunidad (Temucuicui), mientras conducía un tractor y era acompañado por un niño de 15 años.

En síntesis, se observa que con el retorno de la democracia hubo un primer periodo que permitió la consecución de ciertos logros por parte del movimiento mapuche. Por ejemplo, se logró modificar la Ley 2.568 que desprotegía las tierras indígenas y se la reemplazó por una nueva que buscaba protegerlas y ampliarlas. Se creó una institucionalidad al interior del Estado, dirigida, en parte, por los propios indígenas, para incidir en las políticas que les conciernen. Así, esta etapa forma parte del denominado “ciclo de la década ganada”.

Sin embargo, prontamente sobreviene un segundo momento en el que se constata que las políticas estatales resultan insuficientes y de un alcance extremadamente limitado. Las políticas culturalistas del Estado chileno no daban cabida a las

demandas políticas de los pueblos indígenas, expresadas sobre todo por el pueblo mapuche. Frente a la protesta social, la institucionalidad creada por el propio Estado es suspendida y se vuelve necesario recurrir a la otra cara del aparato estatal: el uso de la violencia para reprimir los elementos que entran en contradicción con sus intereses.

De esta manera, el Estado actúa represivamente frente a un conflicto, negando su dimensión histórica, étnica y social, y criminalizando sus expresiones. Sobreviene entonces la desilusión del multiculturalismo que nos sitúa en la era del “indio permitido”,<sup>814</sup> junto con su contraparte, el indio prohibido y reprimido.

El escenario progresista en materia de legislación indígena parece tener su frontera allí donde se topa con el modelo neoliberal. Los derechos de controlar recursos reales funcionan mientras se trate de recursos no estratégicos, pero cuando estos son materia de interés para el Estado o para el sector privado, se acaba el progresismo y se recurre a todo tipo de argucias para su apropiación. El caso de Ralco es el reflejo por excelencia de lo que aquí se señala. Lo mismo puede decirse del conflicto entre comunidades mapuche y empresas forestales.

Ahora bien, y a pesar de este escenario lleno de limitaciones, que abre las puertas del pesimismo para las organizaciones indígenas, estas, una vez más, desplegaron nuevas formas de lucha y estrategias de resistencia, que se han cristalizado en movimientos sociales que expresan una alta capacidad de actuar políticamente frente al Estado y los distintos gobiernos.<sup>815</sup> En este contexto, es posible seguir percibiendo la histórica vía institucional de la lucha mapuche, pero también, y dada la desatención con la que ha contado, una vía rupturista que ha endurecido la forma de actuar, pero que persigue el mismo objetivo, la recuperación de la justicia social que le ha sido arrebatada a lo largo de siglos.

## IMAGEN 2:

*Mural “Defender el territorio”. Marzo de 2019, Cañete*



*Fuente: Gentileza del antropólogo Damián Gálvez.*

## REFLEXIONES FINALES

Tal como señala el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y como ha sostenido en numerosos trabajos la Comunidad de Historia Mapuche,<sup>816</sup> los pueblos originarios que hoy forman parte del territorio llamado Chile, en específico el mapuche, lograron configurar una historia propia que permitió su adaptación al entorno ecológico. A lo largo de miles de años desarrollaron sociedades y culturas que hoy forman parte de la herencia cultural del país. Sin embargo, esa historia se vio violentamente interrumpida por factores exógenos que transformaron de manera negativa el devenir de tales trayectorias.

A nuestro juicio, dos son los elementos centrales de esta parte de la historia: capitalismo y Estado. Como esperamos haber mostrado a lo largo de las páginas precedentes, dicho binomio arrasó con la sociedad y la cultura mapuche, violentando brutalmente a sus integrantes y proyectando hasta nuestros días la vulneración de sus derechos.

En este contexto, los mapuche mostraron una disposición política duradera: dialogar con el Estado y la sociedad chilena, pero no fueron escuchados. Al contrario, continuamente fueron estereotipados y marginados. No obstante, como nos muestra una y otra vez la historia, llega un momento en que los pueblos se cansan y emprenden acciones de resistencia por distintas vías. El caso que aquí seguimos no es diferente.

Como ha mostrado Fernando Pairican,<sup>817</sup> la lucha contemporánea de los mapuche se perfila hacia un objetivo común, la autodeterminación. Y en ese caminar, dos son las vías para alcanzar tal objetivo: una que podemos llamar institucional y que se ha conducido mayormente por la vía electoral,<sup>818</sup> y otra de carácter más rupturista, que recurre a la violencia política para combatir la violencia estructural que ha afectado a los mapuche y a muchos otros sectores de la sociedad nacional en su conjunto y cuya expresión asomó con fuerza el 18 de octubre de 2019.

En la actualidad nos encontramos frente a un escenario nuevo para el país: la redacción, por primera vez, de una Constitución en un contexto democrático. Por cierto, una democracia incompleta, pero democracia, al fin y al cabo.<sup>819</sup>

En este contexto vale la pena atender a los argumentos expresados por los representantes mapuche en la Convención Constitucional, una convención presidida por una mujer mapuche, la académica Elisa Loncón, quien fuera parte de los creadores de la Wenufoye, bandera mapuche que flameó masivamente durante la revuelta popular de octubre de 2019, y quien ha conducido el proceso constituyente de manera sabia, respetuosa y firme en la defensa de los principios interculturales que la convocan. En el mismo sentido, son muy pertinentes para la argumentación de este texto las palabras de Adolfo Millabur, líder de una de las vías del movimiento mapuche que lucha por la autodeterminación. Millabur nos recuerda cuál es la fuente de los problemas que aquejan a mapuche y chilenos, y cuál puede ser un camino para su reparación. Cito algunos pasajes de su discurso de apertura en la Convención Constitucional el día 20 de octubre de 2021:

Quiero dejarle claro a los chilenos que la única minoría étnica no son los pueblos indígenas, sino que son los ricos. Esa oligarquía hispano-criolla fue la que construyó este Estado-nación monocultural. Ellos fueron los que hicieron la guerra. El pueblo chileno no proviene de allí. Más bien fueron sus subordinados. Tienen más conexión con nosotros.

Antes solo esa pequeña élite se había atribuido el derecho de decidir por todos. Pero hoy ese derecho es nuestro. Lo estamos recuperando.

Quizá sea el momento de escucharlos. Escucharnos.

## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Agudelo, Carlos y Recondo, David, “Multiculturalismo en América Latina. Del Pacífico mexicano al Pacífico colombiano”, en Hoffmann, Odile y Rodríguez, María Teresa (dirs.), Los retos de la diferencia. Los actores de la multiculturalidad entre México y Colombia,

CIESAS, CEMCA, IRD, ICAHN

, México, 2007.

Asad, Talal, “Conscripts of Western Civilization”, en Ward Gailey, Cristine (ed.), Civilization in Crisis: Anthropological Perspective. Essays in Honor of Stanley Diamond, vol. 1, Dialectical Anthropology, University of Florida Press, Gainesville, 1992.

Bello, Álvaro, “Los pueblos indígenas y las contradicciones de la globalización”, en Bello, Álvaro y Aylwin, José (comps.), Globalización, derechos humanos y pueblos indígenas, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Temuco, 2008.

Bengoa, José, Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo

XX

, Planeta, Santiago, 1999.

, La emergencia indígena en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2000.

, Historia de los antiguos mapuches del sur. Desde antes de la llegada de los españoles hasta las paces de Quilín, Catalonia, Santiago, 2003.



Campos, Luis, Relaciones interétnicas en pueblos originarios de México y Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2008, p. 408.

Correa, Martín, Molina, Raúl y Yáñez, Nancy, La reforma agraria y las tierras mapuches. Chile 1962-1975,

LOM

, Santiago, 2005.

Espinoza Araya, “Procesos etnopolíticos en la transición democrática chilena. Gobiernos locales y la vía política mapuche”, en Cuadernos de antropología Social, N° 45, 2017.

Espinoza, Claudio, “Los límites del reconocimiento en Chile: La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y un voto de minoría”, en Tiempo Histórico, vol. 9, N° 17, Santiago, 2018, pp. 145-161.

Foerster, Rolf y Montecino, Sonia, Organizaciones, líderes y contiendas mapuches,

CEM

, Santiago, 1988.

Hale, Charles, “Rethinking Indigenous Politics in the Age of the ‘Indio Permitido’”, en Nacla Report on the Americas, vol. 38, N° 2, 2004.

Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, Pehuén, Santiago, 2008.

Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona, 1996.

Mariman, Pablo; Caniuqueo, Sergio; Millalén, José y Levil, Rodrigo, ¡... Escucha, winka...! Cuatro ensayos de historia nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro,

LOM

, Santiago, 2006.

Mella, Magaly, Movimiento mapuche en Chile: 1977-2000, tesis de licenciatura en antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2001.

Nahuelpan, Héctor, et al., Ta ñ fijke xipa rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país mapuche, Comunidad de Historia Mapuche, Temuco, 2012.

Parmelee, Elizabeth, “Decreto Ley 2568, sus efectos e implicancias”, en Liwen, N° 3, Temuco, 1990.

Pairican, Fernando, Malon. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013, Pehuén, Santiago, 2014.

Pinto, Jorge, De la inclusión a la exclusión. La formación del Estado, la nación y el pueblo mapuche, Universidad Santiago de Chile, Santiago, 2000.

Rivera, Rigoberto, Los campesinos chilenos,

GIA

, Santiago, 1988.

Ruiz, C., y Samaniego, A., Mentalidades y políticas Wingka: pueblo Mapuche, entre golpe y golpe: de Ibáñez a Pinochet. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2007.

Rupailaf, Raúl, “Las organizaciones mapuches y las políticas indigenistas del Estado chileno (1970-2000)”, en Revista de la Academia, N° 7, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2002.

Salazar, Gabriel, Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos

XX

y

*XXI*

),

LOM

, Santiago, 2009.

Taylor, Charles, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

Touraine, Alan, El regreso del actor, Eudeba, Buenos Aires, 1987.

Wolf, Eric, Europa y la gente sin historia,

FCE

, Buenos Aires, 2000 [1982], p. 3.

Zapater, Horacio, Aborígenes chilenos a través de cronistas y viajeros, Andrés Bello, Santiago, 1978.

\* Académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Investigador Asociado Centro de Estudios Interculturales e Indígenas-

CIIR

, Investigador Responsable proyecto Fondecyt 1210999.

# **XIV. “NOS AFIRMAN MUCHAS MUJERES”:**

## **EL MOVIMIENTO FEMINISTA Y LAS LUCHAS DE LAS MUJERES EN LA ÚLTIMA DÉCADA (2011-2020)**

MÓNICA IGLESIAS VÁZQUEZ

[\\*](#)

### **INTRODUCCIÓN**

En la última década el feminismo dejó de ser un tema o un punto en un petitorio. Se diversificó, se multiplicó y se aunó. Se hizo ola, tsunami. Y en ese desborde atravesó todas las problemáticas, trastocó todos los consensos y se volvió el eje transversal de las luchas. Se trata de un fenómeno que ha traspasado fronteras, con resonancias en distintos países, gracias a las redes sociales. La cronología de estos últimos años tiene ciertos hitos: las movilizaciones de las argentinas para protestar contra los femicidios en el país, que dieron lugar en junio de 2015 al colectivo Ni Una Menos, y la Marea Verde por el aborto legal, seguro y gratuito, que ha convertido el pañuelo verde en símbolo mundial de las luchas por los derechos de las mujeres; las protestas en torno al caso de “La Manada”,<sup>820</sup> que constituye un episodio terrible, pero no excepcional, de violencia contra la mujer tanto de los propios violadores como de la justicia patriarcal, que cuestionó a la víctima, desatando la rabia y la indignación de miles de mujeres en España y en el mundo, movilizadas con el lema #YoSíTeCreo;<sup>821</sup> o las denuncias de acoso sexual en el ámbito laboral de las actrices norteamericanas, que alentaron desde octubre de 2017 una oleada de testimonios de mujeres acosadas y abusadas sexualmente, utilizando el hashtag #MeToo.

Pero la reverberación de estos episodios de protesta, que les confiere su dimensión mundial, no sería posible si no existieran en cada país cientos de

mujeres, organizadas y autoconvocadas, que en los últimos años han profundizado y ensanchado las críticas feministas al modelo económico, político, social y cultural que nos ordena. En Chile, las movilizaciones estudiantiles de 2018 en torno a una educación no sexista abrieron la irrupción feminista más masiva desde la dictadura cívico-militar.<sup>822</sup> Pero no se puede comprender el “mayo feminista” sin atender a la historicidad de las luchas feministas y de mujeres, y a los movimientos sociales de la última década. Es ahí donde se han acumulado experiencias y forjado procesos de politización que entregan claves de lectura del estado actual del feminismo chileno, de sus logros y de sus desafíos.

Estas luchas se han fraguado en un contexto de neoliberalismo maduro,<sup>823</sup> resultado de la contrarrevolución o revolución capitalista llevada a cabo durante la dictadura, que introdujo cambios abruptos y profundos en el patrón de acumulación y en la sociedad, convirtiendo el modelo chileno en arquetipo del capitalismo neoliberal a nivel global. Este modelo no conllevó exclusivamente la restauración del orden económico previo a 1970, sino que consistió en “una profundización y extensión de la lógica de mercado a esferas antes no mercantiles de la vida social”.<sup>824</sup> Este proceso se concretó en las llamadas “siete modernizaciones”,<sup>825</sup> un conjunto de reformas estructurales aplicadas desde 1979 siguiendo los principios de los Chicago Boys, un grupo de economistas chilenos discípulos de Milton Friedman. Estos principios se resumen en disciplina fiscal, recortes del gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera, fijación de un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación y protección de los derechos de propiedad.

Desde 1990 los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, lejos de contravenir el modelo vigente, lo consolidaron y legitimaron, desde el ejercicio gubernamental tecnocrático, sustituyendo la política por la administración de lo dado, y asumiendo el carácter subsidiario del Estado, bajo una lógica de focalización del gasto público, convenientemente prisionera de la economía de mercado. Con esta política se habría intentado parchar las grietas de un modelo que, en términos macroeconómicos, se presentaba como un “milagro”, pero que escondía elevadísimos grados de explotación, índices crecientes de desigualdad y tasas insostenibles de endeudamiento de gran parte de la población.<sup>826</sup> De esta manera, hacia la primera década del siglo

, el carácter maduro del neoliberalismo, que ya habría consolidado todas las reformas estructurales, y la incapacidad del gobierno de dar respuesta a las acuciantes necesidades de la población en el ámbito de la vivienda, la salud, la educación, o la previsión social, entre otros, crearon las condiciones para la emergencia y rearticulación de movimientos sociales que desde sus ámbitos específicos fueron recuperando la retórica de los derechos sociales y apuntando, entonces, hacia una crítica sistémica y estructural al modelo consagrado en la Constitución de 1980.

Dicho esto, me interesa, particularmente, mostrar la historicidad del movimiento feminista<sup>827</sup> de la última década: reconstruir las articulaciones entre las expresiones actuales del feminismo y las luchas históricas que han dado las mujeres en periodos anteriores, así como su vinculación con las múltiples resistencias en diversas dimensiones de la vida. La genealogía femenina y/o feminista constituye una metodología feminista y una estrategia política que permite recuperar los legados de las mujeres e inscribir las luchas actuales en una historia larga de rebeldía y resistencia.<sup>828</sup> Este enfoque asume que es necesario historizar nuestra presencia en las luchas del pasado, visibilizar nuestros aportes a la construcción de la historia, reconocernos históricas.<sup>829</sup> Recuperar no solo la presencia de las mujeres o la saga de mujeres ilustres en el olvido, sino la trayectoria de las luchas por los derechos y libertades de las mujeres y su construcción como actrices políticas. Esta recuperación, en tanto ejercicio de memoria, como no puede ser de otra manera, no supone acceder a una herencia congelada, sino actualizar, presentificar, resignificar la historia. Es, por tanto, una herramienta política del movimiento feminista actual, un arma cargada de futuro.

No obstante, no desconocemos que rastrear la participación de las mujeres y sus contribuciones no se puede hacer si no es desde la discontinuidad y la fragmentación, porque las mujeres, en tanto que sujetas oprimidas, invisibilizadas y excluidas, han visto cómo el poder patriarcal ha prohibido, desvalorizado, destruido, despojado y reapropiado sus saberes y prácticas. La genealogía feminista no es un recuento cronológico de hechos del pasado, no sigue criterios de continuidad y progreso y no aspira a la linealidad. Por eso, este trabajo tiene la siguiente estructura: comenzamos examinando el “mayo feminista” del 2018; a continuación, desentrañamos las luchas feministas en el espacio estudiantil entre 2011 y 2017, y la acción de agrupaciones y redes de mujeres en el mismo periodo, que permite comprender el arraigo y la radicalidad de aquel hito de la historia del feminismo; finalmente, indagamos en las

consecuencias y proyecciones de la rebeldía feminista en la revuelta popular de 2019 y su devenir en el contexto de la crisis social y sanitaria a partir de 2020.

## EL “MAYO FEMINISTA”

En 2018 se desplegó en Chile una movilización feminista inédita.<sup>830</sup> La “tradicional” marcha del 8 de marzo había convocado a miles de mujeres contra la precarización de la vida, pero no permitía presagiar la irrupción de tomas en universidades y liceos que tendría lugar en los próximos meses. Este ciclo de protestas comenzó en Valdivia, en el sur del país, con la ocupación, el 17 de abril, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Austral. Diez días más tarde apareció tomada la vetusta y conservadora Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en pleno corazón de Santiago. A partir de ese momento las tomas y los paros proliferaron por distintas universidades, a la par que las asambleas y las marchas. Las estudiantes protestaban contra el encubrimiento, la indiligencia e indolencia de las autoridades universitarias frente a las denuncias de abuso y acoso sexual de profesores, funcionarios y compañeros. Ciertos casos “emblemáticos” cristalizaron las problemáticas, pero estas son profundas y transversales.

## TOMAS FEMINISTAS

La “toma” forma parte del repertorio de protesta chileno desde hace décadas, pero las tomas del 2018 son distintas: son feministas. Esta condición se expresa tanto en los contenidos de la lucha como en las formas de organización y movilización.

La toma irrumpe desde la urgencia, constituye una necesidad de las estudiantes para exigir medidas efectivas que las protejan en sus lugares de estudio; a su vez, habilita un espacio-tiempo que posibilita instancias de reflexión, autoformación, experimentación y articulación político-afectiva entre mujeres. No todas las tomas fueron separatistas, pero todas generaron espacios seguros de violencia



machista. La toma feminista prefigura un mundo alternativo, en el que las estudiantes ensayan formas de relación que contravienen la cultura sexista y patriarcal. La participación de los hombres, cuando se dio, se desplegó desde un lugar distinto al que han ocupado tradicionalmente: dejaron de ser los protagonistas de la palabra y la acción, y se encargaron de tareas de apoyo y mantenimiento de la toma, asumiendo funciones reproductivas como limpiar o cocinar, lo cual motivó la reflexión en torno a los roles de género, y animó a algunos estudiantes a activar círculos de masculinidades, para revisar y cuestionar sus privilegios.

Al calor de la movilización, las estudiantes ampliaron y profundizaron la comprensión de las múltiples violencias machistas y del carácter patriarcal de la educación, enarbolando la demanda por una educación no sexista. Esta fórmula recoge no solo aspectos relacionados con la incorporación de una perspectiva de género en el currículo o la capacitación de profesores y funcionarios en violencia de género, sino también la creación de una institucionalidad específica, centralizada, interdisciplinaria y con competencias efectivas para asumir los temas de género y sexualidades, así como medidas eficaces de protección, acompañamiento y reparación a las víctimas, que no estaban garantizadas por los protocolos de acoso vigentes. Las estudiantes cuestionaron toda la estructura universitaria, la política de financiamiento, la diferenciación sexista de las carreras a partir de lógicas mercantiles, las dinámicas de abuso de poder y la cultura de la violación, la débil triestamentalidad, la falta de democracia interna y el conjunto de las relaciones sociales dentro y fuera del aula. Por eso, en el proceso de interpelación y reflexión crítica, muchas estudiantes formularon una nueva consigna: “educación feminista”. Ese desplazamiento refleja la radicalización del movimiento, pasando desde lo que no quiere hacia lo que afirma.

## ASAMBLEAS DE MUJERES AUTOCONVOCADAS

La asamblea predomina en los movimientos sociales recientes. Conlleva una crítica a las formas de organización jerárquicas y burocráticas que han prevalecido también en las organizaciones tradicionales de la izquierda, incluso en las estudiantiles,<sup>831</sup> que no han estado exentas de situaciones de abuso y acoso

contra las militantes, y de una frecuente supeditación o marginación de las mujeres (y de las disidencias sexuales) y de sus planteamientos. Pero ni siquiera las asambleas son ajenas a la reproducción de las lógicas machistas y patriarcales, cuando no se pone una atención feminista en las prácticas, en los liderazgos, en las voces autorizadas para producir discurso. Por eso, en este caso, también las asambleas suponen una innovación política en clave feminista.

En las asambleas de mujeres autoconvocadas las estudiantes rompieron el silencio y un raudal de palabras entremezcladas con emociones fue describiendo las múltiples violencias vividas en la universidad, pero también en la calle, en las fiestas, en el transporte público y en casa, mostrando la continuidad de agresiones entre espacios “privados” y “públicos”. Se trata de un momento catártico, lleno de sentimientos encontrados.<sup>832</sup> Muchas de estas estudiantes tenían acercamientos previos al feminismo, pero la masividad de las tomas, de las asambleas y de las marchas<sup>833</sup> se explica porque la protesta fue capaz de autoconvocar a cientos de miles de estudiantes que, aun sin mayor conocimiento teórico sobre el patriarcado, el sexismo o la misoginia, reconocieron en sí mismas, en su propia experiencia, los muchos actos de vulneración e infravaloración cotidianos que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo. En ese proceso descubrieron en ellas una intuición feminista o reconocieron haber sido feministas sin saberlo, generando una identificación con el feminismo y activando procesos de concientización y de lucha.

Como sucedía en los “grupos de autoconciencia” del feminismo radical estadounidense de los años 70 del siglo pasado, las estudiantes, partiendo de sí mismas, lograron conectar su malestar, su incomodidad, su pena y su culpa con el de otras mujeres que han experimentado las mismas violencias, inscribiendo su experiencia personal en un relato social. Estas prácticas dialógicas, que forman parte de la trayectoria del feminismo, permiten a las mujeres nombrar las distintas formas de violencia machista, identificar sus emociones, tejer las resistencias y reconocer que lo personal es político; aunar sus vivencias a una rebeldía colectiva e iniciar un camino de deconstrucción. En este caso el término tiene pleno sentido porque, efectivamente, las mujeres debemos deshacernos de la mirada y voluntad patriarcal que nos ha construido genéricamente, para identificar aquello que queremos ser, para afirmarnos.

La participación de las estudiantes privilegió su condición de mujeres,<sup>834</sup> tratando de no constituirse ellas en correas de transmisión de lo decidido en otros espacios, sin negar por ello sus militancias y compromisos políticos. Ni los

partidos políticos ni las organizaciones tradicionales del movimiento estudiantil —centros de estudiantes, federaciones, Confederación de Estudiantes de Chile (

CONFECH

)— tuvieron centralidad política o capacidad dirigencial en esta movilización, lo que constituye una diferencia sustantiva con los movimientos estudiantiles anteriores, pero también con ciertas etapas del movimiento feminista.<sup>835</sup> Las estudiantes se articularon tejiendo amistades políticas —sororidad— más allá de las militancias o, más bien, poniendo la militancia feminista en primer lugar. De esa manera, rompieron con la jerarquía de las problemáticas y la subordinación de los “problemas de las mujeres” a los asuntos considerados plenamente políticos, demostrando que el feminismo no es solo un tema de mujeres, ni una cuestión secundaria, accesorio o sectorial.

Ya sea que podamos hablar de una “política feminista” o de una crítica radical a la política patriarcal, lo cierto es que las estudiantes desplegaron una actitud muy atenta, consciente, a las formas de construir los liderazgos y tejer las alianzas, y a los modos en que se producen decisiones políticas, se elaboran y transmiten los acuerdos y se respetan los disensos: de ahí la horizontalidad y descentralización de la organización, las vocerías colectivas y rotativas, la solidaridad y complicidad. Las prácticas corales y plásticas de las asambleas feministas conllevan una crítica explícita a la impronta patriarcal de las militancias partidistas y estudiantiles.

## MARCHAS Y PERFORMANCE

La marcha, que ha sido una de las expresiones típicas de las luchas sociales y políticas, adquiere con la rebeldía feminista connotaciones singulares: la performance se posiciona en el centro de la acción política callejera y los cuerpos se constituyen en una herramienta política de autoafirmación; las estudiantes lo usan como lienzo para expresar mensajes, para danzar, para incomodar. La imagen de la revuelta feminista es un grupo de mujeres con el torso desnudo y con la cara encapuchada. Los pechos al aire confrontan la cultura machista que combina el discurso mariano y familiarista con el consumo del cuerpo de las mujeres en cuanto objeto de deseo y goce de los hombres.

Cuando las propias mujeres exhiben su cuerpo y lo liberan de la sexualización y de la maternización, el desnudo se convierte en una afrenta.<sup>836</sup>

De otro lado, la capucha adquiere distintos significados: “Es una forma de defenderse ante la persecución política, pero existe un segundo elemento: la capucha es simbólica y nos ayuda a unificar y generar una cierta fuerza colectiva que nos hace sentir invencibles y protagónicas”.<sup>837</sup> La capucha deja de ser un pasamontañas negro o una camiseta que envuelve la cabeza improvisadamente y se convierte en un elemento artístico, personalizado, tejido y decorado por las propias mujeres, como componente identitario y de autorrepresentación, que despierta empatía y expresa un discurso colectivo: somos todas las mismas y esta lucha es por todas. Igual que hicieran las zapatistas en México, cubren su rostro para hacerse escuchar, para ser visibilizadas como actoras políticas.



*Fuente: Fotografía de José Aguilera.*

El “mayo feminista” rezuma determinación porque “es la culminación de un proceso y es la acumulación de un descontento que ya no daba más y explotó”.<sup>838</sup> Como resultado de años de politización al calor del movimiento estudiantil, las estudiantes despliegan un antagonismo avivado que se expresa en la afirmación de su autoría y protagonismo, desplazando a las mujeres desde su lugar de víctimas hacia su condición de actrices históricas: “Ya no somos víctimas, ya no vamos a pedirle a nadie que nos salve, ahora estamos en la posición activa de lucha y vamos a salir a pelear por lo que creemos que debemos tener”.<sup>839</sup> Su potencia radica en su masividad, en la capacidad de interpelar más allá de los muros de la universidad, develando los entramados que sostienen la desvalorización y discriminación de las mujeres y cómo se superponen múltiples violencias. El gran desafío sigue siendo la articulación, en la lucha, de las resistencias de las mujeres a las distintas opresiones que las someten.

Las protestas de 2018 han sido consideradas la “tercera ola feminista”.<sup>840</sup> El concepto de ola puede resultar engañoso, porque reduce la existencia del feminismo a los momentos de mayor visibilidad pública y a su dimensión disruptiva; sin embargo, las olas del movimiento feminista no pueden entenderse sin las mareas, sin el trabajo incesante, de largo aliento y profundas reverberaciones de muchas mujeres que han insistido en sus insubordinaciones. A continuación, presentamos algunas de las luchas que anteceden a la revuelta feminista de 2018 dentro y fuera del espacio universitario.<sup>841</sup>

## LAS LUCHAS FEMINISTAS EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO (2011-2017)

Las violencias machistas que relatan las estudiantes no son nuevas, pero los discursos sociales también son hechos históricos y requieren contextos propicios para su formulación y legitimación. Cada época establece “límites históricos de lo pensable y lo decible”.<sup>842</sup> Las estudiantes del 2018 pudieron atreverse a hablar

en voz alta, y su voz tuvo eco, porque los movimientos sociales chilenos han venido desplegando procesos de impugnación crecientes al modelo económico instalado durante la dictadura, y a la transición política que construyó una democracia insustancial, sin participación de los sectores populares y sin democratización social, abriendo un nuevo ciclo de protesta cuyo origen podríamos situar, abstrayéndonos de las limitaciones de las periodizaciones, en 2006 y con más claridad aún en 2011.

La consigna por una “Educación pública, gratuita y de calidad”, que enarboló el movimiento estudiantil ese año, traslucía la exigencia de que fuera el Estado el que se hiciera cargo de proporcionar educación, comprendiéndola como un derecho social y no como un bien de consumo. La fuerza de ese movimiento estribó en su capacidad de develar la lógica profunda que atraviesa la educación: el lucro. El carácter estructural del problema suponía una impugnación al modelo educativo heredado de la dictadura (“¡Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet!”), se convirtió en un grito típico en las marchas desde entonces) y permitía tender puentes de comprensión con lo que sucedía en otras áreas sociales, como la salud o la previsión social, también concebidas como nichos de mercado.<sup>843</sup> Pero en 2011 las discriminaciones de género no fueron una demanda del movimiento estudiantil. Las mujeres nutrieron las asambleas, participaron en las marchas y sostuvieron las tomas igual que sus compañeros; no obstante, siguieron ocupando roles “secundarios” en la dinámica de la protesta, pese al protagonismo de algunas dirigentes. Todavía eran vistas como mujeres excepcionales que conseguían jugar en una cancha delimitada por los varones; para hacerlo, debían masculinizarse.

No obstante, en ese momento de disputa abierta y ampliación de horizontes, tomó fuerza en algunos sectores la preocupación por la normalización y perpetuación de las opresiones hacia las mujeres (y disidencias sexuales) en los espacios educativos, y en 2012 cristalizaron en muchas universidades, vocalías y secretarías de género y sexualidad, que comenzaron a trabajar temas como los derechos sexuales y reproductivos, particularmente la interrupción del embarazo y la prevención del

## VIH

/Sida, y los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad

## LGBTQI

+ . Esas instancias emprendieron una labor de concientización y formación en género, sexualidad y disidencia sexual a través de distintas actividades, estableciendo vínculos en el ámbito universitario: “Muchas personas que vivieron violencia y tuvieron que ocultarla, porque nadie se atrevía a oírlas, se identificaron con la temática y empezaron a coordinarse, a generar redes sororas entre compañeras”.<sup>844</sup>

En 2014 levantaron, en conjunto con otras organizaciones estudiantiles y feministas, el Primer Congreso por una Educación No Sexista, cuyo propósito fue discutir sobre educación, disidencia sexual, género y trabajo, derechos reproductivos, experiencia del feminismo en el movimiento estudiantil y rol del feminismo en la política nacional y estudiantil. Este último punto es significativo porque las estudiantes constataron su preocupación al “ver que existen nociones, lógicas y prácticas machistas y patriarcales que se reproducen en espacios de movilización social”.<sup>845</sup> Uno de los logros del feminismo ha sido develar o desnaturalizar la masculinización de la política y las lógicas patriarcales que atraviesan a las organizaciones políticas. Se fue nutriendo así la crítica desde las estudiantes feministas a las dinámicas verticalistas, centralistas y dirigenciales de las militancias estudiantiles tradicionales.

En esos años, las vocalías, secretarías y organizaciones feministas continuaron la labor de concientización y de autoformación en torno al sexismo en la educación.<sup>846</sup> Se trata de un quehacer lento, silencioso y poco reconocido, un trabajo de hormiguitas, que fue generando complicidades y solidaridades entre quienes lo desplegaban: cientos de estudiantes se coordinaron en una lógica horizontal, sin elecciones, ni representantes, ni cargos fijos, y compartieron experiencias, aprendizajes, herramientas para “apañarse”.<sup>847</sup> Las estudiantes elaboraron teórica y políticamente la imbricación entre el sexismo en la educación, la división sexual del trabajo, la democracia y el financiamiento de la universidad, evidenciando el carácter estructural de la problemática. Estaban politizando el movimiento estudiantil en términos feministas y dotando de contenido la consigna por una educación “de calidad”.

Estas instancias habilitaron espacios seguros y empáticos para que se formularan los problemas. Fueron las vocalías y secretarías de género y sexualidades las que empezaron a recibir y canalizar las denuncias de acoso y abuso sexual de las estudiantes: “Nos obligó a buscar palabras para dotar de sentido a un acontecimiento que nos reveló eso que todos sabíamos que estaba ahí, enquistado en nuestra cotidianeidad, pero que habíamos sido incapaces, hasta ese



momento, de atacar políticamente”.<sup>848</sup> Enseguida se toparon con la desidia y banalización de las autoridades universitarias, lo que provocó que en 2016 se realizaran las primeras tomas con una motivación feminista.

Ese año la

CONFECH

creó una Comisión de Género para trabajar específicamente los temas de género y disidencia sexual, cuestión que muchas estudiantes venían exigiendo desde hacía tiempo. Su creación suponía un gran paso, pero los planteamientos feministas siguieron siendo un punto catalogado como “varios” en las reuniones y una cuestión menor en los petitorios de la

CONFECH

; por eso quienes trabajaban en la comisión se escindieron y crearon la Coordinadora Feminista Universitaria (

COFEU

) para impulsar de forma autónoma las propuestas feministas y profundizar la articulación entre universidades con el propósito de trabajar en común estrategias para erradicar la violencia sexual y la educación sexista en sus instituciones.<sup>849</sup>

Entre 2015 y 2017 las denuncias aumentaron sistemáticamente y las estudiantes constataron que estas no reflejaban casos aislados, sino una realidad permanente y sistemática, normalizada e invisibilizada. La respuesta de las autoridades universitarias fue lenta, desprolija, parcial y poco efectiva: la conclusión fue que las universidades carecían de mecanismos para enfrentar esas situaciones, de empatía y de voluntad política. La acción de las estudiantes se encauzó hacia la exigencia de protocolos o reglamentos que tipificaran y sancionaran el abuso y acoso sexual y la discriminación por razón de género. No obstante, el proceso de elaboración e implementación de estas normativas fue lento y muy diferenciado<sup>850</sup> y, por sobre todo, los protocolos tienen un carácter limitado: se centran en la sanción y no en la prevención, inducen a la revictimización y no consideran medidas efectivas de acompañamiento y protección a la víctima. Las estudiantes fueron elaborando una crítica profunda a la concepción punitivista que subyace a la idea del protocolo, que personaliza el problema en víctimas y

victimarios, y exorciza la pregunta por las condiciones estructurales que producen y toleran el acoso sexual y otras formas de sexismo en la educación.

## LAS MUJERES LUCHAN POR LA VIDA

Las protestas feministas del 2018 no se entienden sin el lento trajinar de jóvenes estudiantes que fueron tejiendo rebeldías. Tampoco se pueden comprender sin la labor pertinaz de cientos de mujeres, articuladas más allá del ámbito estudiantil en torno a algunas agrupaciones, redes y coordinadoras, que en los últimos lustros han reactivado, en clave antagonista, el feminismo, después de su oenegización<sup>851</sup> e institucionalización en la posdictadura.<sup>852</sup>

### “NO BASTAN LAS TRES CAUSALES”: “ABORTO LIBRE”

Una de las luchas más significativas del feminismo se ha librado en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, en particular, por el aborto libre. La interrupción voluntaria del embarazo fue uno de los asuntos que la oposición a la dictadura transó en las negociaciones de la transición chilena: pese a los esfuerzos de algunas feministas para reponer el aborto terapéutico, recién derogado en 1989, las iniciativas fueron sistemáticamente rechazadas.

Aunque existen ciertos hitos en años anteriores, como el debate en torno a la “píldora del día después” en 2008,<sup>853</sup> la batalla por la despenalización del aborto tomó fuerza en el ciclo de protestas que se abrió el 2011. En 2013, el caso de una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser abusada y violada por su padrastro durante años desató un intenso debate y motivó la primera marcha nacional por el aborto libre, que finalizó con una breve ocupación de la Catedral de Santiago. A partir de entonces, distintas organizaciones de mujeres y feministas, agrupaciones de derechos humanos, y colectivos por los derechos sexuales y reproductivos, se articularon para generar investigación y acciones a favor de la despenalización del aborto y del derecho a decidir de las mujeres, dando lugar en 2015 a la Mesa Social por el Aborto en Chile. Cada 25 de julio,

en la Marcha por el Aborto Libre, y cada 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, miles de mujeres salen a la calle para visibilizar la prohibición del aborto como una forma más de violencia machista, en tanto se priva a las mujeres de autonomía y de soberanía sobre sus cuerpos; y para defender que “la maternidad será deseada o no será”.

En esos años, el movimiento por el aborto libre fue creciendo, especialmente en los meses previos a la aprobación, en 2017, de la Ley de Interrupción del Embarazo en tres causales (riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación) tras acalorados debates en el Congreso y en la calle. Frente a las protestas de grupos conservadores antiabortistas, el movimiento feminista se movilizó expresando su apoyo crítico a la ley, enfocándose en sacarla adelante, pese a considerarla insuficiente.



*Fuente: Fotografía de José Aguilera.*

La Ley significa un paso importante en el camino por la despenalización total del aborto; no obstante, tropieza con dificultades, como la objeción de conciencia personal e institucional<sup>854</sup> que priva a muchas mujeres de acceso oportuno a este derecho. Con todo, la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales no satisface las exigencias de un movimiento feminista que busca que el aborto deje de ser considerado un delito por la legislación chilena y por la sociedad, y que no se culpabilice y criminalice a las mujeres que lo ejercen. A su vez, las feministas ponen de manifiesto la intersección de violencias que enfrentan las mujeres que arriesgan su vida o su integridad física y psíquica por abortar en la clandestinidad y la precariedad.

Por eso, para la mayoría del movimiento feminista, “no bastan las tres causales”. Ese fue el lema de la Marcha por el Aborto Libre de 2018, en plena revuelta feminista que, sin duda, insufló renovadas fuerzas a la batalla por la despenalización total del aborto, al vaivén de la Marea Verde argentina y de sus luchas por el aborto libre entre 2018 y 2020, cuando logró la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas. Este hecho constituyó un poderoso estímulo para las feministas chilenas, en un movimiento feminista que evidencia con más fuerza su carácter transfronterizo, aupado por símbolos y formas de lucha — como el “pañuelazo”—<sup>855</sup> que adquieren una dimensión internacional.

## VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y FEMICIDIOS

Junto con el aborto, la violencia hacia la mujer y, particularmente, el femicidio, fueron adquiriendo centralidad en el movimiento feminista de la última década. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una articulación de agrupaciones y mujeres que nació en 1990 desde una perspectiva feminista para erradicar la violencia hacia las mujeres.<sup>856</sup> Con material gráfico, estudios, libros, talleres e intervenciones, la Red despliega una labor de denuncia y sensibilización a lo largo del territorio nacional.

En 2006 lanzó la campaña “¡Cuidado! El machismo mata”, como una estrategia político-cultural para visibilizar y denunciar el femicidio, la violencia sexual y simbólica, estableciendo sus conexiones y develando los patrones de dominación patriarcal que les subyacen. Desde 2010 lleva un registro anual de los femicidios, que incluye los casos no calificados así por la justicia. El trabajo de registro, sistematización y reflexión de la Red ha permitido ampliar y densificar el concepto de violencia machista y, específicamente, de femicidio, al incluir los suicidios femicidas (es decir, cuando la víctima de violencia machista se quita la vida) y otros asesinatos cometidos por violencia femicida (como parricidios, violencia vicaria o muertes “colaterales” en contextos de violencia machista).

En 2011, en un contexto de eclosión de los movimientos sociales, liderados por el movimiento estudiantil, las integrantes de la Red advirtieron la ausencia de contenido de género en las reivindicaciones y levantaron la bandera de una “educación no sexista”, siendo tal vez la primera irrupción pública de la consigna:<sup>857</sup> “La Red incluyó el mensaje ‘Educación pública, laica y no sexista’, para expresar que la institución educacional es clave en la transmisión simbólica del androcentrismo en la sociedad y en la reproducción de la violencia contra las mujeres”.<sup>858</sup> A partir de entonces se abocaron a trabajar ese tema, conscientes de la importancia de la educación en el proceso de desnaturalización de la violencia machista en todas sus formas.<sup>859</sup>

Ese trabajo de reflexión contempló la realización de “seminarios con dirigentes de distintos movimientos y organizaciones sociales para reflexionar sobre la posición de las mujeres en esta movilización y conversatorios con mujeres estudiantes en universidades y liceos”<sup>860</sup> posibilitando espacios de encuentro entre generaciones y de articulación entre distintas agrupaciones feministas y políticas.

En la etapa final de estos debates, en 2013, algunas de las principales conclusiones fueron: desconocemos la historia de participación de las mujeres en Chile; estamos en una posición difícil en los espacios de la política tradicional y en los movimientos mixtos; y los intereses de las mujeres están ausentes en las demandas y discursos de los movimientos sociales.

Enseguida, la convicción fue que para hacer frente a esas dificultades era preciso reconocer la presencia de las mujeres en la historia, poblar nuestro imaginario con referentes —mujeres, acciones, proyectos— que nos afiancen, que nos muestren las huellas de otras para recorrer esa senda e ir más allá. Ese camino

las llevó a escribir el libro *Nunca más mujeres sin historia. Conversaciones feministas*, que lanzaron en abril de 2018, días antes de que irrumpiera el “mayo feminista”. A propósito del lanzamiento del libro, Sandra Palestro, integrante de la Red, comenta:

Como en los textos escolares están omitidas las mujeres, figuramos sin historicidad. Pareciera que no tenemos capacidad para hacer transformaciones en las sociedades, de producir hechos históricos. Lo que se refleja en los textos de estudio nos hace a las mujeres no tener un piso firme en el que apoyarnos cuando se trata de nuestra propia acción.<sup>861</sup>

En los últimos años la Red se ha enfocado en el concepto de “violencia estructural”, que señala el cruce entre patriarcado y capitalismo, porque el primero dispone un orden social cultural de subordinación de las mujeres necesario para la explotación por el capital de su trabajo reproductivo, de crianza y cuidados sin remuneración, y también de su trabajo remunerado, puesto que este es precario y, en comparación con los hombres, peor remunerado por trabajos de igual valor.<sup>862</sup> Por lo tanto, si bien la subordinación de la mujer tiene una historia que trasciende el nacimiento del capitalismo, el patriarcado adquiere características específicas con este, y ambos se retroalimentan: “¡Patriarcado y capital: alianza criminal!”, dicen las feministas chilenas. La trabazón entre la economía y la violencia machista constituye uno de los rasgos más reveladores del feminismo actual, que revitaliza la lucha de clases, ampliando y complejizando esa perspectiva, al poner en primer plano que la pelea de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos, y por su vida, es una lucha contra el dominio del capital.<sup>863</sup>

La marcha del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, o la del 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio, convocan cada vez a más mujeres. La declaración de este último fue promovida por la Coordinadora 19 de diciembre, espacio de articulación político-feminista impulsado por las madres, hijas y hermanas de las mujeres asesinadas o sobrevivientes de violencia femicida. La Coordinadora lucha contra la impunidad del Estado, que no protege a las mujeres ni garantiza justicia; y para que la sociedad no olvide esos crímenes, más allá de la cobertura que hace la

prensa normalmente ubicando estos casos en la crónica roja (“crímenes pasionales”). Su propósito es visibilizar el femicidio como el último eslabón de una cadena de violencias.

## MUJERES SOBREVIVIENTES DE LA DICTADURA

Las familiares de las mujeres asesinadas se han activado políticamente, transformando su dolor en lucha, como hicieron las familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos durante la dictadura, que dieron vida a las primeras agrupaciones de derechos humanos. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también realiza “velatones” y “caminatas silenciosas” para recordar a las víctimas y exigir justicia frente a la impunidad y el olvido; las mujeres portan en su pecho o en las manos carteles con la silueta de la mujer asesinada, donde se lee su nombre, edad, ciudad y cómo fue el crimen.

Todas estas acciones están conectadas en la memoria de las mujeres a las intervenciones del movimiento por los derechos humanos y suponen una actualización y recuperación de formas de lucha y tradiciones políticas:

Las madres, hijas y esposas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos nos anticiparon el camino, nos mostraron el camino, dejaron su huella y nos dejaron marcada la forma en cómo ellas pelearon frente a una dictadura indolente, implacable. [...] Felizmente, somos herederas de esa tremenda lucha, de esa tremenda causa.<sup>864</sup>

Mujeres por la Vida se llamó uno de los movimientos de mujeres que emergió en los años 80 del siglo pasado para defender la vida contra la cultura de la muerte, desplegando en su devenir una conciencia feminista, que exigió “Democracia en el país y en la casa”. Mujeres por la Vida llevó a cabo intervenciones con las consignas “No +” (fórmula que integra el repertorio simbólico de todos los movimientos sociales chilenos) y “La libertad tiene nombre de mujer”, cuyo propósito era poner en el centro la vida. La vida era entendida, en este caso,



como una existencia plena, en democracia y libertad, sin dominaciones de ningún tipo.

Las organizaciones de memoria y derechos humanos se han venido haciendo cargo de la deuda con la memoria de las mujeres, invisibilizadas también en la resistencia a la dictadura. Son cada vez más las iniciativas para recuperar la presencia y la acción de las mujeres que desde distintas trincheras se opusieron al terror estatal. Una de ellas consiste en un mural textil, titulado “¡Por ellas, por nosotras, ni perdón ni olvido!”, que se bordó por primera vez en 2018, y que relata la vida de muchas mujeres, luchadoras asesinadas y desaparecidas.<sup>865</sup> El mural crece a medida que más mujeres bordan la historia de otra mujer, reelaborando el pasado, hilvanándolo desde el presente, recordándolo:

Yo hablo de lo vívido porque yo siento que justamente la imagen que tenemos que traer de esas mujeres es la fuerza de su lucha, porque las ideas que ellas propulsaron siguen estando vigentes... estando vigente la lucha feminista, la lucha en las calles, ahora se nos viene octubre, nuestro despertar.<sup>866</sup>

Además de la recuperación de la memoria de las luchas desplegadas por las mujeres y de su participación protagónica en la resistencia contra la dictadura, tanto en el movimiento de mujeres, en las agrupaciones de

DDHH

, como en las organizaciones de sobrevivencia de los sectores populares, las mujeres militantes víctimas de tortura y de violencia política sexual<sup>867</sup> han venido impulsando desde hace años una lucha para que se reconozca la violencia política sexual como una forma de tortura. La violencia política sexual ha seguido estando presente a lo largo de los años, y se recrudece en contextos de protesta, cuando es ejercida para disciplinar a las personas, torturando sus cuerpos. Por eso, las feministas chilenas hicieron suya la consigna de las compañeras mexicanas: “¡Me cuidan mis amigas, no la policía!”.

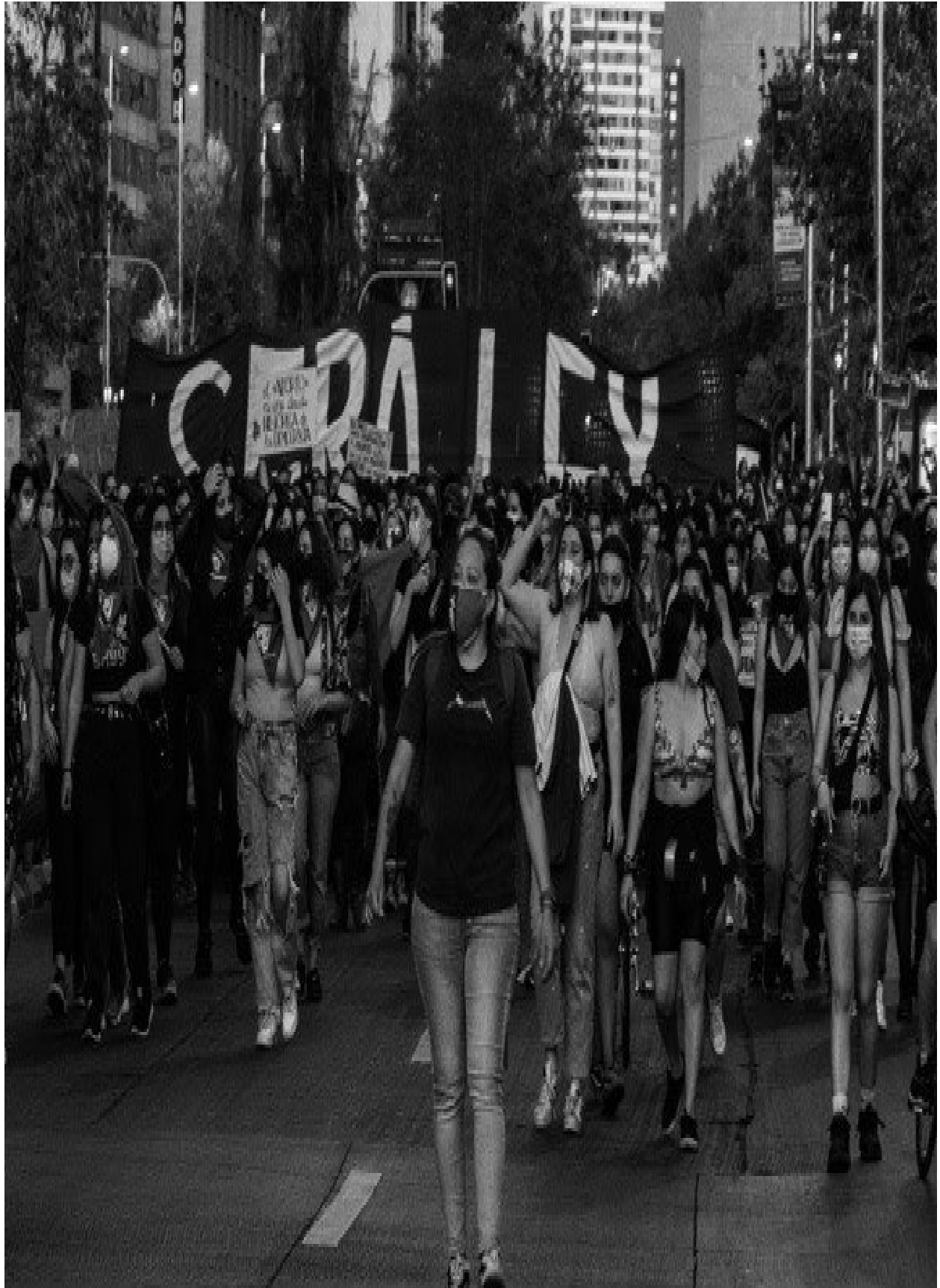
RESISTENCIA FEMINISTA EN TIEMPOS DE CRISIS SOCIAL, POLÍTICA

## Y SANITARIA (2019 y 2020)

El 8 de marzo de 2019 miles de mujeres marcharon en una nueva jornada, histórica, tanto por su masividad como por la inteligencia colectiva que el feminismo ha venido desplegando en las formas de lucha. Ese día, siguiendo la senda de las feministas argentinas, la Coordinadora Feminista 8M convocó la primera huelga general feminista en Chile,<sup>868</sup> cuyos preparativos comenzaron en el marco del

### I

Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, realizado en diciembre del año anterior. La revitalización de la huelga —forma de lucha histórica del movimiento obrero— en clave feminista, en un país donde la huelga ha venido reposicionándose dificultosamente en el repertorio de la lucha sindical,<sup>869</sup> supone una innovación política que muestra la radicalidad y potencia del feminismo.<sup>870</sup>



*Fuente: Fotografía José Aguilera.*

Las muchas y variadas formas de “parar”<sup>871</sup> permitieron abrir la discusión sobre qué es trabajo, cuáles son los trabajos esenciales para la producción y reproducción de la vida o por qué importa el trabajo de cuidados. La potencia política de la huelga feminista radica en que revive el antagonismo de las formas de organización y luchas obreras, anudando en el análisis y en la acción la lucha contra el capitalismo, en su fase neoliberal; el patriarcado y la colonialidad. Así, el feminismo avanza en posiciones anticapitalistas develando cómo la violencia machista se engarza con la precarización de la vida y el racismo. Esta forma de lucha trasluce un desplazamiento desde la centralidad de las mujeres en cuanto víctimas de violencia machista, hacia su consideración y valorización como sujetos centrales para el mantenimiento de la sociedad, afirmando a todas las mujeres como trabajadoras.

En ese contexto, en octubre de 2019 se produjo una revuelta popular que constituye un hito, por su masividad y radicalidad, en la historia reciente de Chile. Pero una lectura atenta de las mareas de los últimos años entrega claves de intelección de ese acontecimiento. El proceso de radicalización y ampliación de los feminismos es, definitivamente, un factor determinante de la revuelta popular, por la reactivación de espacios políticos que se sostienen en la organización autónoma, horizontal, flexible, plástica, en redes, coordinadoras, plataformas, y que impulsan una lógica de transversalización de las luchas.<sup>872</sup>

La mirada estructural de la profundidad del conflicto está alimentada, entre otras, por las propuestas feministas. A su vez, la revuelta empujó el proceso de radicalización y apertura de horizontes, en el cual un feminismo anticapitalista encontró terreno fértil. En ese cénit de imaginación política, la performance del colectivo Las Tesis, “Un violador en tu camino”, tuvo la capacidad de insuflar fuerza al movimiento feminista y a la propia revuelta. Una intervención repleta de simbolismos, comprensibles por cualquier mujer, dio pie a cientos de actos autoconvocados para representar esa coreografía como un grito de denuncia que a la vez generó complicidades y solidaridades entre las mujeres, reparando social y simbólicamente nuestras identidades vulneradas.

Las mujeres, como en todos los eventos de protesta, desempeñaron un papel relevante en los distintos actos de rebeldía. En la lucha callejera, como escuderas, para repeler los perdigones y balas de goma; como matalacris para “ahogar” las lacrimógenas; como rociadoras de líquidos para neutralizar el efecto de los gases; como rescatistas y brigadistas de primeros auxilios y observadoras de derechos humanos, entre otras labores. Y también en el proceso, que se desplegó a la par, de creación y fortalecimiento de espacios de organización como cabildos y asambleas territoriales, que dio vida a un entramado asociativo para dialogar y elaborar un diagnóstico compartido de la situación y poner en marcha iniciativas solidarias, como redes de abastecimiento, “ollas comunes”, talleres productivos, etc. Las mujeres populares históricamente han tenido una participación protagónica en este tipo de asociaciones comunitarias vinculadas con la resolución concreta de problemas acuciantes; y desde su precariedad material han construido formas de relación basadas en el apoyo mutuo y la confianza en la organización colectiva y la lucha como únicas fuerzas propias.

La jornada del 8 de marzo de 2020, con el empuje del “mayo feminista” y del “octubre chileno”, millones de mujeres marcharon en todo el país, dando lugar en Santiago a una de las marchas más grandes de la historia de Chile, confirmando la masividad que han alcanzado los feminismos.

Parecía que 2020 iba a depararnos un año de mucho activismo y presencia callejera, pero se cruzó la pandemia de covid-19. El gobierno usó la declaración del estado de excepción y las cuarentenas para contener la protesta social y política, que desde el 18 de octubre de 2019, y pese al acuerdo firmado por la clase política el 15 de noviembre de este mismo año, no se había detenido. Con la excusa para mantener a los militares en la calle, las restricciones de libertades y las medidas de aislamiento sanitario y confinamiento, hubo un vuelco “hacia dentro” de todos los movimientos sociales, solo paliado, en parte, por las facilidades para la comunicación virtual a través de las redes sociales.

La pandemia desveló y profundizó muchas de las inequidades y violencias que sufren ancestralmente las mujeres<sup>873</sup>. Las feministas saben que, para muchas mujeres, la casa no es el lugar seguro y acogedor que la moral conservadora proclama. La violencia machista se agravó en un contexto de encierro permanente, acorralando a muchas mujeres con sus agresores durante semanas y meses seguidos. También la posibilidad de acceder al aborto, no solo al legal bajo las tres causales, sino sobre todo al aborto libre, autogestionado, “con las

amigas y en la casa”,<sup>874</sup> se dificultó. Por eso, diversas organizaciones feministas activaron la campaña virtual “En red nos cuidamos”, un conjunto de herramientas feministas para hacer frente a la violencia patriarcal en cuarentena.

En ese contexto, regresó con fuerza el debate sobre el trabajo, que ya en los últimos años había erigido el feminismo a raíz de los llamados a paros y huelgas y de la discusión en torno a la precarización de la vida. De un lado, colapsaron los desmantelados y precarios servicios públicos, dificultando el acceso a la educación y a la salud. Esas funciones, esenciales para la vida, se concentraron en las casas, ampliando y complejizando el trabajo doméstico que, debido a los mandatos de género, recae fundamentalmente en las mujeres. El teletrabajo dejó en evidencia que, pese a la pretendida igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo formal, son ellas las que siguen haciéndose cargo fundamentalmente de las labores de reproducción y cuidados, asumiendo dobles y triples jornadas. En los sectores populares la pandemia agudizó la precariedad y la pobreza, al incrementar el desempleo formal e informal, que también afectó en mayor medida a las mujeres, por la dificultad de compatibilizar las labores domésticas con el trabajo fuera de casa. Todo ello se tradujo en un agravamiento de los problemas de acceso a la vivienda, y en el aumento de los campamentos y viviendas irregulares, lo cual tiene profundos impactos físicos y emocionales.<sup>875</sup>

Si las mujeres —y específicamente las mujeres pobres, las migrantes, las campesinas, las privadas de libertad— han sido las que han padecido, en mayor medida, los efectos de la pandemia y de la gestión deficiente del gobierno, también han sido las mujeres las que han estado en la “primera línea” de las estrategias de resistencia y autogestión para sostener la vida, poniendo en marcha y nutriendo iniciativas de economía popular para acceder colectivamente a los alimentos y bienes de primera necesidad y para hacer frente a los peores efectos de la pandemia. Por otro lado, han liderado actividades de comunicación popular, para difundir efectivamente las ideas del pueblo; redes de autocuidado y apoyo mutuo, en temas de salud física y mental; actividades de acompañamiento e intercambio solidario entre organizaciones para compartir aprendizajes y potenciar procesos de autoorganización. En definitiva, un sinnúmero de iniciativas desde las propias comunidades, bajo los principios de la autogestión y de la organización popular, porque “solo el pueblo ayuda al pueblo”, para resolver las necesidades más acuciantes y dinamizar procesos de fortalecimiento y acumulación de fuerza.

Este tipo de iniciativas forman parte de las tradiciones de lucha y resistencia y

habitan en la memoria del pueblo chileno; de ahí la rápida capacidad de respuesta. Esta se vio fortalecida por la activación de redes que se habían creado en muchos territorios durante la revuelta popular, a partir del renacer de organizaciones antiguas y del despertar de nuevas agrupaciones al calor de las protestas. Hoy, como ayer, las mujeres son las principales sostenedoras de estas formas de lucha y de organización, porque el trabajo territorial, comunitario, ha descansado en ellas, en su rol de dadoras de vida, cuidadoras.<sup>876</sup> Ellas son las portadoras, por el lugar que han ocupado, de esos saberes-haceres, y desde sus luchas cotidianas dan vida a una “economía feminista y solidaria”.<sup>877</sup> Así encarnan una ética del cuidado que, es una ética, más que femenina, feminista.<sup>878</sup>

## CONCLUSIONES

Es octubre de 1985. Las mujeres de distintas agrupaciones convocan una acción de protesta pacífica contra la dictadura militar, bajo el lema “Somos +”. Llevan inscrita esa leyenda en modestos trozos de papel pegados al pecho. Caminan en silencio, sin consignas, solo aplausos. En un momento, un “paco”<sup>879</sup> les exige que se disuelvan: “Están interrumpiendo la normalidad”. Una de las mujeres lo confronta: “La normalidad... a lo mejor habría que hacer algo con ella, no es tan normal”.<sup>880</sup> Las feministas siempre han buscado irrumpir y alterar la normalidad, porque en su caso lo normal ha sido sufrir todo tipo de violencias.

“Hoy como ayer, somos +”, dice la Coordinadora Feminista 8M. En la última década el feminismo ha traído al presente las voces históricas del movimiento, invocando y actualizando todo el contenido político y simbólico de las luchas feministas del pasado. Recuperar las huellas e indicios de las mujeres que nos han antecedido en la batalla contra la normalización de la subordinación de las mujeres es una parte fundamental de esta disputa por acabar con la dominación. Reconocernos en otras mujeres, en sus rebeldías e insubordinaciones, sabernos herederas de movimientos que se desplegaron pugnando por la democratización de las relaciones sociales, nos confiere una gran fuerza. Todos los proyectos emancipadores requieren construir una cultura política, compuesta de símbolos, referentes, tradiciones de lucha, que sostienen y nutren las luchas del presente. El movimiento feminista de la última década ha tomado plena conciencia de ello, empeñándose en reconstruir el pasado de las luchas de mujeres y

feministas, porque “nos afirman muchas mujeres”.<sup>881</sup>

A su vez, las mujeres saben que “las feministas no nacen, se hacen”;<sup>882</sup> por eso uno de los grandes desafíos del movimiento feminista actual es desplegar procesos de lucha desde la particularidad y diversidad que caracteriza a las distintas mujeres, articulando las múltiples resistencias a los agravios y violencias que viven, tejiendo puentes y densificando el feminismo y las luchas por la transformación radical de la sociedad, esto es, en un sentido anticapitalista y antipatriarcal.



## FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Agacino, Rafael, “Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet”, en Documento de trabajo,

CLACSO

, Buenos Aires, 2006.

Aguilera, Silvia, Navarrete, Beatriz y Bravo, Diana (coord.), Que todo el territorio se vuelva feminista. Las protagonistas de las tomas universitarias del 2018,

LOM

, Santiago, 2021.

Angenot, Marc, El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible, Siglo

XXI

, Buenos Aires, 2010.

Bell Hooks, El feminismo es para todo el mundo, Traficantes de Sueños, Madrid, 2017.

Bórquez, Blanca (ed.) Mujeres en tiempos de esperanza, crisis y pandemia, Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago, 2021.

Carpa de las Mujeres, Catastro plurinacional de experiencias de economía feminista y solidaria. La vida en el centro, 2021.

Follegati, Luna, “Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión”, en Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres Santiago, 2019.

Galindo, María, “Tiempo saboteado que nos toca vivir”, en La correa feminista, N° 16-17, Centro de Investigación y Capacitación de la Mujer, México, invierno-primavera de 1997.

Garcés, Mario, “La pandemia desde la perspectiva de las organizaciones sociales en Chile”, en Documento de Trabajo, Plataforma Mercosur Social Solidario,

ECO

Educación y Comunicaciones, y Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, 2021.

Gaudichaud, Franck, Las fisuras del neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflictos de clases, Quimantú y Tiempo Robado, Santiago, 2015.

Gilligan, Carol, “El daño moral y la ética del cuidado”, en Gilligan, Carol, La ética del cuidado, Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, 2013.

Kirkwood, Julieta, Feminarios, Ediciones Documentas, Santiago, 1987.

Marambio, Matías, “Acoso sexual universitario: agotamientos y avances del feminismo”, en La Raza Cómica, Revista de cultura y política latinoamericana, 2016.

Montes, Rocío, “Cubrirse el rostro para ser legión: el icono de la lucha feminista en Chile”, El País, 7 de marzo de 2020.

Muñoz, Ana Luisa; Follegati, Luna y Jackson, Liz, “Protocolos de acoso sexual en universidades chilenas: Una deuda pendiente”, en

*CEPPE*

*Policy Briefs*, N° 20,

CEPPE

uc, 2018.

Palestro, Sandra, “Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Construyendo una Historia por y para las Mujeres (editado por María Angélica Rodríguez)”, en Cal y Canto. Revista de Movimientos Sociales, Segunda Época, N° 5,

ECO

, Educación y Comunicaciones, 2019.

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Educación no sexista. Hacia una real transformación, Santiago, 2016.

, Nunca más mujeres sin historia, Santiago, 2018.

Restrepo, Alejandra, “La genealogía como método de investigación feminista”, en Blázquez, Norma y Castañeda, Martha Patricia (coord.), Lecturas críticas en investigación feminista, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016.

ReSeltas Feministas Populares, Historias y resistencias. Compartiendo saberes desde el feminismo popular, 2021.

“Mujeres insurrectas”, en Revista Anales, séptima serie, N° 14, Universidad de Chile, 2018.

Richard, Nelly, “La problemática del feminismo en los años de la transición en Chile”, en Mato, Daniel (coord.), Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2,

CLACSO

, Caracas, 2001.

Ríos, Marcela, Godoy, Lorena y Guerrero, Elizabeth, ¿Un nuevo silencio feminista? La transformación de un movimiento social en el Chile posdictadura,

CEM

/Cuarto Propio, Santiago, 2003.

Tiempo Robado editoras (comp. y ed.), La Huelga General Feminista ¡Va!  
Historias de un proceso en curso, Tiempo Robado editoras, Santiago, 2021.

VV.AA., Históricas. Movimientos feministas y de mujeres en Chile, 1850-2020,

LOM

, Santiago, 2021.

\* Socióloga, profesora adjunta de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso.

## **XV. LA LUCHA DE CALLES Y LA REVUELTA DE OCTUBRE DE 2019**

VIVIANA BRAVO VARGAS\*

CLAUDIO PÉREZ SILVA\*\*

En octubre de 2019 la atención nacional e internacional se concentró en las intensas protestas que se desarrollaban en Chile. El país que hasta hace poco era un ejemplo de éxito macroeconómico, donde el entonces presidente Sebastián Piñera podía jactarse de presidir “un oasis dentro de una América Latina convulsionada” proyectando su liderazgo en la región, ponía en jaque la continuidad del presidente en el gobierno e incluso amenazaba con ser “la tumba del neoliberalismo”. Hasta hace muy poco los ministros de turno podían humillar a la población sin temor, proponiéndoles comprar flores por estar más baratas que los productos de necesidad básica, sugerirles madrugar para pagar la tarifa económica en el transporte o hacer un bingo para financiar techumbres de escuelas que estaban a mal traer.

### **“EVADIR, NO PAGAR, OTRA FORMA DE LUCHAR”**

“Chile despertó” era la consigna que se leía en pancartas y repetía insistentemente la prensa. El paso inicial fue marcado por los y las estudiantes secundarios/as que llamaron a evadir el pago del metro santiaguino como repudio al alza del pasaje en 30 pesos: “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”, fue el grito que se escuchó. Una consigna que los secundarios ya levantaban como bandera de lucha en los años anteriores.<sup>883</sup> El 7 de octubre los estudiantes del Instituto Nacional lanzaron la primera convocatoria para realizar la acción de protesta en el metro Universidad de Chile. La evasión secundaria fue

extendiéndose en las diversas líneas adquiriendo masividad. El 16 de octubre, el presidente del metro de Santiago, Clemente Pérez, en televisión, ante los hechos recién ocurridos, les envió con desdén un mensaje que lo tendría bajo la constante burla los meses siguientes: “Cabros, esto no prendió”. La respuesta fue una contundente evasión en diversas estaciones que sumó a más personas y organizaciones.

La protesta fue aplaudida masivamente y acompañada con cacerolazos, barricadas, bailes y performances, marchas y diversos ataques, con fuego, piedras y rayados a los símbolos del poder económico y político, además de la quema de autobuses y estaciones del metro. Mucha tinta ha corrido desde entonces. Nos atreveríamos a afirmar que ha sido la revuelta más documentada, analizada, relatada y transmitida en la historia de Chile. Del mismo modo, por ser un fenómeno político social de gran relevancia, la revuelta ha sido objeto de numerosos estudios académicos, trabajos audiovisuales y testimoniales. Los libros que disputan sus sentidos se cuentan por decenas, los registros audiovisuales por cientos, lo que hace imposible dar cuenta aquí de cada uno de ellos. Considerando lo anterior, hemos privilegiado, en función de los objetivos y preocupaciones de este libro, concentrarnos en los trabajos académicos y las interpretaciones que podríamos considerar hegemónicas en el ámbito de las ciencias sociales.

Por una parte, están los estudios que ponen acento en las estructuras político-sociales-institucionales, por tanto, en las élites gobernantes, en los problemas del crecimiento y las expectativas económicas y en las subsecuentes incapacidades del régimen político para satisfacer las necesidades abiertas por el modelo, así como de garantizar la proyección intachable de este. Bajo esta mirada, la estructura político institucional no sería capaz de satisfacer o resolver las diversas demandas y problemáticas nacientes a partir del exitoso proceso de modernización capitalista. Desde estas concepciones, la anomia, las desigualdades, insatisfacciones y los desequilibrios del sistema abrieron las compuertas del malestar social que explotó vía “estallido social”.<sup>884</sup> No hay actores políticos ni sujetos sociales protagónicos, según esta interpretación, menos organización popular ni acumulación de fuerzas sociales y políticas en base a experiencias de lucha. Tampoco existen proyectos societales alternativos, ni ideologías capaces de imaginar-conformar una propuesta política de desarrollo diferente al hegemónico, en este caso el neoliberal. Como consecuencia, las acciones repentinas de protesta y las manifestaciones violentas desplegadas durante los meses de la revuelta son caracterizadas como irracionales, pasionales

(producto del malestar), delincuenciales y protagonizadas en su gran mayoría por sujetos que corren por fuera de los márgenes de la ciudadanía neoliberal.

En una dirección distinta, se encuentran los trabajos que relevan el papel de algunos actores sociales, ya sea de manera particular y hegemónica o como parte de un proceso de síntesis construido por estos y otros actores en un todo colectivo o bajo una gran identidad común (viejo y nuevo pueblo). Así, se destaca el papel de la juventud y los estudiantes secundarios o universitarios, las mujeres y el movimiento feminista, “la clase media” y su ciudadanía en torno al derecho y expansión del consumo, así como de las luchas medioambientales y el protagonismo de las regiones, entre otros.<sup>885</sup> De esta forma, el “octubre chileno” es producto de la conjunción heterogénea de sujetos que se expresan y articulan en un escenario de movilización de carácter nacional. La fuerza del denominado “estallido social” estaría por tanto en la configuración de un ambiente, una coyuntura o escenario común de luchas por parte de estos heterogéneos actores y en algún caso, pero con menos importancia, en la articulación de las distintas fuerzas-organizaciones sociales representativas de estos. A diferencia del bloque interpretativo anterior, en este se observa la expresión durante la revuelta de una diversidad de sujetos sociales protagónicos no anómicos, sino deliberantes, conscientes y con una identidad particular según sus demandas sectoriales antineoliberales o territoriales, pero con fuerza y voluntad casi inherente para constituirse en un solo gran bloque de acción: el pueblo.

Por último, identificamos un tercer bloque interpretativo. Aunque menos hegemónico en términos académicos o de impacto mediático, son estudios que provienen principalmente del campo historiográfico, cuyos autores, a través de la participación en foros y charlas, intervenciones en columnas de opinión, entrevistas, artículos y capítulos de libros, han puesto el acento en la construcción social y política de la protesta, así como en la dimensión histórica de esta. Lo anterior ha permitido no solo caracterizar el “octubre chileno” de 2019, sino además dotarlo de historicidad, identificar los actores protagónicos y los bloques en pugna, así como la respuesta estatal y de la clase dominante chilena.<sup>886</sup> Un aspecto importante a considerar en este bloque interpretativo es la definición de revuelta con la cual caracterizan el fenómeno que nos convoca, distanciándose de los conceptos de “estallido social”, espontaneidad, anomia e irracionalidad, entre otros. Bajo este marco, han centrado su preocupación en las distintas variables sociales, políticas, económicas, ideológicas, culturales, nacionales y globales dentro de las cuales se inscribe la revuelta, a objeto de inscribir y calibrar el papel de los distintos actores participantes en ella, las



numerosas formas de organización y las diversas luchas o manifestaciones de protesta desarrolladas por estos. De igual modo, y como parte de la misma dinámica de la revuelta, analizan las tensiones al interior del bloque en el poder, entre los distintos grupos empresariales, el gobierno y las Fuerzas Armadas, la lógica represiva del Estado y la salida política al conflicto patrocinada por los actores políticos representativos del neoliberalismo chileno. Por último, al analizar el comportamiento de las clases sociales y la trayectoria histórica de la protesta, inscriben la revuelta de octubre de 2019 en un marco temporal más amplio y como parte o momento más álgido de un ciclo histórico de luchas antineoliberales y anticapitalistas.

Nuestra reflexión se inscribe dentro de este último grupo de estudios, compartiendo tanto la caracterización de revuelta popular como el relevamiento de la confrontación de clases que se desarrolló durante esta. De igual modo, sostenemos que gran parte de los actores protagónicos de la revuelta, así como la diversidad de manifestaciones desplegadas, ya contaban con importantes experiencias de lucha, preconfigurando así, al menos desde el punto de vista de los contenidos y las formas de organización y de lucha, al denominado “octubre chileno”. Lo anterior nos permite situar el desarrollo de la revuelta dentro de un ciclo histórico de conflictividad social y político más amplio, en una dinámica de luchas antineoliberales, que comenzaron con fuerza al menos desde mediados de los años 2000.

IMAGEN 1: Plaza Dignidad, Santiago



*Fuente: Fotografía de José Aguilera.*

Como se ha señalado en este libro, en las últimas dos décadas se desarrollaron importantes luchas sectoriales y territoriales a lo largo de todo Chile: de estudiantes secundarios y universitarios; de miles de mujeres; luchas medioambientales y antiextractivistas; del mundo de los trabajadores, así como de pueblos y comunidades. En todas ellas, es posible identificar elementos y reivindicaciones antineoliberales, que tienen como trasfondo principal la lucha contra la precarización de la vida y el predominio de las lógicas de mercado en aspectos fundamentales de la vida, como fue el caso de las movilizaciones nacionales desarrolladas, de forma persistente y con miles de chilenas y chilenos en las calles, en contra del sistema de pensiones impuesto en dictadura y perfeccionado por los gobiernos civiles de los últimos 30 años.

El ciclo histórico al cual hacemos alusión y del cual la revuelta es, hasta ahora, su momento más radical y masivo, tiene como punto de partida las combativas luchas de los trabajadores subcontractados de la minería, los puertos, las salmoneras y las empresas forestales, quienes subvirtieron las restrictivas formas de organización impuestas por el entramado institucional neoliberal. Asimismo, son parte del mismo ciclo dos importantes luchas de carácter nacional. Por un lado, las desarrolladas por un amplio movimiento estudiantil universitario y secundario en contra del lucro en la educación y por una educación gratuita y de calidad. Por otro, las imponentes movilizaciones impulsadas por el movimiento feminista durante el año 2018 a favor de una educación no sexista y en contra del patriarcado.

Aunque desarrolladas en espacios geográficos dispersos y no centrales desde el punto de vista político-institucional, inscribimos igualmente las numerosas movilizaciones y los enfrentamientos desatados por comunidades en diversas regiones del país en contra del modelo extractivista. En cada uno de estos territorios se presentaron elementos relevantes, como la unidad de acción y de síntesis reivindicativo-programática por parte de distintos actores sociales componentes de cada localidad, tales fueron los casos de Aysén (cuotas de pesca y las batallas territoriales contra la represión), Freirina (demandas por calidad de vida y contra la contaminación de aguas y aire por parte del holding Agrosuper),

que lograron sublevar poblados como Huasco, Freirina y Vallenar, o la zona de Quintero y los recurrentes episodios de protesta por la asignación de “zona de sacrificio”. También el caso de Chiloé en 2016.

Las movilizaciones señaladas más arriba, tanto desde el punto de vista organizativo como de la emergencia y protagonismo de distintos actores sociales, del proceso de levantamiento de reivindicaciones y desarrollo de variadas formas de protesta, dejaron, en el entramado del movimiento popular, una multiplicidad de articulaciones sociales y políticas. Igualmente, se desarrollaron importantes experiencias organizativas a nivel de base territorial y sectorial, las cuales se transversalizaron en términos de capacidades de lucha dentro del movimiento popular de nuestro país. Estas múltiples experiencias y articulaciones no se esfumaron una vez terminados los conflictos parciales o sectoriales, se conformaron como prácticas comunes y base material de acumulación de fuerzas para las disputas venideras. Por tanto, la revuelta popular de octubre de 2019 se nutre de un intenso proceso de movilización y de formación de demandas y fuerzas sociales, experiencias organizativas y de luchas populares que comenzaron a expresarse con nitidez desde al menos el año 2006 en adelante.

Del mismo modo, es posible destacar dentro de estas dinámicas de lucha antineoliberales la construcción de una temprana red de apoyo y solidaridad entre los distintos actores protagónicos de la conflictividad social. Los conflictos territoriales o sectoriales, así como los medioambientales y de trabajadores y estudiantes, por ejemplo, permitieron el acercamiento entre distintos escenarios y actores movilizados, la articulación de demandas o reivindicaciones y el aprendizaje de experiencias organizativas y de luchas. Muchas de las redes de solidaridad dieron paso a coordinadoras zonales, encuentros regionales y nacionales para el levantamiento de demandas centrales. Fue el caso de las luchas medioambientales, estudiantiles y las heterogéneas organizaciones que se conjugaron en el movimiento No más AFP para poner fin al régimen de pensiones. En estos dos últimos casos, las redes y la articulación social y política lograron traspasar las luchas sectoriales y convertirlas en dinámicas nacionales de conflicto, con un entramado de organizaciones sociales, gremiales y de trabajadores, apoyando dichas demandas. En este sentido, lo que queremos resaltar es que, al momento de producirse la revuelta de octubre de 2019, ya se habían desarrollado por parte de las diversas expresiones del movimiento popular cientos de encuentros regionales y nacionales de organizaciones sociales y de trabajadores y, más importante aún, la articulación y el establecimiento de

numerosas demandas sectoriales.

Estos aspectos son fundamentales a nuestro juicio, ya que nos permiten identificar la existencia de una temprana articulación de fuerzas sociales y políticas en función de demandas ampliamente conocidas y legitimadas en la población, como en el caso de la salud, la educación, la vivienda y la lucha por las pensiones dignas. Dicha articulación por demandas específicas y el desarrollo de solidaridades por parte de diversos actores posibilitaron la emergencia de amplias y transversales sensibilidades, la formación de un sentido común y la construcción de un importante entramado político y social antineoliberal. Esta dinámica explica en parte la dinámica que asumió la revuelta en cuanto a masividad, reproducción y legitimidad de formas de lucha, difusión, desarrollo de organizaciones a nivel local, ocupación rápida de calles principales y espacios públicos, así como el levantamiento de demandas de carácter nacional.

Desde el punto de vista de los actores de la revuelta y las formas de lucha desarrolladas durante esta, identificamos un importante hilo conductor de arranque y empuje en sus orígenes. Nace de la propia experiencia y de los múltiples procesos vividos durante el ciclo de movilizaciones descrito más arriba. Generaciones de estudiantes secundarios vivieron sus primeros procesos de politización entre tomas de colegios, marchas, asambleas, levantamiento de barricadas y enfrentamientos con las fuerzas represivas. Miles de estudiantes aprendieron el proceso de transformar necesidades en demandas, levantaron petitorios, identificaron problemas y sus responsables, pero también propusieron salidas y se dotaron de numerosas formas organizativas. Las asambleas y la lucha callejera fueron los principales escenarios de politización. Lograron mirar más allá de su propio espacio de conflicto y se articularon en zonales. Del mismo modo, desarrollaron encuentros metropolitanos y nacionales donde consiguieron poner el problema de la educación como una de las demandas más importantes de la sociedad chilena. Es justamente este sector numeroso y dinámico de la población, que con los años se desenvuelve como estudiante universitario o en centros de formación técnico-profesional, que vive la experiencia del trabajo precarizado y el endeudamiento cotidiano, o como poblador hacinado o sin vivienda, el que se salta el torniquete y arroja la primera piedra de la revuelta. Es en estas generaciones de luchadores donde se puede rastrear la intensidad y capacidad expansiva de la movilización inicial de aquel 18 de octubre, pero por sobre todo se puede explicar su temprana identificación, aceptación y legitimidad.

## “NO SON 30 PESOS, SON 30 AÑOS”

Pero no era la primera vez que una sociedad agobiada parecía despertar del letargo. No era la primera vez que las mayorías silenciosas irrumpían en el espacio público provocando pavor en los sectores dominantes. Lo hemos demostrado en este libro, otros escalofríos recorrieron a la clase dominante en el siglo XIX y XX y provocaron crisis sociales y políticas de diversas dimensiones. Generaron cambios, quizás imperceptibles para algunos, pero después de estos movimientos nada sería lo mismo. Hubo flujos y reflujos, pero lo duradero fue la experiencia colectiva, una sedimentación histórica que ha conformado la trayectoria de la protesta social chilena.

Pensar y analizar las revueltas populares en un arco histórico nos permite observar la racionalidad de estas luchas en un contexto mayor, dando cuenta de las rupturas, continuidades y de las sedimentaciones que las impulsan. En tanto, como hemos sostenido, las marchas, huelgas y revueltas han sido parte de nuestra historia, una escuela política viva, presente en los modos del comportamiento rebelde, que se observa, aprende, socializa y transmite en el transcurso del tiempo. Esa sedimentación se concreta en forma de experiencia colectiva y la observamos en el proceso histórico que denominamos “lucha de calles”, es decir, la expresión urbana de la lucha de clases definida por las formas de confrontación, ocupación del espacio, movilización, organización y articulación, distintivas del proceso antagónico que se suscita al interior de la sociedad urbana en el marco del desarrollo del capitalismo.<sup>887</sup>

En efecto, la revuelta de octubre se desarrolla en un contexto de agotamiento, tanto político, económico y social del neoliberalismo criollo, así como de ofensiva del Estado y los gremios empresariales en contra de la clase trabajadora, de pueblos y comunidades para enfrentar la grave crisis global del capitalismo en curso. En ella, una infinidad de formas de lucha expresaron a viva voz un límite colectivo, una línea demarcatoria de hasta dónde se está dispuesto a soportar el agravio y la humillación. Una línea trazada por la conciencia del carácter que adquiere la existencia social y económica cotidiana bajo el neoliberalismo. Es cuando el problema individual logra convertirse en agravio colectivo.

La rebelión popular en primer lugar consiguió conquistar las calles y los espacios públicos. El espacio colectivo fue recorrido con marchas, concentraciones, pronunciamientos a viva voz, cánticos, consignas. Quizás el símbolo más visible fue la ocupación permanente de Plaza Baquedano, ahora renombrada Plaza Dignidad. No había ocurrido antes una ocupación política tan prolongada y masiva de un lugar de esas características: punto neurálgico capitalino, frontera de una ciudad segregada, lugar de paso recurrente. Otras plazas y otras esquinas del gran Santiago comenzaron a agitarse con el debate, los encuentros y el paso al frente de la confrontación. Pero las fronteras capitalinas se traspasaron y desde el día 19 de octubre la revuelta se extendió por el país. Ciudades y pequeños poblados registraban marchas y concentraciones. En especial los enfrentamientos tuvieron en constante agitación a las ciudades de Valparaíso, San Antonio, Coquimbo, La Serena, Antofagasta, Concepción, Valdivia, Temuco, Osorno y Puerto Montt.

La llamada “primera línea” fue una importante protagonista durante los meses en que se extendió la lucha de calles. Se trataba de un gran contingente de jóvenes encapuchados/as que se enfrentaba con carabineros en lugares estratégicos. Algunos portaban escudos, hondas, piedras y bombas molotov, otros se encargaban de picar el pavimento para abastecer a los lanzadores, había quienes cargaban recipientes para apagar las lacrimógenas o rociaban líquidos para apaciguar el efecto de estas. Su actuación —dentro de una lógica de autodefensa— permitía que otro gran contingente, mucho más masivo, pudiese concentrarse y protestar. Junto a ellos destacaba el cada vez más numeroso grupo de socorristas que atendía a los heridos en puestos de primeros auxilios autoorganizados en las calles aledañas.

IMAGEN 2: Primera línea en calle Alameda con Corvalán, Santiago





*Fotografía de Mauricio González Kowal.*

En esas calles, los muros, soporte masivo de comunicación popular, expresaban un claro mensaje al transeúnte: “No son 30 pesos, son 30 años”, “Chile será la tumba del neoliberalismo”, también se popularizó el acrónimo ACAB, entre otros.<sup>888</sup> Algunos mensajes hechos al pasar con spray, otros en forma mucho más elaborada, conformando verdaderas galerías artísticas en la ciudad, pero en todos convergía la experiencia histórica de los rayados con alquitrán de los años 40, la brocha gorda de las brigadas muralistas que pintaron los muros en la lucha de calles durante el periodo de la Unidad Popular y los murales clandestinos en contra de la dictadura. Hoy se expresaban también otras técnicas plásticas, con las que aportaron las nuevas generaciones para ganar espacio en la disputa pública que se proyectaba en las paredes.

La disputa a la reproducción del orden cuestionó las voces del mando y sus discursos. Desde ese momento también cambiaron los sonidos de la ciudad. Un golpeteo de percusión en rejas, paraderos y cacerolas (tá-tá tatatá) marcó aunadamente el tiempo de la confrontación. Tal como otras complicidades lo hicieron en la década de 1980 bajo la consigna “¡Y va a caer!”, en alusión a la dictadura del general Augusto Pinochet, los sonidos de la revuelta comenzaron a multiplicarse entre palmas, gritos, bromas y risas. “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara se amplificó desde los balcones de los edificios junto al “Baile de los que sobran” de Los Prisioneros, y un nutrido cancionero popular comenzó a reproducirse a pasos agigantados.<sup>889</sup> La música parecía articular los sonidos que diversas generaciones entonaron en su protesta y rebeldía, ya fuese con las guitarras que se agruparon fuera de la Biblioteca Nacional en Santiago o por los metales que resoplaron en las avenidas de Antofagasta, la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso y Plaza Dignidad.

Junto a los sonidos de la revuelta comenzaron a percibirse prontamente los del control del orden público: helicópteros que sobrevolaban a diversas horas, sonidos de disparos de lacrimógenas, balas, balines, sirenas. También gritos, insultos y advertencias. Vinieron las declaraciones y exhortaciones en cadena nacional. El presidente Piñera no dudó en promulgar la noche del 18 de octubre el estado de emergencia, toque de queda y la militarización del país. “Estamos en

Guerra” fue su justificación días más tarde. El enemigo era poderoso e implacable y no se descartaba un complot extranjero. También se anunció un proyecto para la suspensión del alza del metro, pero a esa altura de poco servía para enfriar los ánimos de la protesta, ya que la revuelta se había extendido por gran parte de Chile convirtiéndose en un problema político con demandas de carácter nacional. La presencia de los militares en las calles enardeció los ánimos. No fueron pocos quienes evocaron los peores tiempos de la dictadura. Sin duda, un duro golpe para una sociedad que aún no terminaba de cerrar heridas en torno a los atentados a los derechos humanos durante ese periodo.

Al igual que las mujeres del carbón que tomaron las cacerolas para protestar contra la represión de Gabriel González Videla en 1948, y como lo hicieron quienes protestaban en las Jornadas Nacionales de Protesta desde 1983, se activó un intenso caceroleo convocado desde las 21 hrs. Entonces se aunó más aún el descontento. Junto al sonido destelló el fuego. Ya en la noche del 18 de octubre se reportaban diversas barricadas en Santiago, sobre todo alrededor de las estaciones de metro, que fueron cada vez más beligerantes en los días y noches siguientes, sin importar la presencia de los militares. Las fogatas también fueron punto de reunión y de complicidad, la complicidad rebelde que se genera en esos intensos y breves momentos de la lucha de calles en que el reloj parece suspenderse, las jerarquías invertirse y la historia reescribirse.

Comenzó a saberse de diversas estaciones que estaban siendo incendiadas o destruidas, de torniquetes rotos por aquellos que se negaban a pagar, ventanales quebrados, cajas de pago arrasadas. Finalmente, las autoridades reportaron en los siguientes días 20 estaciones del metro incendiadas y 77 con algún tipo de impacto.<sup>890</sup> El transporte público había estado en el foco del ajuste de cuentas. Así fue en la revuelta de los tranvías en 1888 como nos recordó Igor Goicovic, en la Revuelta de la chaucha en 1949 y en la llamada Batalla de Santiago en 1957, relatada por Viviana Bravo en este libro. También en otras protestas, como la del 2 y 3 de julio de 1986, como mostró Claudio Pérez. Como vemos, una forma de protesta inscrita en la trayectoria de la protesta social chilena.

Automotoras fueron destruidas e incendiadas, mientras sus vehículos eran utilizados como pertrechos para las barricadas. Al igual que locales de comida rápida y otros establecimientos comerciales. La furia parecía concentrarse en esos símbolos del poder económico. Además, los saqueos masivos se habían extendido. Más de 300 supermercados, 90 farmacias, hoteles, junto a bodegas de otras empresas acusaban haber sido dañados o incendiados.<sup>891</sup> El problema

principal para el control del orden público no era tan solo la gran cantidad de focos, sino que eran acompañados masivamente por manifestantes que participaban activamente o que celebraban las acciones desde sus balcones o esquinas, y que estaban dispuestos a enfrentar con piedras, palos, bombas molotov e insultos a fuerzas militares o de carabineros.

Se encendió el debate cotidiano. Los y las vecinas recuperaron la capacidad discursiva, estando a favor o en contra de la protesta, justificando o criticando los hechos al interior de almuerzos familiares, lugares de trabajo y paradas de transporte público. Otra vez resonaba ese intenso debate político que caracterizaba a la sociedad chilena del siglo XX, fortalecido a través de redes, organizaciones, asambleas y recorridos callejeros. Unos celebraron la politización social que volvía a experimentarse, otros hicieron el énfasis en la polarización que sufría el país. Dependía de la óptica, pero ambas miradas referían al proceso de confrontación de ideas que se experimentaba desde octubre, y que alineaba a unos y otros.

La criminalización de la protesta fue la tónica de las vocerías de gobierno, intentando aislar y dividir la manifestación entre los clásicos binomios pacífico-violento/legítimo-ilegítimo. Entonces se convocó por redes sociales a la llamada “marcha más grande de Chile” para el viernes 25 de octubre. Fue así como un mar de gente, contabilizada en un millón de personas, copó las calles de Santiago, principalmente la extensión de la Alameda, en una impresionante concentración, que fue capturada por la prensa nacional e internacional. Mismo fenómeno podía observarse en otras ciudades del país, como la gran marcha realizada desde Viña del Mar a Valparaíso.

La estatua del general Baquedano que se levantaba en Plaza Dignidad fue pintada con consignas, colores y carteles. Se repartían sus esquinas hinchas de equipos de fútbol rivales que parecían posponer sus diferencias por una causa colectiva: “Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver”, cantaban entre banderas, fuegos artificiales y lienzos tan comunes en los estadios. Para incredulidad de muchos/as, las autoridades a través de sus redes sociales se sumaron al festejo, lo que pareció una burla o al menos un intento de poner punto final a la revuelta. Celebraron en sus intervenciones lo pacífico, lo unitario, lo imponente de la marcha. Sebastián Piñera anunció que ya habían entendido el mensaje y anunció un cambio de gabinete. En tanto, Karla Rubilar, entonces intendenta de Santiago publicó: “Chile hoy vive una jornada histórica. La Región Metropolitana es protagonista de una pacífica marcha de cerca de un

millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país”.<sup>892</sup>

“Esto no ha terminado”, fue la consigna que circuló para reunirse nuevamente el lunes 28 de octubre en Plaza Bulnes, frente a La Moneda. Al parecer quedaban bastantes energías movilizadoras, a pesar de que solo hasta el 28 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizaba más de 1.132 heridos, 127 personas con heridas oculares, además de 3.535 detenidos<sup>893</sup>. También eran evidentes los diversos esfuerzos políticos y comunicacionales por parte del gobierno por retomar y comandar un espacio público en orden y en silencio.

IMAGEN 3: Intervención contra la mutilación ocular, Plaza Dignidad, Santiago



*Fuente: Fotografía de José Aguilera.*

La del día 28 terminó siendo una de las jornadas más confrontacionales de la revuelta<sup>894</sup> y se extendió desde las 14 hrs hasta pasada la medianoche. Unos se reunieron en Plaza Bulnes y otros en Plaza Dignidad, no obstante, a poco andar ambos contingentes fueron reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros. Los manifestantes se replegaron hacia calles adyacentes, para luego volver a insistir en marchar por la Alameda. Los enfrentamientos se disgregaron a través de distintos tramos de la avenida. En el sector de Santa Rosa un incendio arrasó con varios locales comerciales. Detallaba una crónica periodística: “el edificio de una tienda de ropa Fashion Park, un local de comida rápida, una clínica y un hotel, que Bomberos logró controlar (...) En la vereda de enfrente, los manifestantes incendiaron el acceso a la estación del metro Santa Lucía”.<sup>895</sup> En tanto, en el sector de Plaza Bulnes, la furia hacia edificios burocráticos las emprendía en contra de las oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el de la SEREMI de Salud, que fueron afectados por saqueos y amagos de incendio.

Como en tantas otras jornadas de la revuelta, la primera línea se enfrentaba con piedras, hondas y molotov en la intersección de Carabineros de Chile con la Alameda. En tanto, en Plaza Dignidad, la Orquesta Sinfónica de Chile junto a los músicos Nano Stern y Roberto Márquez interpretaban “El pueblo unido jamás será vencido” y se registraban diversas expresiones artísticas de protesta en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral. Además, barricadas y fogatas en diversas intersecciones de la Alameda ardían durante largas horas.

Un importante aspecto por destacar dice relación con la heterogeneidad de la protesta y de los rostros que la protagonizaron. Ancianos, niñas y niños, jóvenes, mujeres, trabajadoras y trabajadores, pobladores, sectores medios, a lo largo de todo el país, llenaron con pancartas las principales arterias de cada ciudad. Con instrumentos musicales y disfraces, algunos cortaron calles con el “que baila pasa”, obligando a los conductores que se topaban con el corte a bajarse e improvisar un baile o diversas intervenciones artísticas, mientras otros levantaban enormes barricadas con materiales obtenidos de los saqueos a locales comerciales o instituciones públicas.

A diferencia de las luchas desarrolladas durante el mismo ciclo de conflictividad que hemos descrito, incluso las que adquirieron dimensión nacional (como la estudiantil y el movimiento NO + AFP), bajo la revuelta popular de 2019 coexistió la protesta permanente y la masividad en gran parte del país. Cada plaza o calle principal se transformó durante días en zona de tránsito del descontento y de enfrentamientos entre cuerpos de carabineros y manifestantes. Las plazas se transformaron en espacios de politización, con ello se enriquecieron las discusiones en los cabildos y asambleas populares, alimentando con contenidos y elementos programáticos-proyectuales a la revuelta. Al mismo tiempo, producto del ejercicio deliberativo, la revuelta logró dotarse de una amplia legitimidad social y política en los territorios.

En otro sentido, a través de distintos medios de comunicación era posible evidenciar el nivel de radicalidad que asumía la protesta desplegada durante esos días, incluso en ciudades y localidades que habían tenido cierta pasividad en las movilizaciones anteriores: supermercados saqueados y quemados, instituciones financieras, símbolos patrios y estatuas destruidas en las ciudades de Arica, Iquique, La Serena, Concepción, Temuco y Valdivia. Las instituciones públicas también fueron objeto de la furia desatada durante esas jornadas, símbolos de la desigualdad y el centralismo, de la indiferencia y de la represión, se convirtieron en blanco predilecto de la protesta: servicios de salud, oficinas del Registro Civil y peajes quemados, municipalidades destruidas y comisarías atacadas en distintas partes del país entregan un panorama totalmente distinto al de las denominadas manifestaciones ciudadanas y pacíficas. Según la prensa, a casi un mes de iniciadas las movilizaciones, los supermercados saqueados a nivel nacional eran alrededor de 1.200.<sup>896</sup>

### “NOS UNIMOS, NOS CANSAMOS”

Otro aspecto para tener en cuenta en el estudio de la revuelta dice relación con los procesos de articulación político social y de luchas ascendentes logradas durante esta. Este punto es de gran relevancia, ya que permite explicar la trayectoria de la revuelta, considerando en ello no solo la irrupción de las movilizaciones populares en todo el país —es decir, mirarla desde abajo—, sino además considerar las respuestas de la clase dominante, el Estado y los distintos

bloques políticos opositores con representación parlamentaria, incluidos, por cierto, aquellos defensores del neoliberalismo integrados en los partidos de la ex Concertación.

Como vimos, la revuelta arrancó inicialmente de forma desarticulada y con protagonismo de los estudiantes secundarios. No obstante, esta logró rápidamente expandirse y masificarse por todo el país, convirtiéndose en un par de días en un problema y una movilización de carácter nacional.<sup>897</sup> Lo interesante de este proceso ascendente de luchas —que, como dijimos, fue parcial en un comienzo en cuanto a actores y espacios— es que pudo sumar rápidamente a las distintas fuerzas sociales que de forma paralela e imbricada venían desarrollando importantes luchas de carácter antineoliberal, fundamentalmente en contra de la ofensiva empresarial por profundizar las lógicas de mercado, las cuales golpeaban fuertemente a pueblos, comunidades, clase trabajadora y sectores medios en general. Es en este particular escenario donde se incorporó a las diversas formas de lucha desarrolladas hasta ese momento durante la revuelta, una tradicional e histórica herramienta de manifestación por parte de la clase trabajadora: la huelga general.

Esa jornada de movilización convocada para el 12 de noviembre se levantó en torno a demandas ampliamente reconocidas y legitimadas dentro de población movilizada: pensiones dignas y fin a las AFP, sueldo mínimo de 500.000 pesos, derechos sociales garantizados, como educación, salud y vivienda, nacionalización de recursos naturales y una Asamblea Constituyente para terminar con el entramado político, ideológico, institucional del pinochetismo y el neoliberalismo. Fue convocada por el Bloque Sindical de Unidad Social, que agrupaba a las más significativas organizaciones de trabajadores, como las de la minería, los puertos, industria, construcción, salud, empleados públicos, profesores, el comercio y los sectores financieros, energía, transporte, más el movimiento feminista y sus expresiones orgánicas y centenares de organizaciones sociales, como los movimientos NO + AFP, estudiantil, de pobladores, medioambientales y territoriales, convirtiéndose en la huelga general más importante del país desde el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986 desarrollado en contra de la dictadura.

Del mismo modo, fue donde se plasmó la mayor articulación político social a nivel nacional, transversalidad y síntesis de contenidos y demandas, participación de actores, masividad y combatividad. A la tradicional participación de los trabajadores públicos en estas jornadas de movilización, se



sumaron importantes sectores laborales y productivos estratégicos, como el sector minero, de transportes y portuario. Colegios y universidades, que en su gran mayoría se encontraban cerradas producto de la revuelta, aumentaron el ausentismo laboral y la sensación de paralización. En la madrugada, se desarrollaron a lo largo de todo el territorio nacional cortes de rutas en puertos, centros mineros y accesos principales a ciudades, y cientos de barricadas se levantaron en arterias centrales y de gran concurrencia de público. Desde el mediodía, se desarrollaron marchas masivas en Santiago y todas las regiones del país con los subsecuentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y donde nuevamente la represión se hizo sentir crudamente sobre los manifestantes. En la tarde noche, hubo asambleas populares, actividades artísticas culturales, caceroleos, levantamiento de barricadas, saqueos a locales comerciales e instituciones públicas y privadas, ataques a cuarteles policiales y control de algunos territorios.

El éxito y significado de la convocatoria a huelga general se debe a dos grandes factores. Por una parte, a los impulsos anímicos, subjetivos y políticos, provocados dentro del propio movimiento sindical a partir de la intensidad de la revuelta, la legitimidad de las demandas y las persistentes jornadas de lucha desarrolladas en todo el país durante semanas, las cuales, además, tuvieron como respuesta concreta por parte del gobierno una intensificación de la represión y una “agenda social” que seguía beneficiando al gran empresariado a través del subsidio estatal. El proceso anterior generó las condiciones y el escenario político favorable para el incremento de los procesos de unidad de las fuerzas sindicales y para que las expresiones más representativas del movimiento de trabajadores a nivel nacional asumiesen el protagonismo de la convocatoria ante las escasas respuestas del gobierno.

En segundo lugar, y como lo hemos venido señalando, si bien la revuelta de octubre no apareció de la nada para las dinámicas del movimiento popular chileno, sí lo hizo para las élites y las clases dominantes, que como dijeron: “no lo vieron venir”. Del mismo modo, y al igual que el movimiento estudiantil secundario, dichas articulaciones y experiencias de lucha, pusieron a prueba diversos escenarios y dinámicas de conflictividad social antes de la revuelta de octubre. Por ejemplo, en una jornada de movilización convocada por Unidad Social para el día 5 de septiembre de 2019, bajo la consigna “Nos unimos, nos cansamos”, ya era posible identificar al menos una unidad importante de demandas de carácter antineoliberal y de rechazo a las políticas implementadas por los gobiernos civiles.

A pesar de que esta convocatoria, al igual que las desarrolladas hasta antes de la revuelta, tuvo una adhesión menor y no pasó del levantamiento de barricadas durante la mañana por parte de organizaciones sociales y territoriales, así como de las tradicionales marchas por las calles principales de las ciudades regionales, al menos generó una estructura político social previa a la revuelta, con redes a nivel local, regional y nacional y con una transversalidad de actores presentes.

La dinámica anterior es fundamental para entender la rápida instalación y alineamiento de estos sectores sociales en torno al desarrollo, la profundización y proyecciones políticas de la revuelta. Esto, como dijimos, se expresó en aquella convocatoria a huelga general para el 12 de noviembre, la cual se transformó no solo en la huelga más importante de la transición a la democracia, sino en un punto de inflexión en la revuelta popular, de la trayectoria del gobierno de Sebastián Piñera y del régimen político chileno naciente desde el fin de la dictadura.<sup>898</sup>

En este marco, la radicalidad y el éxito de la huelga general, así como el protagonismo asumido por Unidad Social y las proyecciones de nuevas paralizaciones nacionales, apuraron los esfuerzos unitarios de salida a la crisis por parte de los grupos empresariales y los tradicionales bloques representativos de los 30 años de gobiernos de profundización neoliberal. Esto se tradujo en el denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, el que tuvo como efecto de corto y mediano plazo un importante respiro tanto para el deslegitimado gobierno de Sebastián Piñera como para el desprestigiado Parlamento chileno. Igualmente permitió la emergencia de viejas lógicas y nuevos liderazgos al interior de los sectores de oposición, los cuales privilegiaron las salidas por arriba, echando mano a una larga tradición de la clase dominante para reconfigurarse, mediante el establecimiento de grandes acuerdos nacionales para salir, entre otras cosas, de la grave crisis política, social e institucional abierta por la revuelta.

Considerando lo anterior, el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre significó reconocer las debilidades y agotamiento político del modelo neoliberal, así como la necesidad de construcción de nuevos consensos estratégicos con la inclusión de sectores antineoliberales instalados en el Parlamento. Para ello, se debía recuperar en primera instancia el orden y la denominada “normalidad social” trastocada por la revuelta. La coyuntura abierta por el “Acuerdo por la Paz” implicó, desde que se inauguraron las protestas del 18 de octubre en adelante, el inicio de la pérdida de protagonismo de aquellos sectores que continuaban con la

movilización callejera y apostaban por convertir a Chile “en la tumba del neoliberalismo”. Por ello, el acuerdo no vino solo de restricciones y resignificaciones políticas (Convención Constituyente en lugar de Asamblea Constituyente y amarres, como un quorum de tres tercios para la aprobación de normas), sino, además, se hizo acompañar y resguardar de una serie de nuevos dispositivos represivos, patrocinados por un gobierno y una de las instituciones estatales más cuestionadas durante los últimos años: el Parlamento. Así, leyes antisaqueos, antibarricadas, anticapuchas, más la presencia por otros medios de las Fuerzas Armadas en el escenario político nacional, a través de la defensa de la “infraestructura crítica”, se convirtieron en los mecanismos represivos que acompañaron el nuevo ciclo político.

IMAGEN 4: Primera noche de toque de queda en Santiago



*Fuente: Fotografía de Mauricio González Kowal.*

Otra parte importante hizo en este proceso el inicio de la pandemia y las medidas que tendieron a reforzar las salidas individuales a la crisis, como los retiros de los fondos de AFP, lo cual también permitió resituar y revalidar políticamente al Parlamento. Igualmente, podemos sumar la serie de mecanismos y dispositivos de control político militar-sanitario llevados adelante por el Estado y el gobierno de Sebastián Piñera para combatir, ya no “al enemigo poderoso e implacable” de la revuelta, sino al virus mortal del covid.

De esta manera, los diversos escenarios de protestas y las dinámicas de movilización desarrollados durante la revuelta dejaron de ser los espacios de deliberación y politización. Perdieron centralidad los cabildos y las asambleas territoriales y volvieron con más fuerza los profesionales de la política y los acuerdos entre cuatro paredes.

Como dijimos, la revuelta de octubre condensó parte de la experiencia de lucha de más de una década. De igual modo, incorporó importantes cambios en las formas de lucha y de organización popular. El conflicto se desarrolló a lo largo de todo el territorio nacional, en las principales ciudades y pueblos del país y contó además con una importante solidaridad internacional. La intensa y larga duración de la protesta popular violenta, la ocupación de espacios públicos por semanas y meses es otro aspecto singular para destacar. Los escenarios de la protesta y la revuelta se ampliaron notablemente. Asambleas populares, cabildos, encuentros de comunidades permitieron enraizar la movilización, diversificar los escenarios y las dinámicas de politización de miles de chilenos y chilenas. Por su parte, durante la revuelta, las reivindicaciones sectoriales se encontraron en un todo y adquirieron una dimensión global, transformándose principalmente en una gran demanda democrática y antineoliberal.

Otro aspecto importante a destacar es el proceso de legitimación de la violencia que se produjo durante su desarrollo. Las formas de protesta violenta se masificaron y legitimaron por todo Chile. Se articularon (y no solo convivieron) viejísimas y tradicionales formas de lucha desplegadas por la clase trabajadora y el pueblo, como cacerolazos, ocupación de plazas y calles, intervenciones

artísticas y culturales, marchas y autodefensa de masas, destrucción e incendio de locomoción colectiva, paraderos, mobiliario público y privado, levantamiento de barricadas, saqueos y ataques a comisarías. Pero también se produjo (como novedad) la destrucción e incendio de estaciones de metro e irrumpió con fuerza la destrucción de estatuas y la ocupación de espacios con su respectiva resignificación política, simbólica y valórica, como Plaza Dignidad.

Sin embargo, a pesar de los aspectos destacados en cuanto a masividad, radicalidad, extensión territorial y articulación política social, esta también mostraba sus propias debilidades y limitaciones, al igual que las dinámicas del movimiento popular. Las propuestas pragmáticas-proyectuales y los niveles de imbricación de fuerzas antineoliberales, aunque existentes, eran aún débiles, sobre todo en cuanto a capacidad para responder políticamente a los desafíos, demandas y problemas abiertos por la revuelta, entre ellos la solicitud de renuncia de Sebastián Piñera, la exigencia de una Asamblea Constituyente y el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. ¿Cuál era la alternativa frente a la renuncia de Piñera? ¿Qué fuerzas sociales y políticas asumirían la conducción del proceso de cambios que reclamaba la sociedad chilena? ¿Con qué herramientas enfrentarían la ofensiva política de los gremios empresariales y los partidos representativos del neoliberalismo chileno? ¿Hasta dónde llevar la revuelta, cuáles eran sus objetivos inmediatos y de mediano plazo? Por último, ¿con qué fuerza se sostenían, proyectaban y defendían las conquistas logradas? Son preguntas que en más de algún caso no fueron planteadas o que, cuando fueron discutidas por aquellos sectores sociales que protagonizaron la revuelta, tampoco encontraron respuestas. Dicha debilidad estructural dejó sin perspectivas políticas y, por tanto, sin posibilidad de maniobra, conducción y proyección a las numerosas y heterogéneas fuerzas sociales que confluyeron en torno a la revuelta. En otro sentido, la inexistencia de una expresión política aglutinadora a nivel nacional, capaz de conformarse como alternativa de las diversas vertientes sociales y orgánicas del movimiento popular, imposibilitó la conjunción de una fuerza político-social con potencialidades no solo para sobrevivir a la represión, sino para proyectarse más allá de la huelga general del 12 de noviembre y, particularmente, para enfrentar y sortear la salida a la crisis patrocinada desde el Parlamento con el llamado Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución.

Así como la Revuelta de la chaucha en 1949, que reanimó al movimiento sindical que posteriormente dio paso a la formación de la CUT en 1953; la Batalla de Santiago de 1957 que aceleró el proceso de construcción programática

de la izquierda chilena y el surgimiento del “allendismo”; o la rebelión popular que puso en jaque a Pinochet entre 1983 y 1986 y abrió el camino para la transición pactada, la revuelta popular de octubre de 2019 permitió la apertura de un importante ciclo político, en donde el hito más significativo hasta ahora es la posibilidad de una nueva Constitución política que deje atrás el entramado neoliberal.

Si bien el proceso abierto sigue en curso al igual que las discusiones en torno a los derroteros que deben seguir las propuestas transformadoras, lo que está claro es que en gran parte de las jornadas de movilización y protestas desarrolladas durante la llamada Revuelta popular de octubre es posible observar la articulación histórica de diversas tradiciones políticas de lucha. Prácticas construidas al alero de numerosas marchas, huelgas y revueltas; aprendizajes en torno a victorias y cruentas derrotas; transmisiones que circulan de boca en boca y de calle en calle, generación tras generación. Experiencias que nutren la historia de la clase trabajadora y el pueblo chileno durante su larga marcha en contra de las diversas secuelas del desarrollo del capitalismo y sus numerosas reconfiguraciones (oligárquico, desarrollista y neoliberal). Del mismo modo, la potencia y dinamismo de la revuelta permitió la emergencia de nuevas formas de convocatoria y organización, de nuevos espacios y tipos de enfrentamientos, enriqueciendo con ello el inagotable proceso de sedimentación de experiencias y prácticas de lucha de calles.

## BIBLIOGRAFÍA

Alé, Sol; Duarte, Klaudio y Miranda, Daniel (eds.), Saltar el torniquete. Reflexiones desde las juventudes de octubre, FCE, Santiago, 2021.

Bengoa, José, La comunidad sublevada. Ensayos y crónicas, Catalonia, Santiago, 2021.

Bravo, Viviana, “Lucha de calles en Santiago de Chile: Reflexiones en torno a la protesta popular (1946-2019)”, en Santibáñez, Camilo y Thielemann, Luis (eds.), Revueltas. Disturbios y lucha de clases en la metrópolis. Chile siglos XX-XXI, América en Movimiento, Valparaíso, 2021.

Garcés, Mario, Estallido social y una nueva constitución para Chile, LOM, Santiago, 2020.

Goicovic, Igor, “El 18 de octubre y el ejercicio de la violencia política popular”, en Gómez, Juan Carlos (ed.), ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre de 2019?

Gómez Leyton, Juan Carlos (ed.), ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre de 2019?, CIPPSAL, Santiago, 2020.

Grau, Olga, Follegati, Luna y Aguilera, Silvia (coords.), Escrituras feministas en la revuelta, LOM, Santiago, 2020.

Grez, Sergio, “Rebelión popular y proceso constituyente en Chile”, en Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre, Universidad de Chile, Santiago, 2019.

Mayol, Alberto, Big Bang. Estallido social 2019, Catalonia, Santiago, 2019.

Molina, Raúl, Hablan los muros, LOM, Santiago, 2020.

Osorio, Sebastián y Velásquez, Diego, “El poder sindical en el ‘Estallido social’ chileno. La huelga general de noviembre de 2019”, en Revista Española de



Sociología, N° 31, España, 2022.

Peña, Carlos, Pensar el malestar. La crisis de octubre y la cuestión constitucional, Taurus, 2020.

y Silva, Patricio (ed.), La revuelta de octubre en Chile. Orígenes y consecuencias, FCE, Santiago, 2021.

Ponce, David (ed.), Se oía venir. Cómo la música advirtió la protesta social en Chile, Cuaderno y Pauta, Santiago, 2019.

Ponce, José Ignacio, Revuelta popular. Cuando la nueva clase trabajadora se tomó las calles, Chile 2019, América en Movimiento, Santiago, 2020.

Ruiz E., Carlos, Octubre chileno, Taurus, Santiago, 2020.

Ugalde, Benjamín; Schwember, Felipe y Verbal, Valentina (eds.), El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad, Ediciones Democracia y Libertad, Santiago, 2020.

[\\* Académica Licenciatura en Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Este texto forma parte del proyecto](#)

FONDECYT-ANID

N°11180315 “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo. Santiago y Valparaíso 1947-1963”.

[\\*\\* Académico Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.](#)

<sup>1</sup> [De Ramón, Armando, Santiago de Chile. Historia de una sociedad urbana. Catalonia, Santiago, 2007.](#)

<sup>2</sup> [Moulian, Tomás, Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende \(1938-1973\).](#)

LOM

, Santiago, 2006.

<sup>3</sup> [Borón, Atilio, “Notas sobre las raíces histórico-estructurales de la movilización política en Chile”, en Foro Internacional](#)

XVI

, México, 1 jul.-sep., 1975.

<sup>4</sup> [Bravo Vargas, Viviana, “Chile no va hoy a la fábrica: Protesta obrera y represión política en el verano de 1946”, en Izquierdas,](#)

IDEA-USACH

, N° 35, septiembre 2017.

<sup>5</sup> [Las experiencias frustradas de las revoluciones liberales de 1851 y 1859, así como la derrota del proyecto democrático burgués encarnado en la Sociedad de la Igualdad \(1849-1851\) ponen de manifiesto el carácter estéril del proyecto](#)

liberal decimonónico.

<sup>6</sup> Las propuestas liberales de reforma política se encuentran en el texto publicado en 1850 por los diputados liberales José Victorino Lastarria y Federico Errázuriz Zañartu. Ver, Lastarria, José y Errázuriz, Federico, Bases de la reforma, Imprenta del Progreso, Santiago de Chile, 1850. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8206.html>

<sup>7</sup> El motín del 20 de abril de 1851 fue ampliamente descrito por uno de sus protagonistas, Benjamín Vicuña Mackenna. Ver al respecto, Vicuña Mackenna, Benjamín, Historia de la jornada del 20 de abril de 1851, Imprenta del Centro Editorial, Santiago de Chile, 1878, pp. 606-667. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-341608.html>

<sup>8</sup> Fernández, Joaquín, “Las guerras civiles en Chile”, en Iván Jaksic (ed.), Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo 1: Prácticas políticas, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2017, pp. 57-58. Uno de los episodios que releva el tensionamiento político de la época fue el motín urbano que se verificó en Santiago el 28 y 29 de marzo de 1858 y que fuera liderado por dirigentes conservadores. En este motín, la turba demandó elecciones de parlamentarios transparentes e informadas, pero en el transcurso de las manifestaciones, saqueó establecimientos comerciales, se enfrentó con la policía y provocó destrozos en el equipamiento urbano. Ver al respecto, Salinas, René, “Espacio urbano y revueltas populares. El motín de Santiago de 1858”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 7, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 2003, pp. 13-39.

<sup>9</sup> Fernández, Joaquín, “Guerra, militarización y caudillismo en el norte chileno: El caso de Copiapó en la guerra civil de 1859”, en Economía y Política, 2: 2,

Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, 2015, pp. 44-45.

<sup>10</sup> La estructura sobre la cual operó el movimiento insurgente fue el de las redes clientelares que construyeron las familias notables de la región.

<sup>11</sup> Fernández, Joaquín, “Guerra, militarización”, op. cit., p. 42.

<sup>12</sup> Faúndez, Julio, Democratización, desarrollo y legalidad. Chile, 1831-1973, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2011, pp. 52-54.

<sup>13</sup> Las reivindicaciones políticas del liberalismo se encuentran contenidas en un documento publicado en 1868. Ver, Lastarria, José, La reforma política, única salvación de la república. La semecracia o el gobierno de sí mismo, Imprenta de la Libertad, Santiago de Chile, 1868. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8205.html>

<sup>14</sup> Los debates, y posteriores reformas, se centraron en la reducción del periodo presidencial y la limitación de las facultades extraordinarias del Presidente. También se modificó la organización y composición del Congreso Nacional y se estableció el voto universal masculino, para aquellos varones que supieran leer y escribir.

<sup>15</sup> Entre otros autores ver, para el caso del Perú, Contreras, Carlos y Cueto, Marcos, Historia del Perú contemporáneo, Instituto de Estudios Peruanos, Lima,

[2007, pp. 162-169, y Klarén, Peter, Nación y sociedad en la historia del Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004, pp. 233-242. Para el caso de Bolivia ver, Mesa, José; Gisbert, Teresa y Mesa, Carlos, Historia de Bolivia, Editorial Gisbert, La Paz, 1999, pp. 429-446, y Querejazu, Roberto, Guano, salitre, sangre. Historia de la Guerra del Pacífico \(La participación de Bolivia\), Librería Editorial](#)

GUM

, La Paz, 2004, pp. 101-194.

[16 Hacia 1885, prácticamente 1/3 de la población en Chile \(29,2%\) sabía leer y escribir. Una proporción bastante alta para el contexto general de América Latina. Ver, Chile, Sexto censo general de la población de Chile, Oficina Central de Estadísticas, Santiago de Chile, 1885, p. 850. La expulsión de chilenos desde Bolivia y Perú, y la confiscación de sus bienes, decretada por los gobiernos de Hilarión Daza y de Mariano Prado, se encuentra analizada en Barros Arana, Diego, Historia de la Guerra del Pacífico \(1879-1880\), Tomo](#)

I

, Librería central de Servat, Santiago de Chile, 1880, pp. 65-66 y 77-79. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-87044.html>. El “ánimo de venganza” de los chilenos expulsados o maltratados en Perú y Bolivia, fue descrito por Vicuña Mackenna, Benjamín, Historia de la campaña de Tarapacá. Desde la ocupación de Antofagasta hasta la proclamación de la dictadura en el Perú, vol. 2, Rafael Jover Editor, Santiago de Chile, 1880, pp. 615-616. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-87047.html>

[17 Vicuña Mackenna, Benjamín, Historia de la campaña, op. cit., vol. 2, pp. 50-51. Las deserciones se incrementaron durante la campaña de la breña, entre 1881 y 1883.](#)

<sup>18</sup> Sater, William, Tragedia andina. La lucha en la Guerra del Pacífico, 1879-1884,

LOM

Ediciones, Santiago de Chile, 2018, pp. 123-126.

<sup>19</sup> Bulnes, Gonzalo, Guerra del Pacífico. De Tarapacá a Lima, vol. 2, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 1914, p. 178. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8076.html>

<sup>20</sup> La ejecución de los enemigos que se rendían fue una práctica habitual en ambos bandos. Así como los prisioneros peruanos fueron asesinados por las tropas chilenas en Miraflores, los soldados chilenos cautivos en la aldea de La Concepción también fueron ejecutados. Ver Sater, William, Tragedia andina, op. cit., pp. 122-123. También existen relatos de violaciones y mutilaciones de mujeres cautivas, tanto peruanas como chilenas. Ver, Larraín, Paz, Presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, Universidad Gabriela Mistral – Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2006, pp. 63-64.

<sup>21</sup> En la localidad de Mollendo, ubicada a 950 kilómetros al sur de Lima, las tropas chilenas que ocuparon la ciudad entre el 9 y el 12 de marzo de 1880, se apropiaron de los expendios de alcohol, se emborracharon y procedieron a saquear casas y comercios, para luego incendiar la oficina de aduanas y la iglesia. Tras el reembarque de la tropa, cerca de un centenar de soldados desertaron, se constituyeron como montonera y continuaron asolando la región. Ver, Bulnes, Gonzalo, Guerra del Pacífico, op. cit., vol. 2, pp. 149-151.

<sup>22</sup> Pinto, Jorge, La formación del Estado y la nación y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión,

DIBAM

, Santiago de Chile, 2003, pp. 185-207.

<sup>23</sup> Pinto, José Manuel, Memoria del general en jefe de operaciones de la alta frontera pasada al Supremo Gobierno, Imprenta Nacional, Santiago de Chile, 1869, pp. 28-29. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7805.html>. Una postura similar sostenía en el Congreso Nacional el tribuno liberal Benjamín Vicuña Mackenna, quien indicaba que para “civilizar a las tribus bárbaras” era necesario “reducirlos y someterlos”. Ver, Vicuña Mackenna, Benjamín, La conquista de Arauco. Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados en su sesión de 10 de agosto, Imprenta del Ferrocarril, Santiago de Chile, 1868, p. 7. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7806.html>

<sup>24</sup> El plan de ocupación entregado al gobierno por Cornelio Saavedra contemplaba: “1° en avanzar la línea de frontera hasta el río Malleco; 2° en subdividir i enajenar los terrenos del estado comprendidos entre el Malleco i el Biobío; i 3° en colonizar los mas a propósito para este objeto. Proponía, por último, la prórroga del régimen especial que estableció por cuatro años la lei de creación de la provincia de Arauco, 2 de julio de 1852, i que había caducado en 1856”. Guevara, Tomás, Historia de la civilización de la Araucanía, Tomo 3, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1898-1902, p. 293.

<sup>25</sup> Bengoa, José, Historia del pueblo mapuche (Siglo

XIX

y

XX

), Ediciones

SUR

, Santiago de Chile, 1996, pp. 205-248.

<sup>26</sup> Bengoa, José, *Historia del pueblo*, op. cit., pp. 205-325. No obstante, esta política de “parlamentos” era rechazada por las autoridades militares destacadas en la zona. Al respecto, el comandante José Manuel Pinto, jefe de las operaciones militares en La Araucanía, señalaba en 1868: “(...) creo que no debe entrarse en negociaciones por conducto de intermediarios i ajustar con ellos una paz que los salvajes con su probada mala fe violarían, apenas logran reponerse de los males traídos por sus recientes quebrantos”. En Saavedra, Cornelio (comp.), *Documentos relativos a la ocupación de Arauco que contienen los trabajos practicados desde 1851 hasta la fecha*, Imprenta de la Libertad, Santiago de Chile, 1870, p. 144. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9597.html>

<sup>27</sup> De Agostini, Alberto, *Treinta años en Tierra del Fuego*, Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1956, pp. 281-330. La historiografía actual sostiene que el capital pastoril que ocupó las tierras de los pueblos originales “removió” a la población autóctona, en muchos casos exterminándola. “Esta lógica de eliminación y no explotación se ha plasmado historiográfica y patrimonialmente en la noción de extinción indígena, naturalizando el exterminio y el despojo como condición de posibilidad del progreso”. Ver, Harambour, Alberto y Barrena, José, “Barbarie o justicia en la Patagonia occidental: las violencias coloniales en el ocaso del pueblo kawésqar, finales del siglo



XIX

e inicios del siglo

XX

”, en *Historia Crítica*, 71, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2019, p. 27.

<sup>28</sup> [Instituto Nacional de Estadísticas \(](#)

INE

), Síntesis de resultados Censo 2017,

INE

, Santiago de Chile, 2018, p. 16.

<sup>29</sup> [Goicovic, Igor, “La insurrección del arrabal. Espacio urbano y violencia colectiva. Santiago de Chile, 1878”, en \*Revista de Historia Social y de las Mentalidades\*, 6, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 2002, pp. 52-65; y Grez, Sergio, “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras \(Santiago, 1888-1905\)”, en \*Prohistoria\*, 4,](#)

CONICET

, Rosario, 2000, pp. 62-68. Un motín previo, acaecido en 1858, fue analizado por Salinas, René, “Espacio urbano”, op. cit., pp. 16-27.

<sup>30</sup> [Los Tiempos](#), 8 de octubre de 1878.

<sup>31</sup> Ibíd.

<sup>32</sup> Los Tiempos, 10 de octubre de 1878.

<sup>33</sup> El Estandarte Católico, 9 de octubre de 1878.

<sup>34</sup> Ibíd.

<sup>35</sup> El Estandarte Católico, 8, 9 y 10 de octubre de 1878; Los Tiempos, 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre de 1878, y Las Novedades, 9 y 10 de octubre de 1878.

<sup>36</sup> Los antecedentes de la revuelta popular del 29 de abril de 1888 se encuentran contenidos en el proceso que se llevó a cabo contra los dirigentes del Partido Demócrata, acusados de instigar los incidentes. Archivo Nacional, Fondo Judicial Santiago, Causas Criminales, Legajo 1600. Un muy buen análisis de los incidentes en Grez, Sergio, “Una mirada”, op. cit., pp. 59-93.

<sup>37</sup> El Ferrocarril, 1º de mayo de 1888.

<sup>38</sup> Archivo Nacional, Fondo Judicial Santiago, Causas Criminales, Legajo 1600, fjs. 122 vta. y 123.

<sup>39</sup> [El Padre Padilla, 12 de mayo de 1888.](#)

<sup>40</sup> [Ver, al respecto, la intervención ante el Congreso de la República del ministro de Hacienda de Balmaceda, Enrique Sanfuentes \(Chile, Congreso Nacional, Cámara del Senado, Boletín de Sesiones Ordinarias del Senado, Sesión del 1 de agosto de 1888, p. 240\), y el discurso pronunciado en Iquique, el 7 de marzo de 1889, por Balmaceda \(“Discurso del Presidente de la República pronunciado en el banquete con que fue festejado a su llegada a Iquique. Iquique, 7 de marzo de 1889”, en Sagredo, Rafael y Devés, Eduardo \(recps.\), Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía, Centro Diego Barros Arana –](#)

DIBAM

, Santiago de Chile, 1992, p. 185).

<sup>41</sup> [Para el político balmacedista, Joaquín Villarino, integraban las filas de la falange revolucionaria “las clases menos numerosas de la sociedad, las que no producen y viven y usufructúan del trabajo de los demás \(...\)”;](#) Villarino, Joaquín, “Causas de la revolución de Chile en 1891”, en *La América. Revista Científica, Literaria, Económica y Social*, 1, Imprenta Central, Montevideo, 1892, p. 17. Disponible en: [https://www.bcn.cl/Books/La\\_America\\_revista\\_cientifica\\_literaria/index.html#p=](https://www.bcn.cl/Books/La_America_revista_cientifica_literaria/index.html#p=)

<sup>42</sup> [Los sectores populares, en general, permanecieron indiferentes frente al conflicto interoligárquico. No obstante, una parte importante de la clase obrera acantonada en la región salitrera de Tarapacá fue enrolada, voluntaria o forzosamente, en el ejército opositor. Influyó en ello la política represiva que adoptó el presidente Balmaceda con la huelga obrera de 1890 y contra las movilizaciones populares desplegadas en Iquique en 1891. Ver, Pinto, Julio, “El](#)

balmacedismo como mito popular: Los trabajadores de Tarapacá y la guerra civil de 1891”, en Ortega, Luis (ed.), La guerra civil de 1891. 100 años hoy, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 1991, pp. 112-119. En otro estudio se pone de relieve que los sectores populares fueron reclutados, por ambos bandos, de manera forzosa, y que continuaron practicando la huida y la desertión como forma de resistencia frente a la compulsión elitaria. Ver, Neut, Pablo, “La otra oposición: El mundo popular frente a la causa balmacedista durante la guerra civil de 1891”, en Mayorga, Rodrigo (ed.), Lejos del ruido de las balas. La guerra civil chilena de 1891, Centro de estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2008, pp. 59-89.

<sup>43</sup> Olivos, Jorge, La matanza de Lo Cañas, Imprenta Barcelona, Santiago de Chile, 1892, pp. 9-30. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-143039.html>

<sup>44</sup> Quiroga, Patricio y Maldonado, Carlos, El prusianismo en las fuerzas armadas chilenas. Un estudio histórico, 1885-1945, Ediciones Documentas, Santiago de Chile, 1988, pp. 57-60.

<sup>45</sup> Las estadísticas al respecto no son muy precisas. Las estimaciones para la guerra civil de 1891 provienen de San Francisco, Alejandro, La guerra civil de 1891. Chile. Un país, dos ejércitos, miles de muertos, vol. 2, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2017, pp. 207-208, mientras que para la Guerra del Pacífico han sido tomadas de Sater, William, Tragedia andina, op. cit., pp. 428-430.

<sup>46</sup> Una vívida descripción de la ejecución de prisioneros balmacedistas, inmediatamente después de las batallas de Concón y de Placilla en, Arellano, Víctor, Guerra civil de Chile. Concón y Placilla. Reminiscencias de un ex-

tercerano, S/E, Buenos Aires, 1892, pp. 51-52 y 69-71. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8231.html>

<sup>47</sup> Valdés, Ismael, Última jornada contra la dictadura. Relación sumaria de las operaciones, 3 de julio a 28 de agosto de 1891, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1891, p. 91. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8230.html>

<sup>48</sup> Ver al respecto, Loveman, Brian y Lira, Elizabeth, “Las suaves cenizas”, op. cit., pp. 224-236, y Velasco, Fanor, La revolución de 1891. Memorias, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Santiago de Chile, 1914, p. 644. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-350267.html>

<sup>49</sup> Bañados, Julio, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891, Tomo 2, Librería de Garnier Hermanos, París, 1894, pp. 599-600. Disponible en: [https://www.bcn.cl/Books/Balmaceda su gobierno y la revolucion de 1891/in](https://www.bcn.cl/Books/Balmaceda_su_gobierno_y_la_revolucion_de_1891/in)

<sup>50</sup> Rodríguez, Emilio, Últimos días de la administración Balmaceda, Imprenta y Librería del Centro Editorial La Prensa, Santiago de Chile, 1899, pp. 108-120. Disponible en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8232.html>

<sup>51</sup> [El Mercurio Online](#) (

*EMOL*

), 19 de octubre de 2019. Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/19/964899/Metro-danos->

empresa.html

<sup>52</sup> [Barría, Jorge, El Movimiento Obrero en Chile. Síntesis histórico-social, Ediciones Universidad Técnica del Estado, Santiago de Chile, 1971; Ortiz, Fernando, El movimiento obrero en Chile \(1891-1919\),](#)

LOM

Ediciones, Santiago, 2005. Para un completo, aunque algo desactualizado balance, ver Rojas, Jorge, “Los trabajadores en la historiografía chilena: Balance y proyecciones”, en Revista de Economía y Trabajo, 10, Programa de Economía del Trabajo -

PET

, Santiago, 2000, pp. 47-117.

<sup>53</sup> [Pinto, Julio, “La transición laboral en el norte salitrero: La provincia de Tarapacá y los orígenes del proletariado en Chile, 1870-1890”, en Historia, vol. 25, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990, p. 208.](#)

<sup>54</sup> [González, Sergio, Hombres y mujeres de la pampa: Tarapacá en el ciclo del salitre, Taller de Estudios Regionales, Iquique, 1991, p. 16.](#)

<sup>55</sup> [Ibíd., p. 15.](#)

<sup>56</sup> [Grez, Sergio, La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores \(1804-](#)

[1902\), Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1995, p. 9.](#)

[<sup>57</sup> Garcés, Mario, Crisis social y motines populares en el 1900,](#)

LOM

Ediciones, Santiago, 2002, p. 116; Pinto, Julio, “¿Cuestión social o cuestión política? La lenta politización de la sociedad popular tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900)”, en *Historia*, 30, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1997, pp. 211-261.

[<sup>58</sup> Para una buena definición de Movimiento Social Popular, ver Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile. Actores, identidad y movimiento, vol.](#)

II

,

LOM

Ediciones, Santiago, 2014, pp. 97-98.

[<sup>59</sup> Para una discusión respecto de esta periodificación, ver González, Sergio, “Las inflexiones de inicio y término del ciclo de expansión del salitre \(1872-1919\): una crítica al nacionalismo metodológico”, en \*Diálogo Andino\*, 45, Universidad de Tarapacá, Arica, 2014, pp. 39-49.](#)

[<sup>60</sup> Womack Jr., John, Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de](#)

México, 2007, p. 51.

<sup>61</sup> Pinto, Julio, Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera. El ciclo del salitre y la reconfiguración de las identidades populares (1850-1900), Editorial Usach, Santiago, 2012, p. 91.

<sup>62</sup> Ibíd., p. 105.

<sup>63</sup> Bajo el ciclo de expansión del salitre, ya sea por iniciativa del Poder Ejecutivo o del Legislativo, surgió una serie de instancias que bajo el nombre común de Comisiones Consultivas o de Comisiones Parlamentarias acudieron al área salitrera a estudiar—in situ— las principales complejidades por las que iba transitando la industria del nitrato.

<sup>64</sup> Informe que la Comisión Consultiva de Salitres presenta al señor ministro de Hacienda, Imprenta Nacional, Santiago, 1880, p. 15.

<sup>65</sup> Pinto, Julio, Trabajos y Rebeldías, op. cit., pp. 109-110.

<sup>66</sup> Ibíd., p. 180.



<sup>67</sup> [Para el análisis de esta huelga, ver Pinto, Julio, “1890: un año de crisis en la sociedad del salitre”, en Cuadernos de Historia, 2, Universidad de Chile, Santiago, 1982, pp. 77-81; Grez, Sergio, “La huelga general de 1890”, en Perspectivas, 5, Madrid, 1990, pp. 127-167, y Enrique Reyes Navarro, “Los trabajadores del área salitrera, la huelga general de 1890 y Balmaceda”, en Luis Ortega \(ed.\), La guerra civil de 1891. Cien años hoy, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1993, pp. 85-107.](#)

<sup>68</sup> [Grez, Sergio, “Transición en las formas de lucha: Motines peonales y huelgas obreras en Chile \(1891-1907\)”, en Historia, 33, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, p. 144.](#)

<sup>69</sup> [Ibíd., p. 8.](#)

<sup>70</sup> [Para esto, revisar: Artaza, Pablo, “Movilización y Asociatividad Popular: dos facetas del papel de la clase en la configuración de la identidad pampina \(Tarapacá, 1890-1907\)”, en Travesía, 10-11, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2008-2009, pp. 45-72.](#)

<sup>71</sup> [Pinto, Julio, “En el camino de la Mancomunal: Organizaciones obreras en la provincia de Tarapacá 1880-1895”, en Cuadernos de Historia, 14, Universidad de Chile, Santiago, 1994, pp. 81-135.](#)

<sup>72</sup> [Pinto, Julio, “Discursos de clase en el ciclo salitrero: la construcción ideológica del sujeto obrero en Chile, 1890-1912”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2004, p. 195.](#)

<sup>73</sup> Cruzat, Ximena, El movimiento Mancomunal en el norte salitrero: 1901-1907, Tomo

I

, Mimeo, Santiago, 1981, p. 27.

<sup>74</sup> El Nacional, 20 de julio de 1902.

<sup>75</sup> Para evaluar la movilización obrera en Tarapacá, ver Artaza, Pablo, Movimiento Social y politización popular en Tarapacá 1900-1912, América en Movimiento Editorial, Valparaíso, 2020, p. 31.

<sup>76</sup> Ibíd., p. 64.

<sup>77</sup> Salas Lavaqui, Manuel, Trabajos y antecedentes presentados al supremo gobierno de Chile por la Comisión Consultiva del Norte, Imprenta Cervantes, Santiago, 1908, p. 7.

<sup>78</sup> Íd.

<sup>79</sup> [Artaza, Pablo, “De lo social a lo político en el movimiento social salitrero: El caso de la Mancomunal de Obreros de Iquique, 1900-1909”, en Atenea, 509, Universidad de Concepción, 2014, p. 154.](#)

<sup>80</sup> [El Trabajo, 9 de octubre de 1907.](#)

<sup>81</sup> [El Marítimo, 20 de enero de 1906, en Mercado, Javier, “Combinación Mancomunal de Obreros de Antofagasta y politización popular, 1903-1906”, en Anuario de Pregrado, 1, Universidad de Chile, Santiago, 2004, p. 14.](#)

<sup>82</sup> [Ibíd, p. 12.](#)

<sup>83</sup> [El Industrial, 22 de septiembre de 1904.](#)

<sup>84</sup> [El Industrial, 26 de septiembre de 1904.](#)

<sup>85</sup> [El Industrial, 27 de septiembre de 1904.](#)

<sup>86</sup> [El Industrial, 28 de septiembre de 1904.](#)

<sup>87</sup> [El Industrial, 3 de octubre de 1904.](#)

<sup>88</sup> [El Industrial, 16-25 de enero de 1905.](#)

<sup>89</sup> [El Industrial, 21 de febrero de 1905.](#)

<sup>90</sup> [El Industrial, 27 de junio de 1905.](#)

<sup>91</sup> [El Industrial, 12 de julio de 1905.](#)

<sup>92</sup> [Para esta fecha, tal como ya se había manifestado en Tarapacá en 1890 y se volvería habitual en el escenario salitrero, alcanzando su mayor crudeza en la huelga de Santa María de Iquique de 1907, se hizo evidente que la represión militar constituyó la forma habitual con que el Estado oligárquico enfrentó las grandes movilizaciones y huelgas obreras. Para una discusión a partir de este último caso, ver Grez, Sergio, “Matanza de la escuela Santa María de Iquique \(1907\): guerra interna preventiva del Estado chileno contra el movimiento obrero”, en Grez, Sergio y Elías, Jorge \(Compiladores\), Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo](#)

XX

, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 2021, pp. 15-33.

<sup>93</sup> [Para mayores detalles de los sucesos acontecidos, revisar “Los sangrientos sucesos de la semana pasada”, en El Industrial, 15 de febrero 1906.](#)

<sup>94</sup> [El Industrial, 3 de octubre de 1906.](#)

<sup>95</sup> [El Industrial, 28 de noviembre de 1906.](#)

<sup>96</sup> [El Industrial, 23 de abril de 1907.](#)

<sup>97</sup> [Para una lectura tanto de la huelga y masacre de Santa María en 1907, como del movimiento obrero y popular de la época, ver Artaza, Pablo \(et al.\), A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,](#)

LOM

Ediciones, Santiago, 1998; y Artaza, Pablo; González, Sergio y Jiles, Susana (eds.), A cien años de la masacre de Santa María de Iquique,

LOM

Ediciones, Santiago, 2009.

<sup>98</sup> [El Trabajo, 27 de marzo de 1907.](#)

<sup>99</sup> Artaza, Pablo, Movimiento social, op. cit., p. 130.

<sup>100</sup> Artaza, Pablo, “De lo social”, op. cit., pp. 152-156.

<sup>101</sup> Grez, Sergio, Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924),

LOM

, Santiago de Chile, 2011, p. 37.

<sup>102</sup> Ibíd., p. 36.

<sup>103</sup> Barría, Jorge, El Movimiento Obrero, op. cit., p. 50.

<sup>104</sup> Comisión Parlamentaria encargada de estudiar las necesidades de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, Talleres de la Empresa Zig-Zag, Santiago, 1913, p. 31.

<sup>105</sup> Ibíd., p. 20.

<sup>106</sup> Ibíd., p. 23.

<sup>107</sup> Oyarzún, Enrique, Concha, Juan Enrique y Philippi, Julio, Informe presentado al Supremo Gobierno sobre las huelgas de Iquique en 1916, Imprenta Cervantes, Santiago, 1917, p. 19.

<sup>108</sup> Ibíd., p. 20.

<sup>109</sup> Ibíd., p. 18.

<sup>110</sup> Grez, Sergio, “¿Autonomía o escudo protector? El Movimiento Obrero y popular y los mecanismos de conciliación y arbitraje (1900-1924)”, en Historia, 35, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002, pp. 91-150.

<sup>111</sup> Sergio Grez indica que luego de la matanza en 1907, se produce un aceleramiento en la forma en que autoridades legislativas y estatales ven el problema obrero, especialmente con la puesta en marcha de una serie de legislaciones en torno al trabajo. Ver en Grez, Sergio, “El escarpado camino hacia la legislación social: debates, contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile 1901-1924)”, en Cuadernos de Historia, 21, Universidad de Chile, Santiago, 2001, pp. 131 y ss.

<sup>112</sup> Santibáñez, Camilo, “La

y el Movimiento Obrero en Chile: El caso de los obreros portuarios nortinos (1919-1923)”, en *Diálogo Andino*, 55, Universidad de Tarapacá, Arica, 2018, p. 21.

<sup>113</sup> [Santibáñez, Camilo, “Los trabajadores portuarios chilenos y la experiencia de la eventualidad: los conflictos por la redondilla en los muelles salitreros, \(1916-1923\)”, en \*Historia\*, 50, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2017, pp. 707-709.](#)

<sup>114</sup> [Para una descripción más detallada de esta movilización se puede revisar Santibáñez, Camilo, “El movimiento obrero en los muelles salitreros chilenos: apuntes en torno a un informe de huelgas \(Iquique, 1916\)”, en \*Páginas\*, 14, Escuela de Historia Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2015, pp. 7-19. Disponible en <https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/155>](#)

<sup>115</sup> [Barría, Jorge, \*El Movimiento obrero\*, op. cit., p. 34.](#)

<sup>116</sup> [Santibáñez, Camilo, “La](#)

IWW

”, op. cit., p. 21.

<sup>117</sup> [Archivo Nacional \(en adelante](#)

AN



), Fondo Ministerio del Interior (en adelante

FMI

), “Telegrama del Intendente de Tarapacá al Ministro del Interior”, vol. 4648, 18 de agosto de 1914.

118

AN

,

FMI

, “Telegrama del Intendente de Antofagasta al Ministro del Interior”, vol. 4846, Antofagasta, 21 de agosto de 1917.

119

AN

,

FMI

, “Telegrama del Intendente de Tarapacá al Ministro del Interior”, vol. 4847, Iquique, 23 de agosto de 1917.

<sup>120</sup> El Despertar de los Trabajadores, 5 de enero de 1916.

[<sup>121</sup> De las 12 oficinas con que se cuenta, la cantidad de trabajadores suma 3.971, y contando a sus familias el número aumentaría considerablemente. La Provincia, 11 de enero de 1919.](#)

[<sup>122</sup> El Despertar de los Trabajadores, 7 de enero de 1921. También se puede ver “La elocuencia del hambre”, en la edición del 9 de enero de 1921.](#)

[<sup>123</sup> Archivo General de la Administración \(en adelante](#)

AGA

), Oficina del Trabajo (en adelante

OT

), “Comunicación enviada al Director de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra”, Tomo 77, año 1921, 14 de noviembre de 1921.

[<sup>124</sup>](#)

AGA

,

OT

, “Memorando enviado al Ministro de Industrias y Obras Públicas”, Tomo 69, año 1921, 21 de agosto de 1921.

[<sup>125</sup> El Despertar de los Trabajadores, 19 de marzo de 1921.](#)

<sup>126</sup> [aga, ot, “Comunicación enviada a Moisés Poblete, Jefe de la Oficina del Trabajo, por el inspector de Tarapacá”, Tomo 89, año 1922, 10 de enero de 1922.](#)

<sup>127</sup> [Archivo Regional de Tarapacá \(en adelante](#)

ART

), Fondo Intendencia de Tarapacá (en adelante

IT

), “Oficio al Comandante General de Armas”, Tomo 1, año 1920-1921, 5 de febrero de 1921.

<sup>128</sup> [El Despertar de los Trabajadores, 13 de marzo de 1921.](#)

<sup>129</sup> [Recabarren, Floreal, La Matanza de San Gregorio. 1921: Crisis y tragedia.](#)

LOM

Ediciones, Santiago, 2010, p. 23.

<sup>130</sup> [Ibíd., pp. 55-56.](#)

<sup>131</sup> Ibíd., pp. 70-71.

<sup>132</sup> Floreal Recabarren analizó las distintas fuentes que indicaban la cantidad de muertos el fatídico día 3 de febrero, y su conclusión alcanzó a que, a nivel obrero, este número “no llegó a la centena”, La Matanza, op. cit., pp. 83-86.

<sup>133</sup> Ibíd., p. 17.

<sup>134</sup> Este periodo de calma solo se habría perturbado en el mes de julio por la presentación de una petición de aumento salarial por parte del gremio de Cargadores de Iquique, llegando a acuerdo respecto a la tarifa con las casas embarcadoras. Ver

ART, IT

, “Oficio al Jefe de la firma Gibbs y Cía.”, Tomo 34, año 1921, 23 de julio de 1921.

<sup>135</sup> El Despertar de los Trabajadores, 28 de octubre de 1921.

<sup>136</sup> El Despertar de los Trabajadores, 8 de noviembre de 1921.

<sup>137</sup> El Despertar de los Trabajadores, 24 de noviembre de 1921. Ver también

ART, IT

, “Oficio al señor Luis Moro”, Tomo 38, año 1921, 23 de noviembre de 1921.

[138](#)

ART, IT

, “Nota del teniente 2º Exequiel Aliaga a Comandancia de Carabineros en Huara”, Tomo 26, año 1922, 2 de diciembre de 1922.

[139](#)

AGA, OT

, “Telegrama del Intendente de Tarapacá al Jefe de Oficina del Trabajo”, Tomo 90, año 1922, 18 de noviembre de 1922.

[<sup>140</sup> Santibáñez, Camilo, “Los trabajadores portuarios”, op. cit., p. 715.](#)

[<sup>141</sup> Ibíd., pp. 723-724.](#)

[<sup>142</sup> El acuerdo final contempló su supresión, lo que significó que los grupos de trabajadores quedarían a elección de los patrones y las faenas marítimas “organizadas en tres grupos de casas embarcadoras, con un número de trabajadores proporcionado a sus embarques y dentro de cada grupo se da trabajo por estricto orden de turno, para lo cual las firmas han contratado un funcionario](#)

especial, evitando así que las nombradas queden al capricho de los capataces. Los cargadores de bodegas y el trabajo de lancheros quedan en la misma forma en que lo estaban antes”. Ver

ART, IT

, “Nota del Gobernador Marítimo al Intendente”, Tomo 2, año 1920-1923, 26 de diciembre de 1923.

<sup>143</sup> Ibíd., p. 706.

<sup>144</sup> El Despertar de los Trabajadores, 9 de diciembre de 1923.

<sup>145</sup> El Despertar de los Trabajadores, 27 de junio de 1924.

<sup>146</sup> El Despertar de los Trabajadores, 22 de agosto de 1924 y 10 de septiembre de 1924.

<sup>147</sup> El Despertar de los Trabajadores, 7 de octubre de 1924.

<sup>148</sup> El Despertar de los Trabajadores, 31 de octubre de 1924.

<sup>149</sup> [El Despertar de los Trabajadores, 2 de noviembre de 1924.](#)

<sup>150</sup> [Harambour, Alberto, “Ya no con las manos vacías \(huelga y sangre obrera en el Alto San Antonio. Los ‘sucesos’ de la Coruña. Junio de 1925\)”, en Artaza, Pablo, A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique,](#)

LOM

Ediciones, Santiago, 1997, pp. 184-185. En 1922, el Partido Obrero Socialista se constituyó como Partido Comunista de Chile.

<sup>151</sup> [Ibíd., pp. 183-192.](#)

<sup>152</sup> [Álvarez, Rolando, 1997, “La matanza de Coruña. Chile 1925”, en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, 116, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, p. 83.](#)

<sup>153</sup> [Ibíd., p. 87.](#)

<sup>154</sup> [Harambour, Alberto, “Ya no con”, op. cit., p. 191.](#)

<sup>155</sup> [Navarro, Jorge, Revolucionarios y parlamentarios: la cultura política del Partido Obrero Socialista,](#)

LOM

, Santiago, 2017.

<sup>156</sup> [Venegas, Hernán, El carbón de Lota. Textos y fotografías del siglo](#)

XIX

. *Las visiones de Francisco Marcial Aracena y Guillermo E. Raby, Pehuén, Santiago, 2008.*

<sup>157</sup> [Ortega, Luis, “La frontera carbonífera, 1860-1900”, en Revista Mapocho 31, Santiago, 1992; Venegas, Hernán, “Crisis económica y conflictos sociales y políticos en la zona carbonífera, 1918-1931”, en Contribuciones científicas y tecnológicas, Área Ciencias Sociales y Humanidades, 116, 1997.](#)

<sup>158</sup> [Venegas, Hernán, El carbón de Lota. Textos y fotografías del siglo](#)

XIX

. *Las visiones de Francisco Marcial Aracena y Guillermo E. Raby, Pehuén, Santiago, 2008.*

<sup>159</sup> [Ortega, Luis, “La industria del carbón de Chile entre 1840 y 1880”, en Cuadernos de Humanidades 1, Universidad de Santiago, Santiago, 1988; Ortega, Luis, “La frontera carbonífera, 1860-1900”, en Revista Mapocho 31, Santiago, 1992; Venegas, Hernán, “Crisis económica y conflictos sociales y políticos en la zona carbonífera, 1918-1931”, en Contribuciones científicas y tecnológicas, Área Ciencias Sociales y Humanidades, 116, 1997; Mazzei, Leonardo, “Los](#)



[británicos y el carbón en Chile”, en Atenea 475, Concepción, 1997. Mazzei, Leonardo, “Expansión de gestiones empresariales desde la minería del norte a la del carbón, Chile, siglo](#)

XIX

”, en Boletín de Historia y Geografía 14. 1998.

[160](#)

DGT

, vol. 87, 10 de mayo de 1922.

[161 Figueroa, Enrique y Sandoval, Carlos, Carbón: cien años de historia \(1848-1960\),](#)

CEDAL

, Santiago, 1987.

[162 Figueroa, Consuelo, Revelación del subsole. Las mujeres en la sociedad minera del carbón 1900-1930,](#)

ICSO

-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2009, pp. 103-139.

[163 Pavilack, Jody, Black Gold in the red zone. Repression and contention in Chilean coal mining communities from the Popular Front to the advent of the](#)

[Cold War, Duke University, Durham, 2003.](#)

<sup>164</sup> [Godoy, Milton, “Las casas de la empresa: paternalismo industrial y construcción de espacio urbano en Chile: Lota, 1900-1950”, en Universum 30 n1, Universidad de Talca, Talca, 2015; Brito, Alejandra; Ganter, Rodrigo, “Cartografías de lo cotidiano: usos, relatos y disposiciones del espacio en el contexto de la industria minera y textil del Gran Concepción \(1940-1973\)”, en Revista Austral de Ciencias Sociales 33, Universidad Austral, Valdivia, 2017; Venegas, Hernán, “Políticas de bienestar y control social en la minería del carbón. Las experiencias de Lota y Coronel en el siglo](#)

XX

”, en Revista Atenea 511, Concepción, 2015; Venegas, Hernán; Morales, Diego, “Trayectorias de vida y paternalismo industrial: la compañía carbonífera e industrial de Lota, Chile 1920-1950”, en Revista Historia 396, vol. 9, N° 2, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2019; Videla, Enzo, Los departamentos de bienestar en las compañías carboníferas y la implementación de un programa de higiene y medicina social, 1923-1952, en Videla, E., Venegas, H.; Godoy, M., El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1940, América en Movimiento, Valparaíso, 2016; Rock, María Esperanza, Voces de Lota: relatos de la ciudad del carbón, Santiago, 2018; Peñafiel, Oscar, “Cuerpos fuertes, conciencias dóciles. La construcción del obrero soñado a través del deporte en la cuenca carbonífera, 1920-1950”, en Videla, E.; Venegas, H.; Godoy, M., El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1940, América en Movimiento, Valparaíso, 2016.

<sup>165</sup> [Venegas, Hernán; Morales, Diego, “Gestión paternalista y tecnología, una elección compleja. La compañía carbonífera e industrial de Lota \(1920-1940\)”, en Revista Diálogo Andino 58, 2019.](#)

<sup>166</sup> [Venegas, Hernán “La posición estratégica de los trabajadores del carbón en Chile. De su fortaleza a la crisis, 1920-1960”, Anos 90. Universidad Federal Río Grande do Sul, vol. 19, 35, 2012. El concepto es propuesto por John Womack Jr., en Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros,](#)

FCE

, México, 2007.

<sup>167</sup> [Ortega, Luis, “La frontera carbonífera, 1860-1900”, en Revista Mapocho 31, Santiago, 1992.](#)

<sup>168</sup> [Censos de Población de la República de Chile, años respectivos.](#)

<sup>169</sup> [Boletín de la Oficina del Trabajo, N° 15, 1920, pp. 79-80.](#)

<sup>170</sup> [Para el caso de Coronel, el nombre de la empresa fue Compañía Carbonífera y Fundición de Schwager, mientras que la de Lota tuvo varias denominaciones, pero las últimas fueron Compañía Exploradora de Lota y Coronel, Compañía Minera e Industrial de Chile y finalmente Compañía Carbonífera e Industrial de Lota.](#)

<sup>171</sup> [Venegas, Hernán, “Políticas de bienestar y control social en la minería del carbón. Las experiencias de Lota y Coronel en el siglo](#)

XX

”, en Revista Atenea 511, Concepción, 2015.

<sup>172</sup> Los mecanismos negociadores entre trabajadores y patrones fueron tardíamente establecidos por el decreto N° 4353 (14 de diciembre de 1917) del Ministerio del Interior, más conocido como decreto Yáñez, por el ministro Eliodoro Yáñez, secretario de Estado bajo la presidencia de Juan Luis Sanfuentes.

<sup>173</sup> Para reconocer las diferencias entre ambas instituciones, ver: Noiriel, Gerard (1988), “Du ‘patronage’ au ‘paternalisme’: la restructuration des formes de domination de la main d’oeuvre ouvrière dans l’industrie méta- llurgique française”, en Le Mouvement Social 144, 17-35, 1988.

<sup>174</sup> Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la huelga de los trabajadores de la empresa los Ríos de Curanilahue de 1916, que duró poco más de una semana; la de Schwager, en diciembre del mismo año, que se prolongó por 7 días. Ver Archivo Intendencia de Arauco (

AIA

), 1916, y Dirección General del Trabajo, Volumen 34.

<sup>175</sup> Toda la prensa regional dio cuenta de la militarización de las instalaciones mineras a lo largo de los conflictos. Tanto la prensa obrera, como El Alba, El Minero, La Región Minera, o prensa regional oficialista, como El Sur, dieron cuenta de la presencia de militares o marinos apostados para resguardar el orden cada vez que se produjeron movimientos huelguísticos.

<sup>176</sup> En el conjunto de huelgas organizadas desde principios de siglo hasta por lo menos 1920, dirigentes locales del Partido Demócrata, como Luis Morales, Juan Vargas Márquez, Teodoro Ávila, acompañaron a los dirigentes laborales en las presentaciones hechas a los administradores de las empresas o a las autoridades locales. Hacia la última fecha la presencia del

POS

y de la

FOCH

fue notable y de alguna manera sustituyó la influencia de los demócratas, muchos de los cuales pasaron a formar parte del

POS

.

<sup>177</sup> El Alba, Año

I

, N° 1, 4 de mayo de 1902, p.4.

<sup>178</sup> El Alba, Año

I

, N° 2, 8 de junio de 1902, p. 4.

[<sup>179</sup> Se debe recordar que, para esa fecha, Luis Emilio Recabarren se encontraba ligado fuertemente al trabajo mancomunal, como parte de su primera experiencia nortina en Tocopilla, participando de la prensa local y de la mancomunal de ese puerto salitrero en 1903.](#)

[<sup>180</sup> El Alba, Año](#)

I

, N° 8, 26 de julio de 1903, p. 3.

[<sup>181</sup> El Alba, Año](#)

II

, N° 10, 1 de septiembre de 1903, p. 2.

[<sup>182</sup> Sin duda la figura más notable vinculada primero con la organización de las mancomunales, la](#)

FOCH

, el

POS

y el

PCCH

, fue la de Luis Emilio Recabarren. Ver Pinto, Julio, Luis Emilio Recabarren. Una Biografía Histórica,

LOM

, Santiago, 2017.

<sup>183</sup> [Pinto, Julio, Luis Emilio Recabarren, op. cit., p. 30.](#)

<sup>184</sup> [El Alba, Año](#)

II

, N° 2, 1 de junio de 1904, pp. 2-3.

<sup>185</sup> [El Alba, Año](#)

II

, N° 2, 1 de junio de 1904, p. 2.

<sup>186</sup> [Pinto, Julio, Luis Emilio Recabarren, op. cit., pp. 33-36.](#)

<sup>187</sup> [La voz de Coronel, N° 27, 10 de junio de 1904.](#)

<sup>188</sup> [Sobre este tema revisar el texto de Grez, Sergio, ¿Autonomía o escudo protector? El movimiento obrero y popular y los mecanismos de conciliación y](#)

[arbitraje \(Chile 1900-1924\), Historia vol. 35, Santiago, 2002.](#)

[<sup>189</sup> El Alba, Año](#)

II

, N° 4, 15 de junio de 1904, p. 2.

[<sup>190</sup> El Alba, Año](#)

II

, N° 5, 1 de agosto de 1904, p. 3.

[<sup>191</sup> Archivo de la Intendencia de Arauco, comunicación al jefe de la Oficina del Trabajo, 18 de abril de 1916.](#)

[<sup>192</sup> Ibíd.](#)

[<sup>193</sup> El Sur, 20 de marzo de 1916, p. 4.](#)

[<sup>194</sup> Dirección General del Trabajo \(](#)

DGT



), volumen 71, Informe de Inspector del trabajo Heraclio Fernández, 1 de septiembre de 2021.

<sup>195</sup>

DGT

, Información de la Compañía “Los ríos de Curanilahue”, 29 de julio de 1916.

<sup>196</sup> [El Sur, 20 de marzo de 1916, p. 5.](#)

<sup>197</sup> [Craib, Raymond, Santiago subversivo, op. cit., p. 49.](#)

<sup>198</sup> [DeShazo, Peter, Trabajadores Urbanos y sindicatos en Chile: 1902-1927,](#)

DIBAM

, 2007, pp. 257-259.

<sup>199</sup> [Ministerio del Interior, vol. 89, febrero de 1919.](#)

<sup>200</sup> [Craib, Raymond, Santiago subversivo, op. cit., p. 87 y siguientes.](#)

<sup>201</sup> Boletín sesiones del Congreso, Cámara de senadores sesión extraordinaria N° 36, p. 823, 31 de diciembre de 1919; Sesión N° 16, 07 de julio de 1920, p. 312.

<sup>202</sup> Figueroa, Consuelo, Revelación del Subsole, op. cit., p. 113.

<sup>203</sup> Boletín de la Oficina del Trabajo, N° 15, 1920, p. 117. Ver también, Morales, Diego, Crisis de la autoridad patronal y el surgimiento de la Federación del Trabajo en Lota, 1922-1930, en Videla, E.; Venegas, H., y Godoy, M., El orden fabril. op. cit.

<sup>204</sup> Boletín de la Oficina del Trabajo, vol. 8, 1922, pp. 334-337.

<sup>205</sup> Archivo Intendencia de Concepción, vol. 1572, Informe sobre las causas de la merma de la producción de carbón en las minas de la Compañía de Schwager en Coronel, de la Compañía de Lota y Coronel, en Lota y Curanilahue y de la Compañía de Arauco en Curanilahue, después de la huelga de 9 de marzo a 28 de abril de 1920 y los medios de aumentarla, 20 de julio, 1920.

<sup>206</sup>

DGT

, volumen 87, 10 de mayo de 1922.

<sup>207</sup> [Morales, Diego, “Crisis de la autoridad patronal y el surgimiento de la Federación del Trabajo en Lota, 1922-1930”, en Videla, E.; Venegas, H. y Godoy M., El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1940, América en Movimiento, 2016.](#)

<sup>208</sup> [Grez, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile \(1810-1890\).](#)

RIL

editores, Santiago, 2007. El calificativo de “campanas de masas” en pp. 506-516 y pp. 684-94, respectivamente.

<sup>209</sup> [Izquierdo, Gonzalo, “Octubre de 1905. Un episodio en la historia social chilena”, en Historia, vol. 13, 1976, pp. 55-96.](#)

<sup>210</sup> [Grez, Sergio, “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras \(Santiago, 1888-1905\)”, en Prohistoria, 4, 2000, pp. 59-93.](#)

<sup>211</sup> [Esta expresión en “Huelga”, en Zig-Zag, Santiago, 5 de noviembre de 1905.](#)

<sup>212</sup> [“Los sucesos del domingo”, en Sucesos, Valparaíso, 27 de octubre de 1905.](#)

<sup>213</sup> [“La fiesta del Trabajo”, en El Obrero Ilustrado, Santiago, 2ª quincena de](#)

mayo de 1907.

<sup>214</sup> López, Osvaldo, Diccionario biográfico obrero, Imprenta y Encuadernación Bellavista, Santiago, 1912, p. H5.

<sup>215</sup> “El 1º de mayo”, en Zig-Zag, Santiago, 11 de mayo de 1912. Destacado en el original. La “sociedad subversiva” aludida en el artículo corresponde a la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de orientación anarquista y su participación en esta manifestación generó una ofensiva represiva por parte del Estado. Al respecto, véase Harambour, Alberto, “La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios y el ‘horizonte anarquista’. Santiago de Chile, 1911-1912”, en Lucía Stecher y Natalia Cisterna, América Latina y el Mundo. Exploraciones en torno a identidades, discursos y genealogías,

CECLA

-Universidad de Chile, Santiago, 2004, pp. 189-203.

<sup>216</sup> Todas las representaciones gráficas del despliegue de la movilización obrera en la ciudad fueron realizadas por el autor de este capítulo, tomando como base las informaciones de los periódicos citados.

<sup>217</sup> Este hecho ha sido brillantemente tratado por Alberto Harambour, en “‘Jesto y palabra, idea y acción’. La historia de Efraín Plaza Olmedo”, en Colectivo Oficios Varios, Arriba quemando el sol. Estudios de Historia Social Chilena. Experiencias de trabajo, revuelta y autonomía, 1830-1940,

LOM

ediciones, Santiago, 2004, pp. 137-193. La cita corresponde a una entrevista de un periódico demócrata a Plaza Olmedo y aparece en la p. 167.

<sup>218</sup> [Harambour, “‘Jesto y palabra, idea y acción’”, 161.](#)

<sup>219</sup> [“Patriotas y anarquistas”, en Sucesos, Santiago, 25 de julio de 1912.](#)

<sup>220</sup> [Sobre el asalto de la](#)

FEC

h en 1920, véase Craib, Raymond, Santiago subversivo, 1920. Anarquistas, universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas,

LOM

ediciones, Santiago, 2017.

<sup>221</sup> [Maximiliano Salinas, “La Iglesia y los orígenes del movimiento obrero en Chile \(1880-1920\)”, en Revista Mexicana de Sociología 49:3 \(1987\), 172. Algunos antecedentes sobre la Sociedad de Obreros San José en María Angélica Illanes, Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las Visitadoras Sociales \(1887-1940\),](#)

LOM

ediciones, Santiago, 2007, pp. 97-100. Una revisión de las organizaciones obreras católicas de la segunda mitad del siglo

XIX

, en Grez, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general, 540-552.

<sup>222</sup> [“La fiesta del trabajo cristiano”, en Sucesos, Santiago, 9 de septiembre de 1912.](#)

<sup>223</sup> [“Fiesta del Trabajo Cristiano”, en La Nación, Santiago, 21 de mayo de 1923.](#)

<sup>224</sup> [“Avances clericales”, en La Federación Obrera, Santiago, 10 de junio de 1924.](#)

<sup>225</sup> [“La imponente manifestación nacional de ayer”, en La Razón, Santiago, 2 de junio de 1913; “El gran meeting del domingo”, en Zig-Zag, Santiago, 7 de junio de 1913; “El asunto del nuncio”, en Sucesos, Santiago, 5 de junio de 1913.](#)

<sup>226</sup> [“El 1º de mayo”, en La Razón, Santiago, 2 de mayo de 1913; “Celebración del 1º de mayo”, en La Unión, Santiago, 2 de mayo de 1913.](#)

<sup>227</sup> [“1º de mayo. Santiago”, en El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 3 de mayo de 1913.](#)

<sup>228</sup> [Gallardo, Jorge \(comp.\), Luis Emilio Recabarren. Cartas inéditas.](#)

[Correspondencia con Carlos Alberto Martínez, dirigente de la Federación Obrera de Chile, Ediciones](#)

LER

, Santiago, 2020, p. 109. Destacado en el original.

[<sup>229</sup> “Los demagogos del pueblo”, en La Batalla, Santiago, 2ª quincena de mayo de 1913.](#)

[<sup>230</sup> “El 1º de mayo”, en La Razón, Santiago, 2 de mayo de 1914.](#)

[<sup>231</sup> Sobre el Primer Congreso del](#)

POS

, véase Navarro, Jorge, Revolucionarios y parlamentarios. La cultura política del Partido Obrero Socialista, 1912-1922,

LOM

ediciones, Santiago, 2017, pp. 151-162.

[<sup>232</sup> “1º de mayo”, en La Batalla, Santiago, 2ª quincena de mayo de 1915.](#)

[<sup>233</sup> DeShazo, Peter, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile. 1902-1927, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2007, p. 68.](#)

<sup>234</sup> [“El abaratamiento de los artículos de consumo”, en La Nación, Santiago, 30 de abril de 1917.](#)

<sup>235</sup> [“La carestía de la vida \[ed.\]” y “Abaratamiento de los artículos de consumo”, en La Nación, Santiago, 7 de octubre de 1918.](#)

<sup>236</sup> [Rodríguez, Ignacio, “Las marchas del hambre en Santiago de Chile, 1918-1919”, en Pensamiento Crítico. Revista electrónica de Historia, 1, 2001, p. 10. Véase también, Illanes, María Angélica, Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las Visitadoras Sociales \(1887-1940\),](#)

LOM

ediciones, Santiago, 2007, pp. 173-180.

<sup>237</sup> [“Pro-abaratamiento de los artículos de consumo” y “Los obreros y el encarecimiento de la vida”, en La Nación, Santiago, 22 y 23 de noviembre de 1918.](#)

<sup>238</sup> [“Los obreros y el encarecimiento de la vida”, en La Nación, Santiago, 23 de noviembre de 1918, y “Potpurri”, en Sucesos, Santiago, 28 de noviembre de 1918.](#)

<sup>239</sup> [“Los obreros y el encarecimiento de la vida”, en La Nación, Santiago, 23 de](#)



[noviembre de 1918.](#)

[<sup>240</sup> “El comicio público de ayer \[ed.\]”, en La Nación, Santiago, 23 de noviembre de 1918.](#)

[<sup>241</sup> Rodríguez, “Las marchas del hambre en Santiago de Chile”, p. 36; Valdivia, Verónica, en Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo](#)

XX

(1918-1938),

LOM

ediciones, Santiago, 2017.

[<sup>242</sup> “Los comicios de ayer”, en La Nación, Santiago, 30 de agosto de 1919.](#)

[<sup>243</sup> Sagredo, Rafael \(recopilador\), Crónicas políticas de Wilfredo Mayorga. Del “Cielito Lindo” a la Patria Joven, Dibam/](#)

RIL

ediciones/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1998, p. 105.

[<sup>244</sup> “Los comicios de ayer”, en La Nación, Santiago, 30 de agosto de 1919.](#)

<sup>245</sup> “La acción de los dinamiteros”, en Sucesos, Santiago, 4 de septiembre de 1919.

<sup>246</sup> Craib, Santiago subversivo, op. cit.; Valdivia, Subversión, coerción y consenso, op. cit.

<sup>247</sup> “Gran agitación de educación y cultura popular”, en La Federación Obrera, Santiago, 25 de octubre de 1921.

<sup>248</sup> “Los agitadores culturales y de educación”, en La Federación Obrera, Santiago, 26 de octubre de 1921.

<sup>249</sup> “El Gran Desfile”, en La Federación Obrera, Santiago, 5 de noviembre de 1921.

<sup>250</sup> “La grandiosa manifestación en homenaje a la Rusia de los Soviets”, en La Federación Obrera, Santiago, 9 de noviembre de 1921.

<sup>251</sup> Grez, Sergio, Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924),

LOM

, Santiago, 2011, pp. 143 y 145.

<sup>252</sup> [“Los albergados celebran el aniversario de la revolución rusa”, en La Nación, Santiago, 8 de noviembre de 1921.](#)

<sup>253</sup> [Sobre la agitación socialista entre los trabajadores del campo, véase Navarro, Jorge, “El despertar de los campesinos. El Partido Obrero Socialista-Partido Comunista de Chile y la sindicalización rural, 1912-1925”, en Notas Históricas y Geográficas, 23, pp. 14-58. Respecto a la matanza de febrero de 1921, véase Recabarren, Floreal, La matanza de San Gregorio, 1921: crisis y tragedia, Santiago,](#)

LOM

, 2003.

<sup>254</sup> [“Aniversario de la revolución rusa”, en La Federación Obrera, Santiago, 8 de noviembre de 1921.](#)

<sup>255</sup> [“Los albergados celebran el aniversario de Rusia”, en La Federación Obrera, Santiago, 9 de noviembre de 1921.](#)

<sup>256</sup> [“Federación Obrera de Chile. Junta Provincial”, en La Nación, Santiago, 18 de junio de 1921.](#)

<sup>257</sup> [Pinto, Julio, “Donde se alberga la revolución: la crisis salitrera y la propagación del socialismo obrero \(1920-1923\)”, en Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social \(1890-1923\),](#)

LOM

ediciones, Santiago, 2007.

<sup>258</sup> [Ibíd., p. 201.](#)

<sup>259</sup> [“Los funerales de Luis Reveco”, en La Federación Obrera, Santiago, 26 de noviembre de 1921.](#)

<sup>260</sup> [“El grave problema de los albergues”, “El problema de la desocupación obrera”, “El problema de la desocupación obrera” y “El problema de la desocupación obrera”, en La Nación, Santiago, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 1921, respectivamente.](#)

<sup>261</sup> [“Ecos de la masacre del miércoles”, en La Federación Obrera, Santiago, 27 de noviembre de 1921.](#)

<sup>262</sup> [“Se produce un grave desorden en el albergue de Matucana”, “Graves sucesos en el Albergue de San Ignacio”, “Ayer se descubren nuevos cartuchos de](#)

dinamita”, en La Nación, Santiago, 10, 12 y 15 de diciembre de 1921, respectivamente.

<sup>263</sup> Pinto, Julio, “Donde se alberga la revolución”, pp. 209-216.

<sup>264</sup> “Se produjo ayer un sangriento encuentro entre la policía y los obreros de los albergues” y “Los incidentes del sábado en la Alameda”, en La Nación, Santiago, 28 y 29 de mayo de 1922; “Hoy gran comicio público”, “Un crimen más comete la policía de la Capital”, “Al margen de los vergonzosos sucesos del Sábado”, en La Federación Obrera, Santiago, 27, 28 y 29 de mayo de 1922, respectivamente; “Los trágicos sucesos del sábado” y “El triste epílogo de los sucesos del sábado 27”, en Sucesos, Santiago, 1 y 8 de junio de 1922.

<sup>265</sup> “Se produjo ayer un sangriento encuentro entre la policía y los obreros de los albergues”, en La Nación, Santiago, 28 de mayo de 1922.

<sup>266</sup> “La última hazaña”, en La Federación Obrera, Santiago, 30 de mayo de 1922.

<sup>267</sup> “Los imponentes funerales realizados ayer”, en La Federación Obrera, Santiago, 30 de mayo de 1922.

<sup>268</sup> “Se produjo ayer un sangriento encuentro entre la policía y los obreros de los albergues”, en La Nación, Santiago, 28 de mayo de 1922.

<sup>269</sup> “Las manifestaciones populares”, en Sucesos, Santiago, 8 de mayo de 1913.

<sup>270</sup> González, José S., Cuando era muchacho, Editorial Universitaria, Santiago, 1996, pp. 147-148.

<sup>271</sup> “Hoy se conmemora con todo entusiasmo el Día del Trabajo” y “La conmemoración del 1º de mayo”, en La Nación, Santiago, 1 y 2 de mayo de 1922; “El gran comicio en conmemoración a la Fiesta del Trabajo, efectuado el lunes 1º de mayo”, en La Federación Obrera, Santiago, 3 de mayo de 1922.

<sup>272</sup> “Ayer se conmemora en nuestra capital con todo brillo el Día del Trabajo”, en La Nación, Santiago, 2 de mayo de 1923.

<sup>273</sup> “Los obreros celebraron ayer el Día del Trabajo”, en La Nación, Santiago, 2 de mayo de 1924.

<sup>274</sup> “La acción de la policía” y “El último crimen [editorial]”, en La Federación Obrera, Santiago, 3 de mayo de 1924.

<sup>275</sup> “Los obreros celebraron ayer el Día del Trabajo” y “El paro obrero de ayer”, en La Nación, Santiago, 2 y 3 de mayo de 1924.

<sup>276</sup> [“Los mata-guaguas”, en La Federación Obrera, Santiago, 4 de mayo de 1924.](#)

<sup>277</sup> [“Breves consideraciones”, en La Federación Obrera, Santiago, 3 de mayo de 1924.](#)

<sup>278</sup> [“Los mata-guaguas”, en La Federación Obrera, Santiago, 4 de mayo de 1924.](#)

<sup>279</sup> [Para más detalle y análisis de estos eventos, ver el capítulo 5 de mi libro Mining for the Nation: The Politics of Chile’s Coal Communities from the Popular Front to the Cold War, Pennsylvania State University Press, 2011, pp. 150-175.](#)

<sup>280</sup> [Sobre la historia de la familia Cousiño y las minas industriales y pueblos de empresa que crearon, así como para una descripción detallada de todas las actividades productivas y propiedades que poseían en la región, recomiendo la serie de folletos preparados por el veterano Jefe de Bienestar del](#)

CCIL

, Octavio Astorquiza: Lota: Antecedentes históricos (1929), Lota: Antecedentes históricos (1942), y, en coautoría con Óscar Galleguillos, Cien años del carbón de Lota (1952).

<sup>281</sup> [Las fuentes sobre estos eventos difieren en muchos detalles. Para la secuencia](#)

[de hechos, me he basado especialmente en el informe oficial de Raúl Rettig Guissen y Osvaldo Pazols Alfaro, publicado en El Sur, 18 octubre 1942, p. 4, y discutido más adelante en este capítulo. También uso una variedad de artículos de los periódicos El Sur \(Concepción, “independiente”\), La Época \(Concepción, “independiente”\), El Siglo \(Santiago, Comunista\) y El Chiflón \(Santiago, Federación Nacional Minera, bajo liderazgo comunista en esos años\). Algunas de las personas que entrevisté en las ciudades mineras en 1996-98 también me proporcionaron ricos recuerdos de estos eventos, especialmente Evaristo Azócar Medel, Manuel Basa Ramírez, Omar Sanhueza y Fresia Vidal Ojarse.](#)

<sup>282</sup> [El Sur, 10 octubre de 1942, p. 2; El Siglo, 14 octubre de 1942, p. 3.](#)

<sup>283</sup> [El Siglo, 8 octubre de 1942, p. 3.](#)

<sup>284</sup> [En el](#)

vii

Congreso de la Internacional Comunista (Comintern) celebrado en Moscú en 1935, el delegado búlgaro Georgi Dimitrov instó a la formación de tales alianzas antifascistas, llamándolas “Frentes Populares”. En Chile, el Frente Popular oficial duró solo desde 1937 hasta principios de 1941, pero las configuraciones de centroizquierda, denominadas de diversas formas, como “Alianza Democrática”, “Unión Nacional” y similares, continuaron ganando elecciones en todo el país durante los próximos cinco años. Yo utilizo el término en el sentido más amplio.

<sup>285</sup> [En los expedientes de personal que consulté en la Empresa Nacional del Carbón \(](#)



## ENACAR

), en Lota Alto, a mediados de los 90, encontré varias notas escritas por las trabajadoras sociales del Departamento de Bienestar sobre la concesión de tales premios. Varias personas que entrevisté también tuvieron recuerdos de estos concursos, como Juan Osvaldo Ramírez Flores, quien pasó su niñez con una estufa moderna envidiada por todo el barrio, que sus padres habían ganado por tener la casa más limpia y la mejor asistencia al trabajo. Para estudios académicos sobre los mecanismos utilizados por los administradores para construir pueblos de empresa estables y dóciles, vea María Angélica Illanes, *Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las Visitadoras Sociales*,

## LOM

, Santiago, 2007; Thomas M. Klubock, *Contested Communities: Class, Gender, and Politics in Chile's El Teniente Copper Mine, 1904-1951*, Duke University Press, Durham, NC, 1998, y, Dinius, Oliver J. y Angela Vergara (eds.), *Company Towns in the Americas: Landscape, Power, and Working-Class Communities*, University of Georgia Press, Athens, GA, 2011.

<sup>286</sup> Si bien este capítulo se centra en los comunistas, que eran la mayoría en las décadas de 1930 y 1940, es importante señalar que anarquistas, anarcosindicalistas, demócratas, socialistas y otros grupos ideológicos también tuvieron bastantes seguidores en la región minera del carbón en diferentes momentos históricos.

<sup>287</sup> Para un ejemplo matizado y bien argumentado de esta perspectiva, consulté varios trabajos de Tomás Moulian, desde *Líneas estratégicas de la izquierda: "Frentismo", populismo, anti reformismo, 1933-1973*,

## FLACSO

, Santiago, 1982, hasta *Fracturas: De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende*

(1938–1973),

LOM

, Santiago, 2006.

<sup>288</sup> [Discurso del Diputado Delgado,](#)

PCC

h, Cámara de Diputados, Santiago, 27 de agosto de 1941, p. 2512. Entre los discursos de Uribe en la Cámara de Diputados, ver los del 2 de junio de 1942, pp. 326-29; 16 de noviembre de 1943, pp. 377-81; 2 de julio de 1947, pp. 525-40; 13 de agosto de 1947, pp. 1402-05.

<sup>289</sup> [Actas de la Municipalidad de Lota, 15 de mayo de 1938, en vol. 1, 4/33-3/43, p. 196. Además de su aparición en documentos y artículos de prensa, aprendí mucho sobre la vida y trabajo de Santos Medel Basualto en entrevistas con su sobrino, Evaristo Azócar Medel \(Playa Blanca, 18-19 de junio de 1998\) y con el ex secretario general del](#)

PCC

h Luis Corvalán Lepe (Santiago, 3 de julio de 1998).

<sup>290</sup> [Para más discusión sobre Henry Wallace, que llegaría a ser un ícono global de la centro-izquierda en los primeros años de la posguerra, y sus vínculos con Chile y América Latina, ver Jody Pavilack, “Henry A. Wallace y sus ‘Amigos’ en América Latina \(1940-1949\)”, en Patricio Herrera González, ed., El Comunismo en América Latina: Experiencias militantes, intelectuales y transnacionales \(1917-1955\), Universidad de Valparaíso, 2017, pp. 441-55; y, Jody Pavilack, “Compañeros de ruta panamericanos: movimiento progresista al](#)

comienzo de la Guerra Fría”, en Patricio Herrera González, ed., América y la Guerra Fría Transnacional, Editorial América en Movimiento, Valparaíso, 2021, pp. 45-82.

<sup>291</sup> Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago, Censo de Población, 1940.

<sup>292</sup> El Siglo, 8 de octubre de 1942, p. 1.

<sup>293</sup> En enero de 1941, casi dos años antes de los tiroteos en Lota, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, pronunció cuatro libertades que las personas “en todo el mundo deberían disfrutar”: la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo. La izquierda chilena invocó con frecuencia este discurso al afirmar sus derechos y aspiraciones.

<sup>294</sup> Declaración Oficial de la Confederación de Trabajadores de Chile (

CTC

h) ante los luctuosos sucesos de Lota Alto, reproducido en El Siglo, 9 de octubre de 1942, p. 4.

<sup>295</sup> Raúl Rettig Guissen, abogado y militante vitalicio del Partido Radical, continuaría una larga y exitosa carrera pública, incluida su jefatura en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1990-91, que investigó la desaparición de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet en el periodo 1973-1989.

<sup>296</sup> [El Chiflón, noviembre 1942, pp. 2-3.](#)

<sup>297</sup> [El Siglo, 8 de octubre de 1942, p. 1.](#)

<sup>298</sup> [El Siglo, 9 de octubre de 1942, pp. 1, 4, y 10 de octubre de 1942, p. 4.](#)

<sup>299</sup> [Discurso de Eva Rivas en la Convención Departamental de Mujeres de Coronel, 11 de octubre de 1942, reproducido en El Chiflón, noviembre de 1942, p. 15.](#)

<sup>300</sup> [Esta estrategia tomó forma y retórica particular a mediados de la década de 1940, pero fue parte de una corriente más profunda de política conciliadora en la historia de Chile, como se explora a fondo en Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política, 1932-1994,](#)

LOM/DIBAM

, Santiago, 2000, y otros volúmenes en la misma serie. Para su análisis de los eventos entre 1941-43, ver pp. 105-15.

<sup>301</sup> [Informe Rettig-Pazols, 14 de octubre de 1942, reproducido en El Sur, 18 de octubre de 1942, p. 4.](#)

<sup>302</sup> [Ibíd.](#)

<sup>303</sup> [Carta de Juan Manuel Valle, reproducida en El Sur, 25 de octubre de 1942, p. 3.](#)

<sup>304</sup> [Marambio, Jorge, Identidad cultural en la zona del carbón,](#)

LOM

, Santiago, 1996, p. 78.

<sup>305</sup> [Entrevista con Manuel Cifuentes.](#)

<sup>306</sup> [Entrevistas con Fresia Vidal Ojarse, Lota, 15 de septiembre de 1997, y con Evaristo Azócar Medel, Playa Blanca, 18-19 de junio de 1998.](#)

<sup>307</sup> [Decreto N° 2191, trasladado en apéndice N°](#)

VIII

del Informe N° 404, “Coal Strike-October 1947,” preparado por James D. Bell, el segundo secretario de la Embajada de los EE.UU. en Chile, co-firmado por el embajador Bowers y dirigido hacia el Secretario del Estado, 22 de diciembre de 1947, RG 59, U.S. National Archives (en adelante Bell Report).

<sup>308</sup> Orden de regimiento N° 5, 10 de octubre de 1947, Fondo de Intendencia de Concepción, Archivo Nacional de Chile.

<sup>309</sup> El Siglo, 9 de octubre de 1947, p. 1.

<sup>310</sup> Bell Report, p. 17.

<sup>311</sup> El Siglo, 9 de octubre de 1947, p. 1.

<sup>312</sup> Telegrama confidencial N° 776, del embajador estadounidense Claude Bowers, al Secretario del Estado de los EE.UU., 6 de octubre de 1947, RG 59, U.S. National Archives.

<sup>313</sup> Bravo Ríos, Leonidas. Lo que supo un Auditor de Guerra, Santiago, Editorial del Pacífico, Santiago, 1955, p. 189.

<sup>314</sup> Bell Report, p. 20.

<sup>315</sup> Pinochet Ugarte, Augusto, Camino recorrido: Biografía de un soldado,

Imprenta del Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1990, pp. 114-17.

<sup>316</sup> Carta de la Asociación de Arrendatarios de Chile, Concepción, Consejo Provincial, al Jefe de Plaza, 25 de octubre de 1947, en vol. 2356, Oficios recibidos de otros funcionarios, 2º semestre 1947, Fondo de Intendencia de Concepción, Archivo Nacional de Chile.

<sup>317</sup> Sobre los ciclos de insurgencia y contrainsurgencia en lo que se llama la Guerra Fría larga, ver Greg Grandin y Gilbert M. Joseph (eds.), A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America's Long Cold War, Duke University Press, Durham, NC, 2010.

<sup>318</sup> Para más información sobre el viaje de González Videla a los Estados Unidos, ver Thomas Watson, Visita del Excelentísimo señor don Gabriel González Videla, Presidente de la República de Chile, a los Estados Unidos de América, 12 de abril-3 de mayo de 1950,

IBM

, 1951.

<sup>319</sup> Grandin y Joseph, eds., A Century of Revolution.

<sup>320</sup> “Himno de los obreros campesinos de Traiguén”, Anónimo, en El Siglo, Santiago, 1 de diciembre de 1940.

<sup>321</sup> [Joachim Rashke, “Sobre el concepto de movimiento social”, en Zona Abierta 69 \(1994\), pp. 121-134.](#)

<sup>322</sup> [Wickham-Crowley, Timothy P. y Susan Eva Eckstein, “Los movimientos sociales latinoamericanos y la ratificación del poder de las teorías estructurales”, en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate \(eds.\), Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos, Buenos Aires:](#)

CLACSO

, 2017, p. 50.

<sup>323</sup> [Ibíd., p. 67.](#)

<sup>324</sup> [Ver al respecto, M. A. Illanes, Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947,](#)

LOM

, Stgo., 2019.

<sup>325</sup> [Onofre Colima, representante de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, discurso en el](#)

VIII

Congreso Científico realizado en Temuco en 1911, organizado por intelectuales



indigenistas. Citado en Rolf Foerster y Sonia Montecinos, Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900-1970), Ediciones Centro de Estudios de la Mujer (

CEM

), 1988, p. 18.

<sup>326</sup> [José Bengoa, Historia del Pueblo Mapuche \(siglos](#)

XIX

y

XX

),

SUR

, Santiago, 1987, p. 369.

<sup>327</sup> [R. Foerster y S. Montecinos, Organizaciones, líderes... op. cit., p. 14.](#)

<sup>328</sup> [Ver Bengoa, Historia del... op. cit., y Luis Berger, “La matanza de colonos nacionales de Loncoche: lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile \(1910\)”, en Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N° 27.](#)

<sup>329</sup> [Aburto, Herminia, “Lo que la mujer araucana debe dar a conocer entre la](#)

raza” (1935), citado en Calfío, Margarita, “Mujeres mapuche, voces y acciones en momentos de la historia”, en A. Pequeño (comp.), en Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes,

FLACSO

Ecuador, 2009, p. 95.

<sup>330</sup> Ley 4.310 del 11 de febrero de 1928. Este proyecto de ley fue apoyado por el diputado mapuche Manuel Manquilef (mestizo, hijo de lonko mapuche y madre chilena cautiva, profesor normalista, fundador de la Corporación Araucana), lo que suscitó un quiebre en el mundo mapuche, varias de cuyas organizaciones se manifestaron en contra de dicha ley.

<sup>331</sup> Diario Austral, 21 de enero de 1932, citado en Foerster y Montesinos, Organizaciones, líderes..., op. cit., p. 50.

<sup>332</sup> Ibíd.

<sup>333</sup> “A sus hermanas de Arauco”, en Frente Popular, 27 de abril de 1938, citado en M.A. Illanes, Movimiento en... op. cit., p. 229.

<sup>334</sup> Frente Popular, 10 de septiembre de 1938, citado en Ibíd., p. 230.

<sup>335</sup> [Ibíd., p. 230.](#)

<sup>336</sup> [Informe del Ministerio del Interior, en Frente Popular, 26 de octubre de 1938, citado en Ibíd., p. 234.](#)

<sup>337</sup> [Blanca Zapata, campesina de la Hacienda San Luis, en El Siglo, 24 de noviembre de 1940.](#)

<sup>338</sup> [Ibíd.](#)

<sup>339</sup> [Sepúlveda, Boris, “Pan, techo y abrigo... ¿Y la tierra? Política agraria y sindicalización campesina en el periodo del Frente Popular en Chile \(1938-1952\)”, Memoria para optar al título de Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica,](#)

UMCE

, Santiago, 2013.

<sup>340</sup> [Ibíd.](#)

<sup>341</sup> [Julio Zegers García Huidobro \(1861-1936\) militó en el partido Liberal-Democrático. Después de la Guerra Civil de 1891, fue diputado por Quillota y Limache, dedicándose posteriormente al trabajo de sus fundos y a viajar por](#)

Europa.

<sup>342</sup> Mario Monasterio, “Quilicura, la tierra en que vivimos”.

<sup>343</sup> Hernán Cousiño ingresó en 1930 a la Dirección General del Trabajo, siendo inspector provincial de distintas localidades. Empresario de una fábrica de conservas y socio del Club de la Unión y Club de Leones (Diccionario Biográfico de Chile, 9ª edición, 1953), Cousiño estuvo entre el grupo de chilenos que fue a despedir a los 138 nazis que en 1943 salieron del país, junto al embajador alemán, a raíz de la ruptura de relaciones de Chile con los países del Eje (Italia, Alemania y Japón). Los chilenos asistentes gritaban “¡Viva Alemania! ¡Viva Hitler!”. Alfonso Calderón, Memorial de la Estación Mapocho, p. 65.

<sup>344</sup> El Siglo, Santiago, 23 de noviembre de 1940.

<sup>345</sup> El Siglo, 24 de noviembre de 1940.

<sup>346</sup> Francisco Petrinovic Karlovac (n. 1882 en Supeter, isla de Brac, Dalmacia) emigró a Chile en 1900, disconforme con la dominación que el Imperio austrohúngaro ejercía sobre Croacia. Se radicó inicialmente en Antofagasta y luego en Santiago, donde fundó una empresa industrial y comercial (Francisco Petrinovic y cía., 1906). En 1913 entró a participar en el negocio salitrero con el magnate croata Pascual Baburizza, hasta la venta de las salitreras croatas a Guggenheim en 1929.

<sup>347</sup> [Juvenal Valenzuela, Álbum Zona Central de Chile. Informaciones Agrícolas, Santiago, 1923, p. 62.](#)

<sup>348</sup> [El Siglo, Santiago, 6 de abril de 1942.](#)

<sup>349</sup> [Respecto del proyecto de Reforma Agraria del](#)

PC

presentado por Zamora en 1941, ver M. A. Illanes, Movimiento en... op. cit., p. 405.

<sup>350</sup> [El Siglo, Santiago, 10 de abril de 1942.](#)

<sup>351</sup> [Adela Garrido, “La huelga de Chacabuco”, en El Siglo, Santiago, 23 de abril de 1942.](#)

<sup>352</sup> [“Ponen fin a la huelga de Chacabuco”, en El Siglo, Santiago, 7 de julio de 1944.](#)

<sup>353</sup> [Si bien los Zegers contaban con varias propiedades agrícolas, para efectos de](#)

este análisis nos enfocaremos solo en la Hacienda San Luis, que protagonizó la huelga de trabajadores campesinos en 1940.

<sup>354</sup> Fragmento del Manifiesto de la Asociación Nacional de Agricultores, en El Siglo, Santiago, 23 de julio de 1944.

<sup>355</sup> Para tratar esta temática, seguiremos estrechamente el texto de M. A. Illanes, Movimiento en..., op. cit.

<sup>356</sup> Censo Agrícola, Santiago Chile, 1936, citado en Mauricio Hartard, “Propiedad Agrícola”, en El Campesino, 2 de marzo de 1943.

<sup>357</sup> Manifiesto de la

ANAC

h, 23 de julio de 1944, citado en M. A. Illanes, Movimiento en... op. cit., p. 492.

<sup>358</sup> El Siglo, 27 y 28 de mayo de 1945, citado en Ibíd., p. 496.

<sup>359</sup> Pablo Alderete, “Tras las huellas de la politización campesina: sociabilidades, conflictividad laboral y movilización social (Curicó, 1934-1947)”, Tesis para optar al grado de doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2021, p. 190.

<sup>360</sup> [Pizarro Navea, Eduardo, Victoria al amanecer. Intimidaciones y trayectorias de la huelga gremial de enero de 1950. Imprenta La Sudamericana, Santiago, 1950, p. 9.](#)

<sup>361</sup> [El Pueblo, 18 de agosto de 1949, p. 1.](#)

<sup>362</sup> [Olavarría, Arturo. Chile entre dos Alessandri, Memorias políticas. Tomo](#)

III

, Editorial Nascimento, Santiago, 1962.

<sup>363</sup> [Palma, Daniel. “La ‘Revolución de la Chaucha’, Santiago de Chile, 16 y 17 de agosto de 1949”, en Revista Alamedas, N° 6, Santiago, 1999, pp. 138-151. En clave memoria encontramos referencias a la Revuelta de la chaucha en: Bravo, Leonidas, Lo que supo un auditor de guerra. Editorial Pacífico, Santiago, 1955; Ljuvetic, Iván, Fernando Ortiz, Lecciones de clase, Ediciones Horizonte, Santiago, 2016.](#)

<sup>364</sup> [Milos, Pedro, Historia y memoria. 2 de abril de 1957.](#)

LOM

, Santiago, 2007. También ver Salazar, Gabriel, La violencia política popular en “Las Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular).

LOM

, Santiago, 2006.

<sup>365</sup> [Thielemann, Luis, “Sectores sociales subordinados a las más bajas pasiones”. Notas sobre la lucha de clases y disturbio callejero en la batalla de Santiago. Enero-abril, 1957, en Santibáñez, Camilo; Thielemann, Luis, Revueltas, Disturbios y lucha de clases en la metrópolis \(Chile, siglos](#)

*XX-XXI*

). América en Movimiento, Santiago, 2021.

<sup>366</sup> [Moulian, Tomás, Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende \(1938-1973\),](#)

LOM

, Santiago, 2006.

<sup>367</sup> [Ver, por ejemplo: Rodríguez, Javier, Desarrollo y desigualdad en Chile \(1850-2009\). Historia de su economía política. Dibam, Santiago, 2017; Muñoz Gomá, Oscar, Chile y su industrialización: pasado, crisis y opciones.](#)

CIEPLAN

, Santiago, 1986.

<sup>368</sup> [Pinto, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Editorial Universitaria, Santiago, 1973.](#)



<sup>369</sup> [Huneus, Carlos, La Guerra Fría Chilena. Gabriel González Videla y La Ley Maldita. Debate, Santiago, 2009; Loveman, Brian y Elizabeth Lira, Poder judicial y conflictos políticos \(Chile: 1925-1958\),](#)

LOM

, Santiago, 2014; Álvarez, Rolando, Forjando la vía chilena al socialismo. El Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970). América en Movimiento, Santiago, 2020; Valdivia, Verónica, Pisagua, 1948, anticomunismo y militarización política en Chile.

LOM

, Santiago, 2021.

<sup>370</sup> [Martínez, Pamela, Los casos de vulneraciones a la libertad sindical cometidas por Chile. Ediciones Jurídicas, Santiago, 2019.](#)

<sup>371</sup> [Entre las otras razones, Cavarozzi apunta a las diversas trabas a la participación popular, como las prácticas de cohecho y los obstáculos constantes a la sindicalización campesina. Cavarozzi, Marcelo, Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964.](#)

LOM

, Santiago, 2017.

<sup>372</sup> [Rodríguez, Javier, Desarrollo y desigualdad en, op. cit., p. 202.](#)

<sup>373</sup> [Ibíd.](#)

<sup>374</sup> [Misión Klein & Saks, El programa de estabilización de la economía chilena y el trabajo de la misión Klein & Saks. Editorial Universitaria, Santiago, 1958, p. 3.](#)

<sup>375</sup> [Echeverría, Mónica, Antihistoria de un luchador, Clotario Blest 1823-1990,](#)

LOM

, Santiago, 2013; Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo, Memoria de la izquierda chilena, Tomo

I

. Javier Vergara Editor, Santiago, 2003. Una breve referencia en Salazar, Gabriel, La violencia política popular, op. cit.

<sup>376</sup> [El Pueblo, 17 de agosto de 1949, p. 1.](#)

<sup>377</sup> [Era el caso de los sindicatos industriales de la Potrerillos Railways Company, Chile Exploration Company, la Andes Copper Mining, que alegaban problemas económicos, falta de mercado y baja del precio del cobre. Ver: Fondo Ministerio del Trabajo, vol. 1154, 1155, 1169 y 1176. Archivo Nacional de la Administración.](#)

ARNAD

.

<sup>378</sup> [Revista Ercilla, 23 de agosto de 1949, p. 4.](#)

<sup>379</sup> [Noticias de Última Hora, 19 de julio de 1949, p. 2.](#)

<sup>380</sup> [Revista Ercilla, 23 de agosto de 1949, p. 5.](#)

<sup>381</sup> [Revista Ercilla, 23 de agosto de 1949, p. 3.](#)

<sup>382</sup> [Revista Ercilla, 23 de agosto de 1949, p. 3.](#)

<sup>383</sup> [El Pueblo, 15 de agosto de 1949, p. 2.](#)

<sup>384</sup> [El Pueblo, 17 de agosto de 1949, p. 4.](#)

<sup>385</sup> [Noticias de Última Hora, 16 de agosto de 1949, p. 12.](#)

<sup>386</sup> [El Pueblo, 18 de agosto de 1949, p. 1.](#)

<sup>387</sup> [Las Noticias Gráficas, 17 de agosto de 1949, p. 5.](#)

<sup>388</sup> [Noticias de Última Hora, 13 de agosto de 1949, p. 3.](#)

<sup>389</sup> [El Pueblo, 18 de agosto de 1949, p. 1.](#)

<sup>390</sup> [El Mercurio, 18 de agosto de 1949, p. 21.](#)

<sup>391</sup> [Noticias de Última Hora, 16 de agosto de 1949, p. 1.](#)

<sup>392</sup> [El Pueblo, 17 de agosto de 1949, p. 4.](#)

<sup>393</sup> [Noticias de Última Hora, 16 de agosto de 1949, p. 12.](#)

<sup>394</sup> Sobre las formas de represión utilizadas mayoritariamente por carabineros para controlar las protestas en aquellos años ver: Plaza, Camilo, “Policialización de la protesta y de la seguridad interior: Carabineros de Chile (1946-1970)”, en Santibáñez, Camilo y Thielemann, Luis, Revueltas, Disturbios y lucha de clases, op. cit.

<sup>395</sup> Entre ellos, los alumnos de los Liceos nocturnos Balmaceda Hansen, Sarmiento, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Montt, Liceo Providencia y Francisco Bilbao.

<sup>396</sup> El Pueblo, 21 de agosto de 1949, p. 3.

<sup>397</sup> Fajardo, Marco, “Albert Camus en Chile: a 70 años de la conferencia ‘El Tiempo de los asesinos’ que dio el Nobel en Santiago en medio de las protestas callejeras”, en El Mostrador, 5 de agosto de 2019.  
<https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/08/05/albert-camus-en-chile-a-70-anos-de-la-conferencia-el-tiempo-de-los-asesinos-que-dio-el-nobel-en-santiago-en-medio-de-protestas-callejeras/>. También ver: Mandler, Yael. Albert Camus en Chile. 100 años de su nacimiento. Recuerdos de su visita a Chile Albert Camus: el extranjero en los parajes del fin del mundo. En <http://sociedaddebibliofiloschilenos.blogspot.cl/2013/01/albert-camus-en-chile.html>

<sup>398</sup> Bravo, Leonidas, Lo que supo un auditor de guerra. Editorial Pacífico, Santiago, 1955. p. 197.

<sup>399</sup> [Revista Ercilla, 23 de agosto de 1949. p. 5.](#)

<sup>400</sup> [Entre los que se plegaron a la huelga: Maestranza de San Bernardo de los Ferrocarriles del Estado, Maestranza Santa Helena, Fundición Libertad, Fundición Caupolicán, Fundición Nueva York, Madeco, Barraca Cóndor, Fábrica de Corchos, Fábrica de Calzado Porta, Rivas y Cía.](#)

<sup>401</sup> [Confidencial, “Kodelit S.A. abandono del trabajo 190 obreros”, Santiago, 19 de agosto de 1949. En: Ministerio del Interior, vol. 13244 y Correspondencias/providencias vol. 1932. Archivo Nacional de la Administración \(](#)

ARNAD

).

<sup>402</sup> [Las Noticias Gráficas, 20 de agosto de 1949, p. 1.](#)

<sup>403</sup> [El Mercurio, 18 de agosto de 1949, p. 21.](#)

<sup>404</sup> [Revista Vea, 24 de agosto de 1949, p. 5.](#)

<sup>405</sup> [El Pueblo, 17 de agosto de 1949, p. 1.](#)

<sup>406</sup> El Pueblo, 19 de agosto de 1949, p. 4.

<sup>407</sup> Memorándum dirigido al excelentísimo presidente de la República. Sindicato general profesional de dueños de camiones. Santiago, 19 de agosto de 1949. Oficios, Ministerio del Interior, vol. 13.205/13.206.

<sup>408</sup> Las Noticias Gráficas, 17 de agosto de 1949, p. 5.

<sup>409</sup> Las Noticias Gráficas, 25 de agosto de 1949, p. 3, y 26 de agosto de 1949, p. 5.

<sup>410</sup> Revista Ercilla, 23 de agosto de 1949, p. 3.

<sup>411</sup> Revista Vea, 24 de agosto de 1949, p. 6.

<sup>412</sup> Bravo Vargas, Viviana, “Chile no va hoy a la fábrica: Protesta obrera y represión política en el verano de 1946”, en Izquierdas,

IDEA-USACH

, N°35, septiembre de 2017.

<sup>413</sup> Sumario por sucesos ocurridos en la Plaza Bulnes, Causa rol N° 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, f 781.

<sup>414</sup> Ibíd. f 856.

<sup>415</sup> Las Noticias Gráficas, 18 de agosto de 1949, p. 3.

<sup>416</sup> Noticias de Última Hora, 6 de agosto de 1949, p. 4.

<sup>417</sup> Informe comisario y mayor de Carabineros Pedro Toledo Sánchez a la Intendencia de Santiago, Oficio N° 8577, 6 de agosto de 1949. p. 2. Min. Interior, providencias, vol. 13244.

ARNAD

.

<sup>418</sup> Recorrieron las calles San Diego, Coquimbo, Arturo Prat, Ahumada hasta Plaza de Armas.

<sup>419</sup> Informe comisario y mayor de Carabineros Pedro Toledo Sánchez a la



[Intendencia de Santiago, Oficio N° 8577, 6 de agosto de 1949. p. 3. Min. Interior, providencias, vol. 13244.](#)

ARNAD

.

[<sup>420</sup> El Pueblo, 21 de agosto de 1949, p. 3.](#)

[<sup>421</sup> Barría, Jorge, Historia de la](#)

*CUT*

. *Prensa Latinoamericana, Santiago, 1971, p. 35; Bravo, Viviana, “¡Ni fiesta ni congoja! El primero de mayo en tiempos de la Ley Maldita, Santiago de Chile, 1948-1958”, en Bravo, Viviana; Mastrángelo, Mariana, La izquierda en movimiento. Clase trabajadora y luchas populares en América Latina s.*

*XX*

*y*

*XXI*

,

CLACSO

, Buenos Aires, en imprenta.

[<sup>422</sup> Datos obtenidos de la Dirección General del Trabajo. En: Instituto de Economía, Universidad de Chile. Desarrollo económico de Chile 1940-1956, 1956, p. 7.](#)

<sup>423</sup> [Las Noticias Gráficas, 24 de agosto de 1949, p. 2.](#)

<sup>424</sup> [Si bien al “volcán gremial” se hace referencia en la prensa de la época, también lo señala Barría, Jorge, Historia de la](#)

*CUT*

, op. cit. p. 31.

<sup>425</sup> [Para la reconstrucción de esta huelga ver: Pizarro, Eduardo, Victoria al amanecer... op. cit.; Barría, Jorge, Ibíd.](#)

<sup>426</sup> [Pizarro, Crisóstomo, La huelga obrera en Chile,](#)

*SUR*

, Santiago, 1986.

<sup>427</sup> [Noche del 4 de septiembre de 1970 desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile \(](#)

*FECH*

), Santiago de Chile

<sup>428</sup> [Garcés, Joan, El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, Siglo](#)

XXI

, México, 1974, y Garcés, Joan, Allende y la experiencia chilena, Ariel, Barcelona, 1976.

<sup>429</sup> [Cf., entre otros: Pinto, Julio \(ed.\), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular,](#)

LOM

, Santiago, 2005; Pinto, Julio (ed.), Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular,

LOM

, Santiago, 2014, y Austin, Robert; Salém, Joana y Canibilo, Viviana (comp.), La vía chilena al socialismo. 50 años después, Buenos Aires,

CLACSO

– Ocho Libros, Buenos Aires, 2020.

<sup>430</sup> [Kornbluh, Peter, The Pinochet File. A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, New Press, New York, 1989.](#)

<sup>431</sup> [Espinoza, Juan G, Zimbalist, Andrew, Democracia económica. La participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973, Fondo de](#)

Cultura Económica, México, 1984.

<sup>432</sup> Gaudichaud, Franck, “Quand l’État chilien se proposait de construire la démocratie économique. Nationalisations, Aire de propriété sociale et système de participation des salariés durant l’Unité populaire (1970-1973)”, en Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers

*ALHIM*

, 28, 2014, 5 de diciembre de 2014. Disponible en:  
<http://journals.openedition.org/alhim/5084>.

<sup>433</sup> Orellana V., Paola, Clotario Blest en la

*CUT*

: *por la democracia de los trabajadores, América en Movimiento, Santiago, 2018.*

<sup>434</sup> Winn, Peter, La revolución chilena,

LOM

, Santiago, 2013.

<sup>435</sup> Este texto está basado en nuestro libro: Gaudichaud, Franck, Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo,

LOM

, Santiago, 2016 (y en particular en el capítulo 12: “Cuando la ciudad está en lucha. Territorios y repertorio del poder popular”, pp. 343-370).

<sup>436</sup> [Castells, Manuel, La lucha de clases en Chile, Siglo 21 Editores, Buenos Aires, 1974.](#)

<sup>437</sup> [Lefebvre, Henri, La production de l'espace, Anthropos, París, 1974.](#)

<sup>438</sup> [González M., Marco, “El tiempo del espacio disputado. Santiago de Chile durante la Unidad Popular”, en Revista Izquierdas, N° 50, 2021, p. 14. Disponible en: <http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2021/n50/dossier1.pdf>](#)

<sup>439</sup> [Winn, Peter, Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo,](#)

LOM

, Santiago, 2004. Ver también: Cancino, Hugo, La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-1973, Aarhus Universitet Press, Aarhus, 1988.

<sup>440</sup> [El repertorio de acción es comprendido como un conjunto de representaciones y modos de movilización, que se ofrecen en un momento dado a un conjunto de actores movilizados: repertorios a menudo heredados, pero que también pueden ser inventados en el curso de la movilización colectiva \(Tilly, Charles, Tarrow; Sidney, Politique\(s\) du conflit. De la grève à la révolution, Presses de Sciences Po, París, 2008\).](#)

<sup>441</sup> [Power, Margaret, La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Dibam, Santiago, 2008.](#)

<sup>442</sup> [Palieraki, Eugenia, “Las manifestaciones callejeras y la experiencia de la Unidad Popular \(1970-1973\). Una interpretación a partir de la violencia política en las calles de Santiago”, en Pensamiento Crítico, N° 3, 2003.](#)

<sup>443</sup> [Salazar, Gabriel, Violencia política popular en las “grandes alamedas”, Santiago: 1947-1987,](#)

LOM

, Santiago, 2006.

<sup>444</sup> [Mattelart, Armand, “La bourgeoisie à l’école de Lénine”, en Politique aujourd’hui, París, enero-febrero de 1974, pp. 23-46.](#)

<sup>445</sup> [Samaniego M., Augusto, “Octubre al rojo: fulgor y agonía de la unidad de los trabajadores”, en Contribuciones científicas y tecnológicas, Santiago, Usach, Área de Ciencias Sociales y Humanidades, N° 130, abril de 2002, pp. 1-22.](#)

<sup>446</sup> [Guzmán, Patricio, La Batalla de Chile, Chile/Cuba/Venezuela, 1975-1979.](#)

<sup>447</sup> [Para una historia oral del “poder popular” en Chile: Gaudichaud, Franck, Poder popular y cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano 1970-1973,](#)

LOM

-Dibam, Santiago, 2004.

<sup>448</sup> [Hemos propuesto en nuestro trabajo diferenciar los “cordones en sí” \(cinturón industrial urbano\) de los “cordones para sí” \(organizaciones de clase surgidas en el calor de octubre de 1972\).](#)

<sup>449</sup> [Gaudichaud, Franck, “Una fuerza popular latente. La comuna de Maipú y los orígenes de Cordón Industrial Cerrillos \(Santiago de Chile\)”, Boletín Clacso, en Izquierda: teoría y praxis, Año 2 – Número 1, noviembre de 2020, pp. 20-33. Disponible en: \[www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V2\\\_Izquierda-teoria-y-praxis\\\_N2-1.pdf\]\(http://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V2\_Izquierda-teoria-y-praxis\_N2-1.pdf\)](#)

<sup>450</sup> [Cordero, María Cristina; Sader, Eder; Threlfall, Mónica, Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú: 1972. Balance y perspectivas de un embrión de poder popular,](#)

CIDU

, Documento de trabajo Vº 67, Santiago, agosto de 1973, y Henríquez G., Renzo, El poder del campo. Los campesinos de Maipú durante el gobierno de Allende, Ediciones Londres 38, Santiago, 2015.

<sup>451</sup> Chile Hoy, Santiago, N° 6, 20 al 27 de julio de 1972.

<sup>452</sup> Garcés, Mario, El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular, 1970-1973,

LOM

, Santiago, 2015.

<sup>453</sup> Cofré, Boris, Campamento Nueva La Habana: el

*MIR*

*y el movimiento de pobladores: 1970-1973, Escaparate, Concepción, 2007.*

<sup>454</sup> Cf. Gaudichaud, Franck, Chile 1970-1973, op. cit.

<sup>455</sup> Cf. testimonio de Carmen Silva en Gaudichaud, Franck, Poder popular y Cordones, op. cit., pp. 331-340.

<sup>456</sup> Carta de los Cordones industriales, 5 de septiembre de 1973, Santiago, Archivos Museo de la Memoria.



<sup>457</sup> Entrevista realizada en Santiago, 6 de mayo de 2002 (en Gaudichaud, Franck, Chile 1970-1973, op. cit.).

<sup>458</sup> Cruz Salas, Luis, “Estado, partidos y movimiento obrero”, en Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende, Pinochet, Ed. ChileAmérica – Cesoc, 1999, Santiago, p. 388.

<sup>459</sup> Samaniego M., Augusto, Unidad sindical desde la base. La Central Única de Trabajadores, Chile 1953 – 1973, Ariadna, Santiago, 2016.

<sup>460</sup>

MAPU

: Movimiento de Acción Popular Unitaria, escisión de izquierda de la

DC

en 1969, miembro de la coalición de gobierno.

<sup>461</sup> Entrevistas realizadas en Santiago, 1 y 14 de mayo de 2002, respectivamente (Gaudichaud, Franck, Poder popular y Cordones, op. cit.).

<sup>462</sup> Auyero, Javier, “L’espace des luttes. Topographie des mobilisations collectives”, en Actes de la recherche en sciences sociales, N° 160, 2005, pp. 122-132.

<sup>463</sup> [“Porque son portadores de sentido, algunos lugares pueden convertirse tanto en el terreno como en la clave de las políticas contestatarias. Esos lugares simbólicos se inscriben en el espacio y son parte integrante de esas políticas” \(Auyero, Javier, “L’espace des luttes”, op. cit.\).](#)

<sup>464</sup> [Comisión Política del](#)

MAPU

, “Técnicas de acción de masas”, Documento de estricta circulación interna, Cartilla 1 B 3, en Farías, Víctor (comp.), La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica,

CEP

, Berlín, tomo 6, 2001, Anexo 1.

<sup>465</sup> [De Frente, Santiago, 27 de julio de 1973.](#)

<sup>466</sup> [Comisión Política del](#)

MAPU

, “Técnicas de acción de masas”, op. cit. Acerca de las manifestaciones y su uso en el espacio público: Fillieule, Olivier, Stratégies de la rue: manifestations en France, Presses de Sciences Po, París, 1997.

<sup>467</sup> [Palieraki, Eugenia, Manifestations de rues à Santiago durant l'Unité populaire, Mémoire de maîtrise d'histoire Université Paris I-La Sorbonne, 2001, Anexo B-11.](#)

<sup>468</sup> [Comisión Política del](#)

MAPU

, “Técnicas de acción de masas”, op. cit.

<sup>469</sup> [Trumper, Camilo, A ganar la calle. The Politics of Public Space and Public Art in Santiago Chile \(1970-1973\), PhD of philosophy in history, University of California, Berkeley, 2008.](#)

<sup>470</sup> [Palieraki, Eugenia, “Las manifestaciones callejeras”, op. cit., p. 22.](#)

<sup>471</sup> [Cartografías de la memoria, Utopías y terror en Santiago de Chile, 1970-1976, Santiago, 2019, p. 4.](#)

<sup>472</sup> [Casals A., Marcelo, La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campana del terror” de 1964,](#)

LOM

, Santiago, 2016.

<sup>473</sup> Palieraki, Eugenia, “Las manifestaciones callejeras”, op. cit., p. 12.

<sup>474</sup> El Mercurio, Santiago, 24 de julio de 1973.

<sup>475</sup> El Mercurio, Santiago, 5 de agosto de 1973.

<sup>476</sup> Pinochet, Augusto, El día decisivo, Andrés Bello, Santiago, 1980, pp. 57-58.

<sup>477</sup> Illanes, María Angélica, La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Chile, 1900-2000, Planeta, Santiago, 2002, p. 45.

<sup>478</sup> Esta declaración fue firmada por los cordones Cerrillos, O’Higgins, Vicuña Mackenna, San Joaquín, Recoleta, Mapocho-Cordillera y Santiago Centro (Fuente: Tarea Urgente, N° 10, Santiago, 27 de julio de 1973).

<sup>479</sup> Valdivia, Verónica, “Chile, un país de excepción. La ley de control de armas y la maquinaria represiva puesta en marcha”, en Pinto, Julio (ed.), Fiesta y drama, op. cit.

<sup>480</sup> [Cámara de Diputados, “Proyecto de acuerdo sobre la ruptura de la legalidad”, 23 de agosto de 1973, en Farías, Víctor \(comp.\), en La izquierda chilena, op. cit., tomo 6, pp. 4996-5000.](#)

<sup>481</sup> [Vidaurrázaga M., Ignacio, Martes once. La primera resistencia,](#)

LOM

, Santiago, 2013.

<sup>482</sup> [Castillo, Sandra, Cordones Industriales. Nuevas formas de sociabilidad obrera y organización política popular \(Chile 1970-1973\), Escaparate, Concepción, 2009.](#)

<sup>483</sup> [Tilly, Charles, La France conteste de 1600 à nos jours, Fayard, París, 1986.](#)

<sup>484</sup> [Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena \(1890-1990\). Uqbar Editores. Santiago, 2006, pp. 74-175.](#)

<sup>485</sup> [La mayoría de los historiadores y cientistas sociales han fijado la jornada de protesta nacional del 11 de mayo de 1983 como el inicio del ciclo de jornadas de protesta y paros nacionales en contra de la dictadura. Al respecto, ver los trabajos de Bravo, Viviana, Piedras, barricadas y cacerolas: las jornadas nacionales de protesta, Chile 1983-1986, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2017; Bravo, Viviana, “Neoliberalismo, protesta popular y transición en Chile, 1973-1989”, en Política y Cultura, N° 37, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco Distrito Federal, México, 2012,](#)

[pp. 85-112; De la Maza, Gonzalo, y Garcés, Mario, La explosión de las mayorías. Protesta nacional, 1983-1984,](#)

ECO

, Santiago, 1985; Garcés, Mario, “Los pobladores y la política en los años ochenta: reconstrucción de tejido social y protestas nacionales”, en Historia 396, Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2017, pp. 119-148; Moulian, Tomás, Chile actual, anatomía de un mito,

LOM

, Santiago, 2002.

[<sup>486</sup> Informe del Equipo de Dirección Interior \(](#)

EDI

) del Partido Comunista de Chile, La Habana, diciembre de 1982, p. 2.

[<sup>487</sup> El Rebelde, 1983, p. 8.](#)

[<sup>488</sup> Informe del](#)

EDI

, Partido Comunista de Chile, La Habana, diciembre de 1982, pp. 2 y 3.

[<sup>489</sup> Ibíd., p. 4.](#)

<sup>490</sup> [El Rebelde en la clandestinidad. Diciembre de 1982, N° 193, p. 12.](#)

<sup>491</sup> [Acrónimo de la Central Nacional de Informaciones, institución de la dictadura cívico-militar que desarrolló funciones de espionaje y policía política a través de la persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de la oposición política. Fue creada como sucesora de la Dirección de Inteligencia Nacional \(](#)

DINA

[\), posterior al asesinato de Orlando Letelier en Washington \(Estados Unidos\), en 1977.](#)

<sup>492</sup> [Panfleto difundido en las diversas ciudades del país convocando a la Jornada Nacional de Protesta contra Pinochet, marzo de 1983.](#)

<sup>493</sup> [Para Mario Garcés, los pobladores fueron los actores sociales con mayor protagonismo durante las jornadas de protestas en contra de la dictadura. Al respecto ver: Garcés, Mario, Los pobladores, op. cit.; De la Maza, Gonzalo y Garcés, Mario, La explosión, op. cit.](#)

<sup>494</sup> [Bravo, Viviana, “Neoliberalismo, protesta”, op. cit., p. 104.](#)

<sup>495</sup> [Revista Principios, N° 27, abril, mayo, junio de 1983, p. 68.](#)

<sup>496</sup> Ibíd., Miguelito: Arma sencilla de cuatro o más puntas metálicas afiladas y puntiagudas, de forma tetraédrica y que se caracteriza por dejar siempre una punta elevada al estar en el suelo, la que es sostenida por los otros brazos. Se utilizan para la obstrucción del paso de los vehículos de las fuerzas policiales, pinchando sus ruedas.

<sup>497</sup> Revista Principios, N° 27, abril, mayo, junio de 1983, p. 69.

<sup>498</sup> Micros y liebres: Locomoción colectiva.

<sup>499</sup> Ibíd., pp. 69 y 70.

<sup>500</sup> Ibíd., p. 70.

<sup>501</sup> Ibíd., p. 71.

<sup>502</sup> Ibíd., p. 71.

<sup>503</sup> Bravo, Viviana, “Neoliberalismo, protesta”, op. cit., p. 104.



<sup>504</sup> [Revista Principios, op. cit., p. 3.](#)

<sup>505</sup> [Ibíd., pp. 14-15. Para una lectura detallada del](#)

PCC

h durante las jornadas de protesta ver el trabajo de Reyes, Jaime: “El Partido Comunista de Chile y las manifestaciones sociales contra la dictadura: violencia política y ruptura del orden dictatorial. Santiago, 1980-1987”, en Historelo, N° 21, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), Colombia, 2019, pp. 91-32.

<sup>506</sup> [Bravo, Viviana, Piedras, barricadas, op. cit., p. 266. De la Maza, Gonzalo y Garcés, Mario, La explosión, op. cit., 32.](#)

<sup>507</sup> [Bravo, Viviana, Piedras, barricadas, Ibíd., p. 270. De la Maza, Gonzalo y Garcés, Mario, La explosión, Ibíd., p. 33.](#)

<sup>508</sup> [De la Maza, Gonzalo y Garcés, Mario, La explosión, Ibíd., p. 35. Bravo, Viviana, Piedras, barricadas, Ibíd. p. 273. Para una detallada caracterización de las tres primeras jornadas de protesta nacional ver: Boletín Hechos Urbanos N° 21, 22 y Suplemento: tercera protesta nacional 12 de julio de 1983.](#)

<sup>509</sup> [Bravo, Viviana, Piedras, barricadas, p. 274.](#)

<sup>510</sup> [Ibíd.](#)

<sup>511</sup> [Ibíd.](#)

<sup>512</sup> [Ver al respecto bibliografía citada.](#)

<sup>513</sup> [En el boletín Hechos Urbanos es posible encontrar un completo seguimiento de las diversas movilizaciones llevadas adelante durante este periodo por parte de pobladores, estudiantes y trabajadores de los programas de empleo de la dictadura \(](#)

PEM

y

POJH

). En relación con estos últimos actores, describen las numerosas demandas y formas de lucha desplegadas. Por ejemplo, indican que el 28 de noviembre de 1983, trabajadores de la comuna de Pudahuel “suspendieron sus labores para presentar un pliego de peticiones al Alcalde”, solicitando la eliminación del

PEM

para que “todos queden en el

POJH

”, “un salario de 12 mil pesos mensuales, que las mujeres no trabajen a la par con ellos, con chuzo y pala, sino en actividades de corte femenino y que se les

atienda sin trabas en los policlínicos del Ministerio de Salud”. En la misma línea, señalan que el 5 de diciembre de 1983, “por problemas laborales no trabajaron hoy en el estadio de Colo Colo, en Pedrero, un total de 500 obreros del

POJH

que están realizando la terminación del recinto deportivo”. Al respecto, ver: Hechos Urbanos N° 27, noviembre de 1983, p. 2.

<sup>514</sup> [Bravo, Viviana, Piedras, barricadas, Ibíd., p. 323.](#)

<sup>515</sup> [De la Maza, Gonzalo y Garcés, Mario, La explosión, op. cit., p. 70.](#)

<sup>516</sup> [Bravo, Viviana, Piedras, barricadas, op. cit., p. 370.](#)

<sup>517</sup> [Moulian, Tomás, Chile actual, op. cit., p. 304.](#)

<sup>518</sup> [Informe mensual. Vicaría de la Solidaridad, noviembre de 1984, p. 53;](#)  
[Informe mensual. Comisión Chilena de Derechos Humanos, N° 35, noviembre de 1984.](#)

<sup>519</sup> [Quiroga, Patricio, “Las jornadas de protesta nacional. Historia, estrategias y resultado \(1983-1986\)”, en Encuentro](#)

XXI

, año 4, N° 11,

CENDA

, Santiago, 1998, pp. 42-60.

<sup>520</sup> [Quiroga, Patricio, “Las jornadas”, Ibíd., p. 54.](#)

<sup>521</sup> [El Acuerdo Nacional es un texto firmado por diversos partidos políticos, entre los que se encontraban opositores y detractores de la dictadura. Fijaba las pautas centrales y el camino que debía recorrer la sociedad chilena para transitar pacíficamente a la democracia. Excluía de forma categórica al Partido Comunista de Chile y otras expresiones de la izquierda chilena en dicho acuerdo y proceso de transición.](#)

<sup>522</sup>

APSI

N°169, del 30 de diciembre de 1985 al 12 de enero de 1986. La oposición también da “vuelta la hoja”, p. 4.

<sup>523</sup> [Ibíd. Como vemos, la idea de convertir 1986 en el año decisivo y del gran paro nacional para derrotar a Pinochet fue sostenida ampliamente por la diversidad de los partidos de la oposición. Al respecto, la declaración de Armando Jaramillo, presidente de la Derecha Republicana y presidente de la Alianza Democrática, es decidora: “Vamos a conseguir la democracia aunque](#)

nos demoremos durante el curso del año, y no sería raro que en esta concertación, si no se quiere oír, serán las fuerzas sociales, no los políticos, los que van a llegar al paro nacional”. Según la revista

*APSI*

, de la misma forma “opinaron representantes como Claudio Huepe, de la

DC

; Víctor Barrueto, del

MAPU

; Ricardo Lagos, del

PS

Briones; Luis Maira, de la Izquierda Cristiana; Germán Correa, del

PS

Almeyda, y Fanny Pollarolo, del

PC

”.

*APSI*

Nº 173, del 24 de febrero al 9 de marzo de 1986, p. 16. Ver, además: “German Correa. En 1986 paralizaremos el país por varios días y nos proponemos terminar con la dictadura”. Unidad y Lucha. Órgano oficial del Comité Central del Partido Socialista de Chile, Nº 89, diciembre de 1985; “Del 1º de Mayo al Paro Nacional”, “la Movilización hacia el Paro Nacional”, “Pleno del Comité Central del

PS

: Batallas decisivas”. Unidad y Lucha. Órgano oficial del Comité Central del Partido Socialista de Chile, Nº 91, marzo-abril de 1986; “Chile Para”, “Derrotar

la ofensiva militar”, “86 v/s 89”. Unidad y Lucha. Órgano oficial del Comité Central del Partido Socialista de Chile, mayo de 1986.

524

*APSI*

Nº 169, del 30 de diciembre de 1985 al 12 de enero de 1986. Rodolfo Seguel. Opciones para un año decisivo, p. 15.

<sup>525</sup> Introducción a la planificación de la preparación del Paro Nacional (meses de marzo, abril y mayo de 1986), Documento interno, Partido Comunista, noviembre de 1985, p. 1.

<sup>526</sup> *Ibíd.*, p. 1.

<sup>527</sup> *Ibíd.*, p. 1.

<sup>528</sup> En la misma línea de análisis, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez estimaba que: “Ante la crisis global que atraviesa nuestra Patria y a la obstinación del tirano, el

FPMR

está profundamente convencido que el camino más viable es el del enfrentamiento multitudinario contra la opresión y esto hoy tiene un significado específico: Un poderoso Paro Nacional”. Planteaban, además, que como

“destacamento armado de los humillados, hambrientos, cesantes, perseguidos y del conjunto de patriotas que entendían que hay que terminar con Pinochet cuanto antes y a como dé lugar, adhiere incondicionalmente a esta iniciativa de los que reclaman democracia”. El Rodriguista, N° 16, marzo-junio, 1986, pp. 3 y 4.

<sup>529</sup> Introducción a la planificación de la preparación del Paro Nacional (meses de marzo, abril y mayo de 1986), Documento interno, Partido Comunista, noviembre de 1985, p. 3.

<sup>530</sup> Ibíd., p. 4.

<sup>531</sup> Ibíd., p. 4.

<sup>532</sup> Ibíd., p. 4.

<sup>533</sup> Ibíd., p. 4.

<sup>534</sup> Unidad y Lucha, op. cit. Ver además: “Colegios profesionales: Solo faltan acciones”,

*APSI*

, 10 al 23 de marzo de 1986, p. 3.

<sup>535</sup> [1° de mayo. “Es allanada la sede de la](#)

AGEC

h y son detenidos 56 profesores”; 20 de mayo: En medio de una ciudad sitiada por fuerzas militares y de carabineros, se intenta realizar la “Marcha por la Paz”, convocada por el Comando Nacional de Trabajadores,

CNT

, y distintas federaciones estudiantiles. Resultan detenidas numerosas personas, muere el estudiante Ronald Wood, a causa de dos balazos en el cráneo hechos por efectivos militares; 30 de mayo: Son detenidos 482 manifestantes que solicitan se deje sin efecto la municipalización de las escuelas y liceos; 16 al 18 de junio: Se realiza un paro de estudiantes universitarios, convocado por el Consejo de Federaciones Estudiantiles de Chile (

CONFECH

), con el objetivo de pedir el fin de la intervención militar en las universidades. Son desalojados y arrestados numerosos estudiantes de distintas universidades. Memorias para construir la paz, Arzobispado de Santiago. Fundación documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad, sin fecha de publicación, pp. 52-54. Ver, además: Revista Solidaridad, revista quincenal de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. N° 222, del 30 de abril al 16 de mayo; N° 223, del 15 de mayo al 30 de mayo; N° 224, del 31 de mayo al 12 de junio; N° 225, del 13 al 26 de junio de 1986.

<sup>536</sup> [Revista Solidaridad N° 227, 18 al 31 de julio de 1986, p. 18.](#)

<sup>537</sup> [Ibíd. A juicio de la revista Análisis, “con una estrategia que minimizaba el potencial del Paro del 2 y 3 de julio, el Gobierno tuvo apresuradamente que](#)



acudir a medidas represivas de emergencia para salvar una situación inesperada”. “Sorpresa. El Paro descolocó al Gobierno”, Análisis, N° 150, 7 al 13 de julio de 1986, p. 4.

<sup>538</sup> Ibíd.

<sup>539</sup> Quiroga, Patricio, “Las jornadas”, op. cit., p. 55.

<sup>540</sup> Quiroga, Patricio, Ibíd., p. 55. Según la revista Análisis, a partir de las 19:00 horas del 2 de julio, “Santiago era una ciudad ocupada militarmente y no dejó de serlo hasta la madrugada del 4 de julio, varias horas después de que el Paro formalmente debió haber finalizado”. Análisis, N° 150, 7 al 13 de julio de 1986, p. 5.

<sup>541</sup> Revista Solidaridad, N° 227, 18 al 31 de julio de 1986, p. 18.

<sup>542</sup> Análisis, N° 150, 7 al 13 de julio de 1986, p. 5.

<sup>543</sup> Según la revista Análisis, “lo que ocurrió en Santiago y provincias es la más significativa manifestación de movilización social opositora desde septiembre de 1973”. 2 y 3 de julio. Así fue el Paro. Análisis, N° 150, 7 al 13 de julio de 1986, p. 10.

<sup>544</sup> [Revista Solidaridad, N° 227, 18 al 31 de julio de 1986, p. 19. Según balance de la revista](#)

*APSI*

, “en provincias, los días 2 y 3 de julio estuvieron marcados por varios hitos comunes: paralización —en mayor o menor medida— de la locomoción colectiva; cierre parcial del comercio por la mañana y casi total al caer la tarde; considerable ausentismo en colegios, universidades y centros asistenciales; e intensos caceroleos, barricadas y manifestaciones sectoriales en la noche del 2 al 3”.

*APSI*

extra. 7 de julio de 1986. El Paro en provincias, p. 11.

<sup>545</sup> [Declaración del](#)

MDP

, julio de 1986.

<sup>546</sup> [Unidad y Lucha, N° 94, julio de 1986, p. 3. Ver, además: Fue un Gran Paro y Protesta Popular. Entrevista al consejero nacional del](#)

MDP

, Sergio Edwards: ¿Considera que lo del 2 y 3 de julio fue un paro nacional?

<sup>547</sup> [Unidad y Lucha, N° 94, julio de 1986. Fue un Gran Paro y Protesta Nacional,](#)

p. 4.

<sup>548</sup> El Rodriguista, N° 17, julio, 1986, pp. 3-5, 6.

<sup>549</sup> Conclusiones sobre el Paro del 2 y 3 de julio en Santiago, julio de 1986, p. 1.

<sup>550</sup> Ibíd. p. 2.

<sup>551</sup> Análisis, N° 151, 15 al 21 de julio de 1986. Después del Paro ¿Qué? Es la pregunta que muchos se hacen y que respondieron a Análisis dirigentes de distintos sectores sociales. pp. 14 y 15.

<sup>552</sup> Análisis, N° 150, 7 al 13 de julio de 1986. 2 y 3 de julio. Así fue el Paro, p. 10.

<sup>553</sup> Ibíd. p. 11.

<sup>554</sup> Ibíd.

*APSI*

extra. 7 de julio de 1986. Evaluaciones, porcentajes, contradicciones, p. 10.

<sup>556</sup> Conclusiones sobre el Paro del 2 y 3 de julio en Santiago, julio de 1986, p. 7.

<sup>557</sup> Ibíd.

<sup>558</sup> Ibíd. Comillas en el original. Mercurio es el nombre que recibe la quema de buses de la locomoción colectiva por parte de unidades de combates o fuerzas milicianas.

<sup>559</sup> Ibíd. Un balance similar señala el Partido Socialista a través de un informe que realizó un Comando de Paro del

MDP

con información proveniente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Para Santiago, con información variada por comunas, la locomoción colectiva habría alcanzado a partir de las 14:00 promedio, un 100% de paralización los dos días. En cuanto a las provincias, la paralización fue menor a la de Santiago, pero sobrepasó el 70%. Al respecto ver, Unidad y Lucha, N° 94, julio de 1986. Así fue el Paro, pp. 5-8.

<sup>560</sup> Ibíd.

*APSI*

extra. 7 de julio, 1986. Evaluaciones, porcentajes, contradicciones, p. 10.

<sup>562</sup> Análisis, N° 150, 7 al 13 de julio de 1986. 2 y 3 de julio. Así fue el Paro, p.12.

<sup>563</sup> Conclusiones sobre el Paro del 2 y 3 de julio en Santiago, julio de 1986, p. 8. Según informe del Partido Socialista de Chile, las cifras de Santiago daban muestra de éxito, aunque en regiones la paralización del comercio fue mucho menor. Unidad y Lucha, N° 94, julio de 1986. Así fue el Paro, pp. 5-8. Por su parte, Revista Análisis, en base a informes de organizaciones sociales, la Comisión de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas, señala que en regiones el comercio se mantuvo semiabierto y una menor actividad comercial en ferias y mercados. Análisis, N° 150, 7 al 13 de julio de 1986. 2 y 3 de julio. Así fue el Paro, p.12.

*APSI*

extra. 7 de julio, 1986. Evaluaciones, porcentajes, contradicciones, p. 10.

<sup>565</sup> Conclusiones sobre el Paro del 2 y 3 de julio en Santiago, julio de 1986, p. 8.

<sup>566</sup> Ibíd.

<sup>567</sup> Ibíd. p. 10. Mismas conclusiones podemos observar en el balance del Partido Socialista de Chile y en las revistas Análisis y

*APSI*

citadas.

<sup>568</sup>

*APSI*

extra. 7 de julio de 1986. Evaluaciones, porcentajes, contradicciones, p. 10.

<sup>569</sup> Conclusiones sobre el Paro del 2 y 3 de julio en Santiago, julio de 1986, p. 1. Mismas características muestra el balance realizado por el Partido Socialista de Chile. Unidad y Lucha. N° 94, julio de 1986. Así fue el Paro, pp. 5-8.

<sup>570</sup> Ibíd. pp. 3-5.

<sup>571</sup> Ibíd. p. 5.

<sup>572</sup> Ibíd.

<sup>573</sup>

*APSI*

extra. 7 de julio de 1986. Evaluaciones, porcentajes, contradicciones, p. 10.

<sup>574</sup> Conclusiones sobre el Paro del 2 y 3 de julio en Santiago, julio de 1986, p. 11.

<sup>575</sup> Ibíd. p. 12.

<sup>576</sup> Ibíd.

<sup>577</sup> Ibíd. p. 14.

<sup>578</sup> Ibíd. p. 24.

<sup>579</sup> Bravo, Viviana, Piedras, barricadas, op. cit.; Neoliberalismo, protesta, op. cit.; Quiroga, Patricio, “Las jornadas”, op. cit.; Garcés, Mario, “Los pobladores”, op. cit.; Moulian, Tomás, Chile actual, op. cit.

<sup>580</sup> [Cristina Moyano, siguiendo a Tomás Moulian, plantea que los análisis de los protagonistas de la transición se dividen en autoflagelantes y autocomplacientes.](#)

<sup>581</sup> [Moulian, Tomás, Chile actual anatomía de un mito,](#)

LOM

, Santiago, 1997; Huneeus, Carlos y Maldonado, L., Demócratas y nostálgicos del antiguo régimen. Los apoyos a la democracia en Chile, Revista Reis, N° 103, julio-septiembre 2003, pp. 9-49; Garretón, Manuel Antonio y Garretón, Roberto, La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales, Revista de ciencia política, vol. 30, N° 1, 2010, pp. 115-148; Huneeus, Carlos, La Democracia Semisoberana. Chile después de Pinochet, Editorial Taurus, Santiago, 2014.

<sup>582</sup> [Cornejo, Rodrigo, “El experimento educativo chileno 20 años después: Una mirada crítica a los logros y falencias del sistema escolar”, en Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 4, N° 1, España, 2006, pp. 118-129.](#)

<sup>583</sup> [Nos referimos a la articulación para este ciclo.](#)

<sup>584</sup> [Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Editorial Alianza, Madrid, 1994, p. 205.](#)



<sup>585</sup> Adhesión al movimiento estudiantil se eleva a 86% según encuesta de Imaginación. El Mostrador 16 de abril de 2013.  
<http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/04/16/adhesion-al-movimiento-estudiantil-se-eleva-a-86-segun-encuesta-de-imaginacion/>

<sup>586</sup> Melucci, Alberto, The Process of Collective Identity. Challenging Codes. Collective Action in Information Age Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 68-77.

<sup>587</sup> Revilla, María, “América Latina y los movimientos sociales: el presente de la ‘rebelión del coro’”, en Revista Nueva Sociedad, México, N° 227, 2010, pp. 51-67.

<sup>588</sup> La tarjeta que identifica a un joven chileno como estudiante y le da derecho a una tarifa rebajada en el transporte público. La tarjeta estudiantil era administrada por la asociación de transportistas, una institución privada que financiaba la confección y distribución con los pagos que hacían las propias familias. La Tercera 22 de mayo de 2014.  
<http://diario.latercera.com/edicionimpresa/gobierno-termina-con-demanda-historica-y-concede-pase-escolar-para-todo-el-ano/>

<sup>589</sup> Cornejo, Rodrigo, “El experimento educativo chileno 20 años después: Una mirada crítica a los logros y falencias del sistema escolar”, en Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, España, vol. 4 N° 1, 2006, pp. 118-129; Retamal, Jaime, Nos siguen pegando abajo. Jaime Guzmán, dictadura, concertación y alianza: 40 años de educación de Mercado. Editorial Ceibo, Santiago, 2013.

<sup>590</sup> Fuente: La Tercera, entre el 5 y el 13 de abril de 2001.

<sup>591</sup> El acceso a la prensa, la incorporación al debate público, las invitaciones desde la institucionalidad a la resolución de los conflictos y los esfuerzos que hacen los partidos por captar militantes, nos permite reconocer a los estudiantes secundarios como actores políticos en dicho contexto.

<sup>592</sup> De la Cuadra, Fernando, “Movimiento estudiantil en Chile: Lucha, participación y democracia”, en Revista Electrónica Síntesis, La Democracia en Disputa: Trabajo Social y Movimientos Sociales en América Latina, 2008. <http://jovenesenmovimiento.celaju.net/wp-content/uploads/2012/09/CHI-14.pdf>. Descargado el 20 de abril de 2017.

<sup>593</sup> La encuesta aplicada y analizada por el Instituto Nacional de la Juventud en el 2001 ratifica esta información. Los datos presentados señalan que entre 1997 y el 2000 la inscripción de los jóvenes en los registros electorales había disminuido en un 30%. Un 67,3% no se sentía representado por ningún partido político y un 77% creía que los partidos políticos no se preocupaban de ellos. Según la encuesta, las cifras de rechazo a las formas de la política tradicional aumentaban considerablemente en los estratos socioeconómicos bajos (Tercera Encuesta Nacional de la Juventud,

INJUV

2001).

<sup>594</sup> Para Harding, la ola de protestas desarrollada desde los años 2000 tiene como elemento en común la denuncia de que el capitalismo ha ido demasiado lejos. Citado en Giroux, 2005.

<sup>595</sup> La Tercera 10, 11 y 12 de abril de 2001.

<sup>596</sup> La Tercera, entre el 5 y el 13 de abril de 2001.

<sup>597</sup> La Tercera, entre el 5 y el 13 de abril de 2001.

<sup>598</sup> La Tercera, 9 de abril de 2001, p. 9.

<sup>599</sup> Ibíd.

<sup>600</sup> Colegio de élite de Santiago.

<sup>601</sup> Tilly, Charles, Acción Colectiva, Apuntes de Investigación del

*CEC*

*y*

*P*

, 2000, pp. 9-32.

<sup>602</sup> En los colegios municipales tradicionales o emblemáticos existe una tradición organizativa y una identidad política que pese a los años de desmovilización permanece y emerge en momentos coyunturales como este. En el caso de los colegios del “resto de la Región Metropolitana” están considerados aquellos de enseñanza básica, los privados y los particulares subvencionados, por lo que el universo es muy diverso. Al contabilizar solo los colegios de los sectores populares la cifra de adhesión es superior.

<sup>603</sup>

*EMOL*

, 7 de abril de 2001.

<sup>604</sup> La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (

LOCE

) fue la última ley que la dictadura aprobó, un día antes de dejar el gobierno.

<sup>605</sup> Llamada así por el uniforme escolar.

<sup>606</sup> El periódico La Tercera, en su edición del 24 de mayo, resume los puntos del

[petitorio estudiantil. “](#)

PSU

: uno de los temas es la gratuidad de la inscripción de la

PSU

. El gobierno ya se comprometió a dar una beca de inscripción a los jóvenes que pertenezcan al 60% de las familias con menos recursos (ingreso por persona 106.000). Pase escolar: basándose en la reforma constitucional que hace obligatorio los 12 años de escolaridad, los estudiantes sostienen que el pase escolar, tal como sucede en la educación básica, debería ser gratuito. El gobierno sostiene que es inviable.

JEC

: los jóvenes quieren que el gobierno revise la jornada escolar completa, que a su juicio no ha sido bien aplicada. Dicen que lo único que consiguen es que se hagan más clases de los mismos ramos y que terminen más cansados. Municipalización: los escolares rechazan el sistema actual de la enseñanza pública, la que estiman de baja calidad”.

[<sup>607</sup> La Tercera, 20 de mayo.](#)

[<sup>608</sup> La Tercera, 1 de junio.](#)

[<sup>609</sup> Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza Editorial, Madrid, 1994.](#)

<sup>610</sup> Para sustentar la afirmación sobre el cambio de percepción en la opinión pública hay diversas encuestas. Disponible en:  
<http://www.temas.cl/2011/05/26/a-cinco-anos-de-la-revolucion-pinguina/>

<sup>611</sup> González, Eduardo, La Violencia en la Política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Editorial

CESIC

, Madrid, 2002, p. 239.

<sup>612</sup> Comunidad de Secundario, cronología del Movimiento Estudiantil,  
<http://www.xem.cl/estudiantes/manifestaciones-estudiantiles/11014-cronologia-de-las-movilizaciones-estudiantiles.html>

<sup>613</sup> González, Eduardo, La Violencia en la Política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Editorial

CESIC

, Madrid, 2002, p. 22.

<sup>614</sup> Garcés, Mario, El despertar de la sociedad. El Movimiento estudiantil en América Latina y Chile, Editorial

LOM

, Santiago, 2011.

<sup>615</sup> Principalmente universitarios fuera de la dirección de sus federaciones.

<sup>616</sup> Los estudiantes planteaban que el nuevo marco legal legitimaba el lucro en la educación secundaria, mantenía la deficiente estructura administrativa dejando en manos de padres y empresarios el rol de educar, desligando al Estado de tal responsabilidad.

<sup>617</sup> Se refiere a la subvención a la demanda por parte del Estado chileno.

<sup>618</sup> La ley de Universidades, aprobada por la dictadura en 1981, prohibía el lucro en la educación superior, pero no existía la misma prohibición para los otros niveles de la educación.

<sup>619</sup> Mapa de los “ultras” que dominan la

CONFECH

, La Tercera, 13 de agosto de 2011. Disponibñe en:  
<http://diario.latercera.com/2011/08/13/01/contenido/reportajes/25-79936-9-mapa-de-los-ultras-que-dominan-laconfech.shtml>

<sup>620</sup> En las militancias revolucionarias encontramos grupos de tendencias anarquistas, guevaristas y marxistas leninistas.

621

*EMOL*

, 5 de agosto de 2011,

<http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/08/04/496275/violento-incendio-destruyo-tienda-la-polar-en-medio-de-protestas.html>

<sup>622</sup> Alta convocatoria en paro de estudiantes. La Tercera, miércoles 11 de abril de 2001, p. 12.

<sup>623</sup> La otra cara de las protestas escolares. La Tercera, 14 de abril de 2001, p. 16.

<sup>624</sup> Encuesta realizada por la Facultad de Economía de la Universidad Mayor. La Tercera, 30 de abril del 2001, p. 10.

625

INDH

, 2011, p. 7.

<sup>626</sup> Lozoya, Ivette, “Democracia y Violencia política. El Mapu Lautaro y la derrota de la vía revolucionaria en los 90”, en Pozzi y Pérez, Historia oral e



[historia política,](#)

LOM

, Santiago, 2012.

<sup>627</sup> [Fuentes, Claudio, “La inevitable ‘mano dura’: sociedad civil y violencia policial en Argentina y Chile”, en Revista de ciencia política, Santiago, 24 \(2\), 2004, 3-28, p. 11.](#)

<sup>628</sup> [El Mostrador, 23 de octubre de 2011,   
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/23/confech-recurre-a-la-cidh-para-denunciar-violencia-policial/](#)

<sup>629</sup>

*EMOL*

, 2 de septiembre de 2011,  
<http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/09/02/501242/confech-presento-denuncia-por-presunta-agresion-a-estudiante-por-parte-de-carabineros.html>

<sup>630</sup> [El Siglo, 15 de junio de 2007, p. 6.](#)

<sup>631</sup> [López, Diego, El movimiento sindical en el gobierno de Michelle Bachelet: nuevas acciones y liderazgos, Friederich Ebert Stiftung, Santiago, 2009; Baltera, Pablo y Dussert, Juan, Liderazgos sindicales emergentes. El caso de los](#)

[trabajadores subcontratados de la salmonicultura, cobre y forestales, División de Estudios, Dirección del Trabajo de Chile, Santiago, 2010; Villalobos, Cristóbal, “Subcontratación y sindicalismo en el siglo](#)

XXI

: Relaciones sociales, Trabajo y Organización Sindical en la gran minería del cobre chileno”, en Revista

*GPT*

, N° 8, Universidad de Santiago, Santiago, 2010.

<sup>632</sup> [Aravena, Antonio y Núñez, Daniel \(eds.\), El renacer de la huelga obrera en Chile,](#)

ICAL

, Santiago, 2009.

<sup>633</sup> [Entendemos por estrategias sindicales a las elaboraciones que generan las organizaciones de trabajadores para afrontar sus diversas luchas políticas y laborales. A partir de estas, articulan distintos recursos de poder, los cuales se han definido como los insumos estructurales, asociativos, sociales e institucionales que desarrollan los sindicatos. Respecto a este debate, ver: Marticorena, Clara y D’Lurso, Lucila, “El poder de los/as trabajadores/as: una revisión crítica de los abordajes conceptuales para su estudio”, en Revista de Estudios Marítimos y Sociales, N° 18, enero de 2021, pp. 171-198; Schmalz, Stefan, “Los recursos de poder para la transformación sindical”, en Nueva Sociedad, Número Especial: Sindicatos en Transformación, 2017, pp. 20-42.](#)

<sup>634</sup> [“Umbrales sociales 2006. Propuesta para la Futura Política Social”,](#)

Fundación para la Superación de la Pobreza, 2005.

<sup>635</sup> “Chile. Crecimiento, empleo y el desafío de la justicia social”, Informe Oficina Internacional del Trabajo, Santiago, 1998.

<sup>636</sup> Echeverría, Magdalena y López, Diego (resp.), “Flexibilidad laboral en Chile: Las empresas y las personas”, Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo, 2004.

<sup>637</sup> Véanse las Encuestas Laborales de la Dirección del Trabajo,

ENCLA

1998, 1999, 2002 y 2004.

<sup>638</sup> Sobre las cifras véase: Meller, Patricio, “La Historia Reciente Contada Gráficamente. Comparación de los Indicadores económico-sociales del gobierno de Pinochet con los Gobiernos de la Concertación”, Documento

CIEPLAN

, Santiago, 2005.

<sup>639</sup> Cifras en notas de prensa en: La Tercera, 29 de marzo de 1997, pp. 14-15. La Tercera, 6 de abril de 1997, p. 6. La Tercera, 17 de febrero de 2002, p. 26; El Mercurio, 17 de agosto de 2002, p. D1. Un estudio a fines de los 90, en: Frigolett, Hernán y Sanhueza, Alejandra, “Evolución del gasto en consumo de

[los hogares en Chile, 1985-1995”, Documentos](#)

MIDEPLAN

, Unidad de Estudios Prospectivos, 1999.

<sup>640</sup> [Ariztía, Tomás, “El consumo y los sectores medios en el Chile de los 90”, Tesis para optar al Título de Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2002; Araujo, Kathya y Martuccelli, Danilo, Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Tomo](#)

*I*

,

LOM

, Santiago, 2012; Marambio, Alejandro, “Bancarización, crédito y endeudamiento en los sectores medios chilenos: Tácticas de acceso, diferenciación social y el espejismo de la movilidad”, Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización, Universidad de Chile, Santiago, 2011.

<sup>641</sup> [“Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional,](#)

CASEN

2013”, Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, 2013.

<sup>642</sup> [“Las Paradojas de la Modernización”, Programa de Desarrollo Humano en Chile, Santiago, Chile, 1998, p. 121.](#)

<sup>643</sup> [Espinosa, Malva \(resp.\), “Calidad de Vida en el Trabajo: Percepciones de los trabajadores”, en Cuadernos de Investigación, Dirección del Trabajo, 2002, pp. 64-74.](#)

<sup>644</sup> [Frank, Volker, “Políticas sin política: el fracaso de la concertación social en el Chile democrático, 1990-2000”, y Osorio, Sebastián, “De la estrategia concertacionista al sindicalismo de contención. Un balance de la](#)

CUT

en la postdictadura, 1990-2016”, en Ponce, José, Santibáñez, Camilo y Pinto, José, Trabajadores & trabajadoras. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno. 1979-2017, América en Movimiento, Valparaíso, 2017.

<sup>645</sup> [Espinosa, Malva \(resp.\), “Calidad de Vida en el Trabajo: Percepciones... op. cit.](#)

<sup>646</sup> [“Anuarios Estadísticos Dirección del Trabajo”, 2009.](#)

<sup>647</sup> [Una profundización pero sintetizada de estos planteamientos puede verse en Rojas, Jorge y Aravena, Antonio, “El mundo del trabajo y el trabajo asalariado en Chile”, en Escobar, Patricio \(ed.\), Trabajadores y empleo en el Chile de los noventa,](#)

LOM-PET

, Santiago, 1999, pp. 137-222; y en Osorio, Sebastián, “De la estrategia... op.

cit.

<sup>648</sup> [Ponce, José y Álvarez, Rolando, “¿Comunismo en una era postcomunista? La política sindical del partido comunista de Chile, 1990-2010”, Revista Nuestra Historia, N° 1,](#)

CIM

, España, 2016.

<sup>649</sup> [Araya, Rodrigo, Organizaciones sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los consensos: 1983-1994, Universidad Finis Terrae, 2015, Santiago; y Osorio, Sebastián, “De la estrategia... op. cit.](#)

<sup>650</sup> [Una referencia en Agacino, Rafael, González, Cristián y Rojas, Jorge, Capital transnacional y trabajo. El desarrollo minero en Chile,](#)

LOM

, Chile, 1998.

<sup>651</sup> [Ayala, Jorge, Historia del movimiento sindical de Huachipato 1979-2013, Escaparate, Concepción, 2016.](#)

<sup>652</sup> [Zapata, Francisco, Historia mínima de: el sindicalismo latinoamericano, Colegio de México, México, 2013.](#)

<sup>653</sup> [Ponce, José, “Huelgas y conflictos en democracia. Cultura política y estrategias sindicales en la postdictadura chilena \(1990-2003\)”, Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2021.](#)

<sup>654</sup> [Ponce, José, “Movimiento sindical en transición: Conflictividad y cultura política sindical en la postdictadura chilena \(1990-2010\)”, en Ponce, José, Pérez, Aníbal y Acevedo, Nicolás, Transiciones. Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena. 1988-2018, América en Movimiento, Valparaíso, 2018, pp. 311-350.](#)

<sup>655</sup> [Álvarez, Rolando, Gremios Empresariales, política y gobierno. Los casos de Chile y Perú \(1986-2010\),](#)

LOM

, Santiago, 2014; Frank, Volker, “Política sin política... op. cit.

<sup>656</sup> [Un balance sobre este gobierno en: Muñoz, Óscar y Stefoni, Carolina \(coord.\), El periodo del Presidente Frei Ruiz-Tagle, Editorial Universitaria, Santiago, 2003.](#)

<sup>657</sup> [Frank, Volker, “Política sin política... op. cit.](#)

<sup>658</sup> [Ponce, José, “Huelgas y conflictos... op. cit.](#)

<sup>659</sup> [Osorio, Sebastián, “Trayectoria y cambios en la política del Movimiento Sindical en Chile, 1990-2010: El caso de la](#)

CUT

, entre la independencia política y la integración al bloque Histórico Neoliberal”, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2014.

<sup>660</sup> [Álvarez, Rolando, Gremios Empresariales... op. cit.](#)

<sup>661</sup> [Moulán, Tomás, El consumo me consume,](#)

LOM

, Santiago, 1998.

<sup>662</sup> [Ponce, José, “Huelgas y conflictos... op. cit.](#)

<sup>663</sup> [Las ideas las tomamos de: Rozas, María, Globalización y Concertación social, Santiago, oil, 1998.](#)



<sup>664</sup> Ponce, José y Álvarez, Rolando, “¿Comunismo después del... op. cit.

<sup>665</sup> Martínez, Arturo, “Estrategia sindical en un Chile internacionalizado”, en Ensigna, Jaime (ed.), Mitos y realidades del mercado laboral en Chile, Fundación Friedrich Ebert, Santiago, 2005.

<sup>666</sup> Agacino, Rafael, “El capitalismo chileno y los derechos de los trabajadores”, en Cuadernos del Trabajo, n° 9, Universidad Veracruzana, Veracruz, 2001.

<sup>667</sup> El Mercurio, 3 de agosto de 2003, cuerpo B, pp. 20 y 21.

<sup>668</sup> Entrevista Jorge Peña, noviembre de 2018.

<sup>669</sup> El Siglo, 26 de diciembre de 2003, p. 6.

<sup>670</sup> Entrevista Jorge Peña, noviembre de 2018.

<sup>671</sup> Ibíd.

<sup>672</sup> El Siglo, 26 de diciembre de 2003, p. 6.

<sup>673</sup> Ibíd., p. 7.

<sup>674</sup> Entrevista Jorge Peña, noviembre de 2018.

<sup>675</sup> Ibíd.

<sup>676</sup> Entrevista a Cristián Cuevas en Amtman, Carla, Barrera, Esteban y Serra, María, “Revirtiendo la derrota histórica del sindicalismo. La conformación de la Confederación de Trabajadores del Cobre y la Gran Huelga del año 2007”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación, Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 2011, Anexos.

<sup>677</sup> Este párrafo se ha basado en una relectura de lo entregado por Amtman, Carla, Barrera, Esteban y Serra, María, “Revirtiendo la derrota... op. cit.; y Montecinos, Alejandro, “Sindicato siteco: Memorias, Identidad, Hegemonía. 2000-2006”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Santiago, Chile, 2014. Este último detalla más este fenómeno, aunque a nivel interno de la organización del

SITECO

.

<sup>678</sup> [Ponce, José, “Vino viejo en copas nuevas. Los trabajadores subcontractados y la acción sindical cuprífera en la postdictadura chilena \(2005-2008\)”, en Ponce, José, Santibáñez, Camilo y Pinto, Julio, Trabajadores y trabajadoras. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno, 1979-2017, América en Movimiento, Valparaíso, 2017.](#)

<sup>679</sup> [Álvarez, Rolando, Gremios empresariales... op. cit.](#)

<sup>680</sup> [La Tercera, 20 de junio de 2005, p. 26; La Tercera, 7 de mayo de 2005, p. 2. Un estudio sobre condiciones laborales y salariales de la época, en Álvarez, Rolando y Aravena, Antonio \(eds.\), Los trabajadores y la nueva cuestión social. Repensando la realidad laboral y sindical en Chile,](#)

ICAL

, Santiago, 2004.

<sup>681</sup> [El Siglo, 30 de diciembre de 2005, p. 14.](#)

<sup>682</sup> [Estrategia, 3 de enero de 2006, p. 25; La Tercera, 5 de enero de 2006, p. 10; La Tercera, 6 de enero de 2006, p. 4.](#)

<sup>683</sup> [El Siglo, 6 de enero de 2006, p. 14; La Tercera, 6 de enero de 2006, p. 29; La Tercera, 7 de enero de 2006, p. 54; La Tercera, 12 de enero de 2006, p. 21; El Siglo, 13 de enero de 2006, p. 5; La Tercera, 13 de enero de 2006, p. 39.](#)

<sup>684</sup> [La Tercera, 8 de febrero de 2006, p. 26.](#)

<sup>685</sup> [Entrevista a Jorge Peña, noviembre de 2018.](#)

<sup>686</sup> [Garretón, Manuel, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile. 1990-2010,](#)

ARCIS-CLACSO

, Santiago, 2010.

<sup>687</sup> [La Tercera, 23 de abril de 2006, Reportajes pp. 4-5; La Tercera, 25 de abril de 2006, p. 2; La Tercera, 7 de mayo de 2006, p. 10.](#)

<sup>688</sup> [Álvarez, Rolando, “¿Desde fuera o dentro de la institucionalidad? La ‘Huelga larga del salmón’ y las nuevas estrategias sindicales en Chile \(2006-2008\)”, en Aravena, Antonio y Núñez, Daniel \(eds.\), El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo](#)

XXI

,

ICAL

, Santiago, 2009, pp. 60-90.

<sup>689</sup> [La Nación, 27 de junio de 2007; Entrevista a Jorge Peña, noviembre de 2018.](#)

<sup>690</sup> [Sobre el desarrollo forestal bajo la dictadura, ver: Contreras, Rodolfo, Más allá del Bosque. La industria forestal en Chile, Amerindia Estudios, Santiago, 1989.](#)

<sup>691</sup>

CONAF

, “Plantaciones y pobreza en comunas forestales”, 2014. Documento de trabajo.

<sup>692</sup> [Canals, Mauricio, “Los Trabajadores Forestales de la](#)

VIII

Región. Condiciones de Vida y Horizontes Políticos 1990-2013”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2014; Díaz, Estrella, López, Diego y Riquelme, Verónica, “Los derechos laborales del Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos en la industria Forestal y en la industria del Salmón”, en Cuaderno de Investigación, N° 32, Dirección del Trabajo, 2007; Durán, Gonzalo y Kremerman, Marco, “Informe Industria Forestal”, en Cuaderno de Investigación, N° 3, Fundación Sol, 2007-2008; Organización Internacional del Trabajo, “El Trabajo decente en la Industria Forestal en Chile”, en Documento de Trabajo,

OIT

, 2012.

<sup>693</sup> [Entrevista a Jorge González, noviembre de 2018.](#)

<sup>694</sup> [Ruminot, Nelson, “La huelga en Forestal Arauco: de las acciones sindicales al forzamiento de la negociación colectiva inter-empresa”, en Aravena, Antonio y Núñez, Daniel \(eds.\), El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo](#)

*XXI*

,

ICAL

, Santiago, 2009, pp. 110-125.

<sup>695</sup> [Ruminot, Nelson., “La huelga forestal... op. cit.; Entrevista Jorge González, noviembre de 2018.](#)

<sup>696</sup> [El Siglo, 15 de marzo de 2007, p. 20; El Siglo, 23 de marzo de 2007, p. 21; El Siglo, 27 de abril de 2007, p. 26.](#)

<sup>697</sup> [El Siglo, 4 de mayo de 2007, p. 18.](#)

<sup>698</sup> [Los recuerdos del dirigente son de: Entrevista a Jorge González, noviembre](#)

del 2018. Los datos son de El Siglo, 27 de abril de 2007, p. 26; El Siglo, 11 de mayo de 2007, pp. 6-8. Otras crónicas en: El Mercurio, 6 de mayo de 2007, p. C11-B6; El Mercurio, 7 de mayo de 2007, p. C10; El Mercurio, 9 de mayo de 2007, p. C7.

<sup>699</sup> El Mercurio, 6 de mayo de 2007, p. B6; El Mercurio, 29 de mayo de 2007, p. B18; El Mercurio, 8 de julio de 2007, pp. B4-B5.

<sup>700</sup> Entrevista a Jorge Peña, noviembre de 2018.

<sup>701</sup> La Nación, 31 de julio de 2007, p. 8.

<sup>702</sup> La Nación, 31 de julio de 2007, p. 6.

<sup>703</sup> La Tercera, 5 de diciembre de 2007, p. 28.

<sup>704</sup> Capital, 20 de abril de 2008.

<sup>705</sup> La Tercera, 14 de diciembre de 2007, p. 15.

<sup>706</sup> [Álvarez, Rolando, “¿Desde fuera o... op. cit.](#)

<sup>707</sup> [La Tercera, 17 de febrero de 2008, Reportajes p. 4.](#)

<sup>708</sup> [Pinto, Francisco y Kremerman, Marco, “Cultivando Pobreza: Condiciones laborales en la Salmonicultura”, Terram Publicaciones, 2005.](#)

<sup>709</sup> [Un análisis en detalle en los artículos: Aravena, Antonio, “Los trabajadores de la industria del Salmón en Chile” y Núñez, Daniel, “El suministro de personal en la industria del salmón y la degradación social del trabajo”, en Alternativa, N° 24, diciembre de 2006.](#)

<sup>710</sup> [Álvarez, Rolando, “La ‘identidad precaria’: Sumisión y resistencia laboral en Chile. El caso de los trabajadores precarios del salmón”, en Alternativa, N° 24, diciembre de 2006.](#)

<sup>711</sup> [Álvarez, Rolando, “¿Desde fuera o... op. cit.](#)

<sup>712</sup> [El Siglo, 4 de abril de 2008, p. 17.](#)

<sup>713</sup> [Álvarez, Rolando, “¿Desde fuera o... op. cit.](#)



<sup>714</sup> [El Siglo, 28 de septiembre de 2007, p. 20; La Nación, 17 de abril de 2008, p. 12.](#)

<sup>715</sup> [Entrevista a Jorge Peña, noviembre de 2018; Entrevista a Cristián Cuevas... op. cit.](#)

<sup>716</sup> [La Nación, 22 de abril de 2008, pp. 22-23; La Nación, 22 de abril de 2008, p. 2; La Nación, 29 de abril de 2008, pp. 2-3.](#)

<sup>717</sup> [La Nación, 18 de abril de 2008, p. 11; La Nación, 22 de abril de 2008, p. 3; La Nación, 28 de abril de 2008, p. 9.](#)

<sup>718</sup> [La Nación, 2 de mayo de 2008, p. 12.](#)

<sup>719</sup> [Entrevista a Jorge Peña, noviembre de 2018.](#)

<sup>720</sup> [La Nación, 4 de mayo de 2008, p. 4.](#)

<sup>721</sup> [El Siglo, 17 de octubre de 2008, p. 11; El Siglo, 5 de junio de 2009, p. 22.](#)

<sup>722</sup> [Ponce, José y Álvarez, Rolando, “¿Comunismo después... op. cit.](#)

<sup>723</sup> [El Siglo, 4 de septiembre de 2008, pp. 12-14. Un análisis en: Osorio, Sebastián, “De la estrategia... op. cit.](#)

<sup>724</sup> [El Siglo, 21 de noviembre de 2008, pp. 10-11; El Siglo, 13 de noviembre de 2009.](#)

<sup>725</sup> [El Siglo, 2 de octubre de 2009, p. 21.](#)

<sup>726</sup> [El Mercurio, 17 de noviembre de 2009, p. B12.](#)

<sup>727</sup> [Álvarez, Rolando, “La ‘identidad precaria’... op. cit.](#)

<sup>728</sup> [Harvey, David, Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid, 2007, p. 214.](#)

<sup>729</sup> [Sunkel, Osvaldo, El presente como historia. Dos siglos de cambio y frustración en Chile, Catalonia, Santiago, 2011, p. 320. Gárate, Manuel, La revolución capitalista de Chile \(1973-2003\), Ediciones Universidad Alberto](#)

[Hurtado, Santiago, 2012, p. 589.](#)

<sup>730</sup> [Muñoz Tamayo, Víctor, Historia de la](#)

*UDI*

*. Generaciones y cultura política (1973-2013), Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2016, p. 398.*

<sup>731</sup> [Weyland, Kurt, “La política económica en la nueva democracia chilena”, en Drake, Paul y Jaksic, Iván \(comp.\), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa.](#)

*LOM*

, Santiago, 2002, pp. 65-92.

<sup>732</sup> [Garretón, Manuel Antonio, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la concertación en Chile, 1990-2010,](#)

*ARCIS-CLACSO*

-El Desconcierto, Santiago, 2012, p. 199.

<sup>733</sup> [Gudynas, Eduardo, “Si eres tan progresista ¿por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas”, en Ecuador Debate, Centro Andino de Acción Popular, Quito, 2010, 79, pp. 61-81. Disponible en: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3531/1/RFLACSO-ED79-05-Gudynas.pdf](#)

<sup>734</sup> [Svampa, Maristella, “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”, en Revista del Observatorio Social de América Latina,](#)

CLACSO

, Buenos Aires, 2012, V 13, N° 32, p. 17. Disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf>

<sup>735</sup> [Harvey, David, Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Akal, Madrid, 2009, p. 447.](#)

<sup>736</sup> [Machado, Horacio, “Crítica a la razón progresista. Una mirada marxista sobre el extractivismo/colonialismo del siglo](#)

XXI

”, en Actuel Marx Intervenciones,

LOM

, N° 19, Santiago, 2015, pp. 137-173.

<sup>737</sup> [Ponce, José Ignacio, “Movimiento sindical en transición. Conflictividad y cultura política sindical en la postdictadura chilena \(1990-2010\)”, en Ponce, José Ignacio; Pérez, Aníbal y Acevedo, Nicolás \(comps.\), Transiciones. Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena 1988-2018, América en Movimiento, Valparaíso, 2018, pp. 311-350.](#)

<sup>738</sup> Interferencia, 11 de octubre de 2019. Disponible en:  
<https://interferencia.cl/articulos/ninossacrificio-1deg-coronel-arsenico-y-niquel-veneno-de-las-termoelectricas>

<sup>739</sup> La Tercera, 6 de abril de 2019. Disponible en:  
<https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-olvidada-escuela-la-greda/603939/>

<sup>740</sup> Resumen, 12 de septiembre de 2018. Disponible en:  
<https://resumen.cl/articulos/resistencia-en-quintero-cronica-de-un-levantamiento-contra-la-contaminacion>

<sup>741</sup> El Ciudadano, 24 de agosto de 2019. Disponible en:  
<https://www.elciudadano.com/chile/defensa-del-mar-de-mehuín-durante-23-años-celulosa-araucó-se-las-ha-arreglado-sin-necesidad-del-ducto-y-lo-pueden-seguir-haciendo/08/24/>

<sup>742</sup> Codexverde, 20 de agosto de 2020. Disponible en:  
<https://codexverde.cl/como-se-regularan-los-olores-en-los-planteles-porcinos-de-chile/>

<sup>743</sup> Aros, Felipe y Marchant, Carla, “Transformaciones en la identidad territorial en Chiloé desde la llegada de la industria salmonera: el caso de la localidad de Quemchi”, en Espacios: Revista de Geografía, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, v 7, n° 13, 2017, pp. 47-71. Disponible en:

<http://revistas.academia.cl/index.php/esp/article/view/743>

<sup>744</sup> [Muñoz Gomá, Óscar, Aguas Arriba: la transformación socioeconómica del ecosistema Llanquihue-Chiloé \(Chile\) durante los años 90,](#)

CLACSO

, Buenos Aires, 2009, p. 165. Disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160318022432/cap4.pdf> el  
16/08/2020; Buschmann, Alejandro y Fortt, Antonia, “Efectos ambientales de la  
acuicultura intensiva y alternativas para un desarrollo sustentable”, en Revista  
Ambiente y Desarrollo,

CIPMA

, v 21, n° 3, 2005, pp. 58-64. Disponible en:  
[https://www.researchgate.net/publication/237744781\\_Efectos\\_ambientales\\_de\\_la](https://www.researchgate.net/publication/237744781_Efectos_ambientales_de_la)

<sup>745</sup> [Santarcángelo, Juan; Schteingart, Daniel y Porta, Fernando, “Cadenas globales de valor: una mirada crítica a una nueva forma de pensar el desarrollo”, en Cuadernos de Economía Crítica, Sociedad de Economía Crítica \(](#)

SEC

) de Argentina y Uruguay, Buenos Aires, 2017, vol. 4, N° 7, pp. 99-119.  
Disponible en:  
<http://sociedadeconomiacritica.org/ojs/index.php/cec/article/view/219>

<sup>746</sup> [Muñoz Gomá, Óscar, Aguas Arriba: la transformación socioeconómica del ecosistema Llanquihue-Chiloé \(Chile\) durante los años 90,](#)

CLACSO

, Buenos Aires, 2009, p. 165. Disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160318022432/cap4.pdf> el  
16/08/2020; Buschmann, Alejandro y Fortt, Antonia, “Efectos ambientales de la  
acuicultura intensiva y alternativas para un desarrollo sustentable”, en Revista  
Ambiente y Desarrollo,

CIPMA

, vol. 21, N° 3, 2005, pp. 58-64. Disponible en:  
[https://www.researchgate.net/publication/237744781\\_Efectos\\_ambientales\\_de\\_la](https://www.researchgate.net/publication/237744781_Efectos_ambientales_de_la)

<sup>747</sup> [Mondaca, Eduardo, El Archipiélago de Chiloé y los contornos inciertos de su futuro. Colonialidad y saqueo extractivista, Centro de Estudios Sociales de Chiloé \(](#)

CESCH

), Chiloé, 2016, p. 33. Disponible en: [https://30f7b93d-3010-4618-8538-c297f7e9581c.filesusr.com/ugd/3f1b41\\_4e0d962eeff6486f9ffc342429f54454.pdf](https://30f7b93d-3010-4618-8538-c297f7e9581c.filesusr.com/ugd/3f1b41_4e0d962eeff6486f9ffc342429f54454.pdf)

<sup>748</sup> [El Mostrador, 25 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/02/25/quienes-son-los-peces-gordos-de-la-cuestionada-industria-salmonera-flujos-de-capitales-renueva-la-propiedad-del-sector/](#)

<sup>749</sup> [Ramos, Virginia, “El retorno de los clústers en Chile: La no sustentabilidad del clúster del salmón en Chiloé”, en Revista Encrucijada Americana, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, año 7, N° 1, pp. 43-55. Disponible en: https://encrucijadaamericana.uahurtado.cl/index.php/ea/article/view/59](#)

<sup>750</sup> [Aravena, Antonio, “La industria del salmón en Chile: ¿crecimiento social o explotación laboral?”](#),

CLACSO

(ed.), en Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales (Vol 1),

CLACSO

, Buenos Aires, 2009, pp. 397-427. Disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160216050551/20.pdf>

<sup>751</sup> [El ciudadano, 11 de marzo de 2013. Disponible en:  
https://www.elciudadano.com/organizacion-social/declaracion-pensar-chiloe-primer-encuentro-de-organizaciones-comunitarias-y-autonomas-del-archipielago-de-chiloe/03/11/](#)

<sup>752</sup> [Entrevista realizada a Carmen Barría, Curaco de Vélez, 21 de junio de 2021.](#)

<sup>753</sup> [El Desconcierto, 18 de febrero de 2016. Disponible en:  
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2016/02/18/la-marcha-de-los-privados-en-chiloe.html](#)

<sup>754</sup> [Entrevista realizada a Elías Bahamonde, Valparaíso, 24 de junio de 2021.](#)

<sup>755</sup> [Entrevista realizada a Paulina Maldonado, Achao, 25 de junio de 2021.](#)



<sup>756</sup> Resumen, enero de 2017. Disponible en: <https://resumen.cl/articulos/estudio-revela-presencia-de-pesticidas-nocivos-en-sedimentos-junto-a-centros-salmoneros-en-chiloe>

<sup>757</sup> Torres, Vladia y Montaña, Álvaro, “Acumulación salmonera en Chiloé. Las tensiones territoriales de una relación desigual”, en Mondaca, Eduardo, Uribe, Esteban, Henríquez, Sebastián y Torres, Vladia (eds.), Archipiélago de Chiloé: nuevas lecturas de un territorio en movimiento, Centro de Estudios Sociales de Chiloé (cesch), Chiloé, 2018, pp. 70-71. Disponible en: <https://www.territoriocesch.com/general-1/jtezux8517/Acumulaci%C3%B3n-salmonera-en-Chilo%C3%A9-las-tensiones-territoriales-de-una-relaci%C3%B3n-desigual>

<sup>758</sup> La Opinión de Chiloé, 19 de mayo de 2016. Disponible en: <https://laopiniondechiloe.cl/ancud-cierra-historicas-protestas-en-15-comunas-de-la-region-de-los-lagos/>

<sup>759</sup> Entrevista realizada a José Luis Vargas, Puqueldón, 23 de junio de 2021.

<sup>760</sup>

OLCA

, 6 de mayo de 2016. Disponible en: <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=106211>

<sup>761</sup> Entrevista realizada a Christian Ruiz, Puerto Montt, 23 de junio de 2021.

<sup>762</sup> José Luis Vargas, Puqueldón, 23 de junio de 2021.

<sup>763</sup> Elías Bahamonde, Valparaíso, 24 de junio de 2021.

<sup>764</sup> Christian Ruiz, Puerto Montt, 23 de junio de 2021.

<sup>765</sup> Entrevista realizada a Deborah Haase, Ancud, 29 de junio de 2021.

<sup>766</sup> Expresión popular chilena referida a denuncias públicas que pretenden exponer una situación ilegal o antiética que no ha sido debidamente procesada por la justicia.

<sup>767</sup> “Estudiantes Funan a empresa salmonera AquaChile arrojando pescados afuera de sus oficinas”, 13 de mayo de 2016. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2ke85q1OjnA>

<sup>768</sup> Elías Bahamonde, Valparaíso, 24 de junio de 2021.

<sup>769</sup> Carmen Barría, Curaco de Vélez, 21 de junio de 2021.

<sup>770</sup> Sergio Mayorga en “Estado salmonero”, 22 de agosto de 2019. Disponible en: [https://www.youtube.com/watch?v=D\\_fg1MV5YCI](https://www.youtube.com/watch?v=D_fg1MV5YCI)

<sup>771</sup> Mondaca, Eduardo, “Acumulación salmonera en Chiloé. Las tensiones territoriales de una relación desigual”, en Mondaca, Eduardo, Uribe, Esteban, Henríquez, Sebastián y Torres, Vladia (eds.), Archipiélago de Chiloé: nuevas lecturas de un territorio en movimiento, Centro de Estudios Sociales de Chiloé (

CESCH

), Chiloé, 2018, p. 30. Disponible en: <https://www.territoriocesch.com/general-1/jtezux8517/Acumulaci%C3%B3n-salmonera-en-Chilo%C3%A9-las-tensiones-territoriales-de-una-relaci%C3%B3n-desigual>

<sup>772</sup> Paulina Maldonado, Achao, 25 de junio de 2021.

<sup>773</sup> Christian Ruiz, Puerto Montt, 23 de junio de 2021.

<sup>774</sup> Deborah Haase, Ancud, 29 de junio de 2021.

<sup>775</sup> Resumen, 25 de mayo de 2021. Disponible en: <https://resumen.cl/articulos/constituyente-adriana-ampuero-somos-la-gente-que->

[estuvo-en-el-mayo-chilote-y-en-practicamente-todas-las-movilizaciones-sociales-y-medioambientales](#)

<sup>776</sup> [Carmen Barría, Curaco de Vélez, 21 de junio de 2021.](#)

<sup>777</sup> [Deborah Haase, Ancud, 29 de junio de 2021.](#)

<sup>778</sup> [José Luis Vargas, Puqueldón, 23 de junio de 2021.](#)

<sup>779</sup> [Wolf, Eric, Europa y la gente sin historia,](#)

FCE

, Buenos Aires, 2000 [1982], p. 3.

<sup>780</sup> [Asad, Talal, “Conscripts of Western Civilization”, en Ward Gailey, Cristine \(ed.\), Civilization in Crisis: Anthropological Perspective. Essays in honor of Stanley Diamond, vol. 1, Dialectical Anthropology, University of Florida Press, Gainesville, 1992.](#)

<sup>781</sup> [En este texto escribiremos el vocablo mapuche según el mapudungun, idioma mapuche, en el que el plural ya está contenido en la acepción che, traducido como gente. Desde este punto de vista, castellanizar la palabra agregando una “s” final —mapuches— sería una redundancia.](#)

<sup>782</sup> [Para quienes se interesen en la descripción y el análisis de la historia de los pueblos indígenas y su relación con el Estado chileno recomendamos la revisión del Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato \(](#)

CVHYNT

, 2008), informe en cuya elaboración, junto a otros, participó el autor de este capítulo. Muchos de sus contenidos se ocupan para respaldar este trabajo.

<sup>783</sup> [Zapater, Horacio, Aborígenes chilenos a través de cronistas y viajeros, Andrés Bello, Santiago, 1978, p. 43.](#)

<sup>784</sup> [Bengoa, José, Historia de los antiguos mapuches del sur. Desde antes de la llegada de los españoles hasta las paces de Quilín, Catalonia, Santiago, 2003.](#)

<sup>785</sup> [Pinto, Jorge, De la inclusión a la exclusión. La formación del Estado, la nación y el pueblo mapuche, Universidad Santiago de Chile, Santiago, 2000.](#)

<sup>786</sup> [La tesis del profesor Jorge Pinto sostiene que la ocupación de La Araucanía por parte del Ejército chileno en la segunda mitad del siglo](#)

XIX

se debió, fundamentalmente, a la crisis económica provocada por la caída de los mercados californiano y australiano. Así, el modelo económico chileno de la época, basado en exportaciones de materias primas (sobre todo mineras y agrícolas), buscó en el territorio mapuche tierras para elevar la producción

agrícola y una manera de estrechar lazos con el mercado argentino. Por otro lado, la ocupación de La Araucanía, sostiene el Informe de la

CVHYNT

, se acompañó de un marco ideológico coherente con las corrientes evolucionistas que guiaban el pensamiento científico de la época. Se trata del eje civilización y barbarie, donde el territorio mapuche era visto como lugar de la barbarie —en términos económicos como subproducido— y a donde era menester llevar la civilización y el progreso por parte del Estado y la sociedad chilena.

[<sup>787</sup> Algunas de estas referencias han sido publicadas también en el Informe de la](#)

CVHYNT

.

[<sup>788</sup> No deja de ser curioso algo que ya señalamos años atrás. En un escenario temporal distinto es posible distinguir a actores similares que repiten una misma escena: en la segunda mitad del siglo](#)

XIX

, en plena expansión del capitalismo, fueron intereses privados, a través de un medio de comunicación específico, los que motivaron la acción estatal para penetrar e invadir el territorio mapuche infestado de bárbaros. En las primeras décadas del siglo

XXI

, en pleno reacomodo del capitalismo neoliberal, son otra vez esos mismos intereses, representados sobre todo por empresarios madereros, los que interpelan al Estado, a través de, nuevamente, el diario El Mercurio, a militarizar La Araucanía, infestada de terroristas. Ver

<https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2015/11/20/la-larga-historia-del-indio-permitido-en-chile.html>

<sup>789</sup> [Citado en Pinto, 2000, p. 131.](#)

<sup>790</sup> [Ibíd, p. 132.](#)

<sup>791</sup> [Informe de la](#)

CVHYNT

, p. 341.

<sup>792</sup> [Touraine, Alan, El regreso del actor, Eudeba, Buenos Aires, 1987.](#)

<sup>793</sup> [Foerster, Rolf y Montecino, Sonia, Organizaciones, líderes y contiendas mapuches,](#)

CEM

, Santiago, 1988.

<sup>794</sup> [Bengoa, José, Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo](#)

XX

, Planeta, Santiago, 1999.

<sup>795</sup> [Salazar, Gabriel, Del poder constituyente de asalariados e intelectuales \(Chile, siglos](#)

XX

y

XXI

),

LOM

, Santiago, 2009.

<sup>796</sup> [Ruiz, C. y Samaniego, A., Mentalidades y políticas Wingka: pueblo Mapuche, entre golpe y golpe: de Ibáñez a Pinochet, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2007.](#)

<sup>797</sup> [Informe de la](#)

CVHYNT

, p. 413.

<sup>798</sup> [Rivera, Rigoberto, Los campesinos chilenos,](#)



GIA

, Santiago, 1988.

<sup>799</sup> [Correa, Martín, Molina, Raúl y Yáñez, Nancy, La reforma agraria y las tierras mapuches. Chile 1962-1975,](#)

LOM

, Santiago, 2005.

<sup>800</sup> [Rupailaf, Raúl, “Las organizaciones mapuches y las políticas indigenistas del Estado chileno \(1970-2000\)”, en Revista de la Academia, n° 7, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2002.](#)

<sup>801</sup> [Bengoa, 1999, op. cit.](#)

<sup>802</sup> [Correa, Molina y Yáñez, ibíd.](#)

<sup>803</sup> [El Informe de la](#)

CVHYNT

presenta un listado de 136 personas mapuche muertas o desaparecidas durante el periodo de la dictadura. Aunque para Rupailaf la nómina de dirigentes mapuche ejecutados, desaparecidos y torturados continúa siendo desconocida, pues en muchos casos los familiares “—por temor, discriminación u olvido—, no

realizaron las denuncias correspondientes” (Rupailaf, 2000).

<sup>804</sup> En 1972 se contabilizaban 40 organizaciones mapuche. Después del golpe militar nada más se supo de ellas (Rupailaf, 2002).

<sup>805</sup> Parmelee, Elizabeth, “Decreto Ley 2568, sus efectos e implicancias”, en Liwen, N° 3, Temuco, 1990.

<sup>806</sup> Bengoa relata una imagen que es expresión fundante de lo que se señala. Cuenta que, en noviembre de 1981, convocados por los Centros Culturales Mapuches, se reunieron miles de mapuche en una ceremonia realizada en el cerro Conunhueno, a las afuera de la ciudad de Temuco. Melillán Painemal, ideólogo del nuevo movimiento indígena surgido después de la Ley de 1978, en un discurso esclarecedor de las nuevas tendencias, fue enumerando, una a una, las instituciones chileno-occidentales y oponiéndoles la institución histórica del pueblo mapuche, para terminar sosteniendo que este es diferente y debe vivir de forma diferente, con derechos diferentes. Para Bengoa, este es el momento en que se inaugura un nuevo discurso que subrayará más las diferencias que los deseos de integración. Bengoa, 1999, op. cit.

<sup>807</sup> Mella, Magaly, Movimiento mapuche en Chile: 1977-2000, tesis de licenciatura en antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2001.

<sup>808</sup> Bengoa, José, La emergencia indígena en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2000.

<sup>809</sup> [Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona, 1996; Taylor, Charles, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1993; Agudelo, Carlos y Recondo, David, “Multiculturalismo en América Latina. Del Pacífico mexicano al Pacífico colombiano”, en Hoffmann, Odile y Rodríguez, María Teresa \(dirs.\), Los retos de la diferencia. Los actores de la multiculturalidad entre México y Colombia,](#)

CIESAS, CEMCA, IRD, ICAHN,

México, 2007.

<sup>810</sup> [Pairican, Fernando, Malon. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013, Pehuén, Santiago, 2014.](#)

<sup>811</sup> [Campos, Luis, Relaciones interétnicas en pueblos originarios de México y Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 2008, p. 408.](#)

<sup>812</sup> [No resulta extraño, entonces, que justo cuando un grupo de intelectuales y dirigentes mapuche elaboraba el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, otro grupo importante de los dirigentes de este pueblo se abstuviera de participar y rebautizara a esta comisión como de “verdad y nuevo maltrato”, o como la “comisión de verdad y nuevo teatro”. Ver Espinoza, Claudio, “Los límites del reconocimiento en Chile: La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y un voto de minoría”, en Tiempo Histórico, vol. 9, N° 17, Santiago, 2018, pp. 145-161.](#)

<sup>814</sup> [Frente a esta decepcionante expresión del multiculturalismo latinoamericano, los antropólogos Charles Hale y Rosamel Millaman difundieron el concepto de “indio permitido” para mostrar cómo el multiculturalismo neoliberal, al mismo tiempo que abre espacios para la participación indígena, genera rígidos límites que abortan sus aspiraciones más transformadoras. El “indio permitido”, es decir, aquel sujeto que abraza las políticas y los programas de gobierno, goza del reconocimiento y la recompensa neoliberal, mientras que su opuesto, “el indio insurrecto”, es objeto de marginación y represión. Hale, Charles, “Rethinking Indigenous Politics in the Age of the ‘Indio Permitido’”, en \*Nacla Report on the Americas\*, vol. 38, N° 2, 2004.](#)

<sup>815</sup> [Bello, Álvaro, “Los pueblos indígenas y las contradicciones de la globalización”, en Bello, Álvaro y Aylwin, José \(comps.\), \*Globalización, derechos humanos y pueblos indígenas\*, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Temuco, 2008.](#)

<sup>816</sup> [Mariman, Pablo, Caniuqueo, Sergio, Millalén, José y Levil, Rodrigo, ¡... Escucha, winka...! Cuatro ensayos de historia nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro,](#)

LOM

, Santiago, 2006; Nahuelpan, Héctor, et al., *Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país mapuche*, Comunidad de Historia Mapuche, Temuco, 2012.

<sup>817</sup> [Pairican, op. cit.](#)

<sup>818</sup> Espinoza Araya, “Procesos etnopolíticos en la transición democrática chilena. Gobiernos locales y la vía política mapuche”, en Cuadernos de antropología Social, N° 45, 2017.

<sup>819</sup> Este texto se terminó de escribir el día 7 de noviembre de 2021, a cuatro meses de iniciado el trabajo de la Convención Constitucional.

<sup>820</sup> Se trata de una mujer abusada y violada en un portal por cinco hombres durante las fiestas de San Fermín en Pamplona (España) en julio de 2016.

<sup>821</sup> En la sentencia, que se conoció el 26 de abril de 2018, el tribunal no consideró que se tratara de una agresión sexual (violación) al no apreciar “indicios de violencia o intimidación”.

<sup>822</sup> El movimiento emergió en un contexto internacional signado por las protestas de mujeres, pero tenía poderosa raigambre nacional. Algunos casos de femicidio con elevada cobertura mediática sacudieron a la sociedad chilena: como el de Ámbar, una bebé de un año abusada sexualmente por la pareja de la tía, que falleció a las pocas horas por la gravedad de sus lesiones, el 28 de abril de 2018; o la violación grupal de una mujer en las cercanías del Estadio Nacional en Santiago de Chile el 29 de abril del mismo año, caso que recordó al de “La Manada”.

<sup>823</sup> Agacino, Rafael, “Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución

neoliberal madura. La izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet”, en Documento de trabajo,

CLACSO

, Buenos Aires, 2006.

<sup>824</sup> Agacino, Rafael, ibíd., p. 13.

<sup>825</sup> Engloban la reforma previsional, la reestructuración de la salud, la municipalización de la educación, el plan laboral, la modernización judicial, el desarrollo agrícola y la reforma administrativa y regionalización.

<sup>826</sup> Gaudichaud, Franck, Las fisuras del neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflictos de clases, Quimantú y Tiempo Robado, Santiago, 2015.

<sup>827</sup> Sostengo que los movimientos sociales son heterogéneos, múltiples, diversos, en contra de la homogeneidad o hegemonía que ciertas teorías presuponen en el concepto y en la realidad que nombra. Por eso, empleo el concepto de movimiento feminista reconociendo que no existe una única manera de definirlo y de interpretarlo, que el feminismo incorpora muchas voces distintas, las de muchas mujeres que lo encarnan desde sus realidades concretas.

<sup>828</sup> Restrepo, Alejandra, “La genealogía como método de investigación feminista”, en Blazquez, Norma y Castañeda, Martha Patricia (coords.), Lecturas críticas en investigación feminista, Universidad Nacional Autónoma de México,

[México, 2016, pp. 23-41.](#)

[<sup>829</sup> VV.AA., Históricas. Movimientos feministas y de mujeres en Chile, 1850-2020,](#)

LOM

, Santiago, 2021.

[<sup>830</sup> “Mujeres insurrectas”, en Revista Anales, Séptima serie, N° 14, Universidad de Chile, 2018.](#)

[<sup>831</sup> En este punto resulta interesante examinar las diferencias entre el movimiento estudiantil universitario y secundario —educación media— en términos de cultura política: este último, con la importancia creciente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios \(](#)

ACES

) desde 2001, se ha caracterizado por formas organizativas descentralizadas, prácticas autónomas y planteamientos radicales. Desde 2011 esas diferencias han sido visibles. Muchas de las estudiantes universitarias de 2018 se han formado políticamente en el seno del movimiento secundario.

[<sup>832</sup> Aguilera, Silvia, Navarrete, Beatriz y Bravo, Diana \(coords\), Que todo el territorio se vuelva feminista. Las protagonistas de las tomas universitarias del 2018,](#)

LOM

, Santiago, 2021.

<sup>833</sup> Todas las convocatorias tienen una elevadísima participación. A la primera asamblea de mujeres de la Universidad de Chile, convocada el 3 de junio, asisten unas 1.200 estudiantes. El Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, celebrado en Concepción el segundo fin de semana de junio, reúne a 600 mujeres de todo el país.

<sup>834</sup> Generalmente, las asambleas permitieron también la participación de las disidencias sexuales.

<sup>835</sup> Que ha provocado fricciones en toda la historia del feminismo chileno, traducándose en divisiones entre las “políticas” y las “feministas”, en los 80, o entre las “institucionalistas” y las “autónomas”, en los 90.

<sup>836</sup> La imagen de una mujer con los pechos al aire, expresión de las feministas actuales, ha encontrado su lugar en el pañuelo verde que acoge el movimiento a favor del aborto libre, seguro y gratuito en Chile, donde se ve a una mujer que sujeta una bandera con el lema “Aborto ya!”, inspirada en el afiche del Primer Congreso Nacional del memch (Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena) de 1937. El afiche fue diseñado por Laura Rodig, pintora, escultora, educadora, lesbiana, militante feminista y comunista. La Brigada de Arte y Propaganda de la Coordinadora Feminista 8M lleva su nombre desde enero de 2020. Así se entretajan las memorias cortas y largas de las luchas feministas y de las mujeres, nutriendo los procesos históricos.



<sup>837</sup> [Montes, Rocío, “Cubrirse el rostro para ser legión: el icono de la lucha feminista en Chile”, en El País, 7 de marzo de 2020.](#)

<sup>838</sup> [Ibíd.](#)

<sup>839</sup> [Danae Bórax, vocera de la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en noticiero T13, 11 de mayo de 2018. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=1VgBvVZUwIo>.](#)

<sup>840</sup> [Después del movimiento por los derechos políticos y la emancipación de la mujer en las primeras décadas del siglo](#)

XX

que culminó con el acceso de las mujeres a la ciudadanía, materializado en la Ley del Sufragio Femenino Universal promulgada recién en 1949, y de los movimientos de mujeres contra la dictadura que articularon la lucha por la democracia con la liberación de la mujer, exigiendo “Democracia en el país y en la casa” y planteando temas como la sexualidad, la distribución de los roles y el acceso al trabajo.

<sup>841</sup> [Cualquier intento por nombrar a todas las organizaciones, agrupaciones, colectivos y mujeres feministas que han impulsado estas luchas resulta infructuoso debido al gran número y a la mutabilidad y plasticidad de muchas de estas experiencias.](#)

<sup>842</sup> [Angenot, Marc, El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo](#)

decible, Siglo

XXI

, Buenos Aires, 2010.

<sup>843</sup> Los gobiernos de turno respondieron procesando la demanda estudiantil en términos de vócher individual al estudiante para transar su educación allí donde prefiera (ya sea en universidades públicas o privadas) desviando con ello el alcance sistémico de la impugnación. Esa fue la ley de la gratuidad, promulgada en mayo de 2018, que establece el acceso gratuito a la educación para los sectores más vulnerables del país.

<sup>844</sup> Stefano Buscaglia, vocal de género de la Universidad de Santiago de Chile. Disponible en <https://pousta.com/genero-sexualidad-feminismo-universitario/>

<sup>845</sup> Síntesis del Encuentro celebrado en Valparaíso, para preparar el Congreso. Tuvieron lugar tres encuentros previos, en Antofagasta, Valparaíso y Concepción.

<sup>846</sup> Un ejemplo es la Campaña “Acoso sexual en el aula es violencia”, que la Coordinadora Valpo No Sexista lanzó en 2015, cuyo propósito fue visibilizar el acoso sexual como violencia de género.

<sup>847</sup> Modismo chileno que significa acompañarse, incluso, o sobre todo, en situaciones difíciles; connota solidaridad.

<sup>848</sup> [Marambio, Matías, “Acoso sexual universitario: agotamientos y avances del feminismo”, La Raza Cómica, Revista de cultura y política latinoamericana, 27 de mayo de 2016. Disponible en: https://razacomica.cl/sitio/2016/05/27/acoso-sexual-universitario-agotamientos-y-avances-del-feminismo/](https://razacomica.cl/sitio/2016/05/27/acoso-sexual-universitario-agotamientos-y-avances-del-feminismo/)

<sup>849</sup> [La](#)

COFEU

organizó encuentros nacionales en Talca en noviembre de 2017 y en La Serena en abril de 2018, a días del estallido feminista.

<sup>850</sup> [En noviembre de 2017 solo siete de las 60 universidades que hay en el país habían diseñado y publicado sus protocolos. Muñoz, Ana Luisa, Follegati, Luna y Jackson, Liz, “Protocolos de acoso sexual en universidades chilenas: Una deuda pendiente”, en](#)

*CEPPE*

*Policy Briefs, N° 20,*

CEPPE UC

, 2018.

<sup>851</sup> [Con este término se alude a la proliferación de oenegés \(organizaciones no gubernamentales\) orientadas a producir conocimiento experto en temas específicos vinculados con el género, con el fin de incidir en las políticas públicas. La primacía de estas organizaciones y su rol como intermediadoras](#)

entre las mujeres y el gobierno, supuso una cooptación del movimiento feminista, dando lugar a una “tecnocracia de género” (Galindo, María, “Tiempo saboteado que nos toca vivir”, La correa feminista, N° 16-17, Centro de Investigación y Capacitación de la Mujer, México, invierno-primavera de 1997, pp. 59-66. Este número de la revista entrega una descripción, un análisis y crítica del proceso de profesionalización y especialización del feminismo latinoamericano, que conllevó su atomización en aras del valor neoliberal de la eficacia, redundando en la pérdida de radicalidad política).

<sup>852</sup> Richard, Nelly, “La problemática del feminismo en los años de la transición en Chile”, en Mato, Daniel (coord.), en Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2,

CLACSO

, Caracas, 2001, pp. 227-239.

<sup>853</sup> Ese año su distribución se prohibió debido a las presiones de grupos conservadores que alegaban que la píldora era abortiva.

<sup>854</sup> Es el caso de la Red de Salud

UC

Christus, de la Universidad Católica, cuyo rector desarrolló una intensa campaña de oposición a la Ley.

<sup>855</sup> Manifestación con pañuelos verdes, símbolo del movimiento por el aborto libre.

<sup>856</sup> [La institucionalidad chilena abordó el problema de la violencia situándolo en el exclusivo ámbito de lo doméstico, como un asunto privado, despolitizándolo e impidiendo identificar las estructuras que lo sostienen. Ríos, Marcela; Godoy, Lorena y Guerrero, Elizabeth, ¿Un nuevo silencio feminista? La transformación de un movimiento social en el Chile posdictadura,](#)

CEM

/Cuarto Propio, Santiago, 2003.

<sup>857</sup> [Julieta Kirkwood había planteado la idea de un conocimiento no-sexista en su noción de una pedagogía feminista entre 1981 y 1983, como recogen sus Feminarios: “Al conocimiento sexista se le opone el no-sexista \(no confundir esto con una vuelta de tortilla\), se redefine la totalidad”. Kirkwood, Julieta, en Feminarios, Ediciones Documentas, Santiago, 1987, p. 134.](#)

<sup>858</sup> [Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Nunca más mujeres sin historia, Santiago, 2018, p. 12.](#)

<sup>859</sup> [Fruto de ese trabajo, la Red publicó en 2016 el libro Educación no sexista. Hacia una real transformación, que recoge reflexiones sobre el sexismo en la educación como mecanismo productor y reproductor de la secundarización y violencia hacia las mujeres, y pone en valor experiencias de transformación de la educación.](#)

<sup>860</sup> [Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Nunca más mujeres sin](#)

historia, Santiago, 2018, p. 13.

<sup>861</sup> Disponible en: <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/red-chilena-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-lanza-libro-nunca-mas-mujeres-sin-historia-conversaciones-feministas/>

<sup>862</sup> Follegati, Luna, “Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión”, en Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión, Santiago, 2019, pp. 17-27.

<sup>863</sup> Tal y como lo ejemplifican las mujeres que resisten en las “zonas de sacrificio” (territorios con grandes daños ambientales justificados en favor del progreso) y las mujeres indígenas, en sus luchas contra el neoextractivismo y en defensa de sus territorios, cuerpos y vidas, desde una perspectiva comunitaria y ecofeminista que defiende la ecoddependencia y los vínculos comunitarios. También las mujeres pobladoras en la lucha por la vivienda y una vida digna; las mujeres migrantes en su defensa de la migración como un derecho y en la construcción de proyectos que les permitan construir un futuro mejor; o las mujeres sindicalistas de distintos ámbitos en la defensa de mejores condiciones laborales.

<sup>864</sup> Claudia Neira, de la Coordinadora 19 de diciembre, en el conversatorio “Bordando Memorias: hilos históricos de luchas y resistencias de las mujeres”, 7 de octubre de 2021. Disponible en: <https://www.facebook.com/londres38/videos/191486129728717>

<sup>865</sup> El bordado integra una de las prácticas de resistencia política de las mujeres populares chilenas desde los oscuros años de la resistencia, cuando las arpilleras se convirtieron en un arma de denuncia de los atropellos y penurias vividas.

<sup>866</sup> Ibíd. Jaque Isasmendi, artista textil de la Región de Coquimbo, impulsora del mural.

<sup>867</sup> Memoria de rebeldías feministas, Colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes.

<sup>868</sup> La iniciativa se realizó en varios países, en una estela creciente de paros internacionales de mujeres y de transnacionalización de las luchas feministas, cada 8 de marzo bajo distintas consignas: “Solidaridad es nuestra arma” (2017), “Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!” (2018) y “Paro internacional feminista plurinacional de mujeres, lesbianas, travesti y trans” (2019).

<sup>869</sup> De acuerdo con el registro que realiza el Observatorio de Huelgas Laborales, desde 2006 se observa una tendencia al alza en la actividad huelguista, que alcanzó su punto cúlmine en 2019, año en el que se registraron alrededor de 430 huelgas (Informe de Huelgas Labores en Chile 2020). Esta tendencia se vio interrumpida en 2020 como efecto de la pandemia, pero en todo caso es interesante constatar que la revitalización de la conflictividad laboral de los últimos años ha venido de la mano de la recuperación de un sindicalismo clasista que encarna el principio de autonomía de la organización obrera y el carácter antagónico de la clase trabajadora, en contraposición al sindicalismo hegemónico en los años 90 sustentado en el diálogo social y la conciliación. A su vez, no se puede comprender esta renovada politización sindical sin la participación destacada y el liderazgo de las mujeres, como ponen de manifiesto,

entre otras, la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. Su labor ha permitido develar la profunda precariedad existente en el mundo del trabajo, que es más notoria en aquellos trabajos con mayor presencia de mujeres (aseo, call center, retail, salud o educación, entre otros). Si bien es cierto que la huelga no tuvo un respaldo activo de los principales sindicatos y no se tradujo en un llamado a paralizar las actividades del conjunto del movimiento obrero, develando la distancia existente entre las agrupaciones feministas y las organizaciones sindicales, también lo es que muchas sindicalistas y mujeres empleadas se sumaron a la paralización.

<sup>870</sup> Tiempo Robado editoras (comp. y ed.), La Huelga General Feminista ¡Va! Historias de un proceso en curso, Tiempo Robado editoras, Santiago, 2021.

<sup>871</sup> Desde el paro total en el trabajo y en la casa (no realizar trabajo doméstico), hasta vestir con ropa negra, no comprar, huelga de sexo, etc.

<sup>872</sup> Que se observa en la emergencia de planteamientos y agrupaciones feministas en colectivos sociales y políticos muy diversos: en los ámbitos profesionales, en los partidos, en los sindicatos, en las organizaciones territoriales, etc.

<sup>873</sup> Bórquez, Blanca (ed.), Mujeres en tiempos de esperanza, crisis y pandemia, Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago, 2021.

<sup>874</sup> Hacemos alusión a la iniciativa de ese nombre impulsada por lesbianas feministas que desde 2016 se organizan para acompañar a mujeres que deciden abortar.



<sup>875</sup> [Garcés, Mario, “La pandemia desde la perspectiva de las organizaciones sociales en Chile”, Documento de Trabajo, Plataforma Mercosur Social Solidario,](#)

ECO

Educación y Comunicaciones, y Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, 2021.

<sup>876</sup> [ReSueitas Feministas Populares, Historias y resistencias. Compartiendo saberes desde el feminismo popular, 2021.](#)

<sup>877</sup> [Carpa de las Mujeres, Catastro plurinacional de experiencias de economía feminista y solidaria. La vida en el centro, 2021.](#)

<sup>878</sup> [Gilligan, Carol, “El daño moral y la ética del cuidado”, en Gilligan, Carol, La ética del cuidado. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, 2013, pp. 10-38.](#)

<sup>879</sup> [Forma despectiva y muy común de referirse a los funcionarios de carabineros \(cuerpo de policía\).](#)

<sup>880</sup> [Escena exhibida en el documental Somos + \(1985\), de Pedro Chaskel y Pablo Salas, disponible en <https://conectadosconlamemoria.cl>.](#)

<sup>881</sup> Palestro, Sandra, “Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Construyendo una Historia por y para las Mujeres (editado por María Angélica Rodríguez)”, en Cal y Canto. Revista de Movimientos Sociales, Segunda Época, N° 5,

ECO

, Educación y Comunicaciones, 2019, p. 27.

<sup>882</sup> Bell Hooks, El feminismo es para todo el mundo, Traficantes de Sueños, Madrid, 2017, p. 29.

<sup>883</sup> Manifestaciones de este tipo son posibles de rastrear años antes de la revuelta, al menos desde el año 2014 en adelante. Al respecto ver: junio de 2014: <https://periodicoelpueblo.wordpress.com/2014/06/12/protesta-contra-el-transantiago-evadir-no-pagar-otra-forma-de-luchar/>; julio de 2014: <https://elpueblo.cl/2014/07/03/evadir-no-pagar-otra-forma-de-luchar/>; septiembre de 2014, “Nuevo intento de evasión masiva en metro Baquedano obliga a cerrar acceso a estación” <https://www.elperiscopio.cl/noticias/nuevo-intento-de-evasion-masiva-en-metro-baquedano/>; febrero de 2016, “Nueva protesta de usuarios de Metro contra alza de \$20 en sus pasajes” <https://www.meganoticias.cl/nacional/165636-nueva-manifestacion-en-metro-baquedano-contra-el-alza-de-pasajes.html>

<sup>884</sup> Peña, Carlos, Pensar el malestar. La crisis de octubre y la cuestión constitucional, Taurus, 2020; Peña, Carlos, Silva, Patricio (ed.), La revuelta de octubre en Chile. Orígenes y consecuencias,

FCE

, Santiago, 2021; Ugalde, Benjamín; Schwember, Felipe y Verbal, Valentina (eds.), El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad, Ediciones democracia y libertad, Santiago, 2020; Mayol, Alberto, Big Bang. Estallido social 2019, Catalonia, Santiago, 2019.

<sup>885</sup> [Alé, Sol, Duarte, Klaudio y Miranda, Daniel \(eds.\), Salta el torniquete. Reflexiones desde las juventudes de octubre,](#)

FCE

, Santiago, 2021; Garcés, Mario, Estallido social y una nueva constitución para Chile,

LOM

, Santiago, 2020; Grau, Olga; Follegati, Luna y Aguilera, Silvia (coords.), Escrituras feministas en la revuelta,

LOM

, Santiago, 2020; Ruiz E., Carlos, Octubre chileno, Taurus, Santiago, 2020.

<sup>886</sup> [Ponce, José Ignacio, Revuelta popular. Cuando la nueva clase trabajadora se tomó las calles, Chile 2019, América en Movimiento, Santiago, 2020; Grez, Sergio, “Rebelión popular y proceso constituyente en Chile”, en Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre, Universidad de Chile, Santiago, 2019, pp. 13-20; Gómez Leyton, Juan Carlos \(eds.\), ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre de 2019?,](#)

CIPPSAL

, Santiago, 2020; Bravo, Viviana, “Lucha de calles en Santiago de Chile: Reflexiones en torno a la protesta popular (1946-2019)”, en Santibáñez, Camilo y Thielemann, Luis (eds.), Revueltas. Disturbios y lucha de clases en la metrópolis. Chile siglos

XX-XXI

, América en Movimiento, Valparaíso, 2021, pp. 43-62; Goicovic, Igor, “El 18 de octubre y el ejercicio de la violencia política popular”, en Gómez, Juan Carlos (ed.), ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre de 2019?, pp. 49-72; Bengoa, José, La comunidad sublevada. Ensayos y crónicas, Catalonia, Santiago, 2021.

<sup>887</sup> [Bravo, Viviana, Lucha de calles en Santiago de Chile, en Santibáñez, Camilo y Thielemann, Luis \(eds.\), Revueltas, op. cit.](#)

<sup>888</sup> [Molina, Raúl, Hablan los muros,](#)

LOM

, Santiago, 2020.

<sup>889</sup> [Ponce, David \(ed.\), Se oía venir. Cómo la música advirtió la protesta social en Chile, Cuaderno y Pauta, Santiago, 2019.](#)

<sup>890</sup> [La Tercera, 21 y 23 de octubre de 2019. Información contenida en el libro de Ponce, José Ignacio, La Revuelta Popular. Cuando la “nueva” clase trabajadora se tomó las calles, Chile, 2019, p. 59.](#)

<sup>891</sup> [Ibíd.](#)

<sup>892</sup> [“Más de un millón de personas: intendenta Rubilar publica impresionante video de marcha en Santiago”, 24horas.cl, 25 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.24horas.cl/nacional/mas-de-1-millon-de-personas-intendenta-rubilar-publica-impresionante-video-de-marcha-en-santiago-3684189](https://www.24horas.cl/nacional/mas-de-1-millon-de-personas-intendenta-rubilar-publica-impresionante-video-de-marcha-en-santiago-3684189)

<sup>893</sup> Ver: <https://www.indh.cl/archivo-de-reportes-de-estadisticas/>

<sup>894</sup> [Tomamos esta descripción de la jornada de Bravo, Viviana, “Lucha de calles”, en Santibáñez, Camilo y Thielemann, Luis \(eds.\), Revueltas, op. cit.](#)

<sup>895</sup> [El Mostrador, “Movilizaciones en rechazo al Gobierno vuelven a hacerse sentir con fuerza en Santiago y en distintos puntos del país”, 28 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/28/movilizaciones-en-rechazo-al-gobierno-vuelven-a-hacerse-sentir-con-fuerza-en-santiago-y-en-distintos-puntos-del-pais/](https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/28/movilizaciones-en-rechazo-al-gobierno-vuelven-a-hacerse-sentir-con-fuerza-en-santiago-y-en-distintos-puntos-del-pais/)

<sup>896</sup> [La Tercera, “Más de 1.200 saqueos y resaqueos”: Cómo se levantan supermercados y multitiendas de la ola de violencia”, 15 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/mas-de-1-200-saqueos-y-resaqueos-como-se-levantan-supermercados-y-multitiendas-de-la-ola-de-violencia/902519/](https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/mas-de-1-200-saqueos-y-resaqueos-como-se-levantan-supermercados-y-multitiendas-de-la-ola-de-violencia/902519/)

<sup>897</sup> [Varios aspectos ayudan a explicar el rápido proceso de expansión de la revuelta. La persistente lucha de los secundarios durante todo octubre y la serie de articulaciones sociales construidas por estos a lo largo de años con distintos](#)

actores, además de la cruda represión por parte del gobierno como respuesta a una demanda transversal; la indolencia de las autoridades, el desprestigio de las instituciones políticas como el gobierno o la figura del Presidente, el descrédito del Congreso, los desencantos de la población a propósito de los fenómenos masivos de corrupción de la élite, la impunidad de la clase dominante y su ligazón con el Poder Judicial y político, son, entre otros, los factores determinantes del acelerado y radical proceso expansivo de la revuelta a lo largo de Chile.

<sup>898</sup> En la misma línea de análisis ver el estudio de Osorio, Sebastián y Velásquez, Diego, “El poder sindical en el ‘Estallido social’ chileno. La huelga general de noviembre de 2019”, en Revista Española de Sociología, N° 31, España, 2022, pp. 1-21.



*Huelgas, marchas y revueltas. Historias de la protesta popular en Chile, 1870-2019* es una revisión analítica de los principales repertorios de lucha protagonizados por la clase trabajadora y los movimientos populares chilenos.

Desde fines del siglo XIX hasta la revuelta de octubre de 2019, la trayectoria construye un arco amplio de análisis, el cual permite identificar, comprender y profundizar en aspectos claves de la intervención popular, como los sujetos y escenarios, las demandas por las cuales se movilizan, sus dinámicas internas y las acciones recurrentes que despliegan.

Los textos reunidos proponen avanzar en el fortalecimiento de la historia de la protesta popular. Atendiendo a las diferencias, los diversos autores buscan capturar, escuchar y visualizar los antagonismos que conforman la historia y el desarrollo del capitalismo en Chile. Se reconocen las experiencias que sedimentan y transmiten diversas tradiciones de lucha, así como las rupturas e incorporaciones de nuevas formas de organización y protesta que aportan las generaciones actuales al calor de las transformaciones económicas, políticas y sociales vividas por la sociedad y el Estado.

La protesta popular en Chile ha sido escasamente abordada como objeto de estudio específico. Hasta ahora, su tratamiento, tanto en la historia, como en los estudios sociológicos y politológicos, había quedado circunscrita a la condición de episodio en el contexto de conflictos políticos más amplios. La compilación de Viviana Bravo y Claudio Pérez, le devuelve la centralidad historiográfica que siempre ha tenido.

JULIO PINTO,  
PREMIO NACIONAL DE HISTORIA (2016)